El Partido Comunista de España 1920-1991



Eudaldo Casanova

EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 1920-1991



¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES UNIOS!

Mundo Obrero

ORGANO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

AÑO XXXII - Número 9 - MADRID, 1 de Mayo de 1962 - Precio : 1 pta

¡ESPANOLES! ESCUCHAD
RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE
(Estación pirenaica)

Transmite TODOS los días:

De 7 a 7 y media de la mañana, por campos de onda de 24, 26 y 30 m.

De 5 y media de la tarde a 12 y media la noche, por campos de onda de 30, 39 y 43 metros.

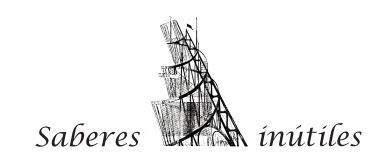
Oigan también los domingos los PROGRAMAS DE SOBREMESA:

De una y cuarto a dos y cuarto de la tarde, por campos de onda de 24, 26 y 30 metros.

¡VIVA LA HUELGA DE LOS MINEROS ASTURIANOS!

El Partido Comunista de España
1920 - 1991

Eudaldo Casanova



FICHA CATALOGRÁFICA

CASANOVA, Eudaldo
El Partido Comunista de España 1920-1991/ Eudaldo Casanova.
Zaragoza, 2018
548 p. : 22 cm. (*Saberes inútiles*; 6).

CDU
Historia de España 940.(460).081-094; Partidos y movimientos comunistas 329.15.

ISBN 978-84-09-04909-7

De venta en las librerías *Cálamo* y *La Pantera Rosa* (ZARAGOZA)

Mito (del griego μῦθος, *mythos*, «relato», «cuento») es un relato fantástico que suministra al hombre un sistema de referencias que tiende a superar y enmascarar las contradicciones existentes entra las ideas y la realidad.

Paradoja (del latín *paradoxa*, «lo contrario a la opinión común») es una idea extraña y opuesta a lo que es considerado como verdadero por la opinión general.

En toda ideología, los hombres y sus relaciones nos aparecen colocados boca abajo como en una cámara oscura.

K. Marx

Introducción

El libro que el lector tiene en sus manos no es, aunque lo parezca, una historia del Partido Comunista de España; esa historia está aún por escribir con el rigor y la extensión que el asunto se merece[1]. Lo que nos proponemos con esta contribución impresa es simplemente poner de relieve como el relato sobre el PCE ha estado presidido a lo largo de sus casi cien años de existencia por los mitos que partidarios y detractores se han empeñado en construir y difundir, ensombreciendo así una realidad que finalmente se revela, cuando se analiza, como mucho más compleja y paradójica que lo que esos mitos han podido sugerirnos.

La teoría y práctica comunista a lo largo del siglo XX han marcado la historia de esa centuria y siguen influyendo todavía hoy muy poderosamente en la realidad política, social e ideológica de nuestro tiempo. En cierta medida es lógico, dado que el comunismo ha sido el único paradigma político capaz de desafiar al capitalismo con una cierta consistencia y durante un dilatado período de tiempo. Esto ha dado como resultado que las diversas manifestaciones de ese fenómeno hayan sido tratadas en clave de confron-

tación agónica, lo que ha propiciado y sigue propiciando el recurso a la fabulación y al mito.

Esto que decimos en general vale para el PCE en particular; en principio un partido comunista más de los muchos que nacieron al calor de la Revolución rusa de 1917. Un partido que podría haber pasado por nuestra historia como el Partido Comunista Suizo paso por la historia helvética del siglo XX, pero que, sin embargo, la realidad de nuestro país lo impidió, convirtiendo al PCE en un sujeto político relevante, manteniéndolo en la ilegalidad 45 años de los sesenta primeros de su historia y llevándolo a jugar un papel destacado en dos momentos cruciales del pasado siglo: la Guerra Civil y la segunda Restauración borbónica.

En sus orígenes el PCE era una pequeña formación, nacida como producto de la influencia exterior, que se presentaba en el panorama político como una fuerza que pretendía el triunfo de una revolución obrera, aunque esa pretensión iba a tener escaso eco, debido a distintas razones, una de las cuales, y no la menor, era la competencia de otras formaciones que perseguían el mismo objetivo, y que contaban con un profundo arraigo en el solar hispano desde hacía mucho más tiempo. La otra razón de peso en ese frustrado intento revolucionario será la aplicación disciplinada de una estrategia dictada desde fuera, y escasamente adecuada a la compleja realidad de nuestro país por aquellas fechas.

Sin embargo, durante los 15 primeros años de su historia el PCE será, ciertamente, un partido revolucionario, entendiendo por esto una fuerza abiertamente confrontada en todos los órdenes, político, social y económico, con el sistema imperante. Pero la amenaza del auge del fascismo llevará al partido a dar un giro estratégico fundamental en el año 1935. Desde entonces el PCE buscará todo tipo de alianzas, incluso con partidos burgueses, para oponerse a esa amenaza fascista, lo que le obligará a posponer su objetivo originario —la revolución obrera que teóricamente pretendía— a un futuro indefinido. Con este giro estratégico sus planteamientos experimentarán un contradictorio y paulatino proceso de transformación que desembocará en priorizar la lucha en defensa de las libertades y derechos democráticos, aunque a esos derechos les diera un marcado tinte social.

En vísperas del golpe fascista de 1936 el PCE no era una fuerza política marginal, pero tampoco relevante, sólo contaba con un relativo peso en el

conjunto de la vida política y de la sociedad española. Unas decenas de miles de afiliados y unos magros resultados electorales era todo su bagaje. En total 17 diputados en las Cortes generales obtenidos a través de listas conjuntas, y unos centenares de concejales en todo el país. La misma realidad se iba a repetir décadas después, en esa coyuntura concreta que se ha llamado la Transición. Lo cierto es que el peso del Partido Comunista en nuestras instituciones a lo largo de toda su existencia nunca ha superado unos resultados más que modestos. Los mejores los obtuvo en las elecciones generales de 1979, cuando logró 23 escaños, con un 10,8% de los votos emitidos.

En ese sentido, nada hacía temer en 1936 que esa formación pudiera hacerse con el poder, ni en el plano institucional, ni en el social. El PCE en vísperas de la guerra civil apoyaba ya abiertamente la legalidad republicana y no pretendía más que mantenerla y defenderla, sin poder ir más lejos aunque se lo hubiera propuesto, cosa que ni siquiera ocurrió. Sin embargo, el mito del comunismo subversivo, alimentado por las fuerzas más reaccionarias de nuestro país, sobre las que pesaba la sombra de la misma existencia de la URSS como el gran mal a evitar, precipitó un golpe militar de corte fascista que catapultó al PCE al primer plano de la política nacional.

Como ya dijera Santos Julia en su día, cuando comenzó el verano de 1936, si los militares hubieran guardado su juramento de lealtad a la Constitución, lo más probable hubiera sido que un numeroso sector del PSOE se habría incorporado, antes de finalizar ese mismo año, a un gobierno republicano bajo la presidencia del moderado Indalecio Prieto. No le habría resultado fácil a ese gobierno, —aunque en modo alguno imposible— encauzar la movilización obrera hacia objetivos compatibles con el mantenimiento de un sistema constitucional. «El partido comunista, aunque débil y sin verdadero poder en las organizaciones sindicales, habría sostenido a un gobierno de esas características, como lo hizo en Francia siguiendo la pauta de la política de frente popular acordada por la Internacional Comunista en 1935, y como lo haría (aquí en España) desde mayo de 1937, incorporando a dos ministros al gobierno de coalición presidido, si no por Indalecio Prieto, sí por Juan Negrín, un socialista de su misma tendencia»[2]. De manera que en 1936 ningún obstáculo insuperable impedía que hubieran discurrido los acontecimientos a la manera francesa, con un gobierno de coalición republicano-socialista apoyado en el parlamento por los comunistas.

Sin embargo, el estallido de la guerra, con sus exigencias bélicas, iba a convertir al PCE en una pieza clave en el desarrollo de la misma, en función de que era la formación política que mantenía una relación privilegiada con la URSS, el único Estado que ayudaba de modo efectivo al gobierno republicano. Ese hecho, unido a algunos rasgos sobresalientes de la organización comunista, como la férrea disciplina y la capacidad de entrega de muchos de sus militantes, convirtieron al PCE en un partido mucho más potente y nutrido de lo que lo había sido nunca. Sin embargo, esa nueva realidad no transformó la estrategia política del comunismo español, que mantuvo en todo momento su lealtad al gobierno republicano, oponiéndose abiertamente, y con las armas en la mano, al conato de revolución obrerista que se dio en algunas zonas republicanas durante los primeros meses del conflicto.

El papel moderador que desempeñó el Partido Comunista de España entre 1935 y 1939 está ampliamente demostrado. En el plano económico y social los comunistas se opusieron constantemente, durante la guerra civil, a la socialización de empresas industriales y comerciales, y a la colectivización de la agricultura. Así mismo el partido batalló por restablecer un orden similar a las democracias del entorno, e incluso defendió la libertad de culto frente al anticlericalismo imperante durante los primeros tiempos de la guerra en la zona republicana. En una palabra, los comunistas sostuvieron la primacía de la legalidad y del orden republicano «burgués» en nombre de la eficacia gubernamental, frente a la amenaza inmediata que suponían los sublevados fascistas y los revolucionarios de izquierdas.

Por supuesto, en ningún momento el PCE intentó hacerse con el poder valiéndose de su nueva situación, —digamos privilegiada— ni pretendió transformar la guerra en una revolución de corte comunista, siendo su política más moderada que la de otras fuerzas de la izquierda popular, y aparcando *sine die* su pretendido ideal revolucionario que se había cifrado durante años en la consigna: dictadura del proletariado.

Las razones para esta postura descansaban en que a la política exterior de la URSS no le interesaba, dentro del contexto internacional, apoyar bajo esos parámetros un cambio de sistema en España, y al disciplinado PCE de entonces no se le ocurría desviarse un ápice de la estrategia que se le dictaba desde la Komintern. Por otra parte, aunque el PCE hubiera querido hacerse con el poder, su fuerza, más aparente que real, no se lo hubiera permitido,

tal y como se comprobó al final de la contienda cuando el partido intento enfrentarse con las armas al golpe de Estado del coronel Casado.

Esta política, más bien moderada, no sirvió para que el fascismo triunfante dejara de ufanarse de haber salvado a España de las garras del comunismo moscovita, alimentando así un mito de largo recorrido con las estribaciones más diversas.

Realmente los vectores del anticomunismo estaban ya activos mucho antes de que se produjera la misma revolución soviética[3], y el triunfo de ésta en Rusia sólo sirvió para ampliarlos y transformarlos en abiertamente agresivos. De hecho, fue ese triunfo, y la aparición de la URSS, como una realidad alternativa cifrada en un poderoso Estado, lo que movilizo a todas las fuerzas liberal-conservadoras para intentar conjurar lo que percibían como un peligro amenazante frente al sistema capitalista, considerado éste como el garante de lo que denominaban «la civilización occidental».

En la España de los años 30 esas ideas sirvieron a las clases dominantes para armar a la reacción, que se oponía a cualquier cambio político y social que la recién nacida República pudiera alumbrar; agitando en todo momento con el fantasma de una pretendida revolución comunista, sobre todo tras el triunfo del Frente Popular. La guerra servirá para terminar de pulir ese mito reaccionario sobre el pretendido peligro comunista.

Las dos ideas-fuerza sobre las que basculará el anticomunismo serán: la «horda roja», tiránica, cruel, sanguinaria, enemiga de Dios y de la libertad del individuo, dispuesta a imponerse por la violencia; y la del estereotipo del «lobo disfrazado de cordero», según el cual, los comunistas se servirán de todos los medios, y de toda clase de estratagemas para conseguir sus fines, aparentando lo que no son en realidad, «infiltrándose» y manipulando a aquellos que no se percatan de haberse convertido en meros juguetes en los manejos del partido.

Frente a estos posicionamientos ideológicos no servirán de nada ni la realidad de las prácticas, ni las formulaciones programáticas, ni la evidencia de los hechos. Para la derecha radical los comunistas durante la guerra habrán dado sobradas muestras de su «autentica» naturaleza, matando y asesinando, persiguiendo a religiosos, «camuflándose» para hacerse con los controles del poder en la zona republicana y ejerciendo una tiranía encubierta al servicio de una potencia extranjera.

Las imágenes que se desarrollaron en la zona rebelde durante el conflicto sobre el comunista como prototipo del «rojo» malhechor y, después de la guerra en la España franquista, terminarán siendo determinantes para la comprensión de actitudes políticas que llegan hasta nuestros días. Según esta visión, los comunistas fueron durante la dictadura no solo miembros de la coalición de los «enemigos eternos de nuestra paz interna»; sino que eran el motor de un complot contra España que pretendía traer el despotismo bolchevique a nuestro país.

Este anticomunismo visceral, alimentado por la Guerra Fría y la existencia de bloques, contribuirá, de forma paradójica, a magnificar el papel del PCE en su lucha contra el franquismo. Si bien es cierto que el partido, a partir de un momento determinado, se constituyó en la fuerza hegemónica de esa lucha, no es menos cierto que el anticomunismo de la dictadura contribuyó a alimentar esa hegemonía, cifrando en los comunistas todo movimiento de oposición al régimen.

Para muchos españoles, el Partido Comunista de España se presentaba, para bien o para mal, como una maquinaria capaz de realizar hazañas políticas y organizativas increíbles, en definitiva, la única oposición real a Franco. Un español prominente, Pablo Picasso, al ser preguntado sobre por qué se unió al PCE en 1944, lo resumía de modo sencillo: «Yo no soy francés, sino español. Estoy en contra de Franco. La única manera de manifestarlo era ingresar en el Partido Comunista, demostrando así que pertenezco al otro bando».[4]

Frente a este posicionamiento ideológico operará, de modo contrapuesto, el mito del comunista considerado como el revolucionario consecuente que lucha por la revolución socialista. Pero de hecho, este mito, que tuvo una base real en los orígenes de la organización, quedó desdibujado cuando en época temprana el PCE abrazó la estrategia del Frente Popular, y el partido se convirtió, fundamentalmente, en un defensor de la legalidad republicana, en alianza con otras fuerzas que luchaban, sobre todo, por mantener la Constitución de 1931. Será en esa consecuente y esforzada lucha contra el fascismo donde terminará de acrisolarse el mito del comunista heroico paladín de las libertades republicanas, y no tanto el del partido revolucionario que pugna por instaurar una sociedad socialista.

Situado siempre en la vanguardia de la lucha contra la dictadura, el comunista buscará constantemente las más amplias alianzas para recuperar la democracia política, posponiendo sus objetivos últimos para un futuro incierto. Ni siquiera en la etapa de la lucha guerrillera, mantenida por una cierta ceguera a propósito del contexto internacional, el partido pretenderá otra cosa que restablecer junto con otras fuerzas la legalidad perdida en 1939.

La disciplina y el espíritu de sacrificio de sus militantes servirán para gestar una moral propia dentro de esa comunidad que constituye el partido, y que se caracterizará por una exigencia particularmente elevada en el plano del compromiso, recordando constantemente el heroísmo de los camaradas víctimas de la represión. Este heroísmo, indiscutible, será magnificado y citado como ejemplo en términos que no dejan de tener cierta relación con los utilizados en las «vidas de santos» de la literatura piadosa. Las células serán muy frecuentemente bautizadas con el nombre de alguno de esos héroes, tales como, Cristino García, Julián Grimau, y, claro está, La Pasionaria.

El mito se construirá también entorno al respeto, casi reverencial, a la figura del dirigente, el Secretario General, que encarnaba la infalibilidad de la dirección sobre la estrategia a seguir, estrategia que en lo fundamental no iba a variar en décadas y que se concretaba en impulsar la coordinación de frentes lo más amplios posibles con todos aquellos demócratas, desde falangistas a monárquicos, que quisieran superar la dictadura franquista. Instando a movilizaciones y huelgas, siempre pacíficas, para desgastar y deslegitimar al régimen hasta propiciar su caída. No se aspiraba a la conquista del poder para construir el socialismo, el principal y casi único objetivo era la recuperación de las libertades formales desde las cuales el PCE podría ir avanzando con propuestas transformadoras que implicasen a la mayor parte de la sociedad dentro de un proceso democrático.

Ambos mitos tuvieron una profunda carga simbólica y operaron como estereotipos ideológicos en el plano de la psicología social a modo de representaciones sociales basadas más en el campo de las emociones que en el de la racionalidad objetiva. El pensamiento conservador recurrirá a la psicologización y a la denegación: mecanismos mediante los cuales se rechaza cualquier postura o acción en función de las características preconcebidas

sobre la personalidad del otro, en este caso los comunistas, despojándolos de toda credibilidad y estigmatizándolos por el mero hecho de serlo.

En el caso contrario, el PCE será considerado como una minoría activa que se opone de modo consistente a la dictadura fascista, y por tanto será percibido por los que simpaticen con él como una fuerza revolucionaria *per se*, más por lo que se preconcibe sobre el comunismo que por lo que el partido propone o por cómo actúa.

Pero a despecho del mito, la realidad era que la estrategia comunista pretendía ante todo restaurar la democracia, por eso, durante toda la etapa de la dictadura el partido irá decantando su identidad revolucionaria que lo presentaba como distinto a otras fuerzas de la oposición más moderadas.

En su VI Congreso, a comienzos de la década de los 60, ya se recogían las modificaciones que se habían ido produciendo desde la elaboración de la Política de Reconciliación Nacional, que había supuesto el abandona de la fórmula de Frente Nacional y con ella también del gobierno nacional revolucionario. Ahora el derrocamiento de la dictadura sería «por medio de la huelga nacional pacífica», que iría seguida de una «amnistía general extensiva a todas las responsabilidades derivadas de la guerra civil, en ambos bandos contendientes»

El viejo lenguaje y las consignas que habían dado vida al partido en sus orígenes se irán orillando, incluso en los textos internos. Resulta revelador que a medidos de la década de 1960, el lugar que se daba en las publicaciones del PCE a palabras de apariencia revolucionaria era ya entonces bastante reducido, como lo prueba el análisis de 106 documentos difundidos entre 1945 y 1963, en los que el término de marxismo aparecía muy raramente; Marx solamente era citado cuatro veces, Engels dos, y Lenin tres. Del mismo modo, en el análisis del contenido de diez números del periódico *Mundo Obrero,* las palabras «revolución» y «revolucionario» solamente aparecían veinte veces, mientras que el término «libertad» aparecía treinta y tres veces.[5]

A esta moderación contribuían hechos objetivos que la avalaban. Las transformaciones operadas en la sociedad española producto del «desarrollismo» franquista alejaban a amplias capas de la población de planteamientos radicales. La memoria de la guerra y la imagen del «comunismo feroz» construida por el franquismo también contribuía. En los años 70 vendrá a sumarse el deterioro de imágenes referenciales. La marcha del experimento

soviético ya no entusiasmaba como pudo entusiasmar en sus orígenes, el campo comunista se dividía con la aparición de distintas corrientes dentro del mismo, y la política exterior soviética, con intervenciones militares como la de Checoslovaquia en 1968, eran universalmente censuradas…

La imagen de la URSS, que tantos réditos había dado antaño al PCE, se había convertido ahora en una pesada carga y la dirección del partido decidió distanciarse de la «patria del proletariado» provocando tensiones internas dentro de la propia organización comunista.

Si se combatía por la «libertad» contra la dictadura cómo se iba a esgrimir la del proletariado como alternativa. Así, según el PCE, la forma que adoptaría la dictadura del proletariado en las futuras revoluciones sería muy distinta de la existente en la Unión Soviética y orbitaría entorno a las libertades democráticas.

Había que rechazar, por tanto, «todas las acusaciones en el sentido de que luchamos por las libertades políticas, como un medio táctico para suprimirlas después». Para garantizar la autenticidad del socialismo y el progreso hacia el comunismo, «es esencial el respeto a las libertades políticas fundamentales, a la pluralidad de partidos, a la libertad de información y crítica, a la libertad de creación intelectual y artística y a la renuncia a imponer toda filosofía social»[6]

Aunque en esta definición de la «vía española al socialismo» estaba implícita la renuncia a la violencia y el respeto al juego democrático, en el Tardofranquismo el partido siguió manteniendo la consigna de la dictadura del proletariado, aunque la última vez que aparezca el concepto de modo explícito en un documento oficial será en el VIII Congreso, celebrado en julio de 1972. Tras la muerte del dictador se hará popular la frase del Secretario General del partido diciendo ante la pregunta de un periodista: *¿Dictadura? ¡Ni la del proletariado!*.

En vísperas de la operación de relegitimación del sistema emprendida por el franquismo tras la muerte de Franco, el PCE se percatará de la escasa capacidad de movilización que tenía en el conjunto de la sociedad española, pero aún mantendrá viva alguna señal de identidad de largo recorrido que lo vinculaba con su «glorioso» pasado, como era: su republicanismo. Pero cuando el franquismo reformista convierta la monarquía en el eje central del proceso de Transición, el partido, temeroso de quedar marginado en

una ilegalidad transitoria, y no queriendo arriesgar su imagen de formación política responsable, que tanto le había costado labrar, se apresurará a renunciar a algunos de sus más caros referentes históricos, como eran la bandera republicana y su definición como partido leninista. Con ello el proceso de decantación ideológica habrá terminado y sus señas de identidad habrán quedado difuminadas.

Así la gran paradoja del caso español es que el PCE, llamado en sus orígenes a instaurar la dictadura del proletariado para construir el socialismo, terminará —al aplicar una política de moderación y «consenso» con el franquismo reformista— haciendo una aportación fundamental a la creación de una democracia liberal y coronada, que se concretará en la restauración de los Borbones en el trono de España. Lejos de los dos mitos entorno a los que ha basculado a lo largo de su historia: el del partido revolucionario de la clase obrera y el del partido tiránico enemigo de la libertad, el PCE se revelará como una formación paradójica en cuyo devenir se puede resumir todo un siglo de la historia en nuestro país.

Este libro, construido fundamentalmente con material secundario tomado de otras publicaciones, hace un sucinto repaso, a vista de pájaro, por esa historia, incidiendo de modo particular en esa evolución paradójica de la que hablamos hasta el momento en que el partido desaparece como «marca» del panorama político.

En la segunda parte del libro, se abordan de modo transversal algunos aspectos que han jalonado la historia de la organización y que ayudan a comprender mejor su contradictoria evolución. Apuntes y semblanzas de hombres y mujeres que vinieron de lejos queriendo ayudar a la construcción del partido, algunas historias, en ocasiones terribles, de aquellos que se apartaron o fueron apartados de la organización, y algunas pinceladas sobre nombres relevantes, que sin pertenecer al partido, lo siguieron y apoyaron durante un tiempo porque creyeron en lo acertado de sus políticas.

La obra se completa con una pequeña galería de retratos que pretende agrupar algunos rostros, hoy ya dispersos y difuminados por el tiempo.

Notas

[1].- Para completar esta información remitimos a un breve ensayo historiográfico y bibliográfico sobre el partido que podemos encontrar en Ginard i Féron, D. (2004): “La investigación histórica sobre el PCE: desde sus inicios a la normalización historiográfica”. En Bueno, M., Hinojosa, J. y García, C. (Coords.): Actas del I Congreso sobre la Historia del PCE. 1920-1977. Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid.

[2].- Santos Juliá (1998): «España sin guerra civil» en *Historia virtual*, Taurus, Madrid, págs. 199-200

[3].- Casanova, E. (2007): *Lo que queda del marxismo*, Prensas Universitarias Zaragoza, Zaragoza, págs. 397-401; García Fernández, Hugo (2005): Historia de un mito político: el “peligro comunista” en el discurso de las derechas españolas (1918-1936) Historia social, Nº 51, págs. 3-20.

[4].- *La Vanguardia* 17/III/1982.

[5].- Martín López, E. (1964): «Análisis de contenido de la declara ción del Partido Comunista en España», Revista de trabajo, Madrid, págs.193-195.

[6].- *Resolución política del VIII Congreso del PCE,* Empresa Poligráfica, Bucarest, 1972, págs. 338-9.

I
El nacimiento del PCE
1917-1923

En febrero de 1917 Rusia entraba en su cuarto año de guerra. Las condiciones de vida habían empeorado para el conjunto de la población debido al prolongado conflicto que sólo cosechaba muertos, en una carnicería bélica que se justificaba por el afán expansionista de un Imperio tambaleante gobernado por un autócrata que se creía entronizado en el trono por voluntad divina.

El día 23 de ese mismo mes de febrero, —según el calendario juliano vigente en la Rusia de entonces— las obreras de la ciudad de Petrogrado, antes San Petersburgo, se movilizaron el Día de la Mujer Trabajadora en una jornada de lucha. Las huelgas y manifestaciones, —que apenas habían sido alentadas por los partidos socialistas en la clandestinidad— pronto desbordaron todas las previsiones, convirtiéndose en una huelga general que hacía peligrar el régimen.

La represión sangrienta que desencadenó el Gobierno precipitó la defección de la guarnición de la ciudad que se unió en masa a los insurrectos.

En cinco días el zarismo se desmoronó, abriéndose un período de incertidumbre durante los meses siguientes marcado por el enfrentamiento de un doble poder. Por un lado, un Gobierno Provisional formado por una burguesía que pretendía reformas limitadas que modernizaran el país instaurando un régimen parlamentario de corte liberal; y por el otro, unos organismos de raigambre popular denominados soviets, que pugnaban por transformaciones mucho más radicales y profundas.

La tensión entre estos dos poderes se fue agudizando, al no dar el Gobierno salida a problemas graves como: la continuidad en la guerra, la demanda de tierras por parte de los campesinos que constituían la mayor parte de la población, y la acusada conflictividad laboral en los centros industriales. Finalmente, en octubre, la fracción bolchevique del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, secundada por los soviets, derrocó al Gobierno Provisional e instauró el primer gobierno socialista en el mundo. Este hecho iba a tener una enorme repercusión en el siglo que comenzaba, y andando el tiempo, en la historia de nuestro país.

España vivió ese mismo año de 1917 su particular turbulencia, teniendo también como telón de fondo la Gran Guerra. Aunque nuestro país no participaba en ella al haberse declarado neutral, fueron los cambios económicos derivados de esa neutralidad los que contribuyeron a precipitar lo que aconteció durante el mes de agosto.

Bajo el reinado de Alfonso XIII, y en el marco de la Constitución de 1876, el sistema político nacido de la primera Restauración padecía un agudo proceso de descomposición. El caciquismo facilitaba el turno político en el gobierno de dos grandes formaciones, el Partido Liberal y el Conservador, que a través de distintos mecanismos, como el «pucherazo», se alternaban en el poder sin acometer la solución de los grandes problemas que aquejaban al país, en tanto que se empeñaban en mantener los restos de un Imperio colonial en el norte de África, que obligaba a sostener una guerra de desgaste frente a los cabileños rebeldes que nunca terminaba de ganarse.

Con una economía atrasada y fundamentalmente agraria, el «hambre de tierras» de un campesinado desheredado se hacía particularmente acuciante en amplias zonas donde predominaba el latifundio, como La Mancha, Extremadura y Andalucía; en tanto que un sistema heredado de la vieja economía señorial, ahogaba al pequeño arrendatario minifundista. El escaso

desarrollo industrial se concentraba en tres focos muy determinados. La cornisa cantábrica, con la extracción de hierro y carbón, y una incipiente industria siderometalúrgica en el País Vasco; la producción fundamentalmente textil en Cataluña, y una modesta industria de transformación y servicios que crecía entorno a la capital del Estado.

Estos tres polos habían posibilitado la aparición, desde mediados del siglo XIX, de un movimiento obrero que reivindicaba sus derechos, desplegando planteamientos ideológicos y estratégicos inspirados por las dos grandes corrientes del obrerismo internacional nacidas de la Asociación Internacional de Trabajadores (1864-1876): la corriente marxista y la anarquista.

El marxismo había dado origen en 1879 a la fundación del Partido Socialista Obrero Español, adscrito a la Segunda Internacional, que había impulsado en 1888 la creación del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), con un cierto arraigo en las zonas industriales del norte y de Madrid.

La corriente anarcosindicalista había fundado en 1910 otro gran sindicato la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que contaba con una particular implantación en la industria catalana y en el agro andaluz.

En el año 1917 el desgaste del régimen monárquico permitió que confluyeran en una demanda de cambio constitucional diferentes corrientes de agraviados: los militares de una cierta graduación que clamaban por reivindicaciones corporativas, los republicanos que aspiraban a desempeñar un papel más relevante en la política nacional, los industriales catalanistas que agitaban por alguna forma de autogobierno, y los obreros, que demandaban mejoras en el marco de una transformación política y social profunda.

Cuando el conservador Eduardo Dato fue nombrado jefe del Gobierno, el descontento de la oposición se desbordó. Todos los enemigos del sistema de la Restauración —los obreros, la burguesía de izquierdas y los regionalistas— empezaron a unirse frente a los partidos turnantes, con la esperanza, y hasta la expectativa, de que el Ejército estuviera con ellos, o al menos se mantuviera neutral. A primeros de junio empezó a fraguarse una alianza republicano-socialista-reformista, que contó con el consentido beneplácito de los anarquistas, y por un momento pareció que podía contarse también con los regionalistas catalanes.

Durante unos meses esas fuerzas sociales coincidieron en la crítica al sistema, aunque no en los objetivos. Por un momento, en ese año de 1917, las tres fuerzas marcharon juntas; pero cuando se columbró la confrontación definitiva, la burguesía industrial terminó por inhibirse, la pequeña burguesía quedó paralizada por el miedo, y solo el movimiento obrero planteó de modo desafiante sus aspiraciones de cambio. Socialistas y sindicalistas convergieron ese verano, llevando a cabo la primera gran acción de conjunto al convocar una huelga general en el mes de agosto.

El Gobierno aceptó el desafío desencadenando la represión. Se declaró la ley marcial en todo el país, el ejército finalmente apoyó al poder constituido y el combate arrojó oficialmente un saldo de setenta muertos, centenares de heridos y más de 2000 detenciones.

En España no sucedió como en Rusia, pero la huelga general de agosto colocó en primer plano como fuerza de oposición a la cada vez más poderosa clase trabajadora, aunque desde la perspectiva del PSOE y de la UGT, el desafío no fue precisamente un intento de revolución proletaria, sino una huelga política en cuyo final se encontraba un gobierno de unidad nacional, con apoyo socialista, que democratizara el sistema.

No obstante, esa huelga general de agosto de 1917 marcó un punto decisivo en la historia de la España contemporánea. La clase obrera cobró conciencia de su fuerza y adquirió un protagonismo social que se proyectará durante las dos décadas siguientes. Así mismo, el sistema de la Restauración, tal y como había funcionado durante más de treinta años, comenzó a desmoronarse. La burguesía se percató que esa forma de dominio estaba dejando de servir y había que ensayar nuevas fórmulas, en las que la vía reformista quedaba limitada por los propios intereses de clase y por el temor a la deriva revolucionaria. En conclusión, solo les quedaba a las clases dominantes el expediente de la fuerza, cifrado, cada vez más, en el papel del Ejército.

Fueron las transformaciones económicas que acompañaron a la acumulación capitalista, lograda con la neutralidad en la Gran Guerra, las que alimentaron la huelga general, la radicalización de las reivindicaciones obreras, y su consolidación organizativa, tanto en las filas del socialismo como en las del sindicalismo revolucionario encarnado por la CNT.

La balanza comercial española, que había sido deficitaria hasta 1914, registró saldo positivo en 1915, y así siguió hasta 1919. Las principales industrias, la textil y la metalúrgica, así como la minera, se desarrollaron de manera extraordinaria. Este auge elevó considerablemente el número de los trabajadores empleados en la industria.

Pero tras la contienda llegó la crisis. Las fuertes subidas de los precios en 1918-1919 desencadenaron como reacción defensiva una creciente oleada de sindicación entre el proletariado, con el consiguiente ascenso de la conflictividad social. Así pues, —como en el caso ruso— los efectos de la Gran Guerra fueron el detonante que iba a precipitar la radicalización de la clase trabajadora en nuestro país.

Los socialistas de toda Europa habían asistido impotentes al estallido de la conflagración europea que no habían podido evitar, llegando, la mayor parte de ellos, a justificar la guerra y a considerarla como una cuestión de vida o muerte para la clase trabajadora de cada nación. La misma existencia de la Segunda Internacional se derrumbó y los obreros socialistas, a los que se había predicado durante generaciones la solidaridad de clase, terminaron por encontrarse enfrentados en las trincheras de Europa. En un primer momento sólo se opusieron a la fiebre del belicismo nacionalista algunos líderes aislados como Rosa Luxemburgo o Karl Liebknecht en Alemania, Friedrich Adler en Austria, un sector mayoritario de los socialistas rusos, predominantemente los exiliados, y el Partido Socialista Italiano en bloque.

Nuestro país, como ya hemos dicho, mantuvo la neutralidad junto con Suiza, los países nórdicos (Noruega, Suecia y Dinamarca) y Holanda. Pero si España no entró en la guerra, la guerra entró de alguna manera en España, enfrentando a la sociedad, que quedó dividida a favor de alguno de los dos bandos contendientes.

Aliadófilas o francófilas eran las izquierdas: liberales radicales y republicanos, en tanto que, germanófilas eran las derechas: el clero, las clases conservadoras y la aristocracia. En esa división ideológico-social, el pequeño partido que era el PSOE, no podía ser otra cosa que aliadófilo. La formación socialista, según las estadísticas de 1915, tenía entonces unos 14.000 afiliados, no recogía más allá de 30.000 votos, y sólo contaba con un diputado en las Cortes, sin llegar en 1910 al centenar de concejales en todo el país.

En 1913, el año en que se había producido el mayor número de conflictos laborales hasta ese momento, hubo en España 284 huelgas y participaron 38.316 huelguistas. En el mismo año se habían producido 810 huelgas, con 384.725 huelguistas en Italia; 2.404 huelgas con 887.062 huelguistas en Rusia; y 1.459 huelgas con 664.000 huelguistas en Gran Bretaña; y tanto los sindicatos socialistas franceses como italianos contaban con alrededor de 500.000 afiliados, mientras que en Italia ya había 42 diputados socialistas, 75 en Francia y 110 en Alemania.

La endeblez orgánica del socialismo español se correspondía con su debilidad teórica, rasgo dominante del PSOE desde los días de su constitución. El *Manifiesto Comunista* tenía una difusión muy limitada y de 1906 a 1923 sólo fue reeditado en tres ocasiones con tiradas más bien reducidas. Como dice Pedro Ribas «El salto en la difusión de los escritos de Marx ocurre durante la época de la Tercera Internacional»[1]

En sus primeros años de existencia, el socialismo español hizo gala de un radicalismo formal. En el Congreso celebrado en Bilbao en agosto de 1890 se acordó rechazar «…todo roce, alianza o coalición con los partidos burgueses, llámense como se llamen»[2] y hasta 1910, el partido mantuvo su independencia de clase frente a las formaciones políticas burguesas. También, durante esta época, se mantuvo viva en el partido la orientación revolucionaria frente a las corrientes revisionistas que entonces comenzaban a apuntar en los partidos socialistas europeos. Pero a partir del año 1910, tras los hechos de la llamada Semana Trágica, estas orientaciones fueron poco a poco diluyéndose en un ideario obrerista y pragmático con una estrategia fundamentalmente parlamentaria y reformista.

El PSOE se constituyó así en el ala izquierda de la pequeña burguesía republicana con la que formó coalición electoral, lo que en 1909 le permitió sacar un diputado. Pero aunque esta estrategia, era contestada por algunos sectores del partido, se mantuvo hasta 1919. Los núcleos de oposición a esta política eran algunos socialistas de primera hora, como García Quejido, también la Federación Catalana del PSOE, que además disponía de un órgano de prensa propio, *La Justicia Social*, la Escuela Nueva madrileña, en torno a Núñez de Arenas, así mismo un grupo de Valladolid, aglutinado por Pérez Solís y el semanario *Adelante*, y por último, un importante sector de las Juventudes Socialistas, fuertemente antimilitarista y radical, cuyo portavoz era el joven Ramón Lamoneda.

Estos sectores recibieron en 1915 la noticia de una reunión que algunos socialistas europeos habían celebrado en una población suiza. La llamada Conferencia de Zimmerwald (5-8 de septiembre) fue la primera manifestación organizativa de una corriente internacional contra la guerra. No obstante, el sector más numeroso en ese conclave no deseaba una ruptura abierta con los «social-patriotas» que habían apoyado el conflicto, ni quería tampoco romper amarras con la Segunda Internacional. Sin embargo, el ala izquierda en Zimmerwald, —de la que formaba parte el grupo bolchevique alrededor de Lenin— sostenía una postura revolucionaria, postulando que se debía aprovechar el conflicto para desencadenar la revolución proletaria.

El Partido Socialista y el proletariado español en su conjunto estuvieron ausentes de Zimmerwald. El PSOE mantenía una actitud claramente aliadófila. En el primer número de enero de 1916 de *El Socialista*, periódico oficial del PSOE, se expresaba el ferviente deseo de que fuera el último año de la guerra, pero sobre todo de que terminara con el triunfo de los aliados: «Sólo los ciegos mentales son incapaces de ver y aceptar que el puesto de los socialistas debe estar resueltamente del lado de las naciones aliadas»[3]

Sin embargo la recepción de las resoluciones de Zimmerwald fue temprana y coincidió con el X Congreso del PSOE y el IV de sus Juventudes Socialistas. La Juventud Socialista Madrileña celebró una asamblea general el 14 de noviembre de 1915, días antes de su IV Congreso Nacional, en la que se decidió por unanimidad adherirse a Zimmerwald, aceptando sin reserva todos sus acuerdos y resoluciones. Pero cuando a finales del mismo mes se reunió el Congreso Nacional de la organización, la propuesta de adhesión a Zimmerwald fue rechazada sin ni siquiera tratar el tema.

A mediados de marzo de 1917 comenzaron a llegar las primeras noticias confusas sobre la revolución rusa de febrero, la abdicación del zar y la formación de un Gobierno con el socialista Kerensky como ministro de Justicia. El primer análisis amplio sobre lo que estaba ocurriendo lo hizo *El Socialista* bajo el significativo título de «El movimiento revolucionario ruso. Contra el espíritu alemán».

La postura de *El Socialista*, —que ignoraba lo que realmente había sucedido— quería subrayar que la revolución rusa, «como la francesa y la inglesa», se había producido por el choque entre el Parlamento y el poder constituido: «Aunque parezca una perogrullada, queremos insistir sobre el

hecho de que de todas las revoluciones de Rusia, la que ha alcanzado el triunfo mayor ha sido una revolución de origen parlamentario. Queremos insistir por la enseñanza que tiene el hecho para los partidos revolucionarios todos»[4]

Esta insistencia sobre la vía parlamentaria de acceso al poder, era una llamada de atención frente a las corrientes más radicales dentro de la propia organización y frente a los circunstanciales aliados anarcosindicalistas, con los que el PSOE estaba preparando las movilizaciones que desembocarían en la huelga general de agosto ese mismo año.

Así pues, la toma del poder por los bolcheviques en octubre fue recibida por un PSOE que aún estaba digiriendo los efectos de la represión sufrida a raíz de la intentona del verano, y dio pie a un editorial en *El Socialista* con el significativo título de: «Sería bien triste...». Sin extraer ninguna conclusión positiva, su postura aliadófila le llevaba a decir que las noticias recibidas desde tan lejano país producían amargura. «Creemos sinceramente, y así lo hemos dicho siempre, que la misión, de momento, de aquel gran país era poner su fuerza toda en la empresa de aplastar el imperialismo germánico [...] Si los episodios que hoy contemplamos con asombro y dolor dan por fruto una paz separada, una deserción de las filas de los pueblos aliados ante el enemigo de toda libertad [...] ¿qué va a quedar de aquella revolución soberbia?»[5] En estos términos expresaba el PSOE su primera reacción ante la toma del poder por los soviets.

Sin embargo, los sucesos de Rusia, precipitaron que el sector minoritario del partido se aglutinara en torno a un semanario, que desde agosto de 1918 se comenzó a publicar en Madrid, bajo el título *Nuestra Palabra*. Mariano García Cortés y Ramón Lamoneda habían fundado ese semanario mimetizando su título del *Nashe Slovo* de Trotsky, que había aparecido en París durante los primeros años del conflicto europeo. El primer número de *Nuestra Palabra* se publicó el 6 de agosto, haciéndolo coincidir con el aniversario de la huelga de 1917 en nuestro país, dando a entender que en aquella ocasión se habían desaprovechado las capacidades revolucionarias del proletariado español.

En el XI Congreso del PSOE, que se celebró en diciembre de 1918, el partido no prestó excesiva atención a la Revolución Rusa, ni a la nueva situación de la lucha de clases en España creada a partir de la huelga general

de 1917. La única novedad del Congreso fue el abandono momentáneo de la alianza con el republicanismo burgués, impuesto por la base del partido, molesta con la actitud timorata de los republicanos durante la huelga general.

Pero la postura del Comité Nacional del PSOE sobre lo que estaba ocurriendo en Rusia contrastaba con el entusiasmo que mostraban los anarcosindicalistas, que convirtieron el Octubre soviético en un mito impulsor de sus planteamientos y de sus actuaciones.

La casi totalidad de los grupos anarquistas españoles habían mantenido desde el comienzo del conflicto europeo la defensa a ultranza de la doctrina internacionalista clásica condenando la guerra. Ya en noviembre de 1914 se difundió un manifiesto suscrito por la Federación de Grupos Anarquistas de la Región Catalana y apoyado por infinidad de Ateneos, y entidades sindicalistas y grupos anarquistas, en el que se apuntaba como única solución: que los pueblos en guerra se levantasen contra sus gobiernos y realizasen la revolución social. La coincidencia de esta postura con la que mantenía Lenin era evidente.

El periódico anarcosindicalista *Solidaridad Obrera* recogió, por primera vez, la noticia de Revolución de Octubre en el comentario editorial del 11 de noviembre de 1917, en el que se decía: «Los soviets, el pueblo, han tomado el poder porque la burguesía estaba intentando imponerse y además había respetado los compromisos diplomáticos contraídos por la plutocracia rusa. Lo cual es una advertencia para la burguesía española… Los rusos nos indican el camino a seguir»[6]

El final de la guerra provocó una gran oleada de entusiasmo probolchevique. Mientras la agitación prendía en el campo andaluz surgían grupos probolcheviques e incluso una prensa de títulos inequívocos: *El Bolchevista*, *El Maximalista*, *El Soviet*... En medio de esta euforia algunos se hacían llamar como las figuras prominentes de la revolución rusa, por ejemplo el «pequeño Trotski» de Alicante, o un «Lenine» de Barcelona, en tanto que otros optaban por rusificar sus nombres como «Salvhadorewsky Khordom» en la provincia de Cádiz.

El espanto de la burguesía española ante estas manifestaciones fue desproporcionado, como lo demuestra el caso del ciego «bolcheviki», cuya presencia señalaba el Ministro al gobernador de Sevilla, a mediados de agosto

de 1919: «Se me dice que por las calles de esa población anda pidiendo limosna un sujeto extranjero, con barba larga, chaqueta oscura, pantalón claro, que se finge ciego y cuando entra en los barrios extremos se sube en una silla u otro punto de apoyo y empieza a predicar doctrinas bolchevikistas, sin que Agente alguno de la autoridad impida tal propaganda»[7] Una vez detenido el supuesto ciego, resultó que no era extranjero sino de Badajoz, que no era un bolchevique, que ni siquiera tenía antecedentes, y a la postre se tuvo que reconocer que sólo era en un «activo propagandista de vida vegetariana».

A pesar de que en 1919 se implantó por el Gobierno liberal de Romanones la jomada de ocho horas y al siguiente año se creó el Ministerio de Trabajo, el Estado de la Restauración seguía siendo el más firme defensor de las clases dominantes, lo que unido a la crisis de la posguerra se tradujo en un aumento de la conflictividad social.

Sin un conocimiento claro y preciso del significado político de la revolución bolchevique, los anarquistas españoles —de manera intuitiva— entendían que se trataba de una revolución proletaria, de una revolución que pretendía implantar un sistema basado en el poder de los trabajadores. Por eso, tanto la Revolución Rusa como la creación posterior de la Tercera Internacional fueron interpretadas como el exacto cumplimiento de sus previsiones revolucionarias, y contempladas por la CNT, en su Congreso de 1919, como los primeros signos de la esperada revolución mundial.

Frente a esta efervescencia el Gobierno reaccionó. Los estados de excepción se hicieron cada vez más frecuentes, hasta culminar en un terrorismo de Estado que se implantó en Cataluña entre 1920 y 1922 con el respaldo de la patronal y de los sindicalistas amarillos con el propósito de desmantelar a la CNT, lo que contribuyó a radicalizar aún más al anarcosindicalismo militante.

Se estaba produciendo así una situación paradójica. Mientras que los principales líderes socialistas aparecían como reticentes frente a la Revolución de Octubre y al bolchevismo, muchos anarquistas, defendían la dictadura del proletariado y los soviets.

Producto de toda esa confluencia de factores el partido comunista que va a nacer en nuestro país será concebido por las crisis y escisiones que se produzcan en el seno de tres organizaciones: las Juventudes Socialistas, el

PSOE y la anarcosindicalista CNT, y su proceso de gestación será largo y tortuoso, ya que se desarrollará desde 1919 hasta 1921.

El asunto clave que polarizó las posturas del proletariado español desde 1919 entorno a la opción comunista, fue el debate sobre la afiliación a la naciente Tercera Internacional. El 24 de enero de 1919 había sido convocada por los rusos una Conferencia internacional comunista, a la que se invitó a 39 partidos y organizaciones obreras, alineados con la táctica de «la dictadura del proletariado en forma del poder de los Soviets». La Conferencia fue inaugurada en Moscú el 2 de marzo con la presencia 36 delegados de pleno derecho y una quincena sin voto. A esta asamblea no acudió ningún representante de las grandes organizaciones socialistas de la Europa occidental, excepto Max Albert Hugo (Œberlein), portavoz de los espartaquistas alemanes.

Tras el informe de Angélica Balabanova, los delegados presentes, que habían participado en las conferencia de Zimmerwald, y en la subsiguiente en Kienthal, declararon que «consideraban disuelto el grupo de Zimmerwald». Después, el 4 de marzo, se aprobó la necesidad de crear una «organización común, unificada e internacional» para hacer frente a «la época de la descomposición del capitalismo, de su disgregación interna, la época de la revolución comunista del proletariado. En consonancia con eso se promovió la tarea central: la conquista por el proletariado del poder político. El camino hacia la victoria, se decía en la Plataforma, pasa a través de la lucha de masas, cuya condición preliminar es romper con los adversarios directos de la revolución, los socialdemócratas de derecha y con el "centro"»[8] Así la Conferencia comunista internacional decidió por unanimidad, y con la sola excepción del delegado alemán, constituirse en Internacional Comunista. Nacía de ese modo la Tercera Internacional, también conocida, por su abreviatura en ruso, como Komintern.

Conocida la noticia entre las filas del proletariado español, rápidamente los partidarios de la adhesión al nuevo organismo fueron motejados como «terceristas» o «moscutistas», pero ni entre estos, ni entre los contrarios a la recién nacida Internacional, tendrá lugar un proceso de reflexión sobre las causas del fracaso de la huelga general de 1917 en España, y sobre las circunstancias socioeconómicas en que estaba inmerso nuestro país, y a las que, teóricamente, podía dar respuesta la nueva organización mundial.

La punta de lanza «tercerista» en el seno del PSOE corría a cargo de la minoría crítica con la dirección aliadófila durante la guerra, y coincidía con las Juventudes Socialistas, que mayoritariamente eran también partidarias de la adhesión a la Komintern. En el Comité Ejecutivo del partido, Daniel Anguiano, Núñez de Arenas y Virginia González eran declaradamente favorables al ingreso, y esa postura iba ganando a otros importantes dirigentes como Torralba Beci.

Los principales órganos de expresión de los terceristas eran los semanarios *Nuestra Palabra*, con una pequeña tirada inicial de 1200 ejemplares que pronto subió a 4000; *La Internacional* (desde 18 de octubre de 1919), que se convirtió en el portavoz del Comité por la Tercera Internacional, creado por Núñez de Arenas para aglutinar a los sectores pro-bolcheviques; y el periódico de las Juventudes llamado *Renovación*.

Mientras tanto, y sin relación con los núcleos terceristas que se mantenían en el interior del PSOE como grupo de presión, en las filas de las Juventud Socialista de Madrid iba creciendo la simpatía por la Revolución Rusa y las ideas comunistas. El 10 de noviembre de 1918, los jóvenes socialistas organizaron un mitin en el aniversario de la Revolución Rusa para protestar contra el bloqueo que los países capitalistas imponían a la república soviética, y en él se expuso que los bolcheviques no eran otra cosa que: «socialistas partidarios del programa máximo de nuestras reivindicaciones»[9]

Cabe señalar que el Grupo de Estudiantes Socialistas, creado en Madrid en 1919, era el sector más combativo en favor de la corriente internacionalista. Con la incorporación de jóvenes intelectuales, el grupo, presidido por Eduardo Ugarte, conseguiría desplazar en un Congreso de la Federación juvenil, celebrado en diciembre de 1919, a la antigua dirección nacional, muy relacionada con el sector reformista del partido; de ese modo el periódico *Renovación*, influenciado hasta entonces por Andrés Saborit, se convirtió en un vigoroso portavoz de la adhesión a la Tercera Internacional.

Para tomar una decisión sobre la cuestión de la Internacional, el PSOE convocó en diciembre de 1919 un Congreso extraordinario, que se celebró en Madrid. Los terceristas plantearon la adhesión a la Internacional Comunista pero no fueron capaces de vincular de un modo concreto esa postura a la situación española del momento; en tanto que el ala derecha, que proclamaba formalmente su apoyo tanto la Revolución Rusa como al mismo

principio de la dictadura del proletariado; proponía permanecer en la Segunda Internacional para no fomentar la división del movimiento socialista internacional.

Finalmente, la votación dio la victoria por 14.010 votos contra 12.497 a los partidarios de continuar en la Segunda Internacional. Sin embargo, la propuesta precisaba que se debía dar tiempo a la vieja Internacional para que celebrase su próximo Congreso en el que debería unificarse con la Tercera. Si en ese Congreso —que se reuniría en Ginebra— no se conseguía la unificación de ambas organizaciones, el PSOE pasaría a adherirse sin más a la Internacional Comunista.

Durante los meses que siguieron al congreso del PSOE se ahondaron las diferencias en el interior del partido. Los terceristas, disconformes con el resultado, aumentaron su labor propagandística en favor de la Internacional Comunista, y entre los jóvenes socialistas, donde la obsesión por la unidad de la organización no era tan fuerte como entre los militantes más viejos, se fraguaron las condiciones para dar un paso adelante.

La agrupación juvenil de Madrid trabajo denodadamente para que se convocara un congreso de toda la organización. Éste tuvo lugar en la capital inmediatamente después del congreso de los «viejos» (del 14 al 18 de diciembre de 1919). El Congreso de las Juventudes fue orientado por la agrupación de Madrid, que se había radicalizado rápidamente con ayuda de las secciones vasca y asturiana, y en él se propuso la adhesión inmediata a la Tercera Internacional. Núñez de Arenas se opuso, argumentando que se debía esperar al congreso de Ginebra, con la finalidad de que el partido y su juventud actuaran juntos. Pero el resultado de la votación fue favorable a la propuesta de adhesión inmediata.

Nadie sabía de momento si la decisión del congreso juvenil implicaba la separación del PSOE, o si los dirigentes de ambas organizaciones encontrarían la manera de llegar a un acuerdo. De todos modos, faltaba apenas un mes para el congreso de Ginebra y en tan poco tiempo probablemente no se adoptaría ninguna decisión tajante. Pero los dirigentes de la Segunda Internacional decidieron retrasar seis meses el congreso de Ginebra. Fue entonces, en enero de 1920, cuando acaeció un hecho que precipitaría los acontecimientos: la visita a España de una delegación de la Komintern compuesta por el ruso Mijail Borodín y el hindú Manabendra Nath Roy, que se

dirigían hacia Moscú procedentes de Nueva York, y que iban acompañados de un tal «Ramírez» que se presentaba como mejicano y hacía de interprete.

La llegada de Borodin fue circunstancial; tanto él como Roy habían estado trabajando en la creación de un partido comunista mejicano y en el intento de que el gobierno de aquel país reconociera al gobierno soviético y admitiera un embajador. Sin mucho éxito en estas gestiones, y de vuelta a Rusia, Borodin recibió el encargo de hacer escala en España para proponer la constitución de un partido comunista.

El interés por nuestro país en la dirección de la nueva Internacional era escaso por aquellas fechas. La ortodoxia llevaba a considerar —olvidándose del ejemplo ruso— que la revolución prosperaría antes en países con un avanzado desarrollo industrial y un poderoso movimiento obrero organizado, y España no figuraba entre estos. Por otra parte, la estrategia de impulso al nacimiento de partidos comunistas se centraba de modo preferente en las organizaciones socialistas, por eso Borodin recalo en Madrid, epicentro del socialismo español, dejando de lado la Barcelona anarquista, donde los planteamientos de la nueva Internacional posiblemente hubieran tenido una mejor recepción.

El primer contacto del ruso con la dirección del PSOE se realizó en el Ateneo de la capital a través de Fernando de los Ríos, un declarado miembro del ala conservadora del socialismo español, que se limitó a presentarle al tercerista Mariano García Cortés. En los pocos días que Borodin permaneció en Madrid mantuvo conversaciones en la habitación de su hotel con distintos miembros del partido y las juventudes, sirviéndose de «Ramírez» como intérprete. A su marcha, Borodin dejó al «mejicano» encargado de que contribuyera con sus orientaciones y consejos a la constitución de un partido comunista, con la promesa de que sería ayudado económicamente por la Komintern.

Fueron los jóvenes socialistas, fascinados por el magnetismo que irradiaba la figura del enviado de la Internacional, los que, ante las dudas, vacilaciones y retrasos de los veteranos, decidieron dar el paso decisivo en la constitución del nuevo partido, para posteriormente forzar la escisión de los terceristas en el seno del PSOE. Así, durante los primeros meses de 1920, la tarea de las Juventudes, muy influenciadas por el grupo madrileño de Estudiantes Socialistas, y sobre todo, orientadas estratégicamente por el

«mejicano», se encaminaron a la transformación de su organización en el núcleo primigenio del Partido Comunista Español.

Se ha escrito que esta transformación se hizo a través de procedimientos democráticos durante la celebración de una Asamblea nacional de las Juventudes Socialistas en la Casa del Pueblo de Madrid.[10] La realidad es que se hizo de tal forma que se podría calificar como un golpe de estado. El Comité Nacional de las Juventudes (que reunía las funciones de Comité Central y Comité Ejecutivo) envió a las agrupaciones dos cartas: en la primera se disponía la celebración de asambleas de afiliados, el 15 de abril de 1920; en ellas debía darse lectura al contenido de la segunda carta, que sólo podía abrirse el mismo día 15. En esta carta se anunciaba en forma de manifiesto la transformación de las Juventudes Socialistas en Partido Comunista Español.

En el manifiesto se denunciaba la traición de los partidos socialistas y de la Segunda Internacional durante la guerra mundial, y se proponía como alternativa el modelo bolchevique: «Los cuatro años de guerra y la revolución rusa han modificado profundamente la ideología, el punto de vista, la táctica y los fines del proletariado en la lucha social. La Segunda Internacional ha fracasado… Los socialistas rusos… han fundado la Internacional Comunista… Durante la guerra, el Partido Socialista Español se colocó abiertamente al lado de los aliados... Este profundo error doctrinal, de tanto bulto por tratarse de una guerra imperialista tan descarada y manifiesta, patentiza enseguida la ideología de pequeña burguesía de sus líderes… Hemos llegado a un momento en que seríamos cómplices de tal estado de cosas si titubeásemos en dar el paso que hoy damos»[11]

Como puede observarse, los argumentos fundamentales dados por los ya comunistas se basaban exclusivamente en la cuestión de la guerra imperialista, sin analizar la situación española y sin proponer una estrategia concreta para superarla.

En la misma carta se invitaba a continuación a todas las secciones de España de las Juventudes, a que se transformasen en Agrupaciones del Partido Comunista Español, y los Comités de las Juventudes en Comités de las Agrupaciones. Al mismo tiempo se comunicaba que *Renovación* cambiaría su nombre por *El Comunista*, convirtiéndose en el órgano del nuevo partido.

Algunas de las secciones respondieron favorablemente al llamamiento y así nació el Partido Comunista Español, que inmediatamente se constituyó como sección española de la Internacional Comunista. Como tal fue reconocido en el II Congreso de la Komintern (julio de 1920), al que el PC Español envió como delegado a Merino Gracia, que llegó tarde al congreso aunque pudo entrar en contacto con destacadas personalidades. Hasta junio de 1921 el Partido Comunista Español será el único partido comunista de la Península Ibérica.

El primer PCE fue un partido de jóvenes, que algunos motejaron como «el partido de los 100 niños». También se dijo de él que era un partido de «intelectuales» sin componente obrero, lo que no era del todo cierto. Es verdad que predominaba el elemento juvenil al ser su origen las antiguas Juventudes, pero no es menos cierto que se sumaron a él algunos obreros maduros bregados en las luchas sindicales, como el impresor Rafael Millá, el ferroviario José Illescas o Emeterio Chicharro, obrero carpintero dirigente del sindicato de la madera de Madrid; Rito Esteban, sastre; Joaquín Ramos, dirigente del sindicato de los dependientes de comercio de Madrid y otros. Estas tempranas afiliaciones vienen también a matizar la naturaleza de clase en sus filas. Hoy se admite que su composición era mayoritariamente obrera, aunque sus miembros más destacados fueran casi todos de extracción intelectual.

Aunque el Partido Comunista Español tenía muy poca incidencia entre las masas trabajadoras, tampoco puede decirse que careciera completamente de ella, pues llegaron a controlar el sindicato de la madera y el de dependientes de comercio de Madrid. El número de afiliados es difícil de calcular. La transformación de las Juventudes en PCE fue aceptada por aproximadamente el cincuenta por ciento de los afiliados a la organización, con grandes variantes según las agrupaciones. Una cifra aproximada puede ser la de 2000 militantes, distribuidos mayoritariamente en Madrid, Asturias y Vizcaya, con algunos núcleos en Andalucía, Castilla la Nueva, Valencia, etc.

El primer Comité Nacional del Partido Comunista Español quedó conformado de la siguiente manera: Secretario Nacional: Merino Gracia, de profesión maestro, y que más adelante abandonaría la ideología comunista; Secretario adjunto: Luis Pórtela, tipógrafo, que iría a parar al POUM; vocales: Juan Andrade, funcionario de Hacienda, procedente de los «Jóvenes Bárbaros» de Lerroux, influido entonces por el izquierdista italiano Amadeo

Bordiga; Gabriel León Trilla, licenciado en Filosofía y Letras; Bullejos, empleado de Correos; Ricardo Marín, escritor; y obreros como José Illescas o Emeterio Chicharro.

El 1º de Mayo, quince días después de la fundación del PC Español, apareció el primer número de *El Comunista*, su órgano central, un periódico que salía dos veces por semana, dirigido por Juan Andrade y que alcanzaba una tirada de más de 3000 ejemplares. A su puesta en marcha contribuyó la ayuda inicial de 100.000 pesetas enviada por la Komintern; cifra importante en la época, aunque esa ayuda fue disminuyendo. Durante la dictadura de Primo de Rivera, se había reducido a unas 8000 pesetas al año.

La orientación de los primeros números de *El Comunista* refleja el entusiasmo juvenil que impregnaba a la organización, así como sus limitaciones políticas. Su contenido giraba en torno a los duros ataques que dirigía a los terceristas que permanecían en el PSOE, a la creencia ciega en la proximidad de la revolución mundial, en la mitificación de la Revolución Rusa y el modelo bolchevique de partido.

En términos puramente formales la posición del PCE en la cuestión parlamentaria aceptaba la estrategia leninista. Así las tesis del nuevo partido afirmaban que en los «períodos preparatorios» de la revolución social, los comunistas españoles debían emplear todos los medios de acción necesarios en vistas a preparar a las masas para la fase decisiva, incluida «la participación en las elecciones, en el parlamento, los municipios y en las diputaciones»[12] Pero lo cierto es que *El Comunista* dejaba traslucir las influencias de los consejistas, o comunistas del consejo, sobre todo de los holandeses, como Pannekoek, Geers o Gorter, que rechazaban la lucha parlamentaria.

Cuando llegó a estos jóvenes el folleto de Lenin *El izquierdismo enfermedad infantil del comunismo*, los jóvenes militantes se indignaron por su contenido, en el que Lenin defendía la necesidad de la lucha parlamentaria. Andrade pudo ser disuadido de atacar a Lenin en *El Comunista* sólo por el hecho de que el PCE estaba necesitadísimo del dinero que en ese momento estaba negociando con la Komintern.

No obstante, cuando se convocaron elecciones a Cortes el joven PCE llamó al boicot, aunque es muy posible que adoptara esta postura, no tanto por razones de estrategia política, como por carecer de fuerzas para hacer frente a una campaña electoral en esos momentos. El Comité Nacional de-

cidió no participar en los comicios y emplear el período electoral en la denuncia del parlamentarismo y a favor de los soviets.

En la cuestión sindical, desde el principio, el PCE se mostró contrario a la creación de nuevos sindicatos, puesto que «en los viejos sindicatos reformistas y apegados a las soluciones conservadoras es donde había que combatir». Más adelante, sin embargo, Juan José Gómez sostuvo la tesis de la unificación sindical, que en España pasaba por la fusión de la UGT y la CNT «aceptando lo que unos y otros tengan de bueno y añadiendo lo que falta a ambos y nosotros podemos darles: una ideología elevada, objetiva, y un plan de ataque estudiado con base amplia y de resultado infalible»[13]

A fines del verano de ese año el PCE ejerció cierta influencia en la huelga de los metalúrgicos de Madrid, gracias a que José Illescas era secretario del comité de huelga, en el cual tres de sus cuatro miembros se decían comunistas. «Delegados» del PCE fueron enviados también a ciudades como Barcelona, Zaragoza y Valencia, donde se esforzaron por formar grupos comunistas y penetrar en los sindicatos de la CNT. Incitados por el fermento revolucionario de Andalucía, los comunistas quisieron también desplegar su actividad entre los braceros y pequeños campesinos de esa región, pero carecían de los fondos y del personal necesario para llevar a cabo la labor proselitista en puntos tan alejados de Madrid. No obstante, se hizo alguna que otra salida a ciudades como Córdoba y Sevilla.

En el Congreso del PSOE, celebrado el mes de junio, los comunistas protagonizaron serios incidentes, logrando la expulsión de la sala de un delegado extranjero — un menchevique refugiado en España que se hacía llamar Nicolás Tasín— que se había distinguido por sus ataques contra la Tercera Internacional. La intervención del socialista asturiano Llaneza provocó una gran algarada cuando Portela le gritó, haciendo referencia a su condición de teniente de alcalde: «¡Tira la vara y vete a la mina!». Entonces los enfadados socialistas —suspendiendo por un rato la sesión— empezaron a avanzar por los pasillos hacia los jóvenes perturbadores que estaban sentados en lo alto de la galería y de los cuales no se sabía con exactitud quiénes eran o qué tendencia representaban. Fabra Ribas, que iba delante, se encontró en medio del tumulto con Juan Andrade, que vociferó un insulto contra él. «¿Quién eres?», preguntó el sorprendido Fabra, y Andrade replicó: «Soy el que te insulta cada quince días en *El Comunista* y el que ahora te insulta en tu cara. ¡Desvergonzado, traidor!»[14]

Pero la actividad de la joven organización se vio constantemente coartada por la represión policial. Amaro del Rosal, que militaba en el partido, recordaba años después como *El Comunista* aparecía en muchas ocasiones con numerosos espacios en blanco por la acción de la censura, y como fue suspendido durante meses. Así mismo, la existencia de una figura legal, como era la «detención preventiva», permitía que comisarios como el temido Martín Báguenas, encarcelaran con suma facilidad y frecuencia a los miembros de la organización, que se veía obligada a funcionar en la semiclandestinidad.

El asesinato del jefe del Gobierno Eduardo Dato por un grupo anarquista precipitó que la represión se abatiera sobre el partido, siendo detenida la práctica totalidad del Comité Nacional, lo que frustró la realización de un congreso que estaba previsto para el mes de marzo de 1921. Eso impidió al PC no sólo una posible clarificación interna, sino presentarse como un todo homogéneo frente a los terceristas, en vísperas del tercer y definitivo congreso extraordinario del PSOE que iba a dirimir su adhesión a la Internacional Comunista.

Mientras «el partido de los 100 niños» daba sus primeros pasos con enormes dificultades, el PSOE seguía debatiendo su adhesión o rechazo a la Internacional Comunista. Después del Congreso extraordinario de diciembre de 1919, el PSOE volvió, en una segunda ocasión, a abordar el tema de las Internacionales. El nuevo Congreso se celebraría el 19 de junio de 1920, y, a través de los delegados que asistieron, se pudo apreciar rápidamente como la tendencia tercerista, encabezada por García Quejido, Anguiano, Isidoro Acevedo, García Cortés, Núñez de Arenas y otros, se columbraba mayoritaria.

El Partido Socialista estaba creciendo rápidamente en esa época; mientras que a principios de 1919 el número de afiliados era de 15.588, hacia la primavera de 1920 había aumentado hasta unos 53.000. Los sindicatos de la UGT también crecieron de modo significativo, y la actitud de la mayoría de los socialistas, a principios de 1920, respiraba optimismo revolucionario.

A pesar de todo el Congreso de junio aún no decidió nada definitivo, pues, si bien 8269 votos se manifestaron a favor del ingreso en la Tercera Internacional, frente a 5016 en contra y 1615 abstenciones, esta decisión quedó condicionada a un viaje a la URSS que debían realizar dos representantes, uno de cada tendencia, para informarse de la situación en ese país;

siendo comisionados Daniel Anguiano por los terceristas y Fernando de los Ríos por los contrarios al ingreso.

Cuando los emisarios del partido llegaron a Moscú, en octubre de 1920, se pudieron entrevistar con los principales dirigentes de la Internacional y de la joven república soviética: Lenin, Trotsky, Buharin, etc. De los Ríos escribió un amplio informe sobre sus impresiones que se publicaría como libro en 1921 con el título de *Mi viaje a la Rusia sovietista,*[15] en el que rechazaba el sistema soviético por la falta de libertades. Pero los comisionados también se encontraron con que, en el curso del II Congreso de la Komintern, se habían aprobado Veintiuna Condiciones necesarias para aceptar el ingreso de cualquier partido en la Tercera Internacional y alguna de ellas podía ser muy polémica.

Mientras tanto, en España, la situación interna del PSOE se iba deteriorando. Las maniobras para conquistar el control de las agrupaciones socialistas iban en aumento, y la Unión General de Trabajadores no podía permanecer al margen. El sindicato socialista celebró su XIV Congreso a poco de clausurarse la asamblea socialista. Su cifra de afiliados se había elevado de 89.601 en julio de 1918, a 211.342 en mayo de 1920, pero la abrumadora mayoría de ellos votó la permanencia en la conservadora Internacional de Ámsterdam, la sindical afín a la Segunda Internacional.

Se podría explicar este posicionamiento argumentando que todavía no se había fundado la Profintern, —la organización sindical de la Tercera Internacional— que no aparecería hasta julio de 1921, pero la explicación más ajustada a la realidad la daba el delegado del PCE, Illescas, que deploraba la «total carencia» de espíritu revolucionario en el congreso ugetista. Cuando la cuestión de la adhesión a la Komintern fue puesta a votación, resultó abrumadoramente rechazada por 110.902 votos contra 17.919.

Los terceristas tomaron nota de este resultado y comenzaron a intuir que su postura podía quedar en minoría en el siguiente congreso del partido. De hecho, cuando se puso a votación la cuestión de la Internacional en la Agrupación Madrileña, la adhesión a la Komintern sólo obtuvo 147 votos frente a los 243 que votaron a favor de la Internacional de Viena, una organización que pretendía moverse entre los presupuestos claramente reformistas de la Segunda Internacional y los revolucionarios de la Internacional Comunista.

Ante estos datos los sectores pro bolcheviques, dando por perdida la posibilidad de conseguir la integración del conjunto del PSOE en la Komintern, comenzaron a reunirse aparte, en la Escuela Nueva, bajo la dirección de Núñez de Arenas. En estas reuniones ya se trabajaba de cara a la escisión y a la formación de un partido comunista.

Entre tanto, habían regresado a España Daniel Anguiano y Fernando de los Ríos, con los respectivos y contradictorios informes elaborados sobre la situación en la Unión Soviética y las condiciones impuestas por la Internacional para que el partido pudiera ser admitido en el seno del nuevo organismo. A partir del 15 de enero de 1921 —fecha en que se reúne el Comité Nacional del PSOE para discutir ambos informes— hasta el congreso de abril del mismo año se iniciaría la crisis definitiva entre los socialistas españoles.

La situación de polémica interna se agudizó al conocerse las Veintiuna Condiciones de admisión impuestas por Moscú. Por ello se hizo ineludible la convocatoria de otro Congreso extraordinario, el tercero, para solucionar definitivamente el problema. El Congreso del PSOE se reunió, sin despertar gran interés entre los bolcheviques rusos, que estaban impactados por la debacle alemana de la «Acción de Marzo», en la que un golpe comunista había fracasado de modo estrepitoso. Ni Zinóviev, ni Zetkin o Rákosi se preocuparon por la situación en España, ni salieron en apoyo de la causa de los terceristas.

El último de los tres congresos socialistas españoles dedicados a la cuestión de la Komintern celebró sus sesiones del 9 al 13 de abril de 1921 —a un mes escaso de la muerte de Dato— y fue, con mucho, el más turbulento, caracterizándose por los numerosos choques personales y las repetidas interrupciones desde las galerías del salón de sesiones.

Pablo Iglesias, que se hallaba muy enfermo, envió al Congreso una carta en la que pedía que se votase la posición de Fernando de los Ríos, con el consiguiente rechazo a las Veintiuna Condiciones de la Tercera Internacional, y amenazando, de manera velada, con la escisión si no se seguían estas directrices.

Fernando de los Ríos expuso su informe y fue apoyado por Besteiro, Saborit y Largo Caballero. El principal papel del planteamiento favorable a la adhesión recayó en Núñez de Arenas y en el recientemente converso Pérez

Solís, ya que en los dos anteriores congresos Solís había combatido la adhesión a la Komintern con toda la elocuencia que poseía. Arenas y Solís se vieron secundados por la venerable personalidad de García Quejido, quien como fundador del partido, estaba rodeado de una aureola como la que poseía el propio Pablo Iglesias.

Sin embargo, la intervención más polémica corrió a cargo de Besteiro que representaba el ala más moderada en la dirección. Besteiro espetó al sector tercerista: «Muchos de estos portaestandartes de la Tercera Internacional, no son otra cosa que un motín de oficiales contra lo que cree el generalato» Lo lógico, —dijo— sería que los terceristas, al insistir en entrar en la Komintern, se unieran al Partido Comunista ya existente. «Pero no lo haréis», añadió en son de mofa, «porque la verdad es que los comunistas no os quieren»,[16] en alusión directa a la animadversión de los jóvenes del Partido Comunista Español hacia los todavía socialistas favorables a la adhesión.

Finalmente, el día 13, en la octava y última sesión, se llegó a la votación de las dos propuestas: adhesión a la Tercera Internacional y, por tanto, aceptación de las Veintiuna Condiciones, o adhesión a la Unión de Viena (centrista que más tarde se uniría con la Segunda Internacional). Por 8808 votos contra 6025 el Congreso rechazó las Veintiuna Condiciones de la Tercera Internacional y se adhirió a la Unión de Viena.

Inmediatamente después de acabado el recuento de votos y conocidos los resultados, Oscar Pérez Solís, acompañado por un grupo de sus partidarios vizcaínos armados se abrió paso a codazos entre el griterío y subió al escenario, donde leyó un documento en nombre de la treintena de delegados partidarios de la Tercera Internacional. El documento, que había sido preparado antes de la votación final, sobre todo por Pérez Solís, justificaba la retirada de los terceristas y en él se hacía constar su ruptura con el Partido Socialista.

«…Con la serenidad de quienes cumplen un deber de conciencia nos retiramos de este Congreso, en el que ya nada tenemos que hacer. Queremos incorporarnos de hecho —espiritualmente ya lo estamos— a la Internacional Comunista, que —inseparablemente de la revolución rusa, a pesar de todas las sutilezas dialécticas que intentan distinguir entre ésta y aquélla— trata de acelerar el derrumbamiento de la sociedad capitalista…

Nosotros creemos, con fe inquebrantable, que el proletariado español no irá con vosotros por los plácidos caminos que parten de Viena, sino por la senda áspera, pero senda de salvación, que se llama Internacional Comunista, bajo cuyo pabellón nos acogemos desde ahora»[17]

Firmaban esta declaración: Pérez Solís, Acevedo, Virginia González, Mariano García Cortés, José López y López, etc. A continuación, García Quejido anunció que la mayoría del Comité Ejecutivo —compuesta entre otros por él mismo— abandonaba también el Congreso. Juntos se dirigieron al local de la Escuela Nueva, y aquel mismo día constituyeron el Partido Comunista Obrero Español, eligiendo un Comité Nacional formado por García Quejido, Núñez de Arenas, Anguiano, Perezagua y Virginia González. También se fundó un nuevo periódico, con el título de *La Guerra Social*, que fue puesto bajo la dirección de Torralba Beci.

Resulta difícil calcular el número de afiliados del nuevo partido, —que empezó falto de fondos y sin un solo diputado en el Congreso, aunque contaba con unos 50 concejales y tres diputados provinciales que no renunciaron a sus cargos— pero en términos regionales la escisión afectó, sobre todo, a los socialistas asturianos y vizcaínos, e incluía también a las Juventudes Socialistas reconstituidas, que bajo la dirección de López y López, se encaminaron por segunda vez en un año fuera del partido socialista.

La influencia comunista en Asturias fue significativa y la Federación Regional Asturiana del PCOE, que contaba con unos 1500 afiliados en el momento de nacer, era mayor que la Federación Socialista de la cual había brotado. En la radicalización del obrerismo asturiano, operó de modo fundamental la crisis económica que se inició casi inmediatamente después del final de la guerra europea y que en esa región se agudizó con más rapidez que en el resto de España. Sólo en Asturias y en Vizcaya la implantación sindical comunista permitió éxitos tales como el control del Sindicato Minero vizcaíno que llevó a primer plano la figura de José Bullejos.

En el primer año de existencia el PCOE llegó a contar aproximadamente con hasta 80 agrupaciones, localizadas sobre todo en Asturias y Vizcaya. Su número total de afiliados, antes de la dura represión del verano de 1921, se calculaba, acaso generosamente, en unos 6500 miembros.

Había ahora dos partidos comunistas en España: el recién formado Partido Comunista Obrero y el Partido Comunista Español, que ya contaba

con un año de vida. Los estatutos de la Komintern, a la cual ambos se habían adherido, requerían la fusión de los dos, y las discusiones encaminadas a esa unión se iniciaron apenas constituido el PCOE. Sin embargo, la fusión iba a resultar extraordinariamente difícil.

Durante un año el Partido Comunista Español se había distinguido como el único portavoz de la Komintern en España; ahora se daba cuenta de que existía la posibilidad de que el PCOE lo absorbiera gracias al mayor prestigio de sus dirigentes y al mayor número de afiliados.

En las reuniones de unificación que tuvieron lugar en Madrid el 11 de mayo, los representantes del PCE, Juan Andrade, Luis Pórtela y Emeterio Chicharro presentaron una serie de condiciones que dejaron asombrados a los del PCOE. La mayor barrera para la unidad era la demanda de exclusión de ciertos militantes del partido unificado, apoyada en la condición séptima de los estatutos de la Komintern, que ordenaba a los partidos comunistas romper con los reformistas y centristas, opinión del todo coincidente por las mismas fechas con la de Andrade, partidario de considerar «colectivamente al nuevo Partido como traidor a los verdaderos intereses del proletariado»[18]

Al fin, el comité de unificación fracasó en su propósito, y resultó evidente que los comunistas españoles no serían capaces de enviar una única delegación al III Congreso de la Komintern que iba a comenzar el 22 de junio en Moscú. No obstante, decidieron celebrar en Madrid una reunión, durante el mes de septiembre, para enviar sendas representaciones a la capital rusa, esperando ambos partidos recibir un cierto apoyo del aparato de la Internacional.

La delegación del PCE la encabezaba Ramón Merino Gracia, y en ella figuraban Rafael Millá, Ángel Pumarega, Gonzalo Sanz y Joaquín Ramos; la del PCOE la dirigía Torralba Beci e incluía a César González, Virginia González, José Rojas y Evaristo Gil.

En el III Congreso de la Internacional los 7000 comunistas españoles representaban muy poco comparados con los 300.000 alemanes o checos, los 150.000 franceses, los 70.000 italianos y los 95.000 de la pequeña Noruega. Sin embargo, a los dos partidos se sumaría aún un tercer grupo de comunistas españoles que no participarían en el congreso de la Komintern, sino en el congreso fundacional de la Internacional Sindical Roja (RILU, o

Profintern), que iba a celebrar sus sesiones también en Moscú aproximadamente por las mismas fechas.

Este tercer grupo iba a estar compuesto por representantes de la tendencia sindicalista-comunista de la CNT. La cuestión de la participación de los sindicatos en la nueva Internacional la discutieron las organizaciones sindicales europeas por primera vez en una reunión celebrada en Berlín en diciembre de 1920. El cenetista Ángel Pestaña figuró, junto a los anarcosindicalistas alemanes, entre los promotores de esa reunión. Pero después de un viaje que había efectuado a Rusia a raíz del II Congreso de la Komintern, Pestaña había elaborado un detallado informe en el que manifestaba sus discrepancias con la ejecutiva bolchevique. Pero eso no impidió que, cuando se convocó el congreso fundacional de la Profintern, la CNT, —controlada en aquellos momentos por la tendencia sindicalista comunista— acordara participar.

El movimiento sindicalista-comunista representaba el esfuerzo más radical para canalizar el entusiasmo que había despertado la Revolución Rusa en las filas de la CNT, al intentar convertir ese poderoso sindicato, en una organización centralizada y eficazmente revolucionaria. Pero las diferentes corrientes que convivían en el sindicato le impedían tener una estrategia unificada. El resultado había sido una plétora de huelgas sin coordinación, numerosos atentados terroristas contra patronos, policías y miembros de los sindicatos «libres» y, por último, una incertidumbre crónica acerca de si el propósito de su actividad sindical era hacer o no hacer la revolución. Como producto de esa trayectoria, la realidad era, que en la primavera de 1921, la CNT de Cataluña estaba, como dijo José Peirats, «decapitada»[19]

La contraofensiva capitalista había logrado, al declarar a la CNT fuera de la ley, suprimir sus periódicos y encarcelar a sus dirigentes de primera línea. Pero la represión había quitado de en medio a los elementos más moderados de la Confederación, favoreciendo así, paradójicamente, el surgimiento de la tendencia sindicalista-comunista.

Quienes efectuaron con más rapidez la escalada en la estructura clandestina de la CNT fueron Andreu Nin y Joaquín Maurín, que figuraban entre los recién llegados a la Confederación. Estos dos jóvenes dirigentes contaban en la primavera de 1921 con el periódico *Lucha de Clases* que se tiraba

en Lérida, y que, a causa de la suspensión de *Solidaridad Obrera*, se convirtió, en el órgano principal de la CNT de Cataluña.

La tendencia sindicalista-comunista no sólo se hizo con la dirección del sindicato anarquista sino que acordó participar en el congreso fundacional de la Profintern. La delegación que debía participar en el conclave moscovita fue elegida en un pleno secreto de la CNT que tuvo lugar en Lérida el 28 de abril, dos semanas después de que en el PSOE se produjera la escisión que dio nacimiento al Partido Comunista Obrero Español. Cuatro de los delegados electos fueron Nin, Maurín, Arlandis e Ibáñez, que pertenecían a la tendencia sindicalista-comunista.

Con posterioridad se denunciaría que el pleno de Lérida había estado amañado, y la CNT retornaría a su tradicional orientación anarcosindicalista, criticando el desarrollo de la revolución en Rusia. El relevo en el cargo de Secretario General por el anarcosindicalista Juan Peiró y la celebración, en junio de 1922, de una Conferencia nacional en Zaragoza, mostrarán la inevitable ruptura entre las ideas libertarias y los comunistas. Sin embargo Nin y Maurín, por el contrario, descubrieron en los bolcheviques una afinidad política que pronto les alejó de los principios del sindicalismo anarquista.

En el verano de 1921 la lucha faccional entre los comunistas españoles durante las reuniones de la Komintern y la Profintern fue reveladora, evidenciando la rivalidad entre el PCOE y el PCE, a la que se sumó la del PCE con los sindicalistas catalanes, que impidió que un delegado de ese grupo pudiera contar con un voto en la Internacional Sindical Roja. El resultado final fue que el sindicalismo-comunista no logró vincular de modo permanente a la CNT con el movimiento comunista internacional. Las resoluciones de la Profintern, lejos de conducir a la Confederación hacia una aceptación de sus tácticas, impulsaron con más fuerza el resurgir del anarquismo en el seno del sindicato español.

Nin, tras un accidentado periplo de regreso a España, retornará a Moscú para convertirse en un cuadro directivo de la Profintern. El último intento de conciliación entre la CNT y el movimiento comunista lo ensayará Joaquín Maurín con su libro *El sindicalismo a la luz de la Revolución Rusa*, aparecido en 1922, que constituyó el soporte teórico del proyecto de los Comités Sindicalistas Revolucionarios.

Según Maurín, la revolución había alumbrado un espacio de encuentro entre el marxismo y el anarquismo. La Revolución Rusa habría adoptado dos aspectos esenciales del sindicalismo revolucionario (la lucha de clases y el concepto de violencia colectiva), enriqueciéndolos con una estrategia para la conquista y el ejercicio del poder por el proletariado bajo una fórmula organizativa: los soviets, que entrañaban la síntesis del pensamiento marxista y la superación sindicalista del Estado. En cualquier caso, la repercusión práctica de estas tesis será sólo minoritaria.

Para los sindicalistas-comunistas, desplazados de sus cargos y derrotados en el pleno de Zaragoza, se trataba de recobrar influencia en la CNT. Su fuerza principal —muy minoritaria— se encontraba en Barcelona y Lérida. En Valencia publicaban *Acción Sindicalista* y en Lérida *Lucha Social*. Las redacciones de estos dos semanarios decidieron suspender su publicación, para apoyar ambas un nuevo periódico: *La Batalla*, que comenzó a editarse el 21 de diciembre de 1922, seis meses después del pleno de Zaragoza. Tres días más tarde se reunieron en Bilbao representantes de esos grupos en una conferencia en la cual fundaron los Comités Sindicalistas Revolucionarios (CSR). Su misión sería luchar, dentro de los sindicatos de la CNT, contra la influencia anarquista y por su adhesión a la Komintern.

Esta tendencia conquistó la dirección de varios sindicatos de oficio. En Barcelona controlaban los comités del transporte, el metalúrgico y el del textil. Pero cuando se estableció la dictadura de Primo de Rivera, en setiembre de 1923, y se disolvieron los sindicatos cenetistas, los CSR se encontraron sin medio en el cual actuar.

A la terminación del III Congreso de la Komintern, representantes del PCOE y del PCE llegaron a un acuerdo en una reunión que se celebró bajo los auspicios de la sección latina de la Internacional, presidida por Jules Humbert-Droz. Los responsables de la Internacional, tras escuchar las manifestaciones de Torralba Beci y Merino Gracia, adujeron que las diferencias entre los dos partidos no eran fundamentales y que la fusión debía emprenderse sin dilación. Para facilitarla, se decidió seguir el consejo de Zinóviev y enviar un responsable a Madrid para que mediara entre ambos partidos. La elección recayó en el conde Antonio Graziadei, profesor de economía y socialista durante largo tiempo, que había sido uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano.

En los días siguientes al congreso de Moscú, las noticias procedentes de España inspiraron a los dirigentes de la Komintern, —por primera vez desde el otoño de 1919—un cierto optimismo sobre las perspectivas revolucionarias en nuestro país. El 21 de julio, un ejército español mal equipado y carente de moral, mandado por el general Fernández Silvestre, sufrió en Annual una de las derrotas más humillantes que sufrieran nunca las tropas españolas. El desastre conmovió a todo el país y afectó al mismo monarca, entrometido en la descabellada operación militar. La más poderosa protesta contra la guerra de Marruecos fue la de los comunistas, que también sufrieron, en consecuencia, la más severa persecución, con el encarcelamiento de sus dirigentes y la declaración temporal de fuera de la ley. En esta coyuntura se desenvolvió la actuación del enviado Graziadei.

En noviembre de 1921, el diputado italiano, ya en Madrid, se reunía todas las noches con delegados de los dos partidos para alcanzar la unificación de los comunistas. En las dos semanas que duró su estancia en la capital, el hombre de la Komintern, realizó su función clandestinamente, manteniendo contactos, necesariamente limitados, con unos cuantos cuadros madrileños pertenecientes a ambas organizaciones, ya que muchos de los dirigentes comunistas estaban en la cárcel, y algunos, —entre ellos Merino Gracia— no habían vuelto aún de Moscú.

Se eligió a un sólo representante oficial de cada partido para entrevistarse con Graziadei. El PCE envió a Gonzalo Sanz, joven dirigente del sindicato de la madera de Madrid, y el PCOE estuvo representado por Núñez de Arenas. Finalmente el conflicto se resolvió, dando al PCE lo que venía pidiendo, ocupar los dos tercios de los puestos en la nueva directiva, pero sólo en el intervalo existente hasta el primer congreso del partido unificado. Así fueron para el PCE nueve puestos y seis para el PCOE. Los representantes de este último transigieron con esta proporción porque era una situación transitoria. Así mismo, se acordó que la conducta de los miembros del PCOE sería enjuiciada sólo a partir del momento de su separación del PSOE, lo que impedía la exclusión inmediata de los tenidos por «reformistas».

La cuestión de la dirección del periódico del partido fue un asunto más difícil. Los primeros candidatos presentados —Andrade por el PCE y Núñez de Arenas por el PCOE— eran inaceptables para un partido o para el otro: Andrade a causa de su radicalismo, y Núñez de Arenas por sus tendencias «centristas». La solución que se dio al problema favoreció

de nuevo al PCE, pues se puso a Rafael Millá, dirigente moderado del PCE, como director en jefe, sobre Andrade y Núñez de Arenas, que trabajarían juntos en la mesa de redacción del nuevo periódico que se denominaría *La Antorcha*.

En estas condiciones, la unificación del PCE y el PCOE se logró finalmente el 14 de noviembre de 1921. La determinación de la cifra de militantes del partido comunista unificado es un problema histórico sin resolver. Graziadei en su informe a la Internacional afirmó que el PCOE contaba con 4500 afiliados y el PC Español con 2000.

Pero la precaria unidad del partido se resquebrajó de inmediato ante la publicación de un artículo de Merino Gracia en el primer número de *La Antorcha*, en el cual denunciaba los errores izquierdistas del PCE a la luz de las nuevas tesis que había alumbrado III Congreso de la Komintern. Este ataque se juntó con la negativa de *La Antorcha* a permitir la publicación de una réplica, y con la decisión de que el partido participara en las próximas elecciones municipales. Entonces los agraviados formaron una entidad llamada «Grupo Comunista Español» (GCE) y publicaron el 1 de enero de 1922 un manifiesto desafiante contra los dirigentes del partido, en el cual, pese a todo, insistían en su lealtad hacia las directrices de la Internacional.

El Comité Central respondió cesando en sus cargos a todos los firmantes del manifiesto, y dejando su suerte final a la decisión del inminente primer congreso del partido unificado. Los dirigentes de la minoría que se negaron a rectificar fueron Eduardo Ugarte, Juan Andrade, Luis Pórtela, Emeterio Chicharro y Ángel Pumarega. Todos ellos quedaron separados del partido y fueron seguidos por la mayoría de las Juventudes Comunistas.

En una reunión celebrada en el parque de El Retiro el 19 de marzo, los sancionados votaron la disolución del Grupo Comunista, como se les había ordenado. Pero inmediatamente formaron otra entidad: la «Unión de Cultura Proletaria», nombre que les parecía menos fraccional, con lo cual esperaban evitar cualquier acusación de dividir la recién nacida organización, al mismo tiempo que mantenían su línea de continuidad con el viejo PCE. La esperanza demostró ser vana, pues la Komintern intervino, en efecto, pero no en favor de los disidentes. En abril de 1922, envió a España a Jules Hubert-Droz, secretario de la Komintern para los países latinos, con plenos poderes. El suizo instó a disolver la Unión de Cultura Proletaria y dio a los

cinco rebeldes veinticuatro horas para que aceptaran la condición, ultimátum que fue acatada por todos menos uno, Ángel Pumarega, que en 1931 volvería al PCE y llegaría a ser redactor en *Mundo Obrero*.

Hubert-Droz en un informe remitido en mayo a la Internacional expresaba la cortedad de planteamientos políticos que había podido apreciar en unos y otros: «He buscado un fondo político al conflicto, en las numerosas conversaciones que he mantenido con los dimisionarios, en sus escritos y manifiestos (…) y no he encontrado conflicto político alguno fuera de la cuestión sobre la participación en las elecciones. Todos los otros motivos son, o bien cuestiones secundarias de organización (cambio de secretarías, fusión de los dos periódicos, etc.) (…) Si las cuestiones políticas están ausentes en el fondo del conflicto, las cuestiones de orden personal son muy numerosas»[20]

A la acusación de personalismo Humbert-Droz hubiera podido añadir la de localismo, pues parecía que los comunistas de las diversas partes de España, en este período, seguían su camino por separado, careciendo de contactos regulares y de coordinación entre el Comité Central y las secciones locales, a lo que se podía añadir la escasez crónica de dinero y su incapacidad para obtener de la Komintern los fondos adecuados.

Con esta problemática a cuestas se llegó al I Congreso del PCE unificado, que tuvo lugar clandestinamente en Madrid en marzo de 1922. El 15 de marzo se abrió el conclave que daría forma a los acuerdos de fusión. La mayoría de puestos dirigentes en el nuevo partido que se denominaría Partido Comunista «de España» y no «español», fueron ocupados por militantes procedentes del PCOE, o por los procedentes de las juventudes socialistas que habían renunciado al izquierdismo.

Fueron elegidos para el Comité Central: Antonio García Quejido (Secretario General); Ramón Lamoneda (Secretario del Interior); Virginia González (Secretaria Femenina); Antonio Malillos (Secretario Sindical); Exoristo Salmerón, Manuel Nuñez de Arenas, Evaristo Gil, Ignacio Ojalvo y otros.

En el Congreso se discutieron y aprobaron los estatutos que regirían el funcionamiento interno. La organización de base era entonces la Agrupación Comunista local, que se formaba a partir de más de diez militantes de una población. Estas Agrupaciones formaban una Federación regional, dirigida por su Comité Regional. Como órganos máximos estaban el Comité

Central, de quince miembros, y el Comité Ejecutivo, formado por el Secretario General y varios secretarios de los distintos frentes de lucha o de actividades internas. Al mismo tiempo se fusionaron las organizaciones juveniles que tomaron el nombre de Juventudes Comunistas de España y cuyo órgano fue el semanario *El Joven Comunista*.

Las zonas de mayor influencia eran las ya dichas: Vizcaya y Asturias. En Vizcaya el partido había conquistado la mayoría de los sindicatos, destacando su influencia en el Sindicato Minero, que agrupaba el noventa por ciento de los mineros vascos. La Casa del Pueblo de Bilbao, así como los sindicatos de metalúrgicos, artes gráficas y construcción eran dirigidos por comunistas. En Asturias los comunistas incidían en el Sindicato Único de Mineros, aunque la UGT seguía siendo el sindicato mayoritario. En Madrid, los comunistas tenían presencia en sindicatos menores, como el de la madera, canteros, dependientes de comercio, peones, etc. Su influencia sindical en el resto del país era muy escasa y parcializada, aunque destacaba entre los mineros de Serón (Almería).

En cuanto a las resoluciones políticas e ideológicas, el I Congreso del PCE tuvo muy poca importancia. Aparte de las declaraciones generales sobre la revolución mundial, la Revolución Rusa y la Internacional, en el terreno ideológico no hubo ningún avance. Se repitieron mecánicamente las fórmulas consagradas por la Komintern. La trayectoria que se arrastraba desde su gestación heredaba los vicios de origen de la socialdemocracia española. Los «terceristas» escindidos de 1921, lo mismo que los «100 niños» de 1920, mantuvieron la pobreza teórica recibida de sus antecesores.

En el terreno político, la estrategia se limitaba a reafirmar las tesis de la toma insurreccional del poder, la dictadura del proletariado y la formación de soviets de obreros, campesinos y soldados, pero carecía del más mínimo análisis de la situación concreta de la lucha de clases en España.

Pero a esas consignas genéricas vino a sumarse el viraje estratégico que la Komintern había dado en su III Congreso. En diciembre de 1921, la Internacional reconoció que la coyuntura se había tornado adversa para la inmediata expansión de la revolución proletaria: «La revolución mundial no es un proceso que avanza en línea recta; es la disolución lenta del capitalismo, es el sabotaje revolucionario cotidiano que se intensifica de tiempo en tiempo y se concentra en crisis agudas»[21] Esa nueva orientación se debía

traducir con cambios en la táctica. Ya no se trataba de forjar grupos de élite sino de disponer de instrumentos más eficaces en virtud del número. Lo que obligaba a revisar las relaciones de los PC con la socialdemocracia. De esta manera, el III Congreso impuso la validez internacional de una nueva línea política que más tarde se empezó a denominar «táctica de Frente Único», que se avanzó ya en el llamamiento, formulado por el Ejecutivo de la Internacional el 10 de enero de 1922 «a los proletarios de todos los países por la unidad del frente proletario» a fin de obtener «más pan y la paz».

En noviembre de 1922 se celebró en Moscú el IV Congreso de la IC, el último al que asistiría Lenin. Una novedad importante del IV Congreso fue la adopción de la política de «gobiernos obreros», que podían surgir como resultado del avance del frente único. La IC aconsejaba la participación en estos gobiernos junto a los reformistas. Aparte de las implicaciones que tenía para el PCE, en tanto que sección española de la Komintern, el IV Congreso tuvo una especial importancia para los españoles, ya que por primera vez, se abordaron las cuestiones españolas en forma de una breve «Resolución sobre España». Después de saludar la rectificación del PCE en cuanto a su posición sobre el frente único, que había rechazado anteriormente y que ahora aceptaba y aplicaba, la Resolución afirmaba que «la característica del movimiento obrero español es actualmente una descomposición de la ideología y del movimiento sindical-anarquista»,[22] que el PCE debía aprovechar para atraerse a las masas decepcionadas de los métodos anarcosindicalistas.

A los jóvenes PC de Europa occidental formados en 1920-21 por el doloroso proceso de la escisión, las políticas del IV Congreso de la Internacional les instaban a aproximarse a los socialistas de derecha y del centro con los que habían roto de modo abrupto. Esta nueva estrategia fue particularmente mal acogida en Francia. El PCE trató de aplicarla en España, proponiendo la acción unitaria de la UGT y la CNT, pero chocó con la oposición de sectores de militantes procedentes del antiguo PC Español, que seguían propugnando una política de enfrentamiento y denuncia contra la UGT y CNT, a las que consideraban sindicatos amarillos y contrarrevolucionarios.

Fueron esas actitudes agresivas las que precipitaron un hecho que minó la estrategia de frente único cuando apenas se había puesto en marcha. En el XV Congreso de la UGT que tuvo lugar en noviembre de 1922, algunos

sindicatos ugetistas eran partidarios del trabajo conjunto preconizado por los comunistas, a pesar de que los órganos directivos del sindicato prohibieron a sus afiliados formar ninguna alianza con los «elementos promotores de las divisiones en la organización obrera». En el congreso se iba a debatir la adhesión de la UGT a la Profintern, pero la discusión se tornó violenta. La presencia de dos representantes de la Federación Sindical Internacional de Ámsterdam, Oudegeest y Léon Jouhaux, caldeó los ánimos. El francés Jouhaux era la bestia negra de los comunistas, por su actitud durante la guerra mundial y frente a la Revolución Rusa. Los comunistas imprimieron unas octavillas en las que se atacaba a Jouhaux, los socialistas se opusieron a que se repartieran, hubo golpes y finalmente tiros, a resultas de los cuales murió un militante socialista, el albañil José González Portillo.

La violencia desencadenada en el Congreso parece que procedió de la Agrupación comunista de Bilbao dirigida por José Bullejos, Secretario del Sindicato Minero de Vizcaya, que en el Norte se encontraba en guerra abierta con los socialistas. Al Congreso habían asistido un buen número de delegados de Bilbao, entre los cuales se encontraba Francisco García Lavid, secretario del Sindicato de la Construcción de la misma provincia. De estos dos dirigentes, Bullejos iba a terminar siendo Secretario General del PCE, mientras que García Lavid fue, andando el tiempo, uno de los introductores del trotskismo en España.

Testigos presenciales acusaron a Merino Gracia del crimen del albañil socialista, si bien parece que el disparo mortal lo realizó un joven comunista bilbaíno, guardaespaldas de Pérez Solís. En cualquier caso, el desgraciado incidente sirvió de pretexto a los socialistas para excluir de la UGT a veintinueve sindicatos que habían aceptado la política de frente único, es decir, sindicatos dirigidos por comunistas.

En este ambiente de enfrentamientos violentos y de denuncias feroces, los llamamientos del PCE a la formación del Frente Único quedaban en meras declaraciones formales, hechas con escaso convencimiento. La política de Frente Único era puesta en práctica por el PCE de un modo muy peculiar: después de lanzar críticas demoledoras contra socialistas y anarquistas, les llamaban a la formación del Frente Único bajo su programa. Naturalmente, el PSOE y la CNT no hacían ni caso y entonces el PCE, considerando ya suficientes sus esfuerzos en pro de la unidad del movi-

miento obrero, renovaba sus ataques contra socialistas y anarcosindicalistas, acusándoles de antiunitarios.

Fue esta una época de violencia en las organizaciones políticas y sindicales. Óscar Pérez Solís, atrabiliario personaje de origen militar, pasado al socialismo primero, y al comunismo después, para terminar en el franquismo, señaló que la violencia «no era un arma que esgrimiese un solo partido, pues, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, no se reparaba en procedimientos de combate cuando las pasiones se encrespaban a impulsos del odio político o del odio de clases»[23]

En los años siguientes, fusionados ya el PCE y el PCOE, Solís fue elevado al puesto de Secretario General del Partido Comunista de España en julio de 1923, siendo cooptado como miembro del ejecutivo de la Internacional Comunista en julio de 1924. Su estrategia para compensar la debilidad relativa de los comunistas frente a los socialistas consistió en la creación de un núcleo de «hombres de acción», al estilo anarquista.

La aureola que rodeaba a los sindicalistas de Barcelona sedujo a los grupos de jóvenes comunistas; los métodos anarcosindicalistas aparecían ante sus ojos como la manifestación de lo más genuinamente revolucionario, y el ansia de ser más revolucionarios que los anarquistas condujo, en algunos casos, a ir tan lejos como ellos en el empleo de esos procedimientos.

Hasta tal punto habían calado entre los jóvenes comunistas los métodos de los que el anarquista García Oliver denominaba «los reyes de la pistola obrera», que Bilbao, en los años previos a la dictadura de Primo de Rivera, se situó en cabeza en cuanto al número de atentados per cápita —solamente superada en términos absolutos por la capital catalana—. El rasgo peculiar de Vizcaya es que esa violencia no se ejercía preferentemente, como en el caso de Barcelona, contra representantes de la patronal o sicarios parapoliciales, sino que era una violencia interna, de competencia por el dominio sindical entre las distintas ramas del movimiento obrero.

El extremismo conducía a casos como el de la agrupación comunista de Sestao, donde se pasaron varios días discutiendo si aceptaban las condiciones de vida legal del Partido, es decir, las posibilidades de trabajo legal y abierto que se podía realizar durante el régimen monárquico constitucional, porque muchos consideraban la legalidad que concedía la monarquía como

atentatoria a la dignidad del revolucionario. «No queremos nada concedido por la burguesía»

Dolores Ibárruri cuenta en *El único camino* cómo en verano de 1921 la dirección del partido decidió organizar una insurrección armada en Bilbao y su cuenca minera. Eduardo Ugarte se encargaba del enlace entre Madrid, donde dirigían la insurrección, y Bilbao, donde tendría lugar. A cada viaje anunciaba que pronto se daría la orden, pero la orden no llegó nunca. En cambio, llegó la de deshacerse de los explosivos, de esconder las armas, y con ellas el calificativo de «anarquizantes» aplicado a los comunistas bilbaínos por los de Madrid. Entre éstos había habido un cambio en la dirección y los partidarios de la insurrección habían quedado en minoría en el Comité Ejecutivo.

Poco después del congreso de unificación, en la primavera de 1922, la prueba de fuego para el nuevo partido fueron las elecciones. Los resabios antiparlamentarios que habían llevado al partido de «los 100 niños», a finales de 1920, a no participar en las elecciones, pero sí a secundar la huelga general declarada por la CNT como protesta por el asesinato del abogado laboralista Francesc Layret, aún estaban vivas, pero la nueva dirección decidió participar en los comicios municipales y legislativos.

En las elecciones a Cortes que se celebraron el 24 de abril de 1923, la descomposición de los partidos monárquicos se hizo evidente, así como el escaso interés popular por participar en unos plebiscitos, como siempre, amañadas por el caciquismo. El PCE presentó candidaturas en Madrid, Vizcaya y Asturias, los tres núcleos más importantes que controlaba la organización. En Madrid presentó a García Quejido, Isidoro Acevedo, Oscar Pérez Solís, Ramón Lamoneda, Núñez de Arenas y José María Viñuela (la inmensa mayoría procedente del PCOE). García Quejido consiguió 2476 votos mientras que quien consiguió menos obtuvo 1335. En Vizcaya y Asturias también consiguieron unos dos millares de votos, hecho que pone de relieve que el número de votos corría paralelo a la base real de la militancia en el partido.

Donde se consiguió un éxito rotundo fue en los comicios municipales del pueblecito palentino de Baltanás, con Santiago Rodríguez como cabeza de lista a la alcaldía. El candidato comunista, recordaba muchos años después, lo duros que habían sido los comienzos del partido, con solo 7 miem-

bros en esa localidad. «Apenas podíamos salir de casa. Nos llamaban «comunistas malarraza» y por la noche nos apedreaban la casa»[24] Esa situación era muy parecida a la de otras localidades. En los primeros párrafos de su autobiografía, Juan Modesto relata cómo se afilió al partido en el Puerto de Santa María en 1931, cuando éste sólo tenía cuatro miembros en dicha población.

Pero en las municipales de la primavera del 22 en Baltanás se pudo presentar una lista del PCE. El día de las elecciones se produjo el pucherazo y, ante las protestas del pueblo, el cacique llamó a la Guardia Civil, que detuvo a todos los miembros de la lista comunista y a 14 vecinos más. No obstante, la presión popular obligó a realizar unas nuevas elecciones en las que la candidatura comunista ganó por aplastante mayoría, convirtiéndose Santiago Rodríguez en el primer alcalde comunista de España.

Santiago Rodríguez como alcalde, logró algunas conquistas sociales para la clase trabajadora de Baltanás. Creó la Sociedad Fiesta del Trabajo, en ella se realizaban conferencias y reuniones y en su biblioteca se enseñaba a leer y escribir. Organizó un sindicado de obreros del campo, impulsó la Casa del Pueblo, que llegó a tener más de 400 afiliados, y expropió las tierras comunales a los caciques que se las habían apropiado. Con la dictadura de Primo de Rivera, Santiago Rodriguez fue destituido como alcalde, pero siguió trabajando en la clandestinidad, llegando a celebrarse en Baltanás el Congreso Regional del Partido Comunista de Palencia en 1929.

En los meses que precedieron al golpe de Estado de Primo de Rivera, la acción masiva de los trabajadores rebrotó con fuerza en Barcelona, Madrid, y, sobre todo, en Vizcaya, donde en junio de 1923 se inició una huelga reivindicativa que duraría tres meses, hasta el golpe de Primo. En ella tuvieron una intervención destacada los comunistas vizcaínos, con fuerte incidencia en el Sindicato Minero, que puso en evidencia los medios que utilizaba el Comité Regional bajo la influencia de Bullejos.

En abril de 1922 los comunistas habían convocado una huelga general de mineros contra la rebaja de los salarios, a la que los socialistas se opusieron. José Bullejos dirigió un discurso a los huelguistas desde el balcón de la Casa del Pueblo de Gallarta y, cuando se retiraba camino de Ortuella para coger el tren de regreso a Bilbao, fue tiroteado por cinco individuos que le habían seguido durante todo el día. A consecuencia de la refriega resultaron

tres heridos, —entre ellos Bullejos, que quedó lisiado de una pierna— y un socialista muerto.

En junio de 1923 volvió a estallar la huelga, al negarse la patronal a restablecer los salarios y el horario de trabajo vigentes en 1922. A mediados del mes de agosto se produjo una radicalización de la lucha en medio de una huelga general de todos los oficios en solidaridad con los mineros. En ese conflicto el partido jugó un papel muy importante, hasta el punto que la dirección envió a Bilbao a Ramón Lamoneda. Después de una concentración de unos 20.000 mineros en Bilbao, convocados por el PCE como medida de fuerza, la Casa del Pueblo de Bilbao y el Sindicato Minero de Vizcaya declararon la huelga general revolucionaria —boicoteada por los socialistas y especialmente por Indalecio Prieto desde las columnas de *El Liberal*— lo que desembocó en enfrentamientos armados y pequeñas escaramuzas. En esta atmósfera se produjo el intento de atentado contra los locales de *El liberal*. Un piquete comunista, en el que figuraba un adolescente Jesús Hernández, futuro ministro, intentó colocar una bomba en las dependencias del periódico, sin conseguirlo por la vigilancia de la Guardia Civil. El artefacto, al parecer, estaba destinado a Indalecio Prieto, al que sus autores suponían en el interior del edificio.

El día 23 de agosto la situación llegó a su cénit cuando numerosos efectivos de la Guardia Civil rodearon la Casa del Pueblo de Bilbao, donde los dirigentes sindicales estaban reunidos para decidir la continuación de la huelga. El intenso tiroteo cruzado entre los comunistas y la Guardia Civil desembocó en diversos muertos y heridos —entre estos últimos Oscar Pérez Solís— y en la detención de numerosos militantes de PCE.

El desenlace final de la huelga entronca con los acontecimientos del Congreso de la UGT en Madrid, y con otros que se habían producido ya en Vizcaya. Andrade, que fue comisionado para hacer un informe de los hechos por encargo del Comité Ejecutivo, se desplazó a Bilbao alojándose en casa de Francisco García Lavid, y su actuación para evitar el desmoronamiento del partido en el País Vasco fue decisiva. Efectivamente, la huelga continuó y como reconoció años después el propio Bullejos «contribuyó mucho a ello y a mantener la moral de los huelguistas, la presencia y actuación en Bilbao de Juan Andrade»[25]

Poco después, en el I Congreso de las Juventudes, celebrado en Madrid en el mismo mes de agosto, resultó aprobado un manifiesto antimilitarista, que dio lugar al procesamiento de cuantos componían el Comité Nacional de la organización juvenil. Se solicitaron ocho años de prisión para cada uno y la dirección del Partido preparó las cosas para poner a salvo al mayor número posible de dirigentes. Estaba entre ellos el mencionado Francisco García Lavid, que con apoyo del aparato clandestino llegó a Francia. Detenido en París, Burdeos y Marsella, emigró a Suiza, siempre bajo protección de sus correligionarios, para seguir a Moscú en calidad de emigrado político enviado por el Partido Comunista de Francia.

En medio de estos acontecimientos, el día 8 de julio del mismo año, se celebró el II Congreso del PCE en Madrid, con la presencia de Humbert-Droz en calidad de delegado de la Internacional para los países latinos. En el informe que envió desde París al Comité Ejecutivo de la Komintern, Droz reconocía que el PCE desde su último congreso había mantenido sus efectivos, pero su situación «ha quedado estancada y su influencia entre la clase obrera española y sobre la política general del país ha disminuido sensiblemente». Las causas del retroceso las veía en factores de orden externo —como la represión que sufría el movimiento obrero en general— y de orden interno. Entre estos señalaba:

«Uso de métodos terroristas, especialmente en los enfrentamientos con los reformistas, lo que ha producido tres o cuatro asesinatos de socialistas por parte de los nuestros… La insuficiente actividad del partido… El partido ha seguido una línea política correcta, pero con una energía insuficiente… una organización insuficiente; y una crisis interna, al multiplicarse los actos de indisciplina…»[26]

Sin embargo, amplios sectores del PCE no compartían el análisis de Humbert-Droz sobre las causas del retroceso del partido. La mayoría de delegados lo atribuían a la pasividad de la dirección. La oposición al Comité Central estaba formada por el grupo madrileño del ex-PC Español, por la Federación de Valencia y por la de Vizcaya, dirigida por Pérez Solís. Maurín, dirigente de los Comités Sindicalistas Revolucionarios, también participó en el Congreso, alineándose con la oposición, a pesar de que todavía no era formalmente militante del partido.

El programa de la oposición resultaba bastante heterogéneo, abarcando desde cuestiones nimias hasta el problema de las elecciones y el parlamentarismo. Pero su principal crítica frente al Comité Central era la acusación de pasividad y vacilación.

La propuesta de actuación del partido, elaborada por Humbert-Droz, recogía bastantes de las críticas de la oposición y fue aprobada por amplia mayoría. El partido continuaría en la línea política anterior aprobada y precisada por el IV Congreso mundial. Intensificaría su acción política. Prestaría más atención que antes al trabajo entre los ambientes de la CNT, y reforzaría su disciplina interna. También se acordó crear dos puestos permanentes retribuidos: Secretario General y director del periódico.

A pesar de que la oposición interna constituía mayoría en el Congreso, Humbert-Droz consiguió formar un Comité Central de concentración, en el que, después de la elaboración de una lista común, estaban representadas las distintas corrientes del partido. César Rodríguez González, hijo de Virginia González, fue elegido Secretario General. Su elección fue aceptada por todos, pues se trataba de un personaje flexible y que no había intervenido en las disputas entre el PC Español y el PCOE. Luis Pórtela, fue nombrado secretario de interior, es decir, de las cuestiones organizativas; Ramón Lamoneda, secretario sindical; José Baena, secretario internacional; Feliciano Alonso, secretario agrario, Joaquín Ramos, secretario administrativo, María Mayorga, secretaría femenina, y como vocales: Vicente Arroyo, José Rojas, Torralba Beci, Vicente Calaza, Gonzalo Sanz, Carlos Romero y José Barón. Juan Andrade, sería el director de *La Antorcha*.

Sin embargo, al clausurarse el II Congreso, el análisis de la situación política del país seguía brillando por su ausencia. Este desinterés por la coyuntura concreta de la lucha de clases y de la misma realidad política española explica que el golpe de Estado de Primo de Rivera pillara por sorpresa tanto al PCE como a los organismos dirigentes de la misma Internacional. Pero en el año 1923, por primera vez en la historia de España, el mito del peligro comunista iba a servir de pretexto para apuntalar el poder de la burguesía y de las fuerzas más retrogradas.

El balance final de la posguerra europea en nuestro país no generó en ningún momento una situación de crisis que se pudiera calificar de prerrevolucionaria. Muy al contrario; en 1923 el movimiento obrero estaba más

dividido que en 1917. No existía una organización capaz de hegemonizar las luchas, ni una orientación política que las pudiera unificar y orientar. Sin embargo, en el mes de septiembre, el general Primo de Rivera se pronunció en Barcelona e instauro un gobierno dictatorial con el consentimiento del rey.

Las razones del golpe parecían responder más a otras causas que al peligro de una revolución obrera triunfante. Pero la racionalización principal del pronunciamiento militar fue la prevención del «peligro rojo». Con el telón de fondo de la histeria conservadora y burguesa, los panegiristas de Primo de Rivera argumentaban que había dado el golpe porque el país estaba amenazado por el mismo caos catastrófico que existía en Italia antes de que Mussolini tomara las riendas del poder.

El mismo Primo de Rivera empleó ese argumento para justificar su rebelión. Su «revolución —dijo— llegaba a tiempo para impedir una revolución de tipo soviético», cuando el partido que defendía ese modelo contaba sólo con unos 1500 militantes.[27] Fue, insistió el dictador, el «carácter social» de las agitaciones de Barcelona lo que le indujo a «salvar» a España de la «ruina completa» mediante una «cirugía drástica». La mayor parte de la burguesía española estaba convencida de que así era, y el resto pensó que… *se non è vero, è ben trovato*.

Notas

1.- Ribas, Pedro (1990): *Aproximación a la historia de marxismo español (1869-1939)*, Endymion, Madrid. pág. 95.

2.- Gómez Llorente, Luís (1972): *Aproximación a la historia del socialismo español (hasta 1921)*, Cuadernos para el diálogo, Madrid. pág. 110.

3.- *El Socialista*: 2/I/1916

4.- *El Socialista*: 24/III/1917

5.- *El Socialista*: 10/XI/1917

6.- Forcadell, Carlos (1978): *Parlamentarismo y bolchevización: el movimiento obrero español, 1914-1918*, Crítica, Barcelona, pág. 259.

7.- Elorza, Antonio (1980): «Contexto histórico de la formación del PCE», en *Para una historia del PCE*. Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, pág. 19.

8.- AAVV (1984): *El Movimiento obrero internacional. Teoría y práctica*, Tomo IV, Progreso, Moscú, pág. 276.

9.- *El Socialista*: 11/XI/1918

10.- AAVV (1960): *Historia del Partido Comunista de España*. Éditions Sociales, París, pág. 26.

11.- *Ibidem* pág. 27.

12.- Arranz, Luis (1980): «Los «cien Niños» y la formación del PCE», *Para una historia del PCE*. Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, pág. 91.

13.- Gomez, Juan José «El comunismo en la organización sindical», *El Comunista*, (28/VIII/1920). Cit. en Pagès, P., (1978): *Historia del Partido Comunista de España*: (desde su fundación en abril de 1920 hasta el final de la Dictadura de Primo de Rivera, enero de 1930), Hacer, Barcelona, pág. 25.

14.- Meaker Gerald H. (1978): *La izquierda revolucionaria en España (1914-1923*), Ariel, Barcelona, pág. 272.

15.- De los Ríos, F. (1922/1970): *Mi viaje a la Rusia sovietista*, Alianza, Madrid.

16.- *Congreso extraordinario del PSOE 1921*, Zero-ZYX, Madrid 1974, págs. 92-97.

17.- Estruch, J. (1978): *Historia del PCE (1920-1939)*, El Viejo Topo, Madrid, pág. 14.

18.- Andrade, J. «La mixtificación social-comunista», en *El Comunista*. Cit. en Arranz, L. (1980): «Los «cien Niños» y la formación del PCE» en *Para una historia del PCE*. Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, pág. 101.

19.- Peirats, J. (1976): *Los Anarquistas en la Guerra Civil Española*. Júcar, Barcelona, pág. 31.

20.- Humbert-Droz, J., (1971): *De Lénine à Staline (1921-1931)*, Éditions de la Baconnière, Suisse, págs. 186-192.

21.- *Los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista. Segunda parte* (1977): Cuadernos de pasado y presente, Siglo XXI, México, pág. 31.

22.-*Ibidem*, págs. 303-306.

23.- Pérez Solís, O., (1929): *Memorias de mi amigo Óscar Perea*, Renacimiento, Madrid, pág. 221.

24.- Rodríguez, Santiago (1970): «Cómo conquistamos la primera alcaldía de España», *Nuestra Bandera*, nº 63.

25.- Bullejos, J., (1972): *La Comintern en España*, Edición del Autor, México, pág. 40.

26.- Humbert-Droz, J., (1971): *Opus cit*. págs. 186-192.

27.- Ben-Ami, S., (1984): *La dictadura de Primo de Rivera 1923-1930*, Planeta, Barcelona, pág. 35.

II
El PCE en la dictadura de Primo de Rivera
1923-1931

En el nacimiento del Partido Comunista fue determinante, no tanto el impacto de la Revolución Rusa, como la adhesión a la Komintern. Desde el primer momento de su fundación la Internacional operó como catalizador en el proceso de definición que se produjo en el seno del movimiento obrero mundial. Socialistas, anarquistas, sindicalistas, consejístas… todos se vieron obligados a definirse frente a esa nueva organización de manera mucho más clara y precisa que frente al experimento de transición al socialismo que se había iniciado en Rusia.

Durante los primeros años la experiencia soviética despertó los apoyos más variados. Sin embargo, lo que precipitó las decisiones organizativas que dieron origen a los PC fue su adhesión al ejercito de la revolución mundial, cuyo objetivo era según sus estatutos «la lucha armada por la liquidación de la burguesía internacional y la creación de la república internacional de los soviets, primera etapa en la vía de la supresión total de todo régimen gubernamental. La Internacional Comunista considera la dictadura del proletariado como el único medio disponible para sustraer a la humanidad de los

horrores del capitalismo. Y la Internacional Comunista considera al poder de los Soviets como la forma de dictadura del proletariado que impone la historia»[1]

Según los acuerdos de sus dos primeros congresos la Komintern era un Partido mundial que se componía de secciones individuales: los partidos comunistas nacionales, que como la misma Internacional funcionaban de manera rigurosamente centralizada. El centralismo democrático en esencia era la combinación de la autoridad de los comités con la elección de éstos por las distintas bases del partido. Este concepto evolucionó hacia la cooptación de sus miembros, la progresiva disminución de la importancia de la elección en cargos y la sustitución de las asambleas por los comités superiores, como organismos fiscalizadores de la actividad de todo el partido.

Las reuniones plenarias de la Internacional eran el Congreso Mundial de dicha organización, para la que se preveía también una dirección específica, el Comité Ejecutivo, —elegido por el Congreso— con atribuciones para dirigir todas las tareas de la Internacional entre congreso y congreso, proporcionando «directrices vinculantes para todos los partidos y organizaciones». Como el órgano supremo de la Komintern era el Congreso Mundial (artículo 4° de los Estatutos), las «Secciones» enviaban sus delegados a él, y allí se elegía al Comité Ejecutivo (CEK) órgano directivo de la Komintern. El CEK podía compararse al Comité Central de un Partido comunista.

Igual que cualquier partido comunista, el CEK tenía una secretaría como órgano ejecutivo, llamada también Secretaría Política. El IV Congreso la transformó en Secretaría General. Esa secretaría fue ocupada por Angélica Balavanov, durante un corto espacio de tiempo, para ser sustituida por Zinóviev, que desempeñó el cargo de 1919 a 1927, y luego por Buharin, que lo ocupó hasta 1929, siendo sustituido por Manuilsky de modo interino hasta que en 1935 se nombre al búlgaro Dimitrov. En 1920 se acordó que el Comité Ejecutivo tuviera su sede en Moscú, y ésta será su sede definitiva hasta su desaparición.

Del Ejecutivo dependía el Departamento de Organización (Org-Buro) al que estaban subordinados el Departamento de Comunicación Internacional (OMS = *Otdjel Meshdunarodnoi Swjasi*), —el corazón de la Komintern, como lo llamó Krivitsky— y el Departamento de Finanzas. Durante mu-

chos años fue director de la Org-Buro, Ossip Piatnitsky, después de 1933, fue relevado por Manuilsky.

Otros departamentos importantes eran el de Estadística e Información, y el de Agitación y Propaganda, que entre otras numerosas publicaciones contaba con un órgano central, la revista: *La Internacional Comunista*. Un departamento fundamental era el de cuadros o liberados, los funcionarios que a tiempo completo se consagraban a las tareas políticas que se les encomendaban en cualquier parte del mundo y que fue organizado territorialmente. La estructura se completaba con organizaciones auxiliares —Internacional Juvenil, del Deporte, Femenina o Campesina, Socorro Rojo, etcétera.

En el CEK existían Secretarías para aquellos grupos que componían las Secciones o Secretarías Regionales. Durante años las Secretarías Regionales más importantes fueron las de Europa Central y Europa Occidental, dentro de esta última debemos mencionar de modo particular la Secretaría Latina que fue dividida, después del VI Congreso Mundial, en dos secciones, una para Italia y España, y otra para los países hispanoamericanos. De esta secretaria dependerá el PCE mientras exista la Komintern. El CEK, que dirigía la actividad de los partidos comunistas en el mundo, era también quien determinaba la ayuda económica que les hacía llegar subrepticiamente.

Para misiones tanto permanentes como temporales, el CEK creó «Comisiones». La legitimación para esto se la daba el artículo 9° de los Estatutos: «En caso de necesidad, el Comité Ejecutivo organizará, en los diferentes países, secretarías auxiliares técnicas o de otro tipo que le estarán totalmente subordinadas… Los representantes del Comité Ejecutivo desempeñan su misión en estrecho contacto con la Central del Partido de su respectivo país»

En el caso español el PCE de los primeros años intentó ajustarse al máximo a las directrices y formas organizativas de la Komintern y dependía, como ya hemos dicho, de la Secretaría Latina, que tenía a su cargo el control de toda la actividad del partido en España. Su oficina estaba asesorada por un representante del partido español, que de modo permanente residía en Moscú y que era relevado cada año.

El Comité Central era la dirección nacional del partido y no tenía un número fijo de componentes. Su elección se realizaba en los Congresos o Conferencias nacionales. Formaban parte de él, además de los delegados de la

Internacional Comunista que se encargaban de su dirección política, todos los representantes de los Comités regionales, el Secretario General de las Juventudes, y aquellos afiliados que, por su capacidad, aunque no representasen a ninguna organización auxiliar ni de base, fueran elegidos para ello por el Congreso o Conferencia Nacional.

Del seno de este amplio Comité Central, salía elegido un Buró Político compuesto por un número variable de miembros. Este Buró Político celebraba, teóricamente, reuniones cada mes y el pleno del CC se debía reunir cada seis meses. A su vez, ese Buró nombraba un Secretariado, o Comité Ejecutivo, compuesto por una serie de cargos, que eran: secretario político, de organización, sindical, agrario o campesino, y antimilitarista. Su nombramiento tenía que ser refrendado por el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista de la que recibía las orientaciones políticas.

Territorialmente, en vísperas de la caída de la monarquía, el PCE se estructuraba teóricamente en los siguientes Comités regionales: Madrid capital; Castilla la Nueva; Castilla la Vieja; Aragón; Zaragoza capital; Islas Baleares; Guipúzcoa; Navarra; Vizcaya; Bilbao capital; Asturias; León; Galicia; Extremadura; Andalucía occidental; Sevilla capital; Andalucía central; Andalucía oriental; Murcia y Albacete; Levante; Valencia capital; Islas Canarias y Marruecos.

Los llamados Comités de radio estaban encargados de la dirección de la actividad en una localidad determinada, como un pueblo, una ciudad pequeña, o en un sector más o menos grande de una gran ciudad. Formaban estos comités, representantes de todas las células situadas en su demarcación.

Las células eran la estructura vital del partido. Compuestas por un grupo de militantes, que casi nunca excedía de diez, eran la escuela donde se forjaban los afiliados y el instrumento de aplicación de la política del partido. Se reunían semanalmente, y podían ser células de barriada, células de empresa, células de cuartel… según donde centraran su labor.

La célula no solo planificaba las distintas intervenciones de cada uno de sus miembros, sino que también velaba por su formación y por sus actitudes personales. La rígida disciplina y el integrismo ideológico que presidía la vida del partido en aquellos años, conducía a situaciones que nos hablan de lo difícil que podía resultar ser militante comunista.

En sus memorias Vicente Uribe narra un ejemplo de cómo la dogmática forma de entrega exigida por la organización y los hechos de la vida cotidiana acababan teniendo incluso repercusiones en las filas comunistas: «Una causa o pretexto de la desaparición de las Juventudes (en la Vizcaya de los años veinte) fue que para muchos miembros de la Juventud había llegado la hora de casarse y, bien porque no pudieran vencer los prejuicios de las interesadas o por otra razón, el caso es que el casarse por la Iglesia… aparecía como una traición, no sólo a los ojos de los comunistas, sino también a los ojos de los obreros, que exigían que los comunistas fuesen enteramente fieles a lo que decían defender… Está claro que en las circunstancias de entonces casarse por la Iglesia para un revolucionario aparecía como el acto de un renegado y todo el mundo lo aceptaba así, empezando por el interesado, y perdía toda autoridad personal [y] política»[2]

Olvidando que Lenin se casó por la Iglesia Ortodoxa, y en la misma línea, Andrade recordaba cómo le tuvo que contar a su tía, que era como una madre para él, que iba a casarse por lo civil, y eso haciendo una concesión ya que: «nosotros no creíamos más que en la unión libre sin intervención legal de nadie; que si nos casábamos civilmente era sólo para que pudiera acreditar María su condición de esposa legítima y evitarse de esta manera disgustos con la policía y con las autoridades en general»[3]

Una instancia fundamental en el funcionamiento del partido, especialmente durante aquel período, era el llamado «aparato» ilegal. El «aparato» era la sección encargada de toda la actuación mecánica de la organización. Se ocupaba entre otras cuestiones de imprentas clandestinas, reparto de las publicaciones, pasos clandestinos de fronteras, obtención de pasaportes falsos, administración de los fondos recibidos de la Internacional…

Su funcionamiento estaba encomendado al secretario de organización del Comité Central. Sus componentes se movían en la más absoluta clandestinidad llevando una vida totalmente normal y no desempeñando tareas que los pudieran exponer a ser detenidos. Normalmente los responsables del «aparato» eran liberados de la organización, podían vivir de los fondos del partido y disponían de una serie de militantes que desempeñaban distintas funciones y hacían de «estafetas» o correos en las tareas a desarrollar. El «aparato» era la parte de la organización que se debía preservar a toda costa de los golpetazos represivos, ya que aun en las épocas de mayor persecución tenía que seguir funcionando normalmente.

La organización de las Juventudes Comunistas era similar a la del partido en todos sus aspectos, pero completamente autónoma en el terreno administrativo. Tenía su propio Comité Central, sus regionales, radios y células. Se relacionaba directamente con Moscú por medio de la Internacional Juvenil Comunista (KIM), y su misión, además de secundar todas las iniciativas del partido, se concretaba en atraer a la juventud al campo comunista, y una vez captados, procurar forjarlos para su actuación en el seno de la organización, contando con secciones especiales encargadas de la labor en distintos frentes.

Las Juventudes dedicaban especial atención a los marineros y soldados, por la edad del reclutamiento para el servicio militar. La oficina central editaba un periódico clandestino titulado *La Voz del Cuartel*, donde se reclamaban derechos políticos y civiles; elección de los jefes y oficiales por las asambleas de soldados; reconocimiento de los comités de cuartel dirigidos por los soldados, y la facultad de poder juzgar a los jefes y oficiales por los actos de servicio. También existía una juventud femenina, y el límite de edad para ser joven comunista era de veintitrés años.

El partido, en su extrema debilidad, solo pudo sobrevivir en esos difíciles años gracias a la entrega de sus militantes y a la ayuda de la Komintern, que sufragaba buena parte de los gastos de una organización que contaba con escasos recursos. Sabemos que entre noviembre de 1923 y febrero de 1924 las cotizaciones representaban sólo la cuarta parte de los ingresos del partido, correspondiendo las tres cuartas partes restantes a los dólares remitidos por la Komintern: 976 pesetas contra un equivalente a 3822.

Matorras, un miembro de las juventudes, nos dice que a comienzos de los años 30 el PCE recibía unas 45.000 pesetas mensuales de las cuales 10.000 eran para el periódico del partido. Esta cantidad estaba destinada tan sólo a fomentar la actividad del partido y sus distintas organizaciones, aparte se recibían las consignaciones correspondientes para el sostenimiento de los delegados de la Internacional. Los liberados por el partido cobraban, y Castro Delgado nos cuenta cómo se convirtió el liberado del PCE.

«El partido te ha fijado un sueldo para que te dediques sólo y exclusivamente a este trabajo… Desde hoy, no lo olvides. Eres un revolucionario profesional al que la revolución da de comer para que sólo vivas para ella»[4]

Matorras, estando ya fuera de la organización, dice que el salario de los dirigentes era de unas cuatrocientas pesetas mensuales (el salario industrial medio en 1925 era de unas 200 pesetas), a las que había que sumar las dietas en los viajes que los liberados realizaban en las misiones encomendadas.

Para la entrada de dichas cantidades en España la Komintern empleaba varios procedimientos. Unas veces lo transportaban personalmente individuos especializados en ello. Otras se recibían por mediación de editoriales afines al partido, como era la Editorial Cénit, o a través de otras empresas u organizaciones que funcionaban como «tapadera» de esa actividad.

Margarette Buber, una militante alemana, nos cuenta en sus recuerdos su inexperiencia como estafeta en una misión en España a comienzos de 1933. En París se le habían entregado dos sobres con documentación de la Komintern para los delegados de la Internacional en nuestro país y un fajo de dólares que debía llevar hasta Madrid. «Sabía perfectamente que el hecho de servir en la OMS constituía para cualquier comunista un alto honor personal. Sin embargo, mi trabajo de estafeta no me agradaba.

Al cabo de más de una hora de espera, otro joven llamado Carlos me condujo a un café donde me explicó con una larga catarata de palabras que yo casi no comprendía, que tenía que esperar. Era evidente que los españoles tenían una noción del tiempo que, como tantas otras cosas en su país, escapaba a las medidas europeas. Al rato, dos hombres me saludaron con un amable «buenos días» y se sentaron a mi mesa. En mi alegría por ver ya cercano el final de mi tarea, comencé inmediatamente a hablarles del material que yo debía entregarles. Tanta era mi prisa que no advertí el escaso interés que manifestaban por mi proposición. Incluso se negaron a aceptar la pequeña maleta que contenía los sobres. Luego declararon que aquel café era un sitio demasiado peligroso para semejantes operación. Finalmente, entregué los sobres en la pobre habitación de uno de ellos. Sólo por la noche comprendí mi error. El material que estaba destinado a la delegación de la Komintem en España, había caído en manos —por mi culpa— de dos miembros del buró político del partido comunista español, José Díaz y Vicente Uribe. Así, la dirección del PCE conoció las directivas confidenciales del Komintern. Además, los comunistas españoles debieron sorprenderse ante la considerable suma de dólares que se remitía a los emisarios de Moscú, mientras sus propios funcionarios trabajaban a título honorario»[5]

El número de afiliados o militantes con los que contó el partido en estos años resulta difícil de precisar, aunque los datos que se poseen nos hablan de su escasa implantación, tanto en la sociedad como en el movimiento obrero, llegando, a causa de la represión, a casi desaparecer. Las cifras que nos han llegado fluctúan entre los 5000 y los 500 miembros en los momentos más difíciles.

En un informe elaborado durante el V Congreso de la Internacional, fechado el 20 de julio de 1924, se dice: «el poder central no ha decretado aún la ilegalidad de nuestro partido, pero de hecho impide su funcionamiento, por cuyo motivo la actuación de él tiene que ser completamente clandestina. Debido a los secuestros de documentación, encarcelamientos y violencias de todo género que se cometen contra el Partido, no es posible fijar exactamente la cifra de afiliados, pero aproximándose mucho a la realidad, podemos evaluarla en 5000. Un 5% de mujeres, número de secciones 80… no hay células de fábrica, el 10% son intelectuales y empleados, 5% campesinos pobres, el resto obreros industriales. La tirada de *La Antorcha* es de 6000 ejemplares con tendencia a aumentar… El Partido atiende ante todo a la actividad sindical, hemos logrado formar una corriente de opinión dentro de la CNT»[6]

En el año 1927, se logró la incorporación de un buen número de militantes de Sevilla, procedentes de la CNT, que gozaban de una fuerte implantación en el movimiento obrero, con fuerza real en los sindicatos más importantes de la capital y la provincia. Con su absorción el PCE conseguía el control de los sindicatos de portuarios, panaderos, ferroviarios, metalúrgicos, etc. de Sevilla y su entorno. A partir de entonces, la capital andaluza se iba a convertir, junto con Vizcaya y Asturias, en uno de los pilares fundamentales de la intervención del PCE en el movimiento obrero.

El grupo de sindicalistas sevillanos, dirigido por Manuel Adame, estaba formado por militantes que terminarían alcanzando una ascendiente real en el partido, entre ellos se encontraban José Díaz, Manuel Roldán, Antonio Mije, Carlos Núñez, y otros. Es muy posible que la inclusión de este grupo fuese un éxito casi personal del entonces Secretario General José Bullejos, como él mismo afirma en sus memorias. Lo cierto es que Adame no tardaría en ser incorporado a la Secretaría del partido —donde se ocuparía de los asuntos sindicales— y desde ese momento hasta 1932 formaría parte del equipo de Bullejos.

Toda la actividad del PCE durante los años 20 continuó marcada por la Internacional, que fue modificando su estrategia en los distintos congresos que se sucedieron a lo largo de la década.

El V Congreso de la Komintern, iba a provocar un viraje táctico en el movimiento comunista internacional. Reunido desde el 17 de junio al 8 de julio de 1924, estuvo fuertemente influido por el fracaso del intento revolucionario alemán de octubre de 1923. La interpretación oficial de esa derrota se basaba, no en el reconocimiento de que la esperanza en la proximidad de la revolución mundial en los países avanzados había resultado fallida, sino en que los partidos comunistas no habían asimilado correctamente las enseñanzas de la revolución bolchevique.

También las tensiones internas en el PC ruso influyeron en esta interpretación del fracaso alemán. El fracaso alemán fue utilizado por Stalin y Zinóviev para desbancar a Rádek, delegado de la IC en Alemania, al que se adjudicó la responsabilidad del desastre, acusándolo de «derechista». Pero esta maniobra estaba dirigida, indirectamente, contra Trotsky, estrechamente vinculado a Rádek. De esta forma, la frustrada intentona alemana sirvió para iniciar públicamente la lucha contra el «trotskismo».

La crisis política había surgido en Rusia dentro del Partido Comunista tras la muerte de Lenin (enero de 1924). Trotsky, Comisario de Guerra, y aspirante a suceder a Lenin, publicó un panfleto titulado *Nuevo Curso* en el que acusaba de creciente burocratización al aparato del partido. Rápidamente se vio apoyado por un manifiesto firmado por 46 relevantes miembros del partido —entre otros Piatakof, Radek o Antónov-Ovséyenko, héroe en la conquista del palacio de Invierno durante las jornadas de Octubre de 1917— La contestación vino por parte del triunvirato formado por Stalin, Kamenev y Zinóviev, que se unieron para vetar el acceso de Trotsky a la jefatura de partido, y combatir el «trotskismo» como una desviación pequeñoburguesa.

Como el desastre en Alemania se achacaba a la aplicación de una política «desviacionista de derechas», la solución consistía en dar un giro a la izquierda. Bajo esta óptica, el ascenso del fascismo y la participación de la socialdemocracia en los gobiernos burgueses eran interpretados como síntomas de la debilidad de la burguesía, que se veía obligada a recurrir al fascismo o a la socialdemocracia como últimas tablas de salvación.

«La burguesía ya no puede gobernar con los antiguos métodos. Es uno de los síntomas de la proximidad, lenta pero segura, de la revolución proletaria. La burguesía recurre tan pronto a los buenos oficios del fascismo y tan pronto a los de la socialdemocracia. En ambos casos procura enmascarar el carácter capitalista de su dominación… Fascistas y socialdemócratas se ponen al servicio de la burguesía como organizaciones de combate, bandas armadas, tropas de choque contra el naciente ejército proletario, etcétera. Con la ayuda del fascismo y la socialdemocracia, la burguesía intenta reagrupar las fuerzas sociales...»[7]

Naturalmente, estos análisis alteraban la táctica del Frente Único, elaborada por el IV Congreso, que ahora se convertía en «Frente Único por la base», lo que significaba que había que rechazar cualquier colaboración o unidad de acción con las direcciones de los partidos socialistas.

Otra de las conclusiones políticas del V Congreso fue la «bolchevización» de los partidos comunistas. «El objetivo esencial de este período de la Internacional Comunista es la bolchevización de sus secciones… El Partido debe ser una verdadera organización de masas, es decir, debe mantenerse, legal o ilegalmente, en estrecho e indispensable contacto con los obreros... Debe ser capaz de maniobrar, es decir, no tener una táctica dogmática y sectaria... Debe ser un partido centralizado, que no admita fracciones, ni tendencias ni grupos; un partido monolítico fundido en un solo bloque… Sólo a medida que las principales secciones de la Internacional Comunista se transformen en partidos bolcheviques la Internacional Comunista llegará a ser verdaderamente el Partido Bolchevique universal imbuido de leninismo»[8]

El decreto de «bolchevización» del partido, dictado por Zinóviev, se tradujo en la expulsión, en los distintos partidos, de todos aquellos miembros o dirigentes que no manifestasen una incondicional adhesión a las nuevas directrices. De esta manera quedaba abierta la caza de «centristas» y «trotskistas».

En el verano de 1928, se celebró el VI Congreso de la Internacional Comunista que marcó un viraje importante en la política interior de la URSS y en la propia Internacional. Es en este momento cundo Stalin se deshace de la corriente derechista que representaban Buharin, Rikov y Tomsky, y a nivel internacional impulsa la estrategia ultraizquierdista de «clase contra

clase». En ese Congreso se llevaron a sus últimas consecuencias las tendencias apuntadas en el anterior. Se definía la situación a nivel internacional como un «tercer período» de auge revolucionario que sucedía a la fase de calma que lo había precedido y se calificaba a los partidos socialistas como «socialfascistas» y como apoyos imprescindibles para el mantenimiento del capitalismo.

El PCE participó en el V Congreso de 1924, pero la delegación formada por José Rojas, Isidoro Acevedo, Pérez Solís y Alonso, desempeñó un papel irrelevante que se puede cifrar en la nula participación de los delegados en las distintas sesiones, así como en la ausencia de un análisis sobre la situación española en las resoluciones de la misma Internacional. La delegación, presidida por Pérez Solís, sólo intervino en una sesión solicitando la aprobación de una resolución que exigía la libertad de Juan Bautista Acher «Shum», pintor anarquista condenado a muerte por la dictadura. Aparte de esto, sólo el nombramiento del mismo Pérez Solís como delegado español en el nuevo Comité Ejecutivo de la IC dejó constancia oficial de la presencia, poco menos que simbólica, del PCE en este Congreso de la Komintern. En el VI Congreso, la situación del partido era tan penosa que no contó ni con una delegación formal, aunque la cuestión española fue abordada con más detenimiento por Buharin y Ernst Thälmann, que se encargaron de denunciar la dictadura y resaltar las dificultades del partido en España.

Toda esta precariedad organizativa venía marcada por la instauración de la dictadura de Primo de Rivera en nuestro país. La llegada de la dictadura en septiembre de 1923 cogió por sorpresa tanto al PCE como a otras organizaciones obreras. Maurín, había escrito dos meses antes del golpe un estudio sobre *La España actual*, que no reflejaba ninguna inquietud en ese sentido. Tampoco la Komintern lo previó, ni le dio excesiva importancia. Por ejemplo, Nin, que residía en Rusia, en un artículo en *La Correspondance Internationale* (26 de septiembre de 1923) afirmaba que el nuevo poder no conseguiría consolidarse, predicción que sólo se cumplió a medias. No obstante, acertaba al considerar que no era un golpe de Estado fascista, sino uno más de los innumerables pronunciamientos que llenaban la historia del siglo XIX en nuestro país.

La reacción frente al golpe fue casi inexistente. El PSOE y la UGT se limitaron a sacar una declaración el 13 de septiembre, el mismo día del pronunciamiento, que decía: «El pueblo se encuentra hoy ante una rebelión

militar que, en síntesis (dejando aparte motivos muy secundarios ante la magnitud de la desastrosa aventura de Marruecos), pretende intensificar una acción guerrera que en catorce años de desarrollo sólo ha cosechado enormes y sangrientos desaciertos. Lo que España repudia es lo que, por lo visto, precisamente quieren imponer los generales sediciosos. El pueblo, pues, no debe secundarles. La actitud de la masa trabajadora, a quien con preferencia y por nuestra representación nos dirigimos, debe consistir en no agrandar, sino por el contrario en aislar esa sedición, que, capitaneada por generales palatinos, habrá podido sorprender de modo muy relativo en la esfera del gobierno, pero no habrá causado extrañeza en Palacio»[9]

Después de la denuncia político-moral la declaración se limitaba a recomendar que el pueblo español, y especialmente la clase trabajadora, no tomara iniciativas sin recibir las instrucciones de los comités del Partido Socialista y de la UGT. Instrucciones que resumía la editorial de *El Socialista* titulada *¡Serenidad trabajadores!*

La misma tarde del golpe de Estado se reunieron en Madrid delegados del PCE, de la federación local de la CNT y de los grupos anarquistas, e hicieron pública una declaración conjunta, condenando el pronunciamiento, porque, decían, reforzaría la campaña de Marruecos y amenazaba «la vanguardia del proletariado español» y «la vida misma de los sindicatos». Para oponerse a esto, se constituyó un «Comité de Acción contra la Guerra y la Dictadura». Se dirigieron a la UGT y al PSOE para organizar «en común la lucha por la defensa de los derechos respetados inclusive en los períodos de más brutal represión»[10]

Algunas huelgas y acciones se produjeron en distintas ciudades de modo aislado, y sólo en Vizcaya pudo lograrse la unidad de acción: PCE, socialistas y anarquistas organizaron una huelga de 24 horas. Pero ante la indiferencia de las direcciones del partido socialista y la UGT, el comité se disolvió, incapaz de organizar una acción de masas contra el golpe militar.

Desde su aparición el PCE sufrió una política represiva desarrollada por los distintos gobiernos que se sucedieron, constitucionales o dictatoriales. La censura en sus publicaciones o las detenciones administrativas eran frecuentes antes de la dictadura, y tras el golpe militar se llegó rápidamente a una situación de casi total clandestinidad.

Las primeras semanas de la dictadura se caracterizaron por una relativa tolerancia respecto a los partidos obreros. El dictador pronto dejó claro que si bien decía querer defender a los trabajadores, distinguiría entre los «malos» —anarcosindicalistas, comunistas o miembros de «las sectas masónicas»— y los «buenos», los que seguían las enseñanzas moderadas de Pablo Iglesias. Las negociaciones entre el dictador y las direcciones del PSOE y la UGT llegaron a alcanzar resultados positivos, al punto de que los socialistas se comprometieron políticamente con la dictadura de Primo, y Largo Caballero terminó siendo nombrado miembro del Consejo de Estado en el Directorio que creó Primo de Rivera.

Bullejos nos cuenta que en Vizcaya —donde las Casas del Pueblo y los sindicatos estaban clausurados a causa de los acontecimientos del mes de agosto anterior— el gobernador civil convocó a Oscar Pérez Solís y a él mismo para ofrecerles la apertura de los locales cerrados, a cambio de que el Partido Comunista renunciase a todo tipo de agitación y actividad contra el gobierno del general golpista. Los comunistas declinaron semejante ofrecimiento y de momento no sufrieron la represión, aunque ante la redacción de *La antorcha* en Madrid se estableció una vigilancia continua. Pero el golpe represivo no tardó en llegar, sobrevino antes de acabar el año.

Una vez más, como había sucedido tiempo atrás con la Mano Negra, —organización inexistente que sirvió para desarticular el movimiento agrario en Andalucía a finales del siglo XIX— las autoridades inventaron una fantástica conspiración. En este caso el objetivo del montaje fue el PCE, que aprovechando un encuentro de fútbol internacional con un equipo portugués, preparaba, según la Dirección General de Seguridad, «un movimiento revolucionario, que debía realizarse en combinación y simultáneamente el 28 de diciembre (día de Los Inocentes) en Portugal y España, procediendo las autoridades a adoptar las medidas necesarias para impedir la realización del criminal intento»[11]

Las detenciones fueron masivas. Luis Pórtela, secretario del interior, tuvo que huir a Francia, y César Rodríguez González, el Secretario General del partido, fue juzgado en consejo de guerra y condenado a prisión. El local en Madrid fue clausurado; y la policía sólo dejó una habitación abierta para la redacción de *La Antorcha*, con la finalidad de poder seguir y controlar a todos aquellos que se acercaran a ella, y el partido fue declarado ilegal.

Tras esta caída el partido quedó desarticulado. Fueron muchos los que abandonaron para volver al partido socialista o para retirase de la acción política. Entre las deserciones, las detenciones y la desorganización interna, el PCE quedó reducido a un grupúsculo con escasa capacidad de intervención. Pérez Solís, único dirigente en libertad, fue nombrado Secretario General por la IC, con el encargo de reorganizar lo poco que quedaba del partido. Después de haber huido a Francia ante el acoso de la policía, se dirigió clandestinamente a Barcelona, donde a principios de 1925 fue también detenido. Aunque desde la cárcel el Comité Central, y el nuevo Secretario General, pudieran mantener contactos con el exterior, la vida y la actividad del partido quedó prácticamente paralizada.

La delegación en Francia de la Komintern, a finales de 1924, decidió enviar a España para fines informativos al concejal comunista de París Louis Sellier. Al llegar a Madrid, lo detuvieron también y le encontraron direcciones de los dirigentes del PCE y una cita con Joaquín Maurín. El 12 de enero de 1925, Maurín, al dirigirse al encuentro con Sellier y percatarse que la policía lo esperaba, intentó huir. Fue entonces cuando le dispararon e hirieron en una pierna. Permanecerá encarcelado hasta finales de 1927 cuando, con ocasión de la reunión en París de una Conferencia hispano-francesa sobre Marruecos, se emprendió una campaña en favor de los detenidos políticos españoles y el Gobierno lo dejó salir junto a otros encarcelados.

El año 1928 se inauguraría con una nueva escalada represiva. Varios miembros del nuevo Comité Central fueron apresados. Cayó también Bullejos, a la sazón Secretario General, que había intervenido directamente en una huelga en Asturias. Condenado por un consejo de guerra permaneció en la cárcel de Madrid hasta el final de la dictadura. Adame y Trilla se hicieron cargo de la dirección pero por poco tiempo, pues fueron también detenidos y encarcelados. *La Antorcha*, que, aunque sometida a censura, había seguido publicándose con regularidad, fue finalmente prohibida. Así, el PCE perdió su más importante instrumento de propaganda.

Tras el fin de la dictadura no mejoró la situación del partido que continuó acosado por la represión. El Gobierno y la policía, ante el ambiente de conspiraciones en las postrimerías de la monarquía, detuvieron de nuevo a la dirección del PCE. El general Mola, Director General de Seguridad del Gobierno Berenguer, creó un organismo especializado en la labor de provocación y persecución contra los comunistas, la llamada «Sección de In-

vestigación Comunista», vinculada con los servicios policíacos anticomunistas de otros países. Bullejos y la mayoría del Buró Político fueron de nuevo encarcelados en agosto de 1930. Impotentes tras las rejas, contemplaron cómo crecía el fermento revolucionario en el país y aunque desde la cárcel mantenían contacto con las agrupaciones, la dirección efectiva del partido tuvo que quedar en manos de los delegados de la IC y de José Silva, único miembro de la dirección en libertad.

Fueron años duros en los que se combinaron la represión, la rivalidad con otras organizaciones obreras, —socialistas y anarquistas o sindicalistas del Libre sostenido por la patronal— con la estrategia extremista que desplegaba el PCE, por eso no puede extrañar el recurso a los métodos violentos de actuación. Todavía en los tiempos inaugurales de la República recordaba Uribe cómo en su primer contacto con un comité de radio de una zona minera, muy importante por el número de afiliados, asistió a una reunión en la que el secretario, un tal Martín, apodado «Petaca», empezó preguntando a los asistentes cómo estaba la cuestión de las pistolas, cuántas balas tenían en depósito, si ya se habían preparado las bombas. Es decir, el comité de radio se ocupaba en primer lugar y exclusivamente en hacer la revisión de los pertrechos de guerra. Este era realmente el trabajo principal del comité, además de intentar cobrar las cotizaciones.

Por eso, según testimonios de la época, al lado de cada comité legal el partido creaba otro clandestino, que era el que lleva la verdadera dirección, siendo aquél tan sólo una pantalla para la policía. Al lado de cada director legal de un periódico existía «otro», el verdadero, quedando reducido el papel del primero a ser encarcelado cuando los artículos publicados acarreaban la detención.

Matorras, un cuadro de las Juventudes del PCE que terminó en los sindicatos del Libre, contaba, en un libro publicado en los años 30, un caso de duplicidad funcional. «Hasta hace poco ha estado en la cárcel de Madrid un tal Casiano Martínez, que figuraba como director de *Mundo Obrero* cuando éste era semanario, siendo así que todos los artículos denunciados… fueron escritos y publicados por José Bullejos, el verdadero director»[12]

En periodos alternantes de semilegalidad y clandestinidad, el PCE fue poco más que un grupo testimonial, que actuaba en los márgenes del espectro político español, tan acosado y tan parco en militancia que, en los

años finales de la dictadura de Primo de Rivera, su dirección tuvo que enmascararse como la directiva de un equipo de fútbol, el Oriente FC.

Como podemos apreciar, la ilegalidad y la represión marcaron desde época temprana la historia del partido. Durante esta década de los 20 todos los secretarios generales de la organización acabaron entre rejas: César Rodríguez González, Oscar Pérez Solís y José Bullejos, y en algún caso por dilatados períodos de tiempo, y tanto Bullejos como Maurín fueron heridos quedando lisiados de por vida.

Eso no impidió que la vida orgánica y las discrepancias políticas continuaran en el seno de la organización. En ellas desempeñó un papel fundamental el comunismo catalano-balear a través de su principal dirigente: Joaquín Maurín. Recordemos que, a nivel sindical, el grupo que publicaba el periódico *La Batalla*, animado por Maurín, continuaba dentro de la CNT, defendiendo el ingreso de la confederación en la Internacional Comunista.

A partir del mes de julio de 1923, inmediatamente después de finalizado el II Congreso del PCE y antes del golpe de Primo, Joaquín Maurín ya había iniciado su colaboración con *La Correspondance Internationale* (Inprecor), un órgano de la Komintern. De hecho, las relaciones entre el grupo de Maurín y el PCE se estrecharon orgánicamente, y a partir de ese momento se incrementaron las colaboraciones de destacados miembros del partido en *La Batalla*. Ramón Merino Gracia, desde la cárcel Modelo de Barcelona, había iniciado a principios de mayo una serie de artículos de propaganda y divulgación para favorecer la creación e implantación del Partido Comunista en Cataluña.

En esta rápida evolución de ese grupo de sindicalistas catalanes hacia el comunismo hemos de destacar el viaje que efectuó en 1924 una delegación de las minorías sindicalistas de oposición dentro de la UGT y la CNT, a Moscú, para asistir al III Congreso de la Internacional Sindical Roja (Profintern) y al V Congreso de la Komintern. Desde el mes de agosto —fecha del regreso de la delegación— se iniciaron ya los trámites definitivos para estructurar y organizar la Federación Comunista Catalano-Balear, que será uno de los frentes de crítica a la dirección del partido.

En el otoño del 24 el grupo sindicalista de *La Batalla* entró a formar parte del Partido Comunista de España. Su incorporación como portavoz de los Comités Sindicalistas Revolucionarios proporcionó a la organización una

cierta implantación en Cataluña, región donde el partido prácticamente no tenía ninguna presencia, así como un núcleo de experimentados dirigentes, forjados en el estudio y en la lucha sindical, como eran Maurín, Nin, etc., aunque también supuso un problema para la dirección, ya que a través de Bilbao, y sobre todo de Barcelona, —precisamente los lugares donde el partido tenía alguna incidencia— arreciaron las críticas contra la pasividad del Comité Central.

En esta situación se produjo una intervención del delegado de la Internacional en España por aquellas fechas, el francés Jacques Doriot, que pretendía que el PCE llevase a cabo una amplia e inmediata movilización contra la guerra de Marruecos, plan imposible de ejecutar por las fuerzas con las que entonces contaba la sección española. El Comité Central convocó una Conferencia nacional para el mes de noviembre en Madrid, al objeto de oponerse a lo propuesto por Doriot. Pero esta convocatoria fue aprovechada de modo oportunista por los críticos con la dirección. La mayoría de los delegados aceptaron llevar adelante la campaña, más como una forma de desautorizar a la dirección que por convencimiento en un plan de trabajo que, por inviable, nunca llegaría a realizarse. El Secretario General, César Rodríguez González, y la mayoría del Comité Central (Lamoneda, Rodríguez Vega, Torralba Beci, etc., casi todos procedentes del PCOE) presentaron su dimisión, y muchos de ellos, con el tiempo, terminaron por reintegrarse al PSOE.

Así, de esa Conferencia, surgió un nuevo Comité Ejecutivo, formado por representantes de las tres Federaciones más importantes: Maurín (Cataluña), Martín Sastre (Vizcaya) y González Canet (Levante). Lo primero que hizo la nueva dirección fue publicar un periódico titulado *Vanguardia*, que pretendía romper con la pasividad adoptada hasta entonces frente a la dictadura. Ante las críticas vertidas en su único número por *Vanguardia* la respuesta de Primo de Rivera no se hizo esperar. Pocos días después de la Conferencia, Sastre y Canet fueron detenidos en Madrid, hallándoseles la documentación de los acuerdos tomados.

Este cerco policial se iba a convertir en una constante en la historia de la organización que derivó en otra: la estrecha relación por la supervivencia que el PCE mantendrá, durante décadas, con el Partido Comunista Francés, el partido hermano del país vecino. Antes del golpe militar ya se habían tenido que exiliar algunos miembros del PCE por sus actividades antimilita-

rístas. Estos exiliados, a principios de 1925, constituyeron un Grupo Comunista Español en París, que actuaba en estrecha vinculación con el Partido Comunista Francés. Gabriel León Trilla, Julián Gómez García (Gorkín), Luis Pórtela y José Bullejos —que había viajado a París a mediados de 1924— eran los miembros más destacados de este grupo, y a partir de ellos se constituiría una nueva dirección del partido en el exilio.

El primer partido comunista en notar las consecuencias de la bolchevización estaba siendo el francés, en el que se apoyaban los comunistas españoles en el país vecino. Un amplio engranaje había comenzado a funcionar gracias al decreto surgido del V Congreso de la Internacional. En la práctica, la bolchevización iba a suponer la entrega del control de los partidos a aquellos miembros que hubieran demostrado una fidelidad fuera de toda duda. Por eso, Alfred Rosmer, Pierre Monatte y Boris Souvarine, tres de los dirigentes más importantes del PCF, terminaron siendo expulsados del partido, acusados de oposicionistas partidarios de Trotsky.

Aunque Trotsky no tenía aún seguidores declarados de su programa político en España, lo que estaba ocurriendo en el PCF iba a influir en el PCE, dado el ascendiente que el partido galo tenía sobre el español en el momento en el que se iba a resolver quien ocupaba la secretaría general. Así, bajo los auspicios de la bolchevización se decidió una nueva dirección del Partido Comunista de España.

Bullejos, que había marchado a la URSS a fines de octubre de 1924, inició los primeros contactos cerca del Comité Ejecutivo de la Internacional y, a principios de marzo de 1925, Gorkín y Jesús Ibáñez emprendieron también viaje hacia Moscú para zanjar definitivamente el problema de la dirección del PCE. Lo cierto es que el ejecutivo de la IC acordó constituir una comisión para abordar la cuestión. Esta comisión estuvo formada por Jules Humbert-Droz, secretario general para los países latinos; Lozovski y Andreu Nin como secretarios de la Internacional Sindical Roja; Semard del PCF; Antonio Gramsci y Verti del PC italiano; Almanza del PC mexicano; Smeral del PC checoeslovaco; Maslow del PC alemán y Piatnisky por el ejecutivo de la Internacional. La representación española estaba compuesta por Bullejos, Ibáñez y Gorkín.

Bullejos consiguió la confianza de los dirigentes comunistas internacionales, por eso, cuando volvió a París con Gorkín e Ibáñez, pudo presentarse

con la credencial de poseer plenos poderes otorgados por la Komintern. A los pocos días del regreso de la delegación, se celebró cerca de la capital francesa una Conferencia Nacional del PCE que confirmó una nueva dirección. José Bullejos sería el Secretario General, Gabriel León Trilla el secretario de agitación y propaganda, y Luis Pórtela el secretario de organización. Juan Andrade fue ratificado en el cargo de director de *La Antorcha*. Por primera vez el partido conformaba una dirección más o menos estable, que duró desde 1925 hasta 1932.

Sólo a través de la correspondencia con los dirigentes detenidos y el núcleo comunista radicado en París, se mantenía el contacto entre los dispersos grupos de comunistas del interior. En esta época, la actividad del partido se limitaba a enviar exagerados y entusiásticos informes al Comité Ejecutivo de la IC, y a conspirar desde la capital francesa, donde estaban refugiados distintos sectores de oposición a la dictadura.

La política desplegada por esta nueva dirección tuvo mucho de aventurerismo político, al barajar un posible poyo a Abd-el-Krim, que nunca se materializó, o al secundar los planes de Francesc Maciá y su partido, Estat Catalá, para invadir Cataluña por Prats de Molló. Idea esta última fracasada de antemano, dada la desorganización del «Comité Revolucionario» improvisado en París y formado en el verano de 1925, por Maciá y Ventura Gassol (Estat Catalá), Vidiella (CNT) y Bullejos (PCE).

Con todo, el «Comité» recabó ayuda a los soviéticos y éstos accedieron a recibir a Maciá. En octubre de 1925, Francesc Macià y Josep Carner marcharon a la URSS con José Bullejos, para entrevistarse con los dirigentes de Internacional Comunista. Por mediación de Andreu Nin consiguieron entrar en contacto con Buharin y Zinóviev, pero el descabellado proyecto de invasión no contó con apoyo soviético. No obstante, cuando la intentona de invasión por el Prats de Mollo terminó en fracaso, los catalanes residenciados en Bélgica no fueron olvidados por el Socorro Rojo Internacional.

El nuevo equipo dirigente del PCE fue confirmado por la Internacional después de un viaje que Trilla hizo a Moscú, en enero de 1926, para abordar la necesidad de trasladar la dirección al interior. Con el mismo objetivo, la Komintern envió a Nin a París —también en enero de 1926— donde se incorporó al secretariado del partido, pero descubierto enseguida por la po-

licía francesa, fue encarcelado en La Santé parisina, condenado a un mes de cárcel y expulsado de Francia.

En diciembre de 1926, se reunió en Burdeos el Comité Central, que reorganizó el Comité Ejecutivo del PCE. Pórtela, que tenía reservas ante las tácticas de Bullejos, fue sustituido por González Canet (que se hacía llamar Martín Zalacaín), y se les agregaron Méndez y Daniel Martín, de Bilbao, que vinieron a reforzar la posición de Bullejos. Poco tiempo después de estos hechos, una parte del nuevo Comité Ejecutivo se trasladó a España fijando su residencia en Bilbao. Jesús Hernández y Agapito García Atadell se encargaron de una pequeña imprenta clandestina, aunque *La Antorcha* seguía todavía publicándose legalmente en Madrid.

Las circunstancias ofrecían a Bullejos una autoridad y un poder que enseguida se reflejaron en una política de expulsiones, amparada por la consigna de la bolchevización. El nuevo secretario pretendía imponer a las docenas de militantes que había en España, tareas que superaban sus fuerzas y posibilidades, y el incumplimiento de las mismas sirvió como pretexto para que la dirección emprendiese, a principios de 1926, un «saneamiento» del partido, apoyándose en una Resolución del Comité Ejecutivo contra «la política de destrucción de la derecha y por el establecimiento de la disciplina en el Partido».[13] La campaña de depuración, que se prolongó hasta 1927, se tradujo en la expulsión del antiguo Secretario General César Rodríguez González, y de otros viejos militantes como Vicente Calzada, Eduardo Torralba Beci, José Rojas, Evaristo Gil, José Baena y María Mayorga, so pretexto de que no se sometían a la disciplina y se oponían a realizar «el trabajo del partido».

Uno de los primeros en criticar esa ordalía fue Juan Andrade, que seguía en el interior editando *La Antorcha*, y que años más tarde relataría: «Desde que se implantó el Comité Ejecutivo en París…, yo había estado en constante discrepancia con él, porque ordenaba actuaciones que eran completamente insensatas dada la situación real del partido. Indicaban también que había que dar un carácter más revolucionario a *La Antorcha*, cuando todas las semanas para que saliera el número yo tenía que hacer ocho páginas porque inexorablemente la censura ponía el estigma rojo por lo menos sobre tres. Y estaba absolutamente prohibido, bajo amenaza de suspensión, publicar espacios blancos»[14]

La negativa de Andrade a publicar en el periódico una lista de expulsiones le valió su relevo en la dirección, siendo substituido oficialmente por Oscar Pérez Solís —que aún estaba en la cárcel— y en la práctica por Vicente Arroyo.

A finales de 1926, la dirección del Partido lanzó desde *La Antorcha*, una crítica muy dura contra el Comité regional de Cataluña, que indicaba como las viejas tensiones seguían latentes. Ese mismo año Pórtela había penetrado en España para contactar con núcleos de militares que conspiraban contra Primo de Rivera, pero ninguna acción positiva resultó de estos contactos. A su regreso a París, Pórtela fue sustituido por González Canet en la secretaría de organización y a partir de entonces, Pórtela, uno de los fundadores del PC Español, se mantuvo alejado del partido, integrándose más adelante en el POUM.

Así, el año 26 estaba acabando con una polémica abierta entre los dirigentes más significados, con la expulsión de numerosos afiliados y con un Comité Ejecutivo que, a pesar de todo, contaba con la aprobación de la Internacional. El PCE estaba una vez más en crisis, crisis evidente de dirección y la no menos evidente de efectivos. En aquellos momentos la cifra de afiliados, según García Palacios dirigente de las Juventudes, no llegaba a los 500 miembros, aunque Bullejos la cifraba en 2565 militantes. Y fue entonces cuando comenzó a aflorar una discrepancia entre la dirección y la Internacional.

Esa discrepancia tenía su origen en una propuesta del dictador. Primo de Rivera quería crear una Asamblea Consultiva con miembros elegidos por los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, y distintas instancias, que pretendía ser la expresión de un modelo de representación en la línea del corporativismo fascista italiano. La Internacional, guiada por la consigna leninista de que se debía aprovechar cualquier resquicio legal para propagar la política del partido, consideraba que el PCE tenía que participar en esa farsa de elecciones, pero la dirección española se plantó.

Algunos autores[15] han pretendido relacionar esa postura de la Internacional con un contrato para el suministro de petróleo por parte de la URSS que se estaba negociando en aquellos momentos. La dictadura consideraba el petróleo un recurso estratégico y decidió nacionalizar la industria petrolífera expropiando con indemnización a las empresas extranjeras, la Standard

Oil y la Shell. Para ello creó una empresa pública CAMPSA, que debía administrar el nuevo monopolio petrolero. A las compañías extranjeras que fueron expulsadas del mercado español se les ofrecieron generosas compensaciones, pero aun así, sir Henry Detterding, presidente de la Shell, amenazó en el sentido de que en dos o tres años España rogaría de rodillas el suministro de crudo, lo que no ocurrió al firmarse con la Unión Soviética un acuerdo para el aprovisionamiento de petróleo a nuestro país. La dictadura de Primo de Rivera estaba más interesada que la URSS en firmar ese contrato y la estrategia de la Komintern tenía su origen más en la miopía política sobre la situación española que en el interés mercantil.

En noviembre de 1926 viajaron a Moscú José Bullejos y Luis García Palacios, —que había reorganizado la Federación de Juventudes Comunistas— para participar en el VII Pleno Ampliado del Comité Ejecutivo de la IC (diciembre de 1926). En una reunión que mantuvo la delegación española con una comisión internacional que presidía Humbert-Droz, se tocaron distintos temas, pero los testimonios dados tiempo después por los dos españoles no coinciden en absoluto. Mientras Bullejos habla de las vicisitudes del VII Pleno Ampliado en el que Trotsky y Zinóviev serían expulsados de la IC, y dedica un solo párrafo a poner de relieve sus discrepancias sobre la participación del PCE en la futura Asamblea Nacional Consultiva, García Palacios —que refiere su experiencia en 1931, cuando formaba parte de la oposición trotskista enfrentada al PCE, que aún dirigía Bullejos— denuncia las maniobras de éste ante la comisión de la Internacional para sortear el problema de la Asamblea Consultiva.

Lo cierto es que en enero de 1927, la Internacional elaboró una resolución en la que condenaba la política seguida por Bullejos y acordó que todos los militantes que habían sido excluidos podían regresar al partido si así lo manifestaban, censurando en cierto modo a la dirección del PCE. Pero también, y consecuente con su análisis, la Komintern envió a España un delegado, —el comunista polaco Valetzky, realmente Henryk Waleckí— para que convenciera a los comunistas españoles de la necesidad de participar en la Asamblea de Primo de Rivera.

Para debatir la cuestión se reunió clandestinamente en Durango el pleno del Comité Central del PCE los días 3 y 4 de junio de 1927. La Internacional había elaborado una resolución en la que instaba al partido a colaborar en el proyecto del dictador, por cuanto «esta línea, que corresponde a la tradi-

ción bolchevique y a la práctica del partido comunista ruso, es la única que se adapta a la situación actual de España y del Partido Comunista Español».[16] El Pleno de Durango —que por primera vez en tres años agrupaba a las siete federaciones regionales de que se componía entonces la organización, incluyendo las de Cataluña y Levante— rechazó por unanimidad la resolución de la Internacional, y aprobó una política de abstención electoral que posibilitase una amplia campaña de agitación y propaganda.

Esta campaña por los derechos inmediatos de los obreros, ligada con la campaña general contra la dictadura y la monarquía, por el abandono de Marruecos, por el derecho de Cataluña y Vizcaya a la autodeterminación, y por la constitución de una República federativa popular sobre la base de la representación de las masas trabajadoras, fue aprobada como la línea de actuación del partido.

En octubre del 27 con la participación activa del PCE, tuvo lugar una huelga general en Vizcaya el mismo día de la inauguración de la Asamblea Nacional Consultiva. A las reivindicaciones laborales, los comunistas consiguieron añadir la protesta contra la Asamblea y la dictadura. También fue importante la participación comunista en la huelga de la minería asturiana, en protesta contra la prolongación de la jornada laboral y en demanda de aumentos salariales. En estas luchas el partido proporcionó, en la medida de sus fuerzas, cuadros combativos. La huelga de Asturias duró cuarenta días y con la represión desencadenada se consideró prudente organizar un Comité Ejecutivo suplente, en el cual hizo su primera aparición el sevillano Adame.

1928 y 1929, fueron dos años de represión y desorganización interna y el Comité Ejecutivo del Partido tuvo que reestructurarse de nuevo en París, con Vicente Arroyo como único miembro del PCE y dos delegados del Partido Comunista Francés: Duclos y Rabaté. A pesar de semejante situación se celebró en la capital francesa, durante el mes de agosto de 1929, el III Congreso del PCE. La representación de las federaciones fue bastante escasa, pues muchos delegados, entre ellos una militante vasca conocida como La Pasionaria, no pudieron atravesar la frontera.

Por lo demás, el Congreso ratificó las orientaciones ultraizquierdistas del VI Congreso de la IC, en un momento en que no había en España ni quinientos afiliados, y cuando el PCE estaba dirigido directamente por delega-

dos de la Internacional. Este escenario llevó a la federación Comunista Catalano-Balear, juntamente con algunos delegados del País Valenciano, a dar la batalla definitiva contra la dirección bullejista.

Bullejos seguía empeñado en marginar a militantes de valía (Maurín, Pórtela…) porque no encajaban con sus métodos. El propio Maurín —que salió de la cárcel a finales de 1927, después de haber permanecido allí tres años— fue acusado por la dirección del PCE de confidente de la policía, y se solicitó su expulsión. Tras reclamar a la comisión de garantías de la Internacional Maurín quedo exonerado y *La Correspondance Internationale* publicó una nota que no dejaba dudas sobre el asunto.

Maurín no había perdido la esperanza de modificar la situación del partido desde el interior. Pero algunos compañeros suyos en Barcelona, especialmente Víctor Colomé, un maestro de Lérida, habían perdido ya esta esperanza y se separaron de la federación Catalano-Balear. Se pusieron en contacto con grupos dispersos de comunistas catalanistas y con ellos formaron el Partit Comunista Catalá, que comenzó a actuar en 1928, después de aprobar su programa en una reunión clandestina celebrada en el depósito ferroviario de Lérida. El Partit Comunista Catalá no se afilió a la Komintern y decidió que si bien defendería a la URSS, no aceptaría sus órdenes políticas ni renunciaría a criticar las decisiones que le parecieran equivocadas. Al cabo de unos meses, este partido, a pesar de ser clandestino, tenía ya unos 250 afiliados, más que la Federación Catalano-Balear del PCE. La independencia con respecto a la Internacional no le impedía al nuevo partido aprovechar la difusa simpatía por el comunismo que había en el país y que las absurdas consignas de Moscú impedían que capitalizara el PCE.

Maurín estaba convencido que la crisis no era solo una cuestión de personalidades o de equipos dirigentes, si no que era un problema político de adecuar la estrategia y el programa a la realidad española, por eso la Federación Catalano-Balear hizo llegar al III Congreso del PCE su análisis de la situación. Pero de entrada Maurín —que residía en Francia desde que salió de la cárcel— y Pere Bonet no fueron autorizados por la dirección del partido a participar en el Congreso como representantes de la Federación Catalano-Balear, alegando una cuestión estatuaria según la cual Maurín, por el hecho de residir en París, era miembro del Partido Comunista Francés y no del PCE. A pesar de todo, parece que la Federación Catalana pudo presentar al Congreso sus tesis en las que exponía que la revolución que tendría lugar

en España sería democrática y que consiguientemente la única consigna válida en ese momento era la de República Federal Democrática.

Finalmente el Congreso, con pocos asistentes y la presencia del representante de la Komintern, Ruggero Grieco «Garlandi», tuvo lugar en la capital francesa del 6 al 10 de agosto de 1929. Era el Congreso de un partido que de cinco mil militantes en 1923, había pasado a setecientos setenta, y en el que, además, sólo la mitad pagaba las cotizaciones.

Bajo las presiones del delegado de la Internacional, el Congreso rechazó por derechista la tesis de los catalanes y aprobó la que definía el próximo cambio que se avecinaba en España como «dictadura democrática de obreros y campesinos». La revolución por venir sería la «democrático-burguesa», de lo que se deducía que, para los comunistas españoles, la España de 1929 era una sociedad feudal. De hecho, era la Komintern quien, haciendo alarde de un desconocimiento mayúsculo de la realidad española, lo creía así.[16] Partiendo de esto, se argumentaba que la burguesía, ante el temor a una revolución proletaria, no podía llevar a cabo su propia revolución que aún se consideraba pendiente. Sólo el proletariado podía dirigir de forma consecuente esa revolución democrático-burguesa, y los instrumentos tácticos para alcanzarla eran la alianza obrero-campesina, los soviets, y el gobierno obrero y campesino. La Komintern, y con ella el PCE de Bullejos, renunciaban a darse cuenta del arraigo político que tenía el extendido sentimiento republicano popular contra Primo de Rivera, prefiriendo encerrarse en la fórmula marcada en su último Congreso por la Internacional.

La reseña del congreso de París escrita por «Garlandi» incidía en el agravamiento de la situación de la dictadura y en la necesidad de un PCE bolchevizado, en el cual todos habían cometido errores por su propensión a la democracia. De modo particular, la alusión, iba dirigida contra Maurín y sus tesis: «Nuestros valerosos amigos de Cataluña, cuyo entusiasmo revolucionario resulta innegable, defendían en el congreso la consigna de Federación Republicana Democrática. Los obreros españoles deberían en consecuencia luchar por la República reaccionaria (¡porque la República democrática de la burguesía es la reacción, camaradas españoles!)»[18]

Maurín, conjuntamente con la Federación Comunista Catalano-Balear, seguirá durante casi dos años más en su lucha para desplazar al grupo dirigente, contando, como lo había hecho desde el primer momento, con que

la Internacional Comunista atendería sus razones. En estos momentos, sin embargo, la situación a la que había llegado la Internacional ya no permitía veleidades democráticas en sus secciones nacionales. A Maurín le costará entender esto, como le costará abandonar la Internacional, a pesar de que muy pronto iba a ser acusado de trotskista.

Algunos meses después del III Congreso del Partido Comunista de España, el rey obligó a Primo de Rivera a presentar la dimisión, sustituyéndolo el general Dámaso Berenguer, con la misión de restablecer la Constitución y preparar elecciones generales para constituir un nuevo Parlamento.

Como había ocurrido con el golpe de Estado en 1923 la dirección del PCE se vio nuevamente sorprendida por la caída del dictador en enero de 1930. Ni en las semanas que precedieron al hecho, ni en las que le siguieron, el PCE hizo acto de presencia. El Secretario del partido, Arroyo, sostuvo, en un artículo publicado en la prensa oficial, que la sustitución de Primo por Berenguer carecía de importancia... El problema era que la Komintern padecía de la misma miopía respecto a la realidad de nuestro país. Manuilsky informó al ejecutivo de la Internacional que «los movimientos de este tipo (la caída de la dictadura) pasan por la pantalla de la historia como meros incidentes y no dejan huellas profundas en las masas trabajadoras... Una sola huelga… puede llegar a tener mayor importancia que este género de revolución a la española»[19]

La amnistía que decretó el nuevo Gobierno dejó en libertad a Bullejos que pudo reunirse en Bilbao con Arroyo, llegado de París en compañía del francés Claude Rabaté y de «Federico», —que posiblemente fuera el suizo-aleman Sigi Bamatter, o el alemán Philipp Dengel—. Como los delegados de la Komintern y los españoles veían la situación de modo distinto, se decidió convocar una conferencia nacional, que se llamó Conferencia de Pamplona, pero tuvo lugar en marzo de 1930 en Dos Caminos, cerca de Bilbao.

Bullejos afirmó que asistieron delegados de todas las federaciones, Maurín aseguró que la Federación Catalano-Balear no envió ningún delegado, porque se consideraba desligada del PCE, y que Bullejos atribuyó esta delegación a algún amigo suyo.

En la Conferencia se puso de manifiesto que el grupo dirigente de Bullejos no aceptaba el dictamen elaborado por la Internacional en lo concerniente a España. La dirección del PCE admitía la consigna «dictadura

democrática de los obreros y de los campesinos», pero según la Komintern se situaba involuntariamente en el terreno de las «ilusiones democráticas» al pedir la amnistía, la legalización del PCE, la libertad de prensa, los derechos de reunión, manifestación y huelga, y los derechos cívicos y políticos para mujeres y soldados. Nada de eso encajaba con el supuesto de que con la burguesía española era imposible un régimen de democracia formal.

Otra cuestión también polémica fue la resolución sobre actuación sindical. La política de «clase contra clase» y de «frente único por la base» del VI Congreso de la IC pronto se concretó en la creación de nuevos sindicatos controlados directamente por los comunistas. Esta política, aplicada por la Profintern (Internacional Sindical Roja), que proponía formar una Confederación del Trabajo Unitaria, a través de un Comité para la Reconstrucción de la CNT, chocó con la oposición de las delegaciones del partido de Andalucía, Cataluña y Levante.

Los resultados de la Conferencia no gustaron al ejecutivo de la Internacional, ni al secretariado romano, que era como se llamaba ahora al antiguo secretariado latino encargado de Italia y España. Según Moscú el PCE no se hallaba completamente bolchevizado, y llamó a Bullejos y Arroyo a Berlín, donde se encontraba la oficina europea de la Komintern. Allí el búlgaro Georgi Dimitrov, jefe de la oficina, les reclamó que cumplieran con la decisión de la Profintern sobre política sindical e impulsaran la creación de la CGTU.

En la conferencia de Pamplona-Bilbao se había convenido que se debía intentar reconstruir la CNT «sobre la base de la más amplia democracia sindical». Pero después del viaje a Berlín se decidió que un sindicato controlado por los comunistas, —tarea que fue asignada a los obreros portuarios de Sevilla— convocase por propia iniciativa una «conferencia nacional de todos los sindicatos partidarios de reconstruir la CNT». La maniobra tuvo resultados limitados, por cuanto la federación local sevillana de la CNT expulsó a los sindicatos reconstructores, y aunque éstos llegaron a reunirse la CNT siguió expulsando sistemáticamente de sus filas a cuantos pactaban con los comunistas.

Por último, la Conferencia de Pamplona procedió al nombramiento de una dirección que seguía encabezada por Bullejos, y que mantuvo su cohesión durante dos años y medio más. El Comité Ejecutivo elegido se com-

ponía de Bullejos como Secretario General; José Silva, secretario de organización; Manuel Adame, secretario sindical; Vicente Arroyo, secretario de agitación y propaganda, y en otros secretariados, figuraban Trilla, Etelvino Vega, Luis Arrarás y Jesús Hernández. Dolores Ibárruri, La Pasionaria, delegada de Vizcaya, fue designada miembro del Comité Central, y se decidió que el Comité Ejecutivo tuviera su sede en Madrid. Los militantes se dieron cuenta en seguida de quiénes dirigían realmente el partido, y por eso hablaban, siguiendo la jerga rusa, de la troika Bullejos-Trilla-Adame.

Otro de los efectos de la conferencia de Pamplona-Bilbao fue consagrar la definitiva separación de la Federación Catalano-Balear, a la que siguieron algunos miembros destacados de la Federación de Valencia y más tarde la agrupación de Madrid.

Maurín había regresado de París y vuelto a publicar *La Batalla*. La troika le exigió una autocrítica y Maurín se negó. La Federación Catalano-Balear se solidarizó con él y fue expulsada. Pero Maurín siguió enviando sus informes a Moscú; no había perdido la esperanza de que la Komintern pusiera orden en el PCE. Hasta julio de 1931 Moscú no confirmó su expulsión (por «liberalismo» y «menchevismo»), cuando ya la Federación se había fusionado con el Partit Comunista Catalá constituyendo en marzo de 1931, el Bloc Obrer i Camperol del cual sería Secretario General Joaquín Maurín.

Las clases dominantes, alarmadas por la crisis económica de 1929 y por el miedo al vacío de poder ocasionado por la inconsistencia de la dictadura, buscaban ya soluciones de recambio para evitar que la situación pudiera desembocar en una crisis revolucionaria. Mientras la presión de las luchas obreras y populares iba en aumento, la pequeña burguesía, tanto la del centro como la de las nacionalidades periféricas, se reorganizaba rápidamente bajo la bandera republicana. Numerosas huelgas se producían en las zonas industriales, y las ideas republicanas calaban hondamente entre las masas populares, aunque de una manera confusa, pues para ellas «República» venía a significar, más que una forma de gobierno democrático-burguesa, una vaga promesa de redención social. El país estaba en ebullición y el cambio parecía inminente.

El crecimiento del movimiento republicano preocupaba a la organización comunista, que trató de hacerle frente. En previsión de acontecimientos futuros los dirigentes del PCE recordaban a todas las federaciones que debían

abstenerse de aceptar cualquier compromiso con los republicanos y fuerzas de izquierda, bajo pena de expulsión, invocando las decisiones del III Congreso y de la Conferencia de Pamplona, que ya había anticipado esta postura: «Nosotros no haremos ningún pacto con ningún Partido burgués, a menos que éstos acepten íntegramente nuestras consignas de Gobierno Obrero y Campesino de una manera efectiva, para lo cual habían de poner el movimiento bajo nuestra dirección»[20]

Aunque el PCE admitía una diferenciación de clase y objetivos entre monárquicos y republicanos, seguía manteniendo con firmeza su estrategia frente al republicanismo «engañoso». En una resolución del CC reunido en Logroño se decía: «Con más razón que nunca puede afirmarse que el Partido Comunista debe considerar como uno de los principales peligros el nacimiento de cualquier género de ilusiones democráticas en el proletariado»[21]

En vísperas de la caída de la monarquía el PCE se mantuvo al margen del Comité republicano nacido del Pacto de San Sebastián. No obstante, cuando se produjo el movimiento revolucionario de diciembre del 30, el Comité Central envió una circular a los regionales recomendándoles lo secundaran. En Madrid organizó unos grupos armados de pistolas, que tomaron parte con Ramón Franco en la sedición de Cuatro Vientos. Pero las escasas fuerzas del partido, unida al rápido fracaso de la intentona, no permitieron ir más allá.

En febrero de 1931 el Gobierno Berenguer convocó elecciones a Cortes, intentando así apuntalar la tambaleante Monarquía y crear en torno a ella un consenso que pudiera llenar el vacío de poder existente en el país. Toda la oposición republicana, en bloque, propugnó una política abstencionista que haría fracasar la maniobra. En el PCE la convocatoria electoral produjo un conflicto similar al que se había producido en 1927 con ocasión de la convocatoria de elecciones a la Asamblea Consultiva. Los delegados de la IC, sin consultar a nadie, decidieron que el PCE debía presentarse a las elecciones, alegando la estabilidad del régimen monárquico y la necesidad de aprovechar las posibilidades legales. En cambio, Bullejos, que estaba de nuevo en la cárcel, opinaba que debían boicotearse las elecciones y colaborar con la oposición republicana para derrocar la monarquía.

A pesar de la calma aparente, la descomposición del régimen se aceleraba por momentos. El abstencionismo de la oposición republicana obligó al

Gobierno a suspender las elecciones. Cayó el Gobierno Berenguer y le sucedió el del Almirante Aznar. Mientras preparaba nuevas elecciones a Cortes, el Gobierno quiso pulsar el estado de opinión del país convocando elecciones municipales para el 12 de abril de 1931.

El PCE concurrió en solitario y realizó una campaña acorde a sus fuerzas y a la estrategia que defendía. «Los comunistas están contra el movimiento republicano y lo denuncian como un engaño a la clase trabajadora, exhortando a los obreros y campesinos a luchar por su propia República obrera y campesina, por sus propios intereses de clase. Por esta razón no puede haber ninguna alianza ni compromiso entre nosotros y los republicanos. Ellos, los republicanos burgueses, a pesar de su lucha contra la monarquía y las fuerzas más reaccionarias del país, están junto a la monarquía, al otro lado de la barricada, en el campo de los explotadores cuando se trata de combatir a los trabajadores»[22]

La preparación de la campaña electoral de cara a los comicios municipales permitió que el PCE empezara a salir del letargo en que estaba sumido. El partido celebró varios mítines, uno de ellos tuvo lugar el domingo 5 de abril, anterior a la contienda electoral, en el Cinema X de la capital. En él hicieron uso de la palabra Etelvino Vega, secretario político de las Juventudes; Adolfo Gil Chaves y Vicente Arroyo, este último secretario sindical del Comité Central del partido.

En las elecciones el PCE consiguió algunos concejales, destacando el resultado obtenido en Villa de Don Fadrique, de la provincia de Toledo, donde fue elegido un alcalde comunista. También en Andalucía y la zona minera asturiana se eligieron algunas decenas de concejales comunistas. Pero el balance que hizo desde España el delegado de la Komintern Humbert-Droz es un buen resumen del tremendo fracaso de la política que aplicaba un partido que seguía fielmente y en la medida de sus fuerzas la estrategia que le dictaba el ejército de la revolución mundial. «Las elecciones municipales han revelado la extrema debilidad del partido, su completo aislamiento, su mínima influencia sobre las masas… —Decía Humbert-Droz— Los resultados están por debajo de las previsiones más pesimistas. En Barcelona, es una verdadera tragedia. Tenemos 50 militantes para más de 500 centros electorales. Es decir, que sólo un 10% de los locales tenían listas de candidatos comunistas. No hemos recogido ni 100 votos, mientras que los maurinistas, que han hecho una propaganda mucho más intensa que nosotros,

reúnen más de 3000 votos. (...) En Sevilla, donde nuestros camaradas esperaban un mínimo de 2000 a 2500 votos, no tenemos ni 800. En Madrid, donde Bullejos esperaba unos 5000 votos, no tenemos ni 200»[23]

Sin embargo, desde Moscú, se insistía en seguir con la misma estrategia. Del 25 de marzo al 13 de abril de 1931, un día antes de la proclamación de la República en nuestro país, se celebró el XI Pleno de la Komintern, en él, Dimitri Manuilsky, al hacer referencia a España fue explícito y sus palabras no dejaron lugar a las dudas. «Solamente si el Partido Comunista es capaz de desenmascarar la política de traición del republicanismo burgués en España y de sus agentes en el seno de la clase obrera, representados por la socialdemocracia y el anarquismo, si en la lucha por las reivindicaciones de las masas es capaz de destruir las ilusiones republicanas en el seno de éstas, será capaz de transformar el movimiento de las masas en lucha por la destrucción del sistema capitalista»[24]

Nacido por influencia de un hecho externo, aunque de alcance universal, —la Revolución Rusa de 1917— durante los diez primeros años de su historia el PCE se mostró incapaz de analizar la realidad social española y de intervenir eficazmente en la marcha de la lucha de clases del país, pero sobrevivió gracias al esfuerzo de sus militantes y a esa misma realidad social que justificaba su pervivencia. Sin embargo, la década que comenzaba iba a ser crucial en la historia del partido y en la historia de España.

Notas

1.- Nollau, G., (1964): *Las Internacionales*, Caralt, Barcelona, pág. 329.

2 .- Uribe, V. (1959): *Apuntes biográficos*. Archivo Histórico del Partido Co munista de España (AHPCE), Tesis, manuscritos y memorias, 60/5, Praga.

3.- Andrade, J. (1983): *Recuerdos personales*, Ediciones del Serbal, Barcelona, pág. 143.

4.- Castro Delgado, E. (1963): *Hombres made in Moscú*, Caralt, Barcelona, pág. 167.

5 .- Buber-Neumann, M. (1975): *Historia del Komintern. La revolución mundial*, Picazo, Barcelona, pág. 362.

6 .- Citado por Tuñón de Lara, M., "De la Dictadura de Primo de Rivera al Congreso de Sevilla", en la obra colectiva *Para una historia del PCE*. Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid 1980, pág. 109.

7.- *El V congreso de la Internacional Comunista*. Segunda parte (1977), Cuadernos de Pasado y Presente, Siglo XXI, Buenos Aires, págs. 45.

8.- *Ibidem*. págs. 59-60.

9.- Alquezar, R., y Termes, J., (1989): *Historia del socialismo español (1909- 1931)*, Tomo II, Conjunto Editorial, Madrid, pág. 181.

10 .- AA VV (1960): *Historia del Partido Comunista de España*, Éditions Sociales, París, pág. 40

11 .- *La Vanguardia,* 26/XII/1924

12.- Matorras, E. (1935/2011): *El comunismo en España*, ENR, Barcelona, pág. 27.

13 .- La resolución figura como anexo en Pages, P. (1978): *Historia del Par tido Comunista de España. Desde su fundación en abril de 1920 hasta el final de la dictadura de Primo de Rivera, enero de 1930*. Hacer, Barcelona, pág. 144.

14 .-*Ibedem*, pág. 101.

15 .- ALBA, V., (1979): *El Partido Comunista en España*, Planeta, Barcelona, pág. 95.

16 .- BULLEJOS, J., (1972): *La Comintern en España*, Edición del Autor, México, pág. 85.

17 .- En una entrevista que mantuvo Manuilsky con Bullejos en 1931 el ruso reconvino al Secretario General del PCE diciéndole: «Hay más feudalismo en España del que usted cree.»· Cit. en ELORZA, A. y BIZCARRONDO, M., (1999): *Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España 1919-1939*, Planeta, Barcelona, pág. 150.

18 .- *Ibidem*, pág. 63.

19.- MANUILSKY, D. (1930): *La crise économique et l'essor révolutionnaire. Rapport et discours de clôture au Presidium élargi du Comité Exécutif de l'I.C.* Bureau d'eéditions, Paris, pág. 23.

20 .- CRUZ, R., (1987): *El Partido Comunista de España en la II República*, Alianza, Madrid, pág. 116.

21 .- Cit. en ELORZA, A. y BIZCARRONDO, M., pág. 71.

22 .- ESTRUCH, Joan (1978): *Historia del PCE* (1920-1939) El Viejo Topo, Madrid, pág. 64.

23 .- HUMBERT-DROZ, J. (1971): *De Lenine a Staline,* Neuchátel (Suiza), pág. 451.

24 .- Cit. en ELORZA y BIZCARRONDO, pág. 78.

III
El PCE en la República
1931-1936

La proclamación de la República supuso un importante cambio cualitativo en la marcha del PCE. La nueva situación política alivió las duras condiciones represivas impuestas por la dictadura. No obstante, debemos recordar que el régimen republicano no se caracterizó precisamente por garantizar las libertades y lo que hoy entendemos por derechos democráticos. Así pues, la respuesta ante cualquier protesta o movimiento insurreccional siguió siendo muy parecida a la que fuera en tiempos de la monarquía, amparándose en un conjunto de leyes aprobadas por el nuevo régimen: la Ley de Defensa de la República, la Ley de Orden Público, y la Ley de Vagos y Maleantes.

La Ley de Defensa de la República fue aprobada por las Cortes constituyentes para dotar al Gobierno Provisional de un instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia. Al ser una ley que contradecía los derechos fundamentales, se la incluyó expresamente en la disposición transitoria segunda para que pudiera seguir vigente mientras continuaran reunidas las Cortes constituyentes. A la anterior le siguió la Ley de Orden

Público (1933), que posibilitaba la detención en cualquier momento, sin orden judicial ni delito flagrante.

La consideración de vagos, que contemplaba la otra ley mencionada, podía aplicarse a quien careciese de ocupación conocida en el momento de ser detenido. Todos los obreros parados podían ser comprendidos en ella. La cláusula de maleantes era mucho peor. Quedaba incurso en ella todo aquel cuyas actividades, trabajase o no, fuesen consideradas peligrosas por los tribunales especiales. Su eficacia a la hora de perseguir el descontento hizo que permaneciera vigente durante el franquismo.

Los delitos señalados en la Ley de Defensa de la República y en la Ley de Orden Público, como incitación a la rebelión y a la sedición, injurias e insultos graves a la Guardia Civil, a las más altas personalidades del régimen, o la proclamación de la revolución, podían ser atribuidos a las actividades del PCE con enorme facilidad.

Por eso podemos decir que durante el período republicano se sucedieron etapas legales, semilegales y clandestinas en la vida política y organizativa del PCE. El partido debió observar constante prudencia en su trabajo, con objeto de no verse imposibilitado para realizarlo, ya que las autoridades ejercieron una represión continuada contra las tareas que desempeñaban los miembros de la organización.

Desde la proclamación de la República hasta octubre de 1934, el partido fue «tolerado» legalmente, pero se persiguió a sus militantes al realizar alguna actividad considerada «antirrepublicana». Al comenzar el nuevo régimen, las organizaciones locales del partido recibieron órdenes de la dirección de legalizarse ante las nuevas autoridades; podría haber comenzado así una vida legal para el partido, pero la República no cejó en prohibir determinadas cabeceras de periódicos comunistas, multando y procesando a los periodistas por algunos artículos, pero no por otros; deteniendo cuando quería a los vendedores de prensa, entrando en los locales del partido, suspendiendo algunas conferencias, etc., todo ello merced a una legislación que permitía la actividad política mientras no se criticara a la autoridad republicana. Dolores Ibárruri, Matorras, Arroyo, Silva, Adame, Bolívar, etc., sufrieron procesos por sus discursos, que constituían delito republicano: por injurias al jefe del Estado, contra la República, etc.

Desde octubre 1934 hasta las elecciones de febrero de 1936, el PCE pasó a la ilegalidad, y se efectuaron detenciones, particularmente después de la rebelión de Asturias. José Díaz, que era Secretario General fue detenido durante el verano de 1932; Dolores Ibárruri fue también encarcelada de marzo de 1932 a principios de 1933; después volvió a ser detenida en octubre de 1934, y a finales de 1935; solamente será puesta en libertad en vísperas de las elecciones de 1936. Estas persecuciones obligaron a los dirigentes del PCE a cruzar clandestinamente la frontera, en julio de 1935, para asistir al VII Congreso de la Internacional Comunista.

Esta situación, —y la misma dinámica de la lucha de clases— propició que el partido se viera envuelto en conflictos violentos. La represión en los tres primeros años de la República arroja un duro balance. A principios de julio de 1931 estalló una huelga general minera en Asturias; el mismo mes, huelga general en Tetuán y luchas con la fuerza armada en la ciudad de Sevilla. En cada ocasión, el Gobierno republicano empleó la violencia contra los huelguistas. En Asturias, varios de los mineros huelguistas fueron procesados en consejo de guerra, llegándose a pedir penas de muerte. En Tetuán, las fuerzas a las órdenes del general Sanjurjo, el futuro golpista, dispararon sobre la multitud indígena, que pedía igualdad de derechos con los trabajadores españoles. En Sevilla, además de aplicar la ley de fugas a cuatro comunistas en el Parque de María Luisa, el Gobierno ordenó bombardear «Casa Cornelio», una taberna donde las autoridades aseguraban que los comunistas celebraban reuniones, el balance de aquellas jornadas fue de 40 muertos y más de 200 heridos. La autoridad militar, encargada del poder en Sevilla, decía en una proclama: «A fin de que el burgués pacífico no sea sorprendido por la intervención oficial de la fuerza pública, hago saber que esta tiene autorización para disparar sin previo aviso sobre los grupos de cuatro personas o más, si son sospechosas…»[1]

En medio de este ambiente, se siguieron practicando determinadas formas de acción propias de épocas pasadas. El 9 de agosto de 1931, en el marco de un movimiento huelguístico en Vizcaya, que volvía a enfrentar a socialistas y comunistas, Jesús Hernández, junto con José Luis Gallo, Agustín Ibáñez, Ambrosio Arrarás, apodado «Galleguín», y Leandro Carro, penetraron en el «Restaurante Bilbaíno», de la calle de la Somera, donde se reunían con frecuencia los concejales socialistas, produciéndose un enfrentamiento a tiros.

La policía detuvo a Ibáñez, Arrarás y a Dolores Ibárruri, ésta última por haber ocultado en su casa al citado Arrarás, mientras que Jesús Hernández, escapó a Madrid. La dirección condenó el hecho por estar en contra del pistolerismo y a favor de la acción de masas, pero por medio del «aparato ilegal» envió a Hernández a Moscú, donde debía pasar un año, o más si las circunstancias lo hacían preciso, en la Escuela Leninista.

Naturaleza distinta tuvieron los hechos de la Villa de Don Fadrique, en la provincia de Toledo, localidad bajo el cacicazgo, —el 85% de las tierras estaban en manos de 12 propietarios—En julio de 1932, en medio de una huelga de braceros encabezada por el alcalde, militante del PCE al que el Gobierno había destituido, se produjeron enfrentamientos con la Guardia Civil que arrojaron un balance de cuatro muertos, cerca de treinta heridos y más de sesenta detenidos, entre los que estaba el médico Cayetano Bolívar, que un año después sería el primer diputado electo a las Cortes por el PCE.

Aunque no fue la tónica, ni estaba en la línea estratégica del partido, el PCE durante estos años no pudo escapar totalmente de la violencia, su misma participación en Asturias durante la intentona revolucionaria de 1934 lo acredita. Con el avance del fascismo el partido no indujo a enfrentamientos con los pistoleros de las derechas pero intentó organizar su propia defensa.

No se trataba de responder al atentado con el atentado, sino de impulsar el desarrollo de organizaciones de autodefensa, como las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), que dotadas de armas cortas y con una rudimentaria instrucción militar cumplían misiones de protección en manifestaciones y actos de masas. Aunque sus primeros orígenes se sitúan en la primavera de 1933, con una organización todavía muy rudimentaria y minoritaria, no será hasta octubre de 1934 cuando las MAOC se organicen de forma más efectiva. No obstante el propio PCE reconocía que el desarrollo de las MAOC se había hecho «con gran negligencia», y es probable que su organización estuviese territorialmente muy limitada.

Con todo, la República posibilito el crecimiento del PCE. Nada más instaurarse el nuevo régimen las cifras de afiliados aumentaron considerablemente. En mayo de 1931 se contabilizaban unos 3000 adscritos; en junio, eran ya 6000; en agosto ascendían a 7000, y a finales de año, se podía estimar en cerca de 9000. A pesar de rechazar la república burguesa, el partido no

sólo creció en estos meses, sino que multiplicó por cinco o seis el número de sus afiliados. Las razones de este crecimiento podían radicar en el descontento de algunos sectores populares con la política del Gobierno republicano y en el hecho de que la legalidad posibilitaba que muchas simpatías políticas se tradujeran en afiliación.

Sin datos fiables, se puede estimar que el PCE podía llegar a tener a finales de 1932 entre 12 y 15.000 afiliados. En 1934, en un informe librado al VII Congreso de la IC, se daba la cifra de 20.323 miembros, y el Secretario General del partido, José Díaz, la fijaba en 19.200.

A partir de estas fechas, la organización del PCE no hizo sino crecer como nunca lo había hecho. Se nos dice que en febrero de 1936 había 20.000 militantes, y que un mes después había 30.000 más.[2] Era la cifra más alta conseguida hasta entonces por el partido y señalaba la importancia que la organización comunista empezaba a tener en la sociedad española. En torno a julio, en vísperas del golpe fascista, la única información de la que se dispone nos da un total de 83.967 militantes.

Una de las mayores preocupaciones de la dirección del PCE era el reclutamiento masivo de nuevos militantes para poder llegar a constituir un «partido de masas». Sin embargo, sólo hubo dos o tres campañas nacionales de reclutamiento en todo el período republicano y no constituyeron grandes éxitos, a excepción de la llevada a cabo en los primeros meses de 1936.

Si lo comparemos con otras formaciones obreras, el PCE seguía siendo débil, cosa que era reconocida incluso por sus propios dirigentes. Debilidad manifestada sobre todo por la ausencia de una implantación orgánica en la clase obrera sobre la que se sustentaba la ideología del partido. Es cierto que el PCE había dejado de ser una secta política pero no era todavía un partido de masas. Debemos tener en cuenta que el PSOE, en la memoria de su XIII Congreso en 1932, decía contar con 73.133 afiliados, pero a esta cifra se debería sumar la de afiliados al sindicato UGT, que estaba orientado por el partido socialista, y que rondaba el número de 778.599.

La composición social del PCE en estos años la rebela la delegación al IV Congreso de 1932, que puede considerarse representativa del conjunto de la organización. Las filas comunistas se componían de un 77,5% de obreros, 11,7% de empleados y un 8,2% de intelectuales. Sin que podamos precisar que se englobaba bajos los rubros de empleados o intelectuales, o sin

que sepamos a ciencia cierta discernir cuantos obreros agrícolas e industriales englobaba ese 77,5%, junto con otras imprecisiones que los datos que poseemos no nos permiten aclarar.

Analizando la composición de la dirección comunista durante la República, y entendiendo por ésta la que tomaba decisiones a nivel nacional, —pero también la que destacaba en sus respectivas regiones— pueden establecerse ciertas conclusiones. Por ejemplo, que la edad media de sus miembros era de veintinueve años en 1932 y de treinta y cuatro en 1936, lo que suponía la primacía de la juventud sobre los dirigentes «maduros».

Las profesiones de los dirigentes españoles no ofrecen ninguna sorpresa respecto a las del partido en su conjunto, salvo la elevada proporción de profesiones liberales y trabajadores «intelectuales». En el cuadro dirigente la proporción de obreros industriales es la normal (69,8%), lo que no sucede con la presencia de obreros agrícolas (1,9%), que no representa a la gran cantidad de militantes del campo. Al contrario sucede con los intelectuales (18,8%), que no reflejan la escasísima militancia de este tipo en las bases del partido. Cuanto más nos acercamos a la cúspide de la organización, encontramos más «intelectuales».

La procedencia de los nuevos comunistas nos ofrece una proporción muy considerable de afiliados, —y más tarde dirigentes— de origen anarquista, al punto de representar porcentajes similares a los de origen socialista que estaban en la base inicial del partido. Este dato resulta en cierto modo lógico. El antiguo militante anarquista, posicionado en posturas radicales y revolucionarias, se siente atraído por los planteamientos del PCE en aquellos años, mucho más que el militante socialista, deudor de una historia de prácticas reformistas y de continuos enfrentamientos con los comunistas en el mismo campo ideológico.

La organización el partido en el ámbito estatal fue reestructurada en junio de 1931, quedando agrupadas las federaciones en conjuntos más operativos. El resultado definió la existencia de las siguientes federaciones: Andalucía Occidental y Oriental, Levante Norte y Sur, Extremadura, Vasco-Navarra, Astur-Leonesa, Gallega, Baleares, Centro-Castilla y Cataluña.

Agrupando los datos por conjuntos regionales homogéneos destacaba como organización más importante la andaluza, a mucha distancia de las demás, constituyendo casi un tercio del total del partido. Junto a la de Ex-

tremadura representaban el 40,8% a nivel nacional, lo que señala que existía ya antes de la contienda civil una importante presencia del PC en las regiones latifundistas con un elevado contingente de proletariado agrícola.

Pero el núcleo más importante del comunismo meridional radicaba en Sevilla capital, donde los niveles de sindicación alcanzaron cotas bastante elevadas, lo que contribuyó a la creación del mito de «Sevilla la roja» o el «Leningrado español». Esto permitió también visibilizar a la dirección andaluza muy pronto llamada a ocupar puestos relevantes en la organización nacional. Tampoco es casualidad que fuese en una provincia andaluza, Málaga, donde fuera elegido en 1933 el primer diputado comunista, el médico Cayetano Bolívar, en el marco de una alianza electoral.

La franja norte de la Península estaba representada en un 18,2%, si bien de forma desigual: el mayor peso lo ostentaba Asturias, seguida de Galicia, Euskadi y, a mucha distancia, Cantabria. No en balde el norte había sido el principal bastión de la organización comunista en sus orígenes y, junto al núcleo sevillano, su principal vivero de dirigentes (Dolores Ibárruri, Vicente Uribe, Jesús Hernández, Leandro Carro…). Los comunistas controlaron durante mucho tiempo buena parte de las federaciones adheridas a la Casa del Pueblo de Bilbao, y con la República ejercieron gran incidencia sobre la Federación Local de San Sebastián y el sindicato del hierro vizcaíno.

En Asturias, los comunistas, que habían sido casi hegemónicos durante el proceso de escisión tercerista, extendían su influencia a lo largo del eje Gijón-Mieres, es decir, del centro de actividad portuaria a la cuenca minera. Precisamente fue la presencia en este sector la que garantizó una gran relevancia al partido a través del control del Sindicato Único de Mineros (SUM), uno de los bastiones de la organización sindical comunista llamada Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU), de la que hablaremos más adelante.

En Galicia se experimentó un significativo incremento del partido tras el desarrollo de las grandes movilizaciones laborales impulsadas por los grupos sindicales comunistas en los astilleros de Ferrol, en el ferrocarril en Orense y en las industrias conserveras de Vigo.

Levante agrupaba el 13,3% de la militancia. Siendo un terreno menos abonado que otro para la difusión de las ideas comunistas, debido a la generalización de la pequeña propiedad agraria y a un mayor nivel de vida de

la población campesina dedicada a la agricultura intensiva. Algunos observadores detectaron durante el periodo republicano cierta penetración del PC en zonas densamente pobladas que contaban con un sector industrial en desarrollo como Buñol o Elda.

Las dos Castillas aportaban el 9,6%, teniendo que diferenciar entre Castilla la Nueva, más próxima a las características de las regiones meridionales en cuanto a problemática agraria, y la Vieja, en cuyo porcentaje influyó la irradiación de la minería leonesa-palentina y el núcleo ferroviario e industrial de Valladolid. Toledo fue una de las provincias donde el PCE consiguió crear una base destacada antes de la guerra, con cuarenta radios locales y un número de militantes que colocó a la provincia en un lugar señero.

A pesar de ser las dos áreas más importantes del país, Madrid y Cataluña acusaron los vaivenes de las luchas intestinas en el partido durante los primeros años de la República. Madrid contaba con un escaso 7,5% del total de la militancia. En Cataluña solo se contaba con el 4,2% de la fuerza partidaria. Por último, el PCE quedaba relegado a un lugar marginal en ambos archipiélagos y en un Aragón cuya capital, Zaragoza, estaba hegemonizada por el anarcosindicalismo.

De todo ello se concluye que, antes de la guerra civil, el Partido Comunista tenía una mayor implantación en las regiones latifundistas, donde despertaba expectativas de transformación revolucionaria entre el proletariado agrícola; y en el norte-noroeste, donde predominaban los trabajadores de la minería y la siderurgia. Su presencia era considerablemente menor, e incluso inapreciable, en las zonas con una pujante industria ligera y un importante sector terciario (Madrid, Cataluña y Levante) y, sobre todo, donde concurría por el espacio de la izquierda con un Partido Socialista cohesionado y todavía hegemónico, y con un anarcosindicalismo potente y activo.

La estructura organizativa de la labor militante seguía descansando teóricamente en las células. En la fraseología grandilocuente de la época, las células debían ser «el Estado Mayor del proletariado». Los comunistas habían adoptado este modelo por razones prácticas frente a la organización territorial, propia del socialismo y articulada en torno a la Casa del Pueblo. La célula comunista de empresa estaba pensada para mantener la relación orgánica con los militantes en el lugar de trabajo, al margen de que las autoridades decidiesen clausurar los locales sindicales y los centros obreros

donde se reunían las agrupaciones. La Komintern ponía tanto énfasis en esta fórmula que antes de la República, con un partido casi inexistente, ya había enviado a España a Edgar Woog, como instructor para asesorar al partido en la constitución de células de fábrica. Pero el PCE no pudo construir su organización sobre células de empresa y tampoco tuvo implantación suficiente en las grandes fábricas.

La construcción del partido sobre células de empresa requería en primer lugar de un grado de concentración fabril que era raro en nuestro país. Por otra parte, los militantes comunistas debían trabajar como mínimo en grupos de tres o cuatro en las empresas o fábricas de su localidad, pero el proyecto era inviable, por la escasa implantación comunista en los lugares de trabajo. Resulta revelador que en plena guerra civil, en la Standard con 1060 obreros, sólo hubiera 96 militantes comunistas, aunque esta proporción superaba a la que había a comienzos de 1917 en la empresa más importante de Petrogrado, la Putílov, que contaba sólo con 150 bolcheviques, entre sus más de 20.000 empleados.

La escasa implantación de células de empresa se compensaba por las células territoriales o de barriada, siendo los radios locales los que terminaban por articular la labor militante.

El militante medio que componía estas células y radios era una persona emocionalmente entregada a la causa, pero con escasa formación teórica. Ya hemos dicho que ser bolchevique conllevaba una cultura y una moral determinadas. El militante comunista debía ser la persona más honrada y con la conducta más intachable de la sociedad; se le prohibía beber, jugar o apostar. Todo ello porque «el militante que adquiere vicios pierde entusiasmo y reúne todas las condiciones necesarias para transformarse, llegado el caso, en un agente provocador»[3]

Por otro lado, ser comunista implicaba también ser anticlerical y no practicar los ritos de la religión católica. Aunque a veces se bautizaba a los hijos de una manera «bolchevique». Era el bautizo rojo, una ceremonia festiva de exaltación de los valores revolucionarios; una práctica que ya se había dado durante la Revolución Francesa con los bautizos republicanos. A un niño que nació el 7 de noviembre de 1932, para conmemorar el XV aniversario de la Revolución rusa, sus padres le pusieron por nombre «Wadilen» (Wladimir Lenin). También había «confirmaciones rojas», con el cambio de nom-

bre, mediante la simple supresión de una letra: Mateo Martín dirigente del PCE en las Islas Baleares, cambió su nombre por el de «Ateo» Martín.

Estos rituales rebelan el compromiso emocional y el imaginario cultural que primaba entre la militancia, pero también evidencian las carencias teórico-políticas de muchos de estos militantes que se acercaban al partido guiados por sus intereses de clase, pero sustentados más en creencias o imágenes que en consideraciones de racionalidad política. Se podría afirmar que lo que entendían mejor los militantes y lo que sirvió para cohesionar al conjunto del partido era la propaganda sobre la URSS y las realizaciones del Estado soviético. «Rusia» quería decir para ellos gobierno del pueblo y un futuro de bienestar e igualdad.

Sin embargo, era difícil, que los militantes entendieran conceptos como: frente único por la base, soviets, gobierno obrero y campesino y dictadura democrática de los obreros y campesinos. Las escuelas de formación que se proyectaron durante el período republicano no pudieron materializarse, con lo que uno de los mejores mecanismos de «bolchevización» del partido quedó en proyecto.

Ser comunista no era fácil. El comunista militaba en el seno de la empresa, donde su presencia y discurso le exponían al riesgo permanente del despido. Militaba fuera de su tiempo de trabajo: reuniones de célula, pegada de carteles, puerta a puerta, etc. Militaba en el seno de su propia familia, lo que a menudo le acarreaba conflictos y rupturas. Se agotaba «explicando» las consignas venidas de arriba, que le eran dictadas y que en muchos casos no entendía. Sostenía ideas que la mayoría de los que le rodeaban no aprobaban. La pequeña burguesía rechazaba las propuestas de colectivización, mientras que los libertarios le reprochaban defender una sociedad dictatorial y los socialistas la impaciencia revolucionaria, por eso su existencia cotidiana como militante expresaba la totalidad en su compromiso político.

Pero para el conjunto de los militantes el partido constituía sobre todo un modelo de organización —el mejor posible— para realizar el objetivo propuesto; además, conformaba una comunidad de camaradas que estaba por encima de las propias personas que la constituían. Resultaba atractivo para ellos la disciplina y organización imperantes con un solo fin: la eficacia, no sólo con vistas a realizar la revolución, sino para hacer funcionar

la misma organización. Era el ejército de vanguardia en la construcción del futuro.

Es en este período cuando se impone como una sencilla teoría doctrinal el llamado marxismo-leninismo, destinado a dar coherencia teórica, a través de fórmulas simples, a cuestiones políticas complejas. La desviación de estas normas entrañará el error, que deberá ser subsanado, por el que caiga en él, a través de la autocrítica. Este mecanismo de confesión pública del error será uno de los pilares básicos del dogmatismo estalinista.

Entre las famosas autocríticas de dirigentes de la organización durante este período se encuentra la de Miguel Caballero, dentro del proceso de expulsión del grupo bullejista, del que hablaremos. Caballero, en su declaración, afirmaba: «Con mi actitud me coloqué en un todo en el terreno de la contrarrevolución… Yo os pido que me sometáis a cuantas pruebas creáis conveniente; que me hagáis que, prácticamente, demuestre que mi adhesión y acatamiento a la IC es sincera»[4]

Si no había autocrítica, o esta no resultaba satisfactoria, se procedía a la expulsión solemne. Una vez expulsado, el antiguo militante era ante sus camaradas alguien que no merecía ser tratado. Saturnino Barneto iba más lejos cuando hablaba de Adame, expulsado del partido: «Se quejan los traidores de que les hemos quitado el pan, pero aún les queda la vida, y nos la deben»[5]

En el día a día, los militantes comunistas se reunían generalmente en descampados o en cafés urbanos los domingos o días laborables por la noche, y tenían un secretario político al frente, que era el enlace con otras células y con el comité de radio. La dirección del partido se preocupaba de que el trabajo de los militantes de base consistiera en la agitación y la ejecución de las decisiones y consignas del partido, con un énfasis especial en la vinculación con las masas para orientarlas hacia la participación en la vida política a través del partido que era su vanguardia.

La cotidianidad de la militancia en aquella época nos la cuenta un joven afiliado. «Al principio todo fueron reuniones pesadas y poco atrayentes (...), se tomaban medidas de agitación: pintar letreros, pegar carteles, vender la prensa, repartir octavillas, organizar un mitin relámpago a la salida de una fábrica o participar en alguna manifestación (...). Nos reuníamos en una taberna de la calle de Embajadores (...). Había una gran fluctuación de afiliados que constantemente llegaban para desaparecer a los pocos días»[6]

En estas actividades la propaganda a través de la prensa escrita era fundamental, y el PCE de la República alumbró numerosas cabeceras de periódicos. Fueron órganos centrales: *La Bandera Roja*, *Mundo Obrero* (semanario y diario), *Mundo Proletario*, *Mundo Rojo*, *La Palabra*, *Frente Rojo* (semanario y diario), *La Lucha* y *Pueblo*; de todos ellos, los más importantes por su periodicidad y por el momento en que se publicaron, fueron *Mundo Obrero*, *La Lucha* y *Pueblo*.

El proceso de fundación de *Mundo Obrero* —que acabará constituyéndose en el órgano central— se sitúa en 1930, cuando el Comité Ejecutivo, en plena clandestinidad y con media dirección en la cárcel, acuerda solicitar permiso legal para editar *El Comunista*, ya que estaba por resolver el problema legal de la suspensión de *La Antorcha*, último órgano central del partido y propiedad de la Agrupación Comunista Madrileña, entonces al margen del partido oficial. Para el tema financiero, el secretariado resolvió «escribir a «P», (sin duda la Internacional) dándole a conocer la angustiosa situación porque atravesamos a fin de que resuelva rápidamente»[7]

Mundo Obrero no aparecerá regularmente hasta finales de 1930 (13 números desde diciembre hasta finales de julio de 1931), pero pronto tuvo que cambiar de nombre, publicándose desde septiembre de 1931 *Mundo Proletario*, del que aparecieron seis números antes del final de año, ya que, como consecuencia de un nuevo permiso, pudo salir de nuevo *Mundo Obrero*, que se transformó en diario desde el 30 de noviembre hasta el 6 de enero de 1932, momento en el que fue nuevamente suspendido.

La tirada media de *Mundo Obr*ero a principios de 1933 era de 24.000 ejemplares, y la distribución provincial, de 22.000. Las principales ventas correspondían a Sevilla (3464 ejemplares), Madrid (3166), Asturias (2153) y Vizcaya (1639), representando en conjunto el 47,3% del total. Pero esa tirada y la situación financiera por la que atravesaba el periódico hacían que la dirección estuviera preocupada por el futuro de la publicación.

La financiación de la prensa y de todas las demás actividades siguió siendo un problema para el pequeño partido. En 1932, los obreros industriales afiliados a la organización debían cotizar mensualmente una peseta; los obreros agrícolas y mujeres que no ganaran cinco pesetas debían pagar cincuenta céntimos. Pero no se cotizaba regularmente y muchos militantes no pagaban sus cuotas.

En 1932, con unos 12.000 militantes, el PCE pudo recaudar entre 6000 y 9000 pesetas en cotizaciones, mientras que en 1935, con 14.000 militantes, pudo ingresar en este mismo concepto entre 21.000 y 28.000 pesetas. Con estas cantidades mensuales, el partido no podía pagar ni a los miembros de la dirección, ni las multas del periódico, ni los gastos de viajes. *Mundo Obrero* perdía regularmente 10.000 pesetas mensuales. En el período de noviembre de 1932 a junio de 1933, con la publicación de unos 200 números, el partido perdió 80.000 pesetas.

Existían algunas otras fuentes de financiación como las colectas. Fue muy celebrada la que se realizó para salvar *Mundo Obrero*, con un llamamiento, en que, —después de exponer la crítica situación económica de la publicación— se pedía aportaciones para conseguir 14.000 pesetas que se debían reunir en tres días. La suscripción resultó un éxito resonante, alcanzándose la cantidad de 20.000 pesetas. Se dio el caso de formarse «colas» durante bastantes horas en la administración del periódico para entregar donativos.

Pero los gastos de la actividad del partido en conjunto eran muy elevados. Se sabe que el IV Congreso del Partido, celebrado en marzo de 1932, costó 75.000 pesetas y el II Congreso de la UJC, de julio de 1934, según las previsiones de los organizadores, suponía un gasto mínimo de 23.000 pesetas. En 1935, la dirección gastó 439.329 pesetas, 659.400 francos franceses y 1.875 dólares. Todo ello dado en Madrid por diversos conceptos; desde el pago de estancias en la capital a miembros del CC, salarios del personal del aparato, etc., hasta las subvenciones a periódicos como *La Verdad*, de Sevilla. En total suponía, según el propio balance, 769.528 pesetas. Las cantidades que el Comité Ejecutivo envió —girando en dinero— a distintas provincias ascendían a 25.514 pesetas. Sumando las dos cifras globales dan un total de 794.924 pesetas que, teóricamente, fue la cantidad de dinero gastada por el CE en ese año 1935. Esto nos lleva a la conclusión de que buena parte del dinero debía proceder de la Internacional, lo que viene a avalar la cantidad de 45.000 pesetas mensuales que según Matorras remitía mensualmente la Komintern a comienzos de los años 30 para ayudar a la financiación del PCE y de otras organizaciones afines.

Un gasto al que tuvo que hacer frente el partido en la primavera de 1931 fue el costo de las elecciones municipales que el Gobierno había convocado para el 12 de abril y que arrojaron como resultado una victoria aplastante de las candidaturas republicano-socialistas en la mayoría de las ciudades del

país. Fue ese resultado, y no el obtenido por el partido en esos comicios, lo que precipitó una reunión del Buró Político del PCE en la tarde del día siguiente, para tomar posiciones ante los acontecimientos que ya se estaban desarrollando y que presagiaban la inminente proclamación de la República.

Los acuerdos más importantes que se adoptaron fueron: tirar un manifiesto en Madrid abogando por la constitución de soviets, y posicionándose en contra de la República burguesa que ya se columbraba en el horizonte, y hacer un llamamiento a todas las células del partido para que participaran activamente en las manifestaciones callejeras que se produjeran. Se debía evitar a toda costa la marcha de la familia real al extranjero, a fin de que rindiera cuenta de sus actos ante un tribunal popular. Asimismo, se tomó el acuerdo de que José Bullejos saliera tan pronto como fuera posible para Moscú, con objeto de cambiar impresiones con el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista.

Cumpliendo los acuerdos tomados el día anterior por el Buró Político, aproximadamente a las cuatro y media de la tarde del 14 de abril apareció en Madrid una camioneta ocupada por los máximos dirigentes del partido: Bullejos, Vega, Hernández, Dolores Ibárruri… en la que ondeaba una bandera roja con la hoz y el martillo y a un lado iba colocado un busto de Lenin. Lograron organizar una pequeña manifestación, dirigiéndola hacia el Palacio Real, donde Etelvino Vega, con la bandera en la mano y encaramándose en una de las garitas de guardia en la puerta del Príncipe, arengó a la multitud, que le respondió con un cerrado abucheo. Al siguiente día, salió un número extraordinario de *Mundo Obrero*, en el cual con grandes titulares se daban vivas a los soviets y mueras a la República burguesa.

El común de las gentes que manifestaban jubilosamente su alegría por la caída de los Borbones, veían la República que se acababa de proclamar, como una vaga promesa de redención social, y no podían entender que los comunistas la repudiaran, adoptando una posición frente a ella que les colocaba al lado de los monárquicos.

Fue en Sevilla donde más relieve tuvo la presencia del partido en aquellas primeras semanas de la República. La capital andaluza se había convertido en un importante bastión comunista y el 1º de Mayo fue la ocasión para que el PCE organizara en solitario un mitin en el Frontón Betis al que acudieron varios miles de personas, que aprobaron por aclamación un pro-

grama que allí se expuso, y que consistía en una curiosa mezcla de reivindicaciones que iban desde la fijación de un salario mínimo en 10 pesetas para los trabajadores de uno u otro sexo y el subsidio del 75 % del jornal mínimo para los obreros en paro, hasta evacuación de Marruecos o el reconocimiento de la URSS, pasando por el derecho de autodeterminación para Cataluña y las Vascongadas. Ese mismo verano, se produjeron graves sucesos en la capital hispalense, cuando en el mes de julio, en el marco de una huelga general convocada por la muerte de un obrero cervecero se aplicó la ley de fugas a militantes comunistas.

Cuando los dirigentes españoles acudieron a Moscú, en mayo tras la proclamación de la República, fueron objeto de una severa crítica por parte de sus camaradas de la IC. Sin embargo, la posición del partido había sido consecuente con la estrategia oficial, ya que el fin de la Monarquía no podía implicar el aceptar una República burguesa que iba a ser instaurada y mantenida para «abortar la revolución proletaria».[8]

Pero para la Komintern, hicieran lo que hiciesen los comunistas españoles, siempre se equivocaban. Para Manuilsky, que fue quien ofició de censor, quedaba claro que no se podía mostrar complacencia hacia la República, pero no admitía la consigna lanzada por el partido de «¡Abajo la República!», ya que en España quedaban evidentes restos del feudalismo. Los comunistas deberían haber explicado que la República sólo suponía la primera fase de la revolución democrático-burguesa, que sólo culminaría con éxito bajo un gobierno de los obreros y campesinos. La Internacional Comunista calificaba la revolución democrática como tarea estratégica fundamental del momento, y para el partido el 14 de abril debía significar el comienzo de esa revolución, pero al mismo tiempo su negación, al estar dirigida por las mismas clases de antes que se proclamara la República. La República era revolucionaria por haber nacido de la iniciativa popular y contrarrevolucionaria por estar dirigida por la burguesía y sus agentes.

Estas críticas fueron precisadas en una larga carta que Manuilsky envió al PCE después que Bullejos partiera de Moscú. Con fecha 21 de mayo de 1931, se cursó una «Carta abierta del Presidium de la IC», destinada a la dirección del PCE y a toda la organización para explicar el viraje que el partido debía dar. Esa palabra, «viraje», que formaría parte del lenguaje comunista en los primeros años republicanos, quería expresar la voluntad de no volver a realizar la política anterior, pero no cambiando de política, sino aplicándola

debidamente. Realmente, en los documentos, tanto internacionales como nacionales, se siguió insistiendo en el carácter contrarrevolucionario de la República.

Para aplicar correctamente la política de siempre, la circular exponía como tareas principales del momento la conquista de la dirección de las masas, la lucha por las reivindicaciones inmediatas —de carácter eminentemente económico—, la creación del frente único y la unidad sindical por la base, así como la organización de la toma revolucionaria de la tierra.

En junio de 1931, coincidiendo con la llegada de una nueva delegación de la IC a España, se procedió a una reestructuración organizativa del partido que le permitiera hacer frente a la situación de legalidad, e inmediatamente, la actividad del partido se centró en la preparación de las elecciones a Cortes Constituyentes, convocadas por el Gobierno Provisional republicano-socialista.

Siguiendo su táctica anterior, el PCE rechazó cualquier alianza electoral, presentándose en solitario con un programa inspirado en las orientaciones de la Internacional. El número de votos que obtuvo el PCE, según sus propias cuentas, fue de 40.000, cifra calificada por el ejecutivo como de ridícula. Lo que más dolía a los dirigentes españoles era el fracaso en Sevilla, donde se contaba a priori con los votos de los obreros sindicados en la Unión Local, de influencia comunista. Unos días después de los comicios Bullejos señaló que la causa de la derrota estribaba en la persistencia de la confianza de las masas en la república burguesa; los obreros todavía esperaban que las Cortes resolvieran sus problemas y, por tanto, no habían comprendido las consignas del partido. En la prensa, el PCE suavizaría el fracaso electoral afirmando que había obtenido 70.000 votos en toda España.

En 1931 se fueron creando las bases jurídicas del nuevo régimen. A través de las elecciones del 28 de junio salió elegido un Parlamento que abrió sus sesiones el 14 de julio; catorce días después se designó una comisión que debía redactar un proyecto de Constitución que fue aprobada en las Cortes el 9 de diciembre, y tres días más tarde fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, pasando Manuel Azaña a ocupar la Presidencia del Gobierno. Durante ese año y el siguiente se intentaron trazar las líneas fundamentales de las reformas republicanas sobre la cuestión agraria —Decreto de 15 de septiembre de 1932—, la descentralización administrativa y política

del Estado —Estatuto de Cataluña, 9 de septiembre de 1932—, Ejército —Reformas, 16 de junio de 1931—, iglesia —disolución de la Compañía de Jesús, 24 de enero de 1932—, cuestiones laborales —Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo—.

El rechazo de la República por parte del PCE implicaba la crítica feroz a todas sus instituciones y actividades por su carácter «represivo». Los dirigentes del partido no ahorraron esfuerzos en descalificar casi toda la labor de las Cortes Constituyentes negando su carácter democrático; ya que al igual que el Gobierno, las Cortes eran el instrumento legislativo de las clases dominantes para su defensa y contra la revolución en marcha.

No había campo en el que actuase el Gobierno que escapara a la crítica del PCE. Los distintos proyectos de reforma agraria eran, a juicio del partido, progresivamente más conservadores, fruto de la fuerza de las capas más reaccionarias de las clases dominantes. Otra de las reformas fundamentales del primer bienio republicano fue la descentralización administrativa y política del Estado. En el programa de compromiso inicial de las fuerzas republicanas se establecía la necesidad de redactar estatutos de autonomía; el catalán era el más importante y fue el primero en aprobarse. El PCE pensaba y proclamaba que el régimen republicano era un régimen de opresión nacional. España era un estado opresor de colonias como Marruecos y de naciones como Cataluña, Vasconia y Galicia, por eso se opuso ferozmente al Estatuto catalán, por considerarlo una maniobra contra el derecho a la autodeterminación.

Las leyes del Ministerio de Trabajo que afectaban a las relaciones laborales en la industria y en el campo cumplían, según el PCE, la misión de ser el instrumento principal de lucha contra el movimiento revolucionario de masas. Se buscaba con ellas apaciguar la tormenta, dividir y anular a las organizaciones obreras y, sobre todo, consolidar la explotación obrera y campesina de los capitalistas en las relaciones laborales. En concreto, la ley de control obrero elaborada por Largo Caballero consistía ante todo en asegurar la colaboración más estrecha de los obreros con el capital, en vista a aumentar las ganancias de este último.

La cuestión religiosa se abordó en la política comunista de forma secundaria. El partido denunciaba entre otras cosas que se avivara el tema religioso, relegando otros asuntos más importantes. A diferencia de otras

críticas, el partido admitía en este caso que se estaba haciendo una labor reformista por la presión de las masas revolucionarias. Pero los bienes de la Iglesia no habían sido expropiados, como tampoco disueltas todas las órdenes religiosas, y por ello el poder clerical quedaba, a juicio del PCE, intacto.

En cumplimiento a las órdenes de la Internacional la dirección del partido acometió la tarea de alumbrar la unidad sindical por la base. A la Internacional Comunista le interesaba crear en España una Central sindical que estuviera bajo control comunista. Pero hasta el otoño de 1931 no se hizo efectiva la convocatoria de una Conferencia de Unidad Sindical. El PCE debió encargar a la Federación Local de Sociedades Obreras de San Sebastián la preparación de esa conferencia. Este organismo lanzó un llamamiento a todos los sindicatos, exhortándoles a constituir una sola Central sindical. Para llegar a ello se convocaba una Conferencia de Unidad Sindical, a la que podrían asistir todos los sindicatos indistintamente de la UGT o de la CNT y autónomos.

Pero como lo demuestran los sucesivos aplazamientos de la Conferencia, pocos sindicatos colaboraron; el escaso impacto entre las fuerzas de UGT y CNT y la exigua implantación sindical del partido en ambas Centrales, impidió que la Conferencia tuviera resultados importantes. Pese a todo, el día 30 de junio de 1932 tuvo lugar la apertura de la citada Conferencia. A ella asistieron cerca de 350 delegados, representando un total de 280.000 obreros de toda España, según los datos oficiales de los acreditados. La Internacional Sindical Roja, envió para su celebración la cantidad de 25.000 pesetas, —según nos informa Matorras, siempre atento a la cuestión de las subvenciones—. Pero con el dinero llegó la orden de que en el transcurso de la Conferencia había de salir la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU), sindicato comunista similar al ya existente en Francia.

Por eso lo más importante, de este encuentro, fue la constitución de CGTU. Unos días antes de la celebración del cónclave, la dirección del partido recibió una carta de la IC —cuyo texto no se conserva— en la que supuestamente se ordenaba la fundación un nuevo sindicato unitario de filiación comunista. Esta carta influyó decisivamente para que en la misma Conferencia se reunieran privadamente, todos los sindicatos encuadrados en el llamado Comité Nacional de Reconstrucción de la CNT y sindicatos autónomos con simpatías por la Tercera Internacional. En esa reunión, des-

pués de un amplio y movido debate, se dio por constituida la CGTU, justificando tal decisión por la «huida» de los obreros de los sindicatos reformistas de CNT y UGT y por la elevada influencia de la Internacional Sindical Roja, sobre todo en Andalucía. Se nombró también un Comité Nacional Provisional con la misión de que realizara los trabajos precisos para la preparación de un Congreso Nacional de constitución de la CGTU.

Según las propias fuentes del partido, se adhirieron a la nueva central un total de 36.935 afiliados agrupados en 57 sindicatos. Estaba en cabeza, como siempre, Andalucía, abrumadoramente mayoritaria, pero sin los 50.000 afiliados que habían acudido anteriormente a la Conferencia de Unidad Sindical. Por otro lado, Asturias conservaba el Sindicato Único de Mineros. Pero como puede verse por el número de adhesiones, la mayoría de los sindicatos que participaron en la Conferencia no pasaron a pertenecer a la CGTU. Esa cifra global de cerca de 40.000 trabajadores afiliados a la CGTU se mantuvo oficialmente durante bastante tiempo lo que indica la escasa influencia sindical del partido en el conjunto del movimiento obrero.

Entre 1931 y 1932 se produjo una pugna entre algunos miembros de la dirección del partido y delegados de la Komintern. Ya desde 1931, y especialmente tras la vuelta de Bullejos de Moscú, el Comité Ejecutivo del PCE se vio envuelto en disputas verbales con los delegados de la Internacional en España, y el envío de una nueva delegación de la IC, presidida por el alemán Stoeker, agudizó aún más el malestar. El CE del partido, y en su nombre Bullejos, acusaban a la delegación de la Internacional de desarrollar una política a sus espaldas y de entorpecer la labor de la dirección con la finalidad de buscar su liquidación. Algunos dirigentes se sentían «desmoralizados», viéndose desasistidos para la realización de sus gestiones, y en Moscú, Etelvino Vega pronunció una requisitoria implacable contra los delegados de la IC, de los que sólo se salvaba, según él, un tal «Andrés», en realidad un polaco, llamado Adam Landy o Adam Witkowsski.

En contestación a estas críticas, el 3 de enero de 1932, el Buró para Europa Occidental, con Manuilsky y Stepanov como responsables, remitió una nueva carta, —saltando por encima del Comité Central— dirigida en esta ocasión a «todos los miembros del PCE». Pero al mismo tiempo que la enviaba a la dirección, la dio a conocer públicamente por medio de *La Correspondance Internationale*, para que su contenido pudiera llegar a todos los afiliados.

La carta ponía de relieve la incapacidad de la dirección de Bullejos, por sus «tendencias sectarias y métodos de acción anarquistas». La crítica era tan acre que quien mejor la apreció fue la prensa de derechas, lo que obligo a una rectificación, que suavizó las formas, pero que dejo intacta la intención de la misma.

Según la carta, la dirección del partido lo había hecho todo mal. No había sido capaz de prever la revolución democrática, no había apreciado la magnitud de los vestigios de feudalismo en nuestro país, no había dado un tratamiento correcto a las cuestiones agraria y nacional, y había errado en el enfoque sobre el papel de los soviets. La carta, realmente, era un llamamiento implícito a cambiar de dirección. Este golpe contra el grupo de Bullejos se complementó con diversas maniobras realizadas por los delegados de la IC en España con vistas a promover una candidatura que desplazara al grupo dirigente.

Como se estaba preparando la realización del IV Congreso del partido Bullejos fue llamado a Moscú en compañía de Adame y Vega. En la capital soviética se reprodujeron las críticas. A las acusaciones de incomprensión política se unieron ahora las de ser responsables de la falta de crecimiento del partido, su débil intervención en los sindicatos, etc. La conclusión era que «el obstáculo principal para la bolchevización del partido es el mismo Comité Ejecutivo, que no ha comprendido el sentido de nuestro viraje».[9] Hubo un amago de dimisión, pero finalmente Bullejos decidió continuar al frente para no malograr la realización del Congreso.

En este ambiente enrarecido comenzó el IV Congreso del PCE el 17 de marzo de 1932 en Sevilla, celebrando sus sesiones en el palacio de los Estados Unidos de la Exposición Ibero-Americana. Era el primer congreso que el partido celebraba legalmente desde su fundación, y para su organización la Komintern envió la cantidad de 75.000 pesetas, a fin de que se pudieran atender todos los gastos sin escatimar.

Asistieron 257 delegados, representando a 11.756 afiliados de toda España, más 24 delegados en representación de los 4000 militantes de la Federación de Juventudes Comunistas. Participaron también 11 delegados de fábricas, sindicatos, etcétera, con voz pero sin voto, los cuales, a su vez, ostentaban la representación de 100.000 obreros aproximadamente.

No hubo grandes novedades en cuanto a las tesis políticas, que se basaron en la carta del Buró Occidental de la IC. Lo más remarcable fue la iniciativa encaminada a crear una sucursal del partido en Cataluña. La propuesta de fundar el Partit Comunista de Catalunya, perseguía remediar la situación de la organización en este territorio que entonces se reducía a ser «un pequeño grupo sin importancia». Un año después, en marzo de 1933, siguiendo esta estela, aparecerá la publicación *Euskadi Roja*, y en julio se acordará «la fundación de un partido comunista de Vizcaya». Pero el texto del acuerdo de la Comisión Política no mostraba demasiado entusiasmo nacionalista: «No oponerse a la fundación de un partido comunista de Vizcaya, bien entendido que sobre las mismas bases que el Partido Comunista de Cataluña para su integración en el Partido Comunista de España».[10]

En cuanto a las cuestiones sindicales el Congreso de Sevilla ratificó la transformación del Comité de Reconstrucción de la CNT en Comité de Unidad Sindical, con miras a la creación de un nuevo sindicato: la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU); que, como ya sabemos, aún tardaría unos meses en nacer.

En las tesis organizativas se hizo un balance de los resultados obtenidos (de menos de 1000 militantes en 1931 a 10.000 en 1932, la mitad de ellos en Andalucía) y se plantearon una serie de medidas organizativas de cara a la «bolchevización» del partido.

A la hora de elegir nueva dirección no hubo grandes cambios pero en ella quedaron integrados elementos muy críticos con la gestión que se había venido realizando. Este sector, que actuaba alentado por los delegados de la Komintern, consiguió colocar a Manuel Hurtado en un puesto clave como era el de secretario de organización. No obstante, Bullejos continuó siendo Secretario General; también Adame se mantuvo como secretario sindical; José Silva fue elegido secretario de agitación y propaganda, mientras que el secretariado femenino recayó en Dolores Ibárruri. En el Comité Central fueron elegidos, entre otros, Vicente Uribe, Pedro Checa, José Díaz, Rafael Millá, Vicente Arroyo, e Hilario Arlandís. El grupo de Bullejos, aunque seguía ostentando la dirección, quedaba aislado. Trilla permanecía en Moscú y los nuevos miembros del Comité Central eran algunos de sus principales críticos. En este ambiente, Bullejos, Trilla y Adame tomaron la decisión de dimitir; pero después de recibir un telegrama de la IC para que

continuasen en su puesto, y tras considerar un «triunfo» para ellos los resultados del IV Congreso, retiraron la dimisión.

El aviso de que la crisis no había quedado zanjada con el Congreso llegó en abril, cuando en el segundo número de *Bolchevismo*, una revista teórica que había lanzado el partido, Manuel Hurtado, el secretario de organización, hizo suyas una tras otra las críticas formuladas por Manuilsky acerca del mal funcionamiento del partido. Lógicamente, Bullejos se sintió atacado; su desplazamiento y expulsión era sólo cuestión de meses, y el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo serviría de pretexto para precipitarla.

El 10 de agosto, una conspiración de terratenientes y militares dio lugar a la sublevación del general Sanjurjo en Sevilla. Aunque la intentona nació muerta, la reacción de los trabajadores sevillanos fue muy combativa: el PCE y la CNT llamaron a la huelga general y las milicias obreras tuvieron un destacado papel en el aplastamiento del golpe reaccionario.

En respuesta a la intentona de Sanjurjo, Bullejos publicó en *La Palabra*, —periódico que sustituía provisionalmente a *Mundo Obrero* suspendido por orden gubernativa— un manifiesto en el que se exhortaba a oponerse a los intentos contrarrevolucionarios y a defender la República. La consigna fue criticada severamente por algunos miembros de su dirección y por los delegados de la IC, que contaban ya con determinadas simpatías en el seno del Comité Central con el fin de ir preparando el relevo de la secretaria general.

Se acusaba a Bullejos de haber sostenido una posición «oportunista de derecha» al haber lanzado la consigna de «defensa de la República» y no haber orientado al partido y a los obreros directamente a la constitución de soviets. El Secretario General explicó en una reunión posterior que había utilizado esa frase para no alejarse de las masas. El caso es que la consigna de «defensa de la República» sirvió para aumentar más las tensiones y para delimitar los campos, ya que Vega y Adame consideraban justa la proclama hecha por Bullejos el 11 de agosto.

La llegada, la víspera del 10 de agosto, de un nuevo delegado internacional, el argentino Codovilla, agravó aún más las tensiones entre el grupo Bullejos y la Komintern. Codovilla redundó en las críticas a la dirección del PCE por haber sostenido una política oportunista durante los sucesos de Sevilla, e insistió en que «el enemigo más peligroso de la revolución no eran

los monárquicos y reaccionarios, sino el Gobierno de Azaña y el Partido Socialista»[9]

El día 18 de agosto se reunió el Buró Político del partido para nombrar los miembros del mismo que habían de asistir a la reunión del XII Pleno del Comité Ejecutivo de la Internacional, que iba a tener lugar en el mes de septiembre. La delegación de la Komintern, junto con Hurtado y Mije, propusieron que al Pleno no fueran como delegados los mismos que habían acudido en otras ocasiones, o sea Bullejos, Vega y Adame, y consiguieron que el Buró designase a Hurtado y Mije como representantes del partido en el referido Pleno. También se debatió la actitud del partido ante el golpe de Sanjurjo; y la discusión giró sobre la oportunidad de la consigna de «defensa de la República», justificándola unos y criticándola otros. Las críticas debieron ser tan duras que Bullejos, Adame y Vega decidieron ausentarse de la reunión.

No sabemos, por la confusión de las fuentes, si ese mismo día o al siguiente, Codovilla, junto con los otros delegados, presentó una resolución que calificaba al grupo dirigente de «contrarrevolucionario». En esta reunión comenzó a oírse el nombre de Pepe Díaz, y en concreto se resolvió que saliese de la cárcel donde se encontraba mediante el pago de cinco mil pesetas de fianza. Había comenzado el ascenso de este dirigente sevillano a la máxima dirección del partido. Y aunque no hay pruebas de ello —sólo unas frases alusivas en un documento publicado posteriormente—, parece que se tomó también la decisión de separar de todo cargo a los tres dirigentes ausentes mientras la IC resolviese el caso. También se acordó convocar a los secretarios políticos de las regiones. Y Codovilla, por recomendación de Hurtado, preparó realmente una reunión de fieles, para reforzar sus posiciones.

Pero cuando se iba a celebrar la reunión con los representantes regionales, el domingo 21 de agosto, —o como es más verosímil por los plazos el día 28— todos los reunidos, Codovilla incluido, fueron detenidos por la policía, a excepción de Zapiraín y Mateo, de Madrid. Encerrados en el mismo calabozo durante una semana, fue allí donde los encarcelados resolvieron la crisis interna del partido, tomando la resolución de responsabilizar a los tres dirigentes del PCE, Bullejos, Adame y Trilla, del mal funcionamiento de la organización y de los desacuerdos con la Komintern, al tiempo que proclamaban su apoyo incondicional a la Internacional y a su línea política. En

paralelo, la delegación de la Internacional en España, hizo otra declaración, en la que afirmaba que su labor «había consistido en hacer todo lo posible para asegurar la línea política de la carta abierta de la IC y para crear una dirección colectiva y unificada del partido»[12]

Bullejos intentó maniobrar y, del 4 al 5 de septiembre, celebró una reunión con la parte del Buró que estaba bajo su control, pero perdió el pulso al tener que emprender viaje a Moscú el 7 de septiembre.

El segundo acto del drama se desarrolló en la capital soviética a donde ya habían llegado Hurtado y Mije, predisponiendo al Ejecutivo de la Internacional a favor de un relevo en la dirección. La Internacional, ante el conflicto planteado, pidió que se enviara una delegación que representara a las bases del partido, para recabar su opinión en el pleito que se estaba dirimiendo. Como delegados de las «bases», marcharon a Moscú: Manuel Mateo, Antonio Barbado y Vicente Olmos. A su llegada se constituyó una comisión presidida por Manuilsky, con representantes de otros partidos comunistas, encargada de estudiar y discutir con Bullejos, Adame, Vega y Trilla su posición, y de llegar a la conclusión que fuera conveniente.

Después de un largo debate, en el que no faltaron, por cierto, las anécdotas, como la de haber llamado Antonio Barbado, «borracho» a Manuilsky, se llegó a un compromiso. Bullejos, Adame, Vega y Trilla firmaron una declaración en las que se manifestaban de acuerdo en aplicar la línea de la Internacional, «donde quiera que fuera y en el puesto que estuvieran». Ya estaban dispuestos a emprender el viaje de regreso a España, cuando un hecho nuevo vino a estropear toda la combinación.

De vuelta en España, Hurtado y Mije, con órdenes concretas de la IC, habían convocado el Buró Político para el día 5 de octubre. En esa reunión, a instancias de uno de los delegados de Moscú, se tomó una resolución en unos términos que dejaban poca duda sobre cuál iba a ser el desenlace del conflicto: «El grupo sectario (Bullejos, Adame y Trilla), para tratar de afianzar sus posiciones, cada día más debilitadas, ha fingido algunas declaraciones autocríticas (que no fueron seguidas de hechos ni de actos) y ha proclamado repetidamente que ya estaba realizándose el viraje. Pero, en realidad, las concepciones no se modificaban, la conducta táctica permanecía siempre sectaria, y los métodos de trabajo seguían la senda del caciquismo…

El Buró Político acuerda proponer al Comité Central, que convocará en breve, la exclusión de los camaradas Bullejos, Adame, Trilla y Vega del Buró Político y del Comité Central, y en cuanto a su permanencia en las filas mismas del partido, dependerá del abandono total e incondicional que hagan de sus viejas posiciones antileninistas y de sus viejos métodos sectarios y de la aplicación honesta de las resoluciones del Buró Político y de la IC»[13]

Esta resolución fue reproducida en *Frente Rojo* el día 22 de octubre y fue leída por Bullejos, según cuenta él mismo, en Moscú, donde aún se encontraba con los otros implicados. Bullejos, escandalizado, por lo que consideró una traición, tomó la decisión irrevocable de no aceptar ningún tipo de arreglo con la Internacional Comunista.

En una resolución del 31 de octubre, el Comité Ejecutivo y la Comisión de Control, de la Komintern decidió expulsar de la Internacional y del Partido Comunista de España a Adame, Bullejos, Trilla y Vega. Después de su expulsión, los cuatro quisieron regresar inmediatamente a España, pero se les impidió su salida de la URSS. Allí tuvieron que permanecer hasta el mes de enero de 1933, cuando lograron obtener del Gobierno ruso permiso para salir de su territorio, aunque tuvieron que pagar por su cuenta el viaje de regreso.

Más tarde, al justificar la expulsión del grupo, se buscaron toda clase de argumentos políticos para demostrar las diferencias entre los expulsados y la IC. Los excluidos fueron cuatro pero otros muchos habían cometido «faltas» y «errores», que era preciso corregir por medio de la autocrítica. Silva, Checa, Arroyo, Pasionaria y otros fueron obligados, bajo amenaza de expulsión, a realizar una autocrítica pública por su anterior apoyo al grupo de Bullejos.

La IC designó una nueva dirección que sólo conocemos por la lista que Bullejos ofrece en sus recuerdos. El nuevo Secretario General era José Díaz. En este obrero panadero ex militante de la CNT, con escasa formación cultural, se unían la inteligencia natural, la honradez, la fidelidad y el prestigio. Manuel Hurtado, fue confirmado como secretario de organización; el hasta entonces alumno de la Escuela Leninista, Jesús Hernández, fue nombrado secretario de agitación y propaganda, y Antonio Mije, secretario sindical. Completaban el Buró Político Adriano Romero, Dolores Ibárruri, Pedro Checa, Vicente Uribe y Manuel Delicado.

En los índices del Archivo de la Komintern en Moscú, el período que sucede a la expulsión del grupo Bullejos se encuentra bajo el rótulo de la «perestroika del PCE», esa perestroika se iba a desarrollar en una España cada vez más convulsa.

La CNT-FAI, como el PCE, había adoptado una actitud claramente hostil a la República. A principios de enero de 1933 el movimiento anarquista desencadenó un movimiento insurreccional que produjo diversas huelgas revolucionarias en las ciudades y levantamientos campesinos en los pueblos. En uno de estos levantamientos en Casas Viejas, provincia de Cádiz, la brutal actuación de la Guardia Civil y los Guardias de Asalto causó varios muertos a sangre fría, levantando una oleada de indignación popular contra el Gobierno de Azaña. Por otra parte, la subida de Hitler al poder (30 de enero de 1933) dio nuevos ánimos a la rápida reorganización de las derechas, que se unieron en la CEDA, partido dirigido por Gil Robles y que, bajo la ideología católico-reaccionaria, agrupaba desde la oligarquía financiera y terrateniente a la pequeña burguesía rural. Junto a la CEDA, pequeños grupos fascistas, como las JONS de Onésimo Redondo, se preparaban ya para acabar con la República y las organizaciones obreras.

El liberalismo reformista de la pequeña burguesía republicana empezaba a encontrarse atenazado por la doble presión de la radicalización de los trabajadores y la progresiva fascistización de las clases dominantes. Semejante situación desembocó en el fracaso del Gobierno Azaña y en nuevas elecciones. Los republicanos estaban desprestigiados por el asunto de Casas Viejas. Los socialistas se negaron a formar coalición con ellos debido a la presión del ala izquierda del PSOE, desengañada de la participación socialista en los gabinetes republicanos. Los anarquistas, con sus consignas abstencionistas, ganaron audiencia entre los trabajadores, logrando en las elecciones de noviembre de 1933 un 43% de abstenciones, que favorecieron a las derechas. El resultado fue el triunfo aplastante de las derechas, que se multiplicó a causa de la ley electoral, que favorecía a los partidos mayoritarios: la derecha obtuvo 217 escaños; el centro, 156 y las izquierdas 99.

Pero el peligro fascista seguía sin comprenderse en las filas del PCE. Los comunistas españoles tenían como referencias teóricas sobre el fascismo las resoluciones del VI Congreso, y del XI y XII Plenos del Comité Ejecutivo de la Internacional. Para ellos, fascismo quería decir contrarrevolución. Habían sido fascistas Primo de Rivera y el general Berenguer; fascistas po-

dían ser los monárquicos y los socialistas. Pero el fascismo del que gustaba hablar a los comunistas españoles era el de la República misma. En efecto, la burguesía republicana y los socialistas-anarquistas entraban dentro del análisis y críticas al fascismo, y seguían siendo el «enemigo principal».

Antes de la llegada de Hitler al poder, era frecuente ver en *Mundo Obrero* llamamientos contra lo que ellos calificaban de labor contrarrevolucionaria de la República, acentuada esos días por los sucesos de Casas Viejas; sin embargo, después de enero comenzaron a vincular fascismo y República, relación que ya no dejó de aparecer hasta finales de 1935

El éxito de la lucha antifascista en España, según Vicente Arroyo, dependía del grado en que se consiguiera desenmascarar ante las masas obreras el papel de traición del Partido Socialista. Como vemos, existe una continuidad esencial con las críticas realizadas años atrás; sólo que se había sustituido el adjetivo contrarrevolucionario por el de fascista.

La política del PCE a lo largo de 1933 se plasmó fundamentalmente en la lucha contra la represión gubernamental, el hambre, la pérdida de algunos derechos políticos de los trabajadores, etc. Este fue el cometido y estrategia de la CGTU en este año, acentuándose durante el siguiente. No obstante, el 16 de marzo de 1933, mes y medio después de la subida de Hitler al poder, se publicó en *Mundo Obrero* una carta abierta a las organizaciones obreras llamando a la unidad frente al peligro fascista, con condiciones concretas para una acción común formando comités de lucha, que, representando a todas las tendencias en los lugares de trabajo, fueran los protagonistas de la lucha antifascista.

La misma preocupación movía a los comunistas del BOC. En su segundo Congreso (abril de 1933) el BOC había adoptado la consigna de «alianza obrera» como forma de conseguir la unidad de acción entre el proletariado. Al principio el BOC aplicó esta consigna en el terreno sindical, consiguiendo crear frentes únicos en diversos sectores laborales, a pesar de la oposición de la CNT. En el terreno político, los contactos del BOC con la Unió Socialista de Catalunya (pequeño grupo socialdemócrata aliado de la Esquerra), la UGT catalana, la Federación Catalana del PSOE, los sindicatos treintistas de Pestaña, la Izquierda Comunista (trotskista) y la Unió de Rabassaires condujeron a la realización de un mitin conjunto que se celebró en Barcelona el 27 de julio del 33.

Después de la victoria de las derechas en las elecciones de noviembre, ante la agudización de la amenaza fascista, se constituyó formalmente la Alianza Obrera el 16 de diciembre de 1933, integrada por las organizaciones antes mencionadas. Pero el enfrentamiento con el PCE impidió que la fórmula de la Alianza Obrera, que era muy similar a los comités de lucha, fuera aceptada por el partido.

Para el PCE las Alianzas eran un frente único por el vértice, algo inadmisible y condenable: «La misión que han venido a cumplir los dirigentes de las famosas «alianzas» obreras se resumen así: confundir, desorientar y sabotear la verdadera organización del frente único de lucha. Las tales «alianzas» son producto de una maniobra de la burguesía y de sus agentes, los jefes socialistas y anarquistas, treintistas y bloquistas y demás renegados para impedir la organización de la revolución, para torpedear la organización de los comités de fábricas y de campesinos, para luchar contra la creación de los soviets en España. La Alianza Obrera es una «alianza» contrarrevolucionaria»[14]

El propósito de ampliar las alianzas por parte de Codovilla, que era quién tutorizaba a la nueva dirección del PCE, discurría por otros derroteros. Codovilla, que contaba con una comunicación muy fluida entre Madrid y Moscú, gracias a una conexión radiotelegráfica, se concretó en la absorción de dos pequeños partidos que desde hacía tiempo se aproximaban a la órbita del PCE: la Izquierda Revolucionaria y Antiimperialista (IRYA), de inspiración sandinista, con el periodista peruano César Falcón como líder, y el Partido Social Revolucionario (PSR) cuyo líder más destacado era el diputado José Antonio Balbontín, secundado por el figurón de Ramón Franco. Ambos eran herederos en declive de la radicalización republicano-izquierdista de 1930-1931, y sus dimensiones como organización eran reducidas: como máximo mil militantes en toda España para la IRYA y unos tres mil activos para el PSR.

Como ya hemos dicho, en noviembre de 1933 se celebraron elecciones legislativas para renovar el Parlamento elegido en el verano de 1931. El programa del PCE para estas elecciones no fue sino un reflejo escrito de todos los análisis y la estrategia que venía sosteniendo el partido. El PCE realizó una campaña en solitario con un balance de los treinta meses de la República burguesa que se resumía en: «¡Abajo la República burguesa!», y en lo relativo al avance del fascismo, sosteniendo que se debían «transformar las eleccio-

nes actuales dentro del proletariado en un juicio implacable de los obreros y campesinos contra el socialfascismo español».

Los resultados obtenidos en los comicios varían según las fuentes, pero casi todas fluctúan entre los 170.000 y 200.000 votos, cuatro veces más que en las elecciones de 1931. Por tanto, el PCE se podía ufanar de haber logrado un aumento absoluto en el número de votos, pero la relación militante-voto bajó ostensiblemente respecto a las lecciones de 1931.

El gran logro se obtuvo al conseguir un diputado en Málaga capital. El primer diputado en la historia del PCE era el médico Cayetano Bolívar, que salió elegido en la segunda vuelta, tras haber quedado primero sin llegar al 40% de los votos en la primera ronda. El segundo más votado en esa circunscripción había sido el peruano Falcón, y el tercero un socialista. A la segunda vuelta podían ir unidos comunistas, socialistas y radical-socialistas. José Díaz, que se desplazó a Málaga, habló en una asamblea-mitin y propuso la unidad, entre otras cosas, para sacar a Bolívar de la cárcel. Bolívar salió elegido pero los votos no fueron mayoritariamente comunistas, debieron ser votos anarquistas (contra la represión) o republicanos de izquierda, los que sacaron al médico de la cárcel y lo convirtieron en diputado de las Cortes españolas por el PCE.

Lo importante del hecho para el partido no era tanto la obtención de un escaño, como poder apreciar las posibilidades que ofrecía la política de alianzas. Pero esa nueva estrategia no estaba madura ni para la Komintern, ni para el PCE. Se tardará todavía un tiempo en valorarla, y en considerar el pacto de Málaga como un precedente electoral de las políticas de Frente Popular que terminaría adoptando el PCE. Como un precedente quiso verlo Jesús Hernández en el borrador de su discurso ante el VII Congreso de la Internacional, aunque ese párrafo en el original fue luego tachado.

Los efectos de la Crisis del 29 que habían llevado a Hitler al poder se dejaban sentir en todas partes y también en nuestro país. El ascenso de las luchas sociales contribuye a explicar la radicalización que se produjo en el socialismo español. Con la llegada de la derecha al poder en noviembre de 1933, el PSOE vivió la destrucción de todas sus medidas reformistas como una auténtica tragedia. A esto se sumó la presión ejercida por el movimiento anarquista, la inestabilidad de la economía y el miedo al ascenso del fascismo en otros países de Europa, lo que propició que hasta conocidos reformistas

como Largo Caballero dieran un viraje a la izquierda, aunque solo fuese para no perder su influencia sobre sus propios partidarios.

En enero de 1933, los nazis habían llegado al poder en Alemania destruyendo todas las organizaciones obreras. En Austria, los socialcristianos del canciller Dollfuss habían implantado una dictadura encubierta y con sus formaciones paramilitares aumentaban la presión sobre los socialistas. Los registros y ocupaciones de los locales socialistas culminaron con el asalto a las oficinas del partido en la ciudad de Linz, en febrero de 1934. Fue entonces, cuando una parte del partido en Viena recurrió a las armas. El caso de los socialistas austriacos produjo un verdadero impacto en el resto de los partidos socialdemócratas europeos, y de modo particular en el PSOE. Se extendía la idea de que era preferible caer en el combate, como los obreros austriacos, que la ignominia de una capitulación como la de los socialdemócratas alemanes frente al nazismo. «¡Antes Viena que Berlín!» gritaban en las reuniones y mítines muchos de los socialistas españoles.

Así, la consigna de unidad frente al fascismo se convertía en imperiosa para el proletariado español, y a este hecho vino a sumarse otro que abrió la posibilidad a esa unidad entre socialistas y comunistas en nuestro país: el viraje en la política exterior soviética.

En enero de 1934 se firmó un pacto de no agresión germano-polaco entre la Alemania nazi y el régimen del dictador polaco Pilsudski. Esto debilitaba la alianza franco-polaca y aislaba más a la URSS, que decidió reorientar su política exterior con criterios de Estado, solicitando su ingreso como miembro en la Sociedad de Naciones y acercándose a las democracias occidentales.

En la primavera de 1934, Stalin se había convencido de las intenciones agresivas de Hitler respecto al régimen soviético, lo que le impulsó a buscar una alianza con Francia y a congraciarse con las democracias europeas. En una serie de artículos aparecidos en *Pravda* y en *Izvestia*, se hacía un análisis de la nueva situación internacional creada por el auge del fascismo. Alemania y Japón aspiraban a un nuevo reparto del mundo y preparaban una lucha dirigida contra la Unión Soviética, contra Francia, Polonia, Checoeslovaquia, Rumania y los países bálticos, a la vez que contra China y los Estados Unidos de América. Por eso la Unión Soviética había decidido abandonar su vieja política de acercamiento a Alemania y aproximarse a Francia.

Este giro, que fue fundamental, dio como resultado que Stalin ordenase a Manuilsky un cambio en la estrategia de la Komintern, y que iniciara una etapa de colaboración con la socialdemocracia en los países en las que existieran formaciones de esa naturaleza. Manuilsky, con buen criterio, decidió elegir al PC francés para el primer ensayo general de lo que terminaría siendo la política de Frentes Populares.

En mayo de 1934, Manuilsky habló con Albert Vassart —representante del PC francés en Moscú— y le dijo: «Es preciso elaborar una nueva política para la Conferencia de junio del PC francés»[15] Vassart redactó rápidamente un documento destinado a servir de base programático-táctica para esa nueva política. Cuando el 23 de junio de 1934 el PC francés se reunió en Ivry para celebrar su Conferencia Nacional, su Secretario General Maurice Thorez anunció que su partido estaba interesado en constituir un frente único con los socialistas y los sindicatos con el objeto de luchar conjuntamente contra el fascismo.

Los pactos de unidad de acción, entre estas dos fuerzas políticas, se suscribieron en Francia el 27 de julio; y en septiembre el PCE ingresó en las Alianzas Obreras. Faltaba sólo dar un paso para la constitución de los Frentes Populares.

En el mes de agosto de 1934 cesaron en las publicaciones del PCE las críticas tanto a las Alianzas Obreras como al PSOE. Sólo en el periódico *Cataluña Roja* se seguían criticando las Alianzas y contraponiéndolas al frente único por la base. Pero en Madrid ya se sabía el cambio táctico que se iba a producir en el mes de agosto.

No se puede dudar que la decisión de entrar en las Alianzas Obreras partió de Moscú, aunque coincidiera con algún tipo de «discusión» o inquietud por el tema en el seno del partido español. Según E. H. Carr fueron Stepanov y Codovilla quienes trajeron a España las directrices de ingreso en las Alianzas,[16] lo que encaja perfectamente con los recuerdos que nos transmite Largo Caballero, en sus memorias, en las que explica como el PCE abordó el tema de Alianzas con el dirigente del ala izquierda del PSOE.

«Un individuo llamado Medina —no creo que fuera ese su verdadero nombre (en realidad, se trataba de Codovilla, auténtico factótum en la dirección del PCE en aquellos momentos) que hablaba correctamente español, se hallaba en nuestro país, y era agente de la Tercera Internacional. A

dicho Medina me lo presentó Margarita Nelken, afiliada entonces al Partido Socialista, para hablarme de las Alianzas Obreras. Pretendía que se le cambiase el nombre por otro —no recuerdo cuál— más en armonía con el vocabulario ruso, a fin de facilitar la entrada en ellas a los comunistas. Tuvimos una discusión de algunas horas. Al cabo, se convenció de que no era oportuno ni práctico importar en España vocabularios exóticos. Al día siguiente, la prensa comunista dio la noticia de que los elementos de su partido habían acordado formar parte de las Alianzas Obreras»[17]

El ingreso del PCE en las Alianzas lo fue sin condiciones, aunque se redactó una resolución, que en lo que se refería al análisis de la situación española y a la estrategia a seguir, no difería en nada de anteriores declaraciones. En ella se analizaban las insuficiencias de las Alianzas según el criterio del PCE —ausencia de campesinos, CNT, CGTU, parados y soldados, lucha por las reivindicaciones económicas— y se terminaba afirmando que las Alianzas Obreras debían basarse en los comités de fábrica y de campesinos, al mismo tiempo que debían tender a la creación de soviets. Con esta propuesta genérica, las Alianzas no significaban modificación alguna en la anterior estrategia comunista, sino que, según los análisis del partido, ahora servirían de órganos permanentes de frente único para terminar transformándose en soviets. En febrero de 1936, el término soviet quedó sustituido definitivamente en toda la propaganda del PCE por el de Alianza Obrera.

Tras este curioso ingreso del PCE en las Alianzas Obreras, que hasta la víspera eran un núcleo de la reacción, el partido comenzó a señalar en su prensa que se avecinaban acontecimientos importantes, de «magnitud imprevisible». La dirección comunista tenía noticias de las intenciones del PSOE de alzarse en armas contra el gobierno de derechas si éste daba acogida a los parafascistas de la CEDA, propósito que era un secreto a voces.

El día anterior al comienzo de la huelga general a la que se llamó en octubre de 1934, *Mundo Obrero* publicó el programa íntegro del Gobierno Obrero y Campesino, que contenía idénticos puntos a los que había defendido el partido en noviembre de 1933.

El día 3 de octubre de 1934 la dirección del PCE comunicó a sus comités provinciales que se había llegado a un acuerdo con el PSOE para declarar conjuntamente la huelga general si entraban en el Gobierno dirigentes de

la CEDA. Cuando tras una crisis ministerial la CEDA entró finalmente en el gabinete, el PSOE y las Alianzas Obreras convocaron la huelga general revolucionaria, y en Cataluña, Lluís Companys proclamó el Estat Català. Los anarquista barceloneses no secundaron la insurrección, que consideraban independentista, y el gobierno central utilizó el ejército para suspender el Estatut de autonomía y detener a Companys. Tampoco corrió mejor suerte la Alianza Obrera de Madrid, y en otros lugares. Aunque no sucedió lo mismo en Asturias. Allí, la CNT entró en la Alianza Obrera, y se lanzó la célebre consigna de «UHP» (Unión, Hermanos Proletarios).

La noticia del fracaso de Barcelona y de Madrid no disminuyó la voluntad de combate de los mineros asturianos que protagonizaron un conato de revolución. Pero el Gobierno, seguro de contener al resto de España, empleó todos los medios a su alcance, para reprimir la revuelta. La represión fue muy dura con más de 3000 trabajadores muertos, 7000 heridos y 30.000 encarcelados.

La participación de los comunistas en la huelga general de octubre fue desigual, lo mismo que la de otros partidos y organizaciones, y puede decirse que en los primeros días de la insurrección los comunistas fueron a remolque de las iniciativas socialistas. Los comités locales comunistas pecaron de una improvisación y desorganización considerables. El caso más flagrante sucedió en la capital sevillana, donde la organización comunista tenía posibilidades de actuar. Pero, la pasividad, el miedo y la desmoralización cundieron en los militantes, y a lo más que llegaron fue a organizar a doscientos camaradas que se disgregaron después de saber que no había armas.

En Asturias, los militantes del PCE, entre 300 y 600, según los cálculos de Díaz Nosty[18], participaron desde el primer momento de modo activo, haciendo hincapié en consignas que consideraban propias, como era la de constitución de un: ejército rojo.

En el balance que el partido hizo de los acontecimientos se ponía un especial énfasis en que no existían las condiciones objetivas para el triunfo de la insurrección, así como en la ausencia de una preparación eficaz del movimiento. Estas carencias de organización eran, para el PCE, responsabilidad fundamental del PSOE; pero los anarquistas, al no participar en el levantamiento en el conjunto del país, también resultaban responsables. El Secretario General José Díaz, llegó a manifestar que el PCE no estaba pre-

parado ni quería una acción como la de octubre en Asturias: «Nuestro propósito (era) aplazar el movimiento durante unos meses (...), para el cual nuestro partido estaba muy poco preparado»[19] Efectivamente, la política del PCE no iba encaminada directamente hacia la insurrección. Pero si bien el partido no estaba preparado y tampoco deseaba en esos momentos lo que ocurrió, no dudó en asumir la responsabilidad que le tocaba, y a posteriori mucha más.

La principal victoria en esta lucha de octubre, se obtuvo tras la derrota. El PCE supo capitalizar las movilizaciones antirrepresivas que se generaron en todo el país. Así se consiguió que el Gobierno Lerroux, a pesar de la oposición de los ministros de la CEDA, conmutara todas las penas de muerte dictadas por los tribunales militares contra los principales responsables del movimiento revolucionario. Entre los condenados se encontraban el socialista González Peña y el comunista Juan José Manso, trabajador de una fábrica de armas de Trubia.

De ese modo el PCE se convirtió en el principal defensor de la revolución asturiana, y en el protagonista de la campaña por el indulto; y no dudó en atribuirse las responsabilidades de la revolución misma: «nosotros —dirá José Díaz— somos los responsables del movimiento revolucionario de Octubre (...), el PCE recaba para sí toda la responsabilidad política que se derive del movimiento y de la insurrección victoriosa de Asturias»[20]

Las Alianzas Obreras no presuponían en ningún caso la estrategia que se iba a desarrollar con los Frentes Populares. Al no tener cabida en ellas los partidos burgueses, las Alianzas se presentaban como la plasmación de un frente único de partidos obreros y organizaciones que pugnaban por implantar el socialismo. Los Frentes Populares, al convertirse en un tipo de formación electoral opuesto al avance del fascismo debían dar cabida a partidos burgueses, por esta razón sólo podían contemplar en sus acuerdos medidas de carácter democrático, más o menos avanzadas en el terreno social, pero siempre respetuosas con el sistema capitalista. En aquellos países, donde el retraso evidente de las formaciones económico-sociales no hubiera permitido la implantación de una democracia efectiva, como era el caso español, el Frente Popular podría operar como elemento acelerador para alcanzar el desarrollo de esa etapa, pero siempre dentro de los límites del sistema capitalista dominante.

Para los partidos comunistas esta defensa de la democracia en abstracto acabará siendo mucho más que una táctica coyuntural frente al fascismo. A partir del Frente Popular, la democracia burguesa, despreciada antes, de acuerdo con el análisis leninista, como una apariencia engañosa, pasará a ser ahora parte integrante de su estrategia, convirtiéndose la defensa y profundización de «la democracia» en una hipotética vía de avance hacia el socialismo.

Después de octubre de 1934, el PCE siguió fielmente las directrices que se le marcaban desde la Internacional, procurando, en medio de una cierta confusión, imitar los pasos del PCF que era el partido más avanzado en la experimentación de la nueva estrategia de Frente Popular. Si en julio de 1934 el PCF había firmado un pacto de unidad de acción con los socialistas, el 10 de octubre, el Secretario General del PC francés Maurice Thorez, sugirió ya una alianza de las clases medias con la clase obrera; alianza que era un claro llamamiento al Partido Radical para suscribir acuerdos electorales.

En España, las primeras iniciativas del Partido Comunista, en el mismo sentido que el francés, datan del 27 de octubre. En una comunicación interior de la dirección nacional, dando instrucciones a todos los comités de la organización, se decía lo siguiente: «Bloques antifascistas: Ante nuestro partido se plantea pues en este momento la tarea de agrupar en un solo bloque antifascista a todos los que quieren luchar contra la reacción y el fascismo, contra el Gobierno Lerroux-Gil Robles. Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, nacionalistas, todos en un solo bloque en contra del bloque fascista de los diversos partidos monárquico-fascistas de la burguesía. Nuestro partido debe transformarse en el eje y en el dirigente de la lucha antifascista en España»[21] Era el embrión del Frente Popular español.

En el verano de 1935 la aproximación del PCF a formaciones políticas burguesas se aceleró, y desembocó en una gigantesca manifestación unitaria que se celebró el 14 de julio en París. En ese mismo mes, se reunía en Moscú el VII Congreso de la IC, que habría de elaborar definitivamente la nueva política de los partidos comunistas. La parte central del Congreso la ocupó el informe del búlgaro Dimitrov, que versó sobre el Frente Popular. Dimitrov puso el énfasis en que la nueva estrategia era un valladar frente al fascismo. No obstante, Togliatti se encargó de poner de manifiesto la razón última del viraje, que no era otra que la búsqueda de alianzas por parte de la URSS con las democracias occidentales para hacer frente a una posible

agresión de la Alemania nazi. El dirigente comunista italiano expuso el trasfondo de los Frentes Populares del siguiente modo: «Para nosotros está absolutamente fuera de discusión que existe una identidad de objetivos entre la política de paz de la Unión Soviética y la política de la clase obrera y de los partidos comunistas en los países capitalistas. Esta identidad de objetivos no puede ser motivo de dudas en nuestras filas. Nosotros no defendemos a la Unión Soviética sólo en general, defendemos en concreto toda su política y cada uno de sus actos»[22]

El 2 de junio de 1935 el PCE había organizado en Madrid, en el Monumental Cinema, su primer gran mitin después de la insurrección asturiana. En él José Díaz ya habló de la necesidad de constituir una Concentración Popular Antifascista. Díaz realizó un llamamiento a anarquistas, socialistas y republicanos de izquierda para que formaran parte de esa Concentración o bloque.

Las primeras iniciativas del PCE después del VII Congreso de la IC se canalizaron hacia el PSOE. En una carta fechada en octubre de 1935 el PCE proponía a los socialistas: la unidad sindical, con la entrada del CGTU en la UGT, el desarrollo de las Alianzas Obreras, la creación del Bloque Popular Antifascista, e incluso la perspectiva de fusión de ambos partidos sobre la base de las tesis del VII Congreso.

La fusión de la CGTU, el sindicato comunista, con la UGT, que en realidad, fue la absorción de la central comunista por la socialista, no resultó favorable al PCE. Su intervención en los sindicatos siguió siendo minoritaria y la izquierda socialista continuó controlando la UGT.

Por otro lado, la corriente unitaria también se manifestaba entre los comunistas disidentes. Las discusiones entre el BOC de Maurín y la Izquierda Comunista de España, encabezada por Nin y distanciada definitivamente de Trotsky, —al haber ordenado éste a sus seguidores españoles la entrada masiva en el PSOE— culminaron en su unificación, realizada entre julio y septiembre de 1935. El nuevo partido pasó a llamarse Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y su portavoz fue el periódico *La Batalla*.

La constitución formal del Frente Popular en nuestro país se precipitó con motivo de la crisis gubernamental que llevó a la convocatoria de elecciones generales. Fue el Presidente de la República, Alcalá Zamora, católico y conservador, quien puso fin al llamado bienio negro de la derecha al di-

solver las Cortes. En 1935, la coalición gubernamental de los radicales y la CEDA estaba seriamente quebrantada. Los escándalos de corrupción en los que se veían involucrados políticos del partido radical eran tales que la CEDA no quiso continuar con la coalición.

El líder de la CEDA Gil Robles que, desde el comienzo de la legislatura buscaba el poder para su partido, aprovechó la ocasión. Los ministros de la CEDA rechazaron los presupuestos y el Gobierno dimitió. Gil Robles reclamó la presidencia del Consejo, el Presidente de la República, Alcalá Zamora, se negó a dársela y encargó a Portela Valladares formar un gobierno cuya misión esencial era preparar nuevas elecciones.

Desde mediados de 1935, Azaña venía protagonizando una serie de gigantescos mítines de masas en Bilbao, Valencia y Madrid. El entusiasmo por la unidad de la izquierda demostrado por los cientos de miles de asistentes venidos de toda España para asistir a los «Discursos en campo abierto», contribuyó a convencer a Largo Caballero de que debía modificar su actitud ante una coalición electoral con otras fuerzas que pronto sería el Frente Popular.

Cuando Pórtela Valladares reunió al Consejo de ministros el 1de enero de 1936, ya tenía en sus manos el decreto de disolución de las Cortes que preveía la convocatoria de elecciones generales para el día 16 de febrero. Aquellas iban a ser las últimas elecciones democráticas que se celebrarían en España durante cuarenta años. Con el decreto de disolución arrancó una campaña electoral que se encrespó rápidamente enfrentando a dos bloques o coaliciones electorales.

La CEDA constituyó con los monárquicos y los carlistas un «frente nacional contrarrevolucionario». La cabeza de esa coalición era José María Gil Robles. Los partidos y agrupaciones de centro-izquierda e izquierda firmaron el 15 de enero un pacto para concurrir juntos a las elecciones y llevar a cabo un programa de Frente Popular. Este Frente Popular estaba integrado por: Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, Juventudes Socialistas, PCE, POUM, Partido Sindicalista y UGT. En Cataluña, fueron Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicana, Partit Nacionalista República Cátala, Unió Socialista de Catalunya, Unió de Rabassaires y los pequeños partidos comunistas, los que constituyeron un Front d'Es-

querres. Mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) presentó candidatura aparte.

El programa que fijó la coalición electoral así constituida era un programa liberal, que se mantenía dentro de un marco burgués. Para E. H. Carr, lo que más llamaba la atención del acuerdo que finalmente se firmó, era «la ausencia de serias demandas sociales y económicas». Realmente era un programa indiscutiblemente moderado con propuestas meramente reformistas, en el que, como escribió Ramos Oliveira, «todo era ambiguo»[23]

El programa excluía expresamente las reivindicaciones socialistas de nacionalización de la tierra y de los bancos y del control obrero de la industria. La República que concebían los firmantes no era «una república animada por intenciones sociales y económicas de clase, sino un régimen de libertad democrática movido por razones de interés público y de progreso social»[24]

En definitiva, el programa estaba basado principalmente en dinamizar la reforma agraria, restablecer el suspendido Estatuto de Cataluña, derogar la ley de arrendamientos rústicos, reformar las leyes municipales, volver a impulsar la educación y la cultura, y promulgar una amnistía total para los 20.000 o 25.000 presos políticos que había en España tras la revolución de octubre, así como el reingreso, con indemnización, de todos los trabajadores despedidos de su trabajo. Esta propuesta encontró una gran aprobación y permitió una verdadera movilización popular, consiguiendo que los anarquistas no hicieran campaña por la abstención, permitiendo así la victoria del Frente Popular.

A comienzos de 1936 *Mundo Obrero* pudo reabrir tras la prohibición gubernamental posterior a la insurrección de Asturias, y la dirección comunista entró en un estado de agitación febril preparando las elecciones. El 19 de diciembre el partido comunicó a Moscú la aceptación de un bloque electoral de izquierdas. Dos días después, Codovilla refirió a Manuilsky una entrevista con Caballero para acordar posiciones. Durante las semanas previas a los comicios conocemos principalmente las comunicaciones que Codovilla remitió a Moscú. De ellas se deducen los meandros del proceso de conformación del programa y las candidaturas en el PCE.

Las negociaciones del pacto del Frente Popular no resultaron fáciles. Los republicanos no querían que los comunistas participaran en las discusiones. Uno de sus representantes más conservadores, Sánchez Román, llegó a re-

tirarse de las conversaciones. Los negociadores socialistas, encabezados por Juan Simeón Vidarte, defendieron la incorporación de candidatos comunistas en las listas comunes en términos de lograr un número de diputados no menor que el necesario para tener derecho a constituir minoría y participar en las comisiones, es decir 10 diputados. Con esto, los socialistas, tendrían un apoyo en las comisiones que es donde se elaboraban los proyectos.

Hubo tira y afloja en algunas circunscripciones, como Toledo, Alicante y Sevilla, donde a pesar de los esfuerzos del PCE no se pudo incluir a ninguno de sus candidatos. Para Toledo, donde se descontaba un triunfo claro del Frente Popular, los comunistas propusieron a Pedro Martínez Cartón, pero en las negociaciones quedó descartado. A este le sentó muy mal no verse incluido por dicha provincia, y se le acabó presentando, aunque de mala gana por su parte, en la lista de Badajoz, en lugar de un trotskista de Llerena —donde el POUM poseía una importante organización local— propuesto por el PSOE y que fue enérgicamente rechazado por el PCE. Paradójicamente, Cartón salió elegido diputado por la provincia extremeña, lo que no habría ocurrido en el caso de haberse presentado por Toledo. En Alicante, la retirada por el propio PC de la candidatura de Francisco Galán —en compensación por la retirada del PSOE a favor de candidatos republicanos— fue muy mal comprendida por las bases.

La posibilidad, por primera vez en su historia, de alcanzar grupo parlamentario suscitó también movimientos de rivalidad interna. A menos de quince días de la celebración de los comicios Madrid informó a Moscú que habían logrado colocarse 21 candidatos del partido, de los que se esperaba que al menos la mitad obtuvieran escaño.

El 16 de febrero se abrieron los colegios electorales en medio de una calma tensa. Tanto la coalición de derechas como la de izquierdas estaban seguras de ganar, pero cuando las juntas electorales provinciales dieron a conocer los resultados el 20 de febrero, el Frente Popular había triunfado en 37 circunscripciones y en todas las grandes ciudades de España, ganando por más de 150.000 votos sobre el conglomerado de derechas.

Aplicando la ley electoral, que trataba de evitar la formación de unas Cortes fragmentadas y que en noviembre de 1933 había favorecido a la derecha, el Frente Popular obtenía la mayoría absoluta. Pero en realidad, los resultados dieron un triunfo muy ajustado a la izquierda, que ganó por menos del

2% del voto popular. El Frente Popular obtuvo 277 diputados frente 132 de la derecha y 32 del centro. El PCE recogió el 3,5% de los votos, menos del porcentage que iba a obtener en los siguientes comicios a los que se pudo presentar, y obtuvo 17 diputados.

La derecha parafascista de Gil Robles, exhortó a Pórtela a que instaurase una dictadura, y ante la negativa de éste, le instó a que al menos proclamara el «estado de guerra». Pórtela vaciló, pero al final llamó por teléfono al Presidente de la República que le autorizó a proclamarlo, si bien en el posterior Consejo de ministros sólo decretó el «estado de alarma» durante ocho días. Franco, que se entrevistó con Pórtela, le dijo que si dejaba pasar al «comunismo» contraería una gravísima responsabilidad ante la historia, y luego aplicó por su cuenta el «estado de guerra» en Zaragoza, Valencia, Oviedo y Alicante para reprimir lo que Gil Robles llamaba «locura colectiva de las masas». El mito del «triunfo del comunismo», que sólo contaba con 17 diputados, había comenzado a funcionar de nuevo como coartada para justificar el golpe militar.

Pórtela dimitió aquel mismo día, y Alcalá Zamora, no tuvo más remedio que pedir a Manuel Azaña, que formara Gobierno. El nuevo equipo ministerial estaba compuesto por republicanos burgueses, aunque contaba con el apoyo del PSOE sin formar parte de él. El ala más derechista del PSOE era partidaria del ingreso en el gabinete, pero Largo Caballero se encargó de impedírselo: en la votación del grupo parlamentario socialista, 49 votos contra 19 se opusieron a que el PSOE formara parte del gobierno, y Prieto no quiso lanzar un órdago pensando en la unidad del partido. Azaña nombró entonces al galleguista Santiago Casares Quiroga presidente del Consejo de ministros.

Pese a la moderadísima composición del nuevo gabinete, los políticos de la derecha reaccionaron como si efectivamente los bolcheviques se hubiesen apoderado del gobierno de España. Periódicos como ABC no dejaban de machacar a sus lectores con mensajes sobre «las hordas asesinas e incendiarias capitaneadas por extranjeros de faz mongólica que quieren imponer la dictadura del proletariado»[25]

José Antonio, el líder de Falange, abundaba en el tema del bolchevismo triunfante sin ningún fundamento real. «Hoy están frente a frente dos concepciones totales del mundo… O vence la concepción espiritual, occidental,

cristiana, española, de la existencia, con cuanto supone de servicio y sacrificio, pero con todo lo que concede de dignidad individual y de decoro patrio, o vence la concepción materialista, rusa, de la existencia que, sobre someter a los españoles al yugo feroz de un ejército rojo y de una implacable policía, disgregará a España en Repúblicas locales —Cataluña, Vasconia, Galicia— mediatizadas por Rusia… Rusia ha ganado las elecciones… y el comunismo manda en la calle; en estos días los grupos comunistas de acción han incendiado en España centenares de casas, fábricas e iglesias, han asesinado a mansalva, han destituido y nombrado autoridades…»[26]

Pero la ofensiva de la burguesía reaccionaria no sólo era verbal. Desde febrero, a la grave situación económica que afectaba al bajo nivel de vida de la clase trabajadora hubo que sumar la crisis artificial creada tras el triunfo del Frente Popular. Los grandes terratenientes decidieron sabotear las faenas agrícolas posponiéndolas para la siguiente temporada. Se detectaron fugas de capitales, retirada de fondos bancarios, especulaciones bursátiles contra el valor de la peseta, y en el aire planeaba la amenaza de un cierre patronal si el Gobierno obligaba a las empresas a pagar las indemnizaciones reconocidas a los represaliados de octubre del 34.

En el campo, la situación era verdaderamente prerrevolucionaria. Desde fines de febrero, en las provincias de Badajoz y Cáceres, y después a lo largo de los meses siguientes en toda Extremadura, en Andalucía, Castilla, y aun en Navarra, se multiplicaron los asentamientos espontáneos sobre las tierras de los latifundistas. Las fincas de Alcalá Zamora, Presidente de la República, fueron ocupadas en abril. Los campesinos se instalaban en las tierras de los grandes propietarios y comenzaban a cultivarlas por cuenta propia. El 29 de mayo, en Yeste (Albacete), se produjo un enfrentamiento con la Guardia Civil por esta causa, que culminó con un balance de 18 muertos (17 vecinos y un guardia civil), más de 17 heridos y un gran número de detenidos.

En esa coyuntura, el PCE, según informó Codovilla a Dimitrov, apostaba por impedir que se produjera una ruptura con los republicanos burgueses de Azaña, ni siquiera había que darles el pretexto. Las directrices de la Komintern hacían hincapié en la necesidad de apartar el espantajo del peligro rojo: «En todas las actividades del partido que realicéis se debe resaltar que la creación del poder soviético no está en el orden del día, sino que por el momento, es solamente cuestión de establecer un estado democrático que haga posible ejercer una barrera contra el avance del fascismo y la contra-

rrevolución, y para fortalecer en general las posiciones del proletariado y sus aliados»[27]

Jesús Hernández nos cuenta en sus memorias la polémica que surgió en febrero de 1936 entre Stepanov, Codovilla y él mismo, sobre el carácter de la revolución que debía perseguirse, y en la que se refleja lo difícil que resultaba a la dirección del PCE explicar el viraje en la estrategia que se había producido con el Frente Popular.[28]

La postura de moderación del PCE contrastaba con la dinámica en la que estaba entrando la lucha de clases en nuestro país y con las posiciones que mantenían el ala izquierda del PSOE y los anarcosindicalistas. Algunos socialista hicieron correr el chistoso eslogan «Si quieres que España no sea marxista vota comunista».

El mayor partido del Frente Popular era el PSOE, y Largo Caballero se había convertido, a sus sesenta y seis años, en un dirigente aparentemente revolucionario. No sólo *Claridad*, el órgano de los caballeristas, sino la prensa comunista de toda Europa colaboró en la construcción de una imagen revolucionaria para Largo Caballero llamándole el «Lenin español». El calificativo carecía de fundamento y no se apoyaba en un solo dato objetivo sobre el dirigente socialista.

Caballero era un cuadro del socialismo reformista de comienzos del siglo XX, que no había leído a Marx ni a Lenin hasta 1934. Carente de preparación teórica había tenido una trayectoria política que en nada recordaba a la del líder bolchevique. En la huelga general de 1917, cuando le fue a detener la policía, lo encontró en su domicilio, y lo único que hizo fue pedir a los agentes que le dejaran terminar de cenar. Durante la dictadura de Primo de Rivera consistió en colaborar con el Directorio, llegando a ocupar cargos de responsabilidad. En la huelga revolucionaria de octubre del 34 cuando fue interrogado, negó cualquier responsabilidad en la misma. Nada, en la trayectoria de Caballero, avalaba que fuera el trasunto de Lenin en nuestro país, pero la coyuntura de la lucha de clases a la que se enfrentaba, y que Caballero no entendía, le llevó a creerse ese apelativo, cuyo origen se debió a la posición que ocupaba en el partido obrero más numeroso del país.

Intoxicado por los halagos de *Pravda*, — que era el medio que le había bautizado como el «Lenin español»— Caballero dio la vuelta a España profetizando el triunfo inevitable e inminente de la revolución. Sus soflamas

llegaron a preocupar seriamente a los comunistas, quienes, de acuerdo con la nueva línea señalada por Dimitrov, veían con horror que Largo Caballero se dedicara a asustar a las clases medias llamando a la pronta toma del poder por la clase trabajadora.

Sus declaraciones de que «la revolución que queremos sólo puede obtenerse por medio de la violencia» eran interpretadas por las Juventudes Socialistas como estrategia leninista. Con motivo de la manifestación del 1° de Mayo de 1936, Caballero recorrió las calles de Madrid pidiendo la formación de un gobierno proletario, bajo enormes retratos de Lenin, Stalin… En cada discurso, en cada artículo, Largo Caballero repetía machaconamente la misma afirmación. En un mitin en Madrid, el 12 de enero, tres días antes de la firma del pacto electoral, decía: «Yo declaro paladinamente que, antes de la República, nuestro deber es traer el socialismo (grandes y prolongados aplausos). Y cuando yo hablo de socialismo a secas, hablo del socialismo marxista. (Muy bien) y al hablar del socialismo marxista hablo del socialismo revolucionario…»[29] Caballero se declaró en favor de la «dictadura del proletariado» que, a su juicio, habría de ejercerse, no por intermedio de los soviets, sino por y a través del Partido Socialista.

El contrapunto a esta postura, —que era la de toda el ala izquierdista del PSOE— lo ponía Indalecio Prieto, un buen líder reformista en otro país con otras tensiones sociales distintas a las de la España de entonces. La primera tarea razonable y posible a ojos de Prieto, era la constitución de un gobierno de coalición al lado de los republicanos. En ese gobierno, que nunca se materializó, los socialistas tendrían como misión «hacer indestructible el poder de las clases laboriosas».

El Sol, periódico republicano burgués, proclamaba a Prieto como un verdadero hombre de Estado y lo comparaba con Aristide Briand, socialista que, como él, se había vuelto «realista». Pero este programa de reformas progresivas y prudentes en el marco del capitalismo encontró poco eco en las masas a las que la fiebre revolucionaria empujaba día tras día a nuevas acciones. Los amigos de Largo Caballero, consideraban estas propuestas como una traición, al punto de que Prieto y sus amigos, González Peña y Belarmino Tomás, fueron recibidos en Écija con disparos de las juventudes socialistas y estuvieron a punto de morir. Ahora no eran los comunistas los que atentaban contra Prieto, eran sus mismos compañeros de partido.

De hecho, los socialistas estaban atrapados en un auténtico dilema. Prieto creía que un gobierno reformista fuerte era la única respuesta a las amenazas contra la República desde la derecha. Sin embargo, en esa época nada en la actitud de la derecha fascistoide permitía suponer que abandonaría voluntariamente la conspiración militar a cambio de otra cosa que no fuera una política social similar a la efectuada por la coalición Radical-CEDA en el «bienio negro».

Pero la radicalización de la izquierda del PSOE tampoco se traducía en una estrategia efectiva que llevara a la clase trabajadora al poder. Sin embargo, la política del PCE con el aval de la Komintern estaba meridianamente clara. El partido debía apoyar la gestión gubernamental, presionando para hacer efectivo el programa del Frente Popular, pero sin ir más lejos. Cuando ocurrió la tragedia de Yeste, con más de una decena de muertos, el Partido Comunista no echó la culpa al Gobierno, como había hecho con ocasión de los sucesos de Casas Viejas, el partido achacó lo sucedido a los desmanes de la Guardia Civil.

La posición del PCE ante disturbios, choques con la fuerza pública, huelgas o «movimientos prematuros» fue en estos meses previos a la guerra, decididamente moderada. El partido veía en todas estas acciones, la impaciencia revolucionaria, la ruptura del pacto de izquierdas y un triunfo de la reacción.

El PCE estaba, sobre todo, en contra de las huelgas indefinidas, que no eran «racionales». Las huelgas no debían ser en ningún caso indefinidas y debían tener por objetivo impulsar y «ayudar» al Gobierno... Así, la huelga era para el partido el último recurso; antes había que agotar otros procedimientos, otros tipos de lucha. «Para terminar con los conflictos existentes estamos dispuestos a discutir y a hacer concesiones (...), hay veces que la situación política no permite determinadas conquistas»[30]

Estas afirmaciones se produjeron en medio de un duro conflicto de la construcción en Madrid. El PCE era contrario a la petición de las 36 horas semanales que hacían los sindicatos. Pensaba que no era razonable, y veía en aquella reivindicación, junto con la de tres semanas de vacaciones, el fruto de una lucha entre las centrales sindicales. Aceptar la huelga a regañadientes, hacer propaganda solapada en la prensa en contra de la misma y hablar en mítines a favor de la canalización pacífica de los conflictos y de

las concesiones, fue la postura del partido en esta huelga hasta que llegó el laudo del Gobierno que el PCE pidió que se aceptara.[31]

Sin embargo, como dice Beevor[32] «lo cierto es que a los obreros sólo les quedaban dos opciones posibles: lanzarse al asalto de las posiciones enemigas o quedarse en las trincheras socialdemócratas en un marasmo de francotiradores. Y esta última alternativa no les garantizaba que no iba a ocurrirles lo que les había ocurrido a sus iguales en Italia o en Alemania». Pese a toda la retórica empleada por socialistas de izquierda y los anarquistas, la única arma real de que disponía la izquierda a principios de 1936, la huelga general revolucionaria, nunca fue utilizada. Por el contrario, cuando Joaquín Maurín, uno de los líderes del cuasitrotskista POUM, planteó en abril una propuesta seria de revolución fue duramente criticado.

El 10 de abril, *La Batalla* arremetía contra el apoyo dado a Azaña por los partidos obreros. «El apoyo a gobiernos burgueses cuando las circunstancias son propicias para la acción revolucionaria, tendrá consecuencias catastróficas»[33] El 19 de abril, en un mitin en Lugo, Maurín dijo que si todas las fuerzas obreras se unieran tendrían más de 4.000.000 de afiliados, y sería posible conquistar inmediatamente el poder, pero el líder del POUM fue tachado de utópico peligroso por los seguidores de Largo Caballero.

Si la división y desorientación entre los partidos obreros era patente, entre las formaciones de la pequeña burguesía republicana que estaban en el Gobierno la pasividad era la tónica, y el golpismo se preparaba sin que el Gobierno hiciera nada por desarticularlo. De hecho, el factor decisivo en la primavera de 1936 fue la fatal debilidad del Gobierno republicano. La debilidad nacía de las contradicciones de clase que anidaban en el Frente Popular, entre una clase obrera radicalizada y unos partidos republicanos que teniendo el Gobierno temían más a sus aliados que a la reacción.

Poco después de que Casares Quiroga fuera nombrado presidente del Consejo de Ministros, su ayudante militar, el comandante de aviación Ignacio Hidalgo de Cisneros, le informó de las actividades de un grupo de pilotos antirrepublicanos que estaban haciendo acopio de armas y bombas. Hidalgo de Cisneros acompañó a Casares Quiroga en una visita a Azaña, el Presidente de la República, para darle cuenta de ello. Azaña le interrumpió diciendo bruscamente que hacer semejantes acusaciones era peligroso.

Casares, como Azaña, no quería ver la gravedad de la situación, y quitaban importancia a las advertencias que les hacían unos y otros. Cuando Prieto le advirtió al presidente del Gobierno acerca de la conspiración militar Casares le contesto: «No toleraré sus salidas menopáusicas»[34]

Cuando se le intentó advertir de las intenciones del general Yagüe, —autor de la matanza de Badajoz unos meses después— Casares contesto airado: «Yagüe es un caballero, un perfecto militar, tengo la seguridad que jamás hará traición a la República. Me ha dado su palabra de honor y su promesa de militar de que siempre la servirá con lealtad, y los hombres como Yagüe mantienen sus compromisos sin más garantía que su palabra»[35]

El 15 de junio, en el monasterio de Irache, cerca de la ciudad navarra de Estella, Mola, el director de la conspiración fascista, había celebrado una reunión secreta con los comandantes de las guarniciones de Pamplona, Logroño, Vitoria y San Sebastián. El alcalde de Estella, al enterarse de ello, dio parte al gobernador civil de Navarra, que apostó unidades de la Guardia Civil alrededor del monasterio. Cuando telefoneó a Casares Quiroga para pedirle más instrucciones el presidente del Consejo de Ministros le ordenó con indignación que retirara a los guardias civiles y dijo: «El general Mola es un leal republicano, que merece, por tanto, respeto de las autoridades»[36]

A principios de julio de 1936 un grupo de 200 militares de la UMRA, asociación de militares republicanos, se desplazó a África con la intención de secuestrar o asesinar a los jefes golpistas, pero el 8 de julio, nueve días antes del golpe militar contra la República, la «operación Romerales» fue descubierta y desmontada inmediatamente por Casares Quiroga. Sus dirigentes, se entrevistaron entonces con el jefe del Gobierno para alertarle sobre el golpe que se preparaba para el 16 de julio y le dieron los nombres de Goded, Mola, Fanjul, Várela, Franco, Aranda, Alonso Vega, Yagüe y García Valiño, es decir, toda la nómina de golpistas, Casares Quiroga les respondió que no existía el más mínimo peligro de insurrección.

El Gobierno, indiscutiblemente, estuvo al corriente de lo que tramaban los jefes militares que conspiraban, pero protestaba contra los rumores de golpe de Estado que consideraba injuriosos. Y habló de su «pesar» por los «injustos ataques» lanzados contra el cuerpo de oficiales «fieles servidores del poder constituido y garantía de obediencia a la voluntad popular»; de-

nunció en las campañas de la prensa socialista, comunista y anarquista «el deseo criminal y obstinado de minar al ejército».

A imagen y semejanza de los grupos políticos que representaban y de las fuerzas sociales que encarnaban, Casares Quiroga, lo mismo que Azaña, vacilaron y tergiversaron porque habían quedado cogidos entre dos fuegos. Era una lucha feroz entre clases sociales antagonistas cuyo enfrentamiento se negaban a admitir, porque temían más a los obreros que a los golpistas. Los primeros podían cuestionar el sistema económico-social, los segundos lo mantendrían.

Poco antes del golpe militar, José Díaz criticó duramente al Gobierno de Casares Quiroga por la actitud que estaba adoptando ante la conspiración militar: «El Gobierno, al que estamos apoyando lealmente en la medida en que cumple el pacto del Bloque Popular, comienza a perder la confianza de los trabajadores. Y yo digo al Gobierno republicano de izquierda que éste es el camino erróneo del 14 de abril de 1931, y qué si sigue por este camino, nosotros obraremos, no rompiendo el Bloque Popular, sino fortaleciéndolo y empujando hacia la solución de un Gobierno de tipo popular revolucionario que imponga las cosas que este Gobierno no ha comprendido o no ha querido comprender»[37]

Sin duda el Gobierno no quería comprender, pero estas palabras no pasaban de ser amenazas parlamentarias. El PCE denunciaba la conspiración, pero no variaba su política, con la que obtenía éxitos, —como el de la fusión con las Juventudes Socialistas— mientras se dedicaba a preparaba su V Congreso.

Por estas fechas, la Juventud Socialista, cuyos dirigentes más destacados eran Federico Melchor, Santiago Carrillo y José Cazorla, se iba acercando progresivamente a posiciones comunistas. Pero más que la influencia del PCE, los jóvenes socialistas sintieron la de la Izquierda Comunista de Nin, grupo trotskista minoritario, pero de un elevado nivel teórico. En agosto del 35, Carrillo realizó unas declaraciones en las que invitaba al BOC y a la Izquierda Comunista a entrar en el PSOE para transformarlo desde dentro en un partido revolucionario, que era justamente la estrategia que había preconizado Trotsky. Ambas organizaciones rechazaron la oferta de Carrillo y en torno a esta cuestión Maurin y Carrillo sostuvieron una larga polémica

periodística, que posteriormente fue recogida en un folleto titulado «Polémica Maurín-Carrillo»[38]

El proceso de unificación de las juventudes de ambos partidos PCE y PSOE, fue avalado por la dirección comunista. En concreto, en su reunión del último día del mes de marzo de 1936 el Comité Central del PCE aprobó unánimemente las razones adoptadas para la fusión. Es interesante señalar que en esta reunión del órgano de dirección comunista tomó parte el todavía militante socialista Santiago Carrillo, que «hizo una magnífica sugerencia política, declarar que la JS se propone adherirse definitivamente a la KIM [Internacional Juvenil Comunista] y procurar que el PS reformado junto con el PC se adhiera a la IC»[39]

El primer paso en este proceso unificador consistió en la homogeneización ideológica, homogeneización que se tradujo en: «la eliminación de toda una serie de concepciones que reflejaban influencias de tipo trotskista y de vanguardismo entre ellos [los jóvenes socialistas]… Ya se han pronunciado abiertamente contra el trotskismo como corriente contrarrevolucionaria y luchan dentro de sus filas por la expulsión de estos elementos. Tal es el caso de la decisión tomada contra la fracción dirigida por Bullejos y algunos elementos trotskistas en el seno de la Juventud Socialista de Madrid»[40]

La culminación de ese proceso desembocó en la creación de la Juventud Socialista Unificada (JSU). Que generó una dinámica de afiliaciones verdaderamente notable. Si la Juventud Comunista tenía antes del 16 de febrero 14.000 miembros y en el momento de la fusión contaba con 50.680; y la Juventud Socialista contaba con unos 65.000, dos o tres semanas después de la fusión la Juventud Unificada tenía ya 140.000 miembros.

El Pleno del Comité Central del PCE reunido en marzo de 1936 había fijado la celebración del V Congreso para agosto de aquel mismo año. La preparación del evento hizo que Moscú convocara a los dirigentes del partido en el mes de mayo. En esta reunión, Jesús Hernández presentó a la Internacional el programa del próximo cónclave del PCE, cuyo orden del día, aparte de los aspectos sectoriales y orgánicos, tendría como eje principal la formación del Partido Único del Proletariado.

Luego de pasar revista a la situación del país en los convulsos meses de la primavera de 1936, y de apuntar una serie de medidas, Hernández concluía su informe diciendo: «No planteamos como perspectiva inmediata la

instauración del poder soviético sino la lucha por la consolidación de la República democrática, es decir, que tomamos la orientación de la terminación de la revolución democrático burguesa, punto en el cual discrepamos de los socialistas que estiman aún en su inmensa mayoría que el problema actual es la lucha directa por la dictadura del proletariado y por el socialismo»[41] Y es que el 21 de mayo, los socialistas de Madrid habían acordado los objetivos siguientes: «Primero, la conquista del poder por la clase trabajadora por todos los medios posibles. Segundo, la transformación de la propiedad individual en propiedad colectiva social y común. En el período de transición, la forma de gobierno será la dictadura del proletariado»[42]

En vísperas de la Guerra Civil, el partido que había nacido 16 años antes procedente de las filas socialistas para instaurar la dictadura del proletariado, desbordado por la izquierda, posponía esa tarea central, y advertía a aquellos de los que había surgido como fuerza política autónoma, lo imprudente de lanzar semejante consigna en aquel momento. De hecho, el PCE no volvería a agitar por ella públicamente nunca más, aunque seguirá figurando en sus programas.[43]

NOTAS

1.- MUNIS, G. (1977): *Jalones de derrota, promesa de victoria. Crítica y teoría de la revolución española 1930-1939*, ZYX, Madrid, pág. 85.

2.- *Mundo Obrero*, 31/III/1936.

3.- CRUZ, R., (1987): *El Partido Comunista de España en la II República*, Alianza, Madrid, pág. 88.

4.- *Ibidem*. pág. 84.

5.- *Mundo Obrero*, 6/I/1933.

6.- TAGÜEÑA, M., (1976): *Recuerdos de dos guerras*, Planeta, Barcelona, pág. 81.

7.- CRUZ, *Opus cit.*, pág. 68.

8.- *Mundo Obrero*, 18/IV/1931.

9.- COLOMER, Comín (1967): *Historia del Partido Comunista de España. Primera Etapa*, Editora Nacional, Madrid. pág. 364.

10.- ELORZA y BIZCARRONDO, *Opus cit.* pág. 180.

11.- BULLEJOS, *Opus cit.*, pág. 199.

12.- CRUZ, *Opus cit.*, pág. 153.

13.- MATORRAS, *Opus cit.*, pág. 136-137.

14.- ESTRUCH, *Opus cit.*, pág. 79.

15.-VASSART Cilly y Albert (1966): «The Moscow origin of the French Popular Front», en *The Comintern: Historical Highlights*, Drachkovitch y Lazitch, Frederick A. Praeger, New York, pág. 246.

16.- CARR E. H. (1986): *El ocaso de la Comintern 1930-1935*, Alianza, Madrid, pág. 386.

17.- CABALLERO, Largo, F. (1976): *Mis recuerdos*, Editores Unidos, México, pág. 210.

18.- DÍAZ NOSTY, B. (1974): *La Comuna asturiana. Revolución de Oc-*

tubre de 1934, Zero, Bilbao, pág. 100.

19.- CRUZ, *Opus cit.* pág. 210.

20.- DÍAZ, José (1970): *Tres años de lucha*, Ediciones Ebro, París, pág. 13.

21.- CRUZ, *Opus cit.* pág. 230.

22.- TOGLIATTI, C., (1964): *Sul movimiento operaio internazionale*, Reuniti, Roma, pág. 137.

23.- OLIVEIRA, R., (1952): *Historia de España*, General de Eiciones, México, T. III, pág. 240.

24.- ARTOLA, M., (1975): *Partidos y programas políticos*, Aguilar, Madrid, pág. 457.

25.- ABC, 16/II/1936.

26.- PRIMO DE RIVERA, J. A. *Obras Completas*, Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y de las JONS, Madrid, 1959, pág. 909.

27.- HERNÁNDEZ Sánchez, F. (2010): *Guerra o Revolución. El PCE en la Guerra Civil española*, Crítica. Barcelona, pág. 75.

28.- HERNÁNDEZ, Jesús., (1974): *Yo fui ministro de Stalin*, G. del Toro, Madrid, pág. 17.

29.- VIDARTE, J-S. (1978): *Todos fuimos culpables*, Grijalbo, Barcelona, pág. 32.

30.- *Mundo Obrero*, 10/VI/1936.

31.- Las posiciones en contra de la huelga se pueden encontrar hasta en un artículo de *La Correspondance Internationale* (C. Falcón, «Les nécessités des masses et les difficultés que rencontre le gouvernement espagnol dans sa marche», nº. 32, 18/V/1936, pág. 877)

32.- BEEVOR, Antony (2011): *La guerra civil española*, Crítica, Barcelona, pág. 43.

33 .- ALBA, V. (1974): *Historia del BOC*, Portic, Barcelona, pág. 396.

34.- Preston, P. (2011) *La Guerra Civil española. Reacción, revolución y venganza (A concise history of the Spanish Civil War)*, Debolsillo, Barcelona, pág. 98.

35.- *Ibidem*, pág. 101.

36.- *Ibidem*, pág. 102.

37.- Díaz, J. (1970): *Opus cit*. pág. 215.

38.- Molina Ramón (1935/1978): *Polémica Maurin-Carrillo, Problemas de la unificación revolucionaria*, Calamus Scriptorius, Barcelona.

39.- Hernández Sánchez, *Opus cit*. pág. 73.

40.- *Ibidem*, pág 82.

41.- *Ibidem*, pág. 85.

42.- Thomas, Hugh (1977): *La Guerra Civil Española*, Grijalbo, Barcelona, Tomo I, pág 233.

43.- La última vez que aparezca el concepto de dictadura del proletariado será en el VIII Congreso, celebrado en julio de 1972, en el informe que presentó el Secretario General.

«Esa dictadura ya no puede concebirse sólo como el poder de los obreros que producen con sus manos, sino como el poder de todos los trabajadores, incluidas las fuerzas que tienen un papel directo en la producción moderna»; y lo hace como opuesta a la dictadura del capitalismo: «En los países capitalistas desarrollados, bajo las formas más ampliamente democráticas, existe de hecho y jurídicamente la dictadura del capitalismo. Porque todas las instituciones y leyes del Estado afirman la intangibilidad de la propiedad privada de los medios de produc ción y de cambio, y la defienden. En esto reside el contenido de la dictadura capitalista propio de las más famosas democracias burguesas actuales (...) De forma semejante, aunque con un fondo radicalmente opuesto, la dictadura de las fuerzas revolucionarias socialistas (...) puede ejercerse garantizando las libertades democráticas formales a la oposición burguesa hasta que ésta, convertida en anacrónica antigualla, y se extinga por sí misma a falta de base económica, social e ideológica»

Santiago Carrillo, (1972): *Informe al VIII Congreso del PCE*, Ed. Empresa Poligráfica, Bucarest, págs. 81-82.

IV
El PCE en la guerra
1936-1939

Ya a principios de agosto de 1936 Mola dijo a un periodista que una revuelta comunista «estaba preparada para el 29 de julio»[1]. Pero la primera referencia con amplia repercusión en la zona rebelde a la existencia de ese fantástico complot documentado[2] apareció en la Carta Pastoral de los obispos españoles, en agosto de 1937, planteando la rebelión del 18 de julio contra la República como «una carrera de velocidad entre el bolchevismo y la civilización cristiana»[3]

De ese modo el PCE cobró desde los inicios del conflicto un protagonismo que no se correspondía a su fuerza real en aquellos momentos, ni con el papel que podía desempeñar una formación que sólo contaba con 17 diputados en las Cortes, —todos ellos «desconocidos e ignorantes», en opinión de Indalecio Prieto[4]— ni con la escasa incidencia que tenía en el movimiento obrero y sindical.

Pero lo cierto es que, en un corto espacio de tiempo, el partido iba a crecer de un modo desmesurado, convirtiéndose así en uno de los principales

protagonistas del conflicto y, en función de eso, de la historia de nuestro país. Lo que la Komintern no había logrado en 16 años, lo consiguió el golpismo en tan solo unos meses, el PCE se transformó en un auténtico partido de masas.

Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, el partido reconocía contar con apenas 46.000 miembros, y visperas del golpe con 83.967. Sin embargo, las filas del PCE alcanzaran los casi 340.000 afiliados al terminar el año 1937. En ningún otro momento de su historia el partido ha llegado a tener esa envergadura.

Semejante aluvión de afiliaciones forzosamente tenía que cambiar la composición y el perfil de la militancia respecto a épocas anteriores, eso, sin tener en cuenta la prevención que se debe observar respecto a las cifras que se barajan, empezando por una tendencia a la exageración propia de todas las organizaciones políticas cuando evalúan sus efectivos. Por eso es preciso redimensionar la magnitud real del PCE en este periodo.

Aunque se dieran por buenos los 340.000 adherentes de 1937, eso no significa que el partido contara con ese número de militantes, tal y como se consideraba a estos según los principios de la organización. En primer lugar, se debe tener en cuenta que esas cantidades computadas por la secretaría de organización no se referían a militantes activos, sino a carnets distribuidos a los comités provinciales por la dirección central. Por tanto, para calibrar la afiliación real habría que contabilizar la cifra de carnets efectivamente entregados a una persona concreta, restándole la cantidad de carnets que no llegaban a distribuirse. En un informe del segundo semestre de 1937 se estimaba qué si el número de carnets expedidos por el Comité Central era de 341.282, los militantes controlados por los comités provinciales en diciembre de ese mismo año eran sólo de 246.027.

Estas prevenciones sirven también para el PSUC, la filial catalana del PCE, nacida el 23 de julio de 1936 como producto de la fusión de la Federación catalana del PSOE, el Partido Comunista de Cataluña, la Unió Socialista de Catalunya de Joan Comorera, y el Partit Català Proletari (PCP). Las fuentes oficiales afirmaban que el partido catalán tenía unos 50.000 militantes en marzo de 1937, y que en cinco meses iba a llegar a los 60.000. Ahora bien, en un informe de enero de 1938 se reconocía que se habían

dado cifras superiores a la realidad: el PSUC realmente contaba con menos de 40.476 militantes en julio de 1937.

Por otra parte, tener el carnet, es decir, estar afiliado, no implicaba ser militante. Una parte no desdeñable de los nuevos adherentes no se había integrado activamente en la vida del partido, y esto podía guardar relación con el tipo de afiliados que la circunstancia de la guerra habían llevado a la organización.

La militancia de los partidos comunistas podía ser clasificada con relación a una serie de factores que se basaban en conductas externas, que a su vez denotaban niveles de adhesión. El resultado puede expresarse gráficamente mediante un modelo consistente en tres círculos concéntricos: un núcleo central duro, compuesto por los militantes veteranos y la cúpula de dirección; un círculo medio fluctuante, compuesto por simpatizantes y miembros de las organizaciones satélites, tendentes a la integración militante ante expectativas favorables o en coyunturas de efervescencia política, pero con cierta tendencia al repliegue y el retraimiento en momentos desfavorables; y un círculo exterior, de aluvión, integrado por recién llegados, incluso por oportunistas y emboscados ante la confusión de la guerra; con un moderado o escaso compromiso militante y elevada volatilidad. Estos dos últimos sectores fueron los que nutrieron el crecimiento del PCE a lo largo del conflicto.

Los nuevos militantes respondían a la siguiente tipificación social: el 40,84% eran obreros, mientras el 42,18% eran campesinos, el 8,3% empleados, el 4,4% intelectuales o gentes de profesiones liberales, y el 4,1% pequeños comerciantes. El hecho de que los obreros representaran menos de la mitad de las nuevas incorporaciones llamó la atención tanto de la Komintern como de los observadores externos. Según todos ellos, el partido tenía una militancia distanciada de lo que se esperaba fuese la estándar de un partido comunista, que seguía siendo fundamentalmente masculino ya que las mujeres solamente representan el 8% de los efectivos.

El partido que se consideraba la vanguardia de proletariado se había convertido en un partido de las clases populares, tal y como lo reflejaba la composición de los delegados al Pleno del Comité Central celebrado en Valencia en marzo de 1937. Al menos el 56% eran asalariados de la industria y el campo, y un tercio se dividía a partes casi iguales entre pequeños propieta-

rios e intelectuales. Unas estadísticas que, con pequeñas variaciones, se reproducían en el PSUC. Ambos partidos se nutrieron mayoritariamente de los sectores identificados con el proyecto frentepopulista que hasta entonces no habían estado organizados políticamente.

En este crecimiento interclasista influyó de modo poderoso, como estima Martín Ramos,[5] el representar una propuesta política concreta: la del frentepopulismo como estrategia, que suponía la búsqueda de un proyecto de modernización social y política del país, más que la revolución socialista. Este proyecto, que antes de la guerra lo había encarnado un sector del PSOE —el centrista cercano a Prieto—, fue rescatado durante la contienda por un PCE que consideraba la revolución social como un obstáculo para el afianzamiento de la República. De tal modo que cada vez hubo menos contenido ideológico estrictamente comunista en el discurso del PCE.

Esta nueva realidad alteraba el teórico perfil del viejo militante, —el obrero o el campesino revolucionario que prendado por los logros de la revolución de Octubre de 1917, luchaba contracorriente por la consecución del socialismo en nuestro país— para abrirse a un abanico de nuevos perfiles, mucho más variado, complejo y de difícil tipificación.

En primer lugar podemos mencionar al nuevo afiliado que buscaba refugio en un carnet para poder capear mejor la coyuntura que se había producido con la guerra y con la incipiente revolución que se desencadenó. Graham[6] ha explicado que el contexto general neoclientelar indujo a que la gente ingresara en partidos y sindicatos buscando protección social y política en unos tiempos inciertos y caóticos, y muchos optaron por el PCE porque era la formación mejor organizada, más disciplinada y más eficiente.

Para ejemplificar el carácter de partido-refugio adquirido por el PCE, se puede mencionar el caso del padre de los hermanos Goytisolo, «hombre más bien de derechas pero [que] entró en el PSUC para defenderse de los anarquistas que querían apoderarse de la fábrica en la que trabajaba como ingeniero»[7]

Otro tipo del nuevo militante, más allá del simple afiliado, era aquel que, por distintas razones, estaba firmemente convencido de lo acertado de la política frentepopulista por convicción ideológica y sin tener en cuenta sus intereses de clase. Un buen ejemplo de lo que decimos es el de Constancia de la Mora. De linaje aristocrático, su educación le había permitido conver-

tirse en una mujer «moderna», sensible a las ideas de progreso social y político que podía comportar la República, de la que se convirtió en ardiente defensora. Divorciada y casada en segundas nupcias con el jefe de la aviación republicana, creía firmemente en los valores de modernidad que suponía el proyecto republicano. Su entrada en el PCE respondía al planteamiento de considerar esa opción como la mejor en la defensa de esos mismos valores. Consideración que se veía reforzada por la ayuda militar que la URSS prestaba a la República.

Otro tipo de afiliado de circunstancias fue el oportunista, muy frecuente en las filas del ejército. La posibilidad de un buen destino, o de un ascenso, o el simple acomodo dentro del aparato funcionarial, podía animar a la afiliación si esta comportaba alguna mejora personal. Un caso paradigmático dentro de este tipo lo ofrece el «héroe» de la defensa de Madrid, el famoso general Miaja, que abrumado por los halagos del agit-prop del PCE se afilió al partido.

El general José Miaja, comandante republicano del frente sur y después de Madrid durante el asedio, era uno de esos altos oficiales que probablemente se mantuvo leal a la República más por la fuerza de las circunstancias que por convicción propia. Al marcharse el Gobierno de Madrid en el otoño de 1936 confió la defensa de la capital al general Miaja, que había sido miembro de la Unión Militar Española, que tan importante papel había jugado en los planes iniciales de los golpistas. Ministro de la Guerra durante algunas horas en el Gobierno de coalición formado por Martínez Barrio la noche del 18 de julio, y convencido de que los rebeldes vencerían a la República, rehusó continuar en ese puesto con el Gobierno Giral.

Durante la mañana del día 19 de julio, cuando recibió la orden de que se entregasen armas a las organizaciones obreras, el Gobierno tuvo que ponerlo firmes, porque Miaja se negaba a obedecer. Sin embargo, le encantaba la popularidad y era muy sensible a la lisonja. Como el partido lo elevó a la categoría de héroe, Miaja, emocionado, se afilió al PCE. Azaña recordaría después con sorna el «comunismo» de Miaja: «¡De dónde le habrá venido a Miaja el comunismo, cuando hace cuatro años, siendo yo ministro de la Guerra, me decía que era muy republicano, pero que con los socialistas no podía transigir y había que fusilarlos!»[8]

Al final de la guerra el «héroe de Madrid» secundó el golpe de Casado contra el gobierno de Negrin al que apoyaban los comunistas. Fue entonces cuando Dolores Ibárruri consideró a Miaja como parte de la «terrible herencia de errores, de debilidades, de favoritismos… legadas al Gobierno de Unión Nacional»[9]

Por último, nos encontraríamos con el caso del intrigante habilidoso que se sabe camuflar hasta que lleguen los suyos. Este tipo de personajes se debieron prodigar en todas las formaciones y el PCE no fue una excepción, como lo demuestra el caso, —podemos presuponer que entre otros muchos— de Pedro Álamo Orejón, integrante del primer comité del radio de Villaconejos de Trabaque en 1937, cosechero de cereales que en 1943 sería designado alcalde y jefe local de FET y de las JONS, además de concesionario del estanco.

Realmente el enorme partido de masas que aparentaba el PCE descansaba en un núcleo duro, compuesto por militantes veteranos, y por la cúpula de dirección, de reducido tamaño y relativamente estable. Este núcleo, acostumbrado a la disciplina, aceptaba la línea política con la profunda convicción de que era la única correcta, y se amoldaba con facilidad a las modulaciones que se pudieran producir. Pero ese cimiento era muy reducido. El 75% de los miembros del partido lo eran a partir de julio de 1936, y de la cuarta parte restante, solo un 18% había militado en la época relativamente normal de febrero a julio de dicho año. Con las pérdidas experimentadas en los primeros meses de la guerra se puede estimar que la «vieja guardia», con más de dos años de antigüedad en la organización, debía rondar los 10.000 militantes, bregados en la estrategia del tercer período de la Internacional.

Estos comunistas *outrance* se encontraron enfrentados a las circunstancias de una guerra civil, en la que sus ideas les podían conducir a la muerte con extrema facilidad. Eso no implica que muchos de los incorporados al calor de esas mismas circunstancias se convirtieran rápidamente en entregados militantes de la causa, dispuestos a morir por ella, o a matar. Esto dará como resultado el último perfil del militante comunista durante la guerra.

El hecho es que la política de todos los partidos comunistas oficiales había estado supeditada desde sus orígenes a la evolución de la Unión Soviética, y en la década de los 30 a la influencia del estalinismo. Éste favorecía

el dogmatismo, el sacrificio, y la dureza; y la Internacional Comunista sólo era una cámara de resonancia y un agente ejecutor de las decisiones de Stalin. El marxismo-leninismo fue una invención de los años treinta, que permitió constituir un cuerpo de doctrinas estandarizado. Esta doctrina despertaba a millares de hombres a la lucha revolucionaria y les daba, sobre todo en los países más pobres, un principio de formación teórica elemental. Muchos militantes fieles a los intereses de los trabajadores vivían esta doctrina con un compromiso total y sincero, y en época de guerra con una total entrega.

Los comunistas españoles se veían a sí mismos como los únicos que podían dirigir a las masas con acierto. Cualquier titubeo se consideraba como una flaqueza pequeñoburguesa, cuando no como traición al proletariado internacional. Ettore Vanni, un importante dirigente del Partido Comunista Italiano que se encontraba en España decía que su disciplina «se acepta con un fanatismo que a un tiempo nos deshumaniza y constituye nuestra fuerza»[10]

Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, es un buen ejemplo de este último perfil de militante comunista. Mercader no era un sicario de baja extracción sin ninguna formación intelectual capaz de cometer cualquier acto guiado por instintos primarios o por una escasa inteligencia que le hiciera fácilmente manipulable. Mercader era una persona inteligente de modales refinados, con una formación que le permitía dominar a la perfección el inglés y el francés, al punto de engañar durante años a los investigadores a propósito de su origen. Tampoco era un suicida, un fanático religioso que se moviese por recompensas sobrenaturales. Era un hombre que consideraba que sus actos contribuirían a una causa que beneficiaría a toda la humanidad, y ante la cual las convenciones tradicionales carecían de entidad.

La guerra y la lucha contra el fascismo endureció a muchos militantes comunistas, los convirtió en más duros, más dogmáticos y más disciplinados al servicio del partido.

Por otra parte, la estructura organizativa del PCE no experimento sustanciales modificaciones respecto a la época anterior, simplemente se ajustó a las realidades de la guerra regida por el centralismo democrático y por la doctrina oficial. Esto daba como resultado un aparato fuertemente disciplinado respecto a una dirección producto de la cooptación o designación

para el desempeño de un puesto de responsabilidad en un comité superior a iniciativa de ese mismo comité, sin que mediara elección por una asamblea de base. Esto se tradujo en una forma peculiar de promoción interna, que premiaba la fidelidad del cuadro ortodoxo.

La Escuela Leninista de Moscú formó, seleccionó y distribuyó los cuadros de una segunda generación de dirigentes jóvenes, y se completó durante la contienda con escuelas de distinto tipo en el interior del país. No obstante, la sustitución del análisis marxista por un recetario de fórmulas estereotipadas permitía el adiestramiento en cuestiones prácticas, pero el resultado final era la limitación en las discusiones políticas.

Al frente de esta organización del partido se encontraba Pedro Fernández Checa, un delineante; con una enorme capacidad de trabajo y planificación, que conjugaba con una gran modestia y timidez. Muy bien aceptado por la base del partido, antes de la guerra apenas si era conocido fuera de la alta dirección de la IC que algo debió de ver en él, porque sin ser siquiera suplente del Comité Central le colocó a la cabeza de la secretaría de organización. La orden de su incorporación al Buró Político la dio directamente la Komintern.

La guerra vino también a transformar significativamente la organización territorial, siendo uno de sus efectos más importantes la pérdida de bases territoriales como Andalucía y Extremadura, donde el partido contaba con una fuerte presencia antes del golpe fascista. En Galicia, por la misma circunstancia, se produjo un desplazamiento en busca de refugio en la zona leal más próxima (Asturias). Otras evacuaciones y el traslado de la administración gubernamental a Valencia densificaron la militancia en las provincias del centro y Levante.

En Cataluña, con el nacimiento del PSUC nada más comenzar el conflicto, el partido adquirirá una personalidad propia y relevante, dado los acontecimientos que en ella se desarrollaron. Algo parecido, pero de importancia menor, ocurrió en el País Vasco. El PC de Euskadi, con entidad propia, nació antes que el PSUC catalán. Sus orígenes se remontaban a marzo de 1934, cuando se planteó transformar la Federación Vasco-Navarra del PCE en una organización con perfil nacional. El congreso constituyente del PC de Euskadi se celebró en Bilbao a principios de junio de 1935, agrupando a unos 800 afiliados; el 18 de julio del 36 contaba con 4000. Como

en otros lugares, la guerra alimentó la afiliación, hasta llegar a los 12.000 miembros en febrero de 1937, pero también puso de relieve los problemas del comunismo vasco.

En el País Vasco, el golpe militar, y la respuesta que se le dio, no desarticuló la hegemonía ideológica de la que gozaba el PNV en ese territorio. Aprobado el Estatuto de Gernika al comienzo del conflicto, el secretario del PC de Euskadi, Astigarrabía, desempeñó la cartera de Obras Públicas en el recién nacido Gobierno vasco. Pero la caída del frente Norte precipitó la crisis entre la dirección estatal y la del PC vasco. En el Comité Central del PCE celebrado en Valencia en noviembre de 1937, se acusó a Astigarrabía de no hacer una política independiente del PNV, y de «defender los intereses de los capitalistas vascos». Finalmente se acordó su expulsión.

En Asturias, a pesar de la tradición de lucha obrera de la región, los comunistas quedaron en medio de una pinza formada por los anarquistas y los socialistas, y su papel no fue muy relevante. En Santander la situación fue algo mejor. En vísperas de la guerra el PCE contaba con unos 1000 afiliados, y como en otros lugares, el partido incrementó significativamente sus filas a partir de julio de 1936. En marzo de 1937 estaban registrados 10.000 miembros, agrupados en once comarcales y 92 radios. Respecto a su composición social, predominaban los campesinos propietarios (6000), seguidos de los obreros (3000), clases medias (700) e intelectuales (300).

Como podemos apreciar la composición social del partido respondía al nuevo modelo de organización surgido de la estrategia frentepopulista, pero este rasgo aún se hacía más evidente en la meseta sur, una de las regiones donde el PC experimentó un mayor grado de desarrollo durante la guerra. Cuenca —tradicional feudo conservador— podría considerarse como un ejemplo de adherentes comunistas por reacción defensiva a la presencia de las fuerzas anarquistas que chocaban con la población de pequeños propietarios campesinos, allí el crecimiento del partido fue espectacular, de 80 adhesiones en febrero de 1936, a 12.500 en noviembre del 37.

Pero el caso más emblemático en este sentido es, sin duda, el de Aragón. En los primeros meses de la guerra el PC experimentó un ligero crecimiento, se organizó muy lentamente, y comenzó a intervenir con fuerza en la UGT de la provincia de Zaragoza, ya que la capital estaba en manos de los sublevados, pero continuó sin tener apenas presencia en los consejos

municipales. Pero con la disolución del Consejo de Aragón y la represión de las colectividades anarquistas esta situación cambió radicalmente y las adhesiones al PCE se dispararon. Las categorías profesionales de los nuevos afiliados no dejaban duda del carácter de «refugio» que buscaban en el PCE los pequeños propietarios agrícolas. «El PC aragonés se convirtió en una especie de agencia de mediación entre los campesinos que acudían para reclamar la devolución de sus tierras y aperos tras la disolución de las colectividades y el Instituto de Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura detentado por los comunistas»[11]

La organización formal del partido se complementaba con una serie de movimientos, asociaciones u organizaciones que orbitaban entorno a él. Agrupaban a sectores sociales no vinculados orgánicamente al partido, pero que formaban un conglomerado relacionado de una u otra forma con el PCE. El más importante colectivo de esta nebulosa fue la Juventud Socialista Unificada (JSU), muchos de cuyos dirigentes se pasaron a las filas comunistas durante el asedio de Madrid. La JSU se convirtió, sin duda, en una de las organizaciones más numerosas de la República en guerra, según el primer informe de Togliatti a la IC en agosto de 1937, alcanzaba la cifra de 350.000 afiliados.

Por su edad, la mayor parte de sus componentes, unos 250.000, estaban movilizados en el ejército a finales de septiembre de 1937. En el ámbito de la retaguardia la JSU fundó Brigadas de Choque, unidades para la intensificación de la producción, siguiendo el modelo soviético estajanovista. La JSU tuvo también su rama femenina, la Unión de Muchachas, fundada en mayo de 1937. A pesar del carácter progresista de su ideología y de la incorporación de mujeres a la lucha, la organización juvenil no supo distanciarse abiertamente de algunos valores presentes en la clásica división sexual de funciones.

Fuera del ámbito juvenil, las otras grandes organizaciones de este conglomerado que orbitaba entorno al PCE fueron las fracciones sindicales OSR (Oposición Sindical Revolucionaria). Los comunistas guiados por la estrategia frentepopulista se habían reingresado en la UGT, abandonando sus pretensiones de articular una central sindical propia. También estaban los Amigos de la Unión Soviética (AUS), el Socorro Rojo Internacional (SRI) y la Asociación de Mujeres Antifascistas (AMA).

Toda esta estructura organizativa estaba dinamizada por el gigantesco aparato de agit-prop del partido, que se podría calificar como una «megafactoría de producción de contenidos ideológicos»[12] Los artífices de este formidable mecanismo fueron Jesús Hernández —ministro de Instrucción Pública en el gabinete Caballero— y colaboradores suyos, como Wenceslao Roces, Eusebio Cimorra o Navarro Ballesteros.

No hubo manifestación cultural que el agit-prop comunista dejara sin emplear, desde la literatura en todos sus niveles —popular, infantil, de vanguardia—, la prensa —periódica, semanal, especializada, para el extranjero—, el grafismo, o el teatro, hasta los modernos medios audiovisuales —la radio y el cine— con su enorme capacidad de sugestión y adoctrinamiento en una sociedad con elevadas tasas de analfabetismo. Las actividades del Altavoz del Frente, con sus emisiones radiofónicas y la proyección de películas soviéticas como *El acorazado Potemkin* o *Los marinos de Kronstadt*, permitían llegar a todo el mundo.

El partido produjo una enorme cantidad de publicaciones, tanto de prensa periódica, como *Mundo Obrero* —en Madrid— y *Frente Rojo* —en Levante—, como de carácter teórico: *Nuestra Bandera*. Todas tenían como común denominador una concepción totalmente moderna tanto en maquetación como en recursos gráficos, como lo demostraban los carteles propagandísticos de Josep Renau. Las fotografías y dibujos se utilizaban para transmitir imágenes idealizadas y arquetípicas, según modelos iconográficos popularizados tanto por las vanguardias artísticas como por el naciente realismo socialista soviético. Era este el material con el que los militantes comunistas alimentaron su formación teórica, que continuó siendo rudimentaria.

A lo largo de la contienda, diariamente, millones de personas tuvieron acceso a la propaganda del PCE a través de publicaciones, emisiones radiofónicas, películas, representaciones musicales o teatrales, carteles o mítines-relámpago y otro tipo de actos de masas. Es indudable que fue esta extraordinaria capacidad propagandística la que contribuyó a generar una percepción de omnipresencia comunista en todos los ámbitos del frente y la retaguardia, resultando finalmente un arma de doble filo en estrecha relación con la política que el PCE desplegó.

La política desarrollada por el partido se ajustó a la estrategia de los frentes populares dictada en el VII Congreso de la Komintern, pero el golpe fascista hizo que esa política tuviera que desplegarse ante un escenario singular en el que la situación generada tras el 18 de julio en la zona leal a la República cobró tintes de auténtica revolución social. Pero el frentepopulismo suponía el aplazamiento *sine die* de los objetivos revolucionarios. Por eso, allí donde se combatía abiertamente al fascismo, el partido debía limitarse a la defensa de la democracia y, a lo sumo, a transformaciones sociales, más o menos profundas, pero no socialistas.

Sin embargo, la sublevación militar, y el fracaso de los objetivos inmediatos que se proponían los golpistas, crearon las condiciones necesarias para desencadenar un proceso revolucionario, emprendido por un segmento considerable del proletariado y campesinado español, impulsado por la CNT, la izquierda del PSOE y el POUM. Así, sectores sociales muy importantes, organizados o no, política y sindicalmente, respondieron al intento de derribar la República por la fuerza, con un movimiento, en su sentido más lato, de signo anticapitalista. No obstante, es preciso cuestionar el alcance de ese proceso revolucionario, y calibrar su desarrollo, para poder analizar la oposición que ejerció el PCE frente al mismo.

Geográficamente la revolución española quedó drásticamente limitada por el triunfo de los sublevados en buena parte del país. El 18 de julio de 1936, la rebelión busca la conquista de las grandes ciudades. Hasta el día 21 la situación fue caótica. Se combatía en Barcelona, Madrid, Toledo, y en todas partes. A partir de esta fecha fue posible trazar una demarcación. Franco era amo de las provincias comprendidas en una línea que iba desde la frontera con Portugal, seguía hacia el Noreste, hasta la sierra de Guadarrama, por encima de Madrid, y finalmente llegaba hasta los Pirineos, dividiendo en dos la frontera con Francia. Continuaba en manos de la república Asturias, Santander, el País Vasco y las provincias orientales y del Sur.

De este balance se desprende que una buena parte de la capacidad revolucionaria del país se vio seriamente mermada en los primeros días del golpe. Hacia finales de julio, los cuadros y la militancia más activa de regiones tan importantes como Andalucía, habían sido masacrados, y estaban irremediablemente perdidos para la causa revolucionaria.

El éxito del golpe en alguna de estas zonas venía a desmentir el hipotético potencial revolucionario que pudieran tener las organizaciones obreras en esas áreas. En este sentido, resulta revelador ver la rápida dominación por los fascistas de dos bastiones tan emblemáticos como eran Sevilla y Zaragoza. La primera, el enclave más importante del PCE junto con Madrid, y la segunda, la principal fortaleza del anarcosindicalismo después de Barcelona.

Por otra parte, la revolución que se desencadenó no tuvo, ni mucho menos, la misma intensidad en toda la zona republicana. En el País Vasco, el contragolpe frente a los sublevados estuvo controlado en todo momento por los partidos republicanos y el Partido Nacionalista Vasco, una formación política que en ningún caso iba a apoyar una revolución social, y mucho menos anticapitalista.

En el periodo anterior a la formación del Gobierno de Euskadi, el nacionalismo vasco fue el contrapeso moderador de las tendencias izquierdistas. Los nacionalistas vascos se opusieron a las ejecuciones —incluyendo las de los militares rebeldes—, a las destrucciones de propiedades privadas, y defendieron ardientemente a la Iglesia —en todo Euskadi no se quemaron más que dos iglesias, en San Sebastián, y ello en el desorden de los primeros momentos posteriores a la sublevación. Velaron igualmente por el cumplimiento de la legalidad en las detenciones; en Bilbao se encarceló en la prisión de Larrínaga a aquellos elementos de derechas comprometidos con el golpe; pero en número incomparablemente menor al de otras zonas de la República, pues apenas llega a 150.

El régimen social a finales de julio en Euskadi no tenía nada de revolucionario. Las empresas no se colectivizaron; sólo se incautaron las fábricas de armas y las que pertenecían a los golpistas. Estas fueron dirigidas por una Junta de Administración en la que los obreros, aunque estaban representados, no podía controlar. Se incautó parte del capital de los Bancos vascos —unos 9000 millones de pesetas— en cuanto a los gigantes industriales siguieron funcionando en régimen privado, como es el caso de Basconia, Altos Hornos y Babcock-Wilcox. Algunas escasas medidas sociales, como la prohibición de dirigir más de una empresa, y la reducción de las rentas en un 50% —ley promulgada por la República— contrapesarán este mantenimiento puro y simple de las relaciones capitalistas.

Este posicionamiento quedó ratificado cuando, —según avanzaban los franquistas hacia Euskadi— el ala más «colaboracionista» del PNV (Ajuriaguerra y Leizaola) trató de negociar una paz separada con los italianos por medio del cónsul de Italia en San Sebastián, gracias a la cual las tropas italianas protegerían a la población civil de Bilbao, en tanto que los nacionalistas vascos se comprometían a evitar cualquier desorden en la capital.

En Madrid la efervescencia revolucionaria no desbordó en ningún momento la columna vertebral del aparato de gobierno, que si bien no quedó intacta siguió subsistiendo. La fuerza más dinámica en el proceso que se desencadenó en la capital era la UGT, pero las medidas que se adoptaron no eran muy revolucionarias. Sólo se expropiaron las industrias y los inmuebles cuyos propietarios habían apoyado a los golpistas. Todas las empresas que producían o podían producir material de guerra también fueron requisadas nominalmente por el ministerio de la Guerra, pero de hecho por comités de trabajadores. Más adelante, los directores de otras empresas pidieron ellos mismos la formación de esos comités, para compartir las responsabilidades y así evitar, tal vez, peores consecuencias. Pero, en agosto, sólo una tercera parte de la industria de Madrid estaba controlada por el Estado, y los bancos no fueron incautados. Hubo una moratoria para las deudas y una limitación de las cantidades que se podían retirar de las cuentas corrientes, pero, aparte de esto, la actividad de los bancos continuó normalmente.

La revolución en la capital del Estado era más aparencial que real, y era esa imagen virtual lo que recogía la prensa extranjera. Por ejemplo, llamaba la atención que el lujoso hotel Ritz se hubiera convertido en hospital militar, o que el hotel Palace se hubiera transformado en refugio para niños abandonados. Se puede decir que los signos externos más llamativos de lo que se podía considerar una revolución en Madrid eran los restaurantes colectivos organizados por los sindicatos. También los periódicos de derechas fueron incautados por sus rivales de izquierdas, y como era lógico se estableció la censura, al tiempo que la propaganda de las formaciones gubernamentales invadía las paredes de la ciudad.

En el ámbito donde el poder gubernamental perdió el control durante un tiempo fue en la represión que se desencadenó tras el golpe. Los asesinatos nocturnos, y la consiguiente aparición de cadáveres en los descampa-

dos, o el funcionamiento de cárceles incontroladas (checas) indicaban la debilidad del aparato represivo estatal.

Pero el factor que más contribuyó a la inestabilidad y debilidad gubernamental frente al golpe y frente a la revolución, fue la desarticulación de su poder militar. La República tuvo que reconstruir un ejército, nada fácil de improvisar, y que presentó desde sus inicios problemas de mando, material y eficacia combativa. Es esta circunstancia una de las que condujo a desempeñar un importante papel a la URSS y al PCE como partido mediador de la ayuda militar que se recibía del exterior.

Es cierto que en el territorio republicano el viejo orden social y político se vio alterado en mayor o menor medida según las zonas, pero en ningún caso se produjo un proceso revolucionario homogéneo tendente a consolidar un poder alternativo al oficialmente existente que era el republicano. En fin, la dislocación del poder constitucional en la República obedeció en ciertos ámbitos a la manera en que la sublevación fue vencida mediante la intervención hegemónica de fuerzas sociales revolucionarias. Por eso en los casos más avanzados podemos decir que se dio una situación de doble poder, entre los múltiples consejos y comités obreros y campesinos de signo revolucionario, y el poder gubernamental de la República burguesa, que siguió, a pesar de todo, sobreviviendo.

Los núcleos más consistentes del poder revolucionario se configuraron en Cataluña y una parte de Aragón, bajo el impulso de los anarcosindicalistas. El caso más claro de doble poder se pudo visualizar en Barcelona los días posteriores al aplastamiento de la sublevación fascista por los obreros.

El 21 de julio, al terminar los combates en Barcelona, los revolucionarios, que eran dueños de las calles, acudieron al palacio de la Generalitat, no para formalizar la toma del poder, sino para entrevistarse con el Presidente Companys de Esquerra Republicana, que en la tarde del 18 de julio se negó a que se armara a la CNT. Companys les dijo a los anarquistas: «Habéis vencido y todo está en vuestro poder. Si no tenéis necesidad de mí, si no me queréis como presidente, decididlo ahora y me convertiré en un soldado más de la lucha antifascista…»[13]

Los anarquistas, reacios a cualquier forma de poder rechazaron tomarlo ellos, y consintieron que continuara existiendo en forma de legalidad republicana, pero ahora con su apoyo explícito. Así se escenificó el callejón sin

salida del anarquismo. ¿Cómo se organiza una sociedad sin gobierno? Companys, hábilmente, consiguió garantizar en la práctica la continuidad de un poder estatal, por más que de momento quedase situado en un segundo plano.

En Barcelona, y algunas partes de Aragón, se ensayaron principios de anticapitalismo autogestionario, convirtiéndose en la ilusión de unos visitantes extranjeros ansiosos de contemplar experiencias radicales. Para Franz Borkenau «al doblar la esquina de Las Ramblas surgió una tremenda sorpresa: ante nuestros ojos, como un relámpago, se desplegó la revolución».[14] Para Kaminski «Siempre, y en todos los rincones de Barcelona se oía la Internacional… En efecto, no solamente ofrecía el aspecto de una ciudad poblada exclusivamente de obreros, sino de una ciudad en la que los obreros tenían el poder»

Pero este cronista, favorable a la revolución, superando la superficialidad, era más agudo en sus observaciones y añadía: «la revolución social en España concierne sobre todo a Cataluña, mientras que en el resto del país, controlado por los gubernamentales, el frente popular prevalece e impone una política más moderada»[15]

Más allá de esta realidad, emocionalmente vivida, se dibujaban los trazos de una revolución imprecisa y sin dirección. En Madrid, sin ir más lejos, la respuesta obrera al golpe no llegó tan lejos como en Barcelona, y en ésta, las medidas revolucionarias, no afectaron a sectores neurálgicos como la banca, controlada por la UGT, o el mismo capital extranjero. El termómetro de la fiebre revolucionaria nos revela que fue la Generalitat la que llegó a convenir un acuerdo con el consulado británico en la capital Condal para proteger a 87 fábricas de propiedad británica en dicha zona.

A nivel central, derrotados los golpistas, el poder republicano siguió en manos del Gobierno Giral, un representante de la pequeña burguesía que no sabía cómo responder a la nueva situación. Pero en definitiva, el aparato del Estado sobrevivió, pese a las apariencias de una conquista revolucionaria del poder.

Por otra parte, las direcciones sindicales y políticas que impulsaban y mantenían el intento revolucionario se hallaban divididas con orientaciones y pretensiones muy distintas. Todas estaban de acuerdo en que había que derrotar al fascismo, pero más allá de este deseo, sólo reinaba el entusiasmo

y la desorientación. En el seno de la CNT convivían las tendencias más diversas que abarcaban desde las radicales, sostenidas por la FAI, a las más moderadas, defendidas por el sindicalismo político de Pestaña. Controlando la dirección de ese poderoso sindicato, que era el principal sostenedor del proceso revolucionario, se encontraba una tendencia centrista que, conforme aumento la presión, fue adoptando posturas cada vez más moderadas.

El PSOE y la UGT estaban también divididos. El ala más derechista, encabezada por Prieto, se oponía abiertamente a la revolución y a todo lo que él llamaba «excesos», que ofrecían al mundo una imagen inquietante de lo que estaba sucediendo en el bando republicano, lo que podía suponer la pérdida de apoyos por parte de las democracias burguesas. La corriente izquierdista en estas organizaciones estaba encabezada por un veterano reformista, Largo Caballero, al que las circunstancias le habían llevado a cabalgar el tigre de la revolución sin tener claro qué tipo de régimen deseaba.

El POUM era una pequeña formación con apenas un año de vida y una escasa implantación. Consideraba que la situación que se había creado era propicia para impulsar una revolución socialista, pero sabía que carecía de fuerza para dirigirla. Criticaba a los anarcosindicalistas por su indefinición, y al PCE por querer salvar en esa coyuntura a una República que por su propia naturaleza original no podía ir muy lejos en un proceso de transformación radical y anticapitalista. Por boca de su dirigente Andreu Nin se afirmaba que «contra el fascismo solo hay un medio eficaz de lucha: la revolución proletaria»[16] En otras palabras, únicamente una revolución proletaria a gran escala podía destruir el capitalismo que había engendrado al fascismo.

En el plano internacional la revolución tampoco contaba con un escenario propicio. De hecho, las democracias burguesas temían el potencial revolucionario español hasta el punto de negar un apoyo explícito a la República amparándose en la farsa de la No Intervención. Solamente la URSS quedaba comprometida por los acontecimientos que se estaban desarrollando en nuestro país. Teóricamente, el Estado soviético debería haber impulsado la revolución iniciada, pero lejos de adoptar esa postura, sus intereses en política exterior le llevaban a hacer equilibrios, entre el papel que el mundo le asignaba, como demiurgo de la revolución mundial, y los acuer-

dos diplomáticos a los que aspiraba frente al peligro nazi-fascista, que amenazaba a la URSS.

Hitler y Mussolini habían concluido en octubre de 1936 una verdadera alianza: «No es un diafragma —dijo Mussolini en Milán el 1 de noviembre de 1936—, sino más bien un eje»[17] Japón y Alemania firmaron el 25 de noviembre de ese mismo año de 1936 un pacto «anti-Komintern». Este pacto ideológico y político iba dirigido directamente contra la URSS. Desde 1932 Japón acosaba a China, pero hasta julio de 1937 no se desarrolló la guerra abierta, que permitió a los japoneses a finales de año ocupar Pekín, Shanghai y Nankín. Así pues, el eje Roma-Berlín y el pacto anti-Komintern constituían etapas importantes en la marcha hacia una guerra contra la Unión Soviética. Con ese contexto internacional, la revolución española se convirtió para los soviéticos en una «revolución inoportuna», tal y como la califico Claudin.[18]

La URSS no poseía en España intereses económicos o estratégicos; no había participado en la ocupación de Marruecos, ni siquiera en la internacionalización de Tánger. Su marina nunca había operado en el Mediterráneo occidental. Ni siquiera existían relaciones diplomáticas estabilizadas con nuestro país. El embajador designado por Moscú, Marcel Rosenberg, llegó a Madrid comenzado ya el conflicto. Pero ¿cómo podía obviar la URSS que la República Española está gobernada por un frente popular y amenazada por una agresión fascista?

El 4 de octubre, el Gobierno soviético firmó el pacto de No Intervención, que le aseguraba una posición formal de neutralidad; sólo con esta baza entre las manos, Stalin dio luz verde a la ayuda soviética a la República. Pero esa ayuda quedaba condicionada a que no se superase el marco de la democracia republicana, a fin de no espantar a las potencias occidentales, Inglaterra, y sobre todo, Francia, a las que Stalin cortejaba para firmar un pacto frente a la amenaza fascista. Esta postura suponía impedir el progreso de la revolución en nuestro país. Lo más que se podía aceptar es que en España existiese una república parlamentaria pero que respetara el sistema capitalista y la propiedad.

Así, para el PCE, la lucha no estaba entablada, entre revolución y contrarrevolución, socialismo y burguesía, sino entre democracia y fascismo, lo que convertía en necesario el mantenimiento del Frente Popular y la alianza

con los republicanos burgueses, el respeto a las instituciones legales, a la democracia parlamentaria y al gobierno existente.

Con este escenario nacional e internacional la revolución española se convirtió desde sus inicios en una «revolución improbable», y frente a ella se posicionó el PCE con todo el potencial que fue capaz de desarrollar. En esa estrategia no estuvo solo, el ala derecha del socialismo, y los partidos republicanos lo flanquearon casi hasta el final de la contienda. Y como las situaciones de doble poder son siempre transitorias, en un breve espacio de tiempo, la «revolución improbable» quedó desarticulada o reconducida.

En el invierno de 1936, pocos meses después del comienzo de esa revolución, los poderes formales de la República habían recuperado ya una buena parte del control. A finales de septiembre la CNT ya se había mostrado de acuerdo con la disolución del Comité de Milicias Antifascistas, que había imperado en Cataluña desde el 19 de julio, y había admitido su participación directa en la Generalitat junto al PSUC, la Esquerra y el POUM. Un Gobierno presidido por Josep Tarradellas de Esquerra Republicana, se constituía el 26 de septiembre, presentando la particularidad de que por primera vez en la historia los anarquistas formaban parte del poder político.

Hasta noviembre se habían adoptado medidas importantes en el plano militar: se había acabado con la mayor parte de los comités, y la política militar estaba superado la fase de las milicias voluntarias con el fin de crear un verdadero Ejército bajo la supervisión de un Comisariado de Guerra.

A principios de 1937 ya se había reorganizado la policía regular, que comenzaba a funcionar normalmente. La Guardia de Asalto había aumentado, hasta contar con cerca de 40.000 miembros y los guardias de fronteras (carabineros) se incrementaron de 15.000 a 40.000 efectivos. Uno de los últimos actos del gabinete Giral había consistido en rebautizar a la Guardia Civil con el nombre de «Guardia Republicana Nacional» y también se la estaba ampliando.

El 12 de marzo, el Gobierno de Largo Caballero, que había sustituido al de Giral, hizo pública una orden general para que todos los partidos y sindicatos entregaran a las autoridades sus arsenales de armas, y Companys anunciaba medidas draconianas contra los «incontrolables».

Frente a esta convulsa coyuntura el PCE fue respondiendo empíricamente ante los acontecimientos que se precipitaban. En julio, el partido se había visto sorprendido por un golpe que estaba largamente anunciado, pero cuya inminencia resultó imprevisible para la organización. En los días previos a la rebelión, de quienes recelaban los comunistas era de los anarquistas. En los continuados contactos que la dirección del partido mantenía por radio con la Komintern quedó testimonio ese error de cálculo. El 13 de julio «Luis» Codovilla transmitió un mensaje a Manuilsky en el que le comunicaba sus temores sobre una situación insurreccional por parte del anarcosindicalismo, quedando en un segundo plano los peligros de una inminente sublevación militar.

El mismo 17 de julio, en marcha ya el levantamiento en el norte de África, Manuilsky y Dimitrov dirigieron instrucciones a Codovilla y al Buró Político del PCE, en las que instaban al partido, entre otras cosas, a «despojar a la aristocracia de todos los derechos de ciudadanía, confiscar sus bienes, expulsarla del país y prohibir su prensa»[19], dejando traslucir la obsesión por acabar con los «restos del feudalismo», que según la Internacional persistían en nuestro país. Esta consigna de lucha anti-feudal se repitió con enorme frecuencia en toda la propaganda de la organización. Así, el 26 de agosto, en un editorial de *Mundo Obrero*, se proponía, entre otras medidas, atender a las necesidades de las clases medias mediante una «política hacendaria que desgrave de las cargas que una economía semifeudal hacía pesar sobre la pequeña burguesía rural y urbana». En esta primera fase de la contienda, la lucha para el PCE era contra el fascismo y por una revolución democrático-burguesa en defensa de la República y del Frente Popular, que acabase con los restos del feudalismo como principal objetivo económico y social.

En la misma línea, el empoderamiento de la clase trabajadora y la enérgica respuesta de los anarquistas, sobre todo en Cataluña, preocupaban a la dirección comunista, por eso, después del aplastamiento de la intentona militar en Barcelona, Codovilla y Díaz señalaban como único punto negro el desorden provocado por la propensión de los anarquistas al «saqueo y al incendio».

El 23 de julio el Secretariado de la Komintern discutió la situación en España y se acordaron las instrucciones que debían transmitirse tras ser sometidas a la aprobación de Stalin. En ellas, argumentaba Dimitrov, sería un error considerar que los acontecimientos marchaban hacia una pronta des-

trucción de los rebeldes y, en consecuencia, estaba fuera de lugar proponer la creación de soviets y tratar de establecer una dictadura del proletariado en nuestro país. Dimitrov consideraba también que era necesario crear un ejército popular republicano, que integrara a los oficiales y generales que hubieran permanecido leales a la República. Así mismo, Moscú reiteraba como extremadamente importante, atraer masas de campesinos a la lucha contra los insurgentes, por eso se proponía «avanzar en la confiscación de las tierras de los que participan en la rebelión», y solo estas, para repartirlas a los campesinos y vincularlos así en la defensa de la República.

El 29 de julio, Dolores Ibárruri, en una intervención retransmitida por Unión Radio de Madrid, hizo un llamamiento en nombre del Comité Central del partido en el que fijó esas posiciones. Pasionaria calificó aquella coyuntura como el desarrollo de la revolución democrático-burguesa que en otros países de Europa se había producido hacía un siglo, y que a juicio de la Komintern no se había dado en España.

Un escrito de Togliatti, que iba a jugar un importante papel como delegado de la IC en nuestro país, titulado «Sobre las particularidades de la revolución española», fechado en noviembre del 36, ratificaba esa estrategia: «Las tareas a las que se enfrenta el pueblo español son las tareas de una revolución democrático-burguesa (...) Esto quiere decir que es necesario, en interés del desarrollo económico y político del país, resolver la cuestión agraria, destruyendo las relaciones feudales predominantes en el campo»[20].

El punto cardinal sobre el que descansaba esta política partía de considerar que no había habido una revolución burguesa en nuestro país a lo largo del siglo XIX. Esa apreciación histórico-política permanecerá viva en los análisis del PCE durante décadas.

En esa coyuntura trágica para el pueblo español, los internacionalistas estaban expectantes ante la respuesta que iba a dar la URSS en materia de ayuda ante el golpe fascista. La patria del proletariado no podía abandonar a su suerte a la clase trabajadora de nuestro país. Pero las primeras reacciones de la Komintern fueron indisociables de la línea diplomática adoptada por la Unión Soviética. Convenía a Moscú tranquilizar a las cancillerías y procurar no involucrarse directamente en el avispero español. Se conoce una directriz transmitida por el Gobierno soviético en la que se instaba a los representantes diplomáticos a no manifestar públicamente su simpatía por la

República. Aunque también se sabe que el Comisariado del Pueblo para el Comercio Exterior recibió instrucciones para que enviara inmediatamente combustible a España a un precio reducido, en las cantidades necesarias.

Los pronunciamientos favorables a la República española quedaron, de momento, limitados a la organización de manifestaciones populares en la URSS con la ausencia de altos dirigentes de la Internacional o del PCUS. La primera reacción de la Internacional se dio el 31 de julio, cuando el Secretariado de la Komintern remitió un cable instando a sus camaradas españoles para que consiguiesen una declaración del Gobierno que recogiese los siguientes puntos:

«1. Que el pueblo español, bajo el Gobierno republicano, está luchando por la defensa de la República democrática, por la democracia, por el orden republicano frente al fascismo, la anarquía y la contrarrevolución.

2. Todas las confiscaciones que se han ejecutado no han sido en general contra la propiedad privada, sino contra la de los que han tomado parte en la rebelión.

3. El Gobierno puede declarar que el pueblo español y su gobierno aprecian los sentimientos religiosos de su pueblo, y la única razón por la que ciertos monasterios han sido ocupados durante la lucha ha sido porque eran posiciones militares estratégicas de los rebeldes.

4. El Gobierno garantiza los intereses de los ciudadanos extranjeros en España y la inviolabilidad de sus propiedades»[21]

Mientras tanto, el Gobierno soviético seguía jugando la carta de la diplomacia y tras haberse sumado al Comité de No Intervención, el 23 de agosto se comprometía mediante una nota a prohibir «la exportación directa o indirecta, la reexportación o tránsito hacia España, los dominios españoles o la zona española de Marruecos de toda clase de armas, equipos o materiales bélicos, así como de toda clase de naves aéreas tanto en forma ensamblada como sin ensamblar, o de toda clase de navíos de guerra»[22]

No obstante, algunos dirigentes soviéticos se vieron forzados a admitir que si la URSS quería mantener una posición de liderazgo entre el proletariado internacional, no podía sustraerse, en aquella coyuntura de crisis, a la necesidad de hacer algo para defender a la República española. Pero, no fue hasta el 14 de septiembre cuando los soviéticos tomaron la decisión

de ayudar al Gobierno republicano a través de una operación amparada por el Partido Comunista Francés. En París se adoptó el doble acuerdo de crear una red de reclutamiento y encuadramiento de voluntarios para combatir en España, las futuras Brigadas Internacionales, y el montaje de una red clandestina de transporte de armas compradas por un traficante llamado Wolf.

El diseño del operativo para el desarrollo de la ayuda militar activa a la España republicana («Operación X») se planeó en una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista soviético, el 29 de septiembre. Solo entonces Stalin se decidió a telegrafiar a José Díaz, el 15 de octubre, tres meses después del golpe, para decirle: «Los trabajadores de la Unión Soviética, al ayudar en lo posible a las masas revolucionarias de España, no hacen más que cumplir con su deber. Se dan cuenta de que liberar a España de la opresión de los reaccionarios fascistas no es un asunto privado de los españoles, sino la causa común de toda la humanidad avanzada y progresista»[23]

Entre tanto, en nuestro país, el Gobierno de Giral se mostraba demasiado débil para atajar la revolución en marcha y organizar una defensa eficaz frente al avance fascista. Con las columnas africanas de Franco avanzando hacia Talavera de la Reina, la última villa importante antes de Madrid, y Mola a punto de tomar Irún, Largo Caballero, con toda la influencia que ejercía su persona, acabó reconociendo la necesidad de un cambio de gobierno en el que estuviera implicado él mismo, junto con otras fuerzas obreras.

Tras la dimisión de Giral, el 4 de septiembre se formó un nuevo gabinete, con Largo Caballero como primer ministro y ministro de la Guerra. En el nuevo Gobierno figuraban tanto socialistas como republicanos y comunistas. Prieto y los comunistas deseaban mantener a toda costa la naturaleza liberal de la República, pero Largo Caballero quería una coalición que fuera preponderantemente socialista, porque los liberales no habían sido unos aliados de confianza, torpedeando sus medidas reformistas como ministro de Trabajo en el primer Gobierno republicano.

Sin embargo, no era eso lo que Moscú deseaba en aquellos momentos por considerarlo excesivamente izquierdista. Los días 3 y 4 de septiembre se había reunido la Komintern, después de que lo hiciera el Buró Político del PCUS. El Secretariado de la IC había recibió un cable cifrado de Díaz y

«Luis» Codovilla informando que Largo Caballero insistía en la necesidad de un cambio de Gobierno que él mismo presidiría, pero con participación comunista. Por el contrario, el tipo de gobierno que Moscú juzgaba más conveniente en aquella coyuntura era uno en el que el consejo de ministros siguiera estando presidido por Giral, y en el que los republicanos debían tener la mayoría de las carteras, incluyendo en él a representantes de Cataluña y País Vasco. Podía contar a lo sumo con dos socialistas, y dos comunistas, si no quedaba más remedio, pero siempre que el nuevo Gobierno hiciera «una declaración clara sobre su mantenimiento en el marco de la República democrática»[24]

El 4 de septiembre el PCE envió un telegrama firmado por Díaz, «Luis» y Duclos que decía: «A pesar de nuestros esfuerzos ha sido imposible evitar la creación del Gobierno Caballero. Os aseguramos la participación de Giral como ministro sin cartera… Hemos actuado para acabar cuanto antes con la crisis de gobierno. Todos insisten enérgicamente en que los comunistas participen en el Gobierno; esto sería imposible de evitar sin crear una muy grave situación»[25]

El nuevo gabinete fue presentado como el símbolo de la unidad ante el enemigo común. Se le denominó «el Gobierno de la Victoria» y fue el primero en la historia de las democracias occidentales en el que participaron los comunistas. Dos meses más tarde, el 4 de noviembre, con los rebeldes ya a las puertas de Madrid, se sumaron a ese Gobierno cuatro anarcosindicalistas de la CNT. El hecho de que la CNT abandonara sus principios de no participar en ningún poder político, auguraba la deriva que iba a seguir esa poderosa organización obrera.

Tres fueron los principios fundamentales con los que el PC aterrizó en el nuevo gabinete: contribuir a crear un nuevo ejército popular, con disciplina y unidad de mando; retomar la Reforma Agraria republicana; y galvanizar la resistencia frente al peligro fascista.

La puesta en pie de lo que a la postre sería el embrión de un nuevo ejército chocó con la oposición de una parte sustancial del movimiento obrero, en cuya cultura política había ocupado un lugar central hasta entonces la oposición a la conscripción, a las quintas y al militarismo. En ese sentido el PCE efectuó un viraje, tanto político como terminológico, de la posición «A-M» (siglas de «antimilitarista», la denominación en el argot del partido

del antes citado aparato específico dedicado al trabajo conspirativo en el interior de los cuarteles) a la formulación de la necesidad de articular un nuevo ejército popular.

Fue en Madrid donde el PCE organizó la unidad miliciana que pretendió convertirse en modelo de referencia para ese nuevo Ejército Popular que el partido propugnaba. Esa unidad fue el famoso Quinto Regimiento que, según Líster, se fundó el 20 de julio sobre la base de las MAOC de la barriada de Cuatro Caminos —concentradas por orden de Modesto en un convento de la calle Francos Rodríguez reconvertido en cuartel— y que era el quinto de los cinco batallones de voluntarios que se crearon nada más aplastar la sublevación en la capital. El Quinto Regimiento fue la aportación emblemática del PCE a la fase miliciana de la guerra y sirvió de modelo para la constitución de las Brigadas Mixtas, unidades básicas del ejército republicano, en las que una concepción política de la guerra llevó a la creación de la figura del comisario político.

Otro viraje espectacular en la política del PCE fue el relativo al problema de la tierra. La postura del partido ante la reforma agraria aprobada por las Cortes republicanas el 17 de septiembre de 1932 había sido la de rechazo total. Los distintos proyectos de Ley que habían pasado por las Cortes eran, a juicio del PCE, cada vez más conservadores. La crítica a la reforma agraria definitiva denunciaba que no servía para transformar la anterior distribución de la tierra, manteniendo las pervivencias del «feudalismo» e incluso reproduciéndolas bajo nuevas formas.

Según el partido, la Ley no terminaba con el pago de arriendos y aparcerías, no cancelaba las deudas y añadía nuevos problemas a los campesinos. Dejando a éstos a merced de los prestamistas, provocaba la dependencia del capital financiero, instauraba indemnizaciones abusivas. Así mismo establecía el favoritismo en los asentamientos y tenía un alcance mínimo, tanto por el tipo de tierras objeto de expropiación como por la limitación territorial, al no realizarse en todas las provincias españolas, etc. Por ello no había una auténtica transformación agraria y prolongaba el dominio de los terratenientes y el clero en el campo español, ayudados a su vez por las organizaciones obreras reformistas, ejemplificadas por el PCE en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de UGT. Por todo eso, el partido presentó un proyecto de decreto-ley alternativo que propugnaba la expro-

piación sin indemnización de todas las tierras una vez se constituyera el Gobierno Obrero y Campesino.

Lo cierto es que cuando por fin se aprobó la Ley de Reforma Agraria, no hubo ninguna urgencia por ponerla en práctica por parte de los republicanos. Sin embargo, los trabajadores agrícolas habían empezado a albergar grandes esperanzas. Estas esperanzas no tardarían en crear un profundo desencanto al verse frustradas. La reforma agraria, en España, se había convertido en un mito. Igual que la expresión «huelga general», o las palabras «libertad» o «República», para muchos la Reforma aparecía como la salvación del campesino sin tierras.

En aquellos momentos los comunistas se hacían eco de esas esperanzas. Según nos cuenta Buber Neuman: «Mientras llegaba a su apogeo la campaña contra la reforma agraria, el partido comunista español organizó en Málaga un congreso de obreros y campesinos. Los organizadores advirtieron con sorpresa que la mayoría de los delegados habían concurrido con sus fusiles de caza. Las reivindicaciones del PCE —expropiación de los grandes propietarios sin indemnización, confiscación de las tierras de la Iglesia, gobierno de los obreros y campesinos— y aquel slogan de que «la tierra pertenece a quienes la cultivan» fueron acogidos con tempestuosos aplausos»[26]

Debido en gran parte a esto, la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 fue seguida de una grave crisis en el campo, crisis que encontró su expresión, no sólo en las huelgas de los trabajadores del agro que querían salarios más elevados, sino también en la actitud rebelde de los campesinos sin tierra descontentos con la Ley republicana. En muchos pueblos la paciencia llegó al límite y los campesinos se negaron a esperar hasta que el Gobierno, compuesto enteramente de republicanos liberales, viniese a satisfacer sus demandas.

El órgano de la Internacional se mostraba de acuerdo con estas críticas. «Los jefes campesinos calculan que la ley agraria tiene planes para 50.000 asentamientos por año, lo que significa veinte años para asentar a un millón de campesinos y más de un siglo para dar tierra a todos. Dándose cuenta de esto, los campesinos ocupan la tierra»[27]

Con la guerra las cosas cambiaron de modo radical. Al mismo tiempo que se aplastaba la sublevación fascista, se produjo una eclosión de colectividades agrarias en la parte meridional del territorio controlado por la Re-

pública. Estas colectivizaciones, que llegaron como máximo a mil, con una media de 960 miembros por colectividad, fueron obra de la CNT por sí sola o en colaboración con la UGT.

En agosto, el gabinete Giral había dado tímidos pasos para legalizar la requisa de propiedades «abandonadas» por sus dueños, y otra medida estipulaba la adquisición, a título legal, por parte de los arrendatarios a largo plazo, pero cuando se estableció el Gobierno de Largo Caballero, los comunistas tuvieron que hacerse cargo del ministerio de Agricultura, que ocupó Vicente Uribe, miembro del Comité Central. Puesto que el decreto de agosto sólo estipulaba la legalización del hecho consumado de las confiscaciones que ya se habían producido, el 7 de octubre, Uribe publicó un nuevo decreto por el que se expropiaban las tierras de todos aquéllos ligados al movimiento fascista, fuera cual fuese su estatus anterior, pero sólo estas, quedando en suspenso aquellas que pudieran constituirse después del decreto.

Profundamente inquietos por la marcha de las colectivizaciones, los comunistas maniobraron conscientemente para atraerse el apoyo de los pequeños propietarios amenazados, y emprendieron una campaña de proselitismo. En los locales y despachos del PCE había letreros que decían: «Respetad la propiedad del pequeño propietario». Evocando la colectivización, José Díaz declarará, el 5 de marzo de 1937, que «lanzarse a esos ensayos [...] es absurdo y equivale a convertirse en cómplices del enemigo»[28]

Así, en el terreno agrario, además de la defensa y estímulo a la pequeña propiedad campesina, la política del partido se podía resumir con el término moderación; moderación con la aceptación de leyes del primer bienio republicano, con la canalización pacífica de las peticiones y la solución de los conflictos, con la primacía de la organización frente a las ocupaciones espontáneas, y con la ayuda del Gobierno mediante facilidades; pero sobre todo, con la anulación de su tradicional consigna de «toma revolucionaria de la tierra». Ahora se venía a preconizar la aplicación de la Reforma Agraria a la que desde sus inicios se había combatido; porque si bien se luchaba contra los terratenientes, no se quería poner en un brete al Gobierno republicano con una política que, a juicio del partido, sólo beneficiaría al fascismo.

Resulta cuando menos curioso escuchar de boca del Secretario General del PCE, en una reunión con activistas del Comité Provincial de Madrid:

«Vosotros sabéis que en la Unión Soviética han sido necesarios muchos años para el desarrollo intenso de la colectivización. Si en España se sigue esa política equivocada con los campesinos va a suceder que estos van a dejar de trabajar la tierra, pues de ninguna manera se puede imponer por la fuerza una colectivización»[29] Dichas por cualquier otro estas palabras habrían sido calificadas de «traición trotskista», a tenor de las afirmaciones que había hecho el mismo Trotsky sobre ese tema.[30]

A comienzos de 1937, uno de los máximos cuadros comunistas, Enrique Castro Delgado, fue nombrado director del Instituto de Reforma Agraria. En la primavera de ese año el Instituto había ratificado oficialmente la cesión de la propiedad de, aproximadamente, el 25% de las tierras cultivables de las provincias del sudeste y el centro-sur de España. Y a mediados de 1938, el total de confiscaciones ascendía a poco más de un tercio de las tierras cultivables de las provincias afectadas. No obstante, el Instituto de Reforma Agraria se negó a reconocer gran parte de las colectividades anarcosindicalistas formadas en el nordeste de España sin intento de legitimación.

La galvanización propagandística en defensa de la República activada por el PCE en el primer año de la guerra alcanzó su punto culminante en la actuación del partido durante la defensa de Madrid. El 22 de octubre las fuerzas fascistas habían alcanzado Navalcarnero, desde donde comenzaron los preparativos para el asalto a la capital. Ante el peligro inminente, se remodeló el Gobierno para ampliar su base dando entrada en él a cuatro ministros anarquistas. El nuevo gabinete apenas tuvo tiempo de reunirse en Madrid, pues de inmediato se acordó su traslado a Valencia. Dado que el Gobierno iba a instalarse fuera de la hasta entonces capital de la República, se procedió a nombrar un organismo para la gestión de la ciudad, la Junta de Defensa de Madrid, donde estarían representados los partidos del Frente Popular y los sindicatos. El asalto de los sublevados a la capital comenzó el sábado 7 de noviembre.

Madrid fue sometida a un continuo castigo artillero y a bombardeos aéreos diarios, cuyas consecuencias ocasionaron estragos en la población civil. Esto, acrecentó un sentimiento de odio y venganza que se traduciría en la búsqueda de emboscados y en el exterminio de quintacolumnistas durante aquel duro final del otoño de 1936. El grueso de las matanzas descontroladas había tenido lugar en los meses de agosto y septiembre, para desaparecer casi por completo a principios de 1937, cuando la violencia «legal» se im-

puso al terror «caliente», pero repuntó en Madrid a finales de octubre de 1936 como producto del cerco al que estaba siendo sometida la capital.

Según la Causa General que instruyó el fascismo al finalizar la guerra, el PCE contó en Madrid con varios centros de encarcelamiento («checas», en el argot de la época). Algunos se instalaron en establecimientos eclesiásticos incautados; otros eran las sedes de las organizaciones territoriales (células o radios), que habilitaron un espacio para la detención de sospechosos. En esta labor, el partido no funcionó de forma distinta a otras organizaciones, y en algunos casos, que llegaron a ser escandalosos, mantuvo esta política cuando el Gobierno ya había recuperado el control de la represión legal, como lo demuestra la misma desaparición de Andreu Nin. Aunque el caso Nin fue el más escandaloso se dieron otros casos, como por ejemplo los abusos del miembro de la dirección del PCE Luis Cabo Giorla en Murcia; o el caso de José Cazorla, otro cuadro relevante, que levantó la polémica por sus métodos allá donde fue destinado.

Pero en el Madrid de noviembre de 1936, al ser conocedor el ministro de la Gobernación, Galarza, de los estallidos de furia popular que sucedían a los ataques de la aviación contra objetivos civiles, temió por la seguridad de los prisioneros que atestaban las cárceles de la capital. Tampoco ocultó el temor a que cuando los franquistas estuvieran a las puertas de Madrid, los presos pudieran intentar una evasión. El Gobierno, al disponerse a marchar hacia Valencia, dejó órdenes de que los presos políticos de la cárcel Modelo fueran evacuados. Es en estos momentos cuando se produce un hecho que va a tener un largo recorrido en el discurso anticomunista, al verse implicado en él un joven Santiago Carrillo, dirigente de las JSU que había decidido afiliarse al PCE.

El día 6 de noviembre Santiago Carrillo fue nombrado consejero de Orden Público en la Junta de Defensa de la capital. Un documento que el periodista Jorge M. Reverte descubrió en 2005 indica que después de la primera sesión de la Junta, el 7 de noviembre, hubo otra reunión entre representantes de la recién creada Consejería de Orden Público, presidida por Carrillo, y la federación local de la CNT. El documento recoge un acuerdo sobre lo que se debía hacer con los presos para su evacuación. «Habiendo tomado el acuerdo de dividirlos en tres grupos, a saber: Primer grupo. Fascistas y elementos peligrosos. Ejecución inmediata, cubriendo la responsabilidad. Segundo grupo. Detenidos sin peligrosidad, su evacuación

inmediata al penal de Chinchilla. Con todas las seguridades. Tercer grupo. Detenidos sin responsabilidad, su libertad inmediata con toda clase de garantías sirviéndonos de ello como instrumento para demostrar a las Embajadas nuestro humanitarismo»[31]

Resultado de ese acuerdo, alrededor de mil doscientos presos fueron obligados a subir en autobuses de dos pisos, y a 18 kilómetros de Madrid, en los pueblos de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, se les ordenó apearse, siendo fusilados y enterrados en grandes fosas. Este hecho represivo se enmarca en las atrocidades propias de la guerra total y en un momento crítico en el que sobre la capital pesaba la amenaza del enemigo en puertas. Un enemigo que aterraba a las poblaciones sometidas sumiéndolas en un baño de sangre, como se sabía que había sucedido en Badajoz al ser ocupada por los franquistas. Ese tipo de matanzas entre la población reclusa contaba con antecedentes históricos señalados. En septiembre de 1792 ante el peligro que corría París de caer en manos del ejército contrarrevolucionario se habían producido terribles matanzas en las cárceles parisinas.

La matanza de Paracullos cobró un significado especial en el discurso anticomunista porque en ella estuvo involucrado Santiago Carrillo, que terminó ocupando la secretaría general del PCE durante dos décadas en la lucha contra el franquismo. Carrillo, que siempre negó su participación en estos sangrientos acontecimientos, descargando las responsabilidades en los anarquistas o los incontrolados, hoy sabemos que, al menos, fue conocedor de los mismos y que nada hizo por impedirlos.

Tras varios intentos infructuosos por tomar la capital, en enero de 1937 el frente de Madrid quedó estabilizado. El intento de conquistar la ciudad fracasó en sucesivas tentativas, y con sus luces y sombras, el PCE fue la fuerza política que más rentabilizó aquella victoria.

Pero el Gobierno de Largo Caballero no estaba llamado a ser el Gobierno de la Victoria y en muy pocos meses entró en una crisis en la que los comunistas desempeñaron un importante papel, aunque los dos vectores sobre los que pivotó esa crisis fueron: la marcha militar de la guerra y el enfrentamiento por restablecer el orden republicano anterior al golpe fascista.

Muchos analistas han priorizado los aspectos políticos de esta crisis, dejando en un segundo plano los militares, sin embargo, fueron las derrotas militares las que jalonaron la crisis política del Gobierno Caballero y del

posterior Gobierno del doctor Negrín. Lo cierto es que los sucesivos gobiernos republicanos sólo cosecharon derrotas a lo largo de la contienda. En el mejor de los casos, lo que fueron exaltadas como victorias consistieron en exitosas batallas defensivas. La defensa de Madrid, la resistencia en el Jarama, la derrota italiana en Guadalajara, o la maniobra de distracción en Brunete, no pudieron compensar lo que era la ocupación de extensas áreas del territorio y la conquista de capitales de provincia por los ejércitos franquistas. La breve ocupación de Teruel por los republicanos se saldó al poco tiempo con una reconquista definitiva de la ciudad por los rebeldes. Según el historiador militar Beevor: «La batalla de Brihuega fue la única victoria nítida que consiguió la República durante toda la guerra»[32]

Así, el factor de la derrota militar, a raíz de la caída de Málaga, será el que precipite la crisis del Gobierno Caballero. Eso vino a coincidir con un cambio de importancia en los cuadros de mayor responsabilidad de la Komintern enviados a España. Codovilla iba a ser desplazado por el búlgaro Stoyán Minév («Stepanov» o «Moreno»). Un halcón, que acabó con la estrategia de acercamiento al presidente del Gobierno seguida hasta entonces por el anterior responsable, que cumplía disciplinadamente las órdenes de Moscú.

El desastre de Málaga alimentó la tensión que ya existía entre los comunistas y Largo Caballero, a quien los consejeros soviéticos se referían como «el Viejo» en sus informes a Moscú. Caballero, como presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, adoptó medidas que redujeron el trabajo político en el seno del ejército y la capacidad de mando de los miembros del PC que habían alcanzado determinados grados. Cesó a todos los comisarios y estableció que para solicitar su reingreso declarasen de nuevo sus datos y filiación política. El PCE interpretó estas medidas como un ataque directo contra sus militantes. Según un informe transmitido por Dimitrov a Voroschilov y fechado el 28 de marzo el ministro de la Guerra, es decir Caballero, había emprendido «una auténtica cruzada contra los comunistas»[33]

Esta actitud obedecía en parte al rencor que Largo Caballero sentía por los comunistas desde que éstos, habían conseguido llevar a las Juventudes Socialistas al PCE. Pero había otras razones políticas que afectaban al partido del presidente de Gobierno y en las que los comunistas se veían implicados. El PCE propugnaba crear un partido único del proletariado, que unificase a socialistas y comunistas. Frente a esta propuesta el principal foco

de oposición antiunitaria se constituyó en torno a la Agrupación Socialista Madrileña (ASM) del PSOE, dominada por los caballeristas, contrarios a la fusión y partidarios de conjugar guerra y revolución.

Por otra parte, el ascendente comunista sobre el Gobierno Caballero descansaba en que la URSS era la única potencia que suministraba armas a la República, suministro que no sólo se pagaba en oro, sino que también permitía a la URSS ejercer una cierta influencia en las políticas que desarrollaba el mismo gobierno español. Desde enero de 1937, el embajador soviético Rosenberg había estado importunando constantemente a Largo Caballero con lo que tenía y lo que no tenía que hacer, al extremo de que un día el viejo sindicalista le echó de su despacho con cajas destempladas.

Por su parte, los asesores soviéticos, lejos de comportarse del modo que Stalin había dicho, —«Un especialista soviético, que es un extranjero en España, sólo puede ser verdaderamente útil si se mantiene estrictamente dentro de los límites de consejero y sólo de consejero»—[34] se encaraban con los oficiales españoles que ponían objeciones a sus planes diciéndoles que se preguntaran, antes de poner pegas, si querían seguir recibiendo la ayuda de la Unión Soviética. En una línea de actuación parecida y partidista, los comunistas se aseguraban de que ni una sola pieza del material que se recibía de la Unión Soviética, desde luego ningún avión ni tanque, fuese a parar al frente de Aragón dominado por los anarcosindicalistas o a otras unidades que no les fueran afectas.

Por último, los soviéticos apreciaban que la caída de Málaga había sido producto de la «traición». El general Berzin vertía acusaciones de ese tipo contra los anarquistas y los «trotskistas contrarrevolucionarios» del POUM, un leitmotiv presente en casi todos los informes que se enviaban a Moscú. «No es preciso decir qué si no se limpia el campo republicano de toda esa escoria, es imposible ganar la guerra contra los rebeldes»[35]

Fue entonces cuando la Komintern decidió que debía relevarse a Caballero, al menos del ministerio de la guerra. El 14 de marzo, durante una reunión del politburó en el Kremlin con la presencia de Marty y Togliatti, Stalin dijo: «No se debe destituir a Caballero (no hay otra figura más adecuada para encabezar el Gobierno)»[36], si bien se le debía convencer de renunciar al puesto de ministro de la Guerra y apoyar la designación de otro comandante en jefe. El 28 de marzo, Stepanov envió un informe a Dimitrov que

este reenvió a Voroschilov, en el que indicaba que la debilidad del Gobierno y la falta de una firme política sobre cuestiones militares estaba creando las condiciones para una inminente crisis de gobierno. Stepanov —y con él la dirección española— decidió imprimir un acelerón a la campaña contra Caballero, a despecho de lo que pensasen en Moscú. En el informe de Stepanov se decía: «Aquí todos piensan que es imposible un acuerdo, que se han agotado todas las posibilidades, que hay que adoptar una posición dirigente y obligar a Caballero a abandonar el puesto de ministro de Guerra, y si se hace necesario, también el puesto de presidente del Consejo de Ministros»[37]

Pero de los diarios de Azaña se desprende que eran muchos —y no solo los comunistas— los que deseaban ver a Caballero fuera de puestos de responsabilidad. Las vacilaciones del presidente de Gobierno ante la incipiente revolución que se había desatado en algunas zonas desde el inicio de la guerra encorajinaban al ala derecha del PSOE, encabezada por Prieto, y a los partidos republicanos de la pequeña burguesía. Para estos había llegado la hora de poner punto final a esos «excesos» que aterraban a las democracias occidentales y de volver a la legalidad republicana anterior al conflicto. Desde esa óptica aplaudieron que fuera el PCE quien operase como ariete frente al Gobierno caballerista.

Mientras el PCE publicaba su primer gran programa de guerra conocido como «las ocho condiciones de la victoria»[38] las divergencias con Caballero se recrudecieron tras la pérdida de Málaga.

En el Pleno ampliado del Comité Central que se celebró en Valencia, los días 5, 6 y 7 de marzo, durante los discursos se vertieron críticas hacia la política gubernamental. Pasionaria y Díaz postularon en sendas intervenciones la necesidad de depurar el ejército para evitar catástrofes como la de Málaga, y el ministro Jesús Hernández cargó contra Largo Caballero y, en especial, contra su política de guerra. Esta intervención causó un particular disgusto a Caballero, que la consideró como una deslealtad, por ser Jesús Hernández miembro de su gabinete. El presidente de Gobierno pretendió cesar a Hernández el 9 de marzo, pero al no lograr su propósito, comenzó a criticar abiertamente al PC y a los asesores rusos. Entonces fue cuando las diferencias, largamente acumuladas desde julio, alcanzaron un punto crítico en Cataluña, donde la Generalitat estaba recuperando sistemáticamente los poderes que había perdido al ser aplastado el golpe militar.

En esta línea de restaurar su poder el presidente Companys iba camino de chocar con la CNT y con el POUM. Ambas formaciones habían llegado a la conclusión de que los sacrificios de los logros revolucionarios pedidos en favor de una República burguesa no habían tenido ningún efecto sobre las potencias occidentales, que eran perfectamente conscientes de que, para el capitalismo occidental, Franco era una apuesta mucho más segura de lo que la República podría ser jamás.

Pero el presidente de la Generalitat, no era ya el presidente amedrentado del 19 de julio, y estaba firmemente decidido a poner coto al poder de los anarquistas. Companys, que deseaba contar con un gobierno fuerte que impusiera de una vez su autoridad, declaró a la prensa el 9 de diciembre: «Sobran juntas y juntitas, comisiones, comités e iniciativas. Hay más de una docena de razones que obligan a la constitución de un gobierno fuerte con plenos poderes, que imponga su autoridad»[39]

La postura de Companys contaba con el apoyo explícito del PSUC, que había exigido el 24 de noviembre la desaparición del POUM del Gobierno catalán, —donde estaba representado por Andreu Nin como conseller de Justicia— argumentando que no se podían tolerar los ataques de *La Batalla* contra las purgas que Stalin estaba llevando a cabo en la URSS. El día 16 se formó un nuevo Gobierno de la Generalitat del que desapareció Nin, y en el que, Joan Comorera, del PSUC, se hizo cargo del abastecimiento como primer paso para volver al mercado libre. La tensión fue en aumento cuando a mediados de marzo la Generalitat hizo un esfuerzo definitivo por tomar el control del orden público y disolvió las patrullas de seguridad de la CNT, a la vez que exigía que todas las organizaciones obreras entregasen sus armas. La CNT se retiró del Gobierno catalán y no entregó las armas.

Hacia finales de abril una serie de acontecimientos encadenados hicieron estallar la tensión acumulada durante tanto tiempo. Enfrentamientos y ajustes de cuentas con la eliminación de dirigentes de uno y otro sector se habían venido dando desde el otoño anterior, provocando que la tensión en Cataluña llegase a niveles extremos. La Generalitat, con el acuerdo de la CNT y de la UGT, decidió cancelar las celebraciones del 1° de Mayo por temor a que estallara el conflicto. Los anarquistas vivieron esto como una provocación y el 2 de mayo *Solidaridad Obrera* pidió a los trabajadores que no se dejaran desarmar bajo ningún concepto.

El detonante inmediato de los llamados «hechos de mayo» fue el asalto a la central de La Telefónica en Barcelona controlada por la CNT, ordenado el día 3 por Eusebio Rodríguez Salas, jefe de policía al servicio de la Generalitat de Cataluña y afiliado al PSUC. Aunque la central estaba dirigida por un comité mixto de la CNT y la UGT, el control lo ejercían los anarquistas, y ni Azaña ni Companys podían hablar sin ser escuchados. El intento de incautación provocó que estallaran luchas callejeras. Las fuerzas gubernamentales, el PSUC, la Juventud Socialista Unificada, la UGT y algunas gentes de Estat Cátala, por un lado, y los comités de defensa confederal, las patrullas de control, las Juventudes Libertarias, el POUM, las Juventudes Comunistas Ibéricas (organización juvenil del POUM) y Los Amigos de Durruti, por otro, se enfrentaron en las calles. Al tiempo que el comité regional de la CNT declaraba la huelga general para el día siguiente.

Los partidos republicanos vieron la oportunidad de restaurar un orden, hasta ese momento disminuido, frente al poder revolucionario. Companys dijo a la prensa: «Hay grupos armados por la calle y no cabe más solución que escamparlos». El día 4 de mayo, *La Humanitat*, el periódico de Esquerra, afirmaba «el Gobierno… se dispone a operar sobre el cuerpo vivo del país y a eliminar todas las llagas peligrosas. Que persista el Gobierno en su tarea. Que persista porque tras él… está toda Cataluña»[40] Azaña, que vivía en el palacio del Parlamento catalán, y que era absolutamente reacio tanto al catalanismo como a la revolución social, escribirá: «La gente común, el vecindario pacífico [suspira] por un general que mande, y se lleve la autonomía, y la FAI, en el mismo escobazo»[41]

Los comunistas y Prieto acogían gustosos la oportunidad que estos hechos les brindaban para quebrar el poder de la CNT y limitar el de la Generalitat. Pero la dirección de la CNT se negaba a dar la batalla. Juan García Oliver, el ministro de Justicia anarquista, habló el día 6 por radio desde la Generalitat y, en nombre de la dirección de la CNT, pidió a sus incrédulos militantes que depusieran las armas. No obstante, militantes de la CNT, el POUM y el grupo anarquista Amigos de Durruti, se enfrentaron a las fuerzas de la Generalitat y al PSUC durante varios días, pero, el 7 de mayo el Gobierno central proporcionó desde Valencia los refuerzos policiales que decidieron finalmente el resultado del enfrentamiento.

Largo Caballero ordenó que se enviasen a la capital catalana, por tierra y por mar, Guardias de Asalto y carabineros para poner orden. Mientras tanto,

también llegaban a Barcelona los destructores Lepanto y Sánchez Earcáiztegui con fuerzas de marina, e Hidalgo de Cisneros, con dos escuadrillas de cazas y dos bombarderos, volaba a Reus «para emprender operaciones contra la región en el caso de que los insurrectos ganaran»[42]

El día 11, en un mitin en Valencia, José Díaz desplegó el argumentario que el PCE iba a emplear solicitando firmeza gubernamental. Las críticas, que arrancaron contra Galarza, responsable de interior, siguieron contra la CNT por incoherencia con su presencia en el Gobierno y terminaron por elevación —aunque sin nombrarle explícitamente—contra el mismo Caballero, aunque el discurso tenía como objetivo el POUM. «[Unos] se llaman trotskistas. Es el nombre bajo el cual trabajan muchos fascistas emboscados, que hablan de revolución para sembrar el desconcierto, y yo digo: si esto lo saben todos, y lo sabe también el Gobierno, ¿qué hace el Gobierno que no los trata como a tales fascistas y los extermina sin consideración?», y añadía que en los procesos de Moscú los trotskistas habían declarado que actuaban en combinación con Hitler, bajo la dirección de Trotsky[43]

Fue en la reunión del gabinete del jueves 13 de mayo cuando se produjo la crisis gubernamental. Los comunistas plantearon las medidas que a su juicio debería adoptar el Gobierno, centrándose particularmente en la persecución legal del POUM por los hechos de Barcelona. Hay que señalar que no propusieron nada contra los anarquistas participantes también en los mismos hechos. Ante la negativa de Caballero a proceder contra el POUM, diciendo que no ilegalizaría un partido de la clase obrera contra el que no había ninguna prueba de que trabajase con el enemigo, los ministros comunistas se levantaron y salieron de la sala. Entonces Prieto dijo que la retirada de los comunistas suponía la crisis. Ante las palabras de Prieto, Caballero levantó la reunión y pidió audiencia a Azaña.

Sin excesivas reticencias, Azaña ofreció la presidencia del Gobierno al doctor Juan Negrín. *Le Temps* del 17 de mayo, invitaba al nuevo presidente a elegir entre «democracia y dictadura proletaria, entre orden y anarquía», y Negrín no lo dudo. Entre las primeras medidas que tomó, figuraron: la modificación de la estructura del Consejo de Aragón y la supresión de los consejos de Información y Propaganda y de Orden Público, cosa que la CNT aceptó sin rechistar. El 11 de agosto el Consejo de Aragón fue disuelto y las colectividades existentes quedaron abandonadas a su suerte. Podemos

calcular que, hacia el verano de 1937, había en Aragón de 400 a 500 colectividades, que contaban con unos 150.000 o 200.000 miembros.

El Gobierno acordó, asimismo, el cierre del periódico del POUM *La Batalla*, y el 16 de junio el POUM fue declarado ilegal. Ese mismo día todos los miembros del Comité Ejecutivo del POUM fueron detenidos, Nin al salir de su despacho, otros en sus casas y otros más en el frente. La policía, como no había podido encontrar por el momento ni a Andrade ni a Gorkin, detuvo a sus esposas. Las detenciones se hicieron con todos los visos de legalidad, porque las órdenes iban firmadas por el jefe superior de Policía, pero días después, Nin fue trasladado a Alcalá de Henares, y allí, en uno de los montajes estalinistas más chapuceros que se conocen, se escenificó su huida.

Un grupo de soldados alemanes de las Brigadas Internacionales sin distintivos, aparentando ser hombres de la Gestapo, penetraron de repente donde estaba el detenido con la intención de «rescatar» a Nin. En la operación, los presuntos nazis, dejaron caer una cartera que contenía documentación alemana, unas insignias falangistas y billetes de banco de los nacionales. Todo aquello sirvió para urdir la burda trama de que habían sido «los amigos» de Nin (es decir, los fascistas) los que habían rescatado al preso para llevárselo a sus líneas. A las pintadas que aparecieron por todas partes hechas por los poumistas preguntando: «¿Dónde está Nin?», los miembros del PCE añadían: «En Salamanca o en Berlín».

El Gobierno de Negrín, que obviamente no podía dar crédito a esta versión, no hizo nada por aclarar el paradero de Andreu Nin. Y Azaña, el viejo zorro republicano, aunque no hizo tampoco nada, no se creyó ni una palabra: «¿No es demasiado novelesco?», dijo cuando le contaron la pretendida fuga del trotskista.[44]

A partir de junio de 1937 se creó el Tribunal especial de espionaje y alta traición por decisión del ministro de Justicia el nacionalista vasco Manuel de Irujo. El POUM fue acusado de espionaje y de ser agente provocador de los fascistas. Se le acusó, además, de planear el asesinato de Prieto. El juicio, que se celebró con todas las garantías legales propias de una República burguesa, no pudo ser un proceso como los de Moscú. Nin no se plegó a confesar falsedades y tuvieron que hacerlo desaparecer. Los encartados en la causa fueron exonerados de la acusación de colaborar con el fascismo,

pero a varios de ellos se les condenó a prisión por aquello que la República burguesa no podía tolerar, ya que: «tendían a instaurar… un régimen político y económico distinto al constituido (para sustituirlo) por el que propugna su partido», que la sentencia definió de modo acertado como «de economía socialista y de dictadura del proletariado» [45]

Después de haber alcanzado el poder político de manera incuestionable, el 1º de Mayo de 1938, Negrín, definió públicamente la actitud de la República española, en la forma de Trece Puntos programáticos. Ese programa recogía la voluntad de mantener la integridad política y económica de España contra toda penetración extranjera; afirmaba a la vez la libertad de conciencia y las libertades regionales; pedía una reforma agraria con respeto para la pequeña propiedad y las propiedades extranjeras de firmas no complicadas en la rebelión militar. También proponía una amnistía política y la retirada de todas las tropas extranjeras, al tiempo que reafirmaba la adhesión de su país a la Sociedad de Naciones y a los principios de la seguridad colectiva. Con esos Trece Puntos Negrín presentaba a la opinión mundial la imagen de un régimen cuyos propósitos y métodos eran similares a los de las democracias occidentales, en un esfuerzo supremo para convencer a los gobiernos de Occidente de que la supervivencia de la República no entrañaba ningún peligro para el sistema capitalista.

El freno a la revolución, que había emprendido su andadura desde la llegada al poder de Largo Caballero, y que culminó bajo la jefatura de Juan Negrín, no se explica sólo por la voluntad contraria de determinados grupos políticos y sectores sociales. Es necesario también apreciar los límites objetivos que una revolución, como la española del verano de 1936, tenía en un contexto internacional como el existente, y las carencias que presentaban sus propios protagonistas. Quizá el rasgo más sorprendente en los procesos políticos que se dieron en 1937 en el bando republicano, no fuera el creciente poder comunista, sino la relativa docilidad de la mayoría de los cenetistas y su consentimiento a postergar los principios anarcosindicalistas a favor de la colaboración con el gobierno.

Como ya hemos mencionado, en plena ola ascendente, el PCE celebró en Valencia, a comienzos de marzo de ese mismo año de 1937, un Pleno ampliado del Comité Central que adquirió el carácter de un auténtico congreso. En ese cónclave se iba a apuntalar la estrategia patriótica de resistencia a ultranza contra el invasor, que adoptaría el partido hasta el final de la gue-

rra. La estrecha relación que se iba a establecer con los gobiernos de Negrin, en los que continuó habiendo ministros comunistas, permitieron afianzar a nivel gubernamental esa línea de intervención.

Desde el inicio de la guerra el PCE y la Komintern habían dejado bien clara cuál iba a ser el eje fundamental de su estrategia. En una directriz de la Komintern remitida a la dirección del PCE (Codovilla y Díaz) en forma de telegrama, fechada 23 de julio del 36, se advertía ya que los comunistas españoles no debían tratar de establecer una dictadura del proletariado «en la situación actual... Repetimos una vez más: lo más importante es el mantenimiento y reforzamiento del Frente Popular. Hay que actuar exclusivamente bajo la bandera de la defensa de la República»[46]

El 9 de agosto *Mundo Obrero* reiteraba: «Es completamente falso que el movimiento obrero del presente tenga como finalidad la constitución de una dictadura proletaria... Nosotros, los comunistas, estamos exclusivamente motivados por el deseo de defender la república democrática instaurada el 14 de abril de 1931» Y Federico Melchor, dirigente de las JSU, en un discurso pronunciado en 1937 llegaba a decir: «No estamos haciendo hoy una revolución social, estamos desarrollando una revolución democrática, y en una revolución democrática la economía... no pueden lanzarse a formas socialistas. Si estamos desarrollando una revolución democrática y decimos que luchamos por una república democrática, ¿cómo en las formas económicas vamos a pretender adoptar soluciones de tipo socialista totalitario (sic)?»[47]

Por tanto, en lo esencial, se trataba de acabar con los «restos del feudalismo» y de afianzar la democracia republicana. El mismo Stalin no se recataba en sostener abiertamente esa política. En una carta que el dirigente soviético remitió a Largo Caballero en diciembre de 1936 le daba algunos «consejos de amigo»: ganar al menos la neutralidad de la pequeña burguesía protegiéndola contra las expropiaciones y asegurándole la libertad de comercio, atraer al Gobierno a republicanos burgueses «para impedir que los enemigos de España vean en ella una república comunista», y finalmente, declarar solemnemente que no se «tolerará que nadie atente contra la propiedad y los legítimos intereses de los extranjeros en España»[48]

Pero lo que estaba sucediendo en nuestro país, y la misma presión de las bases comunistas, conducían a una cierta ambigüedad en esos planteamientos. José Díaz en un discurso pronunciado ante el Comité Central, en el

cónclave de marzo de 1937 se veía obligado a matizar la naturaleza de la república por la que luchaba el PCE: «Luchamos por una república democrática y parlamentaria de nuevo tipo con profundo significado social. La lucha que se lleva a cabo en España no tiene el propósito de instaurar una república democrática como la francesa o la de cualquier otra nación capitalista. No, la república por la que luchamos es distinta. Luchamos para derribar los cimientos de la reacción y el fascismo, sin cuya destrucción no puede existir una auténtica democracia política»[49] No obstante, aclaraba rápidamente, que en la nueva república española dichos fundamentos ya habían sido destruidos, con la expropiación de las grandes haciendas y la eliminación del poder de la oligarquía y la Iglesia. Por eso las fuerzas populares debían tener cuidado en no divorciarse de las «clases democráticas».

Pero esta línea de moderación sufrió sus altibajos. Ni que decir tiene que la salida de Caballero del Gobierno fue interpretada por los dirigentes comunistas locales como un triunfo personal y algunos, ante el crecimiento de la organización, se mostraron exultantes y abogaron por ir más lejos, contando con el apoyo de Stepanov. Fue entonces cuando la Komintern decidió enviar en misión a Palmiro Togliatti («Alfredo», como sería conocido entre los españoles).

A comienzos de 1938 se detectó en la línea del PCE una deriva hacia la defensa de los «intereses de las masas populares» y del «pueblo que lucha» (precios de las subsistencias, condiciones en la vivienda, condiciones laborales…), que se tradujo en la prensa del partido en el empleo, cada vez con mayor frecuencia, del campo semántico «revolución». No era esa precisamente la línea que convenía a un Stalin preocupado por la situación internacional.

Pero el PCE arreció en estas tesis, y el 23 de marzo de 1938, en *Mundo Obrero*, se publicó un artículo que tuvo honda repercusión. El escrito se enmarcaba en una polémica que se estaba sosteniendo con el periódico *El Sindicalista*, que había afirmado que para el PCE la única solución para la guerra era «que España no sea ni fascista ni comunista, porque Francia lo quiere así». *Mundo Obrero* rechazaba esta afirmación dejando abierta la segunda posibilidad. Fue entonces cuando el artículo de *Mundo Obrero* suscitó una contundente respuesta de José Díaz el mismo día 29, tal vez orientado por Togliatti y bajo el título —«Con toda la claridad posible»— donde refutaba las tesis contenidas en la publicación oficial del partido: «la afirma-

ción de que «la única solución para nuestra guerra es que España no sea fascista ni comunista» es plenamente correcta y corresponde exactamente a la posición de nuestro Partido… Nuestro Partido no ha pensado nunca que la solución de esta guerra pueda ser la instauración de un régimen comunista. Si las masas obreras y campesinas y la pequeña burguesía urbana nos siguen y nos quieren es porque saben que nosotros somos los defensores más firmes de la independencia nacional, de la libertad y de la Constitución republicana»[50]

Estas vacilaciones respecto a la estrategia se desarrollaron sobre todo en el interior del partido y en la prensa de la organización, sin embargo la propaganda oficial hacia el exterior estuvo centrada desde época temprana en caracterizar la guerra como una guerra patriótica. Fue Pasionaria —casi con total seguridad— la que en el manifiesto del Partido Comunista que se dio a conocer en la fecha en que se cumplía el primer mes de guerra, tras hacer balance de las primeras semanas de contienda, pasaba a definir el carácter de la lucha que estaba entablada, dándole un giro esencial, el giro patriótico, que se iría amplificando a lo largo de la contienda. «La lucha [que] en los primeros momentos pudo tener solamente el carácter de una lucha entre la democracia y el fascismo, entre la reacción y el progreso, entre el pasado y el porvenir, ha roto estos marcos para transformarse en una guerra santa, en una guerra nacional, en una guerra en defensa de un pueblo que se siente traicionado»[51]

Este argumentario patriótico aparece aquí de modo incipiente, pero paso a primer plano en la estrategia propagandística del PCE con la presencia de tropas alemanas e italianas en territorio español. A partir de entonces, la guerra será para el comunismo oficial una defensa de la independencia de la patria contra los invasores extranjeros. Poco a poco, al tiempo que se cancelaban los experimentos revolucionarios, el discurso del PCE se fue centrando cada vez más en la defensa de un patriotismo sin concesiones y resistencialista, amparado en el uso de un vocabulario y de un repertorio de mitos y referencias patrióticas que no era nuevo. Un discurso patriótico cuyas imágenes y tópicos reproducían los estereotipos e iconos del siglo XIX propios de la revolución liberal.

Pasionaria, en agosto de 1937, amplió la cronología patriótica, trufando sus intervenciones de personajes del mundo antiguo y medieval poseídos del espíritu de resistencia frente al invasor o frente al poder despótico, y

cuajado de hitos resistencialistas: Sagunto, Numancia, los vascones frente a Roma, El Cid, los Comuneros, las Germanías, la Guerra de Independencia, cuyo 2 de mayo prefiguraba la resistencia de Madrid, Agustina de Aragón…

Este tipo de discurso no podía si no mover a la crítica de los marxistas del POUM. En *La Batalla* del 4 abril de 1937, apareció un artículo en el que se criticaba el Boletín Oficial de la Junta de Defensa de Madrid, del 20 de marzo, donde había aparecido un dibujo con un texto que rezaba «Contra Mussolini y sus amigos levantemos la vieja bandera de Bailén». El periódico del POUM pedía un poco de seriedad, recordando que la bandera de Bailén era la roja y gualda, que enarbolaban los fascistas.[52]

Quizás el texto doctrinal más completo acerca del giro patriótico del discurso comunista español fuera el debido a Jesús Hernández: «El orgullo de sentirnos españoles». Este texto apareció en la prensa comunista el mismo 4 de abril, y se publicó posteriormente como separata. «La guerra de todo un país, la guerra de autodefensa de todo un pueblo por la independencia nacional, (es la lucha) por no convertirse en una colonia fascista. Nosotros somos los patriotas», proseguía Hernández, consciente de lo chocante que podía parecer esta afirmación hecha por una fuerza que había nacido de modo traumático por su adhesión a una Internacional concreta, la Internacional Comunista.[53]

En el discurso oficial del PCE la palabra «pueblo» se usaba para referirse a «las más amplias masas populares», que incluían trabajadores, campesinos, las clases medias, los comerciantes, la burguesía liberal y la intelectualidad; en otras palabras, cualquier grupo social que no perteneciera a la oligarquía. Ese pueblo, honesto y bueno, entendía que la obediencia civil y el respeto a la ley eran parte de sus obligaciones.

Este conglomerado de grupos sociales quedó enmarcado en una unidad única e indivisible, dentro de la cual la lucha de clases quedaba como un lamentable recuerdo de un oscuro pasado reciente. El Partido Comunista ya no estaba interesado en hacer «política de partido» sino «política del pueblo». Seguir luchando por una revolución proletaria significaría «dividir al pueblo», pues era obvio que no «todos los españoles» aceptarían el comunismo. Según el PCE, en la España de 1936 sólo había dos clases sociales: las masas y los fascistas. Cualesquiera que fueran las causas que en años anteriores habían alimentado la división política entre los que ahora enarbolaban la

bandera antifascista, debían ser olvidadas y perdonadas, y quien quisiera continuar y acentuar esas divisiones —léase: quien insistiera en la validez de la lucha de clases, es decir, los anarquistas y el POUM— debían ser considerados enemigos del pueblo.

El giro patriótico supuso definitivamente la subordinación de los objetivos de transformación social a los de defensa «nacional», dando lugar a la paradoja de que los dos bandos enfrentados reducían una guerra con un origen claramente social y económico a un enfrentamiento patriótico frente a hipotéticos invasores extranjeros. Los llamados «nacionales» frente a la invasión soviética, los republicanos frente a la invasión germano-italiana. Cambiando los ejemplos históricos, la retórica de uno y otro bando era la propia del más rancio patriotismo decimonónico.

La proclamación por el Gobierno Negrín del programa de los Trece Puntos reafirmó aún más esta tendencia nacionalista. La interpretación de la guerra civil, como guerra de liberación nacional, halló su formulación política más acabada en 1938, cuando el PCE propuso una «Unión Nacional frente a los invasores de España», unión en la que podían tener cabida todos los españoles con pundonor patrio aunque formaran en las filas franquistas. Así los contenidos del llamado marxismo-leninismo quedaron relegados definitivamente para el PCE al papel de referentes propios de autoidentificación dentro del magma de una «unión nacional» que iba a tener un largo recorrido de décadas en la estrategia del partido.

A mediados del año 1938, los comunistas se habían hecho indispensable para los políticos centristas que habían querido restaurar el poder del Estado. Pero logrado esto, y desarmada la corriente revolucionaria, en el ejército empezó a surgir una reacción frente al poder de los comunistas, que vino a coincidir con un creciente derrotismo y con la disminución de la ayuda soviética. Tras las batallas de Belchite, a finales de agosto de 1937, y Teruel, diciembre del mismo año, la idea de una victoria sobre los rebeldes se fue esfumando. El mismo ejército, cuya moral era normalmente más alta que la de la retaguardia, aparecía derrotado antes de que se iniciara la batalla de Cataluña.

Como explico tiempo después Claudín, un importante cuadro de las Juventudes Socialistas Unificadas: «Mucho antes de que las tropas fascistas irrumpieran en Barcelona y Madrid, la contrarrevolución se instalaba silen-

ciosamente en la zona republicana. A medida que la guerra civil se prolongaba, con su cortejo de privaciones y sacrificios, a medida que la correlación de fuerzas militares se modificaba a favor del enemigo (el cual recibía de Alemania e Italia una asistencia mucho mayor que la proporcionada por la URSS a la república), el desánimo y el derrotismo se propagaba entre las capas pequeño burguesas de la ciudad y del campo, contagiando también a grupos del proletariado.

La política capituladora de Azaña y Prieto adquiría una base social cada vez más amplia, mientras que la resistencia a ultranza preconizada por los comunistas encontraba un escepticismo creciente. El PCE se esforzaba desesperadamente por atajar esa degradación de la situación, pero ni la propaganda, ni las medidas destinadas a reforzar el ejército o a intensificar la producción de armas, podían compensar el vacío dejado por la pérdida de lo que había sido el resorte decisivo de la combatividad popular en los primeros meses: el entusiasmo revolucionario»[54]

Quien detecto con rapidez cual era la situación real de la República fue el Kremlin. Durante el Gobierno de Negrín, el flujo de ayuda militar rusa fue cada vez más débil. Cuando, en la primavera de 1938, la situación era especialmente difícil, la Unión Soviética ignoró las demandas de material y armamento que llegaban de España. «He pasado la petición de Negrín a la institución correspondiente [el Politburó] —escribió el 29 de abril Litvinov a Marchenko, el *chargéd'affaires* soviético en España— pero hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión.» Finalmente, el 7 de agosto, Litvinov escribió a Marchenko: «Hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre las peticiones de Ispanpra [el Gobierno español]. Creo que la razón de este retraso es que la respuesta va a ser negativa»[55]

Aún se enviaron algunos embarques de armas, pero Stalin había perdido interés por España. Estaba claro que el gobierno republicano iba a perder la guerra y la URSS tenía otras prioridades. Para el PCE la situación se tornaba extremadamente delicada y otro factor agravaba adicionalmente su situación: la existencia de un serio problema de dirección en el partido. El Secretario General José Díaz, un honrado trabajador con escasa formación intelectual de la que se reía Azaña por la forma de expresarse del comunista que decía «asín» y «presonas» y no «así» y «personas», vio como se agravaba su enfermedad del estómago y tuvo que marchar a la URSS para ser intervenido. Ante la ausencia de José Díaz, se formó un secretariado de tres

miembros, compuesto por Dolores Ibárruri, Pedro Checa y Manuel Delicado. Esta troika seguía de cerca al Gobierno, en el que figuraban dos ministros comunistas (Vicente Uribe y José Moix, este por el PSUC), pero esta dirección colegiada se mostraba incapaz de atajar la creciente hostilidad de sus aliados en el Frente Popular.

El aislamiento del PCE respondía a múltiples factores debidos en gran parte a la política que había seguido frente a otras formaciones y a la prepotencia, absolutamente engañosa, de la que había hecho gala en muchos casos. Sirva como ejemplo de este proceder las palabras del entonces todavía ministro Jesús Hernández, con motivo de una reunión en la que se trataba acerca del espinoso asunto de la desaparición de Andreu Nin y de las responsabilidades derivadas del director general de seguridad, el comunista Ortega, al que se le pedía su dimisión. Hernández intervino para fijar la posición de su partido al respecto: «Ya sabéis cómo trabajamos nosotros; siempre planteamos las cuestiones abiertamente, y si no nos escucháis, recurrimos a las masas. Ahora bien, no queremos causar una crisis gubernamental, pero si la política del Gobierno no cambia, nos veremos obligados a forzar una crisis, y ya habréis comprobado a raíz de la crisis del Gobierno Caballero que poseemos la fuerza suficiente para ello.[56]

Esa actitud de creer poseer mucho más poder del que el PCE tenía realmente, terminó por ser moneda corriente entre el resto de las organizaciones. La idea de un poderoso partido que «camuflado» en los resortes del Estado esperaba su momento, fue aceptada por muchos como cierta, cuando la verdad era bien distinta. Es cierto que el partido había conseguido colocar a muchos de sus hombres en puestos de responsabilidad, y que su crecimiento numérico impresionaba a todos los que recordaban cual era su fuerza al comienzo de la contienda, pero también es cierto que muchos de sus cuadros y buena parte de su militancia no eran capaces de responder a la compleja situación que se estaba viviendo. El mito enmascaraba la realidad y la presencia comunista, hacia el final de la guerra, en organismos como el SIM, o en el mismo comisariado del ejército, sirven para ilustrar esa paradoja de poder ficticio de la que participaban los mismos comunistas.

El Servicio de Investigación Militar (SIM) fue creado bajo el mandato de Prieto, el 9 de agosto de 1937. En este organismo se concentraban, sobre todo, los servicios de espionaje y contraespionaje y ha sido considerado tradicionalmente, por buena parte de la historiografía, como un feudo de los

comunistas y un instrumento para eliminar a sus adversarios en la retaguardia republicana. Sin embargo, el control comunista, sólo fue cierto en los primeros meses de existencia del SIM. En abril de 1938 sólo había en la zona centro dos agentes comunistas frente a los 248 miembros del PSOE. Cuando el coronel Casado dio el golpe de Estado, en marzo de 1939, el jefe del SIM en Madrid, que colaboró con él, era el socialista Ángel Pedrero García. El último jefe del SIM fue el socialista negrinista Santiago Garcés.

Lo mismo sucedía con la figura de los comisarios del ejército, función que todo el mundo creía «copada» por el PCE, cuando la realidad era bien distinta. En el segundo semestre de 1938 los comisarios de batallón pertenecientes al PCE o al PSUC eran 194 sobre 671, lo que suponía solamente un 28,9% del total. A esta realidad numérica habría que sumar la «calidad política» de muchos de esos comunistas.

En un informe del comunista García Val, fechado el 13 de agosto de 1938, se decía: «Las debilidades mayores en nuestra organización están en la poca capacidad de trabajo y de dirección de los comités de Batallón… El bajo nivel político de los militantes, que en general desconocen al partido, y en la poca consistencia de la organización»[57]

La verdad era que la organización, a pesar de llamar a la resistencia a ultranza, no se libraba del derrotismo. A finales de 1938 la moral caía a ojos vistas y, como denunciaba el mismo García Val, «en la mentalidad de la tropa se refleja con fuerza insospechada la corriente peligrosa de que la guerra se está terminando. De ello se habla en la vanguardia y en la retaguardia, se habla en las cartas de los soldados del frente, se habla en las tertulias, en los paseos, en los espectáculos»[58]

Cuando el fracaso de la batalla del Ebro era ya una evidencia, Negrín, en un esfuerzo desesperado por modificar la posición del Comité de No Intervención ante la presencia en los frentes de tropas no españolas, dispuso la retirada de las Brigadas Internacionales, sin obtener ningún resultado con esta medida. A pesar de todo, Negrín se empeñó en prolongar la contienda hasta que estallara la guerra en Europa, que consideraba como inevitable e inminente. En esta política resistencialista, contra viento y marea, contó con el apoyo incondicional del PCE que, obviando la realidad, comenzó a aparecer ante los ojos de muchos como el partido empeñado en prolongar los sufrimientos.

A cambio del apoyo al Gobierno, el partido exigía una acción implacable contra los llamados «capituladores»: «El Partido Comunista luchará sin piedad contra todos los que en estos momentos pongan cualquier obstáculo a este trabajo e intriguen contra la unidad». Más que nunca había que «perseguir a los provocadores, a los derrotistas y a los trotskistas agentes del invasor»

Pero la desolación alcanzaba también a las mismas bases comunistas: las fábricas de guerra estaban, de hecho, paralizadas por desmoralización absoluta de los obreros. Veteranos militantes del partido, procedentes de las fábricas de armas de Toledo y Asturias, rompían «el carnet del PC en bastante número, no por estar contra el PC, pero temiendo el triunfo de los fascistas y para guardarse»[59]

Cuando el 23 de enero de 1939 se recibió la noticia de que los franquistas habían llegado al río Llobregat, a unos cuantos kilómetros al sur de Barcelona, empezó un éxodo colosal, que fue denominado la «gran desbandada». El día 26 los rebeldes entraban en la exhausta capital de Cataluña, y Barcelona, la ciudad de la revolución, caía sin disparar un solo tiro. Un mes después, el 27 de febrero, los gobiernos británico y francés reconocieron formalmente al Gobierno franquista de Burgos.

El domingo 6 de febrero, pese a que Negrín intentó convencerle de que volviera a Madrid, el presidente de la República, Manuel Azaña optó por el exilio. Azaña redactó su dimisión —que no se hizo pública hasta el día 28— dirigida al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, quien por mandato constitucional debía aceptar la Presidencia de la República en funciones. El ya expresidente hubo de cruzar la frontera a pie.

Negrín y Álvarez del Vayo volvieron por vía aérea de Francia a Alicante el día 9 de febrero. Negrín alimentaba todavía la vana esperanza de resistir hasta el estallido de una guerra europea y convocó a los mandos militares para exhortarles a continuar resistiendo. Solo los comunistas le apoyaron. Cuatro días más tarde Negrín llegó a Madrid, donde convocó un Consejo de ministros para el día siguiente. Durante la reunión, el jefe del Gobierno, llamó una vez más a la unión del Frente Popular. Pero Negrín no instaló formalmente su gabinete ni en Madrid ni en Valencia. Se fue a vivir a una finca de Elda llamada El Poblet que, custodiada por unos 300 guerrilleros del XIV Cuerpo de Ejército, fue conocida con el nombre de «posición

Yuste». El 26 o 27 de febrero, Negrín se reunió de nuevo con los jefes de las fuerzas armadas en el aeródromo de Los Llanos, en Albacete, y les conminó de nuevo a resistir.

Aunque el 30% del territorio español seguía todavía en manos de la República, y el ejército popular contaba con medio millón de efectivos, la resistencia, desde el punto de vista militar, resultaba inútil. La falta de suministros y material de guerra convertían en imposible cualquier maniobra que no fuera una retirada ordenada. Desde hacía meses, los partidos del Frente Popular en Madrid, unidos en su disgusto por Negrín y por la política de los comunistas, cabildeaban en busca de una solución para poner fin a la guerra. El coronel Casado, como otros jefes y oficiales de carrera, creía que los militares profesionales tenían más posibilidades de obtener mejores condiciones para la rendición que si la negociaba un régimen encabezado por Negrín, y Casado se decidió a contactar con los agentes de Franco.

El 1 de febrero, Casado se reunió en Valencia con los generales Miaja, Menéndez y Matallana, quienes se mostraron de acuerdo con sus planes de rendición. Al día siguiente, ya en Madrid, se reunió con el socialista moderado Besteiro en el domicilio de éste y acordaron constituir una Junta alternativa al Gobierno de Negrín. Pocos días más tarde, Eduardo Val ofreció el concurso de los anarquistas de Madrid, que contaban con la colaboración de Cipriano Mera, un albañil libertario, que comandaba el IV Cuerpo de Ejército y había luchado junto a Casado en la batalla de Brihuega.

Negrín, por supuesto, tenía todas las sospechas del mundo sobre la actitud de muchos militares, pero no hacía nada para parar el golpe. Al anochecer del 5 de marzo, el coronel Casado, tras rechazar los llamamientos a la disciplina de Negrín, constituyó un Consejo Nacional de Defensa en los sótanos del Ministerio de Hacienda, en Madrid. La acción de Casado recibió un apoyo inesperadamente amplio porque la población ya estaba muy cansada de la guerra. El Consejo, presidido por el general Miaja, que llegó el día 6 a Madrid, procedió a ordenar el arresto de jefes, comisarios y militantes comunistas allí donde se les encontrara. Las tropas de Mera se encargaron de cumplir las órdenes y se dirigieron a los principales centros comunistas.

Negrín, incapaz de frenar el golpe por teléfono, abandonó la posición Yuste para dirigirse hacia Monóvar, donde aguardaban unos aviones procedentes de Los Llanos. Desde allí, Negrín, Álvarez del Vayo, Velao, Giner

de los Ríos, Blanco, Paulino Gómez, González Peña, Cordón, Dolores Ibárruri, Rafael Alberti y María Teresa León abandonaron España.

La relativa facilidad con la que la Junta de Casado estableció su control de la situación revela lo absurdo de las acusaciones de que la República estaba en las garras de los soviéticos y pone en evidencia la escasa capacidad del PCE para hacerse con el poder aunque lo hubiera pretendido, cosa que nunca pretendió.

El final de la guerra tuvo un cierto paralelismo con su inició. El golpe casadista pretendió deshacerse de los comunistas, no para salvar España de las garras del marxismo, sino para alcanzar una paz honrosa que el fascismo no le concedió. También, en esta segunda ocasión, el Gobierno Negrín y el mismo PCE, tenían noticia de que se estaba fraguando un golpe con una semana de antelación, y como ocurrió en julio del 36 no hicieron nada por desbaratarlo. El partido, preso de la legalidad republicana, quedó sometido a las indecisiones de Negrín, y a uno, y a otro, les faltó la decisión para adelantarse a los conspiradores. Ambos, consideraron no tener la fuerza suficiente para sofocar el golpe, ni tuvieron la coordinación necesaria para darle respuesta. El movimiento obrero, que había frenado al fascismo el 18 de julio, ahora se encontraba desarticulado, y la eficaz organización del PCE, basada en la férrea disciplina, se estaba disolviendo como un azucarillo. De ahí, la variopinta gama de respuestas al golpe del 5 de marzo que intentaron dar los comunistas, que variaron desde el acatamiento en algunas provincias, hasta la resistencia armada en Madrid, pasando por la movilización expectante a la espera de unas instrucciones centrales, que ni la dirección, ni la Komintern, llegaron a dar, al menos de modo explícito.

Durante los primeros días del mes de febrero, el dirigente de la Komintern Stepanov trató de convencer a los cuadros del PCE en Madrid de que el único camino era establecer una «dictadura revolucionaria democrática» para proseguir la lucha, propuesta que fue apoyada por Pasionaria, que volvió a expresar una vez más su determinación de ganar la guerra. Fue la única tentación en este sentido que tuvo el partido a lo largo de la contienda, y no llegó a más gracias a la tutela de la Komintern. Togliatti, que lúcidamente advertía el divorcio que separaba a los dirigentes de los ciudadanos, evitó que ese despropósito, a esas alturas del conflicto, pasara de ser un desvarío momentáneo.

La errática reacción del PCE ante el golpe casadista puso en evidencia que carecía absolutamente de un plan para salir de la guerra. La reacción de quienes estaban reunidos en Elda junto con Negrín fue la de marcharse para no caer en manos de los sublevados. Los dirigentes comunistas decidieron en una primera reunión que Dolores Ibárruri fuera la primera en emprender el camino del exilio. Le acompañaría Stepanov por indicación de Togliatti, quien aprovechó la ocasión para desembarazarse de él.

El resto de la plana mayor del PCE (Uribe, Delicado, Angelín, Modesto, Líster, Castro, Delage, Benigno, Melchor, Moix, Checa y el propio Togliatti), concentrada en el aeródromo de Monóvar, llevó a cabo en un hangar, la que sería la última reunión en territorio español de la dirección del partido. Togliatti preguntó a Líster y a Modesto sobre las posibilidades de llevar a cabo una acción de fuerza contra la junta de Besteiro y Casado. La respuesta fue negativa. Se decidió entonces que Checa, Claudín y Togliatti permanecieran en España para decidir el cupo y orden de evacuación y dirigir los restos del partido hacia la actividad clandestina. Los dirigentes objeto de evacuación partieron hacia Orán entre el 6 y el 7 de marzo.

De esta reunión salió una declaración pública del Buró Político, y poco más tarde se enteraron de que Jesús Hernández se había adelantado con otra. En ella se descartaba derribar al Consejo Nacional de Defensa casadista, ya que hubiera implicado retirar unidades del frente y abrirlo a la ofensiva enemiga y no había seguridad de que los soldados obedecieran. En esa intentona el PCE no iba a contar con aliados y sobre él recaería la responsabilidad de haber hecho que la guerra acabase en el caos. Togliatti consideraba que en última instancia, había que intentar llegar a un compromiso con el CND, para «tratar de salvar el Partido y el Ejército».

Al PCE no le interesaba que la derrota militar, ya inevitable, se desarrollase bajo su control. Era preferible que fueran otros quienes sellaran la rendición, quedando a salvo de responsabilidades históricas que pudieran debilitar en el porvenir su base política o el prestigio del partido. Por otra parte, el supuesto control de las fuerzas armadas mostraba no ser tan férreo como los comunistas pretendían, ya que cada vez era mayor el número de oficiales regulares que, captados para las filas comunistas al principio de la guerra, se oponían ahora al partido, como ocurrió con el famoso Miaja, «el héroe de Madrid». El PCE no pudo contar en aquella coyuntura con el apoyo del XX ni del XXI Cuerpos de Ejército, cuyos jefes, Gustavo

Durán y Ernesto Güemes, aunque miembros del partido, rehusaron oponerse al CND.

Domingo Ungría o el Campesino huyeron antes de tiempo y el despiste, desorganización, escaqueos y, en particular, la incapacidad de poner en marcha lo que siempre había sido el fuerte del partido, es decir, la maquinaria de propaganda, fueron la tónica en aquellos momentos. Las debilidades que se manifestaron, difícilmente compaginan con la imagen de una organización conspirativa dispuesta a lanzarse al asalto del poder. Pero ante las redadas de comunistas y la ocupación de sus locales, no solo en Madrid, sino también en Ciudad Real, Valencia, Alicante, Almería, Murcia, Jaén y Córdoba, un grupo de dirigentes del PCE reunidos en Madrid y encabezados por Isidoro Diéguez decidieron actuar.

La organización comunista de Madrid, que había llegado a contar con cerca de 75.000 miembros, había forjado su carácter combatiente de primera línea bajo el mito del éxito en la defensa de la ciudad en noviembre de 1936, y había adquirido un talante pugnaz frente al resto de fuerzas políticas, educando a sus militantes jóvenes en la épica de la resistencia y en los mitos del Octubre soviético. En ese ambiente el coronel comunista Luis Barceló, jefe del I Cuerpo de Ejército, se autonombró jefe del ejército del Centro y asumió el mando de las fuerzas contrarias al Consejo.

Fue entonces cuando estallaron feroces combates en las calles de Madrid por el control del centro de la ciudad, que se encontró con aceras casadistas y aceras comunistas. Los enfrentamientos se prolongaron hasta el domingo, día 12, cuando las fuerzas de Mera coparon a los comunistas y se llegó a un acuerdo de alto el fuego en medio de la indiferencia y el cansancio general del pueblo madrileño. Terminaba así la que irónicamente fue llamada «la semana del duro» (¡lo que faltaba para el duro!).

Barceló, el comunista que resistió, y al que le costó la vida su resistencia, no parece que hubiera podido comunicarse con Togliatti o con Checa porque las líneas telefónicas estaban controladas por los hombres de Casado. Tampoco «Alfredo» conseguía respuesta de Moscú a sus continuos telegramas en demanda de instrucciones para actuar en un sentido o en otro. Sin embargo, Tagüeña escribirá que Barceló no se rindió tanto por la presencia del IV Cuerpo de Ejército de Mera como «por las instrucciones que acabaron llegando de la dirección del Partido Comunista»[59]

Cuando en el fragor de los combates llegaron las instrucciones de Checa con la directriz de negociar con Casado, la desorientación y el desánimo se apoderaron de los militantes madrileños. Desaparecieron muchísimos de quienes trabajaban en el aparato de dirección y los dirigentes de los sindicatos. No había posibilidad de reunir un mínimo de responsables para la organización del paso a la clandestinidad, y los que resultaron encargados de quedarse en España para formar parte de la dirección ilegal no se avinieron a cumplir las órdenes.

Refugiado en casa de otro italiano, Ettore Vanni, director del diario comunista valenciano *Verdad*, Togliatti restableció por fin la comunicación con la Komintern a través de su mujer, Rita Montagnana, desplazada hasta Levante para transmitirle las consignas de «la Casa», es decir de Moscú, y trató de conseguir, sin éxito, el envío de barcos de la France-Navigation para proceder a la evacuación.

El otro conato de resistencia lo protagonizó Jesús Hernández, que en medio de la confusión formó un Buró Político, integrado por Larrañaga, Palau, Zapirain y Martínez Cartón, y decidió asumir de forma directa todo el trabajo militar, publicando un manifiesto en nombre de la nueva dirección con fecha 9 de marzo. En él se llamaba a la resistencia contra Casado, aunque las tropas que quería movilizar nunca se pusieron en marcha hacia Madrid.

Luego de numerosas peripecias, el día 24, bajo el mando de los hombres de Artemio Precioso, se tomó al asalto la escuela de vuelo de Totana, desde la que despegaron Togliatti, Checa, Hernández, Claudín, Diéguez, y Precioso, los últimos mandos comunistas que pudieron escapar de la Junta de Casado pocas horas antes de la entrega pactada de la aviación republicana a Franco. Este grupo voló hasta Mostaganem, en Argelia.

Al quedar brutalmente en evidencia la bancarrota de los planes de Casado por obtener una paz «honrosa», las tropas republicanas en todos los frentes empezaron a rendirse o sencillamente a marchar de vuelta a sus casas, aunque algunos se refugiaron en las montañas y organizaron allí una resistencia guerrillera que duraría hasta el año 1951.

El 7 de abril, en una reunión celebrada en el Kremlin con Molotov, Beria y Dimitrov, Stalin anatematizó al PC por no haber sabido llevar la resistencia hasta sus últimas consecuencias: «no supieron sostener la lucha hasta el

final»[60] Más tarde, en julio y en agosto, Stalin volvió a insistir en el error cometido por el PCE al apoyar a un Negrín al que, por su indecisión, consideraba como a un capitulador más.

Llegaba así para el PCE el final de una etapa crucial en su historia como organización. Lo más comunista que conservó el partido en esos años terribles no fue el contenido de sus políticas, sino sus técnicas organizativas y propagandísticas, uniendo ambos componentes, a un discurso con el que se podían identificar todos aquellos que participaban del ideario popular de izquierdas. Realmente la guerra convirtió al PCE, de un partido comunista que luchaba por la instauración del socialismo en nuestro país, en el mejor partido republicano conocido de la historia de España.

Notas

1.- Southworth, H., (2000): *El lavado de cerebro de Francisco Franco. Conspiración y guerra civil*, Critica, Barcelona, pág. 61.

2.- Inicialmente, desde Inglaterra, un partidario de Franco, el conde del Moral, confeccionó una serie de documentos «confidenciales» que «probaban» la inmediatez de un golpe revolucionario dirigido por la Unión Soviética, con el beneplácito de Largo Caballero y a fecha fija (junio o agosto).

2.- Díaz Plaja, F. (1970): *La guerra de España en sus documentos*, Plaza y Janes, Barcelona, págs. 334-338.

3.- Prieto, Indalecio (1968): *De mi vida*, Ediciones Oasis, México, Tomo. II, pág. 146.

4.- Ramos, Martín (2007): «La afiliación del PSUC durante la guerra civil (1936-1939): volumen, distribución territorial y composición social», Revista HMiC, número V.

5.- Graham, H. (2006): *La República española en guerra, 1936-1939*, Debate, Madrid, págs. 204-205.

6.- Testimonio de José Agustín Goytisolo, en Hermet, Guy (1972): *Los comunistas en España*, Ruedo Ibérico, París, pág. 39.

7.- Mora De La, Constancia (1939/1977): *Doble esplendor*, Crítica, Barcelona.

8.- Azaña, Manuel (2000): *Diarios completos*, *Monarquía, República, Guerra civil*, Crítica, Barcelona, pág. 956

9.- *Mundo Obrero*, 14/II/1939

10.- Vanni, E: (1950): *Yo, comunista en Rusia*, Destino, Barcelona, 1950, pág. 206.

11.- Hernández Sánchez, F. (2010): *Guerra o Revolución. El Partido Comunista de España en la Guerra Civil*, Crítica, Barcelona, pág. 295.

12.- *Ibidem*, pág. 326.

13.- OSSORIO, Ángel (1943): *Vida y sacrificio de Companys*, Losada, Buenos Aires, pág. 170.

14.- BORKENAU, F. (1977): *El reñidero español*, Ruedo Ibérico, París, pág. 54.

15.- KAMISKI, H. E. (1976): *Los de Barcelona*, Ediciones del Cotal, Barcelona, págs. 33 y 44.

16.- ALABA, V. (1978): *La revolución española en la práctica. Documentos del POUM*, Júcar, Madrid, pág. 98.

17.- SALVATORELLI, L. y MIRA, G. (1972): *Storia d'Italia nel periodo fascista*, Mondadori, Milano, T. II, pág. 376.

18.- CLAUDIN, F. (1970): *La crisis del movimiento comunista. De la Komintern a la Kominform*, Ruedo Ibérico, París págs. 168-196.

19.- ELORZA y BIZCARRONDO, *Opus cit.*, pág. 291.

20.- TOGLIATTI, P., (1980): *Escritos sobre la guerra de España*, Crítica, Barcelona, pág. 85.

21.- HERNÁNDEZ Sánchez, *Opus cit.* pág. 102.

22.- RYBALKIN, Yuri, (2007): *Stalin y España. La ayuda militar soviética a la República*, Marcial Pons, Madrid, pág. 40.

23.- *Ibidem*, pág. 54.

24.- ELORZA y BIZCARRONDO, *Opus cit.*, pág. 308.

25.-DALLIN, Alexander, y FIRSOV, F. I., (2000): *Dimitrov and Stalin, 1934-1943. Letters from the soviet archives*, Yale University Press, págs. 48.

26.- BUBER-NEUMANN, M. (1975): *Historia del Komintern. La revolución mundial*, Picazo, Barcelona, pág. 371.

27.- Artículo firmado por Paul Nizan en la *International Press Correspondence*, del 1 de agosto de 1936, aunque escrito antes del estallido de la guerra civil. Citado en BOLLOTEN, B., (1980): *La revolución española. Sus orígenes, la izquierda y la lucha por el poder du-*

rante la guerra civil 1936-1939, Grijalbo, Barcelona, pág. 25.

28.- *Mundo Obrero*, 27/1/1937

29.- En su obra *La revolución traicionada*, escrita en 1936 y publicada en 1937, Trotsky había escrito, criticando la colectivización llevada a cabo en la URSS, lo siguiente:

> «Con un solo gesto, la burocracia trató de sustituir a 25 millones de hogares campesinos aislados y egoístas, que ayer todavía eran los únicos motores de la agricultura —débiles como el jamelgo del mujik, pero motores a pesar de todo—, por el mando de 200.000 consejos de administración de koljoses, desprovistos de medios técnicos, de conocimientos agronómicos y de apoyo por parte de los campesinos. Las consecuencias destructivas de esta aventura no tardaron en dejarse sentir, para durar años».

TROTSKY, L. (1937/1976): *La Revolución traicionada*, Fontamara, Barcelona, págs. 60-61.

30.- REVERTE, M. (2004): *La batalla de Madrid*, Crítica, Barcelona, págs. 226-227.

31.- BEEVOR, A. (2005): *La guerra civil española*, Crítica, Barcelona, pág. 354.

32.- RADOSH *et alii. Opus cit*. 235.

33.- IBARRURI, D. *et alii*. (1966): *Guerra y revolución en España*, Progreso, Moscú, T. II, págs.102.

34.- BEEVOR, *Opus cit*. pág. 193.

35.- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, *Opus cit*. pág. 227.

36.- RADOSH *et alii. Opus cit*. 243.

37.- IBARRURI, D. *et alii*. (1966), *Opus cit*. T. II, pág. 208.

38.- PRESTON, P. (2010): *La guerra civil española. Reacción, revolución y venganza*, Debolsillo, Barcelona, pág. 263.

39.- BEEVOR, *Opus cit*. pág. 435.

40.- AZAÑA, *Opus cit*. pág. 943.

41.- BOLLOTEN, B. *Opus cit*. pág. 570.

42.- DÍAZ, J. (1970): *Tres años de lucha*, Ebro, París, págs. 431-32.

43.- AZAÑA, *Opus cit*. pág. 1054.

44.- SUAREZ, Andrés (1974): *El Proceso contra el POUM Un episodio de la revolución española*, Ruedo Ibérico, París. págs. 195-203.

45.- ELORZA y BIZCARRONDO, *Opus cit.*, pág. 297.

46.- ESTRUCH, Joan (1978): *Historia del PCE (1920-1939)* El Viejo Topo, Madrid, pág. 97.

47.- IBARRURI, *Opus cit*. T. II, págs. 102-103.

48.- DÍAZ, José, *Opus cit.*, pág. 350.

49.- *Ibidem*, pág. 557.

50.- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, *Opus cit*. pág. 305.

51.- DÍAZ PLAJA. *Opus cit*. págs. 232-233.

52.- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, *Opus cit*. 363-365.

53.- CLAUDÍN, F. *Opus cit*. pág. 189.

54.- BEEVOR, *Opus cit*. pág. 542.

55.- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, *Opus cit*. 367.

56.- *Ibidem*, pág. 399.

57.- *Ibidem*, pág. 397.

58.- *Ibidem*, pág. 399.

59.- TAGÜEÑA, *Opus cit*. pág. 321

60.- BEEVOR, *Opus cit*. pág. 657

V
El PCE en la guerrilla
1939-1951

El partido Comunista de España salió de la guerra civil derrotado pero no vencido. Aunque realmente poco se había hecho para preparar la continuación de la lucha en condiciones de clandestinidad contra la dictadura fascista, —tal y como se reconoció en el V Congreso del partido de 1954— podemos decir que el PCE fue la fuerza política del bando republicano que, por distintas razones, mejor y más rápidamente pudo organizar la resistencia frente al franquismo. Contribuyó a ello el poder que había alcanzado la organización durante la contienda, sumado a la disciplina férrea de una parte de su militancia, la ayuda-refugio que le prestó la URSS, y la misma estructura de la Internacional Comunista, que siguió operando hasta su desaparición como una red de apoyo a nivel mundial a través de los partidos comunistas.

Pero esto no debe llevarnos a engaño. El PCE de la derrota quedó seriamente mermado y desarticulado. Resulta imposible estimar cual era el contingente de sus efectivos en las dos primeras décadas de su lucha clandestina, aunque podríamos cifrarlo en algunos miles sin poder precisar más. Sabe-

mos que la URSS acogió a más de 2000 refugiados, que englobaban a militantes y sus familias, 1248 adultos, de los cuales 900 eran políticos y el resto familiares. Una comisión de responsables del PCE y de la IC en tránsito desde Francia, decidió sobre los ritmos de traslado y las personas. Por la IC, estaban en esa comisión los franceses Thorez y Marty, y por los españoles, Dolores Ibárruri, Hernández, Mije, Martínez Cartón y Antón, todos del Buró Político. Presidía la comisión Ercoli, es decir, Palmiro Togliatti.

También parece comprobado que en la operación de invasión por el Valle de Aran en 1944 participaron unos 5000 efectivos, aunque otras fuentes elevan la cifra, posiblemente englobando las distintas operaciones de penetración. En agosto de 1944, cuando se disolvió, el XIV Cuerpo de guerrilleros, integrado en la resistencia francesa, contaba con 12.231 combatientes y la mayor parte de ellos debían ser comunistas, lo que nos indica que los militantes del partido que permanecieron en Francia eran algunos miles más.

Es imposible evaluar el número de militantes en el interior, aunque podemos deducir que debió ser masivo el abandono del partido. Los presos de las cárceles franquistas salían destrozados, sólo una minoría seguía en la pelea hasta la siguiente caída, que —ya con la categoría de reincidente— le supondría una más larga condena o ir directamente al pelotón de fusilamiento. Por eso, si sumamos a los abandonos las víctimas directas de la primera represión, tuvo que producirse una reducción drástica de los efectivos respecto a los afiliados durante la guerra.

Simón Sánchez Montero recordaba, mucho tiempo después, que el PCE en los inicios de los años cuarenta llegó a contar en la factoría de CASA, en Getafe, con 60 comunistas, en una plantilla de cerca de mil trabajadores, más unos 250 que participaban en la Unión Nacional creada por el PCE. Cuando esta última se disolvió, la mayor parte se incorporó al partido. Cuesta creer que las cifras recordadas fueran esas, debido a la brutal represión nada más terminar la contienda, y resulta imposible extrapolarlas a otras partes del Estado, ya que arrojarían unos efectivos difíciles de admitir, dada la situación de casi total parálisis que se vivió durante un largo período de tiempo.

Margarita Abril, que dirigía a las juventudes del partido, explica que «entre la gente no había interés por luchar. La mayor parte de los contrarios al Régimen lo único que se planteaban era ir a las embajadas americana e

inglesa».[1] La propia Margarita dice que en Cataluña los miembros de las JSU eran unos 300, cifra muy alta si se se tiene en cuenta que en la misma época en Madrid eran sólo unos 60.

La estructura organizativa del partido también se vio profundamente alterada al enfrentarse no sólo a la clandestinidad sino también a la diáspora. Los núcleos más numerosos en esa dispersión geográfica fueron: la URSS, que supuso un refugió estable y seguro, pero muy alejado de España; Francia, con una geografía variable en función del desarrollo de la guerra mundial, que dividió el territorio del país vecino, en un primer período, entre la zona ocupada por los nazis y el gobierno colaboracionista de Vichy. Otro foco de importancia fue la América hispana, con un contingente bastante nutrido en Méjico; sin olvidar el norte de África, sobre todo la región de Argel con un importante centro operativo en Oran.

La misma dirección del partido quedó también dividida, con un Buró Político en Moscú, una sucursal reconocida del mismo en Méjico, y sendas direcciones improvisadas de modo más o menos espontáneo, y durante un tiempo, en el interior de España y en Francia.

Al frente del Buró residenciado en la URSS estaban Pasionaria, Jesús Hernández y Antón, aparte de un José Díaz ya muy enfermo. En 1940 se decidió crear un secretariado americano de cinco miembros con sede en Méjico, compuesto por Uribe, Hernández, Carrillo, Mije y Antón, asignando a cada uno misiones específicas, aunque esto no pudo aplicarse en su totalidad hasta tres años más tarde. Casi desde el principio estuvieron en el país azteca Pedro Checa, secretario de organización, Vicente Uribe y Antonio Mije, y algún tiempo después los más jóvenes: Santiago Carrillo, Federico Melchor, Ignacio Gallego, y Fernando Claudín. En el interior, quién se constituyó en dirección del primer intento de reestructuración del partido fue Heriberto Quiñones, hasta su caída en diciembre de 1941; y en Francia, tras el estallido de la guerra mundial, el partido dejó tan sólo como delegada a Carmen de Pedro, a quien acompañaban Manuel Azcárate, Manuel Jimeno y Jesús Monzón, pronto convertido éste último en el hombre fuerte del interior tras el apresamiento de Quiñones.

Esta dispersión produjo rivalidades en cuanto a las políticas a seguir, a las que se sumaron otras provenientes del relevo forzoso a la secretaria general tras la muerte de José Díaz en marzo de 1942.

De hecho toda esta anómala situación se tradujo en una mayor burocratización y autoritarismo de la dirección oficial encarnada en su Buró Político, que prescindió durante años y con excesiva frecuencia del Comité Central en la toma de decisiones. El V Congreso del partido, que había sido programado para agosto de 1936, sólo se celebró en 1954, muerto ya Stalin, y durante casi quince años las decisiones y nombramientos para distintas responsabilidades se acordaron en el entorno de la secretaria general y en escasas reuniones del Comité Central ampliado.

Sobre el mantenimiento económico de la organización tenemos escasos datos. Dadas las circunstancias debió ser precario y se tuvo que nutrir en su mayor parte de las transferencias netas que le hiciera la Komintern hasta su desaparición en 1943, y después de las ayudas que seguiría recibiendo de la URSS y de partidos hermanos como el PCF. No obstante, se sabe que el partido dispuso de fondos bastante importantes en los años que siguieron a la guerra civil. Una parte de estos fondos provenía de la venta de metales preciosos evacuados por medio de camiones a Francia, en particular durante los meses que precedieron a la caída de Cataluña. Otra parte estaba constituida por el saldo de los dos mil quinientos millones de francos que el Gobierno del doctor Negrín había confiado, según se cree, al Partido Comunista francés para la compra de armas y el mantenimiento de la propaganda republicana.

Al parecer, los comunistas españoles sólo habrían podido recuperar una fracción muy pequeña de esas reservas. Según Castro Delgado, parece que solamente obtuvieron una indemnización de cinco millones de los cien millones de francos que el PCF habría conservado en su provecho en las cajas de la Komintern. Aunque el partido francés siguió prestando siempre que pudo su ayuda al PCE, particularmente en forma de préstamos de locales y diversas facilidades materiales. Incluso se le concedieron indirectamente algunas subvenciones de una fundación americana, la *Unitarian Service Committee*, que procuró ciertos equipos para un hospital que el partido gestionaba en Toulouse, y asumió los gastos del tratamiento médico de comunistas españoles escapados de los campos de concentración alemanes.

También debió de existir un pago de cuotas por militancia en el exilio e incluso en el interior. Ruiz Ayucar dice que en el año 1945 un radio de once células y unos 100 militantes de Madrid cotizaban 100 pesetas a la semana[2]. Habría también otro tipo de aportaciones que se podían recibir

a través de donaciones particulares o de organizaciones internacionales destinadas al auxilio de los refugiados, a lo que podríamos añadir otros ingresos por publicaciones y otro tipo de actividades como empresas legalmente constituidas.

La relación oficial de gastos del PCE durante 1947 nos revela que el «sostenimiento del aparato» en Francia se elevó a 4.534.025,30 francos. La partida dedicada a la preparación de viajes ascendía a 1.966.506,35 francos y la de guerrilleros subió a 1.239.564,30 francos[3]. Aunque estas cifras parecen muy elevadas, la realidad es que al cambio —debido a las sucesivas devaluaciones que experimentó la moneda francesa— en pesetas de la época, —artificialmente sostenida en el mercado cambiario— los cuatro millones y medio de francos se reducían a algo más de 1.500.000 pesetas.

También debemos tener en cuenta que la guerrilla, por medio de los «golpes económicos» (atracos, secuestros…), proporcionaba aportaciones en ocasiones muy importantes. El «golpe económico» a la Sociedad de Fuerzas Motrices de Viella, en 1944 supuso un botín de 310.000 pesetas, una cifra muy considerable para la época, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el salario medio de un oficinista en España era de 400 pesetas al mes, un periódico costaba 25 céntimos y la barrita de pan de 200 gramos del racionamiento 35 céntimos. Incluso existen referencias sobre la introducción de moneda falsificada, billetes de cien pesetas fabricados en Italia, que también debió de suponer una esporádica fuente de ingresos.

La composición social del partido seguía reflejando la transversalidad que había adquirido la organización durante la guerra, con un marcado predominio de las capas populares: obreros y jornaleros del campo, algunos agricultores, pequeña burguesía artesanal, clases medias ilustradas y liberados del aparato. Lo poco que podemos saber en este aspecto lo revelan las fichas policiales de los detenidos y las actas procesales de los tribunales franquistas.

En una importante caída en Madrid, durante el verano de 1941, los principales encausados y fusilados eran: un polaco, cuadro de la Tercera Internacional, un sastre, un tabernero, un bombero, y un ferroviario. En la caída de la Agrupación Guerrillera de Galicia en 1947, la diversidad social y profesional de los apresados es fiel reflejo de la heterogeneidad de las gentes que integraban el movimiento guerrillero. Juan Romero Ramos, detenido en su domicilio de Pamplona, se encargaba de los pasos de frontera y enla-

zaba con la agrupación gallega; José Bartrina era médico; José Rodríguez Campos trabajaba de jornalero; figuraban también el sastre José Ramón Días; el campesino Juan Martínez; y cuatro mujeres: María Blázquez, Josefina González, Clementina Gallego y Carmen Orozco, esta última maestra nacional. Todos fueron ejecutados.

Cabe señalar la importante aportación de las mujeres en todo este período de la lucha inicial contra el franquismo, bien como apoyo y auxilio, o bien como miembros activos y combatientes. La mujer de José Mata, Adela Sánchez, pagó con un año de cárcel la fuga de su marido. «Si salvamos las vidas, muchas veces —diría el guerrillero— fue por las mujeres.»[4] Lo cierto es que, generalmente como enlaces, pero también como combatientes activas, muchas mujeres participaron en esa lucha. Así, los procesos de Mercedes Gómez Otero, María Teresa Toral e Isabel Sanz Toledano dieron lugar a una importante campaña internacional de solidaridad con el pueblo español nada más terminar la guerra en Europa, campaña que les salvó la vida. Pero en otros casos no tuvieron tanta suerte, como le ocurrió a la gallega Manuela Sánchez, aldeana de San Vicente de Carres, en la provincia de La Coruña, que en 1946 murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil, al facilitar la huida de unos guerrilleros que se habían escondido en su casa.

La naturaleza personal y motivacional del militante comunista durante esta dura época se asemeja realmente a la de los personajes de la novela soviética *Así se templó el acero* de Nikolai Ostrovski, publicada en 1935, y traducida a todas las lenguas. Militar en esa época en el PCE suponía asumir que, en caso de ser detenido, serías torturado y con suerte condenado a largos años de prisión, o en el peor de los casos serías ejecutado. Por tanto, la firmeza en las convicciones, fueran cuales fuesen, de los que estaban dispuestos a arrostrar tales riesgos no deja lugar a dudas y queda confirmada por multitud de historias que se conocen, a las que deberíamos sumar otras tantas desconocidas u olvidadas.

El final de Enrique Sánchez, un maestro, antiguo empleado de ferrocarriles, que estuvo al frente de la organización comunista de Madrid, con ramificaciones por diversos lugares, durante cuatro meses, hasta su detención en agosto de 1939, dio pie a numerosas historias, que de ser cierta sólo una, nos habla de ese temple de acero.

Cuando el director de la cárcel le comunicó a Enrique Sánchez su inminente fusilamiento, el reo le dijo: «¡Tómeme el pulso!» Y ante el gesto de sorpresa del funcionario, le repitió: «¡Tómeme el pulso, para que vea cómo mueren los comunistas, sin temblar!». En vísperas de su ejecución le preguntó a su hijo de siete años: «Dime: ¿qué van a hacer con papá?» Y el niño respondió: «Matarte» «Y tú —añadió Sánchez— ¿qué tienes que hacer?» El niño no lo dudó: «¡Vengarte!»[5]. Lo que se sabe con certeza, por los numerosos testigos que le sobrevivieron, es que Enrique Sánchez supo mostrar en aquellas circunstancias su carácter y su genuina autoridad, al conseguir que todos los penados de la cárcel de Porlier despidieran en posición de firmes la salida de Cazorla y sus compañeros hacia el fusilamiento.

Esta grandeza épica en el vacío, se mezcló con una ceguera dogmática y terrible, propia de los últimos años del estalinismo y los primeros de la Guerra Fría. El heroísmo de tantos fue parejo a la miseria de muchos. Los riesgos de la lucha clandestina generaron los miedos y paranoias de quienes estaban dispuestos a asumirla, propiciando las delaciones, las condenas, e incluso la eliminación física de los que se consideraban un peligro para la dirección del partido. Casos terribles como el asesinato de Trilla, o la condena política a todas luces injustificada de Quiñones, Monzón o Comorera, fueron acompañados de la bajeza moral de otros, que siendo conscientes de lo injusto de estas medidas las apoyaron y corearon desde la seguridad del exilio.

El estalinismo, como sistema de violencia, afectó como no podía ser menos al PC español, y lo hizo con mayor furor por las condiciones difíciles de su lucha frente al franquismo. Resulta complejo desde el presente comprender muchas de estas actitudes, aunque debemos proyectar una mirada indulgente sobre aquellos convencidos que estaban seguros de hacer lo correcto por el bien de la humanidad, por la salvación de la URSS y por el bien del comunismo. La política estaliniana operó durante esos años terribles en muchas personas con un estimable grado de formación y cultura política como si fuera una verdad revelada, influyendo de modo más fácil en otras que no tenían la misma preparación intelectual.

Es muy significativo que José Díaz, cuando iba a ser operado por tercera vez en la URSS, supo que Stalin había preguntado si el Secretario General español tenía algún deseo antes de ser sometido a esa intervención. La respuesta de Pepe Díaz no deja de ser paradigmática, pues su único deseo fue

«estrechar la mano de Stalin», que lo visitó, por primera y única vez, acompañado de gran parte de la dirección soviética de la IC.

Con motivo del cincuenta aniversario de Dolores Ibárruri, en un multitudinario homenaje en Toulouse, celebrado en 1945, el poeta Juan Rejano, le dedico un poema en el que figuraba este terceto con innegables remembranzas religiosas:

> Madre nuestra, panal, vena de fuego,
> amapola de héroe, guerrillera,
> a ti, entre llamas de esperanza, llego.

Dos años después y tres días antes de ser ejecutado, el 17 de diciembre de 1947, Segundo Vilaboy dirigió una carta a la dirección del PCE en donde, entre otras cosas, incluía un mensaje personal para Dolores Ibárruri: «Decid a Pasionaria que el guerrillero Vilaboy muere con el orgullo de haber sabido mantener bien alta la bandera de nuestro partido. No importa que yo caiga, pues estoy seguro que mi puesto será cubierto por decenas de luchadores.»[6]

La sacralización de los dirigentes y su infalibilidad era un hecho entre las filas comunistas. Militantes sinceramente convencidos hasta la muerte y atrapados en el atolladero de esa misma convicción fundada en la disciplina férrea, convivieron con otros, oportunistas dispuestos a medrar sin ningún tipo de escrúpulo, apoyándose en los mismos presupuestos. Un juicio difícil para la moral y más sencillo para la política.

La primera reacción de la dirección del PCE tras la derrota fue hacer balance de la misma y apuntar perspectivas a corto plazo. Ese balance se efectuó a dos niveles: primero lo abordaron Pedro Checa y Joan Comorera, responsable de organización del PCE y Secretario General de los comunistas catalanes, respectivamente, aunque también se conoce otro informe anónimo de fecha temprana. Más tarde el asunto sería tratado en una reunión conjunta por la dirección de la Internacional Comunista y el Buró Político del PCE.

El informe anónimo es un proyecto de Resolución fechado el 8 de julio de 1939, que nunca se hizo público. La autoría del texto es desconocida, aunque según Moran[7] se vislumbra tras él la pluma de Togliatti. En el informe hay dos tipos de análisis: los políticos y los organizativos. En el terreno político se trataba de un intento de acercarse a la realidad y de ofrecer

alternativas plausibles. Por ejemplo, se consideraba que se abría «un período más o menos largo de descenso del movimiento obrero revolucionario», y a causa de la victoria de Franco, había que pensar en constituir una Alianza Nacional que debería consistir en un frente de toda la oposición al franquismo más amplio que el viejo Frente Popular. Idea precursora de la futura Unión Nacional. También se rechazaban las tentaciones de ejercer actos de terror individual, al tiempo que apuntaba la necesidad de que los comunistas y obreros revolucionarios ingresasen en las organizaciones de masas creadas por el fascismo, con el fin de utilizar las posibilidades legales que estas pudieran ofrecer para así mantener el contacto con las masas...

Donde este proyecto de Resolución va a ser puntualmente seguido por el partido es en el aspecto organizativo, ya que proponía formar un secretariado de no más de cinco miembros, que vivirán fuera de España; así como configurar un nuevo Comité Central «designado por los miembros del viejo y algunos otros cuadros».

En el informe interno elaborado por Checa, se soslayaban todos los aspectos políticos y se centraba en la «reorganización de la dirección del partido». Se debían cambiar radicalmente los métodos de trabajo de la dirección y de todos los cuadros, apostando por la simplicidad y la modestia revolucionaria, frente a las costumbres que algunos camaradas habían contraído durante la guerra por su contacto con el poder.

Por las mismas fechas, mayo de 1939, Joan Comorera, responsable del PSUC, redactó otro informe que contrastaba con el anterior por su pintoresquismo. En él, refiriéndose a los exiliados que no tenían trabajo en Francia, ni podían volver al interior, Comorera les recomendaba intentar llegar a la URSS, para completar su formación, pues los cuadros militares del partido debían ser empleados lo más rápidamente posible en las guerrillas dentro del territorio español o en la lucha antifascista, en los lugares más adecuados, como ¡China o Etiopía! La única explicación de tan estrambótica propuesta del Secretario General del PSUC es que entonces se estaba librando la guerra chino-japonesa, en la que el partido comunista chino desempeñaba un importante papel, y que Abisinia estaba ocupada por el fascismo italiano.

En el marco de la Komintern el final de la guerra en España se abordó en el verano de 1939 y, luego, en febrero de 1940. Sabemos de un Informe

confidencial, fechado el 9 de septiembre de 1939 elaborado por Stepanov en que hacía un repaso de las causas de la derrota.

Entre las críticas que Stepanov hacía al PCE merece destacarse una. Stepanov decía: «Por razones comprensibles, el Partido Comunista concentró durante todo el periodo de la guerra su actividad y su energía en la guerra, en el ejército, en los frentes y en la movilización de los recursos humanos y materiales del país… Exigió a todos y, especialmente a los obreros, una gran tensión y grandes sacrificios… Y se llegó a una situación original: los saboteadores, caballeristas, anarcosindicalistas y funcionarios sindicales de ambas centrales sindicales comenzaron a poner en primer plano… reivindicaciones económicas demagógicas… Parecía que los comunistas estaban ocupados con la guerra y que los caballeristas y anarcosindicalistas eran los únicos que se preocupaban de la situación de la clase obrera. Es cierto que el partido realizó esfuerzos por desenmascarar esta falsa situación… Pero como mínimo no se consiguió desvanecer la impresión general de que el Partido Comunista se preocupaba menos que otros de los problemas obreros.»[8]

Lamentarse por eso tras la derrota no tenía sentido en febrero de 1940, cuando se reunió el Buró Político, algunos cuadros militares españoles (Líster, Modesto, etc...) y el líder del PSUC, Comorera, con la plana mayor de la Internacional: Dimitrov, Manuilsky, Stepanov, Gerö..., para dar respuesta, según contó Codovilla a Hernández, a la pregunta que Stalin había formulado a los líderes de la Komintern. «¿Por qué ha terminado la guerra del pueblo español en forma tan inesperada y luctuosa?»[9]

Tenemos muy pocas informaciones fiables sobre estas reuniones pero todos los testimonios parecen coincidir en que este encuentro con la cúpula de la Komintern fue la puntilla para José Díaz. Lo demuestra la insólita decisión que adoptó la Komintern que encargó a Pepe Díaz la responsabilidad de la Internacional en Latinoamérica y ¡la India!, cuando el honrado panadero sevillano apenas si sabía dónde se encontraban y cómo se distribuían los países en el continente americano y no digamos ya nada del subcontinente indio. El 19 de marzo de 1942, José Díaz, hasta entonces Secretario General, se suicidaba arrojándose por un balcón de la casa de reposo de Tbilisi, capital de Georgia, en donde se encontraba convaleciente de su enfermedad. La sucesión en la secretaría general del PCE quedaba así abierta.

La muerte de Pedro Checa en México, cinco meses después de la de José Díaz en Tbilisi, dejaba prácticamente como únicos aspirantes a Pasionaria y a Jesús Hernández, puesto que la candidatura de Vicente Uribe parecía mucho más hipotética. Ibárruir se rodeó de un equipo cuya cabeza más visible era Francisco Antón. Pasionaria estaba durante aquel período ligada sentimentalmente a este cuadro del partido, y había conseguido a través de sus influencias en el Kremlin, incluido el propio Stalin, que fuese rescatado por los soviéticos de un campo de concentración nazi. En este primer equipo de confianza de Pasionaria estaban también Irene Falcón, que había sustituido a Enrique Castro en el puesto de secretario particular de José Díaz, e Ignacio Gallego.

Hernández, que era un hombre muy apreciado por la colonia española en la URSS, tuvo que hacer frente al mito de Pasionaria. En las versiones oficiales, al mencionar la crisis sucesoria, se hablará después del «complot del Lux», —nombre del hotel en Moscú donde residían los cuadros de la Komintern— como elemento para descalificar a Hernández y a sus partidarios. Pero, más allá de las maniobras que pudo realizar Hernández y los que le apoyaban, lo fundamental en esa pugna fue que Dolores Ibárruri contaba con el apoyo de la plana mayor de la Internacional Comunista, y eso terminó siendo determinante. Pasionaria empezaría a actuar como si fuese la Secretaria General hasta que se realizase el Congreso y Jesús Hernández marcharía a Méjico para dirigir desde allí el partido.

Mientras en la capital soviética se libraba esa sorda batalla por la sucesión, en Méjico se planteaba sin traumas la de Pedro Checa. Checa era un hombre que tenía grandes dotes de organizador y, de hecho, el PCE funcionó desde finales de 1942 hasta el V Congreso en base a el informe sobre organización redactado por él. También era el encargado de enviar los dirigentes del partido al interior. A la muerte de Checa fue el propio Vicente Uribe quien se encargó de proponer a Santiago Carrillo, para sustituirlo. De ese modo Carrillo se convirtió, a finales de 1942, en miembro del Buró Político y en el responsable del trabajo en el interior de España.

La estrategia del partido vino determinada en estos años por dos factores: la política internacional y la quiebra que había experimentado el Frente Popular a lo largo de la guerra acrecentada por la derrota. El primer factor supuso para el PCE continuar con el seguidismo de la política señalada por la URSS; el segundo factor estuvo marcado por la contradicción. Los recelos

y enfrentamientos entre las formaciones republicanas chocaban con la necesaria unidad para enfrentarse al franquismo triunfante, sin embargo esa unidad se hacía difícil por la intransigencia de unos y otros.

El seguidismo del partido a la política de la todavía existente Komintern le permitió pasar sin mayores traumas del pacto nazi-soviético a la defensa a ultranza de la URSS cuando fue invadida por los ejércitos hitlerianos.

El pacto nazi-soviético fue firmado en agosto de 1939, y en Francia, los comunistas se convirtieron ante el aterrorizado Gobierno de Daladier en agentes de una potencia extranjera. El decreto declarando disueltas las organizaciones comunistas en el vecino país se hizo público el 26 de septiembre. Sin embargo la plana mayor del PCE, no tuvo dudas, el pacto nazi-soviético era correcto si así lo había decidido Stalin.

Cuando comenzó la guerra, la invasión nazi de Polonia tampoco supuso ningún cambio. El 18 de febrero de 1940, Dolores Ibárruri publicó en el órgano del PCE en Méjico, *España Popular*, un artículo titulado «La socialdemocracia y la actual guerra imperialista», donde planteaba disolver Polonia porque se trataba de un Estado creado artificialmente por el Tratado de Versalles.

La aberración llegaba a extremos como el que cuenta Enríc Adroher «Gironella», ocurrido en el campo de refugiados españoles de Vernet d'Ariége: «En el campo teníamos altavoces a través de los cuales se informaba de la marcha de la guerra. Recuerdo que en el mes de junio de 1940 notificaron el avance de los alemanes hacia París. Los comunistas (militantes del PCE) del campo aplaudían cada día al conocer la victoria alemana»[10]

Esta línea no variará hasta la invasión nazi de la URSS el 21 de junio de 1941, será entonces cuando el PCE apueste por la Unión Nacional. Ahora era la Patria del Socialismo la amenazada y el movimiento comunista mundial debía acudir en su ayuda. A partir de aquella fecha, Hitler y los nazis volvieron a ser unos asesinos y traidores contra los que había que luchar.

Al PCE le tocaba impedir que Franco entrara en guerra junto a Hitler, y el Comité Central lanzó en agosto de 1941 y, con más claridad y difusión, en septiembre de 1942, sendos manifiestos por la Unión Nacional. Para el partido, con el ataque a la URSS, la naturaleza de la guerra había cambiado, ahora se trataba de «una verdadera guerra nacional de los españoles contra

los nazis y sus lacayos falangistas», y el objetivo fundamental e inmediato era evitar que España participara en la guerra junto a Alemania. La consigna «Ni un hombre, ni un arma, ni un grano de trigo para Hitler», se debía concretar saboteando la producción destinada a Alemania, evitando exportaciones a aquel país, y haciendo campaña contra el reclutamiento de la «División Azul».

El instrumento político para impulsar esa estrategia era la Unión Nacional Española, que pretendía aglutinar un amplio espectro de fuerzas que lucharan contra el franquismo. Sin embargo, ningún otro partido se adhirió al programa, y sólo se sumaron personalidades a título individual. Todas las demás formaciones rechazaron su participación en una organización promovida por los comunistas, e incluso expulsaron de su seno a los que ingresaron en UNE.

Pero el programa de la UNE tenía un calado más hondo. La amplitud de miras, en cuanto a las fuerzas que se pretendía abarcar, obligaba a un programa moderado al máximo. Tal era el posibilismo programático en ese momento que ni se mencionaba a la República. En la *Historia del PCE* se dice: «La política de Unión Nacional tendía no sólo a impedir que Franco arrastrase al pueblo español a la trágica aventura de la guerra, sino a desbrozar el camino hacia el derrocamiento de la dictadura del general Franco y el restablecimiento de la situación democrática en España».[11] Este objetivo último se basaba en el hecho de que, según los análisis del PCE, la gama de fuerzas opuestas a la política franquista de apoyo al hitlerismo era más amplia que la de las fuerzas que habían luchado por la República. Por tanto existía la posibilidad de un reagrupamiento, que poniendo fin a la división abierta por la Guerra Civil, incorporase a la acción contra la dictadura a sectores que antes la habían apoyado. El llamamiento abarcaba incluso a los elementos que en el interior del país constituyesen en las filas del régimen la oposición a la política que Franco realizaba, es decir, los monárquicos, carlistas y demás familias del régimen surgido el 18 de julio de 1936, no vinculadas a Serrano Suñer y la Falange, aunque el llamamiento se hacía extensivo incluso a los falangistas arrepentidos.

En el manifiesto del Comité Central de septiembre de 1942 se llegaba a decir que «los momentos transcendentes que vivimos obligan a deponer las diferencias, los odios y las pasiones que nos separaron hasta hoy para colocar por encima de todo el interés supremo de España»[12] Con esta estrategia

se estaban asentando los cimientos de la futura política de Reconciliación Nacional.

Como ya hemos dicho, la política de Unión Nacional inaugurada por el PCE en el verano de 1941 no prosperó por el posicionamiento del PSOE, que seguía profundamente dividido, por la debilidad organizativa de los pequeños partidos republicanos y por el recelo de los anarquistas, que también estaban divididos.

El PSOE continuaba inmerso en las tensiones entre Negrín y Prieto, este último progresivamente escorado hacia la derecha y proclive a auspiciar una Monarquía Constitucional. En 1944, los socialistas celebraron un congreso en Argelia en el que salió elegido como Secretario General Rodolfo Llopis. En cualquier caso, el anticomunismo comenzó a prefigurarse rápidamente como un rasgo fundamental del PSOE de la posguerra.

Los anarquistas también estaban divididos entre «apolíticos» y «políticos»: crisis que se puso de manifiesto en la reunión plenaria de Muret, en mayo de 1944. Los «apolíticos» se posicionaron junto a Federica Montseny, antigua ministra republicana, y los «políticos», con Horacio Prieto, se propusieron colaborar en frentes unitarios con otras fuerzas republicanas.

En medio de estas divisiones la Unión Nacional no tenía viabilidad, no obstante en febrero de 1942 se constituyó en Méjico una plataforma denominada Unión Democrática Española (UDE), que distaba mucho de ser unitaria. En ella se integraron el PCE, los sectores «negrinistas» del PSOE y la UGT, la Izquierda Republicana que se había fusionado con Unión Republicana bajo la denominación de Partido Republicano Federal y la Unió de Rabassaires. Por su parte, el PSUC creó algo parecido, consiguiendo que se integrasen en su plataforma personalidades del anarquismo como García Oliver, pero sin la participación del Movimiento Libertario.

Pero la UDE duró poco, ya que unos meses después, en las formulaciones que hizo el PCE a través de Radio España Independiente (la Pirenaica), que transmitía entonces desde la URSS, sobre como entendía la Unión Nacional, ya no se mencionaba ni el Gobierno de Negrín en el exilio, ni la Constitución de 1931 y, en su lugar, se proponía la celebración de «elecciones democráticas» para constituir una «asamblea constituyente que elabore la carta constitucional que garantice la libertad, la independencia y la prosperidad de España»[13] Negrín respondió a este mensaje rompiendo con los

comunistas. Así, en febrero de 1943, con menos de un año de vida, la UDE se disolvió. Sin embargo, los socialistas y los republicanos «negrinistas», a diferencia del propio Negrín, no rompieron completamente sus vínculos con el PCE.

Entre tanto, los socialistas de derechas con Prieto a la cabeza, y sectores del republicanismo, conformaban la Junta Española de Liberación (JEL), donde tampoco quedaba clara la defensa de la República, pero si la exclusión explícita del PCE.

El PCE y muchos anarquistas consideraban que la JEL confiaba en exceso en la «caída espontánea» de Franco con la ayuda aliada tras las derrotas del nazismo en Europa, y propugnaban forzar la situación. El PCE en Francia contaba con un contingente armado respetable, basado en antiguos guerrilleros españoles que habían luchado dentro de la Resistencia Francesa; y en 1944 aprobó un plan que consistía en que el maquis comunista penetrase en suelo español para iniciar un «levantamiento revolucionario armado» de gran alcance contra el franquismo, plan que denominó Operación Reconquista de España, y que sirvió sobre todo para poner en evidencia la debilidad del partido en el interior.

Cuando la dirección del PCE salió de España en 1939, el máximo dirigente que quedó en Madrid para reorganizar el partido fue una mujer, Matilde Landa. La decisión se tomó en la última reunión del Buró Político, incompleto, que se celebró en la capital días antes del golpe de Casado.

Matilde Landa ni siquiera pertenecía a la dirección del partido, y era simplemente una responsable del Socorro Rojo. Esta decisión evidencia la extrema improvisación en la que la organización comunista se movió tras la derrota. A esta debilidad había que sumar que el PCE que salía de la guerra no tenía ni idea de lo que era la clandestinidad, ya que muy pocos de sus miembros la habían conocido. Landa, actuando con el nombre de guerra de Elvira, pudo aglutinar a pequeñas células que pretendían sobre todo organizar la fuga de conocidos dirigentes que no habían podido escapar, pero ella misma fue detenida antes de acabar el mes de abril de 1939.

Poco después llegaba a Madrid José Cazorla, miembro del Comité Central, que había conseguido escapar del campo de concentración de Albatera, confiando en que el partido hubiera dejado una estructura organizativa que le permitiera continuar la lucha con algunas garantías. Este dirigente hubo

de esconderse, haciéndose pasar por jardinero, en una casa de las afueras de Madrid, sin salir ni siquiera a la calle si no era para entrevistarse con otro dirigente menos conocido, Enrique Sánchez, que había sucedido a Landa como responsable del partido en el interior.

Pero en agosto de 1939 Sánchez también fue detenido y con él irán a la cárcel varias decenas de militantes. Los franquistas fusilarán a Enrique Sánchez, Torrecilla y Juan Fonseca, como antes habían hecho con Cazorla, que capturado por la policía fue el primero en ser ejecutado al haber formado parte de la Consejería de Interior durante la defensa de Madrid. Con sus muertes se cerró la primera etapa de las direcciones improvisadas en el interior, herencia del desastre organizativo que dejó la derrota, y con ellas se abrió un período que durará hasta la primavera de 1941, casi dos años, en el que no existió Partido Comunista estructurado, sino comunistas dispersos, dependiendo de sí mismos.

Uno de esos comunistas había salido del campo de concentración de Albatera, a finales de 1939, con la representatividad verbal que le había otorgado en el campo el también preso Jesús Larrañaga, miembro del Buró Político, el cual le encomendó la misión de que intentara reorganizar el partido. Ese hombre era Calixto Pérez Doñoro, un cuadro de escasa relevancia en la organización, que disciplinadamente asumió la tarea desplazándose a la capital.

Doñoro contactó en Madrid con varios militantes sin notoriedad y a través de ellos llegó a José Wajsblum, entonces el genuino responsable de gran parte de los grupos comunistas que existían en la ciudad. Bajo la orientación de este polaco, profesional de la Internacional Comunista, se llegaron a reunir los pocos cuadros políticos que estaban libres, y de ahí saldrá un grupo, que se autodenominará Comisión Central Reorganizadora. Era la primera vez que de modo autónomo, sin orientación ni ayuda exterior del PCE, un grupo de comunistas asumía la dirección política en España, sin otro soporte que su voluntad de continuar la lucha contra el franquismo.

Fue entonces cuando esta improvisada dirección conoció en abril de 1941 a Heriberto Quiñones González que con documentación falsa llegó a la capital bajo el nombre de Anselmo Aracil Laborda, arquitecto. Realmente se trataba de un instructor de la Komintern que había llegado a España en 1931, para hacerse cargo en Valencia del trabajo en el seno del ejército. En

1934, residiendo en Palma de Mallorca, participó en la fallida revolución de octubre y fue encarcelado. El golpe fascista de julio de 1936 le sorprendió a Quiñones en Madrid, incorporándose de inmediato a las milicias republicanas, aunque su principal actividad la desarrolló como intérprete con militares rusos y en la embajada de la URSS.

Al terminar la guerra nuestro hombre fue internado en Albatera de donde logró escapar dirigiéndose a Valencia. Allí comenzó a trabajar en la reconstrucción de la organización comunista. Pudo crear una mínima infraestructura e incluso exploró, sin éxito, una vía de salida segura hacia Francia. Pero en el verano de 1939, Quiñones fue detenido y, tras ser sometido a torturas, le encerraron en la cárcel de Valencia, de donde no saldrá hasta octubre de 1940.

Cuando Quiñones llegó a la prisión, dado su lamentable estado producto de los interrogatorios, ingresó directamente en la enfermería, y estando en ella mantuvo el primer contacto con la dirección del partido desde el final de la guerra. El dirigente vasco Ramón Ormazábal, miembro suplente del CC, era el máximo responsable del partido en el penal valenciano y con él trabó relación Quiñones. Relación que daría pie tiempo después a un informe que redactó Ormazábal a petición del Buró Político sobre ese misterioso personaje. Pero la oportunidad para que Quiñones escapara del encierro no vino de manos del vasco sino de otro militante, Francisco Badía, cuya mujer conocía a un sacerdote que por dinero estaba dispuesto a sacar a presos del penal, al tener el cura acceso a los expedientes del Juzgado Militar número 11. Entre los encarcelados se decidió que fuera Quiñones el que se beneficiase de esa oportunidad.

Así, en octubre de 1940, nuestro hombre estaba ya de nuevo en la calle, aunque no recaló en Madrid, haciéndose pasar por el arquitecto Anselmo Aracil Laborda, hasta abril de 1941. Su presencia en la capital se debió a que Wajsblum había propuesto a la Comisión Central Reorganizadora traer de Valencia a un cuadro político capaz y de confianza. A su llegada le acompañaba un militante con el que había contactado en la ciudad del Turia, Luis Sendín López, un cuadro de la Juventud Comunista antes de la guerra.

Quiñones tenía en su haber una profesionalidad conspirativa y una formación política de la que los otros carecían, lo que le permitió hacerse desde la primera reunión con la dirección de la denominada Comisión

Central Reorganizadora. El internacionalista operó desde el primer momento como un dirigente seguro de sí mismo, y envió emisarios a todas las provincias con la intención de comunicar que ya había una dirección del PCE en el interior.

El único lugar donde despertó recelos fue en Bilbao, dado que Fernando López Realinos, un cuadro de escasa relevancia, mantenía esporádicos contactos con la dirección en el exilio a través de algunos marineros, y en esos contactos no se le había comunicado nada sobre una dirección en el interior. Ante esos recelos Quiñones envió a Pérez Doñoro a la capital vasca para convencer a Realinos, y a los restos del Comité de Euskadi, de que la dirección del partido ya estaba en Madrid y era a ella a la que se debía dar cuentas y también la que recibiría las escasas comunicaciones que vinieran de América.

Durante el verano de 1941 tuvieron lugar en Madrid una serie de reuniones con dos objetivos: constituir una dirección estable y elaborar una línea política que se adecuase al momento. Quiñones conformó un Buró Político en el interior y elaboró un documento, hoy desaparecido, que tituló «Anticipo de orientación política», al que añadió un paréntesis («hasta que se redacte el anteproyecto de tesis»).

En julio de 1941 una gran parte de la Comisión Central Reorganizadora fue detenida. Entre los condenados en consejo de guerra y ejecutados se encontraba el polaco Wajsblum. Esto obligó a reforzar las medidas de seguridad pero no se interrumpió la labor reorganizadora de Quiñones, que informó a la dirección del PCE en Méjico de la constitución del Buró Político y de los enlaces en el interior, al tiempo que instaba a que todos los camaradas sobre los que no pesara pena de muerte regresasen a España.

Ante esta comunicación, la dirección americana del partido, Uribe, Mije y los que residían en Cuba, se inquietaron y pidieron a Ormazábal, que era el último responsable que había escapado de España vía Portugal, les informase de quién podía ser el que se escondía tras la lacónica firma de «Paco», utilizada por Quiñones para signar la carta remitida a la dirección americana. Ormazábal respondió inmediatamente: no cabía la menor duda de que el tal Paco era el Quiñones que él había conocido en la cárcel de Valencia.

Celosa de su papel dirigente, la dirección del PCE en América, aceleró el envío al interior de representantes autorizados que impusieran su autoridad al tal Paco, al tiempo que advertían a la organización del partido en Francia, que dirigía Carmen de Pedro y Jesús Monzón, de que había problemas con el interior y se debía enviar un enlace para que se informase de que estaba sucediendo, lo que hicieron en el mes de octubre mandando a Jesús Carreras a Madrid.

En aquellos momentos, si hemos de creer a Julián Vázquez, responsable de organización hasta su caída, el partido en el interior alcanzaba la cifra de varios miles, con comités en lugares como Segovia o Cuenca. La de Quiñones era pues una organización capaz, que incluso editaba pequeños boletines de una sola hoja, pero adolecía de normas de seguridad eficaces. Quiñones impuso las reuniones triangulares, en grupos nunca más numerosos de tres, los dirigentes espaciaron las entrevistas, y se establecieron «contactos de saludos» consistentes en cruzarse por aceras paralelas cada dos o tres días, sin necesidad de pararse, con la finalidad de saber que no había problemas.

Uribe, desde América, alarmado por lo que estaba sucediendo, montó una operación para dotar al PCE del interior de una dirección oficial, pero el montaje acabó en un fracaso que, de nuevo, puso en peligro a los que ya estaban trabajando en España. Dos miembros inexpertos de las Juventudes Socialistas Unificadas, enviados desde América, fueron detenidos y confesaron ser la avanzadilla de una comisión, con cuadros experimentados como Larrañaga y Diéguez, ambos del Buró Político, que iban a entrar en el interior vía Lisboa. Advertida la policía portuguesa del dictador Oliveira Salazar, detuvo y entregó a la policía franquista a todos los cuadros enviados desde América.

Fracasada la penetración en el interior desde el continente americano vía Lisboa, se intentó desde Francia, donde tanto Monzón como Carmen de Pedro estaban al tanto de la existencia de un Buró Político en España y de un peculiar Secretario General del interior. La organización en Francia había enviado a Jesús Carreras para que advirtiera a Quiñones que la única dirección del partido era la que se encontraba en el exilio, a lo que Quiñones respondió que no habría más contactos con el exilio que los estrictamente orgánicos; es decir, los controlados por la organización del interior, ya que no quería exponerse a nuevos descalabros.

Pero el doble cerco de la policía y de la dirección del partido en el exilio que sufría Quiñones se iba estrechando, y finalmente el penúltimo día del año 41, cuando pasaba junto a la puerta del metro General Mola, en la madrileña calle de Alcalá, la policía detuvo a Quiñones y a Ángel Cardín, secretario de organización tras la detención de Julián Vázquez.

Salvajemente torturado Quiñones se negó a decir siquiera en qué domicilio vivía. Ingresó en la cárcel de Porlier, entonces superpoblada con más de cinco mil presos, donde tuvo un contacto con el partido que le hizo saber que había sido «expulsado por traidor». En el consejo de guerra que le condenó a muerte el 20 de septiembre de 1942, hizo una defensa apasionada de sus ideales, aunque seguía postrado en una silla, sin poder levantarse ya que tenía la columna vertebral partida, y asumió de nuevo la responsabilidad de ser el Secretario General del interior. A la pregunta del fiscal sobre qué tenía que decir cuando sus camaradas le acusaban de traidor, Quiñones no quiso responder para no dar la impresión de desunión en sus filas, y le espetó al fiscal que eso sólo competía a los comunistas y no a sus enemigos.

El «traidor» Quiñones supo estar a la altura hasta el final ya que tenía tres elementos que lo hacían atípico en el comunismo español de aquella época: tenía experiencia política, cultura básica y consecuencia ideológica. Sin embargo, el único párrafo que le dedicó la historia oficial del PCE, redactada en 1960, finaliza con una calumnia que quienes la escribieron sabían que lo era. Quiñones, dice el manual, «entregó a la Policía toda la organización del partido»[14]

La figura de Quiñones debía ser estigmatizada por el relato oficial ya que su persona y su actuación evidenciaban dos cosas que la dirección del PCE no estaba dispuesta a asumir. Evidenciaba que la lucha debía dirigirse desde el interior y no desde la seguridad que daba el exilio, y evidenciaba también la irresponsabilidad de la dirección al haber abandonado a su suerte al conjunto de la militancia tras la derrota en la guerra.

Con la caída de Quiñones, y de gran parte de la organización, terminaba 1941 y el partido quedaba de nuevo desmantelado. Del destrozo da idea la detención de 250 militantes sólo en Sevilla. El 8 de abril de 1942 volvió por segunda vez a Madrid Jesús Carreras con instrucciones muy concretas, reconstruir una Comisión Nacional con los escasos supervivientes de la dirección de Quiñones. Su actividad no llegará al año pues en marzo de 1943

será detenido. Como llevaban semanas siguiéndole la policía obtuvo el mayor archivo de material del PCE desde el final de la guerra. Desde la ejecución de Carreras hasta que llegue Jesús Monzón desde Francia la vida de los comunistas en esta etapa se limitará a la mera supervivencia.

Jesús Monzón Reparaz será el responsable del PCE en Francia de manera no oficial, desde 1940 y del interior desde 1943 hasta finales del 44. Había nacido en Navarra en el seno de una familia bien situada y aunque no formaba parte del equipo dirigente del PCE, ni pertenecía tan siquiera al Comité Central, durante la guerra había ocupado puestos de responsabilidad como gobernador de Alicante y Cuenca. Su posición le permitió abandonar España en el mismo avión que lo hizo Dolores Ibárruri, pero a diferencia de ésta se quedó en Francia.

Al producirse la desbandada del PCE en el país vecino como consecuencia de la ilegalización de los comunistas al comienzo de la guerra mundial, quedó como responsable del partido en todo el territorio francés Carmen de Pedro. Pero Monzón no tardó en hacerse con la organización, a lo que contribuyo su innegable capacidad política y que comenzó a convivir con la responsable oficial. Gracias a su labor pudo aglutinar a cerca de cinco mil españoles dispersos en el dividido territorio francés. En 1942 el PCE contaba en Francia con una importante organización clandestina e incluso con un aparato técnico dedicado a fabricar documentación falsa. Así pudo ser enviado a España Jesús Carreras para contactar con la organización de Heriberto Quiñones.

Cuando en octubre de 1942, el PC francés desencadene la actividad guerrillera anti-nazi, muchos españoles residentes en el país vecino, con experiencia en este tipo de lucha, verán la oportunidad de reanudar la pelea antifascista, que en realidad era para ellos un aspecto de la lucha antifranquista. Los españoles podían suministrar a los maquis franceses la experiencia bélica que a estos les faltaba, y así pasaron a formar parte de la resistencia francesa.

En esa coyuntura, el aparato del PCE en Francia, que contaba con una infraestructura clandestina nada desdeñable bajo la dirección de Monzón, aplicaba al pie de la letra las instrucciones de la Komintern y —cuando llegaban— las de Moscú (Ibárruri) y México (Uribe), a los que consideraban

dirigentes sin asomo de duda, y en los que creían a pies juntillas a la hora de aplicar la estrategia de la Unión Nacional.

Pero en el verano de 1941 Monzón promovió una iniciativa personal: la creación de un periódico titulado *Reconquista de España* que respondía a la nueva política de Unión Nacional. Pronto Monzón se convertirá en el presidente de ese organismo casi fantasma y contará con la valiosa colaboración política de un veterano del PCE: Gabriel León Trilla, que expulsado en 1932, había vuelto a militar en el partido durante la guerra, para ser recuperado por Monzón que lo convirtió en su hombre en el interior.

A mediados de 1943, Trilla llegó a Madrid, y en el otoño de ese mismo año lo hizo el mismo Monzón. En la capital Monzón consiguió reunir a un puñado de perfectos desconocidos en una tasca de la madrileña calle de Jesús y María, y allí constituyó la Junta Suprema de la Unión Nacional, con un socialista, un ugetista, un cenetista y otro comunista como él, haciéndose nombrar sin ninguna dificultad presidente de dicha Junta Suprema.

La tarea que se habían propuesto Monzón, Trilla y sus colaboradores, era doble: desarrollar la Unión Nacional y crear un movimiento guerrillero como el que ya estaba operando en la Francia ocupada. Trilla, se desplazó a Valencia donde había una potente base organizativa del PCE y donde lógicamente podía ser más fácil crear una agrupación guerrillera. La organización guerrillera de Valencia salió adelante y durará, tras pasar por innumerables vicisitudes, hasta 1952. Mientras tanto Monzón logró enviar al Norte, al asturiano Casto García Roza, donde también pudo organizar un grupo guerrillero hasta que le mate la Guardia Civil, en Gijón, el año 1946. En marzo del 44, después de la fuga de la cárcel de Carabanchel de los comunistas Jesús Bayón y Ramón Guerreiro, Monzón les convencerá también de que pueden ser el embrión de un movimiento guerrillero que ocupara la amplia zona de Cáceres-Badajoz- Toledo.

En 1944, con los triunfos aliados sobre el nazi-fascismo, los llamamientos de la Junta Suprema de Unión Nacional se hicieron épicos y el partido entero vibró entorno a esas soflamas producto del entusiasmo pero carentes de fundamento. Parecía que había llegado el momento de la insurrección. En Madrid se llegó a lanzar una proclama titulada: «Hacia la insurrección nacional». En septiembre, cuando se acercaba el fin de la contienda en Europa, la Junta volvió a convocar en nombre de la España eterna a los obreros

y campesinos a la huelga, y a los patronos y propietarios al lock-out, para el día ya próximo de la toma de Berlín.

Finalmente, en agosto de 1944, Monzón envió una carta al PCE en Toulouse conminándolo a organizar un asalto desde Francia sobre un lugar de la frontera española. Con eso confiaba en cubrir dos objetivos: catalizar a la opinión pública española, que con la derrota del Eje debía ver como inminente la caída de Franco, y además obligar a los aliados a apoyar la lucha antifranquista con las armas en la mano. Las dos premisas sobre los que se basaba la propuesta, y que darán pie a la invasión del Valle de Arán en octubre de 1944, eran erradas. Los aliados no estaban dispuestos a intervenir militarmente para poner fin al franquismo y en el interior, la población exhausta y aterrorizada, era incapaz de secundar semejante aventura. Pero el autoengaño en el que vivían las guerrillas españolas al otro lado de los Pirineos, que se creían los liberadores del sur de Francia, les llevaban a pensar que su intervención sería la chispa que iba a desencadenar un auténtico levantamiento popular.

El PCE y los mandos guerrilleros se pusieron a la labor —creyendo que la situación del interior era como la pintaban los documentos de la dirección del partido en México y los informes de Monzón—, decidieron por su cuenta y riesgo, penetrar en España por el Valle de Arán en una operación guerrillera de una cierta envergadura. La decisión la acordó la dirección del PCE en Francia reunida al efecto: Carmen de Pedro, Manuel Azcárate, Luis Fernández «General Luis», el ex estudiante de derecho de Madrid, Juan Blázquez «General César», Vicente López Tovar, que había alcanzado el grado de teniente coronel durante la guerra civil y Manuel Jimeno. El punto escogido parece que lo determinó Juan Blázquez por su personal conocimiento de la zona elegida.

Al amanecer del 17 de octubre se inició la ofensiva fronteriza, en la confianza de que el Ejército franquista se desmoralizaría y la población se lanzaría a la insurrección. Un conjunto de casi 5000 hombres entraron primero, en pequeños grupos, por la frontera navarra (Valle del Roncal), Huesca (Valle del Gállego) y Lérida (Port Vell), como maniobra de diversión, mientras el grueso del operativo lo hacía por el Valle de Arán. Tras arrollar algunos grupos de Guardias Civiles y ocupar algunas aldeas, las avanzadas se detuvieron ante Viella, sin poder tomarla, lo que les obligó a retroceder.

La lucha duró 11 días, y antes de que se recibieran órdenes políticas de retirada, Tovar, el principal responsable militar de la operación, estaba ya decidido a ordenar la vuelta a Francia. Según los datos oficiales del régimen franquista, las cifras de bajas en el Valle de Arán fueron, por parte de las fuerzas de Franco, de 32 muertos y 216 heridos, siendo las bajas de los maquis un total de 588, repartidas entre 129 muertos, 241 heridos y 218 prisioneros.

La realidad en lo que se refiere a las bajas guerrilleras es que en el interior del valle no pasaron de los 25 muertos, cifra muy alejada de los 129 dados oficialmente. Los heridos graves evacuados a Francia rondaron la treintena, y el dato sobre prisioneros fue también propagandístico, ya que su número no sobrepaso las dos docenas. Como dirían algunos jefes guerrilleros y políticos, «la operación del Valle de Arán resultó extraordinariamente barata en número de bajas si se calibra su magnitud»[15]

La orden política de suspender la operación la dio Santiago Carrillo que llegó a Francia por encargo de Dolores Ibárruri y tomó sobre la marcha la decisión de retirar todas las fuerzas, como primera parte de una nueva política que liquidaría la Junta Suprema y la anterior estrategia de Monzón.

Tras el fracaso del Valle de Arán la Junta Suprema era un cadáver fantasmal que Carrillo se encargará de enterrar junto con el liderazgo que hasta entonces había ejercido Monzón. Oficialmente, la autodisolución de la Junta Suprema de UN en Francia, se formalizará en el verano de 1945, sin informar tan siquiera a Jesús Monzón, que sobrevivía en el interior de España.

La nueva política diseñada entonces por el PCE pasaba por volver a una gran coalición republicana. La política de Unión Nacional que contemplaba alianzas amplias hasta con los monárquicos quedaba sentenciada y se volvía a formulaciones republicanas, echando por la borda, con la misma facilidad que antaño las habían aceptado, consignas como: «asamblea constituyente sin signo institucional definido». Santiago Carrillo escribía: «Hay que decir que toda solución que no sea la República [...], todo lo que no sea el restablecimiento de la Constitución del 31 [...] será una estafa para salvar la reacción y el fascismo, será un intento para engañar de nuevo al pueblo españo»[16] Este nuevo viraje se producía porque el PCE pretendía incorporarse al Gobierno Republicano que se estaba gestando bajo la presidencia de Giral, y en el que terminará siendo ministro sin cartera Santiago Carrillo.

El frenó en la operación del Valle de Arán será el primer paso en la recuperación del mando por parte del exilio, y el hombre encargado de abrir brecha será Carrillo. Lo primero que hizo Carrillo fue responsabilizarse personalmente de la escuela guerrillera de Toulouse, de donde debía salir desde ese momento el futuro «ejército liberador de España». Luego envió al interior a un hombre de su confianza, Agustín Zoroa, que llegó a Madrid clandestinamente a finales de 1944 y entró en contacto con Monzón, que seguía siendo de facto el responsable político del interior.

En ese proceso de recuperación del control por la dirección del exilio, en febrero de 1945, apareció en Francia una «Carta abierta de la Delegación del CC del interior», redactada por Carrillo en la que se formulaban críticas implícitas y explícitas a los hombres que hasta aquel momento habían capitaneado la Junta Suprema en el país. Las críticas que se vertían acusaban de modo indirecto a Monzón por su blandura, falta de entusiasmo revolucionario y desconfianza ante las masas. De su contenido se podía desprender que la experiencia del Valle de Arán no había servido para que la dirección del partido se cuestionase la escasa efectividad de la lucha guerrillera, muy al contrario, esta estrategia de lucha armada se iba a convertir en la pieza clave de su actividad en los años siguientes.

Consecuentes con esa línea, se fueron enviando al interior cuadros experimentados del partido que eran eliminados con la misma rapidez con la que llegaban. José Vitini entró en enero de 1945 y Cristino García en abril, dispuestos a demostrar con un heroísmo sin igual cómo había que hacer las cosas para que se repitiese lo de Francia. Vitini, duró cuatro meses, y será sustituido en la actividad guerrillera en la capital de España por otro asturiano, Cristino García. La responsabilidad política la seguía manteniendo Agustín Zoroa, que será detenido en el verano de 1945, casi al unísono que otros dos enviados al interior: Sebastián Zapirain y Santiago Álvarez, miembros del Comité Central. Zapirain durará en libertad, poco más de un mes, y Álvarez apenas llegó al mes. Caído Zoroa, y con Zapirain y Álvarez en la cárcel, ya no habrá más delegación del Comité Central en el interior.

En esta sangría cabe destacar el sacrificio de Cristino García, por los efectos que produjo en el régimen franquista. El sustituto de Vitini, que llegará con la aureola de su legendaria actividad guerrillera en Francia, apenas si duró seis meses, le fusilarán el 21 de febrero de 1946 con nueve de los suyos. Será entonces cuando el Gobierno francés cerrará en su honor

la frontera francesa por orden del general De Gaulle. A título póstumo, un año más tarde, le concederán en Francia la más alta condecoración: la Cruz de Guerra.

Tras la «carta abierta» la suerte política de Monzón en el partido estaba echada. Zoroa le transmitió al navarro una orden tajante: la dirección del partido le convocaba a Toulouse. Pero Monzón, a tenor de los acontecimientos, se sabía un chivo expiatorio y temía dejar la vida en el viaje. Para estar más cerca de Francia se desplazó a Barcelona donde una detención de poca monta precipitará su caída en julio de 1945.

Le juzgarán, tras sucesivas demoras, en 1948 y el franquismo le condenará a 30 años de cárcel. Salvó la vida gracias a poderosas ayudas entre los que ganaron la guerra, y a las gestiones de su hermano y del Partido Nacionalista Vasco sobre el Gobierno británico. Un hombre del bando ganador de la guerra civil, el líder carlista Antonio Lizarza, le facilitará la prueba trucada con la que se librará de la pena de muerte. Cumplirá tres años en la cárcel de Ocaña, y siete en el penal de El Dueso, ya como expulsado del PCE por traidor y por espía.

Cuando en Francia se enteraron de que Jesús Monzón había sido detenido en Barcelona la dirección comenzó a sospechar que se había dejado arrestar para no comparecer ante la dirección del partido. Las sospechas de traición se extendieron a su colaborador Trilla que será asesinado en Madrid por orden de la dirección del PCE.

Conforme fueron llegando a Francia tras la guerra mundial los líderes históricos del PCE, la dirección oficial recupera el mando. Pasionaria antes de partir de la URSS había sido recibida por Stalin acompañada de Ignacio Gallego y José Antonio Uribes. Stalin les había prometido colocar el tema de España en la mesa de negociaciones de los grandes, y lo hará en Postdam, pero no logrará de sus interlocutores Truman y Churchill ni siquiera el acuerdo de una condena pública al régimen franquista. Las potencias llamadas democráticas nunca consideraron intervenir contra la España franquista. Para Churchill, la presencia del Caudillo, aunque fuera amigo de Hitler y Mussolini, era un mal menor y esa postura no se modificó con el partido laborista, que se limitó a demandar una acción conjunta del pueblo español para derribar al fascismo.

El 5 de diciembre de 1945 se reunió en la sala Gaumont de Toulouse el Primer Pleno del PCE tras el final de la guerra civil. De esta reunión saldrá una estrategia a desarrollar en un doble frente: en el exterior se concretará en una nueva apuesta unitaria entorno al Gobierno de la República en el exilio bajo la presidencia de Giral, mientras que en el interior se iba a desarrollar la lucha guerrillera para demostrar al mundo la resistencia del pueblo español y la debilidad del régimen franquista.

A partir de la primavera del 46 y la entrada de los comunistas en el Gobierno republicano en el exilio, el PCE impulsará la creación de un Consejo Central de Resistencia, que resumía la fórmula concreta de llevar el combate sobre los dos frentes, el internacional, que capitaneaba el Gobierno de la República, y el de la «resistencia interior», que iba a dejar en evidencia ante la comunidad internacional la debilidad de la dictadura, misión que debía orientar el Consejo Central de Resistencia, bajo la supervisión de la máxima institución unitaria: el gabinete de José Giral.

Los años 1946 y 1947 serán los de mayor actividad del movimiento armado contra el franquismo. En la ciudad (Madrid y Barcelona) y sobre todo en el monte, este movimiento estuvo dirigido, orientado y alimentado por hombres del Partido Comunista de España, y se tradujo en un auténtico fracaso.

No podemos estar de acuerdo con Hartmut Heine, cuando afirma que. «Desde la revolución bolchevique de octubre de 1917, teniendo como fundamento teórico las enseñanzas de Lenin, la lucha armada y la insurrección popular constituyen en el ideario del movimiento comunista internacional los principales instrumentos en el camino hacia el establecimiento de un régimen socialista»[17]. Es cierto que la lucha del comunismo internacional ha recurrido a esta vía, pero ni mucho menos ha sido prioritaria. El mismo triunfo de la revolución de 1917 se logró sin apenas efusión de sangre, y muchos partidos comunistas jamás han desplegado estos procedimientos, ni siquiera en su lucha contra el fascismo, como ocurrió con el Partido Comunista Portugués. En el caso español, la guerrilla fue producto de la derrota en la guerra civil y del triunfo de las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial en un momento muy determinado; así como de los errores de cálculo político y estratégico en esa misma coyuntura por parte del PCE.

Durante la Guerra Civil la República había creado un Cuerpo de Ejército Guerrillero con asesoría soviética. Era el XIV Cuerpo de Ejército, comandado por Domingo Ungría que tenía como comisario político a Pelegrín Pérez. Aunque Ungría fue designado en octubre de 1937 para tal cometido, la unidad no empezó a organizarse hasta febrero de 1938 y su actividad durante la contienda fue escasa. Tras la derrota se recompondrá en Francia para unirse a la resistencia contra los nazis, jugando un destacado papel en la liberación de la región sur del país vecino.

Así mismo, al finalizar nuestra contienda, muchos republicanos separados de sus líneas por el avance de los sublevados optaron por echarse al monte en vez de entregarse a las fuerzas franquistas. Su primer objetivo era la supervivencia. Estos «huidos» formaron la base inicial de la oposición guerrillera. Sin embargo, su existencia fue aquí distinta a la de los resistentes antifascistas en los países ocupados por los alemanes. En esos países, las guerrillas se sabían encuadradas implícitamente en un plan general de acción contra el Eje, con el respaldo de las potencias políticas y militares aliadas. Podían recibir abastecimientos y contaban con un apoyo logístico que en el caso español no se dio.

Por otra parte, desde el plano de la teoría militar, los movimientos guerrilleros nunca han podido vencer a un ejército regular sin contar con el apoyo de otro con similares características. La guerrilla puede convertirse en un apoyo útil en zonas determinadas o tras la líneas enemigas, pero nunca puede suplir a un ejército encuadrado de forma convencional. Mao Ze Dong siempre consideró que ésta era una estrategia circunstancial y que en ningún caso podría dar la victoria a los comunistas chinos. La guerrilla sólo era una forma de resistencia y entrenamiento hasta poder armar un auténtico ejército. «En lo que respecta a la guerra de resistencia en su conjunto, —decía Mao en el año 1938— la guerra regular juega el papel principal, y la guerra de guerrillas el auxiliar, porque únicamente la guerra regular puede decidir el desenlace de la guerra…»[18]

Si tenemos en cuenta esto podemos explicarnos la operación del Valle de Aran, cuando, ingenuamente, se creía que la acción desencadenada en los Pirineos podría precipitar la intervención aliada para derrocar al franquismo. Pero cuando ya se sabía que esto no iba a ser así la lucha guerrillera estaba condenada de antemano al fracaso. Sin embargo, el PCE apostó por

ella en una condiciones mucho peores que los comunistas griegos que también la emprendieron por las mismas fechas.

El Partido Comunista en Grecia había desarrollado durante la liberación de su país un poderoso ejército guerrillero, el ELAS (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Ejército de Liberacional Nacional Griego); pero en el reparto de zonas de influencia, Stalin acordó que Grecia quedara dentro de la zona de influencia capitalista. En 1946 cuando, con el apoyo del ejército británico, se restauró la monarquía que había sostenido la dictadura fascistoide del general Metaxas, los comunistas griegos se lanzaron al monte.

Muy pronto el ELAS contó con una formación combatiente que superaba los 25.000 hombres, que controlaba una zona liberada en los montes Grammos, que recibía un fuerte apoyo popular y que podía retirarse a zonas seguras en la cercana Yugoeslavia, país que aprovisionaba a la guerrillea griega. A pesar de todo, cuando Yugoeslavia cerró sus fronteras a los griegos, por efecto el conflicto Stalin-Tito, la guerrilla griega tuvo que claudicar y se desmovilizó en 1949, antes que la española.

La guerrilla española nunca contó con efectivos y recursos parecidos a la griega, de hecho los primeros grupos estaban formados por huidos y sobre ellos quiso incidir inicialmente el PCE enviando cuadros para entrar en contacto con las partidas armadas que sobrevivían en el monte.

Ya en junio de 1942, llegó a Asturias un emisario de la dirección del partido, José María Urquiola Iglesias, alias Chema, y celebró sendas entrevistas en el monte con Arístides Llaneza y Baldomero Ladreda, dos antiguos cuadros militares del frente del Norte, uno socialista, comunista el otro. Aunque no consiguió convencerles de iniciar una actividad abiertamente combatiente. Un año después lo volvió a intentar, y asistió en el Bierzo a una reunión —posiblemente con carácter de asamblea— en la que las llamadas Milicias Populares, luego Federación de Guerrillas de Galicia-León, se encontraron en un paraje de La Cabrera. En esa reunión Urquiola pudo constatar que en el Bierzo y las comarcas limítrofes de Asturias, Lugo, Orense y Zamora, unas docenas de huidos se habían organizado ya como guerrilla.

Urquiola, regresó a Madrid para informar a la dirección del partido, y entregarle copias del reglamento y del organigrama de la unidad armada. Éstos esquemas habían de servir más tarde como modelo para la redacción de los correspondientes documentos de las agrupaciones guerrilleras

cuando surjan por toda la geografía del país. La que más tarde se denominó Federación de Guerrillas de Galicia-León tenía un carácter multipartidista y había declarado su adhesión a la Unión Nacional Española (UNE) y a su Junta Suprema.

En el mismo año de 1943 llegó a Madrid, procedente de Argentina, José Isasa Olaizola, antiguo mando de una brigada en el frente del Norte, para hacerse cargo de la Comisión Político-Militar, un organismo que luego cambiaría su nombre por él de Comisión de Trabajo Guerrillero. Siguió en este cargo hasta otoño de 1944, cuando le sustituyó Agustín Zoroa. También a los niveles inferiores se siguió enviando esporádicamente cuadros a determinadas regiones para comprobar la presencia de grupos de huidos y las posibilidades de transformarlos en núcleos de un Ejército de Liberación Nacional.

Todos estos esfuerzos de construir sobre la base de los huidos un ejército guerrillero avanzaban a un ritmo muy lento y no recibían por parte del partido del interior o del exilio la ayuda necesaria. Los escasos cuadros de calidad que llegaban a la guerrilla, eran hombres que debido a su trabajo en las filas del partido clandestino habían tenido que huir al monte. Un buen ejemplo de este tipo de incorporaciones lo constituyen Jesús Bayón y Ramón Guerreiro, que se escaparon juntos de la cárcel en marzo de 1944. Los dos desempeñarían un importante papel en la estructuración de agrupaciones guerrilleras en el centro del país.

Monzón, responsable entonces del partido en el interior, no planteará ni una sola vez una futura acción conjunta entre las fuerzas venidas de Francia y los guerrilleros del interior. Su propósito sobre esas partidas dispersas era que estuviesen preparadas para cuando los Aliados cruzaran los Pirineos y provocaran el derrumbe del Régimen franquista.

El fracaso de la «invasión» por el valle de Arán no supuso un cuestionamiento de esta estrategia. Por el contrario, fue a lo largo de 1945 y parte de 1946, cuando se emprendió un amplio proceso tendente a construir agrupaciones guerrilleras en la mayoría de las regiones del país. Para ello se crearon algunas escuelas para cuadros políticos y guerrilleros, la más importante de las cuales estaría en Toulouse. Obviamente, en la prensa franquista, el nombre con el que se la designó era «Escuela de Terrorismo de Toulouse».

Fue entonces cuando nació en el País Valenciano y en algunas de las provincias vecinas, la Agrupación Guerrillera de Levante-Aragón (AGLA, luego AGL), que a lo largo de su existencia, hasta su extinción en 1952, constituirá una especie de «agrupación modelo» del PCE.

En Castilla la Nueva, las provincias occidentales de Galicia, la mayor parte de Andalucía y Cataluña, se crearon nuevas agrupaciones, principalmente sobre la base de guerrilleros venidos de fuera, y de nuevos ingresos, procedentes del interior. A mediados de 1946 el proceso de ampliación del movimiento guerrillero había llegado a su punto culminante. Nominalmente existían agrupaciones guerrilleras en casi todas las regiones y provincias, aunque sus capacidades eran muy desiguales. En Euskadi y en Cataluña, en donde, salvo una guerrilla urbana en Barcelona de adscripción anarquista y de fugaz existencia, no hubo un movimiento armado estable. Las organizaciones guerrillera de Santander y Asturias se limitaron a actividades esporádicas. La Federación de Guerrillas Galicia-León, que será parcialmente suplida por el llamado Ejército Guerrillero de Galicia, constituyó la organización guerrillera más pujante en el norte de la Península, centrando sus actividades principalmente en la provincia de la Coruña, con la particularidad, de que, a diferencia de casi todas las agrupaciones, ésta no se limitó a las zonas montañosas, sino que desarrolló su actividad en torno a los centros económicos de El Ferrol, Coruña y Viveiro.

Más al sur existía la ya citada Agrupación Guerrillera de Levante, cuya efectividad, pese a su férrea organización y su fuerte presencia en las provincias de Valencia, Castellón, Teruel y Cuenca, en cierto modo quedó mermada por el hecho, de que sus actividades se limitaron casi exclusivamente a las zonas montañosas y lejos de los grandes centros de población. Otro tanto cabe decir de las diversas agrupaciones, que habían surgido en el centro-sur del país —sobre todo en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Badajoz— las comarcas limítrofes de Córdoba, Sevilla y Jaén y en Andalucía oriental, donde destacó la agrupación de Málaga, que tuvo su origen en un desembarcó en noviembre de 1944 de una expedición de guerrilleros, encabezada por Ramón Vía. La Agrupación Guerrillera Granada-Málaga, o la «Agrupación de Roberto», el alias de su jefe, José Muñoz Lozano, contó en el momento de su mayor desarrollo con entre cien y ciento veinte guerrilleros y constituyó, junto con la AGL, la agrupación guerrillera cuantitativamente más importante.

En el terreno político, como en el guerrillero, el momento más álgido de la actividad del partido en este período hay que situarlo, globalmente, en 1946 y parte del 47. Hay partidas en Andalucía Occidental y en la Oriental. En Asturias las partidas son muy numerosas debido al enorme número de huidos de la represión; lo que obligó a Franco a concentrar en esta región importantes efectivos militares: tabores de regulares y tropas de infantería, sin contar a la Guardia Civil y a la Policía Armada. Era, como ya hemos dicho, una guerrilla de múltiples direcciones políticas aunque predominantemente comunista, y donde el PCE terminó logrando eliminar la disidencia de Fernández Ladreda.

La zona Centro estaba dominada por la figura de un jefe carismático, Cecilio Martín Borja, fugado de la cárcel de Alcalá en 1943 y apodado «Timoshenko». Murió baleado en una casa de Madrid adonde había llegado huido con unos pocos de su diezmada partida, aquella que se enseñoreó en 1946 de La Mancha, de la Sierra de Alcaraz, de Cuenca, Ciudad Real y hasta Albacete.

Las partidas guerrilleras de Galicia, junto a las de la zona levantina, se consolidaron como las más potentes y enraizadas del conjunto del movimiento armado. Sus dirigentes, procedían de todos los partidos políticos, pero uno tras otro fueron cayendo, Manuel Piñeiro, Segundo Vilavoy y Manuel Ponte, para convertirse en auténticos mitos populares. En el verano de 1948 la represión se ensañó con el movimiento guerrillero de Galicia, los máximos líderes, Gayoso y Seoane, fueron víctimas de la delación. José Gómez Gayoso, de 34 años, maestro nacional, llevaba trabajando clandestinamente en España desde hacía cuatro años, dos de ellos asumiendo la secretaría general del PC de Galicia, mientras las tareas estrictamente guerrilleras las lideraba el tipógrafo Antonio Seoane.

Gayoso gozaba de una sensibilidad política y de un atractivo humano indiscutible, lo que unido a su prestigio, facilitó durante esos dos años el mordiente político de la agrupación gallega. Fue testigo del intento de reconversión del movimiento armado en movimiento campesino, una orientación fallida que se introducirá desde Francia en 1948. En uno de los últimos plenos guerrilleros de los que se tienen noticia en Galicia, un mes antes de su detención, Gayoso advirtió a los suyos que evitará, en la medida de lo posible, matar guardias civiles salvo en caso de legítima defensa. Suponía una ruptura con la tradición y los métodos llevados hasta entonces. Con el

fusilamiento de Gayoso y Seoane en noviembre del 48 termina la etapa más política. A partir de entonces la organización se precipita en el bandolerismo puro y duro.

En el otoño de 1948, con una cierta implantación no quedaba en España más agrupación que la de Levante y Aragón, que pronto no será más que de Levante, y se convertirá en el pilar sobre el que se va a sostener la política del PCE. Sus dirigentes estaban entre los más expertos cuadros del partido con tradición en la lucha de guerrillas durante la Segunda Guerra Mundial: Francisco Bas Aguado («Pedro»), Valentín Galarza («Andrés»), Francisco Corredor («Pepito»), entre otros. Unos habían pasado por la experiencia francesa contra los nazis y otros en la Unión Soviética, en los grupos que operaban en la retaguardia alemana, como Pelegrín Pérez o José Gros.

Pero El proyecto de la insurrección popular, desencadenada desde fuera y/o dentro por la acción guerrillera después del final de la Segunda Guerra Mundial ya no tenía ninguna razón de ser y su heroica lucha en la España franquista se desarrollaba por puro voluntarismo. La única rentabilidad política radicaba en alimentar la propaganda interna dentro de la propia organización y en menor medida de cara al exterior. La operación más descarada en ese sentido propagandístico fue la emprendida por *Mundo Obrero* que afirmaba haber enviado al periodista Jesús Yzcaray como reportero a la Agrupación levantina. Yzcaray no salió de Francia pero publicó a partir de mayo del 48 en el órgano del PCE una larguísima serie de reportajes titulados «Treinta días con los guerrilleros de Levante». Sin embargo, era un lugar común en el partido que Yzcaray no había penetrado en España.

Desde los golpes definitivos a la Agrupación gallega, el partido se volcó en la experiencia de Levante. Santiago Carrillo quería centrar esfuerzos en una zona para convertirla en modelo y campo de experiencia que permitiera crear una cabeza de puente sólida con vistas a extenderse y repoblar otras zonas descabezadas. Fue entonces cuando se intentó la operación más descabellada, de la que sólo se tuvo noticia muchos años después, cuando Carrillo la narró como protagonista de la misma a unos periodistas franceses en 1974.

Una delegación del PCE, con Santiago Carrillo a la cabeza, visitó a Tito en Belgrado durante el mes de febrero de 1948. Carrillo dirigía y asumía, con un reducido grupo de subalternos, el peso organizativo del movimiento

guerrillero; desde las escuelas hasta las necesidades técnicas, y fue a él a quien se le ocurrió la idea. La visita tenía como finalidad pedir a los yugoeslavos que facilitaran el lanzamiento de paracaidistas en la costa españolas para reforzar la Agrupación de Levante. Hay que imaginarse la sorpresa de Tito cuando Carrillo en nombre del PCE le expuso semejante plan. Las relaciones de Tito con Stalin estaban a punto de romperse, apenas faltaba un mes. El dirigente yugoeslavo pudo apreciar que los comunistas españoles desconocían cual era la situación real en el campo del comunismo internacional y les preguntó si Stalin sabía lo que le estaban pidiendo, luego los despidió amablemente dándoles 30.000 dólares.

Todos los defectos y las improvisaciones de la táctica guerrillera del PCE saldrán a flote a partir de 1948. Los efectivos de la guerrilla, más allá de las exageraciones en la propaganda del partido, siempre fueron escasos, por no decir insignificantes. Cuando en el verano de 1946 el Buró Político hizo el cómputo de guerrilleros estos sumaban 582 efectivos en todo el país.

Cuando se normalizo la situación política en Francia al finalizar la guerra mundial se puso en evidencia el problema de contactos y suministros al interior, que nunca llegaron a ser regulares y sistemáticos. A partir de verano de 1945, el enlace entre la dirección en el exilio y las direcciones regionales del partido y del movimiento guerrillero se mantuvo a través de emisarios que, enviados desde Francia, pasaban en el interior periodos de varios meses, para luego regresar nuevamente al país vecino. Durante su estancia en España los cuadros a veces se integraban con carácter provisional en los citados organismos de dirección, pero no podían garantizar a los guerrilleros, salvo en casos muy excepcionales, el aprovisionamiento de armas, munición, medios de comunicación y dinero.

La diferencia entre «agrupación» y «partida» responde a esa deficiente comunicación. La agrupación dependía de la organización del partido o incluso en ocasiones sustituía a la organización del partido en la zona donde operaba, mientras que la «partida» era una organización preexistente o residual dedicada a sobrevivir mientras esperaba que el partido les ayudase, sacándoles fuera de España o reforzándola material y políticamente, subsistiendo durante largos periodos en un aislamiento casi completo respecto a las instancias superiores. En Galicia, desde que a principios de 1946 llegó un nuevo equipo de dirección encabezado por Gayoso, pasaron más de dos

años, durante los cuales los responsables regionales no tuvieron noticias ni de Madrid, ni de Francia.

Es cierto que proliferaron decenas de partidas guerrilleras entre los años cuarenta y cinco y principios de los cincuenta; sin embargo, no puede afirmarse que, en general, lograran el apoyo de la población. Al principio, la reacción entre las gentes de los pueblos pareció ser pasivamente favorable, sobre todo cuando los guerrilleros aceptaban sus peticiones de acciones específicas, como el incendio de archivos municipales para evitar la recaudación de impuestos, pero en general no los reconocían como propios.

La prensa de la dictadura, al dar noticia de enfrentamientos armados, calificaba sistemáticamente al guerrillero como «bandido», o como «atracador» cuando el guerrillero era urbano, y una gran parte de la población los veía como tales. La prueba es que mucha gente de las ciudades ni siquiera tuvo conocimiento de la existencia de los maquis, al menos como luchadores por motivos políticos.

En el medio rural, donde pudo existir un cierto apoyo encubierto en determinadas zonas, el régimen reaccionó descargando una brutal represión sobre las poblaciones civiles en las que actuaba el maquis. Evacuó zonas enteras allí donde lograba apoyo la guerrilla, tal como ocurrió en Málaga, y organizó grupos disfrazados de partisanos que sembraban el terror para desmoralizar al campesinado. Se han cifrado en unas 40.000 las personas arrestadas entre 1945 y 1950 por colaborar con las guerrillas, y las ejecuciones sumarias como forma de escarmiento fueron también numerosísimas.

Otro grave problema al que tuvo que enfrentarse el movimiento fue el control sobre el mismo. El PCE derrochó esfuerzos para imponer a dirigentes que respondiesen fielmente a la dirección del partido, lo que provocó un enorme desgaste en las filas combatientes sembrando en muchos casos la desmoralización.

En Galicia, Víctor García, que a principios de 1946 había sido cesado como responsables del Comité regional y máximo responsable de la guerrilla en las cuatro provincias, siguió ejerciendo su cargo, lo que provocó que los responsables en Francia le expulsaran del partido y le condenaran a muerte. Para cumplir con esta orden, el nuevo responsable del partido en la región, José Gómez Gayoso, tuvo que hacer enormes esfuerzos, primero para minar la fuerte influencia que García, a pesar de todo, seguía ejerciendo entre los

militantes, de modo particular en las provincias de Pontevedra y Orense, y luego para arrinconarle de tal forma que, finalmente, en la primavera de 1948 se pudo efectuar su liquidación.

Las eliminaciones de los guerrilleros por sus propios compañeros se emplearon como instrumento para cohesionar políticamente a las agrupaciones guerrilleras, pero en la mayoría de los casos estas medidas adolecían de una gran arbitrariedad, aunque, por suerte, no fue una práctica generalizada. Mientras que en la IV Agrupación (Coruña) del Ejército Guerrillero de Galicia se han contabilizado 14 liquidaciones con las citadas características, sobre un total de aproximadamente 45 guerrilleros, no se conoce ni un solo caso entre los guerrilleros de Asturias.

Durante esos años, más de 5000 combatientes, —aunque las cifras varían tanto para el número de guerrilleros implicados en la lucha como para el de acciones llevadas a cabo por ellos— realizaron sabotajes, emboscadas, ataques contra guardias civiles, volaron trenes, derribaron tendidos eléctricos y atentaron contra personajes del nuevo poder: comisarios, falangistas, etc., lo que obligó al régimen a mantener un continuo estado de alerta.

Pero en esta etapa será la Guardia Civil la que llevará el peso fundamental de la lucha contra los maquis. Según datos oficiales, la llamada Benemérita tuvo 624 bajas, de las cuales 256 fueron muertos, frente a números muy reducidos del Ejército, Policía Armada y Cuerpo General de Policía. Siempre según tales datos oficiales, hasta 1952, en que se da por terminada oficialmente la guerrilla —aunque grupos aislados siguieron actuando—, las bajas de los «bandoleros» fueron 5548, de ellas 2166 muertos y 3382 capturados o presentados. Todas estas cifras, sin embargo, hay que relativizarlas, pero queda claro que en los enfrentamientos armados la inferioridad de la guerrilla era evidente. En términos militares la llamada «ratio killer», evidenciaba el fracaso. El balance de la Guardia Civil sobre la guerrilla andaluza arroja un saldo de 340 guerrilleros muertos por 53 guardias civiles abatidos.

Lo peor de toda esta sangría fue la falta de una clara estrategia del PCE para ese movimiento armado, falta que contribuyó también a que ni siquiera existieran objetivos tácticos unificados, es decir, no había ningún acuerdo común entre las distintas agrupaciones sobre cuáles debían ser los principales objetivos de sus acciones. Desde Francia una Comisión político-militar compuesta por Enrique Líster junto con Juan Modesto, Antonio Cordón

como general jefe de la AFARE (Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Española), y el «general Luis» como responsable de los antiguos guerrilleros, dirigían el movimiento. Pero es llamativo que en el período que marca la gran oleada de entusiasmo guerrillero (octubre del 44-verano del 48) no llegó nunca a concretarse una línea estratégica precisa en algún órgano dirigente, ni de los guerrilleros, ni del propio partido.

La tradición oficial cuenta que fue el propio Stalin quien puso fin a la lucha guerrillera. En octubre de 1948 Stalin, al conocer la entrevista del partido español mantenida con Tito, decidió conceder una audiencia a la dirección del PCE a la que asistieron Dolores Ibárruri, Francisco Antón y Santiago Carrillo. En toda la historia del PCE no se recordaba algo semejante, desde que Stalin visitara a Pepe Díaz en su lecho de enfermo, y ni siquiera eso tenía comparación, ya que se trataba de una entrevista oficial entre las máximas autoridades del PCUS y la dirección del PCE.

El único testigo que habló sobre aquella ocasión histórica fue Santiago Carrillo, sosteniendo que Stalin les sugirió cesar en la actividad guerrillera y comenzar a trabajar en el seno de los sindicatos fascistas para así estar más cerca de las masas. De ser así, fue la primera vez que la dirección del PCE no hizo caso a lo que el dirigente soviético decía, ya que la actividad guerrillera continuó durante algunos años y el trabajo en el sindicato vertical franquista también tuvo que esperar. Se continuó con la creación de sindicatos de UGT, clandestinos, y *Mundo Obrero* recibió las elecciones sindicales de 1950 con un título inequívoco: «La farsa de las elecciones sindicales».

La orden de retirada general de la guerrilla la dio Santiago Carrillo, con la aprobación expresa de Dolores Ibárruri, en la primavera de 1951; como se ve, muy lejos de las fechas que se dan oficial y habitualmente en los libros que tratan del tema. En 1951, se produjo en Levante la retirada definitiva de la última agrupación, que protagonizó una auténtica odisea en la que se puso de manifiesto el grado extremo de penuria al que habían llegado los supervivientes del movimiento guerrillero.

Por esas fechas la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. En enero de 1947, el Gobierno republicano que dirigía José Giral en el exilio había entrado en crisis. Los ministros socialistas Trifón Gómez y Enrique de Francisco, de común acuerdo con el conservador Sánchez Guerra, cuestionaron la estrategia del Gobierno Giral, que en su opinión no se adecuaba a la resolución

de la ONU sobre España y su futuro. Era una victoria de los planteamientos de Indalecio Prieto, que quería: primero traer la democracia, luego considerar si vivir en República o en Monarquía. La CNT y sus ministros en el gabinete Giral, Martínez Prieto y José Leiva, apoyaron el giro socialista y Giral dimitió, siendo sustituido por el socialista Rodolfo Llopis, con otro gobierno similar pero de contenidos políticos más blandos, aunque el PCE continuó figurando en él, por poco tiempo, con Vicente Uribe en la cartera de Economía.

Uribe había llegado a París, procedente de Méjico, en mayo del 46, acompañado de Antonio Mije director de *Mundo Obrero*, para ocupar el segundo lugar en el escalafón jerárquico del PCE, puesto que se le atribuía desde la expulsión de Jesús Hernández en 1944. Pero a mediados de marzo de 1947 el PCE celebró el III Pleno del Comité Central ampliado en la alcaldía de Montreuil, y en agosto de ese mismo año, Vicente Uribe se vio obligado a presentar la dimisión de su cartera de Economía, porque los acuerdos del PSOE al pronunciarse por la desaparición de la institución de la República significaban la muerte del Gobierno presidido por el socialista Llopis. Será la última vez que un comunista español ocupe una cartera ministerial. Lo mismo les ocurrirá a los ministros comunistas en los gobiernos de coalición nacidos tras la guerra en Francia y en Italia. Finalmente Francia, alineada con el bloque atlantista, ilegalizará al PCE en septiembre de 1950, perdiendo así el partido la base operativa en el país vecino.

No fue pues Stalin quien hizo revisar la estrategia del PCE en esos años terribles sino la realidad, la Guerra Fría y la acción de la propia clase trabajadora española. La realidad evidenció el fracaso de la guerrilla, y la ilegalización del partido en Francia la dejó sin un refugio seguro. En tanto que los trabajadores comenzaron a utilizar los sindicatos verticales y la autoorganización para plantear sus más perentorias demandas.

La verdad es que, a pesar de la dura represión, la clase obrera española dio algunas muestras de esa resistencia que los demócratas europeos le demandaban sin que fueran tenidas en cuenta. En fechas tan tempranas como 1941 y 1943, se tiene noticia de huelgas en la industria de Manresa, y de movimientos similares en Bilbao. En el verano de 1945, coincidiendo con el final de la guerra europea, hubo paros en La Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona, que fueron frenados con la militarización de los trabajadores. A comienzos del año siguiente, fueron de nuevo los obreros

textiles de la factoría Bertrand y Serra, en Manresa, los que se declararon en huelga: exigían que les abonasen retribuciones derivadas de horas extras perdidas por los continuos cortes en el suministro de electricidad, que les descontaban del salario. El conflicto se resolvió con la concesión de primas especiales, pero también con detenciones y despidos. Coincidiendo casi con el aniversario de la «liberación» de Barcelona, hubo enfrentamientos entre trabajadores y guardias civiles, acompañados de cierre de comercios en la capital catalana. Hubo asimismo huelgas en el textil de Sabadell, en fábricas de Hospitalet de Llobregat, en empresas de Getafe, en una papelera de Alcoy y en las curtidurías de Elche.

En mayo de 1947 hubo huelgas en numerosos lugares de España, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, e incluso en los astilleros de El Ferrol, en los que intervino no solo la policía sino la legión, y se exigió a los patronos listas de «sospechosos» y «promotores», así como su despido inmediato. En Bilbao, en torno al 14 de abril hubo diversas huelgas y el 1º Mayo, en las calles bilbaínas, se produjeron manifestaciones y enfrentamientos. En los días siguientes, un movimiento huelguístico espontáneo llegó a desbordar a las organizaciones clandestinas y a las mismas autoridades franquistas, al ser secundado por más de 50.000 obreros, las tres cuartas partes del proletariado industrial vizcaíno. La protesta se prolongó aún dos días más, pero finalmente la capital vasca fue tomada por el ejército y se practicaron cientos de detenciones, pero el PCE careció del protagonismo que si tenía en las partidas guerrilleras.

El alza del coste de la vida en 1951 va a determinar el estallido, en la primavera de ese mismo año, de las primeras agitaciones sociales importantes de la posguerra. Aunque el PCE se apresuró a adjudicarse el mérito, la causa fue la deteriorada situación económica que imperaba en España. La escasez de alimentos y la inflación, más que la actividad comunista, propiciaron el renacer de la militancia obrera pese a la brutal maquinaria de represión. En 1950, el consumo de carne per cápita en España era tan solo la mitad que en 1926, y el de pan, la mitad que en 1936. Los precios superaban los salarios de la clase trabajadora en más de un 200% desde 1939. Asimismo, el estricto racionamiento significaba que mucha comida solo estaba disponible en el mercado negro, donde los precios eran más del doble que en los oficiales.

Así, en marzo se produjo en Barcelona un boicot a los transportes urbanos como consecuencia de la subida de precio de los billetes. En Barcelona

costaban diez céntimos más que en Madrid. El 8 de febrero, las octavillas, redactadas en catalán y castellano y escritas a máquina, comenzaron a circular por ciudad Condal. Pegadas en las fachadas, en las puertas de las fábricas y repartidas en los tranvías, se unieron al boca a boca, con la consigna de no coger el tranvía el primero de marzo. El día señalado, desde las primeras horas de la mañana, grupos de trabajadores se pusieron en marcha, con la tartera en la mano para comer en el trabajo y no hacer más que dos viajes andando de su casa al tajo. El boicot continuó hasta el 6 de marzo y solo un 2,3% de los usuarios habituales cogieron en esos días el tranvía.

El día 6 por la mañana, el ministro de Obras Públicas autorizó al gobernador civil de Barcelona la suspensión de las tarifas. El pueblo barcelonés acaba de obtener una victoria, lo que le animó a ir más allá. El lunes día 12 se produjo una huelga general, la primera importante desde 1939, que paralizó la ciudad de Barcelona. Unos 300.000 obreros pararon para protestar contra el aumento del coste de vida. Los obreros se reunían ante las fábricas negándose a trabajar, después convergieron en grupos hacia el centro de la ciudad. Las Ramblas, la plaza de Cataluña estaban llenas de gente. Al final del día, los tranvías bloqueados por el gentío intentaron volver a ponerse en marcha. El primero fue incendiado en la calle Rosellón. Obreros, mujeres, niños se manifestaban ante el ayuntamiento, mientras algunos grupos cantaban *La Internacional*. La policía armada, a pie y a caballo, cargó disparando al aire. Al mediodía, llegaron en un tren especial los guardias civiles, que a las 2 de la tarde ya se habían desplegado fusil o metralleta en mano a lo largo de la plaza de Cataluña y por el paseo de Gracia. Los edificios públicos estaban protegidos militarmente y la radio repetía las llamadas del gobernador que denunciaba «la acción de los agitadores comunistas». Pero la realidad era que la huelga se debía ante todo al espontaneísmo y a la miseria.

El PSUC, cogido por sorpresa, estaba en plena crisis interna. Su antiguo Secretario General Joan Comorera había sido tachado de titista y el aparato del PCE lo había sustituido en el interior por Emiliano Fábregas, aunque había pensado en Gregorio López Raimundo como hombre fuerte. Pero cuando estalló la huelga en Barcelona López Raimundo seguía en París. Fábregas, apenas si se enteraba de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. En un informe personal enviado por Carrillo a Pasionaria, que se encontraba en Moscú, le confesaba que el origen de los hechos había sorprendido a la delegación del partido, y que aunque reaccionó pronto no había enten-

dido la naturaleza de la lucha, cayendo en el tremendo error de considerar la actitud de los estudiantes como el producto de simples «discordias» entre los falangistas... En la carta admitía como una de las «debilidades» la ausencia de Gregorio López Raimundo. Cuando en abril de 1951 vuelva López Raimundo, para capitalizar las movilizaciones, apenas durará dos meses en libertad, ya que en el verano estaba detenido.

Los acontecimientos de febrero-marzo del 51 serán los que lleven a una revisión de la política del partido respecto a la cuestión sindical, sólo entonces será cuando se planteé como tarea actuar allí donde se pueda tener incidencia, marginando cualquier intento de reconstruir la UGT clandestina, aunque las referencias a la UGT pervivirán en la propaganda partidaria durante mucho tiempo.

Este viraje, todavía incipiente, quedará reforzado por dos hechos de innegable importancia. La muerte de Stalin en marzo 1953 y la realización del V Congreso del PCE en 1954, con 22 años de retraso respecto a lo que fuera su primera convocatoria prevista para el verano de 1936. El primero de estos hechos todavía no supondrá en el PCE lo que luego fue conocido como desestalinización, y el Congreso tampoco traducirá los cambios que se avecinaban.

Los años que siguieron a la ilegalización del PC español en Francia no fueron fáciles. Francia se había convertido en lugar de clandestinidad y controlaba a los españoles como si se tratara de una peligrosa quinta columna del enemigo soviético. Por eso el lugar elegido para la realización del Congreso fue Doksy, conocido popularmente como Machovo, en Checoslovaquia. Allí, en una residencia de los Sindicatos Checos, tendrá lugar desde el 12 de septiembre hasta el 21, el V Congreso del Partido Comunista de España.

El número de asistentes no alcanzó el centenar; 64 delegados y 30 invitados sin derecho a voto, y una pequeña delegación de dirigentes clandestinos venidos de España. Los delegados venían de la capital, y también de Valencia, Extremadura y Cataluña. Un confidente de la policía se infiltró entre ellos, e hizo detener a los participantes a su regreso a Madrid. En el cónclave sólo estuvieron presentes 5 mujeres, y la distribución de delegados por edades era sintomática; había 3 asistentes menores de 30 años, y 5 ma-

yores de setenta. La mayoría lógicamente eran los jóvenes de la guerra; y sólo 3 delegados no habían participado en ella.

Los nueve días del Congreso se desarrollarán en torno a tres grandes temas: el informe político del Comité Central, leído y redactado por Dolores Ibárruri; el dedicado al Programa del Partido, elaborado por Vicente Uribe, y las cuestiones organizativas y estatutarias, sobre las que intervino como ponente Santiago Carrillo.

El informe de Pasionaria apenas esbozó una leve autocrítica sobre su responsabilidad en la ausencia de trabajo dentro de las organizaciones legales del franquismo. Sobre el fracaso de la guerrilla se contentó con afirmar que la guerrilla había elevado la conciencia política de los campesinos, aunque reconoció que la aventura guerrillera no estuvo exenta de graves defectos y debilidades. El resto de su informe se centró en la denuncia de los «traidores» Monzón, Comorera, Hernández... a los que consideró como turbios personajes y agentes de servicios policíacos. Algunos, como Quiñones, Monzón o Comorera, si habían luchado en el interior, enfrentados a la dirección en el exilio, lo habían hecho para «situarse» en el seno del partido, de lo que podía deducirse que nada mejor que quedarse fuera de España para hacer la revolución. En el resto de su larga intervención, la Pasionaria no apuntó nada nuevo, ni aventuró perspectivas sobre el futuro.

La tarea de Uribe desarrollando el Programa venía avalada porque había sido discutido durante dos días en París por los responsables del aparato. El PCE se declaraba partidario de la constitución de un Gobierno Provisional de coalición, sin hacer ninguna referencia explícita a la República. Los seis puntos básicos del Frente Nacional Antifranquista que el programa defendía eran los ya rutinarios: 1º Restablecimiento de las libertades democráticas, 2º Liberación de los presos antifranquistas y repatriación de emigrados, 3º Medidas de urgencia para aliviar la penosa situación material de las masas populares. El 4º recogía el rechazo a uno de los efectos de la Guerra Fría en nuestro país pidiendo la derogación de los tratados suscritos por Franco con Estados Unidos el 26 de septiembre de 1953. El 5º punto demandaba el restablecimiento de relaciones diplomáticas con todos los países, pensando en la URSS, y por último, el 6º era la Promulgación de una ley electoral provisional para poder elegir desde los 18 años y ser elegido desde los 21.

A todos llamó la atención la considerable reducción del volumen de nacionalizaciones que se proponían en este Programa de 1954 en relación al Programa de 1945, que había expuesto Pasionaria en el Pleno de diciembre, en Toulouse. La estatalización de los medios de producción se iba reduciendo en el comunismo español conforme pasaba el tiempo.

Sobre temas que lógicamente estaban en el candelero mundial de aquel año 54, como era el problema descolonizador, referido en el caso español a Marruecos y Guinea, el programa no decía nada. Al explicarlo, Carrillo fue tajante: «La liberación de Marruecos es obra del pueblo marroquí, pero si no se levanta a la lucha y su liberación depende de nosotros, seríamos partidarios de ir a un acuerdo con los franceses para defender Marruecos contra el imperialismo americano... La cuestión de Guinea ha sido examinada al elaborar el proyecto [de programa] y se llegó a la conclusión de no incluirla. La Guinea española no es una nacionalidad y tampoco somos partidarios del abandono de Guinea a los americanos»[19], por eso lo mejor era dejarlo como estaba y no citarlo.

Cuando llegó el turno al tema organizativo y a los estatutos, Carrillo volvió a cargar contra los quiñonistas y monzonistas, refiriéndose también a la desviación nacionalista, lo que llevó a Rafael Vidiella, el líder del PSUC, residente en Moscú, a proponer que el PSUC debía pasar ya a ser una organización del Partido Comunista de España. Carrillo, respondió que una vez liquidado Comorera el PSUC tenía un importante papel de cara al futuro bajo la tutela de López Raimundo, cuya intervención reveló una extrema pobreza política.

Fue destacada la presencia de dos cuadros del interior, Simón Sánchez Montero y Jorge Semprún. El obrero panadero Simón Sánchez Montero, que era entonces uno de los principales responsables de la federación de Madrid, fue designado en los actos oficiales con el seudónimo de Vicente de Sáinz, y después de oírle nadie dudó de que con el tiempo estaba llamado a desempeñar un papel dirigente. En su intervención ante el Congreso, Jorge Semprún, que utilizaba el nombre de guerra de Federico Sánchez, brilló de modo particular. Estaba recién llegado de su primer viaje al interior, procedía de una buena familia y poseía una sólida formación intelectual, por lo que estaba llamado a desempeñar también un importante papel en ese sector y en el mundo universitario.

Se confirmó como Secretaria General del partido a Dolores Ibárruri, que venía ocupando el cargo de manera no oficial desde la muerte de José Díaz. Algunos representantes de la clandestinidad fueron elegidos miembros del Comité Central, por ejemplo, Sánchez Montero. Francisco Antón, cuya carrera, muy discutida, se había debido sólo a sus estrechas relaciones con Pasionaria, había caído en desgracia y fue eliminado del Comité Central, pero el Buró político continuó teniendo una gran proporción de antiguos dirigentes. Los nuevos miembros, Carrillo, Claudín, Gallego y Líster, pertenecían todos a la generación de dirigentes aparecidos durante la guerra civil y refugiados en el extranjero desde 1939. Los dirigentes clandestinos en España quedaban así marginados de la más alta instancia del partido. Para comprender el alcance de estos cambios formales, hay que añadir que el Comité Central apenas se había reunido desde la terminación de la contienda. En estas condiciones, los nuevos estatutos adoptados en el Congreso, que ponían de relieve la supremacía del Comité Central en tanto que fuente legítima y democrática de las decisiones importantes, no fueron más que una simple declaración de intenciones.

A partir de este Congreso se abrirá un interregno que se resolverá dos años más tarde con el eclipse de Uribe y la marginación de Pasionaria. Hombres como Francisco Romero Marín, Víctor Velasco, Julián Grimau, Tomás García, Ramón Mendezona, José Meseguer, Abelardo Jimeno, asistieron al Congreso a propuesta de Carrillo, con voz pero sin voto, pero saldrán de allí con voz y voto convertidos en miembros del Comité Central. Otros, como Simón Sánchez Montero, Narciso Julián, Núñez Balsera y Jorge Semprún, fueron ya escogidos por el mismo Carrillo para que tuvieran voz y voto y saldrán también como miembros efectivos del Comité Central. Una nueva generación procedente de la JSU llamaba a las puertas de la dirección del PCE y dejaba atrás unos años difíciles. El partido ya no volvería a empuñar las armas.

Notas

1.- Arasa, D. (1984): *Años 40: los maquis y el PCE*, Argos Vergara, Barcelona, pág. 116.

2.- Ruiz Ayucar, A., (1976): *El Partido Comunista 37 años de clandestinidad*, Editorial San Martín, Madrid, pág. 137.

3.- Moran, G. (1986): *Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985*, Planeta, Barcelona, pág. 122.

4.- Jauregui, F. y Vega, P. (1983): *Crónica del antifranquismo 1939-1962*, Vergara, Barcelona, pág. 127.

5.- Moran, G. (1986), *Opus cit.*, págs. 39-40

6.- Jauregui, F. y Vega, P. (1983), *Opus cit.*, pág. 125.

7.- Moran, G. (1986), *Opus cit.*, págs. 18.

8.- Stoyán Minev (Stepánov) *Las causas de la derrota de la República Española*, http://bolchetvo.blogspot.com/

9.- Hernández, Jesús (1974): *En el país de la gran mentira*, Editorial: G. del Toro, Madrid, pág. 9.

10.- Arasa, D. (1984), *Opus cit.*, pág. 22.

11.- AAVV (1960): *Historia del Partido Comunista de España*. Éditions Socia les, París, pág. 221.

12.- Arasa, D. (1984), *Opus cit.*, pág. 30.

13.- Moran, G. (1986), *Opus cit.*, pág. 82.

14.- AAVV (1960): *Historia del Partido Comunista de España,* pág. 217.

15.- Arasa, D. (1984), *Opus cit.*, pág. 237.

16.- Moran, G. (1986), *Opus cit*, pág. 104.

17.- Heine Hartmut (2008): "El Partido Comunista Español y la organización del fenómeno guerrillero" en *El último frente. La resistencia armada antifranquista en España, 1939-1952*, Coordinadores: Arostegui, Julio y Marco, Jorge, La Catarata, Madrid, pág. 92.

18.- MAO, Z., (1972/1977): *Obras Escogidas*, Tomo II, pág. 236.

19.- MORAN, G. (1986), *Opus cit.*, pág. 240.

VI
El PCE en el desarrollismo franquista
1951-1975

Las dos décadas que separan el final de la autarquía económica y el inicio de la llamada «crisis del petróleo» de 1973, —que se corresponden con la etapa del desarrollismo franquista— van a ser buenos años para el PCE a pesar de seguir moviéndose en la clandestinidad. El giro estratégico que supuso la política de Reconciliación Nacional, de la que luego hablaremos, y las transformaciones económicas y sociales que se produjeron en nuestro país, van a permitir al partido crecer y afirmarse como la gran fuerza política de oposición a la dictadura, llegando a ejercer una hegemonía en este terreno que lo convertirá, en el lenguaje coloquial, en «el Partido», un apelativo en singular que indicaba un cierto monopolio en la lucha contra el franquismo, como si no existiera otro partido que le pudiera hacer sombra.

Pero el Partido Comunista en la clandestinidad no era un partido grande, aunque las estimaciones que se han realizado no nos dan una idea clara de cuáles pudieron ser sus efectivos reales. Lo que se puede afirmar es que durante estos años el partido creció de modo ostensible respecto a la época

de la posguerra, sin llegar a ser en ningún momento lo que se entendía como un «partido de masas».

En abril de 1964 la Secretaría General del Partido en el exilio afirmaba que tenía 40.000 miembros, pero un año después la CIA calculaba unos 5000, según un informe confidencial del que hizo mención la prensa española en 1970; citan esta última cifra sin desmentirla Hermet (1972) y Ayúcar (1976). En realidad, se trataban de meras estimaciones, ya que no existía un registro central de la organización. En 1970, la Secretaría del Partido declaraba que tenía 10.000 militantes en el exilio, un número que parece bajo, teniendo en cuenta la nutrida presencia histórica del PCE en Francia, a lo que deberíamos sumar los residentes en la URSS y los países del Este.

En 1970, el partido emprendió una masiva campaña de afiliación a la que dio el pomposo nombre de «Promoción Lenin». Según el propio partido, gracias a ella, creció en las grandes zonas industriales y en el campo.[1] Parece probable que en el tardofranquismo el Partido pudiera contar, sumando a la emigración y el interior, con unos 15.000 o 20.000 militantes en total, lo que situaba al PCE a la cabeza de todas las organizaciones políticas y sindicales de oposición existentes en España, al menos respecto al número de afiliados.

Desconocemos también su exacta distribución geográfica, aunque podemos aventurar —teniendo en cuenta su naturaleza e historia anterior— que estaría más implantado en las zonas de desarrollo industrial y en áreas del agro andaluz. A la vista de los resultados de una campaña para recaudar treinta millones de pesetas, que se llevó a cabo en 1968 y 1969, parece que el Partido tenía más implantación en Madrid y en las regiones industriales y mineras del norte; cada una de estas dos zonas contaba con la tercera parte del total de los militantes; el resto estaba repartido de forma más regular por el resto del país, salvo una mayor concentración en las provincias de Sevilla y Cádiz.

Las piezas fundamentales de la organización interior eran las direcciones regionales o provinciales, animadas por responsables permanentes que se sucedían en función de relevos y, más aún, de detenciones y desmantelamientos operados periódicamente por la policía. Parece que estas direcciones controlaban de manera relativamente regular unas treinta provincias de las cincuenta que comprendía España, si se creen las informaciones conte-

nidas en un artículo publicado en 1968.[2] Según el autor de este artículo, las direcciones mejor implantadas se encontraban entonces en el País Vasco y en Cataluña, con el PSUC y, sobre todo, en Madrid, Sevilla y Asturias. La organización era igualmente bastante sólida en el conjunto de las ocho provincias andaluzas, donde los comunistas habrían suplantado a los anarquistas, así como en Galicia, en especial en la región de La Coruña y de El Ferrol. En cambio era más débil en Castilla, así como en la región de Valencia y en Aragón.

Un sector que merece una mención especial es el de la emigración. La labor desarrollada por el PCE con los trabajadores en el extranjero se vio facilitada por la emigración masiva de mano de obra, lo que contribuyó al crecimiento de la organización. El partido en el exilio envió a sus militantes a reclutar y a organizar a los obreros españoles en Francia, Bélgica y Alemania, realizando charlas, conferencias y cursos para la captación de nuevos afiliados, que en muchos casos si retornaban a España continuaban con su militancia.

Otro «frente» singular era el de las cárceles. Se puede estimar que entre 1939 y 1950, lo esencial de la organización del interior se encontraba en las cárceles de Burgos, Alcalá de Henares y Carabanchel, para los hombres, y en Ventas para las mujeres. La política penitenciaria del franquismo apostó por la concentración, y la mayor parte de los comunistas fueron destinados a cumplir su condena en la prisión de Burgos, que llegó a ser conocida como: «Burgosgrad». En 1961 *Mundo Obrero*[3] informaba que de 683 presos de la organización, 468 se hallaban en la prisión de Burgos. Este penal llegó a convertirse en un auténtico centro de reclutamiento y formación de los internados, en el que el PCE impartió cursos clandestinos que reunieron hasta 1800 participantes. Gracias a esta acción, las cárceles desempeñaron un papel primordial como centros de preparación ideológica de cientos de militantes.

Pero más allá de su potencial humano e implantación, el partido logró ejercer una gran influencia política gracias a su aparato de propaganda, a la obsesión anticomunista del mismo franquismo, —que terminó por convertirlo en omnipresente— y a las movilizaciones pacíficas que contrastaban con la brutalidad represiva del régimen. El PCE ejercía su influencia a través de Radio España Independiente (la Pirenaica), que emitía desde Bucarest y era seguida por muchos españoles que contaban ya con aparato de radio.

Esta emisora aseguraba a los comunistas una neta ventaja sobre las demás corrientes de la oposición franquista.

Así mismo, el partido editaba con regularidad quincenal *Mundo Obrero*, con una tirada de unos cincuenta mil ejemplares, —solo en el sector del metal en Madrid se vendían 4500 ejemplares en 1968— mientras que *Nuestra Bandera*, bimensual, y *Realidad*, trimestral, estaban enfocadas al mundo de la cultura. Lo mismo sucedía con las publicaciones del PSUC en Cataluña y del PC vasco, que eran: *Treball* y *Euzkadi Obrera*, ambas mensuales. Todos estos medios llegaban a un público más extenso que los afiliados al partido y se proyectaban sobre todo el ámbito resistente del país.

La estructura organizativa del partido continuó siendo piramidal, basada en las células y en los distintos comités hasta llegar al Comité Ejecutivo que sustituyó al antiguo Buró Político en el VI Congreso. El VIII Congreso, celebrado en 1972, añadió otro piso a la pirámide: la Conferencia, que era mayor que el Comité Central pero menor que el Congreso mismo. Cada comité del partido dentro de la pirámide elegía a su propia secretaría, compuesta de secretarios de acción política, de propaganda y de finanzas, y de otros miembros si se juzgaba necesario. Así, se concebía al comité como pieza clave de la relación vertical manteniendo esta estructura un carácter muy centralizado. La aplicación de la línea política del partido quedaba garantizada por esta estructura jerarquizada y centralizada, en la cual la Secretaría General quedaba a tres escalones del Congreso, y rendía cuentas en primer lugar al Comité Ejecutivo y en segundo lugar al Comité Central; de este modo al círculo cerrado de líderes le era posible controlar estos dos comités.

En los estatutos del congreso de 1960, en el que salió elegido Carrillo como Secretario General, se hacía notar que «un partido revolucionario en las condiciones actuales de clandestinidad no puede garantizar plenamente la aplicación del principio de centralismo democrático, en su aplicación al carácter electivo de los órganos ejecutivos del Partido y a sus responsabilidades»[4]

Pero ya en el V Congreso se habían modificado los estatutos del partido, en concreto el artículo 33, en el sentido de permitir la afiliación sin una militancia concreta en alguna de sus células. Esto suponía un giro estratégico que pretendía crear un partido de masas a pesar de las condiciones de clan-

destinidad, dejando de lado una de las señas de identidad de las organizaciones leninistas, desde que en 1903 Lenin encabezó la fracción bolchevique del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso por no aceptar esa cuestión en sus estatutos.

En el mismo VI Congreso de 1960 se creó el título honorífico de presidente del partido atribuido a Dolores Ibárruri tras su sustitución en el cargo de Secretario General por Santiago Carrillo.

Sobre el mantenimiento económico de la organización tenemos escasos datos. Los medios proporcionados por los militantes de base eran indispensables para llevar a cabo cualquier acción; pero no bastan por sí solos, aunque se había logrado establecer en el interior del país algunos circuitos de recaudación de fondos provenientes de cotizaciones, de colectas y de la venta de periódicos y de libros. Una anécdota relevante en este sentido la vivió José Luís Nieto, un responsable del sector de la construcción en Madrid, que 1963 entró en contacto con un grupo de 17 militantes de Vallecas, que llevaban desconectados del partido más de 16 años, pero que tenían guardadas las cotizaciones de todos ellos correspondientes a ese período.

También empresas editoriales como Ciencia Nueva, puesta en marcha por hombres del partido aprovechando la Ley de Prensa impulsada por el ministro Fraga Iribarne, permitirán obtener fondos para la formación.

Las medidas tomadas por Francia contra los comunistas españoles, en 1950-1951, colocaron al PCE en una posición comprometida, que fue compensada en parte por ciertos partidos hermanos que brindaban ayuda económica y material en forma de tiempo concedido en la radio, facilidades de edición, becas para estudiantes, cesión de locales y alojamientos para los dirigentes del PCE, y medios diversos para sus reuniones importantes. Los partidos comunistas checoslovaco, soviético y rumano relevaron ampliamente al PCF procurando a los españoles el apoyo material indispensable para el mantenimiento del aparato, y debemos de presuponer que la URSS también debió seguir aportando fondos.

En los años de 1968 y 1969 se lanzó una campaña internacional de recaudación de fondos bajo el lema: «Treinta millones de pesetas para el Partido Comunista de España», que arrojó como resultado la recogida de cuarenta y cinco millones de pesetas, de los que, los militantes y simpatizantes del interior, lograran reunir una cuarta parte; más de tres cuartas par-

tes de esa cantidad la recaudaron los simpatizantes de los países capitalistas y, en menor medida, los de países socialistas, así como los miembros del Comité Central y del Secretariado del Partido. Hermet estima que durante esos años el PCE contaba con algo más de unos quince millones de pesetas anuales, provenientes de las cotizaciones y colectas efectuadas en España y en el extranjero. Una cantidad relativamente escasa para un partido en expansión.

La composición social del PCE continuó siendo heterogénea, pero se redibujó en función de los cambios sociales que experimento la economía española en estos años. Los dos rasgos más relevantes en este sentido fueron el crecimiento de obreros industriales entre la militancia y la incorporación de la intelectualidad y el estudiantado universitario a las filas de la organización.

La economía española partía con un gran retraso, porque se había mantenido aislada desde el final de la Guerra Civil, y solo se sumó tardíamente a la onda expansiva del capitalismo de la posguerra. No obstante, los resultados fueron espectaculares. El crecimiento acumulativo entre 1960 y 1973 fue del 7,2% anual, lo que implica que el PIB en ese último año era 2,5 veces el del primero.

Pero la gran transformación de esta etapa se resume en un acelerado proceso de industrialización que modificó de forma decisiva la realidad agrícola y por tanto la realidad económica de nuestro país. En esos años se produjo un rápido descenso de la participación del sector primario en la renta nacional, que pasó del 40,7% en 1951 a solo el 25,25% en 1957 para seguir disminuyendo de forma ostensible. En 1970 sólo un 28,2% de la población activa trabajaba en el sector primerio. Por primera vez en la historia de nuestro país, España, con cien años de retraso, dejaba de ser una economía fundamentalmente agraria con todo lo que eso comportaba. El gran problema de la propiedad de la tierra, que durante más de siglo y medio había pesado en nuestro desarrollo histórico y social, seguía sin resolverse, pero el crecimiento del sector industrial facilitó el auge de la emigración rural y, paralelamente, el avance del proceso de urbanización. El bracero sin tierras quiso ver en las grandes ciudades una mejora de sus miserables condiciones de vida y emigró a ellas, alimentando así el creciente sector industrial.

Según el censo de 1950, España contaba con una población activa en el sector industrial de 2.754.162 personas, mientras que en 1955 eran ya 4.481.000 los obreros industriales. En 1964 había 7.381.000 de trabajadores en la industria, en tanto que en 1973 se elevaban ya a 8.747.000, lo que suponía un 66,5% de toda la población activa. Una masa obrera proclive a organizarse y a demandar mejoras en las condiciones laborales. Esta importante transformación facilitó el perfil eminentemente obrerista que tuvo el partido en esas décadas.

A finales de la década de los 60 habría de 1200 a 1500 comunistas organizados en la capital española y en sus alrededores, de los cuales unos 1000 serían obreros industriales, en su mayoría concentrados en unas diez empresas importantes: Perkins, Pegaso, Standard, Icemsa y otras. El resto de la afiliación la compondrían estudiantes, algunos intelectuales, miembros de las clases medias y de las profesiones liberales.

En este sentido, podemos apreciar que el PCE también creció en sectores donde no tenía apenas tradición como eran el estudiantado y la intelectualidad. El estudiantado de la época republicana fue mayoritariamente profascista y el de ideas izquierdistas procedía en general de las filas de las juventudes socialistas o republicanas. En mayor medida aún, la intelectualidad que sirvió a la causa republicana durante los años bélicos, casi no militó en el partido, aunque fuera compañera de viaje fiel. Sin embargo, veinte años más tarde, el partido se iba a desarrollar llamativamente en estos sectores, consecuencia de la situación generada por el franquismo, y de la ausencia de cualquier otro grupo que representara una alternativa real al PCE.

A partir de 1953, debido a la labor de Ricardo Muñoz Suay y, sobre todo, de Jorge Semprún, el PCE comenzó a contar con una importante influencia entre universitarios e intelectuales en el interior del país. El papel jugado por la agrupación universitaria del PCE en los acontecimientos estudiantiles de febrero de 1956, sirvió para que se implantara en esos sectores. La mayoría se adherían como militantes o simpatizantes sin que ello supusiera, en general, un conocimiento o adhesión al marxismo. La razón era más bien la de encuadrar su oposición al franquismo al lado del partido más destacado en la lucha contra la dictadura.

Se puede decir que en 1956 se inició un período de intensas relaciones entre los intelectuales y el partido que duraría hasta 1962. Antes del VI Con-

greso nunca había habido ningún intelectual en la «dirección operativa» del PCE, pero en el VI Congreso se integró en el Comité Ejecutivo a Jorge Semprún. A partir de ese momento la inserción de intelectuales en la dirección del partido se fue incrementando hasta alcanzar una gran influencia al comienzo de la Transición.

Aunque en 1962 se inició un cierto declive en este sector, el alejamiento de los intelectuales se intensificó a partir de 1964, con la expulsión de Fernando Claudín y Jorge Semprún. Las consecuencias de estas expulsiones fueron graves para el PCE. En la Universidad de Madrid, por ejemplo, se pasó de contar con 117 militantes a tener tan sólo tres. Las razones de estos abandonos fueron diversas; al lado de algunas desilusiones, como las provocadas por la difusión de los crímenes de Stalin, la causa principal fue la frustración generada por el escaso efecto que la actividad del partido tenía en la realidad política del país. El PCE recuperará más tarde su influencia en el sector intelectual, pero el peso principal ya no será de los literatos u otros artistas, sino de los profesionales universitarios como los abogados, economistas, etc. A este sector se referirá el PCE cuando hable en el tardofranquismo de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura.

No obstante, los años 60 fueron el período en que el partido gozó de una influencia mayor sobre la izquierda del espectro político y fue la única fuerza que inquietaba realmente al franquismo al tener una capacidad de movilización y una visibilidad como oposición de la que carecían el resto de las organizaciones. Esto dio como resultado que frente a las otras corrientes de la oposición de izquierda, los «peceros» manifestaran una especie de paternalismo rayando en la insolencia, que reflejaba su sentimiento, justificado o no, de constituir la fuerza más numerosa, más coherente, más sólida, y al mismo tiempo la que había pagado y pagaba mayor tributo a la represión. El hecho de que los miembros del partido se encontrasen entre los elementos más afectados por la represión no se podía discutir, a pesar de las acusaciones de moderación lanzadas contra ellos por los grupos izquierdistas.

A este hecho de ser el «gran partido dispuesto a todo tipo de sacrificios» contribuyeron numerosos factores, entre los que podemos destacar la abnegada militancia de cientos de hombres y mujeres, que despreciando el peligro que suponía supieron cumplir todo tipo de tareas encomendadas por la organización. Entre amplios sectores de las clases populares el comunista

era considerado como un hombre integrado en una organización poderosa, un hombre bien informado y valiente, que tenía relaciones y apoyos exteriores al lugar de trabajo, de los que carecían generalmente sus compañeros. En este sentido gozaba de un prestigio indiscutible, pero, en el mejor de los casos, no conseguía más que una colaboración reticente.

La naturaleza personal y motivacional del militante comunista también varió respecto a la época anterior. Los obreros siguieron acercándose por las mismas motivaciones de clase que antaño, aunque esta consecuencia se vio matizada por el «efecto generacional» de la entrada en el partido de miles de militantes muy jóvenes en los años sesenta, que tenían un sentido mucho más desarrollado de las limitaciones y de las oportunidades políticas que existían en el país que el que tenían los líderes que trabajaban desde el exilio. Expuestos a los peligros de la militancia diaria, adoptaron una visión menos exaltada de la inminencia de la descomposición y caída del régimen, aunque siguieron arriesgándose si eran detenidos a las torturas y a la cárcel. Un simpatizante, no ya un militante, sorprendido en el reparto de algunos ejemplares de *Mundo Obrero* se exponía a una condena de dos años y medio de cárcel y a una multa de mil pesetas.

Muy numeroso fue el contingente procedente de las clases medias ilustradas que veían en el PCE una organización eficaz que luchaba contra la dictadura y de modo abstracto contra las injusticias. Para muchos de estos la afiliación suponía luchar por la libertad y por el «progresismo», más que luchar por la consecución de una sociedad comunista.

Otro factor que influyó fue la flexibilización del dogma comunista sobre las creencias personales del militante o del afiliado. La política del Frente Popular había contribuido ya a dejar de lado en este aspecto el dogmatismo de la década anterior. Desde antes de la guerra civil el PCE había entrado en contacto con cristianos que más tarde serían calificados de «progresistas». El sacerdote Juan García Morales, llamado «el cura republicano», publicaba antes de la guerra en *Ayuda*, órgano del Socorro Rojo Internacional. Al comenzar la contienda, los militantes se esforzaron por tranquilizar a los católicos liberales, y durante los primeros meses el partido protegió a algunos eclesiásticos amenazados, y, según el ABC del 4 septiembre de 1936, uno de ellos por lo menos se afilió al partido. En Sevilla antes del golpe, se llegó a dar un carnet de miembro del PCE al ¡Cristo del Gran Poder! para evitar que se atacara su imagen.

En 1937, Santiago Carrillo, Secretario general de la Juventud Socialista Unificada, manifestaba el deseo de «unidad con los republicanos, con los jóvenes anarquistas, con los católicos que luchan por la libertad».[5] En el discurso que pronunció en Valencia en marzo de 1937 ante el pleno del Comité Central, José Díaz, Secretario general del partido, decía: «Bien entendido que el combatir a la Iglesia en su estructura económica y política semifeudal no equivale a combatir la religión, sino al contrario, pues sólo una España republicana y democrática, política, liberal y progresiva, podrá garantizar la libertad de cultos en nuestro país».[6] Según Fischer,[7] el Partido Comunista fue el primero en pedir que se abriesen de nuevo los edificios de culto religioso, y en protestar contra las violencias cometidas contra los católicos al comienzo de la guerra.

En el V Congreso del año 1954 se aprobó la inclusión en el programa del partido de una referencia en la que se decía que: «dado el sentimiento religioso de una gran parte de la población», el PCE se comprometía a apoyar la continuación del subsidio estatal a la iglesia en la era postfranquista.

A partir de la década de los 60, con la apertura que supuso en la Iglesia el Concilio Vaticano II, se produjo un mayor acercamiento entre el cristianismo de base, con una fuerte preocupación social, con el marxismo más integrador. Como dice Mujal-León: «El Concilio representó una clara ruptura por parte de la iglesia con lo que Avery Dulles ha llamado su "modelo institucional". El cambio de identificación con los sistemas sociales y políticos conservadores y… tuvo un impacto muy profundo en el catolicismo español»[8]

El proceso se visualizó de modo popular con la aparición de «los curas obreros», sacerdotes que ejercían su ministerio, normalmente en barriadas marginales de las grandes urbes, compartiendo las vivencias de sus habitantes y trabajando como asalariados. En España el caso más conocido fue el del Padre Llanos, que desarrolló su labor en la barriada, llamada Pozo del tío Raimundo, a las afueras de Madrid.

Estos aires aperturistas del Concilio al problema social animaron a algunos partidos comunistas, sobre todo del ámbito latino, a tantear estrategias de integración con aquellos sectores de la Iglesia más comprometidos. El intento de mayor calado lo ensayaron desde el poderoso Partido Comunista Italiano con su ofrecimiento de un «Compromiso histórico» al ala más pro-

gresista de la Democracia Cristiana. Se trataría de aunar fuerzas en un gobierno de coalición para abordar los problemas de mayor trascendencia que aquejaban a la sociedad italiana, dejando de lado los prejuicios ideológicos que separaban ambas formaciones. La propuesta nunca prosperó pero sirvió para integrar a muchos cristianos en las filas del PCI.

Lo mismo sucedió en el PCE donde destacados intelectuales marxistas como el filósofo Manuel Sacristán, traductor de Marx, o Alfonso Carlos Comín, cristiano de base, impulsaron sin reparos este encuentro, mientras que por parte de los católicos progresistas el teólogo José María González Ruiz fue una figura relevante en ese diálogo entre cristianismo y marxismo. Algunos conocidos militantes como el sacerdote Francisco García Salve, el «Cura Paco», llegaron a pertenecer al Comité Central del PCE.

Durante estos años, y a pesar de que la secretaría general siguió siendo determinante en la dirección del partido, se recuperó la actividad congresual iniciada con el V Congreso celebrado en 1954. Hasta 1973 el PCE celebró tres congresos más, que fueron marcando la evolución y la línea política del partido en esas dos décadas, en tanto que los cambios que se producían en España y en el mundo iban condicionando la misma naturaleza de esos congresos.

Antes del VI Congreso que se celebró a finales de 1959 se habían producido una serie de hechos en el plano nacional e internacional que influyeron en los resultados del mismo. Durante este período entre congresos fue crucial el año 1956, que se inició con una crisis en la dirección del partido, provocada por los nuevos aires que comenzaban a respirarse en la URSS tras la muerte de Stalin. Desde la consolidación de Kruschev como sucesor de Stalin el país de los soviets comenzó a dar un giro en su política internacional. El primer síntoma para el PCE fue la exigencia soviética de que el partido trasladara su emisora Radio España Independiente a otro país. Radio España Independiente, que había empezado a funcionar en Moscú al comienzo de la guerra mundial, se instaló en Bucarest, donde funcionó, con el mayor de los secretos, hasta su desaparición. Pero el golpe terrible al PCE se produjo a finales del año 1955, cuando la URSS decidió apoyar el ingreso de la España de Franco en la ONU.

Desde el V Congreso el auténtico centro dirigente del partido se encontraba en Praga, donde residían, con viajes intermitentes a París, Vicente

Uribe, Enrique Líster, y Antonio Mije, que se vieron en la obligación de redactar una breve nota en la que, sin molestar a la URSS, se trasluciera lo embarazoso del hecho para el partido que derrochaba esfuerzos en combatir al franquismo.

Enviaron el documento a Pasionaria, que residía en la URSS, y coincidiendo con una reunión del Partido Comunista rumano, aprovecharon que en Bucarest se hallaba Radio España Independiente, para dar difusión a ese comunicado el día 30 de diciembre, con un mes de retraso sobre la decisión soviética. Los redactores de la nota se las vieron y desearon para exonerar a la URSS. «El ingreso de 16 países en la ONU, independientemente de nuestras objeciones sobre la admisión de la España franquista, constituye un importante paso en el reforzamiento de la colaboración internacional... Nosotros saludamos la actitud de la Unión Soviética que ha permitido terminar con la situación que los imperialistas habían creado en la ONU… Como internacionalistas proletarios nos alegramos de las victorias democráticas de otros pueblos..., pero como comunistas españoles, nos desagrada profundamente que sea el régimen franquista quien representé a España en la ONU»[9]

Pero en París, otros dirigentes del PCE hacían una lectura muy distinta de la situación. Varios miembros de la dirección, Fernando Claudín, Ignacio Gallego, el recién incorporado Jorge Semprún, y Carrillo, daban un significado más entusiasta al hecho, considerándolo un logro de la nueva política de coexistencia pacífica que propugnaba Kruschev. Carillo escribió un largo artículo para incluirlo en *Nuestra Bandera*, lo que suponía un desafío a la dirección oficial. Tras este desafío se podía columbrar que una generación más joven pugnaba por tomar el relevo de hombres como Vicente Uribe y Antonio Mije, con el propósito de dar nuevos aires al partido.

Pasionaria percibió rápidamente que en París se estaba formando un grupo homogéneo en torno a Carrillo y eso no le agradó a la Secretaria General. Fernando Claudín fue convocado inmediatamente a Moscú para que formara parte de la delegación del PCE en el XX Congreso de los comunistas soviéticos, pero sobre todo, para pedirle cuentas como miembro destacado de la dirección parisina sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Quién era el Buró de París para tomar una posición divergente a la declaración emitida por Radio España Independiente?

Lo que podría haberse traducido en una «purga» de los contestatarios parisinos quedó radicalmente alterado por el informe que leyó Kruschev, el 25 de febrero, ante los atónitos delegados del XX Congreso del PCUS denunciando los crímenes de Stalin. La desestalinización había comenzado e iba a arrojar como resultado en el PCE el comienzo de un relevo en la dirección.

El día 5 de abril de 1956 se abrió en Bucarest un Pleno del Buró Político del PCE. Durante cuarenta días estuvo reunida la totalidad del Buró, por primera vez desde el Congreso de 1954, y se tomaron importantes decisiones tanto sobre la estrategia política como sobre la dirección del partido.

En primer lugar se abrió una revisión de la línea política que se conocerá bajo el lema genérico de «Reconciliación Nacional», abandonando la consigna del Frente Nacional Antifranquista. Entre las fuerzas republicanas no había posibilidad alguna de avanzar con esos viejos planteamientos, y por la propia formulación del Frente, tampoco se podían tender puentes hacia las fuerzas de oposición en los aledaños del régimen, y menos aún a las fuerzas monárquicas.

Este giro estratégico denominado «Política de Reconciliación Nacional de todos los españoles» suponía aceptar la consideración de la vía pacífica como modo y manera de sustituir a la dictadura y suponía también la tipificación del enemigo como «la camarilla franquista». No era el sistema, ni siquiera el régimen en su conjunto, sino la camarilla próxima al dictador la enfrentada al pueblo español. La táctica para lograr el objetivo deseado serían las «demostraciones nacionales pacíficas», impulsadas conjuntamente con otras fuerzas políticas, como fórmula privilegiada para derribar esa dictadura sostenida por una «camarilla» que parecía casi insignificante en los análisis que hacía el partido.

El tema relativo a la dirección del partido estuvo estrechamente vinculado al de la desestalinización. Como en el caso soviético la llamada desestalinización se limitó a denunciar el «culto a la personalidad» rendido durante décadas a algunos dirigentes, pero en ningún momento hubo una crítica en profundidad a las políticas seguidas, ni una aceptación explícita de muchos de los desmanes cometidos en los años precedentes.

En el caso español este proceso se encontró enfrentado al mito de Pasionaria que debía quedar a salvo de cualquier crítica, ya que, a diferencia

de Stalin, seguía viva y era la Secretaria General. Los jóvenes que pugnaban por el relevo en la dirección sabían que Dolores Ibárruri era intocable para el imaginario colectivo del partido, y tuvieron mucho cuidado en preservar esa imagen.

Carrillo, que como secretario de organización, encabezaba a los nuevos dirigentes en ciernes, se preocupó de salvar en sus intervenciones ante el Pleno de Bucarest a Pasionaria y eligió como chivo expiatorio del proceso desestalinizador a Vicente Uribe, militante del partido desde 1923 y dirigente desde 1927.

«¿Ha existido entre nosotros el culto a la personalidad? —se preguntaba Carrillo ante el Pleno— La figura más importante y representativa entre nosotros es la camarada Dolores Ibárruri. En el partido hay ciertas formas externas del culto a la personalidad de la camarada Dolores... Hay que decir porque es de justicia, que la camarada Dolores ha mostrado siempre su desagrado... ante esas exageraciones... jamás Dolores ha hecho nada por estimular el culto a su personalidad y en todo cuanto ha dependido de ella lo ha combatido. Si de algo ha pecado, en ocasiones, ha sido de exceso de modestia.»

Sin embargo, refiriéndose a Vicente Uribe, considerado como el número dos en la organización, Carrillo dijo que las iniciativas chocaban con su concepción «caciquil, sectaria, principal traba a la dirección colectiva, apegado a los viejos métodos de dirección y poseedor de una egolatría desenfrenada… cuyo culto a su propia personalidad, el envanecimiento, el alejamiento del partido y de la realidad habían llegado ya a extremos increíbles... es preciso liquidar entre nosotros los elementos del culto a la personalidad, de vanidad, de enfatuamiento»[10]

Tres meses después, en la escuela de cuadros Edgar Andre de Berlín Este, el pleno del CC del PCE ratificaba la nueva línea política que había decidido el Buró en Bucarest, y aprobaba el relevo de facto que se había producido en la jerarquía del partido.

En un folleto titulado «Declaración del PCE por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español», se reflejaba el giro estratégico, mientras que en un informe sobre «La situación de la dirección del Partido y los problemas del reforzamiento del mismo»,

presentado por Carrillo, se zanjaba el tema del «culto a la personalidad, condenado por el XX Congreso, y de sus repercusiones en nuestro Partido».

El Comité Central adoptó una resolución en la cual se felicitaba al PCUS por su crítica del culto a la personalidad, también se expresaba a la Unión de Comunistas yugoslavos su pesar por la ruptura habida durante la campaña antititista, al tiempo que se admitían los errores del propio PCE en ese sentido. En esa declaración se reconocía que el secretariado se había convertido en el órgano supremo de la dirección, y que se había exagerado «el papel de los dirigentes [citando a Díaz e Ibárruri] del Partido, subestimando el papel del conjunto de éste.

Se formulaba también una denuncia explícita de Vicente Uribe del que se decía que era «reacio a la dirección colectiva [...] propenso a la autosatisfacción, al empleo de métodos unipersonales de dirección, inclinado al practicismo y a la subestimación del trabajo ideológico». Y se agregaba que: «Ante el CC el camarada Uribe ha reconocido sus defectos y ha hecho su autocrítica»[11]

Vicente Uribe, miembro del Buró político desde hacía veinticuatro años, tuvo que abandonar la responsabilidad en la dirección de la acción clandestina en España. A pesar de todo, su autocrítica le permitió continuar en el Buró, en el que desempeñó a partir de entonces un papel meramente decorativo. La otra víctima del proceso desestalinizador, Antonio Mije, entonces director de *Mundo Obrero*, también tuvo que autocriticarse públicamente por su falta de firmeza en el apoyo de la nueva política de reconciliación nacional. La caída de Uribe supuso la confirmación de Santiago Carrillo como el nuevo número dos del partido tras la Pasionaria.

Poco después, el PSUC celebró su I Congreso, una reunión sin importancia real, para dar el espaldarazo a José Moix como Secretario General, confirmar la adhesión a la política de reconciliación nacional, aprobar unos estatutos calcados de los del PCE, afirmar su carácter marxista-leninista y formalizar sus relaciones de dependencia con el partido español.

Muy pronto, lo acordado en estas reuniones de la dirección empezó a evidenciar sus limitaciones. En el otoño de ese mismo año crucial de 1956 se desató una revolución popular y espontánea en la Hungría comunista que acabó con la intervención del ejército soviético. La desestalinización en la URSS no llegaba tan lejos y el PCE aprobó la invasión sin dudarlo un

instante considerando que con los tanques rusos se había frenado la contrarrevolución en Hungría.

No obstante, unos meses antes, cuando se estaba desarrollando el XX Congreso del PCUS y el PCE comenzaba a cobrar conciencia de que debía ponerse en sintonía con los nuevos tiempos, ocurrieron en el interior de nuestro país unos acontecimientos destinados a dejar una profunda huella en la organización comunista. Nos referimos a lo que en España fue el nacimiento oficial del movimiento estudiantil universitario, un movimiento que nutriría al PCE y que fue capaz en aquellas fechas de provocar una crisis de gobierno en el franquismo.

La primera organización estudiantil del partido se había constituido oficialmente en Madrid durante la primavera de 1955. Formaban parte de ella, Enrique Múgica Herzog (futuro dirigente del PSOE y entonces estudiante de derecho y poeta), Juan Antonio Bardem y Julio Diamante (futuros directores cinematográficos y entonces estudiantes respectivamente de Ingenieros Agrónomos y Medicina), y los escritores Julián Marcos y Jesús López Pacheco, que entonces también estudiaban en la Facultad de Filosofía y Letras. Su contacto con la dirección del PCE era Jorge Semprún, conocido con el nombre de Federico Sánchez.

Durante el curso 53-54, Múgica había organizado unos «Encuentros de Poesía en la Universidad» con el apoyo del exfalangista Dionisio Ridruejo y el permiso del rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín Entralgo.

En el curso 1954-1955 el PCE contaba ya con una organización nutrida, con unos locales e incluso con un presupuesto, que le permitió impulsar El Congreso de Escritores Jóvenes y un congreso de estudiantes. La organización de este último proyecto corrió a cargo de Enrique Múgica, Javier Pradera y Ramón Tamames, redactores principales del borrador de un Manifiesto. El 1 de febrero de 1956 numerosas clases en la Universidad se interrumpieron para dar lectura a ese Manifiesto que recogió centenares de firmas apoyándolo.

El día 9 de febrero, como todos los años, el SEU, el sindicato franquista de estudiantes, celebraba su fiesta homenaje al «Estudiante Caído», coincidiendo con el 22 aniversario de la muerte del falangista Matías Montero. En la manifestación se disparó una pistola que fue a herir de gravedad y por la parte trasera de la cabeza al falangista Miguel Álvarez, aunque el disparo se

atribuyó desde el primer momento al arma de un militante falangista, oficialmente se silenció este hecho, porque los hombres del Movimiento tenían interés en atribuir el atentado a los progresistas y liberales, facilitando así la vuelta de la universidad a las épocas más duras.

Los hechos precipitaron una crisis en el Gobierno, y el PCE se apuntó el tanto. Hubo detenidos, como Ramón Tamames y Juan Antonio Bardem, que fue apresado mientras rodaba su film, *Calle Mayor*, y ante actores y técnicos muchos de ellos extranjeros. Otros militantes —Julián Marcos, Enrique Múgica, López Pacheco, Sánchez Dragó, Jaime Maestro y Julio Diamante— fueron también detenidos al mismo tiempo que dimitía el rector Laín Entralgo.

El desencadenamiento de la conmoción estudiantil había sido tan simple y sencillo que nadie en la dirección del partido podía descartar que organizándolo concienzudamente se podría tener a la dictadura de crisis en crisis, prueba evidente de la debilidad del franquismo tal y como afirmaba la estrategia del PCE. Así pues, los acontecimientos de febrero del 56, animaban por analogía a una táctica voluntarista, que se vio reafirmada al año siguiente con los resultados a las elecciones sindicales que apuntaban a posturas de resistencia entre los representantes de los trabajadores, constatando de ese modo que el movimiento obrero comenzaba a salir de la atonía en la que le había metido la represión y la derrota en la guerra civil.

El entusiasmo exagerado en la dirección del PCE por estas movilizaciones y resultados se vio reflejado en el tercer pleno del Comité Central que se celebró en agosto de 1957, en el que Simón Sánchez Montero leyó un documento que en apenas unas semanas se transformó, fuera ya del Comité Central, en una convocatoria a una movilización general, a la que se denominó Jornada de la Reconciliación Nacional, que se llevaría a cabo el año siguiente.

Los contactos con las otras fuerzas para que se sumaran a esa jornada de lucha dieron escasos resultados, y el 5 de mayo de 1958 el Partido Comunista participó solo en la protesta, aunque envuelto en su propia orla de simpatizantes. La jornada fue un fracaso, y aunque el aparato de propaganda del partido intentó paliar los efectos a la hora de hacer balance, no pudo ir más allá de proclamar que se habían producido «huelgas parciales completas en diversas empresas de la construcción de Madrid y otras ciudades... y huelgas

de obreros agrícolas en numerosos pueblos andaluces y extremeños»[12] No era poca cosa en 1958 y más tratándose de un llamamiento político que además trajo sobre sí un número considerable de detenciones.

Pero el pleno ampliado del Comité Central reunido a principios de agosto de ese mismo año en la República Democrática Alemana, fue incapaz de extraer conclusiones operativas, y se reafirmó en que la jornada había sido un éxito que había abierto el camino para otra jornada que sería la definitiva. Así se planteó hacer un llamamiento a la Huelga Nacional Pacífica. En marzo de 1959, en una reunión del Buró se acordó tensionar toda la organización del partido en la preparación de la más grande acción nunca programada: la HNP o Huelga Nacional Pacífica de 24 horas.

De nuevo, las hipotéticas alianzas con las fuerzas políticas y sociales interesadas en acabar con la «camarilla» franquista y poner fin a la dictadura fallaron por su base. El PSOE de Llopis, ferozmente anticomunista, no atendió a los llamamientos del PCE, porque su dirección no quería y porque su base militante era prácticamente inexistente en el interior. Tampoco los aledaños del franquismo presumiblemente opuestos al régimen estaban dispuestos a secundar la convocatoria. Los liberales y la pequeña burguesía, interesados, —según los análisis del partido— en el fin de la dictadura, tampoco estuvieron por la labor, y sólo el Frente de Liberación Popular, amalgama de pequeñas organizaciones de origen cristiano-marxista, presionado por sus bases, e impresionado también por la mitología que hacía del PC un partido potente, se sumó al final a la convocatoria.

En la estrategia de la dirección resultaba fundamental la respuesta que se diera en Madrid a la jornada de lucha, por eso se convocó a Simón Sánchez Montero (Vicente Saiz) y a otros dirigentes de la organización de la capital a una reunión en París, para conseguir eliminar ciertas reticencias y galvanizar sus ánimos. Objetivo que se cumplió ya que se comprometieron a repartir un millón de octavillas, cosa nada fácil.

Diferentes cuadros se desplazaron al interior para preparar la HNP y su actividad en los meses previos a la acción fue febril y confiadamente ingenua, como lo demuestra que Fernando Claudín, desde su puesto de mando madrileño en la calle de Galileo, domicilio del periodista Eduardo Haro Tecglen, reuniera la víspera del día señalado a su Estado Mayor (Semprún, Sánchez Montero, Romero Marín, Muñoz Suay y Javier Pradera) para mostrarles

sobre un plano de la ciudad qué dirección debían tomar las masas para converger sobre la Puerta del Sol. El entusiasmo de Fernando Claudín ante el plan era total: «La insurrección es un arte»,[13]exclamó al acabar de exponer el proyecto.

Finalmente se fijó la fecha de la HNP para el jueves 18 de junio de 1959 y de nuevo resultó un fracaso. La detención de uno de los puntales del interior, Simón Sánchez Montero, el día antes de la jornada, y de otros cuadros, antes y después de la movilización, como Luis Lucio Lobato, Emilio Sanz Hurtado, Enrique Múgica Herzog... y sobre todo del dirigente del principal aliado del partido, el creador del Frente de Liberación Popular, Julio Cerón, junto con 17 militantes de su organización, algunos días después, no sirven para explicar este nuevo fiasco.

Kenny, un etnólogo inglés que se hallaba en la capital durante esta jornada señala que los estudiantes estaban de vacaciones y no pudieron movilizarse, y que el absentismo en las empresas fue menos importante que de ordinario... «la actitud general de la gente de su barrio era un deseo casi frenético de no meterse en líos, cuando no de evitar toda discusión»[14]

No sólo el régimen se apuntó el tanto de haber hecho fracasar la HNP, también el PSOE se alegró de que los proyectos de los comunistas no prosperaran. Su Secretario General, Rodolfo Llopis, desde *El Socialista*, escribía con sorna: «Hay que suponer que en España hay más comunistas que los que fueron a la huelga el 18 de junio»[15]

Estas movilizaciones eran vividas por la Secretaria General del partido desde la distancia. Dolores Ibárruri seguía residiendo en la URSS, lo que era una anomalía. La parte más activa de la dirección actuaba desde París en ausencia del máximo responsable de la organización. Fuera por esto o porque era capaz de hacer una lectura más realista de las jornadas, Pasionaria presentó su dimisión del cargo al mes siguiente de la HNP, lo que precipitó la convocatoria del VI Congreso del partido.

El 24 de diciembre de 1959 en la ciudad de Praga se abrió el conclave comunista. Estuvieron presentes 60 delegados del interior, procedentes de Madrid, Cataluña, Euskadi, Córdoba, Asturias, Sevilla, Valencia, Alicante, León, Valladolid, Navarra... y 24 delegados de la emigración, representando, según dijo Carrillo en su informe, a casi diez mil militantes en el exterior y entre doce y quince mil en el interior.

El balance que se hizo de la política desplegada desde el Congreso del 54 fue exultante y reincidió en los análisis catastrofistas sobre la situación en España y sobre la debilidad del régimen franquista. «O bien las fuerzas políticas de izquierda y de derecha se ponen de acuerdo para apartar a Franco del poder... o bien España va hacia una catástrofe económica de tal magnitud que las reformas democráticas serán ineficaces para remediarla y la solución sólo podrá hallarse en una transformación revolucionaria del régimen social… De todos los Estados capitalistas de Europa, el poder más débil, más inestable, es precisamente el poder del general Franco»[16]

Claudín fue el encargado en el Congreso de las modificaciones al programa del partido; limitándose a validar el aprobado en el V Congreso, aunque se deberá a él la introducción de la fórmula «revolución antifeudal y antimonopolista» para designar el primer objetivo estratégico del partido.

El programa mínimo se resumía en: lucha unida contra la dictadura; restablecimiento de las libertades sin discriminación; amnistía extensiva a todas las responsabilidades derivadas de la guerra civil, en ambos bandos; mejoramiento de las condiciones de vida; y elecciones constituyentes con opción a escoger el tipo de régimen. La única novedad introducida era el referente a desarrollar una política exterior favorable a la coexistencia pacífica.

Se seguía manteniendo la defensa de la forma republicana del Estado, pero poniendo el énfasis en el acatamiento de la voluntad nacional, libremente expresada en unas Cortes constituyentes. Los derechos de los pueblos de Cataluña, Euskadi y Galicia a la autodeterminación seguían también recogidos en el programa, pero haciendo más hincapié en la existencia de un único Estado: «El Partido Comunista está seguro de que los pueblos catalán, vasco y gallego sabrán escoger el régimen que, dando satisfacción a sus aspiraciones nacionales, salvaguarde al mismo tiempo su unidad con los demás pueblos de España dentro de un Estado multinacional»[17]

En la parte del programa dedicada a los objetivos, inmediatos y finales, se establecían claramente dos etapas diferentes, pero sin solución de continuidad. La primera etapa tendría un carácter antifeudal y antimonopolista. En la segunda etapa la revolución antifeudal y antimonopolista se convertiría en revolución socialista y de ahí se pasaría al comunismo.

El Congreso aprobó como mediación estratégica los principios de la Huelga Nacional Pacífica y de la Huelga General Política, que se veía como

la prolongación de aquélla. La primera sería una huelga obrera que prepararía un paro general del país al que se debían sumar las otras clases y estamentos que buscaran el final del franquismo. Estas dos formas de huelga, confundidas en la práctica, eran presentadas como los instrumentos esenciales para acabar con la dictadura.

Pero, quizás, lo más interesante de este programa en relación con la posición comunista respecto a la democracia es la parte dedicada a los objetivos finales, donde se establecía la estrategia democrática al socialismo y las medidas que la acompañarían, siendo ésta la primera vez que quedaba recogida de forma explícita en un Congreso del PCE la vía parlamentaria al socialismo.

Las resoluciones de este Congreso fueron, pues, una adecuación programática a la Política de Reconciliación Nacional. El PCE realizó un importante esfuerzo a partir de este momento para intentar convencer al resto de las fuerzas políticas de que su cambio de orientación en sentido parlamentario-democrático no era ninguna actitud coyuntural, sino un cambio profundo de su política y convicciones.

En el plano organizativo el Congreso decidió que el Buró Político fuera reemplazado por un Comité Ejecutivo del que ya no formó parte Vicente Uribe. Además, Santiago Carrillo fue nombrado oficialmente Secretario General, en lugar de Dolores Ibárruri, que quedó relegada al puesto honorífico de Presidenta del Comité Central.

Los acontecimientos de Hungría dieron pie a un cese en el Comité Central, el de Felipe Muñoz Arconada, que dudó sobre lo acertado de que el Ejército soviético, cumpliendo sus deberes internacionalistas, acudiera en ayuda del Gobierno Obrero y Campesino de Hungría, presidido por Janos Kadar, invadiendo el país hermano.

En el capítulo de ascensos se ratificaron algunos de los cooptados en el verano de 1956, pues sus incorporaciones no tenían validez «legal» mientras no fueran aprobadas por el Congreso. Así se confirmó como miembros del Comité Ejecutivo, a Jorge Semprún, Simón Sánchez Montero, Tomás García (Juan Gómez), Santiago Álvarez y Ramón Mendezona, responsable de Radio España Independiente. Quedaron como suplentes, Francisco Romero Marín y Gregorio López Raimundo.

Como el final del Congreso coincidió con Fin de Año pareció oportuno celebrar una ceremonia de naturaleza menos formal concebida como: «Homenaje de los veteranos a los jóvenes del partido». Por los veteranos intervinieron Pasionaria y Vicente Arroyo. En representación de los jóvenes, Francisco González, «Roberto», de la fábrica Standard de Madrid y un catalán que usaba un seudónimo que escondía al escritor Luis Goytisolo.

Un mes después del fallido intento de HNP impulsado por el PCE, el franquismo iba a adoptar una medida que iba a tener una profunda repercusión en la sociedad española y en la misma estrategia del partido. El 21 de julio de 1959 fue aprobado por el Gobierno mediante Decreto Ley un Plan de Estabilización. El Plan se proponía dos objetivos fundamentales: establecer las bases de un desarrollo económico equilibrado y preparar la integración de la economía española en la economía mundial. La primera medida fue fijar una tasa de cambio única de 42 pesetas por dólar y elevar la tasa del descuento del 4,5 a 5%. Con el fin de restringir el consumo interior, el plan bloqueaba salarios y sueldos y a cambio recibiría como ayuda 546 millones de dólares.

El primer efecto de este plan fue transformar España en un terreno de especulación, abierto ahora plenamente al capital extranjero. En la Bolsa de Madrid, las inversiones extranjeras en el primer semestre del año 1963 alcanzaban ya la cifra de 1583 millones de dólares. Dos tercios de estos capitales procedían de Estados Unidos. Los inversores extranjeros se sentían atraídos por la «estabilidad» política, por la ilegalidad de las huelgas y los bajos costos de la mano de obra. Entre 1965 y 1975 la inversión extranjera creció de 5000 millones de pesetas a 27.000 millones.

La dinámica que se abrió con las aportaciones del capital foráneo propició que el abandono del campo se hiciera imparable. La mecanización del agro, contribuyó a desalojar mano de obra de tal modo que pueblos enteros quedaron desiertos. En conjunto, de 1960 a 1973 más de 1.800.000 personas abandonaron el agro español. Centenares de miles de campesinos trasladaron sus precarias condiciones de vida a las ciudades, donde apenas les iba mejor porque los sueldos habían sido bloqueados por las políticas de estabilización, lo que obligó al Gobierno, en enero de 1963, a fijar un salario mínimo de 60 pesetas diarias, que en muchos casos no se respetaba. No obstante, el crecimiento que estaba experimentando nuestra economía hizo que el franquismo tuviera que volver a legislar sobre este aspecto; así, en

1967, el salario base se estableció en 96 pesetas diarias, en 186 en el año 1973, y a la muerte del dictador estaba fijado en 225 pesetas.

Con el éxodo rural también aumentó la emigración exterior. En 1964 eran 470.000 las personas que salían del país en dirección a otros del continente (Francia, República Federal Alemana, Suiza, Bélgica…) donde el capitalismo estaba más desarrollado. Este fenómeno estaba motivado por el síndrome de bajos salarios, precios altos y falta de oportunidades, que hacía la vida muy difícil para el obrero español. El Gobierno fomentó, y hasta ayudó, esta exportación de mano de obra, porque aminoraba la presión sobre los servicios urbanos en las ciudades, cuyos proyectos de construcción no alcanzaban el mismo ritmo que la llegada de los trabajadores procedentes del campo; se paliaba así lo que de otra forma podría haberse convertido en una masa de descontentos y desesperados; al tiempo que se creaba una sustanciosa fuente de ingresos, ya que estos emigrantes aportaban divisas a nuestra economía gracias al dinero que regularmente remitían a sus familiares de España. Estas remesas llegarán a alcanzar sumas colosales a causa de la cantidad de expedidores. En 1965 se recibían 380 millones de dólares de esta procedencia y en 1973 eran ya 913 millones.

En 1963 se pusieron también en marcha los planes de desarrollo impulsados por los ministros tecnócratas del Opus, con la finalidad de elevar la renta por persona desde 360 a 469 dólares anuales. Para conseguirlo, se preveían mejoras en la irrigación y las técnicas agrícolas, ampliación del comercio exterior y del turismo, desarrollo de las comunicaciones y creación de polos de desarrollo industrial destinados a facilitar la industrialización.

Su aplicación no cubrió los objetivos propuestos excepto en el sector de las comunicaciones y del turismo, que se constituyó, con las divisas procedentes de la emigración, en la otra gran fuente de ingresos del país. Muy pronto las divisas procedentes del turismo superarán con mucho las aportaciones hechas por los inmigrantes. Si en 1965 pasaban la frontera 11 millones de turistas, en 1973 alcanzaban ya los 34 millones, con una aportación anual de unos 2.800.000 millones de dólares.

Estos factores unidos a los efectos, en nuestro país tardíos, de la onda larga de crecimiento que estaba experimentando el capitalismo internacional permiten explicar lo que algunos han calificado como el «milagro» español.

A lo largo del período que va de 1960 a 1975, el incremento anual del PNB fue del 6,9% en términos reales, y las principales locomotoras de este crecimiento fueron la industria y la construcción, que crearon un millón de puestos de trabajo. A la altura de 1963, España podía ser clasificada como un país en vías de desarrollo, ya que la renta per cápita era algo superior a los 500 dólares. En 1975 ya éramos un país desarrollado puesto que esa misma renta había alcanzado los 2574 dólares.

En 1961 había 60 teléfonos y 9 televisores por cada mil habitantes. Para 1975, su número por cada mil habitantes había subido a 195 teléfonos y 260 televisores. Lo mismo sucedía con los electrodomésticos de línea blanca, frigoríficos y lavadoras, que tanto iban a influir en la emancipación de la mujer de las tareas domésticas facilitando su incorporación al mundo laboral. En 1960, solo había un 4 % de hogares que poseía un frigorífico y un 19% una lavadora, mientras que diez años después ya era un 52% el que contaba con una lavadora y un 76% el que tenía frigorífico.

Estas mejoras se explican por la situación de pleno empleo de la que gozó el país gracias a la emigración al extranjero que expulsó la mano de obra sobrante y por la sobrecarga de trabajo que sufrió la clase obrera. El paro fue prácticamente inexistente y lo característico de estos años de crecimiento acelerado fue la figura del «pluriempleado», el del trabajador a destajo y el de aquel que «echaba» horas extras. La semana laboral legal y máxima era de 48 horas, pero en 1969, el 35% de la población laboral, según estadísticas oficiales, trabajaba más de 49 horas semanales, llegando muchos a las 10 e incluso a las 15 horas diarias.

A mediados de los años 60, el escenario socioeconómico se había transformado notablemente respecto a la década anterior. Los principios generales de explotación de la clase obrera por la clase dominante no habían cambiado, pero sí los componentes de ambas: una elite financiera e industrial capitalista, apoyada por una tecnocracia en auge, había reemplazado a la vieja oligarquía de los terratenientes, mientras que la clase dominada ya no era una gran masa campesina dependiente ni, en menor grado, una clase obrera urbana en embrión, sino un masivo proletariado organizado y continuamente reaprovisionado por elementos rurales que, producto de la emigración, seguían afluyendo masivamente a los centros industriales.

Desde 1958, la utilización del procedimiento del convenio colectivo reemplazó virtualmente a las reglamentaciones ministeriales. El nuevo sistema, sin embargo, resultó de consecuencias ambiguas, al absorber y encauzar conflictos nacientes. Las huelgas de protesta contra la galopante inflación empezaron a resolverse con acuerdos en los que las subidas salariales se supeditaban a aumentos de productividad. Aunque los convenios también proporcionaron una nueva plataforma para la lucha obrera y el enfrentamiento directo con la clase dominante.

En esta nueva dinámica, el año 1962 resultara crucial para el PCE por tres hechos distintos aunque relacionados entre sí: el importante movimiento huelguístico que sacudió al país desafiando a la dictadura, la reunión en Munich de la mayor parte de la oposición al franquismo de la que se excluyó al partido comunista, y la detención y posterior ejecución de Julian Grimau, un destacado dirigente miembro del Comité Central, cuya muerte desencadenó una oleada de protestas a nivel internacional.

En la primavera de 1962 las protestas comenzaron en la minería asturiana. Esta vez fue el pozo «Nicolasa», de Mieres, el primero en declararse en huelga. En días sucesivos, el resto de los pozos se fueron sumando al paro. Pedían 160 pesetas de salario y una prima de 78 por cada tonelada de carbón extraída. Al terminar el mes de abril, la huelga era total y el sindicato vertical estaba siendo desbordado por comisiones de trabajadores elegidas de forma espontánea. Las fuerzas de la Policía Armada y la Guardia Civil estaban desplegadas por toda la cuenca minera.

El 1º de Mayo de aquel año se estimó que los huelguistas asturianos eran unos sesenta mil y el conflicto se estaba extendiendo a otras provincias, en un momento en el que se estaban negociando numerosos convenios colectivos. En todos ellos estará presente la solidaridad con Asturias. Toda la minería del país terminará viéndose afectada.

A lo largo de la primera quincena del mes de mayo la huelga se propagó a otros sectores en diferentes provincias: La ría de Bilbao quedó paralizada, con la sola excepción de Altos Hornos, y en Guipúzcoa fueron los trabajadores de la CAF de Beasaín los primeros en declararse en huelga; en pocos días, casi todas las empresas del metal de las dos provincias estaban paradas. La situación era similar en la Bazán de Cádiz y El Ferrol; hubo paros en las empresas conserveras de Murcia, en los Talleres Jordá de Zaragoza, en

CASA y RENFE de Sevilla, provincia que vio extenderse la agitación al campo, en Altos Hornos de Sagunto... La profusión de octavillas llamando al paro fue notable en todo el cinturón industrial barcelonés desde primeros de mayo y a lo largo del mes pararon o se realizaron plantes, entre otras empresas, en Enasa, Maquinista Terrestre y Marítima, Hispano Suiza, Hispano Olivetti y la Seda. Muy similar llegó a ser la situación en Madrid, con acciones de distinta amplitud en Manufacturas Metálicas Madrileñas, CASA, Marconi, Euskalduna o RENFE. En casi todas estas movilizaciones se constataba un hecho novedoso, los trabajadores habían empezado a organizarse de forma espontánea en «comisiones» de representantes.

El consejo que Stalin diera en 1948 a los comunistas españoles de trabajar en los sindicatos creados por el franquismo, tardó una década en ser atendido por el PCE. En enero de 1959 se celebró en París, la primera reunión de cuadros políticos y sindicales. De ahí salió la idea de darle al término Oposición Sindical las características de una casi organización sindical propia. La Oposición Sindical, así con mayúsculas, ocupará más de un lustro de tanteos en el frente obrero del partido hasta desembocar en las Comisiones Obreras. En principio se trataba de compaginar la lucha sindical legal con el trabajo clandestino, que por su esencia jamás puede ser «oculto» si desea ser influyente a nivel de las empresas, a nivel de base obrera. Fue en esa reunión de París donde se acordó no poner traba alguna a la incorporación de cuadros sindicales del partido en las organizaciones verticales de la dictadura, y si fuera posible alcanzar los niveles más altos del escalafón burocrático.

En las huelgas de 1962 la Oposición Sindical Obrera, había difundido profusamente un llamamiento a la lucha en torno a la reivindicación de un salario mínimo de 150 pesetas, la jornada de ocho horas, la libertad sindical y el derecho de huelga. La policía pronto detecto que en las movilizaciones participaban elementos organizados políticamente, identificando, sin poder detenerlo, a Horacio Fernández Inguanzo, el miembro del Comité Ejecutivo del PCE responsable de la organización asturiana bajo el alias de «El Paisano», nombre con el que era conocido este antiguo maestro nacional que entonces vivía en la clandestinidad del monte. Menos suerte tuvo el joven abogado del Frente de Liberación Popular, Nicolás Sartorius, que cayó en manos de la policía. Ambos serán destacados líderes del movimiento sindical comunista.

En esta etapa inicial, las comisiones obreras no fueron más que comités espontáneos de trabajadores creados *ad hoc* en distintos centros de trabajo y como respuesta a una situación específica de conflicto. Al resolverse este, la comisión se disolvía por sí sola. Las Comisiones Obreras, como movimiento organizado, extendido y permanente, tardaron un tiempo en constituirse. En este proceso merece una mención especial la huelga de los metalúrgicos de Madrid, que brotando a intervalos durante cuatro años, entre 1964 y 1967, tuvo una particular trascendencia al establecer una «coordinación» permanente, en la que desempeñó un papel fundamental el trabajador de Perkins Hispania, Marcelino Camacho, militante comunista.

El paso crucial se dio cuando las comisiones de la industria ligera de Madrid organizaron un comité coordinador. Al contrario que en ocasiones anteriores, la comisión nombrada no fue disuelta al finalizar la huelga, sino que continuó en una semiclandestinidad, realizando tareas vitales de organización, unificación, dirección y educación a nivel de fábrica, hasta conseguir finalmente una coordinación a escala provincial. Este comité, conocido como la «Inter» (Intersindical), a su vez sirvió de ejemplo para el desarrollo de una red de comisiones en varias industrias del sector en todo el país.

Como consecuencia de la generalización de los conflictos, las acciones pudieron pasar rápidamente del nivel puramente económico —que sirvió como motivación inicial de las protestas— a un nivel político, planteando la reivindicación de sindicatos auténticamente representativos, la libertad de expresión y asociación o el libre derecho de huelga. Es importante tener presente que mientras entre 1963 y 1967 solo un 4% de los conflictos registrados presentaba demandas políticas, entre 1967 y 1974 lo hacía ya un 45%.

A mediados de los 60, las comisiones obreras crecían rápidamente, y aunque los demás grupos de trabajadores de la oposición no habían desaparecido, las prácticas sindicales de las comisiones se estaban imponiendo. Su nueva posición política quedaba reflejada en los documentos nacionales que publicaron en 1966, en los cuales asumían claramente el liderazgo del movimiento. Será entonces cuando el PCE acepte las que ya se llamaban Comisiones Obreras como algo autónomo y no dependiente de Oposición Sindical Obrera.

Las elecciones sindicales de septiembre del mismo año, con una participación del 80%, aseguró a Comisiones Obreras una gran victoria y casi les dio el control del Sindicato Vertical. Al acercarse el año 1967, la convocatoria de asambleas había suplantado casi de forma general a otras formas de actuación, y la asamblea se había convertido en el instrumento clave de participación y toma de decisiones en el movimiento obrero impulsado por Comisiones.

Pero después de su victoria en las elecciones sindicales de 1966, las Comisiones habían emprendido una campaña de boicot al referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado, de diciembre del mismo año, lo que provocó una represión masiva en todo el país que condujo a la detención de centenares de sus líderes y en abril de 1967 las Comisiones Obreras como organización fueron declaradas formalmente ilegales.

A comienzos de la década de los 70, los conflictos habían aumentado de modo exponencial. Si entre 1963 y 1966 se habían producido 2062, entre 1967 y 1970 fueron 4623 con más de 8 millones de horas de trabajo perdidas frente al 1,5 del período anterior. La respuesta del régimen fue la represión contra el movimiento obrero que se hizo visible a nivel internacional cuando en junio de 1972 fueron detenidos en Madrid varios hombres clave de Comisiones Obreras, como Soto, Saborido, Acosta, Camacho, Ariza y Zamora, a los que se les quiso juzgar en el llamado Proceso 1001, celebrado en 1973. Las protestas fuera del país por este proceso constituyeron un auténtico aldabonazo que anunciaba la apremiante necesidad de reciclaje del régimen franquista.

Volviendo al crucial año de 1962, el otro hecho relevante al que hemos hecho mención fue el denominado por el régimen: Contubernio de Múnich. Entre el 5 y el 8 de junio de ese año, en Múnich, ciento dieciocho opositores españoles del exilio y del interior fueron invitados a reunirse con el Movimiento Europeo, organismo liberal que propugnaba la Europa unida. Salvo los comunistas, fueron a Munich representaciones de diversas opciones políticas. Estaban representados desde la Unión Española de Joaquín Satrústegui y Jaime Miralles, al FLP. Estaba, por supuesto, el PSOE, con Llopis a la cabeza; la Democracia Cristiana de Gil Robles, la Izquierda Democristiana de Barros de Lis y la Acción Social de Ridruejo; los nacionalistas vascos y los históricos de Acción Republicana, por citar a los más sobresalientes.

Allí el liberal exiliado Salvador de Madariaga, uno de los promotores del encuentro, afirmó: «Estamos aquí hoy los representantes políticos de España excepto los totalitarios de ambos bandos... El amigo Gil Robles hablará como portavoz no sólo de los suyos, sino por todos los que de España han venido y por nosotros, los de fuera, también»[18]. Madariaga llamó a las instituciones del Mercado Común a rechazar las peticiones integradoras de España, que había solicitado su ingreso en el mes de febrero.

Esta reunión inquietó momentáneamente al partido, al verse marginado en la convocatoria. Toda la política del PCE descansaba en las alianzas, y su ausencia en Munich ponía en evidencia que resultaba muy difícil encontrarlas entre la burguesía liberal, e incluso establecerla con el PSOE. Por eso la víspera de iniciarse el «contubernio», dos personajes desconocidos llegaron al hotel Regine de la capital bávara y se inscribieron en el registro como cualquier otro visitante. Uno era Tomás García, el otro Francesc Vicens, y en los órganos de dirección del PCE y del PSUC se les conocía respectivamente por Juan Gómez y Joan Berenguer. Durante los días que duró el encuentro intentaron desplegar en los pasillos una actividad que no podían desarrollar en el pleno por estar su presencia vetada.

El franquismo tuvo una reacción desmesurada. Nervioso por el movimiento huelguístico, no podía tolerar tan siquiera una tímida oposición moderada en el interior del país, la mayor parte de la cual había sido su fiel aliada no hacía tanto tiempo, por eso el régimen desató una feroz campaña de prensa contra los participantes en el encuentro de Múnich y multó y desterró a alguno de ellos cuando volvieron a España.

La mejora económica que comenzaba a apreciarse no podía ser puesta en peligro por huelgas obreras o por liberales descontentos, y el régimen estaba dispuesto a acabar con esa situación que obstaculizaba su anhelado ingreso en el Mercado Común Europeo. Según el Boletín del Congreso Europeo por la Amnistía, sólo en 1960 habían sido juzgadas en España, por los tribunales especiales de represión política, 246 personas, siendo condenadas a 1007 años de presidio. Antes de finalizar el año de 1962 el franquismo pudo mostrar su rigor con la única organización que no había participado en el «contubernio de Múnich». El 9 de noviembre fue detenido en Madrid Julián Grimau, cuando viajaba en un autobús con otros dos pasajeros, que resultaron ser agentes de la Brigada Político-Social. Su detención

demostró que hasta las vísperas de aquel momento la policía no tenía ni idea de su existencia en Madrid.

Grimau había estado esa misma mañana con Romero Marín, alias «El Tanque», y con Ignacio Gallego, otros dos miembros del Comité Central del PCE, y también se había entrevistado como responsable del sector obrero, con el joven Víctor Díaz Cardiel, un metalúrgico de la Oposición Sindical que servía como enlace del partido con el activo sindicalista Marcelino Camacho.

Julián Grimau de 52 años, pertenecía a esos cuadros oscuros, discretos, nada ambiciosos y sobre todo absolutamente entregados del partido. Se había afiliado al PCE en 1936, al comenzar la guerra. Después de aprobar el examen de acceso, se convirtió en agente de la Brigada de Investigación Criminal, desarrollando su labor en Madrid, Valencia y Barcelona, donde fue extremadamente activo, según algunos autores, cazando e interrogando a trotskistas y quintacolumnistas.[19]

En 1957 había entrado en España como miembro del CC del PCE, dos años después, tras la detención de Sánchez Montero en vísperas de la HNP, Grimau lo sustituyó a la cabeza de la organización en Madrid realizando múltiples labores sin prestar excesivo cuidado a las medidas de seguridad. En verano de 1962, Semprún había informado al Comité Ejecutivo del descuido y la impulsividad de Grimau.

En los primeros interrogatorios a los que fue sometido Grimau, en la sede de la Dirección General de Seguridad, se produjo un episodio, que podríamos llamar, «un clásico» de este tipo de sesiones: Grimau «cayó» desde una ventana del cuarto piso. En una conferencia de prensa, el recién nombrado ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne, afirmó de él, llamándole «caballerete», que se trataba «del jefe de un pequeño grupo comunista, muy avisado, y que si se sometió a la pirueta de arrojarse por el balcón de la calle fue porque no quería declarar»[20]

Grimau no murió en aquel suceso y al restablecerse fue sometido a un consejo de guerra, acusado de «crímenes cometidos contra bienes y personas durante la Cruzada». El consejo sentenció pena capital, a finales de abril de 1963. El tema fue tratado en un Consejo de Ministros, debido al alud de peticiones internacionales de clemencia, pero se resolvió, por un voto de ventaja, confirmando la condena. La sentencia se ejecutó un sábado a las 5

y media de la madrugada en el campo de tiro de los cuarteles de Campamento, a las afueras de Madrid. Se encargó un pelotón de soldados del regimiento Wad-Ras allí acuartelados. Fue el 20 de abril de 1963.

Instituciones y personalidades internacionales se movilizaron. Las manifestaciones en el mundo se sucedieron durante y después del proceso. No sólo la intelectualidad mundial, sino los gobiernos, trataron de parar la mano del dictador; desde el laborista Harold Wilson hasta Nikita Kruschev, pasando por la reina madre de Bélgica... Intelectuales y artistas como Sartre, Malraux, Yves Montand, Jacques Brel, Leo Ferré, Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia, Giuseppe Ungaretti, entre otros, pero todo fue inútil. No obstante, como señaló José Antonio Nováis, el entonces corresponsal de *Le Monde* en Madrid, hubo algunas ausencias significativas como la del Vaticano y, por supuesto, los Estados Unidos, que eran los únicos que podían conseguir el indulto.

Aquel crimen político no era la representación de la fuerza del régimen, pero tampoco era —como sostuvo Carrillo— la prueba de su debilidad. Franco seguía siendo imprescindible a sus aliados occidentales, que le consideraban una pieza fundamental de su tablero, sin recambio posible mientras viviera.

Estos acontecimientos, unidos a otros en el ámbito del comunismo internacional, precipitaron la crisis en la dirección del PCE. A mediados de 1963 ya se dibujaban dos corrientes críticas dentro del partido: el sector que criticaba el voluntarismo de la dirección, y el sector que estaba siendo atraído por posiciones pro-chinas. Varios acontecimientos habían contribuido a este fenómeno: los fracasos de la política del PCE en la convocatoria de las jornadas de movilización nacional; el fusilamiento de Grimau en abril de 1963, ante la impotencia de un partido que siempre propagaba la quiebra inminente del régimen; y el desarrollo de la crisis chino-soviética, con los esfuerzos de los chinos por crear sus propios partidos a partir de escisiones de los ya existentes.

En noviembre de 1960 se había celebrado una Conferencia de 81 partidos comunistas en Moscú y en ella se había manifestado públicamente el enfrentamiento chino-soviético, que iba a tener profundas consecuencias para el movimiento comunista internacional. Como la polémica encubría en el fondo una lucha por el liderazgo en el seno del comunismo mundial,

el alineamiento del PCE con el PCUS, dada su historia de dependencia, no entrañó ninguna sorpresa. No obstante, entre 1963 y 1968, se formarán distintas organizaciones comunistas pro-chinas a partir de las escisiones producidas en el PCE como consecuencia de la crítica a lo que consideraban una línea claudicante y derechista.

Pero la crisis con mayor calado teórico provino del cuestionamiento que hizo a la estrategia del partido Fernando Claudín, al que podíamos considerar el número dos de la organización tras el Secretario General. Su postura fue secundada por otra figura relevante en el mundo de la cultura: Jorge Semprún, aunque de menor peso teórico que Claudín. El resultado del debate se saldó con la expulsión de los dos principales protagonistas y arrastró a algunos otros cuadros del partido.

La importancia de este conflicto no radicó solamente en que se produjera en el centro de la dirección del partido sino, sobre todo, en que abrió una discusión de cierta profundidad como no había ocurrido nunca antes. Ninguna de las crisis posteriores, ni siquiera las que se produzcan acabada la dictadura, profundizaran como ésta en los problemas del partido, ni tendrán la altura teórica que se alcanzó en esta ocasión.

Claudín fecha el inicio de la crisis en los meses de enero y marzo de 1962 con una discusión sobre la cuestión agraria y, en concreto, sobre la consigna de «la tierra para quien la trabaja», alegando que dicha consigna tenía, en las condiciones concretas de la época, un carácter anticapitalista que dificultaría las necesarias alianzas del PCE. Dos años después completará este análisis con referencias a las transformaciones en el agro español. De 1954 a 1964, el número de tractores había aumentado desde 25.000 a 150.000. Este solo dato, unido a otros, indicaba la profundidad de los cambios que se estaban operando en España.

Después de este encontronazo sobre una consigna que la dirección consideraba estratégica, llegaron nuevas discrepancias en un encuentro con intelectuales celebrado en Arrás. En esta ocasión el debate giró sobre cuestiones de estética y cultura. El Secretario General se mostró displicente y autoritario con algunos de los invitados, y no le hizo ninguna gracia que se insinuase que era un dogmático. Sobre todo le irritó las bromas fonéticas del andaluz Ignacio Romero de Solís llamándole «sectario general» en lugar de Secretario General.

Pero el cuestionamiento frontal se inició el 24 de enero de 1964 en París en una reunión para a preparar un informe sobre la situación en España, destinado a Dolores Ibárruri, que permanecía en Moscú. La discusión de enero terminó sin acuerdo y se decidió continuarla a finales de marzo con el Comité Ejecutivo en pleno. Eligieron para reunirse un lugar apacible, un castillo situado cerca de Praga, que había sido residencia de los reyes de Bohemia. Allí permanecieron reunidos nada menos que tres semanas.

Lo que planteaba Claudín era la existencia de un «divorcio» entre los análisis y previsiones que el partido hacía sobre la evolución del régimen franquista, y la realidad de la situación política y económica del país.

El punto de partida en la argumentación de la dirección era el rechazo de cualquier posibilidad que considerase el establecimiento y consolidación de un sistema democrático en España bajo la dominación del capital monopolista. Sin embargo, Claudin argumentaba que el éxito del Plan de Estabilización había creado una base de partida adecuada para un crecimiento capitalista más rápido, lo que situaba a España en la fase de despegue. También se estaba desarrollando una revolución capitalista en la agricultura que generaba un gran éxodo campesino hacia la industria, que absorbía el excedente de mano de obra y de esta manera desactivaba lo que podría ser una grave crisis social. Por eso en España no existía una situación catastrófica como se empeña Carrillo, sino una fase de desarrollo capitalista de largo alcance, a pesar de todas sus contradicciones internas.

En el Programa del PCE se planteaba la revolución democrática en dos etapas y de su planteamiento se desprendía que la posibilidad de un Estado democrático quedaba condicionada a que el poder político dejase de estar en manos del capital monopolista y pasase a manos de una coalición de fuerzas antimonopolistas, dirigida por la clase obrera. Sin embargo, Claudin consideraba que no se iba a producir una revolución democrática antifeudal y antimonopolista como sostenía la dirección, sino una salida oligárquica cuyo significado radicaba en que el poder político seguiría en manos del capital monopolista bajo otras formas más o menos democráticas. Si para el PCE la salida democrática se ligaba a un cambio social y al acceso al poder de las fuerzas sociales no monopolistas; la salida oligárquica significaba, en contra de los análisis del partido, una situación democrática y una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo español.

Los sectores conscientes de la clase dominante habían aprendido que debían realizar el cambio para evitar que la situación se les fuera de las manos. Cosa que argumentaban ya algunos tecnócratas del régimen, como el ministro López Rodó, que se permitía teorizar que cuando España alcanzase los 2000 dólares de renta per cápita, el país estaría preparado para la democracia.[21]

El objetivo de la oligarquía de asegurar el desarrollo capitalista del país era plenamente realizable —según Claudín— y no había condiciones objetivas para que las fuerzas antimonopolistas pudieran impedirlo. Salvo una crisis económica, bélica o interior muy grave que alterase todas las previsiones, el proceso era de evolución del franquismo hacia una democracia de tipo occidental.

Por otra parte, en las luchas de la clase obrera que se estaban dando predominaban las motivaciones de carácter económico, lo que a la larga podía tender a despolitizarlas, como ocurría ya en el resto de Europa. Los trabajadores anhelaban libertad y progreso, pero sin sobresaltos; se había roto con las tradiciones revolucionarias anteriores a la guerra civil. La transformación del PCE en un partido de masas necesitaba de libertad y democracia, pero cuando se dieran dichas condiciones habría que tener en cuenta que también iban a actuar otras fuerzas políticas menos activas hasta entonces como pudieran ser la democracia cristiana o el mismo PSOE.

En este lúcido análisis de las deficiencias del PCE, Claudín finalizaba con lo que consideraba el fondo de la cuestión y origen de la crisis que estaba viviendo el partido: su debilidad teórica ante los retos planteados en la nueva coyuntura histórica. La única manera de superar estos defectos, apuntaba Claudín, era a través de la democracia interna, dando importancia al método de discusión. Así la democracia interna era la condición *sine qua non* para transformar al partido en un partido de masas, para alcanzar el éxito en la política unitaria y para elevar su nivel teórico.

Como era de prever, Fernando Claudín y Jorge Semprún se quedaron en la más absoluta minoría, y los dos disidentes fueron apartados del Comité Ejecutivo. Esa fue la primera decisión adoptada en el castillo que fuera de los reyes de Bohemia ante la discrepancia. Más tarde vendría la expulsión.

La crisis, a nivel cuantitativo, apenas revistió significación, si se exceptúa la desbandada sufrida en la Universidad madrileña. Pero tuvo un mayor al-

cance cualitativo por el trasfondo de la polémica inaugurada, puesto que la forma de zanjar el debate impidió una aproximación correcta a la naturaleza real del franquismo en los años sesenta y a su posible evolución. A pesar de su derrota, el análisis de Claudín se verificaría más ajustado a la realidad que el de la dirección del partido, y sería reabsorbido, a la larga, por éste, pero sin llegar a percibir la profundidad de lo teorizado.

Después de la crisis sufrida en 1964, con las escisiones de la izquierda maoísta y la expulsión de los «oportunistas» Claudín y Semprún, se celebró el VII Congreso del PCE que se inició el 6 agosto de 1965 en una escuela de la municipalidad de Choisi Le Roi regentada por los comunistas franceses, en las afueras de París, y rodeado de un gran secretismo ante el infortunado final del anterior Congreso, que supuso la detención de la mayoría de los delegados del interior que asistieron entonces.

El VII Congreso, que durará cuatro días, será el más secreto de cuantos se celebraron antes y después. No existirá en los documentos públicos del partido y sólo se sabrá de él, indirectamente, porque el informe político de Carrillo se publicará en forma de libro con el título de *Después de Franco ¿Qué?*[22]

En el libro se caracterizaba la situación del franquismo, una vez más, como de descomposición, y se hacía un balance de las conquistas democráticas obtenidas en ese periodo, destacando cinco aspectos; la ruptura del bloqueo de los salarios como consecuencia de las huelgas del 62; la implantación de Comisiones Obreras que iban desplazando a los sindicatos oficiales; la imposición en la práctica de las huelgas y otro tipo de protestas obreras; la desintegración del SEU bajo la presión estudiantil; y la supresión del Tribunal Militar de Eymar, que había sido sustituido por el Tribunal de Orden Público.

Pero lo más reseñable del último período era que el PCE había sorteado con éxito: el «revisionismo» claudinista, que quedaba enterrado a partir de ahora, calificándolo como: un grupito pequeño burgués en el cual lo específico no era su profesión sino su mentalidad burguesa y pequeño burguesa, y el verbalismo pro chino, que apenas si había arañado al partido.

Era cierto que en el ámbito político, y dentro de la izquierda, había organizaciones que entraban en crisis y desaparecían, como era el caso del FLP; otras permanecían en un estado de postración, como era el caso de las his-

tóricas PSOE, UGT y CNT; y aunque también aparecían otras nuevas, a la izquierda del PCE, como eran la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, el Movimiento Comunista de España, etc., el PCE destacaba por su continuidad, crecimiento y expansión, lo que le servía para poder abrir una brecha en la situación de marginación en la que se encontraba respecto al resto de la oposición.

Por lo demás, el Congreso aportó pocas novedades, tal vez la más importante fue que en el terreno de la lucha de masas, por fin el partido se decidió por Comisiones Obreras y apostó por capitalizarlas. No hubo ninguna intervención sobresaliente, pero emergieron algunas figuras que desempeñarían papeles importantes en el frente cultural y en la dirección del partido.

Estos dos hechos quedaron reflejados en la composición tanto del nuevo Comité Ejecutivo como del Comité Central. En la cúspide de la dirección se decidió sustituir a Claudín, al que se había venido considerando como el número dos, por el anodino Ignacio Gallego, mientras que la apuesta por CC OO quedo confirmada al integrar en el Comité Central a cuadros sindicales tan relevantes como Marcelino Camacho, Cipriano García, o Horacio Fernández Inguanzo y en la categoría de «suplentes» a Carlos Elvira o Víctor Díaz Cardiel.

Entre los intelectuales se incorporaron Manuel Sacristán, López Salinas, Manuel Azcárate, que sustituía a Semprún en el dominio de lenguas dentro de la cúpula, y una nueva revelación: Jaime Ballesteros, que fue integrado directamente al Comité Ejecutivo.

En el Congreso, Carrillo había esbozado un concepto estratégico que no termino de madurar hasta dos años después, en el informe que presentó al Comité Central en septiembre de 1967. El informe se publicará, con el título de «Nuevos enfoques a problemas de hoy», y en él aparecerá la idea de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura.

Dos fenómenos sociales tendrán una gran influencia en la aparición de ese nuevo concepto estratégico en la línea del partido. Esos dos fenómenos eran las movilizaciones de estudiantes y enseñantes que se venían produciendo contra el franquismo, y la revolución científico-técnica, concepto acuñado por el marxista checo Radovan Richta, que señalaba la importancia del avance tecnológico en la lucha de clases. A partir de ellos la dirección

del PCE comenzaba a tomar conciencia de los cambios sociales acaecidos, en los que cobraban creciente importancia las denominadas fuerzas de la cultura (enseñantes, estudiantes, técnicos, profesionales, intelectuales, etc.), a las que los comunistas empezaban a concebir como un aliado necesario y muy valioso por el papel que jugaban en la nueva estructura social, y al que era necesario ganar para la revolución.

No puede negarse que en «Nuevos enfoques a problemas de hoy», había un acercamiento a los argumentos de los expulsados en 1964, pues la nueva Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura venía a significar el reconocimiento de los argumentos que sostenían que España se había transformado en un país capitalista industrial y que, por tanto, dejaba de tener sentido la revolución democrática de tipo antifeudal.

Lo cierto es que, a partir de 1958, el nuevo tema de «la reconciliación nacional» de los españoles, divididos desde la guerra civil, tendía a superar el ámbito demasiado estrecho de la unión de las solas fuerzas obreras y republicanas, al tiempo que daba suma importancia a «la vía pacífica», lo que equivalía a priorizar los medios legales y parlamentarios para transformar la sociedad española y para llegar al socialismo.

El primer documento donde se explicita de un modo claro esta orientación es una intervención de Santiago Carrillo ante una reunión de jóvenes miembros del Partido en junio de 1963. «La idea de utilizar el parlamento en el desarrollo de la revolución no es una innovación de Kruschev ni del XX Congreso, aunque el XX Congreso haya generalizado y desarrollado esa idea. Yo recuerdo que durante la guerra de España, Stalin, Vorochilov y Molotov escribieron, a principios de 1937, una larga carta a Largo Caballero, que era entonces el jefe del Gobierno, y en esa carta le aconsejaban que, teniendo en cuenta las tradiciones del Parlamento en España, la revolución debía servirse de él, como un instrumento de poder, y darle toda la importancia que tenía»[23]

Carrillo hacía referencia a una carta que Stalin había dirigido a Largo Caballero, durante la contienda civil en la que decía: «La revolución española se abren caminos que, en muchos aspectos, difieren del camino recorrido por Rusia. Lo determina así la diferencia de premisas de orden social, histórico y geográfico, las exigencias de la situación internacional, distintas de las que tuvo ante sí la revolución rusa. Es muy posible que la vía parla-

mentaria resulte un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz en España de lo que fue en Rusia»[24]. Como puede verse, la hipótesis de una «vía parlamentaria», priorizada por Kruschev en el XX Congreso del PCUS de 1956, había sido formulada por Stalin ¡veinte años antes, a finales de 1936!

Desde comienzos de los años 60 las manifestaciones en este sentido menudearon en la propaganda del partido. «La vía española de conquista y construcción del socialismo será fundada sobre la aplicación y el desarrollo de las libertades políticas»[25]. Santiago Álvarez afirmaba: «El Partido Comunista de España manifiesta su voluntad de hacer todo lo posible para dar curso pacífico y parlamentario a la victoria del socialismo [...], para conseguir que el inevitable porvenir socialista de España se realice sin derramar sangre, sin insurrección ni guerra civil»[26]

Así mismo, los dirigentes comunistas multiplicaban las declaraciones favorables a las «capas intermedias», y en particular a la «burguesía no monopolista». Incluso rendían homenaje a la policía y al Ejército. En un discurso durante las huelgas de mayo de 1962, el Secretario General del partido evocaba la aparente «simpatía» de la Guardia Civil hacia los huelguistas y conjuraba al ejército para que no siguiese permitiendo que Franco comprometiera su honor.[27]

No obstante, se seguía considerando indispensable, antes de establecer el socialismo, realizar la «revolución» democrática burguesa que no había podido prosperar ni en el marco de la monarquía liberal ni con la segunda República, y que había culminado hacía tiempo en la mayor parte de los países vecinos. En esta perspectiva, el Partido Comunista estaba dispuesto a dar su apoyo a un Gobierno provisional sin signo institucional, incluso aunque no fuera llamado a participar en él. Las únicas condiciones requeridas, —que iban a tener carácter profético— para su cooperación en ese proceso serían: el restablecimiento de las libertades políticas sin discriminaciones, la amnistía total de los encarcelados y exilados políticos, y la elección de Cortes constituyentes mediante sufragio universal, aunque ni estas llegaron a cumplirse en su totalidad.

Esta política de moderación se enfrentaba, no obstante, con la imagen que el franquismo y la burguesía española había forjado del PCE como un partido títere al servicio de los intereses de una potencia extranjera, por eso

la dirección procuraba por todos los medios revertir ese cliché manifestando su acendrado patriotismo, puesto ya de relieve durante la guerra civil. Sin embargo, ese proceso de «nacionalización» del PCE exigía visualizar de algún modo su independencia, e incluso su distanciamiento de la URSS. El problema no tenía una fácil solución ya que realmente el PCE había estado y seguía estando, por muchas razones, estrechamente vinculado a lo que representaba la Unión Soviética y orgánicamente al PCUS, del que seguía recibiendo apoyo y ayuda material.

El dilema al que se enfrentaba el partido en el periodo del tardofranquismo, cuando ya todo el mundo columbraba el final biológico del dictador, empezó a resolverse en la primavera y el verano de 1968. En este año agitado, la huelga general que había sacudido a Francia en el mes de mayo, iniciada por el estudiantado y secundada, sin poder evitarlo por su carácter espontáneo, por el movimiento obrero organizado, se estaba superponiendo con los acontecimientos que se desarrollaban en Checoslovaquia, donde el partido comunista había comenzado un proceso de apertura política que inquietaba a la URSS. Finalmente los soviéticos, como había ocurrido en la Hungría de 1956, se decidieron a intervenir con los tanques, y en el mes de agosto, tropas del Pacto de Varsovia invadieron el país centroeuropeo poniendo fin a la experiencia de construir un «socialismo con rostro humano», como se calificó el intento de la denominada «Primavera de Praga».

La condena del PCE a la intervención no se hizo esperar y el 6 de septiembre el Comité Ejecutivo la votó favorablemente con un solo voto en contra, aunque en el Comité Central las opiniones estuvieron más divididas. Fue determinante la postura de Pasionaria para que la mayoría del partido secundara la condena.

El Pleno ampliado del Comité Central de septiembre de 1968 rompía con 47 años de incondicionalidad en la defensa de la política exterior soviética y suponía el comienzo del distanciamiento respecto al PCUS. La dirección del partido presuponía que con esta postura los diversos grupos antifranquistas, tan susceptibles al filosovietismo del PCE, tendrían que admitir que era el primer partido comunista occidental acaudillando «el nacionalismo» frente al «imperialismo moscovita».

Con estos antecedentes puede comprenderse la impresión que causó el PCE en la Conferencia de los Partidos Comunistas que se celebró en junio

de 1969 en Moscú. Su postura suponía un proceso de independencia que rompía con la primitiva concepción del movimiento comunista como el partido mundial de la revolución en defensa de la URSS. Los soviéticos maniobraron para minimizar los efectos del enfrentamiento, pero ya hacía un tiempo que se habían resignado a perder su hegemonía en el campo comunista, y pagaron, lo que ellos consideraban la deslealtad española, abriendo en marzo del 70 una misión diplomática en el Madrid de Franco.

En el interior del PCE aparecieron resistencias ante el alejamiento de la URSS que acabarían en disidencias y que se solventarían en dos tandas de expulsiones. El primer núcleo disidente se forjó en torno a dos miembros del Comité Ejecutivo formados en la Unión Soviética, Eduardo García y Agustín Gómez. En el pleno del Comité Ejecutivo de abril de 1969 ambos fueron cesados en sus cargos en dicho órgano y a finales de diciembre de ese año terminaron siendo expulsados del partido. Tras Eduardo García y Agustín Gómez, será Enrique Líster el encargado de mantener las posiciones prosoviéticas en el interior de la dirección del partido hasta que sea también expulsado junto con otros cuatro miembros del Comité Central en el Pleno de este órgano que se celebró en agosto de 1970.

Este pleno ampliado, celebrado en las vecindades de París, tuvo una gran importancia por alguna de las decisiones que en él se adoptaron. No sólo cerró la crisis abierta tras la condena de la intervención en Checoslovaquia con la expulsión de Líster, aunque éste clamó por «la convocatoria y preparación del VIII Congreso», consigna a la que se aferraron los prosoviéticos, sino que supuso el ascenso de un nuevo grupo a los órganos de dirección del partido que iba a desempeñar papeles importantes en los tiempos que se avecinaban.

Entraron en el Comité Central: Pilar Brabo, Antonio Gutiérrez, Vicente Cazcarra, Tini Areces, Nicolás Sartorius, Juan Antonio Bardem, Dulcinea Bellido, Eduardo Saboribo, Rafael Pillado, Francisco Idiáquez, y otros más hasta 29 nuevos miembros. Algunos ascendieron directamente al Ejecutivo como Pilar Brabo, Vicente Cazcarra y Antonio Gutiérrez Díaz. Por otra parte, Ramón Ormazábal, recién salido de la cárcel y ascendido al Comité Ejecutivo, fue nombrado el nuevo responsable del PC en el País Vasco, nombramiento más que cuestionable si se tiene en cuenta las opiniones que mantenía sobre el nacionalismo, en un momento en que ETA ya desarrollaba una intensa actividad. Para Ormazabal: «Todo el movimiento nacio-

nalista en Euskadi no tiene más que una base ideológica, de principios, que lo impregna de arriba a abajo, que aunque lo callen se manifiesta en su comportamiento político: es un racismo feroz, es un antiespañolismo feroz, de los cuales se deriva el separatismo»[28]

Pero fue la línea política el aspecto más sobresaliente del Pleno. La intervención de Santiago Carrillo, que se publicará más tarde con el título de *Socialismo y libertad*, tenía un ángulo táctico, inmediato, el Pacto para la libertad, y otro estratégico, en la perspectiva socialista, la Alianza de las fuerzas del Trabajo y de la Cultura. Se denominaba «Pacto para la libertad» a lo mismo que con otras palabras se venía repitiendo desde hacía décadas, la necesaria coincidencia de fuerzas de derecha e izquierda para conseguir el derrocamiento de la dictadura. Quizá la novedad estaba en que conforme avanzaba el tiempo, y las previsiones no se cumplían, las ofertas de alianzas que hacía el PCE se escoraban más y más hacia la derecha, a la búsqueda de aliados inverosímiles.

Esta idea se presentó en varios textos de Carrillo y en documentos oficiales del partido de los años setenta, sobre todo en las conclusiones del VIII Congreso, de 1972, y en el «Proyecto de Manifiesto-Programa» adoptado por la Segunda Conferencia del Partido, en 1975. Así, la Reconciliación Nacional, la amnistía general y el Pacto por la Libertad se convertían en hitos de un movimiento que restauraría las libertades democráticas.

Pero el Pacto por la Libertad expresaba, también, el temor del PCE a que la iniciativa al final de la dictadura cayese definitivamente en las manos de lo que se denominaba el «neocentrismo», sostenido por sectores capitalistas, cuyo propósito sería evitar la «ruptura» necesaria entre la dictadura y la democracia, impidiendo que se produjese así un desequilibrio que acabase con la posición dominante de la oligarquía monopolista.

En el plano de los objetivos socialistas se asentaba la fórmula de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura como la vía para superar con el tiempo la sociedad capitalista. Aunque no desarrollado éste era un concepto que ya estaba consolidado, y que suponía la afirmación de la «vía democrática hacia el socialismo», que se lograría estableciendo alianzas de base amplia con las «fuerzas del trabajo y de la cultura», que ganarían juntas la batalla contra los monopolios y transformarían la sociedad sin violencia, por un proceso de «reformismo revolucionario (sic)».

En el mes de julio de 1972, en las afueras de París, se celebró el que iba a ser el VIII Congreso del PCE, el último de la clandestinidad. La militancia del interior, proporcionalmente, estuvo aún menos representada que en el anterior y para evitar filtraciones se separó rigurosamente a los delegados clandestinos de los que estaban en el exilio, para evitar las posibles detenciones en cadena, como había sucedido en 1959.

La decisión más importante que tomará el Congreso, fue la aceptación del Mercado Común Europeo, que se hará en aras de no dividir y enfrentar a las fuerzas democráticas del país. El rechazo que venía manteniendo el PCE sobre este tema podía estorbar la búsqueda de un acuerdo para acabar con la dictadura. No hacía falta apelar a los grandes análisis económicos para justificar este viraje, simplemente bastaba con cobrar conciencia de que las alianzas en ciernes así lo exigían.

En la Resolución Política de este Congreso, volvió a aparecer la preocupación por el fenómeno del «centrismo». Efectivamente, el PCE era consciente de que los sectores reformistas salidos del interior del régimen buscaban una salida al franquismo que, lógicamente, estaba lejos de la «revolución democrática» que el partido propugnaba. Para el PCE, el «centrismo», —y en esto no se engañaba— estaba impulsado por la oligarquía monopolista. «La oligarquía se interesa en un género de cambios que no ponga en peligro su posición dominante (...) De ahí surge el "centrismo" (...) una concepción del desarrollo político que consiste en utilizar el declive de Franco, y el mecanismo sucesorio montado por éste (...) coronado todo por la instauración de la monarquía juancarlista»[29]

En otras palabras, y con evidente clarividencia, denunciaba que el «centrismo» se esforzaba por conseguir que la oposición se plegase a la sucesión de Juan Carlos. Sin embargo, y a pesar de intuir lo que se avecinaba, y en lo que el mismo partido iba a terminar cayendo, el PCE adoptó con el «centrismo» una política comprensiva: «hay que mantener una posición de denuncia, de crítica (...) sin cerrarse al mismo tiempo al diálogo para impulsarle, de ambas formas, a dar pasos adelante frente a la dictadura»[30]

Por lo demás, en el desarrollo del Congreso fueron marginales los discursos de Tomás García sobre la «puesta al día» del Programa del partido, que databa de 1959, o incluso la situación internacional que expuso Manuel Azcárate.

Las variantes organizativas corrieron por cuenta de Ignacio Gallego, responsable de organización desde la expulsión de Eduardo García, y se redujeron a introducir de modo formal la figura organizativa de la Conferencia, que estaría constituida básicamente por un Comité Central ampliado. La novedad radicaba en que se le daría a partir de ahora una equivalencia congresual.

El nuevo Comité Central se amplió a 118 miembros, y en él la nueva generación de cuadros contó con una representación destacada; en él 27 miembros tendrán menos de cuarenta años. Por primera vez se podía decir que el peso del partido se inclinaba hacia quienes no tenían experiencia en la era estaliniana. Aunque hubieran entrado al partido bastante antes, eran todos «sesentayochistas», marcados por un «sí» al Mayo francés y un «no» a la intervención en Checoslovaquia.

En el año 1973, todo el mundo en el país sabía que a la muerte del dictador inevitablemente se iban a producir cambios, y esa certidumbre se vivía con sentimientos encontrados y con gran inquietud. Sin embargo, todavía en esas fechas, la dictadura arrojaba un balance positivo en lo tocante al progreso económico, lo que suponía que el juicio sobre ésta se viera atemperado. Los últimos quince años se habían traducido, de modo innegable, en una mejora en las condiciones de vida del conjunto de la población y en una clara modernización en los usos y costumbres.

Sobre este satisfactorio balance material, con todas sus desigualdades, se superponía otro, si cabe, de mayor importancia psicosocial. La dictadura ofrecía un saldo de 35 años de paz y orden basados en la represión. Para muchos españoles, este factor era el más relevante. La memoria colectiva sobre los desastres de la guerra operaba todavía en el recuerdo de importantes segmentos de la sociedad que se encargaban de transmitirlo, con más o menos éxito, a la numerosa población joven. El temor a revivir acontecimientos parecidos a los padecidos en la guerra se extendía sobre el conjunto de la sociedad, La «paz de Franco», unida a la prosperidad, facilitaba la conformidad de un amplio sector de la ciudadanía

En encuestas del Instituto Español de Opinión Pública, efectuadas a partir de muestras comparadas, a finales de 1966, solamente el 10% de las personas de la alta burguesía y 6% de los obreros estimaban que la democracia y la libertad deberían ser los principales objetivos de la política. En contra-

partida, 45% de los primeros y 59% de los segundos ponían la paz interna en el primer plano de sus preocupaciones.[31]

Pero la modernización experimentada en la última década, impulsada por el turismo y la penetración de modas foráneas, propiciaba que la juventud quisiera cambios, sobre todo en el terreno de las costumbres. Para muchos, las diferencias que presentaba España respecto a otros países europeos, subrayadas por las campañas del Ministerio de Información y Turismo con el eslogan *Spain is different*, eran leídas como atraso y subdesarrollo; por eso, para la mayoría de los jóvenes, los cambios que se avecinaban, aun siendo inquietantes, eran no solo inevitables sino deseables.

Resumiendo, tanto en el contexto de la crisis económica internacional que se inició en 1973, como en el de las transformaciones globales de la sociedad española en los años 60, se había producido en nuestro país un proceso de cambio en la relación de las fuerzas sociales y políticas del que era consciente el propio franquismo.

Es muy conocida la anécdota que contó el general estadounidense Vernon Walters, enviado por el presidente Nixon a España para entrevistarse con el dictador en 1972. Walters cuenta que Franco le dijo en esa entrevista: «Su presidente quiere que le hable francamente, ¿de qué?». Walters le contestó: «Mi general, por un accidente de la historia, el presidente de los Estados Unidos tiene mucha responsabilidad en varias partes del mundo. Él está muy preocupado por la situación en el Mediterráneo occidental, tiene mucho respeto por su opinión y quiere saber cómo ve usted los acontecimientos del futuro en el Mediterráneo occidental». La contestación fue: «Lo que interesa realmente a su presidente es lo que acontecerá en España después de mi muerte, ¿no?». «Siéntese, se lo voy a decir. Yo he creado ciertas instituciones, nadie piensa que funcionarán. Están equivocados. El Príncipe será Rey, porque no hay alternativa. España irá lejos en el camino que desean ustedes, los ingleses y los franceses: democracia, pornografía, droga y qué sé yo. Habrá grandes locuras pero ninguna de ellas será fatal para España... Porque yo voy a dejar algo que no encontré al asumir el gobierno de este país hace cuarenta años: la clase media española»[32]

El desarrollismo franquista había alumbrado una nueva sociedad, aprovechándose de la expansión del capitalismo en la posguerra, aunque era cierto que el régimen en los últimos años se estaba viendo lastrado por una

creciente parálisis del Estado franquista, una crisis incipiente de legitimación del poder y un ascenso considerable del movimiento de masas galvanizado por la crisis del petróleo, que estaba afectando al sistema en su conjunto. Esa crisis política y social, de seguir desarrollándose, amenazaba con convertirse en una crisis de la dominación burguesa. Para enfrentarse a esta situación, el régimen necesitaba buscar una fórmula de relegitimación, una «nueva fórmula política» que diría el politólogo italiano Gaetano Mosca.

Por tanto, también el franquismo estaba por el cambio. Pero los gestores del cambio franquista tenían muy presente que el proceso de transición debería atenerse a unos límites concretos, lo que iba a permitir que el sistema democrático que se debía alumbrar estuviese controlado. Las líneas rojas que el poder no iba a consentir que se traspasaran de ningún modo eran tres. La primera, la conservación de la forma monárquica como garantía de la continuidad institucional e histórica del franquismo frente a la derrocada República; la segunda, la negación del principio de autodeterminación de las nacionalidades o, lo que es lo mismo, la imposición de la unidad nacional a todo trance, aunque sobre la fórmula concreta para conseguirla cupiese negociar soluciones de autogobierno diferentes del centralismo franquista; la tercera suponía que los hombres del régimen mantuviesen las riendas del poder y del gobierno durante el proceso de transición.

Sobre el sistema económico estaba claro que la misma oposición no concebía otro que el que ya existía. En el caso de las formaciones izquierdistas se admitía el sistema capitalista con variaciones de mayor o menor calado sobre: el poder de la oligarquía, los monopolios, las multinacionales, el gran capital financiero y un largo etcétera dependiendo de cada formación, y sólo alguna se planteaba la instauración del socialismo al final de la dictadura. Planteado así el desmontaje del franquismo, la estructura de poder del antiguo régimen mantendría en todo momento el control.

Esto lo sabían desde hacía mucho tiempo los mismos hombres del régimen que preparaban lo que iba a terminar denominándose la Transición, por eso ya en 1957 comenzaron la que dieron en llamar «Operación Lolita». Con ella intentaban planificar con antelación suficiente cómo deberían ser las cosas a la muerte de Franco: una evolución pacífica, sin ruptura, que permitiera a la gran burguesía seguir ejerciendo su dominio bajo unas formas modernizadas. La monarquía parlamentaria se contemplaba más que como una salida como una solución a la dictadura franquista, que estaba

empezando a entorpecer el desarrollo mismo del capitalismo español, y Torcuato Fernández Miranda, tutor de Juan Carlos, actuó desde el comienzo como el ideólogo de esta operación.

Los reformadores franquistas no se podían arriesgar a un desmantelamiento del aparato dictatorial fuera de su supervisión. Es decir, la burguesía no estaba dispuesta a aceptar la formación de un Gobierno Provisional que pudiera poner en peligro sus intereses, aunque solo fuera de modo circunstancial. La forma en que esos límites impuestos por el franquismo fueron aceptados por la oposición dará un carácter específico al «milagro» de la Transición democrática en España. Milagro en el que el PCE desempeñó un importante papel.

NOTAS

1.- «Promoción Lenin», *Nuestra Bandera*, nº 62 (octubre-noviembre de 1969), págs. 22-25.

2.- GARCÍA, E.: «Le Parti Communiste consolide ses rangs», *Nouvelle Revue Internationale*, nº 8, agosto de 1968, págs. 171-173.

3.- *Mundo Obrero*, 15/4/1961.

4.- HERMET, G. (1972): *Los comunistas españoles*, Ruedo Ibérico, París, pág. 56.

5.- BROUÉ, P. y TEMIME, E. (1977): *La revolución y la guerra de España*, Fondo de cultura económica, Méjico, Tomo I, pág. 329.

6.- DÍAZ, J. (1970): *Tres años de lucha*, Ebro, París, pág. 350.

7.- FISCHER, L. (1941): *Men and Politics*, Jonathan Cape, Londres, pág. 397.

8.- MUJA-LEÓN, E. (1983): *Communism and Political Change in Spain*, Indiana University Press, Bloomington, pág. 33.

9.- MORÁN, F. (1986): *Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939- 1985*, Planeta Barcelona, pág. 258.

10.- *Ibidem*, pág. 270.

11.- ALBA, V., (1979): *El Partido Comunista en España*, Planeta, Barcelona, pág. 298.

12.- MORAN, *Opus cit*. pág. 320.

13.- JAUREGUÍ, F. y VEGA, P. (1983): *Crónica del antifranquismo 1939-1962*, Argos Vergara, Madrid, pág. 235.

14.- KENNY, M. (1966): *A Spanish Tapestry*, Harper, Colophon book, New York, pág. 140.

15.- *El Socialista*, 25/6/1959.

16.- MORÁN, *Opus cit*. pág. 334.

17.- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J. (2004): *Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982)*, FIM, Madrid, pág. 67.

18.- MUNIESA, B. (1996): *Dictadura y monarquía en España. De 1939 hasta la actualidad*, Ariel, Barcelona, pág. 92.

19.- PRESTON, P. (2013): *El zorro rojo. Biografía de Carrillo*, Debate, Madrid. Rodríguez Armada y Novais (1976): *¿Quién mató a* Julián Grimau*?*, Ediciones 99, Madrid, págs. 86-88 y 130-132; Moran *Opus cit*…, pág. 360; Agustín Guillamón, «La NKVD y el SIM en Barcelona. Algunos informes de Gerö («Pedro») sobre la Guerra de España», disponible en:

http://el janoandaluz.blogspot.com.es/2017/06/el-terror-estalinista-en-barcelona-1938_17.html.

20.- MUNIESA, *Opus cit*. pág. 110.

21.- PÁNIKER, S.(1970): *Conversaciones en Madrid*, Editorial Kairos, Barcelona, pág. 310; BALCELLS, Albert «Las actitudes de los intelectuales en la España de los años sesenta», *Cercles. Revista d'Història Cultural*, nº 16, 2013, págs. 9-19.

22.- CARRILLO, Santiago (1965): *Después de Franco ¿Qué?,* Editions Sociales, París.

23.- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, *Opus ci*t. pág. 72

24.- AA VV (1966): *Guerra y revolución en España, 1936-1939*, Progreso, Moscú T. II, págs. 101-103.

25.- DIZ, Juan: «Libertades políticas y socialismo», *Alkarrilketa*, nº 2, 1969.

26.- *Mundo Obrero*, 5/4/1970.

27.- HERMET, *Opus cit*. pág. 61.

28.- MORAN, *Opus cit*. pág. 461.

29.- CARRILLO, Santiago (1972): *Informe al VIII Congreso del PCE,* Ed. Em presa Poligráfica, Bucarest, págs. 26-7.

30.- *Ibídem*., pág. 28-9.

31.- «Cuestiones de actualidad política», *Revista Española de Opinión Pública*, nº 9, julio-septiembre de 1967, págs. 185-225

31.- ABC, 15/8/2000

VII
El PCE en la segunda Restauración 1975-1978

El lustro que abarca los años de 1973 a 1978 va a ser decisivo en la ya larga historia del PCE. Coincidiendo con los últimos de clandestinidad, y los primeros tras su legalización, se desarrollará en el país un proceso de cambio político durante el cual el partido desempeñará un importante papel, que, no obstante, le conducirá paradójicamente a la mayor de sus crisis.

En este período, conocido vulgarmente como la Transición, la militancia e implantación del partido pasará por diferentes fases según el devenir de los acontecimientos y la misma dinámica de la organización. A finales de 1976, antes de ser legalizado, y según estimaciones propias, el PCE contaba en España con unos diez mil militantes de los cuales la mitad habían ingresado durante el año que estaba a punto de terminar; lo que contrasta con otras cifras que el partido había hecho públicas en el pasado. Pero, partiendo de esta cifra, el crecimiento fue rápido y espectacular. En vísperas de las elecciones de 1977 el partido ya tenía registrados 201.757 afiliados, para luego descender en menos de un año a 171.332.

También se produjeron cambios importantes, —ahora perfectamente conocidos— en su implantación territorial respecto a su distribución histórica. Zonas donde el partido había gozado de un mayor arraigo durante la República, por su componente obrero y tradición socialista, vieron postergado su peso en el conjunto de la organización. Así el País Vasco y Asturias contaban en 1978 con 5.088 y 9.765 afiliados respectivamente, que contrastaban con 23.381 que tenía Madrid o los 18.997 que estaban afiliados en Valencia. Aunque lo más llamativo era el peso adquirido por el PSUC en Cataluña, donde, —prácticamente desaparecidas las tendencias anarquistas— alcanzaba los 40.000 afiliados, dejando atrás a Andalucía, que era la segunda región en número, con 32.954 afiliados al partido.

Su naturaleza como una fuerza política legal le permitirá al partido presentarse a las elecciones a Cortes Constituyentes el 15 de junio de 1977 obteniendo 20 escaños. El PCE quedaba así como la tercera fuerza en el arco parlamentario. La ganadora de estas elecciones fue Unión de Centro Democrático, un conglomerado formado por distintas tendencias del franquismo reformista; y la segunda más votada resultó ser el PSOE, que con un 29,2% de los votos (5.229.460 votos) y 118 escaños dejo a enorme distancia a los comunistas, que sólo obtuvieron un 9,2% de los votos (1.655.704 votos). El resultado fue decepcionante para el PCE, habida cuenta de la trayectoria de lucha durante el franquismo de uno y otro partido.

La nueva situación de legalidad que obtuvo la organización comunista, junto a los ingresos oficiales derivados de sus resultados electorales, arrojan algo de luz sobre la financiación del PCE en este período. En estos años de expansión las fuentes de financiación siguieron siendo fundamentalmente las habituales en la época de la clandestinidad, a las que, no obstante, se sumaron otras derivadas de su legalización: cotizaciones más regulares y abundantes que antaño, préstamos bancarios que sin embargo habrá que devolver, publicaciones muy distintas, beneficios generados por empresas gestionadas por particulares que eran miembros del partido, campañas de recaudación mediante festivales, la fiesta anual del partido, los bonos de ayuda, etc., y aportaciones que se siguieron recibiendo procedentes de diferentes instancias.

Según una fuente controvertida[1] el PCE, a pesar del ostensible distanciamiento que manifestaba respecto al PCUS, continuó siendo ayudado eco-

nómicamente hasta marzo de 1976, —aunque de un modo muy modesto— por el partido soviético a través del Partido Comunista Francés. Pero a raíz de la publicación de la obra de Santiago Carrillo *Eurocomunismo y Estado*, donde las críticas contra la URSS arreciaban, el Politburó del PCUS, indicó a la KGB que realizara futuros pagos a Ignacio Gallego, el miembro más prosoviético que quedaba en el Comité Ejecutivo del PCE, que estuvo percibiendo unos 30.000 dólares anuales hasta 1980.

No obstante, las ambiciones del partido y la financiación terminaron por colisionar, ocasionando algunos fiascos económicos difíciles de superar, como ocurrió con la apuesta de convertir *Mundo Obrero* en un periódico diario.

Los medios de intervención del partido también se vieron transformados con la legalidad. Radio España Independiente transmitió el 14 de julio de 1977, desde Madrid, su último programa, así el partido se vio privado de uno de los principales instrumentos de propaganda durante la dictadura. Ahora, esa influencia debía ser ejercida a través de publicaciones, y de modo directo en mítines y actos partidarios, como era la fiesta anual que el partido comenzó a celebrar, imitando a sus homólogos de la Europa occidental.

Mundo Obrero, que al final de la dictadura era un quincenal ciclostilado, que se imprimía en España con planchas que llegaban clandestinamente desde el exterior, y que distribuía unos 70.000 ejemplares, con la legalidad se convirtió en semanal, llegando a doblar la tirada, ahora ya impresa, combinando la venta comercial con la venta militante. En 1978 se convirtió en diario, tras una campaña del PCE que consiguió los 200 millones de pesetas necesarios para su puesta en marcha. La publicación como diario del partido desembocó en un auténtico fiasco.

Dirigido por Melchor Rodríguez, *Mundo Obrero* diario fue incapaz de definir un perfil claro entre un periódico de información burgués y una publicación partidaria. Estando previsto lanzar 100.000 ejemplares, su primer día de aparición sólo se vendieron 30.000, y cuando desapareció dos años después, para volver a ser semanal, se vendían solamente 12.000. El mismo desastre editorial y económico se repitió con *La Calle* una revista semanal, que nació en marzo de 1978 como una escisión de la ya existente titulada *Triunfo*. César Alonso de los Ríos fundó *La Calle* con el apoyo del Partido Comunista, pero tampoco esta publicación llegó a prosperar.

La estructura organizativa del partido también sufrió una profunda transformación al desaparecer las células, que habían sido la base de encuadramiento durante décadas, y que fueron sustituidas por agrupaciones territoriales, para poder organizar mejor un partido que se pretendía de «masas». Las agrupaciones, en ocasiones muy numerosas, pronto se tornaron en poco operativas. Los debates sobre los temas más abstractos se podían prolongar durante horas, dejando a un lado el viejo activismo. Por otra parte, las nuevas incorporaciones de jóvenes estudiantes, —en algunos casos con un cierto grado de preparación teórica— colocaban en situación de inferioridad a los cuadros más veteranos de origen obrero. De ese modo, la antigua disciplina del partido clandestino y combatiente se fue diluyendo.

Tal vez por eso, o por su formación estalinista, la dirección siguió aferrada al centralismo democrático de tipo soviético, que al impedir la formación de tendencias o fracciones facilitaba la imposición personalista de las decisiones emanadas de la dirección. El máximo exponente de esa práctica, como luego veremos, fue el propio Secretario General, que adoptó decisiones trascendentes a espaldas, incluso, de los órganos de dirección más reducidos, como el mismo Comité Ejecutivo. Resulta significativo que no existan en los archivos del partido documentos internos desde enero de 1976 hasta abril de 1977. Las escasas discusiones entre miembros del Ejecutivo tuvieron carácter personal y ni se grabaron ni se levantaron actas de las reuniones.

No obstante, durante este período se realizó el IX Congreso del PCE en abril de 1978 — que fue el primero celebrado en España desde 1932—, en él se abordó el abandono del leninismo como seña de identidad del partido, lo que fue uno de los factores determinantes en la crisis posterior que acabó sufriendo la organización.

También se operó un profundo cambio en las motivaciones y composición del afiliado/militante. La composición social de los miembros de la organización no varió sustancialmente de la que ya era en los últimos años de la dictadura. En abril de 1978, al comenzar el IX Congreso, la radiografía social de los delegados arrojaba que la edad media era de 35 años. Solo el l9, 06% había ingresado en el partido antes de 1939, mientras que el 37,83% lo habían hecho entre 1971 y 1976. El 86,72% de los delegados eran hombres y el 13,27% mujeres, una proporción ligeramente superior a la del total de mujeres militantes, el 11,15% frente al 88,85% hombres. En cuanto al

perfil sociolaboral de los congresistas, el 34,61% eran obreros industriales, el 31,11% profesionales y «fuerzas de la cultura», el 15,76% empleados y administrativos, el 6,02% obreros agrícolas y campesinos, el 3,76% estudiantes, el 3,01% trabajadores autónomos y empresarios, y el 1,30% amas de casa.

El primer gran cambio que implicó la legalidad fue que se tuvo que empezar a distinguir entre afiliado y militante. Durante la clandestinidad todos los afiliados eran militantes que no reducían su participación al mero hecho de pagar las cuotas y ser considerados como tales. El afiliado de la clandestinidad era, en mayor o menor grado, un activista, es decir un militante que desarrollaba su participación en el proyecto común de modos muy distintos, sin esperar otra cosa, —en el peor de los casos— que la detención y la cárcel.

Pero con la legalización al afiliado ya no se le podía pedir que fuera un activista, con tal que pagara sus cuotas y estuviera inscrito tenía derechos, como el de participar votando en su agrupación, pero no se le podía obligar a asumir tareas de militancia. En los primeros tiempos de este nuevo período el grado de militancia fue muy alto, sin embargo fue disminuyendo con el paso del tiempo. Por otra parte, el militante, se distinguía del «permanente», que era el profesional del partido del que cobraba un sueldo que le obligaba a una total disponibilidad al servicio de la causa.

La motivación de la militancia en el tardofranquismo vino a acentuar una tendencia que ya se venía dando en la etapa anterior. Uno podía arriesgarse a militar en el PCE sin asumir plenamente el ideario marxista. El economista del PCE Jorge Fabra definió con brillantez este tipo de compromiso: «En España ser comunista no podía ni puede pasar por ser un admirador de la URSS porque aquí la política no tenía nada que ver con la URSS. Ser comunista en este país era ser liberal, laico, socialista y antifranquista»[2]. A ello hay que añadir que en muchos casos el marxismo de estos nuevos afiliados era un marxismo incorporado más por contagio contextual que por asimilación reflexiva. Esto ayuda a explicar su posterior abandono y muchas de las trayectorias políticas posteriores. La rapidez con que se fue prescindiendo intelectualmente del marxismo fue directamente proporcional a la ligereza con la que en muchos casos se había asumido.

La formación que impartía el partido a sus militantes tampoco ayudaba. El propósito de esa formación en aquellos momentos descansaba en el análisis acerca de la situación económica, social y política española, así como en la transmisión de una línea política para intervenir sobre ella ante esa coyuntura concreta. Sin embargo, los contenidos doctrinarios ocupaban un lugar secundario y los que se impartían eran la quinta esencia del academicismo soviético, de lo que resultaba que la base doctrinal impartida estaba muy por debajo de la que buena parte de la militancia, sobre todo la estudiantil, había aprendido en las universidades o por su propia cuenta de manera autodidacta.

Para otros, sobre todo obreros, el mito de la revolución soviética asimilado al marxismo seguía siendo en esos años un factor de peso en sus motivaciones. La idea de una sociedad socialista contrapuesta al capitalismo continuaba resultando atrayente para muchos, máxime cuando el capitalismo franquista, muy distanciado todavía del llamado Estado del Bienestar, empezaba a sufrir desde 1973 una profunda crisis económica con agudos efectos sociales.

Con la legalidad aún se abrió más el abanico en el tipo de compromisos con la causa comunista. Dentro de la militancia, y sobre todo entre los permanentes, se fue produciendo en algunos una disyuntiva entre: ser un profesional de la revolución o ser un profesional de la política. Legalizado el partido, y con un relativo éxito electoral, se presentaba para algunos la posibilidad de ocupar cargos políticos remunerados en las instituciones del Estado, lo que podía convertirse en una tentación vital.

Durante la clandestinidad, el militante del interior jamás se planteó la actividad política entendida como profesión. En primer lugar, la generación de cuadros del interior participaba en un proyecto arriesgado que obligaba a considerar los aspectos colectivos por encima de los individuales. Con una ingenua pero férrea conciencia se consideraban soldados de la revolución, no políticos en ejercicio, y menos profesionales de la política.

Ese modo de entender la militancia como forma de hacer carrera política, de ganar elecciones, de ser ministro, alcalde o director general, fue algo que trajo la legalidad. Muy pronto, los mejor preparados, muchos de ellos técnicos o profesionales, se dieron cuenta que el PCE, con los magros resultados electorales que estaba obteniendo, ofrecía escasas posibilidades en

este sentido, y las pugnas por hacerse un hueco, o las deserciones hacía otras formaciones que posibilitaran esa forma de medro personal, menudearon. Estableciéndose así la diferencia entre un profesional de la política y un cuadro de un partido revolucionario.

Pero lo fundamental para el enjuiciamiento del PCE durante esos años cruciales será su evolución política, que irá a remolque del reformismo franquista sin ser capaz de forzar la ruptura, tantas veces preconizada, a pesar del auge del movimiento de masas en la última etapa del franquismo y el primer año de la Transición.

El año 1969, con otro estado de excepción decretado por la dictadura, fue la culminación de la crisis que había estado fraguándose durante los años 60 y que anunciaba un período de gran conflictividad laboral y social. Frente a ella, los tecnócratas del franquismo, que se consideraban a sí mismos como «liberales», no dudaron en emplear la coacción y represión más brutal. Los años 70 proporcionaron amplias pruebas de estos modos de actuar, a pesar de la constante demagogia «integracionista», «reconciliadora», «liberalizadora» y «aperturista».

En la huelga del Metro de Madrid en 1970, los obreros volvieron a sus puestos bajo amenaza de militarización tras una lucha de tres meses. En Granada, tres trabajadores de la construcción fueron muertos por disparos al disolver la policía una concentración de trabajadores delante de la casa sindical de la ciudad. En Erandio, dos obreros fueron alcanzados por las balas después de haber participado en una manifestación; y en octubre de 1971, fue muerto otro más durante una huelga en la fábrica Seat de Barcelona. En 1972, la población civil de El Ferrol, en solidaridad con los trabajadores de la Empresa Nacional Bazán, entonces en huelga, sufrió a manos de la policía dos muertos y multitud de heridos; y 1973 fue el año en que se produjo un muy extendido movimiento de solidaridad en la provincia de Barcelona, tras la muerte de un obrero de la construcción en San Adrián de Besós. En total, entre 1969 y 1975, resultaron muertas diez personas por los cuerpos represivos a causa de conflictos laborales.

Así mismo, los años 70 supusieron la aparición de manifestaciones de descontento en sectores hasta entonces relativamente poco conflictivos —banca, correos, enseñanza, sanidad, transportes públicos, por ejemplo—; y la creciente tendencia a solidarizarse con los obreros en huelga de otros sec-

tores y grupos sociales no proletarios como la universidad, y lo que podía ser más inquietante para el régimen: el ejército.

En julio de 1975, un grupo muy reducido de oficiales aparecieron ante la opinión pública reclamando la modernización de las Fuerzas Armadas, pero también la democratización del sistema político al margen de ideologías concretas.[3] Tal vez inspirados por sus colegas portugueses, que habían impulsado en 1974 la llamada Revolución de los claveles, que puso fin a la dictadura en el país vecino, estos espontáneos de la democracia fueron rápidamente reducidos. La tolerancia por parte del poder no era posible. Si se consentía una cierta autonomía en el aparato militar, se debilitaba la imagen que el Ejército debía proyectar en el proceso de transición que el sector reformista del régimen llevaba tiempo preparando. El ejército debía ser garante último de un cambio dentro de la continuidad, proyectando su sombra amenazante, pero permaneciendo unido sin intervenir, a no ser que fuera necesario en un supuesto extremo. Los implicados en la Unión Militar Democrática (UMD), naturalmente, fueron condenados a prisión militar en marzo de 1976, y lo más importante, simbólica y prácticamente fueron separados del servicio activo.

La represión contra el movimiento obrero se hizo visible a nivel internacional con el llamado Proceso 1001, contra señalados dirigentes de CC OO, celebrado en el invierno de 1973. El mismo día en que se iba a abrir la vista de la causa se produjo un hecho que dio un golpe mortal al continuismo franquista en estado puro. El Presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco murió en un atentado perpetrado por ETA.

Lo cierto era que el problema nacional vasco había ido adquiriendo un perfil singular y violento. El PNV había liderado el Gobierno vasco en el exilio y representaba la fuerza hegemónica del mundo nacionalista. El activismo del PNV contra el franquismo se reducía a las celebraciones en la clandestinidad del Aberri Eguna, fiesta nacionalista, al despliegue de su bandera la Ikurriña o a la realización de pintadas. Esta dinámica quedó alterada cuando en el año 1959, un grupo de jóvenes, próximos al PNV, crearon una organización denominada Euskadi ta Askatasuna, que pronto fue conocida por la siglas de ETA. Muy influidos por la lucha de los movimientos de liberación nacional en las colonias, como era el caso del Frente de Liberación Nacional de Argelia o por el nacionalismo radical del IRA irlandés, estos jóvenes optaron por la lucha armada contra el Estado espa-

ñol. Sus primeras acciones violentas se produjeron en 1968, cuando asesinaron a un conocido comisario de la Brigada Político Social, y, sobre todo, a raíz del proceso de Burgos contra alguno de sus militantes, que alcanzó resonancia internacional.

Pero fue sobre todo el magnicidio del almirante Luis Carrero Blanco, jefe del Gobierno, lo que proporcionó a esta organización una enorme popularidad. Para una parte importante de la sociedad vasca, principalmente para los más jóvenes, ETA poseía un atractivo especial y representaba la forma de lucha más contundente contra el franquismo.

La respuesta del régimen en los últimos dos años de vida del Caudillo volvió a ser la misma que en los primeros de su andadura. El anarquista Puig Antich fue ejecutado a principios de marzo de 1974 a garrote vil, y el 27 de septiembre de 1975 serían fusilados: Ángel Otaegui Echeverría y Juan Paredes Manot, miembros de ETA, y José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, del FRAP, acusados todos ellos de la muerte de varios policías.

Mientras la clase obrera había sido capaz de organizarse y plantar cara al franquismo, la oposición política seguía mostrando su debilidad, reduciendo sus planteamientos a un mínimo democrático. Según el Comité Central del PCE en un comunicado emitido en 1974, decía: «el objetivo inmediato, de cuya realización depende todo el devenir, es un régimen de libertades políticas democráticas. No es el socialismo, ni la democracia popular, ni siquiera un gobierno de izquierda. Es la liquidación de la dictadura, un Gobierno provisional de amplia coalición democrática, que dicte la amnistía, restablezca las libertades políticas y sindicales y convoque elecciones libres a una Asamblea Constituyente. [...] Ese Gobierno ha de ser, en cierto modo, un Gobierno de reconciliación nacional»[4].

Pero ni siquiera eso se iba a conseguir.

En 1975 moría en su cama el Caudillo, y después de 44 años España volvía a convertirse en reino, al asumir otra vez la jefatura del Estado un Borbón, como ya había ocurrido hacía un siglo, al ser proclamado por las Cortes de entonces Alfonso XII como soberano del país tras el derrocamiento de la primera República. Se trataba de la segunda Restauración de los Borbones en la historia contemporánea de nuestro país. Ahora, el llamado a ocupar el trono era Juan Carlos I, aplaudido por las Cortes franquistas por expreso

deseo del dictador. Por tanto, ese hecho en sí no significaba tanto el final de nada —ya que el sistema franquista en toda su integridad seguía existiendo— como el comienzo de algo que iba a llegar hasta el presente: la restauración de nuevo de la monarquía en nuestro país.

Con la segunda Restauración operada en 1975 se abrirá un nuevo período en nuestra historia que llega hasta hoy, en el que el Estado-nación de España se constituirá otra vez en reino, integrándose de ese modo en el reducido círculo de países que a comienzos del siglo XXI todavía conservan fosilizada una forma de organización política de origen primitivo: la monarquía.

No obstante, al llegar al poder Juan Carlos I, la singular monarquía española vivía una situación anómala. No solo acababa de ser restaurada, a contracorriente de la Historia europea, sino que seguía pendiente de reciclarse como monarquía constitucional, al renacer en aquel momento como producto de una dictadura fascistoide. Ese origen maculado obligaba a los que deseaban resucitar la monarquía, así como a la burguesía que quería desmontar la dictadura para modernizar y relegitimar su dominio, a emprender juntos una singladura de cambio controlado en la que se debía conjugar una vieja y desprestigiada institución —garante del moderantismo de la operación— con unas formas políticas análogas a otras ya existentes en el resto del continente.

De ese modo se buscaba vincular monarquía con democracia moderna, proyectando la imagen de que una, la democracia, era debida a la otra, la monarquía, que se encargaría de hacer tabla rasa de la superestructura franquista. La operación era delicada, pero la burguesía española, fuertemente asentada en el poder tras 35 años de dictadura, se sabía muy capaz de enfrentarse a ese desafío que la iba a convertir por primera vez en su historia no solo en clase dominante, sino también en clase hegemónica, si sabía conojugar continuidad en la infraestructura económico-social y cambio en la superestructura política. A ese proceso se le ha denominado la Transición y concluyó exitosamente con escasas tensiones en 1982.

En vísperas de la muerte del dictador, la oposición no era lo suficientemente fuerte para derrocar la dictadura y, como no podía ser de otro modo, estaba dividida.

En el verano de 1973 Carrillo se había entrevistado en París con el abogado y empresario Antonio García Trevijano, cercano al diario *Madrid*, y

que representaba a algunos círculos empresariales que, preocupados por la evolución de la situación política, querían llegar a un pacto social que no lesionara sus intereses. El Secretario General del PCE, vio en estos contactos la oportunidad de concretar el acuerdo, —con al menos un sector del centrismo— que preconizaba el Pacto para la libertad.

De esos contactos surgió una reunión de grupos políticos que se denominó Junta Democrática, que pretendía la «reconciliación nacional», a la que querían llegar mediante un proceso de «ruptura democrática» a través de una «Acción democrática nacional». Al insistir en el carácter pacífico de ese cambio, se exigía la formación de un Gobierno Provisional, una ley de amnistía, la legalización de todos los partidos políticos sin exclusión, el reconocimiento de la libertad sindical, de los derechos de huelga, de reunión, y de manifestación, así como la restitución al movimiento obrero de los bienes que les había confiscado el sindicato oficial.

Los socialistas del PSOE se negaron sin embargo a adherirse a esta Junta Democrática, a la que acusaban de estar manipulada por los comunistas y de haber recibido el apoyo de Juan de Borbón, que seguía maniobrando desde el exilio para poderse convertir en rey en vez de su hijo Juan Carlos.

El viejo PSOE, en su último congreso celebrado en la localidad francesa de Suresnes, había elegido como Secretario General a un joven abogado del interior: Felipe González. Como líder de facto de los socialistas españoles, González había argumentado cuales eran las principales razones para rechazar su adhesión a la Junta Democrática, razones que conocemos gracias a unas anotaciones tomadas por el periodista de *Cambio 16* José Manuel Arija: «La Junta Democrática no tiene una línea de ruptura, es una confusión y una formulación de derechas. El PSOE se opuso a participar porque se podía hipotecar el futuro de la clase obrera y prefigurar el régimen político español. No estamos dispuestos a partir de una formulación interclasista, ni se podía consentir que fuera la burguesía la que se enfrentara con el Régimen e hiciera su pacto con sus condiciones.

Nos separan profundas diferencias hoy por hoy con la Junta Democrática. Diferencias de análisis y de formulación del cambio político. Porque entendemos la ruptura democrática desde los intereses de la clase trabajadora y no desde una posición ambigua. Un pacto desde nuestras posiciones y no desde las posiciones de la burguesía, porque en este caso los aliados

para el pacto de la democracia serán después los enemigos de la clase trabajadora»[5]

Los socialistas sostuvieron en vísperas de la muerte de Franco, a través de su propaganda, una serie de consignas verdaderamente radicales que iban desde hablar de la dictadura del proletariado hasta reconocer el derecho de autodeterminación de las nacionalidades en el Estado español. Con estas posturas parecía haber resucitado el espíritu de Largo Caballero; de nuevo el PSOE dejaba a la derecha al PCE. Pero realmente, más allá de este verbalismo revolucionario para el consumo de las masas más ingenuas, el propósito era intentar superar a los comunistas. Al lograr imponerse en el seno de la Internacional Socialista, los nuevos dirigentes del PSOE obtuvieron apoyo político y financiero, principalmente de los socialistas alemanes, lo que facilitó su reconocimiento internacional y poder disponer de abundantes recursos.

No obstante, los socialistas habían heredado el anticomunismo que había presidido la estrategia del PSOE en las décadas anteriores, y esa postura respondía a la orientación ideológica de la socialdemocracia europea en su conjunto. Felipe González dejó claramente asentado desde el principio que ellos estarían dispuestos a participar en unas elecciones que ofrecieran un mínimo de garantías democráticas, aunque los demás partidos, —pensaba en el comunista— no hubieran sido legalizados. Realmente lo que había resucitado era el Largo Caballero de la dictadura primorriverista, no el Largo Caballero de la República. Esa postura sin duda estaba inspirada en buena medida por el Partido Socialista de Alemania Occidental, ya que en la República Federal Alemana el Partido Comunista estaba prohibido mientras que los socialistas funcionaban con toda libertad. Esto ayuda a explicar el rechazo del PSOE a la Junta Democrática y la creación en junio de 1975, de su propia coordinadora: la Plataforma de Convergencia Democrática.

Lo ridículo de la situación, con dos organismos pretendidamente unitarios de oposición a un franquismo agónico, no escapó a sus dirigentes, que finalmente, en marzo de 1976, muerto ya el dictador, se vieron obligados a ponerse de acuerdo y definieron una plataforma común.

La Junta Democrática de España, constituida alrededor del Partido Comunista, del Partido Socialista Popular, dirigido por Tierno Galván, del Partido del Trabajo (de tendencia maoísta), de los carlistas, —que habían

experimentado en los últimos años un curioso proceso de evolución hacia el socialismo autogestionario— y de algunos independientes, y la Plataforma de Convergencia Democrática, auspiciada fundamentalmente por el PSOE, a la que se habían sumado sectores destacados de la oposición moderada como la Izquierda Democrática del exministro Joaquín Ruiz-Giménez y la Unión Social Demócrata creada por Dionisio Ridruejo, así como partidos más radicales como la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores) y el MCE (Movimiento Comunista de España), terminaron por fusionarse en un único ente denominado Coordinación Democrática, aunque fue más conocido como la «Platajunta», un organismo de encuentro solo aparentemente unitario y que, además, tuvo corta vida.

En este sentido, resulta importante destacar que días antes de la fusión de ambas organizaciones (20 de marzo de 1976) ya quedó perfectamente reflejado en un texto aprobado por el Comité Ejecutivo del PCE el cambio de estrategia política que los comunistas iban a seguir a partir de ese momento. El documento, titulado «Cuatro proposiciones del PCE para resolver el problema político», contenía esencialmente lo siguiente: «Establecimiento de un acto de unidad de acción entre la Junta, la Plataforma, los órganos unitarios existentes en nacionalidades y regiones y los grupos democráticos que aún se hallan al margen de toda combinación.

Concitar en torno a este acto la adhesión de los más amplios sectores sociales y de personalidades representativas. A partir de este pacto proponer públicamente la apertura de una negociación a los elementos que se declaran reformistas y a representantes de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia para llegar a un acuerdo sobre la posible composición, programa y forma de instalar en el poder a un Gobierno Provisional o transitorio, capaz de presidir, con garantías para todos, un proceso constituyente.

Mientras, reclamar derechos como el de huelga, reunión y manifestación pacífica, sin discriminación para ningún partido. Una amnistía, cuando menos la puesta en libertad de los presos políticos y sociales y el regreso de los exiliados»[6].

Coordinación Democrática se presentaba así como un pacto de duración limitada, en tanto no se produjese la ruptura democrática con la dictadura y se formase un Gobierno Provisional. La ruptura se entendía como un conjunto de condiciones mínimas: proceso constituyente, amnistía, libertad

de partidos y derechos y libertades políticas para las nacionalidades y regiones del Estado español. El programa suponía un acercamiento a los planteamientos de sus sectores más moderados y no incluía ninguna exigencia incompatible con el mantenimiento del régimen capitalista.

En mayo de 1976, uno de los más conocidos dirigentes del PCE, Ramón Tamames, exponía los criterios económicos por los que habría de regirse un eventual Gobierno Provisional. Para Tamames, la línea básica de actuación de ese Gobierno tenía que ser la de mantener la confianza de los empresarios. De ahí deducía una serie de actuaciones entre las que destacaban: la renuncia a toda nacionalización; la petición de ayuda al FMI y a la CEE; la amnistía fiscal para los evasores de capital; la ayuda a la mediana y pequeña empresa... No puede decirse que con ese programa el fantasma del comunismo fuera a recorrer España.

Desde julio de 1976, la oposición, dejó de plantear como exigencia previa la formación de un Gobierno Provisional, de su programa desapareció el concepto de «ruptura», y la «Acción democrática nacional» fue sustituida por unas suaves «acciones políticas adecuadas».

Antonio García Trevijano sostuvo en todo momento que fusionarse con la Plataforma suponía renunciar a la ruptura democrática, conquistada mediante una «Acción democrática nacional». En esa postura influía también su certidumbre de que, en un organismo más amplio, los independientes de la Junta, como era su caso, iban a quedar relegados, tal y como terminó ocurriendo. Pero el PCE estaba obsesionado con no quedar marginado y, sin admitirlo, hoy sabemos que ya había renunciado a la ruptura.

Frente a esta oposición, el franquismo reformista quería garantizar, ante todo, la restauración de la monarquía en la figura de Juan Carlos. En el año 1970, en unos estudios de prospección, realizados entre todos los sectores sociales del país, dirigidos por el sociólogo del régimen Juan José Linz y conocidos como los informes FOESSA, quedaba reflejado que el sistema político preferido por la sociedad española para después de Franco era la república (49,4 % de la población), mientras que la continuidad del régimen franquista solo contaba con el 29,8 % de apoyos, y la monarquía con el 20,8 %.

Por ello, en ningún momento se podía consentir que la restauración monárquica fuera sometida a referéndum, ni que la Constitución, que estaba

por redactar, contemplara una forma de Estado que no fuera la monárquica, tal y como había decidido el Caudillo y como lo reconoció Adolfo Suarez tiempo después[7].

Por eso, desde el mismo entorno del monarca se venía trabajando en transmitir mensajes tranquilizadores a la oposición a fin de hacer viable el proceso de cambio dentro de los parámetros establecidos por los reformistas del franquismo. En esta línea, ya se habían producido contactos. Así, por ejemplo, Jacobo Cano, muñó las primeros aproximaciones al PSOE, a través de los hermanos Luis y Javier Solana, este último, andando el tiempo, acabaría siendo Secretario General de la OTAN. Pero los reformistas sabían también que la credibilidad del proceso de cambio descansaba, tarde o temprano, en la legalización del PCE, la principal fuerza opositora durante décadas y la que podía encauzar mejor las movilizaciones populares que ya se estaban produciendo. De ahí que se apresuraran a tomar la iniciativa, y a los pocos días de la muerte del dictador, el 5 de diciembre de 1975 se produjera un curioso encuentro.

Manuel Prado y Colón de Carvajal, hombre de confianza de Juan Carlos, se entrevistó en Bucarest con el presidente Ceaucescu. Llevaba un mensaje personal del nuevo rey de España para al Secretario General del PC español. El rey garantizaba que la democracia sería restaurada y que el Partido Comunista podría ser legalizado, pero era imprescindible que el propio PCE no cuestionase la monarquía. Santiago Carrillo recibió el mensaje pero en aquel momento no informó ni siquiera al Comité Ejecutivo del partido.

El PCE venía manteniendo desde hacía muchos años que su pretensión era lograr la creación de un Estado democrático, y a ese objetivo supeditaba su estrategia. Si la república no era posible, podía muy bien aceptar una monarquía parlamentaria, y la república no debía ser un obstáculo para alcanzar ese objetivo último.

No obstante, también durante muchos años, el PCE había sido el defensor de restaurar la legalidad republicana si así lo decidían unas Cortes constituyentes. En noviembre de 1967, Carrillo, junto con Pasionaria y otros, habían sido recibidos en el Kremlin por Brezhnev y Boris Ponomariov, jefe del Departamento Internacional del PCUS, que les dijeron que tal vez había llegado el momento de que el PCE abogara por una sucesión monárquica de Franco. A fin de cuentas el mismo Stalin avalaba la propuesta ya que

hacía años le había dicho a Tito: «En nuestros días el socialismo es posible incluso bajo la monarquía inglesa. La revolución no es ya necesaria en todas partes… Sí, el socialismo es posible incluso bajo un rey inglés»[8]

Sin embargo, a los dirigentes del PCE les molestó más esta recomendación directa que un artículo firmado por «Ardatovski» y publicado en *Izvestia* donde se había expuesto el mismo argumento restaurador. Carrillo lo organizó todo para que el PCE respondiera en *Mundo Obrero* al periódico soviético con un texto titulado: «No, camarada Ardatovski». El artículo estaba formulado en unos términos profundamente respetuosos hacia el Kremlin y provocó una disculpa por parte de los rusos, quedando así a salvo el pedrigi republicano del partido.[9]

Cuando el 22 de julio de 1969 Franco designó a Juan Carlos de Borbón (saltándose el orden sucesorio que correspondía a su padre Juan de Borbón) como su sucesor a la Jefatura del Estado, Carrillo no había tardado en presentar esta designación como una «tentativa de institucionalizar el inmovilismo»[10]. En una posterior declaración oficial el partido afirmó: «Franco ha destruido toda posibilidad monárquica en España, echando por tierra las ilusiones de ciertos sectores que creían posible una monarquía democrática»[11]

Todavía en julio de 1974 una declaración del Comité Central decía: «Pero la cesión de poderes a Juan Carlos, antesala y comienzo de la «monarquía del Movimiento», va contra todo lo que siente y desea la España de hoy. Es, pura y simplemente, la continuación del franquismo sin Franco. Con el agravante de que la figura de Juan Carlos es discutida dentro y fuera del Régimen; no tiene la autoridad que tuvo Franco. Juan Carlos será o un dictador o una marioneta manejada por otros, sin los condicionamientos históricos que han hecho posible la larga pervivencia del poder dictatorial del Caudillo. [...] Y lo que es peor: un prisionero voluntario, consentido, para ello no ha dudado en atropellar el orden de la sucesión dinástica, marginando a su propio padre»[12]

Durante un tiempo el PCE aceptó que la única posibilidad de restauración monárquica con garantías democráticas, —tal y como habían sugerido los soviéticos— descansaba en Juan de Borbón. La Junta Democrática intentó negociar con el padre de Juan Carlos para que fuera él quien acaudillase el organismo opositor. Trevijano y Calvo Serer, fueron bien recibidos

en el entorno de Estoril, donde residía el pretendiente Juan de Borbón, intentando convencerlo de que se sumara a la alternativa democrática.

La idea era que el heredero «legítimo» al trono, padre de Juan Carlos, respaldara en un documento una política unitaria por las libertades. El pretendiente a la corona haría al diario *Le Monde* una declaración solemne a la que se sumarían diversos dirigentes de la oposición. Los principales organizadores de la trama, además de Trevijano y Carrillo, eran Calvo Serer, Andreu Abelló en Cataluña y José María Lasarte en Euzkadi. Todo estaba previsto, cuando por mediación de Luis María Ansón y Sainz Rodríguez se enteró Juan Carlos y en un encuentro en Mallorca le afeó a su padre que le quisiera arrebatar el trono y le dijo que la maniobra nunca sería consentida por el ejército.

Tiempo después, desde la amargura y el desengaño, Juan de Borbón le confesará a su estrecho colaborador y amigo Víctor Salmador —«a mi hijo le han puesto en el trono los franquistas. A mí no me han dejado ya más que ser "el Rey de los rojos". Comprenderás que tampoco es eso. ¡El Rey de los rojos! Tampoco puedo aceptar eso»[13]

Todavía en el verano de 1975 Carrillo afirmaba: «Si Juan Carlos tuviera un mínimo de inteligencia y de coraje político —por no hablar ya de la dignidad personal que debería ostentar quien quiere encabezar un país y una institución— haría las maletas, se reuniría con su padre y renunciaría a la sucesión franquista, remitiéndose a la voluntad popular»[14]

Sin embargo, a finales del invierno de ese mismo año, después de la reunión secreta de Bucarest, las cosas empezaron a cambiar en el PCE respecto al sucesor propuesto por Franco.

El 2 de abril de 1976, en París, en una rueda de prensa, Santiago Carrillo, apuntó ya: «Si por un milagro el rey (se refería a Juan Carlos) aceptara la consulta al pueblo... en ese caso no seríamos un obstáculo». Un mes después, el 11 de mayo, fue el mismo Comité Ejecutivo del PCE el que declaraba solemnemente que la ruptura debía pactarse con el Ejército, la Iglesia y los banqueros, «una formulación graciosa —dice Gregorio Morán— porque era tanto como si un partido incluyera en su programa que el socialismo debía construirse con las multinacionales, las embajadas occidentales y la colaboración inestimable del Vaticano»[15]

De lo que se trataba realmente era aceptar que no iba a haber ruptura y que la reforma se debía negociar sobre un presupuesto inamovible: la figura de Juan Carlos de Borbón como rey de España.

Como es lógico será el Secretario General del partido quien, desde comienzos de 1976, introduzca un matiz léxico que marcará el camino diferente que la dirección del partido ya había asumido, así se empezará a hablar de «ruptura pactada». Ya no se hablará más de «ruptura democrática» a secas. Como explicó en su momento Raúl Morodo, un destacado miembro de la Platajunta, el término ruptura pactada no era más que un modo diplomático para girar de ruptura a reforma sin necesidad de rasgarse las vestiduras y conmover los ánimos de los militantes que estaban embarcados en otra dinámica.

Desde diciembre de 1975 hasta febrero de 1976 se produjo en casi toda España un fuerte movimiento huelguístico, a la vez reivindicativo y político. El propio Ministerio de la Gobernación reconoció que se habían declarado 17.455 huelgas laborales solo en el primer trimestre de 1976, lo cual reflejaba a las claras la esterilidad del decreto ley que las regulaba, puesto que se producían al margen de la normativa legal. Mal que les pesara a las autoridades, la toma de conciencia obrera crecía en casi todas las provincias españolas.

Nada menos que 350.000 trabajadores se pusieron en huelga en Madrid el 14 de enero de 1976. Desbordado el sindicalismo oficial. El epicentro de la conflictividad se produjo en sectores tradicionales como el metal o la construcción, pero con la participación añadida y estratégica de empresas públicas de transporte y comunicaciones (Telefónica, Renfe, Correos, Metro de Madrid) y la novedosa incorporación a la protesta de trabajadores de banca o seguros, con patios de operaciones ocupados por huelguistas que celebraban en ellos asambleas masivas. La ciudad se quedó, sucesivamente, sin taxis, sin metro y sin correspondencia. Madrid, que ya se había convertido en 1975 en la quinta provincia más conflictiva, algo históricamente sin precedentes, vio como una oleada de paros y movilizaciones la atravesaba de una punta a otra en los primeros meses de 1976.

En Cataluña se produjeron también amplias movilizaciones. Cabe destacar la huelga de FECSA, que se extendió prácticamente por las cuatro provincias. De igual modo, la policía llegó a entrar a caballo en la Seat, la mayor empresa española del momento; era la primera vez que esto sucedía en las

instalaciones de una factoría. Ciudades como Sabadell quedaron totalmente paralizadas. En Telefónica se sucedieron las concentraciones, y la inactividad fue total en el puerto barcelonés. Los barcos se vieron obligados a utilizar otros amarres del Mediterráneo para sus operaciones de carga y descarga. Hasta los quirófanos del hospital de Sant Pau solo atendieron los casos más urgentes: la huelga vino provocada por desestimar la empresa las reivindicaciones de los anestesistas. Sirva como ejemplo de lo sucedido en otras zonas de Cataluña, el Bajo Llobregat, donde pararon desde transportistas a enseñantes y funcionarios municipales.

La conflictividad laboral se centró en dos asuntos claramente relacionados: los convenios colectivos y el Decreto de Congelación Salarial. Como los trabajadores intentaban, si no mejorar, al menos mantener su nivel de vida, que se estaba deteriorando aceleradamente debido al proceso inflacionista y la escalada de precios, surgieron las plataformas reivindicativas, las concentraciones en las empresas, las marchas por los polígonos, las asambleas y, finalmente, las huelgas. Pero estas huelgas que tenían un origen económico terminaban por convertirse en movilizaciones que pedían cambios políticos. Tenía razón el gobernador civil de Pontevedra cuando informaba que «las huelgas por motivos económicos, aunque a primera vista tienen una virtualidad puramente materialista, su incidencia en el campo político es evidente»[16]

Esas movilizaciones, cautamente dirigidas por el PCE, enfrentaban al Gobierno Arias Navarro, que la monarquía había heredado de Franco, ante el dilema de recurrir a la represión, como era tradicional, o acelerar los proyectos de cambio y reforma. La incapacidad del «Carnicerito de Málaga», —como motejaban a Arias por su papel como fiscal tras la guerra en esa ciudad andaluza— para llevar a fondo esta última alternativa quedó clara tras los sucesos de Vitoria y Montejurra.

En Vitoria, a comienzos de marzo de 1976, después de una larga y dura huelga, la policía cargó contra una asamblea de obreros con el resultado de tres muertos y numerosos heridos. En Montejurra (mayo de 1976), la fracción ultraderechista del movimiento carlista, con el consentimiento de la Guardia Civil, del gobernador de Navarra y del Ministerio de Gobernación, ocupó la cima del monte, escenario tradicional de una fiesta carlista, disparando sobre los asistentes y causando dos muertos y más de veinte heridos.

A comienzos del verano de 1976, Torcuato Fernández Miranda y el núcleo reformista del franquismo lograron forzar la dimisión de Arias Navarro y colocar al frente del Gobierno a Adolfo Suárez. Protegido de Carrero Blanco, con quien fue director de la poderosa TVE, Suárez había sido también ministro del Movimiento con Arias. Él mismo se definía como «un chusquero de la política» y no se sentía identificado con ninguna opción que no fuese el medro personal y la de poner a salvo los intereses de la clase a la que representaba.

Su nombramiento fue bien acogido por la oposición, que creyó ver en su discurso de investidura un posicionamiento más abierto que el de su antecesor. El Comité Ejecutivo del PCE, tras la caída de Arias, a finales de junio, dio a conocer una declaración en la que decía renunciar a una política de «todo o nada» y defendía la necesidad de una «ruptura democrática pactada» en los límites propuestos por Coordinación Democrática.

Para el partido había llegado el momento de emerger a la superficie como un protagonista destacado de todo lo que estaba sucediendo. El 28 de julio, se celebró en el teatro Delle Arti de Roma el pleno del Comité Central del PCE. Para los comunistas españoles no era una reunión cualquiera, sino la presentación en sociedad y a cara descubierta de los máximos dirigentes del partido, amparados por el PCI, el Partido Comunista más potente de la Europa occidental, y delante de periodistas provenientes de todo el mundo.

En este cónclave comunista, la esperada intervención de Santiago Carrillo sirvió para acentuar aún más la estrategia de moderación. Su discurso político marcaría en buena medida el rumbo que el PCE debía seguir en los procelosos meses posteriores al verano de 1976. Para Carrillo, había una serie de puntos sobre los que la oposición no podía ceder: congelar la Ley de Asociaciones, propuesta por Arias y que suponía el continuísmo, constituir un Gobierno Provisional, convocar elecciones constituyentes, marcar los plazos de ese Gobierno Provisional, proclamar una amnistía general y constituir gobiernos autónomos en Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero al mismo tiempo que seguía exigiendo la constitución de un Gobierno Provisional Carrillo quería mostrar ante el mundo el talante moderado del partido haciendo un canto al liberalismo. «No vacilamos en asumir el término liberalismo en su acepción más popular: aquella que se refiere a la tolerancia, al respeto a las ideas y creencias del individuo, al sentido que este término tenía en nuestro país a principios del siglo XIX, como sinónimo de oposi-

ción a la reacción absolutista y al yugo extranjero y, por extensión, de oposición a todo lo que es conservador...»[17]

Frente a esa moderación iba a presionar el movimiento de masas. La oleada de huelgas que se habían producido aquel invierno y que seguían produciéndose, animaban a las bases de las organizaciones sindicales a plantear abiertamente su desafío al franquismo. Sin embargo, sus respectivas direcciones, controladas en el caso de UGT por el PSOE y en el caso de CC OO por el PCE, sostenían una postura mucho más matizada al respecto, al tiempo que mantenían una sorda rivalidad.

Sobre este panorama de desunión actuó la presión de las bases que demandaban una intensificación de las luchas y una mayor unidad de acción, y tuvo que ser la propuesta de USO, un pequeño sindicato de origen cristiano, el que precipitara una toma de postura de las otras centrales sindicales sobre esas demandas.

El 22 de julio de 1976, UGT, USO y CC OO decidieron constituir una Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), que se propuso hacer frente al deterioro de las condiciones laborales efecto de la crisis económica. Desde que se habían iniciado las luchas, los empresarios venían abogando por una nueva ley laboral que acabara con lo que ellos llamaban «legislación paternalista», cuya máxima expresión era la Ley de Relaciones Laborales y, sobre todo, con su artículo 35, que impedía el despido por motivos injustificados. Esta medida, pensaban los empresarios, les serviría para deshacerse de los trabajadores más díscolos, amparados en muchas ocasiones por su condición de enlaces sindicales del Sindicato Vertical, lo que convertía su despido en más dificultoso.

Finalmente, el Consejo de Ministros del 8 de octubre de 1976 aprobó la suspensión del artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales junto con un paquete de medidas económicas muy del agrado de los empresarios. Esa fue la chispa que encendió los ánimos de los sindicatos, y la COS decidió entrar en acción con una jornada de paro general para el 12 de noviembre de 1976. Esa huelga general, a la que estaba llamada toda la clase trabajadora del país, iba a ser la única convocatoria de esas características a lo largo de toda la Transición.

Ese llamamiento podía ser la oportunidad para que el PCE viera materializarse la Huelga Nacional Pacífica, que venía preconizando desde el año

1956, y que debía preceder a la caída del franquismo. Pero la dirección del PCE no tenía la más mínima intención de que se asociara esa vieja consigna con la huelga del día 12. Es más, en esos momentos, el Secretario General del Partido Comunista ya había optado por no desmarcarse del conjunto de la oposición. Tampoco el PSOE estaba dispuesto a que nadie creyera que la huelga general tenía una finalidad política. La movilización solo debía de servir como elemento de presión para avanzar en las negociaciones con el Gobierno Suárez. Por tanto, para los dos principales partidos obreros no se trataba de forzar la ruptura, sino de apuntalar el pacto.

De hecho, el llamamiento eludió el término «huelga» para quedar reducido en su convocatoria a un paro de 24 horas, circunscribiendo sus motivaciones a reclamaciones puramente laborales directamente relacionadas con las medidas económicas del Gobierno. En la convocatoria no se hacía mención alguna ni a la ruptura democrática, ni a los objetivos políticos defendidos por la oposición y reclamados por las bases sindicales, solo se aludía a «que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno suponían un grave atentado a nuestros intereses y es preciso que los trabajadores demos una respuesta con una movilización masiva, unida, responsable y pacífica»[18]

La huelga del día 12 de noviembre tuvo una respuesta importante (las cifras de huelguistas variaron según las diversas fuentes: para los sindicatos convocantes cerca de 2 millones y para el Gobierno no más de 500.000), pero en general se consideró un fracaso; sobre todo si se tiene en cuenta que pocos días antes, el 27 de septiembre, había tenido lugar en el País Vasco y Navarra una huelga que fue apoyada por cerca de 600.000 trabajadores de un censo laboral no superior a 900.000, y que la movilización en este caso había sido eminentemente política, pues la convocatoria se hizo para conmemorar la fecha de las ejecuciones de miembros del FRAP y ETA el año anterior, poniendo de manifiesto como los trabajadores podían movilizarse más por consignas políticas que por las puramente sindicales.

De hecho, la conflictividad laboral en ese otoño-invierno había descendido en picado respecto al semestre anterior, contabilizándose menos de cuatrocientas huelgas, a pesar de padecer el país una inflación galopante del 19,7%. En ese frenazo del estallido reivindicativo sin duda influyeron distintos factores, pero no fue menor la actitud de los grandes partidos obreros, cuyas direcciones mantenían ya contactos con el Gobierno explorando la

posibilidad de un pacto y haciendo lo posible por frenar o moderar las movilizaciones espontáneas.

El Gobierno, que era consciente de este acercamiento del PCE a su estrategia reformista, consideró la huelga del 12 como un fracaso de la oposición. La movilización no consiguió paralizar el país, ni que se retiraran los decretos que implantaban el despido libre y la congelación salarial. En palabras del ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa, «al hacer fracasar el último gran cartucho de la oposición contra la reforma política, que era la huelga general, el Gobierno había demostrado que la ruptura era una quimera»[19]

La clave radicaba en que Suárez, guiado por Torcuato Fernández Miranda, había impulsado un texto de reforma política que debía proponer a votación, primero a las Cortes franquistas y luego, en referéndum, a todo el país. El obstáculo de las Cortes franquistas, tan temible en apariencia por la necesidad de que estas, en donde se hallaban sobrerrepresentados los elementos más extremistas de la derecha, votasen afirmativamente el proyecto, se salvó con relativa facilidad. El resultado del referéndum celebrado el día 15 de diciembre fue lo suficientemente contundente para avalar las palabras de Martín Villa. A pesar de la consigna de abstenerse, a la que había llamado tibiamente la oposición, votaron en el referéndum un 77,28% de los convocados a las urnas, aprobando la propuesta del Gobierno franquista un 94,70% de los participantes.

El proceso quedaba sentenciado: la negociación del cambio político se haría sobre las bases decididas por el franquismo reformista, y la oposición tendría que aceptarlas íntegramente. No iba a haber ruptura, ni iba a haber Gobierno Provisional, ni amnistía plena, ni legalización de los partidos de modo universal, solo iba a haber negociaciones con el Gobierno Suárez, que iba a terminar por imponer su proyecto en toda su integridad. Al PCE sólo le quedaba negociar su legalización.

El 23 de noviembre de 1976 se había reunido por primera vez en España el Comité Ejecutivo del partido en sesión plenaria. El encuentro tuvo lugar, conservando las normas de clandestinidad, en un molino acondicionado como casa de campo en la provincia de Guadalajara. En esa reunión se abordó la postura del partido ante el referéndum de Reforma Política que se iba a votar días después, pero tuvo un significado mucho más profundo

ya que en ella se asumió por toda la dirección del partido abandonar la estrategia de ruptura por la que se había agitado durante tanto tiempo. Santiago Carrillo, que mantenía contactos regulares con Suarez desde el mes de septiembre a través de intermediarios, afirmó que no se podía votar en contra de la Ley de la Reforma, aprobada por las Cortes franquistas, porque la gente entendería que se votaba contra la libertad. «La reforma Suárez abre un campo de juego y no hay otro y tenemos que jugar en él tratando de ensancharlo, concentrando nuestro esfuerzo en las libertades y retirando otras exigencias de la primera línea del papel»[20]

Pero ese planteamiento implicaba mucho más. «No podemos seguir luchando contra el régimen franquista —dijo Carrillo— tras la aprobación de la reforma… desde el momento en que se ha aprobado la reforma no hay régimen franquista, aunque tampoco (haya) democracia»[21]

El Secretario General admitió que esta postura podía sembrar cierta confusión, no obstante añadió: «Pero a las elecciones iremos llevando la bandera republicana y los estatutos de autonomía... porque en dos meses de libertades para los partidos cambiaremos este país»[22]

Pero tampoco la bandera republicana se iba a salvar.

Lo que empeñaba al PCE en aquellos momentos era su legalización y para acelerarla había que plantear desafíos que colocaran al régimen ante la tesitura de aceptarla o recrudecer la represión. En esta línea, Santiago Carrillo, que estaba ya en España clandestinamente, decidió dar un golpe de efecto. El 10 de diciembre convocó una rueda de prensa clandestina en Madrid ante más de cincuenta periodistas nacionales y extranjeros. Su propósito era muy claro: el PCE poseía medios suficientes para deslegitimar unos comicios en los cuales no pudiese participar. Allí apareció Santiago Carrillo rodeado de sus más estrechos colaboradores: Pilar Brabo, Ramón Tamames, Jaime Ballesteros, Manuel Azcárate, etc.

El Gobierno Suarez se encontró frente al hecho consumado de tener que detener al principal responsable de un partido ilegal que se estaba moviendo con impunidad en el interior del país. La detención se retrasó hasta el 22 de diciembre, tiempo suficiente para que el partido pudiese preparar una campaña nacional e internacional pidiendo su libertad. Mantener a Carrillo en prisión o someterlo a juicio habría minado enormemente la credibilidad de

Suárez, y al cabo de una semana, el ex Secretario General del Movimiento, ordenó la liberación del Secretario General del PCE.

Durante el mes de enero de 1977, Carrillo y Suárez negociaron a distancia y a través de José Mario Armero, un hombre de confianza del gobierno, y Jaime Ballesteros, miembro del aparato del PCE en Madrid. El partido presionó para que se autorizaran sus mítines; el Gobierno, por su parte, instó al PCE a aprovechar su influencia en Comisiones Obreras para que frenara las movilizaciones que se seguían produciendo.

La oposición, para llevar a efecto las negociaciones con el Gobierno Suarez, había constituido la Comisión de los Nueve, que se presentó como voz de todas las fuerzas opositoras y en la que, en efecto, estaban representados desde los liberales hasta los maoístas. Ahora la oposición iba a la Moncloa a negociar lo que durante años se habían considerado condiciones previas a cualquier negociación (la amnistía, la legalización de todos los partidos y sindicatos, etc.). La aceptación de los márgenes impuestos por el franquismo reformista no podía ser más evidente. El carácter público de las negociaciones, que había sido siempre una promesa de la oposición, quedó también difuminado y esta se limitó a dar su visto bueno a la ley electoral y a explorar las intenciones del Gobierno, que sabiéndose fuerte era reticente a cualquier concesión. Más aún, esa actitud de las fuerzas opositoras de decidida colaboración habría de reforzarse tras los acontecimientos de la llamada «Semana Negra de Madrid».

Del domingo 23 de enero de 1977 al viernes 28 se iban a suceder los siguientes acontecimientos: el 23, un estudiante que participaba en una manifestación proamnistía fue asesinado por un grupo de ultraderechistas; el 24, la policía mataba en una carga a otra estudiante; el mismo día 24, un comando ultraderechista asesinaba a cinco personas en un despacho de abogados que trabajaban para Comisiones Obreras; el 27, comandos del GRAPO (organización terrorista con ideología de extrema izquierda y profundamente infiltrada por la policía) mataban a tres policías, y el 28, a dos más.

El entierro de los abogados laboralistas asesinados en su despacho de Atocha lo convirtió el PCE en una manifestación de fuerza y moderación. Decenas de miles de personas acompañaron al cortejo en un profundo silencio, mientras un servicio de orden organizado por el partido, muy supe-

rior a la policía desplegada a lo largo del recorrido, sirvió para transmitir una imagen de disciplina y mesura que según la dirección del partido debía ser apreciada por el Gobierno. La conclusión que el PCE extrajo de esos días fue la necesidad de dar un mayor margen de maniobra a Suárez sin presentar alternativas propias. Una actitud repetida con ocasión de todos los futuros actos terroristas que, con regularidad, se sucedieron siempre en vísperas de los acontecimientos importantes, o tan pronto como la oposición intentaba ejercer una mínima resistencia.

Los contactos que se venían manteniendo entre Carrillo y la presidencia del gobierno a través de Armero y Ballesteros, desembocaron el 27 de febrero una reunión secreta, que duró varias horas, entre el Secretario General del PCE y Suárez. Lo que realmente trataron en esa entrevista sólo se puede deducir de los acontecimientos que fueron ocurriendo a posteriori, ya que no hubo testigos y lo que trascendió tiempo después debe ser puesto entre paréntesis. Lo cierto es que Carrillo dio su versión e informó a la dirección del PCE de que no podía contar todo lo que se había hablado porque era un «secreto de Estado»[23]

Tras la «legalización» de la figura del Secretario General del PCE, al que habían puesto en libertad sin procesarlo, Suárez tenía muy difícil impedir que se celebrara una cumbre eurocomunista en Madrid. Ese encuentro era una nueva baza que Carrillo jugaba con la finalidad de presionar al Gobierno para que legalizara el partido. Suarez era consciente de que prohibir la entrada en el país de los secretarios generales de los dos partidos comunistas más poderosos de occidente podía provocar un enorme escándalo internacional y restaría credibilidad a la política reformista que estaba encabezando. Por tanto, aceptó que, con plena cobertura de los medios de información, Enrico Berlinguer del PCI y Georges Marchais PCF, se reunieran con Carrillo el 2 de marzo en el hotel Meliá-Castilla de la capital.

Desde que en julio de 1975 las direcciones del PCE (Carrillo) y el PCI (Berlinguer) se habían reunido en Livorno para consensuar una nueva estrategia comunista, el término «eurocomunismo», del cual ya se hablaba desde 1970, se convirtió en un nuevo concepto político en el movimiento comunista internacional. Se atribuye la paternidad de la palabra a un periodista milanés de origen yugoslavo, Frane Barbieri, de *Il Giornale Nuovo*, un periódico de derechas.

En esencia, el eurocomunismo venía en primer lugar a señalar un distanciamiento de la URSS, a admitir el pluripartidismo, negado en los países del «socialismo real», a aceptar las libertades básicas y la dinámica del juego parlamentario para alcanzar el socialismo, rechazando de forma explícita consignas como: dictadura del proletariado. La fórmula propuesta para la sustitución del Estado burgués sería una democracia ampliada, con fuerte peso de las organizaciones sindicales e instituciones de democracia directa. De hecho, cuando el VII Congreso de la Internacional Comunista impuso a los partidos comunistas la política de los Frentes Populares ante al auge de los fascismos, los comunistas fieles a la Tercera Internacional entraron en una dinámica de defensa del Estado burgués, como se evidenció en el caso español durante la Guerra Civil. A partir de ese momento, la participación de los comunistas en las instituciones de este Estado, y sus éxitos relativos en la esfera política y sindical, generaron, cada vez más, una tendencia integradora de las direcciones de los distintos partidos comunistas en el modelo de democracia burguesa.

En el caso español, y en aquella coyuntura concreta, su declaración de eurocomunismo tenía como finalidad tranquilizar a la burguesía autóctona. El partido iba a aceptar las reglas del juego parlamentario sin cuestionar ese modelo y sin cuestionar el sistema económico y social.

El Partido Comunista francés de Marchais también aboga por esta nueva idea, en la independencia nacional de cada partido respecto del PCUS soviético, y en la identidad entre socialismo y democracia, aunque su adhesión al eurocomunismo era mucho más matizada que en el caso español o italiano. Sin embargo, el Partido Comunista Portugués la rechazaba de modo explícito. «Siendo Portugal un país europeo occidental, el PCP, afirma por su parte que ese tal "comunismo europeo" no se adapta a la realidad portuguesa»[24]

En una rueda de prensa, ante más de 300 periodistas, Marchais, Berlinguer y Carrillo, subrayaron los postulados básicos de la nueva estrategia que se resumían en que: la «vía al socialismo» debía ser pacífica, democrática y nacional. El mismo socialismo debía ser democrático rechazando en particular la «dictadura proletaria». También se proponían la «desestalinización» y democratización de la vida interna del partido, así como la renuncia a la hegemonía soviética sobre el movimiento comunista internacional.

Pero para el Gobierno Suárez esto no era suficiente. No se trataba solo de que el PCE aceptara el modelo de democracia occidental y que se comprometiera a no poner en peligro el sistema capitalista, sino de que adaptase ese modelo a los límites planteados por los reformistas del franquismo.

Al final del encuentro con Suarez, Carrillo declaró, sin haberlo consultado con el Comité Ejecutivo, que el PCE aceptaba también la existencia de bases estadounidenses en España, pensando que era otro paso hacia la legalización.

Ya a principios de noviembre de 1975, consciente de que Franco estaba viviendo sus últimos días, Henry Kissinger —Secretario de Estado por aquella época con el presidente Gerald Ford— envió al embajador norteamericano en Madrid, Wells Stabler, varias indicaciones sobre cómo afrontar la nueva etapa que se avecinaba en España. En ellas se recordaba al embajador que «el objetivo prioritario de los Estados Unidos en España sigue siendo el de fortalecer el conjunto de nuestras relaciones políticas y de seguridad con una España más estrechamente unida a la comunidad Atlántica». Kissinger vaticinaba: «la transición estará en manos de gentes esencialmente conservadoras», y no ocultaba el hecho de que «veríamos una participación comunista en un futuro gobierno español como un desarrollo poco saludable, que inevitablemente dañaría los lazos con nosotros y con las instituciones de Europa Occidental»[25]

Los Reyes de España visitaron Washington DC en junio de 1976, y Kissinger trasladó un largo informe al presidente Ford en el que analizaba minuciosamente la evolución política española. El Secretario de Estado no dudaba en manifestar que «nuestro propósito con esta visita es demostrar nuestro pleno apoyo al rey como la mejor esperanza para la evolución democrática con estabilidad que protegerá nuestros intereses en España»[26]

Finalmente, tras una serie de medidas dilatorias, el Gobierno Suarez se decidió a llevar a cabo la legalización del PCE. Para facilitarla, los estatutos del PCE presentados ante la Junta de Fiscales Generales del Tribunal Supremo debieron ser modificados. El marxismo-leninismo, el internacionalismo proletario y la lucha por destruir el capitalismo se suprimieron en el texto remitido. Y, a pesar de que Suarez tuvo que afrontar dificultades, no puede decirse que las resistencias fueran insuperables, ya que la crisis no llegó más allá de la dimisión del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga,

y de una nota del Consejo Superior del Ejército, declarando el malestar entre los mandos y señalando la línea roja que no se podía franquear: «la unidad de la Patria, su Bandera, la integridad de las Instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas». Todo ello a salvo según estaba previsto por los reformistas y aceptado por el Secretario General del PCE. Tanto al rey como a Suárez les preocupaba que el grado de sentimiento anticomunista en el seno del Ejército constituyera un riesgo de golpe militar. Sin embargo, ambos sabían que sin la legalización del PCE no sería creíble el proceso de cambio en España.

El PCE presentó su legalización como un triunfo resultado de su buen sentido, su sensatez y su realismo, es decir, como un triunfo de su dirección, que astutamente había logrado superar el complejo de obstáculos a los que se enfrentaba. Es indudable que aceptar esta versión era la mejor forma de justificar las enormes concesiones que el PCE hizo. Sin embargo, si partimos de una valoración distinta de la relación de fuerzas entre las clases, de la imposibilidad de llevar a efecto el cambio democrático en España sin la presencia y legalidad del PCE, esas concesiones, lejos de ser una hábil maniobra, más parecían una renuncia a luchar por la profundización de la democracia y un aval al modelo impuesto por la burguesía. De hecho, en el Comité Central del partido celebrado pocos días después de su legalización, se escenifico, de modo ostentoso, un aspecto simbólico, pero fundamental, de esa renuncia, mostrando la bandera monárquica junto con la roja.

El primer pleno legal del Comité Central se había programado el 14 de abril, coincidiendo con el cuarenta y cinco aniversario de la fundación de la Segunda República, sin embargo, al día siguiente, se anuncio que el PCE abandonaba la bandera republicana. Suárez estuvo pendiente del teléfono esperando que se le comunicara ese gesto. Como dijo el cronista de la legalización: «los comunistas pasaban por los ojos de dos agujas que parecían imposibles: el reconocimiento de la bandera bicolor y la aceptación de la monarquía. Y, además, públicamente y con alarde. Los comunistas doblaban las cervicales ante la Reconciliación Nacional»[27]

El abandono del compromiso del PCE con una república, o al menos con un referéndum sobre el futuro marco constitucional, conmocionó a muchos miembros de las bases del partido. Esa pérdida de identidad republicana la iba a arrastrar la organización durante décadas. Por añadidura, el hecho de que Carrillo hubiera entablado negociaciones y tomado decisiones

sin debatirlo con el resto de la ejecutiva, y mucho menos con el Comité Central, plantó las semillas de un grave conflicto futuro.

En la misma línea, también debemos reseñar que después de alcanzada su legalización, otros partidos de la izquierda como el PTE, ORT, MCE y LCR, que en algunos casos formaban parte de los organismos unitarios de la oposición, no fueron legalizados; sin embargo el PCE no volvió a poner en duda la legitimidad de elecciones, y Sánchez Montero llegó a apuntar que su celebración se consideraba como: «Lo más revolucionario en este momento concreto en España, lo que más va a contribuir a lograr la legalización de todos los partidos»[28]

Entre quienes sostienen que todo esto se debía a la existencia de un pacto previo entre Carrillo y Suárez se encuentra Manuel Azcárate. Éste último escribiría después: «De hecho, todos nosotros fuimos en esa etapa tan importante unos peones de juguete. Sobre las posiciones importantes, Carrillo ya había asumido compromisos con Suárez (…) Reducido a sus términos más escuetos, el pacto entre Suárez y Carrillo consistía en comprar la legalidad del PCE a cambio de que éste, abandonando convicciones muy arraigadas, aceptase la monarquía con su bandera y toda su historia a cuestas. No era un trato equitativo. La legalidad del PCE quizá hubieran podido retrasarla los elementos más reaccionarios, pero era imposible negarla sin un retorno a los métodos del franquismo»[29]

Por otra parte, el reformismo franquista sabía que la legalización del PCE no iba a entrañar problemas en la marcha de la reforma si lograba integrarlo en su proyecto aceptando las condiciones que se le imponían. En ningún momento le preocupó que los resultados electorales pudieran colocarle como vencedor, ni siquiera como primer partido de la oposición. Por el contrario, sabían que con la legalización, el PCE sería un elemento más en un abanico de partidos muy amplio, que abarcaría a la vez formaciones nacionales, regionales y autonomistas de tendencias variadas.

Juan José Linz, el sociólogo del franquismo había hecho proyecciones de resultados del PCE tomando como referencia los del PCI en Italia posfascista.[30] El modelo hipotético que construyó sobre estas premisas atribuía el 40,9 % de los votos a la izquierda comunista y socialista de los cuales el 25 % irían al PCE, en tanto que la derecha obtendría el 40,5 % de los votos. Sobre esa hipótesis, y teniendo en cuenta los nacionalismo conservadores

en Cataluña y país Vasco, el «riesgo» electoral del comunismo en España era remoto.

El partido, con convicciones muy arraigadas y distintas a esos sondeos, preparó con enorme entusiasmo las elecciones a Cortes constituyentes, demostrando en los numerosos mítines su capacidad de organización y movilización al concentrar a miles de personas que aclamaban a su Secretario General mientras que los servicios de orden expulsaban a cualquiera que pretendiese hacer ondear una bandera republicana.

Un paso propagandístico en la preparación de los comicios se dio el 25 de mayo con la presentación en Madrid del libro de Carrillo *Eurocomunismo y Estado*, que había escrito en los meses previos a su detención. La obra era una vulgarización de las tesis eurocomunistas con escasa profundidad teórica, y pensado sobre todo para difundir la nueva imagen del partido. Pero de nada sirvió. Los resultados de las elecciones fueron decepcionantes y dieron la victoria a UCD, con un 34,74% de los votos (6.220.899 votos) y 165 escaños, lo que le confería al franquismo reformista una mayoría relativa. No obstante, lo más llamativo de estos resultados no fue la victoria de UCD, sino el respaldo obtenido por el PSOE, que ya se afirmaba como la primera fuerza de la izquierda, dejando muy atrás al partido comunista que había llevado el peso de la lucha contra la dictadura en los últimos quince años.

De hecho, el fracaso del PCE no tenía parangón con los resultados obtenidos por otros partidos comunistas del área mediterránea por las mismas fechas. Si tomamos como elemento de comparación el apoyo electoral logrado por los comunistas portugueses o griegos, que acababan también de salir de sendas dictaduras, vemos que el Partido Comunista Portugués, reacio a formulaciones eurocomunistas, obtenía entorno a diez puntos porcentuales más que el PCE, y en Grecia, donde la transición a la democracia se había hecho bajo un estrechísimo control de la derecha más conservadora y donde los comunistas se presentaban a las elecciones completamente divididos, el porcentaje total obtenido por ellos superaba al del PCE en tres puntos. Es más, mientras el PSOE aparecía como un partido con relevancia en todo el territorio del Estado, el PCE no conseguía una presencia real más que en algunas regiones, siendo un factor irrelevante para la política en otras muchas.

Por parte de los comunistas se atribuyó este fracaso electoral a dos factores: la tardía legalización del partido, que no le habría permitido influir adecuadamente sobre el proceso electoral, y la influencia de la propaganda denigratoria a que había sido sometido durante el franquismo, pero ambos eran argumentos escasamente convincentes. En efecto, aunque la legalización del PCE se hizo con un retraso de dos o tres meses en relación con la del PSOE, no era un lapso de tiempo suficiente como para justificar una diferencia tan grande. De hecho, desde 1976, el PCE venía gozando de una cierta alegalidad que le permitía exponer, más o menos, abiertamente sus propias alternativas. Por lo que hace al indudable desprestigio al que la dictadura había sometido al PCE, no es menos cierto que estaba compensado por haber mantenido durante los últimos quince años el peso decisivo en la oposición al franquismo.

Las explicaciones han de buscarse en otra parte. Ante todo, el fracaso electoral se debió en buena medida a la moderación, cuando no al abandono, de la política de presión que había caracterizado siempre la lucha del PCE. Los fantasmas que asediaron durante esta etapa a la dirección del partido fueron fundamentalmente dos. Por un lado, el peso de la imagen autoritaria y prosoviética que la propaganda franquista le había confeccionado, y que el partido quería superar a toda costa para acercarse a las nuevas clases medias. Lo que el PCE deseaba transmitir es que era, ante todo y sobre todo, un partido democrático que luchaba fundamentalmente por la instauración de la democracia, y que en esa lucha buscaba alianzas con una burguesía progresista deseosa de sacudirse la dictadura, sin tener en cuenta que esa burguesía progresista realmente estaba alineada con UCD, o confiaba mucho más en el PSOE que en el PCE.

Por otro lado, la dirección estuvo también constantemente obsesionada por no provocar una reacción golpista de los sectores más integristas del régimen, amenaza esgrimida con frecuencia por unos y otros a modo de chantaje al que el partido terminó rindiéndose, sin llegar a comprender cuál era realmente la dinámica del proceso.

La dirección del PCE intentó salir al paso de esos temores a golpe de gestos moderados. Fue esa moderación, y su obsesión por ser considerado una fuerza responsable, junto con otros factores, lo que contribuyó en los primeros meses tras la muerte de Franco a hacer inviable la ruptura, facilitando así la labor del franquismo reformista. La huelga general del 12 de

noviembre fue una oportunidad perdida. En ningún momento los partidos obreros ofrecieron una resistencia seria o una actitud desafiante, que tal vez hubiera obligado al Gobierno a posicionarse de modo distinto. La burguesía reformista necesitaba el pacto democrático a toda costa para poder legitimarse, pero trataba de alcanzarlo en las mejores condiciones posibles. Nada permite suponer que no se hubiera visto obligada a ceder en algunas cuestiones de haberse encontrado con una oposición resuelta. Esto es precisamente lo que ni el PSOE ni el PCE nunca trataron de experimentar y lo que impidió que en ningún momento se generase un escenario de auténtica ruptura.

Al fracasar la ruptura, el PCE, con su enorme influencia sobre el movimiento de masas, dejó de ser el eje de la oposición a la dictadura para tener que terminar negociando de modo casi clandestino su propia legalización. Como resultado de esta negociación, el PCE se incorporó al proyecto reformista con su perfil ideológico desdibujado, al renunciar a su republicanismo, y con su capacidad de maniobra muy limitada, al tener que asumir un compromiso tácito de contención frente al movimiento de masas. Pero esta postura, lejos de funcionar como una estrategia de largo alcance que contribuyera a convertirlo en una opción política viable para amplios sectores de la sociedad, fue interpretada por muchos, incluso de sus seguidores, como un instrumento legitimador de su tacticismo, restándole así firmeza y credibilidad.

Aún más grave fue otra consecuencia que se extrajo de la derrota. La dirección consideró que para aumentar su influencia electoral era necesario inclinarse más hacia la derecha. En la reunión del Comité Central celebrada los días 25 y 26 de junio, para valorar los resultados electorales, el Secretario General apuntaba ya, como una de las causas de esos resultados, el que: «Para la mayoría de la opinión pública somos, todavía, una opción extrema. La caricatura del "lobo con piel de cordero" aún consigue efectos»[31], de lo que podía deducirse la estrategia que se iba a imponer.

Por ello, los dieciocho meses que mediaron entre la celebración de elecciones constituyentes y la aprobación de la Constitución estuvieron marcados por el signo del pacto y del consenso. Para el PCE, ante los retos de una situación difícil, producto de la crisis económica y la relativa debilidad del Gobierno, la solución ideal era conformar un gobierno de «concentración democrática nacional», la mejor fórmula para conducir el proceso cons-

tituyente y para abordar la crisis. Con esta propuesta el partido pretendía lograr una influencia política muy superior a la que le conferían los veinte diputados del Grupo Comunista en el Congreso, así como obtener una mayor aceptación social, al presentarse como partido responsable ante una situación que se podía considerar crítica.

Como es lógico deducir, el gobierno de concentración nunca llegó, pero de nuevo Suarez supo jugar con habilidad para obtener un pacto no explícito entre el reformismo franquista y el PCE que se habría de saldar con un resultado favorable para el primero en el terreno de la relación de fuerzas. Los dos procesos fundamentales en los que se iba a plasmar esa política del «consenso» fueron la firma de los Pactos de la Moncloa, en octubre de 1977, y la elaboración de la Constitución a lo largo de 1978.

La economía capitalista española, que tan espectaculares avances había realizado durante la década de los 60, se hallaba desde 1973 en medio de una complicada crisis en la que incidían tanto factores internacionales como rasgos específicamente autóctonos. La propia inestabilidad política de los dos últimos años había contribuido a la formación de un panorama considerablemente oscuro. Lo cierto era que, desde 1973, la tasa de beneficios de las empresas había descendido, al tiempo que las luchas económico-políticas de esos años habían determinado una creciente participación de los salarios en la distribución de la renta nacional.

Desde que había estallado la llamada «crisis del petróleo», los distintos Gobiernos de la Dictadura habían puesto en marcha ocho «paquetes de medidas económicas» sin resultado alguno. La inflación estaba desbocada: del 17% en 1976 se pasó en 1977 al 27%, y momentos hubo (el trimestre junio-agosto 1977) en que el índice de precios al consumo crecía a un ritmo del 44,8%, frente al 10% de promedio de los países de la OCDE. Las inversiones habían caído en picado, hasta un –4%, y un excedente de capacidad productiva obligaba a las empresas a reducir su producción y aun a cerrar en muchos casos, comenzando así la destrucción masiva de empleo. La estimación real de este último es difícil de establecer, pero no resulta exagerado apuntar que, a fines de 1977, había en España unos 800.000 trabajadores en paro. Ese mismo año, Tamames, el economista del PCE, afirmaba que en los tres últimos años la fuga de capitales había alcanzado la cifra de 200.000 millones de pesetas.

En esa coyuntura, la firma de un pacto económico-social, con todas sus repercusiones políticas, era un imperativo para la derecha, que controlaba el Gobierno pero carecía de mayoría absoluta, y los Pactos de la Moncloa fueron su salvación. Así fue como se firmaron dos acuerdos, uno de naturaleza económica y el otro, política. El primero se llamó «Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía». El segundo, se denominó «Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política». Todos los partidos del arco parlamentario los suscribieron, fueron firmados el 25 de octubre de 1977 y aprobados por el Congreso dos días más tarde. La derecha lograba de este modo la complicidad de las organizaciones obreras en ese plan de estabilización que eran los pactos. No obstante, Manuel Fraga (por Alianza Popular) no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico, mientras que CC OO y la patronal CEOE los respaldaron en su integridad.

En realidad, en cuanto a su contenido económico, los pactos nada tenían de novedoso. Sus medidas eran clásicas dentro de los parámetros del sistema capitalista. Se aceptaba el argumento de la patronal y del Gobierno de que era necesaria la moderación salarial para acabar con la inflación. Mientras se limitaba el crecimiento salarial se establecía una reducción a las empresas de las cuotas a la Seguridad Social. El Estado asumía pasar del 3,5% de la financiación a la Seguridad Social al 20% en un plazo de 5 años. Así mismo, se devaluaba la peseta a fin de mejorar la competitividad de las empresas españolas en el exterior. Y con la excusa de luchar contra el paro se presentaban, por primera vez, una serie de normas que permitían la contratación temporal, sobre todo de jóvenes que no hubieran accedido nunca a un puesto de trabajo. También, por primera vez, se autorizaba el despido de hasta el 5% de las plantillas; y tácitamente se aceptaban unos altos índices de paro sin otra contrapartida que un limitado seguro de desempleo que no abarcaba a toda la población asalariada.

La gran diferencia con el pasado es que ese plan de estabilización era fruto de la negociación con los que ya se presentaban como legítimos representantes de los asalariados. Estos agentes sociales defendieron los sacrificios que exigía el acuerdo económico a la clase trabajadora a cambio de las famosas «contrapartidas» que se saldaban con algunas promesas en el terreno de los equipamientos sociales (creación de 700.000 nuevos puestos escolares) y el control de algunos de los más llamativos focos de corrupción

(la Seguridad Social) o de manipulación política (creación de un comité de control para RTVE).

En la concepción del PCE se trataba de lograr un pacto político con ciertos contenidos económicos que sirviera de marco para la elaboración de la Constitución y como base operativa del gobierno de concentración, que el partido no se cansaba de solicitar sin ningún resultado. Para Adolfo Suárez, al contrario, se trataba de un plan económico que garantizara unos niveles de paz social imprescindibles para llevar a buen término la legislatura sin un acoso de los sindicatos.

El anuncio de la firma de los pactos causó desconcierto entre la militancia comunista. Se trataba de la primera decisión de gran relevancia en la actuación del partido en las instituciones, adoptada sin que los militantes dispusieran de una amplia información y sin debate más allá de la cúpula de la organización. La realidad, como luego reconocería Manuel Azcárate fue que: «a los dos años de los Pactos de la Moncloa era imprescindible reconocer que, en su casi totalidad no habían sido cumplidos por el Gobierno»[32] Sin embargo el PCE, se convirtió en el máximo defensor de estos Pactos.

En la Fiesta de *Mundo Obrero*, la gran fiesta del PCE, Carrillo aclamó los Pactos de la Moncloa como una victoria colosal, e hizo lo propio en un discurso pronunciado en las Cortes el 27 de octubre. La ovación que se llevó de los diputados de la UCD tal vez supuso una satisfacción personal, pero apenas sirvió para aplacar las inquietudes entre los miembros de su propia organización.

El partido basaba esta posición en razones de diverso tipo, pero no se limitaba a considerar los Pactos como un mal menor ante la crisis y sus consecuencias, sino que los defendía como si se tratara de una victoria de la organización. Carrillo, en una entrevista que le hizo *Nuestra Bandera* llegó a afirmar que: «en los Acuerdos de la Moncloa están previstos cambios que pueden ser considerados como estructurales y punto de partida para crear las condiciones para el advenimiento de una democracia político-económica»[33]

Realmente los pactos sirvieron para alcanzar los objetivos de saneamiento capitalista que se proponía la burguesía y no representaron ninguna ventaja para los trabajadores. Según Xavier Tafunell,[34] los beneficios empresariales crecieron, en pesetas corrientes, un 83,7%, entre 1977 y 1981. Esto se logró

moderando las exigencias de los trabajadores, por mediación de sus partidos y centrales sindicales. En esta tarea el PCE se empleó a fondo.

Los militantes actuaron conforme a las decisiones adoptadas por los órganos dirigentes, pero aparecieron muestras de malestar que, si bien no tendrían consecuencias inmediatas, irían acumulándose hasta empezar a manifestarse abiertamente. El veterano militante Víctor Diez Cardiel dirá en una reunión del Comité Central, tiempo después, que en el período de los Pactos de la Moncloa había visto a muchos dirigentes del partido ir a determinadas reuniones a prohibir en la práctica que se hicieran todo tipo de manifestaciones y de huelgas. De hecho, Julio Segura secretario de la Comisión de Teoría Económica del partido decía en aquellos momentos que era necesaria una labor de formación y movilización políticas «para cerrar el paso a fáciles demagogias extra-parlamentarias que debiliten al movimiento obrero planteándole reivindicaciones inalcanzables»[35]

En el otoño de 1979 Comisiones Obreras creyó llegado el momento de convocar una huelga general ante el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la provocación que para ellos constituía el recién discutido Estatuto de los Trabajadores. La respuesta de la dirección del partido fue fulminante: nada de huelgas generales, sería hacer golpismo y enturbiar el clima con el Gobierno de UCD.

Para el PCE los Pactos supusieron el abandono de las viejas formas de lucha mantenidas durante el franquismo, es decir, las movilizaciones en las empresas y la calle, para ser sustituidas por una lucha a través de las instituciones con el objetivo de alcanzar mayores cuotas de poder. Si en la opinión de la mayoría de los analistas de la Transición, los Pactos de la Moncloa fueron un importante apoyo para su consolidación, en su resultado final se tradujeron en el debilitamiento de la capacidad combativa de los obreros, que fueron quienes cargaron con la parte principal de la crisis económica. Se puede afirmar que los Pactos de la Moncloa señalaron el punto y final del relativo protagonismo de la clase trabajadora durante la Transición. Desde entonces, la liquidación del movimiento de masas, que ya se anunciaba antes de las elecciones, fue indiscutible.

El otro gran pacto entre la derecha y la izquierda consistió en la elaboración de la Constitución. Tanto en la forma en que se llevó a cabo cuanto por su contenido, la Constitución buscaba coronar la transición a la demo-

cracia en beneficio del franquismo reformista y en detrimento de la izquierda, buen ejemplo de ello es cómo se solvento el tema de la monarquía y el de su misma sucesión.

Ya en la composición de la ponencia constitucional el PCE desempeñó un papel fundamental y contradictorio. Inicialmente se planteó una ponencia de cinco miembros —tres de la UCD y dos del PSOE—, lo que dejaba fuera al PCE. Santiago Carrillo se propuso convencer a los dirigentes de UCD y del PSOE de que no se podía excluir de la ponencia a los partidos nacionalistas catalanes y vascos, y que sería también un error que no tuviera representación Alianza Popular. Tanta generosidad y visión de Estado, le permitía demandar que tampoco el PCE, que era el tercer grupo en número de diputados del Congreso, podía quedar fuera. Finalmente, con estas argumentaciones, el PCE logró introducir a un ponente del partido, Jordi Solé Tura, pero a costa de facilitar la presencia de dos representantes de las burguesías periféricas, catalana y vasca, y de un representante de AP, lo que posibilitaba formar una mayoría UCD-Alianza Popular, flanqueada por los nacionalistas, algo «de importancia fundamental para la estrategia del debate posterior»[36], según diría el mismo Solé Tura

Con este escenario, el PCE se conformó con haber logrado impedir que la Constitución fuera excesivamente derechista. «Sin la política de consenso, sustentada desde un principio por los comunistas, la Constitución hubiera tenido una orientación hacia la derecha y muchas de las concepciones retrógradas de Alianza Popular, compartidas por la derecha de UCD, estarían insertas en ella»[37], dirá el ponente comunista. Aunque esa política también le generó más de una situación violenta. Uno de los ejemplos más ilustrativos fue cuando Solé Tura, dudó sobre si el partido debía presentar un voto particular en defensa de la República, como sostenían Manuel Azcárate o Pilar Brabo entre otros. El Secretario General se encontraba en ese momento en Barcelona, pero una llamada telefónica sirvió para zanjar el asunto. Carrillo fue tajante, el PCE aceptaba la Monarquía como forma de Estado sin ningún tipo de reparo.

Pero no todas las opiniones de la izquierda fueron coincidentes con este análisis que de la Constitución hacía el PCE. Por ejemplo, Francisco Pereña partía de un análisis de la situación política que se caracterizaba por lo que él denominaba una «democracia muy original» por la pervivencia del aparato represivo del Estado franquista y por el poder político y social de la oligar-

quía. A lo que había que sumar la consolidación de la monarquía como fruto de la hegemonía de la derecha en el proceso de transición, y la hegemonía socialista en el campo de la izquierda. Con este punto de partida, las conclusiones a las que llegaba sobre la Constitución eran muy diferentes de las extraídas por la dirección del partido. Pereña estimaba que en la Carta Magna «se apuntan claros ribetes antidemocráticos» y que no contenía un mínimo de elementos progresistas, considerando incluso que se trataba en este sentido de «una Constitución más reaccionaria que la de muchos países de la Europa capitalista»[38]

Álvaro Soto considera el proceso constituyente español como atípico por dos motivos: ni se contaba con un Gobierno provisional, ni tampoco se partía de una asamblea constituyente unicameral para la redacción del texto constitucional. Además en este proceso constituyente existían dos condicionantes, el contenido de la Ley para la Reforma Política y el hecho de que la monarquía precediese a la Constitución y se insertase en ella: «Ambos se presentan como hechos consumados y suponen una línea de continuidad con el régimen anterior, característica definidora del control reformista del proceso. No estamos por tanto ante un proceso constituyente originario e ilimitado, sino que procede directamente de la legalidad anterior, por lo que se conforma como derivativo»[39]

Con la conclusión de los trabajos parlamentarios, la nueva Constitución fue aprobada y promulgada el 29 de diciembre de 1978, entre la indiferencia ciudadana y con un elevado porcentaje de abstenciones del 59%, aunque en lugares como el País Vasco sólo obtuvo la aprobación del 31% del censo electoral.

Unos meses antes, en el mes de abril de 1978, se había celebrado el IX Congreso del PCE, que, teóricamente, hubiera debido servir para establecer un balance del papel del partido en la Transición, pero que estuvo presidido por otro tema: el abandono del leninismo como seña de identidad.

El origen de este debate, que se iba a convertir con el tiempo en trascendente, estaba en unas declaraciones que había hecho el Secretario General en noviembre del año anterior en la Universidad de Yale, durante un viaje de Carrillo a los EE UU. En una conferencia coloquio con profesores y estudiantes había anunciado que el PCE iba a abandonar el leninismo. Así fue cómo los españoles, incluidos los militantes del partido y el mismo Comité

Ejecutivo, se enteraron de que en el próximo Congreso el PCE retiraría toda referencia a este concepto.

La definición de los partidos comunistas como marxistas-leninistas había sido una elaboración ideológica del estalinismo. De hecho, en 1924 a la muerte de Lenin, Riâzanov, el director del Instituto Marx-Engels, antes de ser purgado por Stalin, había declarado: «No soy bolchevique, no soy menchevique, no soy tampoco leninista, sólo soy marxista y como marxista, comunista». El nombre de Lenin apenas apareció antes de 1924 en las revistas teóricas del partido ruso y el consenso general entre los soviéticos de aquel período era que el genio de Lenin radicaba en haber sido un político práctico, no teórico, que había proporcionado un método, pero no una doctrina. Sin embargo, desde los años 30, la apelación de «leninistas» formaba parte del acervo político de los partidos comunistas de modo incuestionable y significaba muchas cosas, pero todas remitían a una cierta ortodoxia alejada tanto del reformismo socialdemócrata como del «aventurerismo» izquierdista.

Cuando Carrillo decidió, en solitario, que el PCE debía desembarazarse del concepto, no lo hizo por una reflexión teórica e histórica de lo que significaba y había significado el «leninismo», sino por puro tacticismo tras el resultado de las elecciones de 1977. Si la conclusión frente a esos resultados había sido que el partido debía derechizarse para mejorarlos, el leninismo, fuera lo que fuese, era un obstáculo terminológico que debía desaparecer renegando de él, como ya se había renegado de la «dictadura del proletariado». Era necesario ocupar el lugar del PSOE y no había otra fórmula que cambiar la imagen del PCE. Lo que el Secretario General no calibró en aquel momento fueron las repercusiones que esa decisión iba a tener en el seno de un partido que, en gran medida, descansaba sobre unas señas de identidad de largo recorrido, y que estaba atravesando una profunda crisis tras su papel en la Transición.

El IX Congreso se abrió en Madrid con una gran expectación. Cubrían la información más de 500 periodistas, no en vano iba a ser el primer partido comunista del mundo que abandonaba el leninismo, y todas las sesiones, salvo la dedicada a la elección de los órganos directivos, iban a estar abiertas a la prensa. Treinta partidos comunistas habían enviado delegaciones, la soviética presidida por el director de *Pravda*, Víctor Afanassiev, llevaba como regalo un monumental retrato de Lenin, y 1401

compromisarios, representando a 171.332 afiliados iban a debatir sobre el estado del PCE y su futuro.

Los dos temas que centraban la atención eran el balance del papel jugado por el partido durante la Transición y el debate sobre el leninismo. Ninguno fue abordado con rigor.

El primero dio origen a una resolución, sobre las «características del actual proceso de cambio», en la que se reconocía el fracaso de la política elaborada por el PCE para el paso a la democracia, condensada en el «pacto por la libertad». Las causas del fracaso de la «ruptura democrática» se achacaba a que: «las posiciones rupturistas sostenidas por el Partido Comunista (...) no llegaron a ser compartidas por la totalidad de las fuerzas de la oposición». Sólo la presión de «los movimientos de masa obreros y populares» había conseguido que los sectores aperturistas hubieran tenido que asumir «parte de los objetivos de la oposición» logrando imponer la legalidad del PCE.

No había habido ruptura, no se habían cumplido las previsiones del pacto para la libertad, sin embargo se concluía que: «las características del cambio político, si bien difieren en una serie de aspectos de lo previsto por el partido, confirman el acierto de la Política de Reconciliación Nacional y del pacto para la libertad».

El PCE va a reivindicar que, a pesar del fracaso de su estrategia, es el partido que más ha hecho por conseguir un tránsito pacífico a la democracia, no sólo por su continua defensa de la reconciliación nacional, sino además, por otra serie de recientes decisiones «sobre temas tan manipulados desde el punto de vista ideológico como la Monarquía, la bandera, el Ejército, las relaciones con la Iglesia o con la derecha, etc.»[40] Así pues, el PCE se anotaba entre sus méritos la contribución que había realizado a un proceso de transformación pacífico. Realmente necesitaba justificar los años de lucha y sacrificios y las renuncias efectuadas, frente a los frustrantes resultados electorales y frente a la pérdida de peso social y político que ya se estaba produciendo. El «Partido», en singular, había dejado de serlo.

Lo que ahora le correspondía al partido era luchar por una política de «concentración democrática». Porque para el PCE, el gobierno minoritario de la UCD no podía hacer frente, en solitario, a los peligros involucionistas; y el PSOE había rechazado la propuesta comunista de entrar en un gobierno

junto con la coalición del franquismo reformista. Del mismo modo, los Pactos de la Moncloa representaban un éxito para la política de concentración democrática nacional propugnada por el Partido Comunista, dado que la tesis sostenía que el país vivía una situación de «emergencia», y que los Pactos habían sido un importante paso adelante para apuntalar la democracia.

La política de concentración democrática era presentada como coherente con la estrategia eurocomunista, en la medida en que la profundización de la democracia que se pretendía desarrollar apuntaba hacia lo que eran elementos sustanciales de la vía eurocomunista hacia el socialismo.

Formando parte de esa estrategia se aprobaron otras resoluciones que venían a ratificar posturas ya tomadas por el PCE en los años anteriores. En este bloque se encontraba aquella donde se establecía el proyecto último del partido como una profundización y extensión al terreno económico, de la democracia existente en los países capitalistas, y por lo tanto como una etapa de transición entre el capitalismo y el socialismo bajo la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura, respetando la voluntad mayoritaria del pueblo expresada a través del sufragio universal.

Por último, se entró al debate sobre la tesis XV, dedicada al partido, que proponía el abandono del leninismo de entre las señas de identidad del PCE. Pero el debate teórico en torno al tema careció de verdadera profundidad. Las páginas de *Mundo Obrero* se habían abierto a la discusión de las tesis del Congreso en los tres meses anteriores a su celebración, sin embargo los artículos no podían superar los dos folios. En estas condiciones la mayoría de las opiniones venían a posicionarse a favor o en contra sin profundizar en los argumentos. Más del 40% de las cartas a la «Tribuna» de *Mundo Obrero* se ocupaban exclusivamente de esta cuestión y las demás también se referían a ella. La mayoría de dichas cartas defendían el mantenimiento de la definición leninista del partido. En una de ellas, entre varias, el viejo militante, Clemente Torres, establecía de modo explícito la filiación identitaria que mantenía vivo al partido para muchos de sus afiliados.

«Los que en el año 36 empuñamos las armas, siendo aún adolescentes, sin tener ideas políticas claras debido a nuestros escasos o nulos conocimientos, únicamente porque sentíamos en nuestras propias carnes los efectos de la opresión capitalista, lo hicimos estimulados por la Revolución Socialista de Octubre, cuyo motor fundamental fue Lenin, admirado y que-

rido por el proletariado universal. Si ahora se nos pide que abandonemos la expresión "leninista", me parece que vamos haciendo dejación de muchas cosas…»[41]

Las razones que daban los partidarios del cambio eran muy variadas y recogían desde aquellas que aceptaban el cambio por disciplina leninista, hasta los de aquellos que lo consideraban una cuestión práctica, pasando por los que sinceramente creían que el socialismo sólo se podía concebir en el marco de una democracia de tipo capitalista.

Ante el Congreso defendió la supresión del término Sánchez Montero, argumentando que no cambiaba en nada la política del PCE, pero tenía una enorme trascendencia porque «ponía de acuerdo la definición teórica de lo que es el partido con la política que el partido está haciendo». Sin dicha adecuación, «nuestra credibilidad, nuestra fiabilidad democrática sufriría bastante», porque la política llevada a cabo por el PCE y sus propuestas estratégicas no tenían cabida «dentro de las formulaciones esenciales de lo que se conoce por leninismo»[42] En síntesis, la supresión del leninismo acrecentaría la credibilidad democrática del partido y era indispensable para ser coherentes con la práctica y con el proyecto político del PCE.

Frances Frutos, del PSUC, fue el encargado de defender el mantenimiento del leninismo. Para él se trataba, en definitiva, de mantener un signo de identidad y, al mismo tiempo, de reafirmar el inequívoco carácter revolucionario y anticapitalista del PCE. En su intervención, Frutos aludió también al mantenimiento del leninismo en la definición del PCI, el mayor partido comunista de Europa Occidental, con un gran apoyo social y electoral, con una larga tradición de elaboración y de debate político y a quien había mirado continuadamente el PCE en los últimos años.

Al final, las resoluciones del IX Congreso recogerían, a la hora de definir el partido, el abandono del leninismo. La tesis fue aprobada por 968 votos favorables; la enmienda que defendía el mantenimiento del leninismo obtuvo 248 votos, en tanto que seis congresistas votaron en contra de ambas propuestas y 40 se abstuvieron.

El texto definitivo decía: «El Partido Comunista de España es un partido marxista, revolucionario y democrático, que se inspira en las teorías del desarrollo social elaboradas por los fundadores del socialismo científico, Marx y Engels, y en su método de análisis. En el Partido Comunista de España,

la aportación leninista, en todo cuanto sigue siendo válida, está integrada, como la de otros grandes revolucionarios, pero sobre la base de que hoy no cabe mantener la idea restrictiva de que el leninismo es el marxismo de nuestra época.

No obstante, y conscientes de que con este paso eliminaban su seña de identidad más definitoria, se veían obligados a precisar a continuación que: «Nos consideramos herederos de quienes (...) supieron dirigir la primera revolución socialista del mundo, que abrió un proceso revolucionario mundial en el que nos hallamos. De ahí se derivan nuestras diferencias históricas con la socialdemocracia (...) Posteriormente, la socialdemocracia se ha caracterizado por su política de defensa del sistema capitalista y del imperialismo, mostrando su incapacidad para realizar el socialismo»[43]

Pero el tema del leninismo, antes de la apertura del Congreso, ya había provocado la primera manifestación de la crisis que se avecinaba. En las Conferencias regionales previas al IX Congreso el tema había sido muy polémico, al menos en tres de ellas. En Asturias, un nutrido grupo de militantes abandonó el partido; en Madrid, se produjeron duros enfrentamientos; pero sobre todo fue muy conflictiva en la Conferencia del PSUC, que envió 267 delegados al Congreso de Madrid. La delegación catalana acudió al Congreso con la suficiencia de haber obtenido el 18,4% de votos en las elecciones de 1977, doblando la media del PCE, lo que confería a los catalanes un peso específico muy importante respecto al partido matriz. Por eso resultaba muy significativo la postura que habían adoptado sobre la cuestión del leninismo.

En su Conferencia regional, los comunistas catalanes, después de una votación muy ajustada, se habían opuesto al abandono del término. Pero su oposición estaba basada más en el reforzamiento de su independencia respecto al PCE, que en un posicionamiento teórico claro sobre la cuestión del leninismo. De hecho el PSUC irá al Congreso de Madrid no tanto con la intención de dar la batalla a favor o en contra del leninismo (aunque Frances Frutos y Joaquín Sempere serán los abanderados del mantenimiento del término), como con la de reforzar la autonomía de sus decisiones frente al PCE.

En el IV Congreso del PSUC, que se había celebrado en octubre de 1977, el partido catalán se había definido marxista-leninista, pero a lo largo del

mismo habían quedado apuntadas tres tendencias: el sector eurocomunista, dentro del cual destacaban los denominados «bandera blanca»; Jordi Borja junto con Jordi Solé Tura eran los principales representante de esta corriente, llamada así porque ambos procedían de la organización Bandera Roja que se había incorporado al PCE en 1974 y cuyos dirigentes se integraron en los órganos de dirección del PCE y del PSUC. La segunda tendencia era la que terminaría siendo conocida como: los prosoviéticos, abiertamente enfrentada al eurocomunismo y partidaria de la vuelta al alineamiento con la política de la URSS; y por último, la tendencia que se iba a conocer desde el IX Congreso como: leninista, y cuyo nombre se deberá a la posición mantenida por sus líderes más destacados en defensa del mantenimiento del término.

El IX Congreso del PCE concluyó con la elección de los órganos de dirección del partido, en primer lugar del Comité Central que fue ampliado a 160 miembros frente a los 137 del anterior. De los miembros del nuevo Comité Central: 67 (43,79%) eran obreros; 63 (41,17%), profesionales; 11 (7,18%), administrativos; 7 (4,57%), campesinos; 2 (1,30%), obreros agrícolas; 2 (1,30%), autónomos, y 1 (0,6%), empleados. Destacaba que los «profesionales» estaban claramente sobrerrepresentados considerando su peso en la militancia, algo que llama la atención en un partido «obrero». Esa tendencia quedó aún más acusada en Comité Ejecutivo, formado por 45 miembros, donde 24 eran profesionales (54,54%), 18 obreros (40,90%), y dos campesinos (4,54%). Finalmente el Comité Central reeligió por unanimidad a Santiago Carrillo como Secretario General y a Dolores Ibárruri como Presidenta del partido.

El IX Congreso no supo enfrentar al PCE con su propia realidad. Cuando las siguientes elecciones legislativas revelen lo ineficaz de su estrategia tacticista de renuncia a sus señas de identidad, cuando la crisis económica incida en la frustración de importantes sectores de la militancia por la actitud moderada y conciliadora de la dirección durante la Transición; cuando la necesidad de renovación del partido, que demandaban muchos, se vea enfrentada a una vieja dirección que se aferraba al poder; y cuando se empiece a notar que la necesidad de profundizar en el eurocomunismo conducía inevitablemente a la socialdemocratización, el PCE se precipitará en el corto espacio de cuatro años en una crisis gravísima.

La gran paradoja del PCE en esta coyuntura histórica fue que, un partido que era visto por muchos como el paradigma de la tiranía sanguinaria, realizase una aportación tan señalada a la creación de una democracia liberal en nuestro país bajo un proceso de restauración monárquica, cuando los fines originarios de ese partido eran la consecución del comunismo. También lo fue el hecho de que al comprometerse en ese proceso democratizador invalidase sus propias prácticas políticas, condenándose a sí mismo al limbo de la indefinición.

En efecto, como afirma Montero Gibert, «La política de moderación y consenso, especialmente visible con ocasión de los pactos de la Moncloa, fue percibida como una pérdida de identidad comunista, agravada por la inexistencia de una pedagogía política que aminorara el impacto psicológico de tales medidas sobre unos afiliados inertemente castigados por la crisis económica»[44]

Por eso el PCE, que había logrado hegemonizar la lucha contra la dictadura para alcanzar la democracia, saldrá de la Transición con una capacidad de resiliencia mucho menor que el propio franquismo, que consiguió convertirse en ese mismo lapso de tiempo en una derecha perfectamente homologable para el sistema de las democracias capitalistas.

Notas

1.- Andrew, Ch. y Mitrokhin, V. (1999): *The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB*, Basic Books, Nueva York, págs. 391-392.

2.- Vega, P. y Erroteta, P. (1982): *Los herejes del PCE*, Planeta, Barcelona, pág. 29.

3.- En los objetivos nacionales que planteaba la UMD figuraba el siguiente párrafo: «Reformas de tipo socio-económico conducentes a igualar la distribución de la riqueza, reconociendo a los trabajadores la plenitud de sus derechos, y por tanto, el derecho de huelga y de dirigir y organzar libremente sus propios Sindicatos. [...] El informe oficial sobre la UMD decía haber detectado: «una inclinación patente hacia el marxismo». (Tusell, J. y Queipo de Llano, G., (2003): *Tiempo de incertidumbre*, Crítica, Barcelona, pág. 198).

4.-*Mundo Obrero*, 6/4/1974.

5.- Palomares, A. S. (2005): *Felipe González: el hombre y el político*, Ediciones B, Barcelona, págs. 93-95.

6.- *Mundo Obrero*, 20/3/1976.

7.- En una entrevista que Victoria Prego realizó a Adolfo Suárez en 1995, este le reconoció, tapándose el micrófono con la mano, que blindó a la monarquía legalmente cuando se dio cuenta de que un referéndum se inclinaría a favor de la república. Por esa razón Torcuato Fernández Miranda -no, por cierto, Adolfo Suárez- introdujo los términos del Rey y de la Corona en la Ley para la Reforma Política que habrían de aprobar en noviembre de 1976 las Cortes franquistas y que el pueblo español aprobó mayoritariamente en referéndum en diciembre de ese año.
Prego admitía en 2006:

«Es evidente que a la muerte de Franco un referéndum sobre Monarquía o República se hubiera perdido. Pero es que la celebración de un referéndum de esa naturaleza era una hipótesis completamente imposible en aquel momento histórico. Lo que sí es cierto es que, a la muerte de Franco, el crédito político y el apoyo popular al recién entronizado

Rey era casi inexistente. En España no había casi nadie que apoyara a Juan Carlos de Borbón».

Victoria Prego. *El Independiente*, 19/11/2016.

8.- ROBERTS, G. (2006): *Stalin's Wars: From World War to Cold War, 1939-1953*, Yale University Press, págs. 247-9.

9.- CLAUDÍN, F. (1984): *Santiago Carrillo. Crónica de un Secretario General*, Planeta, Barcelona, págs. 129-131.

10.- *Mundo Obrero,* 23/7/1969.

11.- *Mundo Obrero,* 2/IX/1969.

11.- *Mundo Obrero,* 31/VII/1974.

12.- BOKRÁS, R. (2005): *El rey de los rojos: don Juan de Borbón, una figura tergiversada*, Ediciones B, Barcelona, págs. 347-349.

13.- *Mundo Obrero,* 20/6/1975.

14.- MORAN, (1986), *Opus cit*. pág. 516.

15.- SARTORIUS, N. y SABIO A. (2007): *El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España. Noviembre de 1975-junio de 1977*, Temas de hoy, Madrid, págs. 78-79.

16.- MORAN, (1986), *Opus cit*. pág. 520.

17.- MARÍN ARCE, J. M. «La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS): una experiencia de unidad de acción sindical durante la transición», en *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie V, Historia Contemporánea, Tomo IX, 1996, págs. 295-313.

18.- MARTÍN VILLA, R. (1984): *Al servicio del Estado*, Planeta, Barcelona, pág. 56.

19.- MORAN, (1986), *Opus cit*. pág. 531.

20.- MOLINERO e YSÀS (2017): *De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982)*, Crítica, Barcelona, pág. 188.

21.- MORAN, (1986), *Opus cit*. pág. 531.

22.- MORAN, (1986), *Opus cit*. pág. 538.

23.- Cunhal, Álvaro (1994): *A Revoluçao portuguesa o Passado e o Futuro*, Avante, Lisboa, pág. 469.

24.- Powell, Ch.: «Estados Unidos y España, de la dictadura a la democracia: el papel de Henry A. Kissinger (1969-1977)», en *Del autoritarismo a la democracia. Estudios de política exterior española*, (2007), Sílex, Madrid, pág. 59.

25.- Nistal, F. (2015): *El papel del Partido Comunista de España en la Transición*, Centro de Estudios Políticos, Madrid, pág. 258.

26.- Bardavío, J., (1980): *Sábado Santo rojo*, Ediciones Uve, Madrid, pág. 202.

27.- *Mundo Obrero*, 1/6/1977.

28.- Azcárate M., (1998): *Luchas y transiciones. Memorias de un viaje por el ocaso del comunismo*, El País Aguilar, Madrid. pág. 147.

29.- Linz, J.J. «The Party System of Spain: Past and Future», págs. 268-271 en Lipset, S.M. y Rokkan S. ed.: *Party Systems and Voter Alignments*.

30.- Molinero e Ysàs (2017), *Opus cit.* pág. 223.

31.- Azcárate M., (1982): *Crisis del eurocomunismo*, Argos-Vergara, Barcelona, pág. 91.

32.- *Nuestra Bandera*, nº 90.

33.- Tafunell, X. « Los beneficios empresariales en España, 1880-1981. Estimación de un índice anual del excedente de la gran empresa», Revista de Historia Económica. Año XVI (1998) nº 3 págs. 707-746.

34.- *Nuestra Bandera*, nº 50.

35.- Solé Tura, J. (1978): *Los comunistas y la Constitución*, Forma Ediciones, Madrid, pág. 17.

36.- Solé Tura, J. (1978): « La Constitución y la lucha por el socialismo», *Nous Horitzons*, nº 40, págs. 11-2.

37.- Pereña, Francisco «Ante el IX Congreso del PCE», *Materia-*

les, n° 8, 1978.

38.- Soto, Álvaro (1988): *La transición a la democracia. España 1975-82*, Alianza, Madrid, pág. 65.

39.- *IX Congreso del Partido Comunista de España*, Critica, Barcelona, 1978, págs. 51-66.

40.- Andrade Blanco, J. A. (2012): *El PCE y el PSOE en (la) transición*, Siglo XXI, Madrid, pág. 298.

41.- Molinero e Ysàs (2017), *Opus cit.* pág. 343.

42.- *Ibidem*. págs. 154-155.

43.- Montero, J. R. «Partidos y participación política: algunas notas sobre la afiliación política en la etapa inicial de la transición española», en Rev. Estudios Políticos, nº 23, 1981, pág. 61 y sigs.

VIII
Crisis y «guadianización»
1978-1991

Los años que van de 1978 a 1991 serán los más convulsos y críticos en la historia del PCE. En ningún momento en épocas anteriores el partido habrá sufrido una sacudida interna como la experimentada durante este período. Las crisis pasadas, los desafíos de la guerra civil o la dura clandestinidad no son comparables al proceso por el que atravesó el partido como formación política en esta etapa. Las pruebas más terribles, como la derrota tras la contienda, habían servido para endurecer y aglutinar a la organización; sin embargo, durante estos años, el partido estará a punto de desaparecer, teniendo que «guadianizarse»[1] en un conglomerado político-social: Izquierda Unida, para poder sobrevivir. Desde el año 1985 impulsará como partido esa formación, —que en un principio será una mera coalición electoral— hasta que en 1991, coincidiendo con el derrumbe de la URSS y la prohibición del PCUS en Rusia, Izquierda Unida adquiera plena naturaleza como movimiento político y social autónomo, y el PCE se convierta en una mera corriente dentro de la misma, aunque seguirá siendo un componente fundamental de esa nueva formación de izquierdas.

Como es lógico deducir, durante esta profunda crisis el volumen de afiliados reflejará una constante hemorragia que desembocará en unas cifras muy alejadas de las que tuvo el partido en el comienzo de la Transición. En julio de 1981 el PCE aún contaba con 132.069 afiliados, pero con los conflictos internos la militancia fue abandonando la organización entre desconcertada y decepcionada. Consciente de ese hecho, la dirección lanzó una campaña de afiliación con motivo del 60 aniversario de la fundación del partido, pero en palabras del propio Secretario General la tal «Campaña de Afiliación 60 aniversario», se convirtió en un «estrepitoso fracaso» y terminó siendo conocida de modo jocoso como campaña de «desafiliación».

En 1983 aún eran 84.625 los afiliados al PCE, pero 1987 habían descendido hasta los 62.342. Hay que tener en cuenta que 1984, el llamado sector prosoviético creó el Partido Comunista (PC) «a secas», que en 1986 pasaría a denominarse Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), liderado por Ignacio Gallego. Al año siguiente fue el mismo Carrillo, —que había dejado de ser Secretario General— el que impulsó una nueva escisión con la creación de la Mesa para la Unidad de los Comunistas, reconvertida más tarde en el Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista (PTE-UC). Cuándo el PCE celebró su XIII Congreso en 1991 el partido contaba con 70.000 militantes.

En este proceso de gibarización de los efectivos, el caso del PSUC resulta especialmente revelador, los 40.000 militantes de 1977 pasaron a ser 21.000 en 1980, justo antes de su V Congreso; y unos meses más tarde la cifra había quedado reducida a unos 15.000 afiliados. En marzo de 1982, al celebrar su VI Congreso se contabilizaron 7500 afiliados.

Respecto a la implantación territorial el PCE también va a sufrir una auténtica sacudida, que afectará de modo particular a las nacionalidades históricas de Cataluña y el País Vasco. El PSUC, que en 1978 suponía el contingente más numeroso del comunismo estatal, experimentará una escisión en 1982 de la que nacerá el Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) que arrastró a algo más de 7000 afiliados de procedencia mayoritariamente obrera. Esto unido a un notable descenso en la afiliación, colocará al PSUC por detrás de otros territorios con menos población y con menor peso específico en el conjunto del PCE. Lo mismo sucederá en el País Vasco, donde buena parte de la organización se fusionará con Euskadiko Ezkerra, dejando al PCE-EPK con una militancia muy reducida. Así, Andalucía volverá a

convertirse en el territorio con más peso dentro del conjunto del partido a nivel estatal, y Asturias recuperará la cuarta posición por detrás de Madrid y el País Valenciano.

La España de las autonomías que había nacido con la Constitución también se dejó sentir, no por la importancia en cuanto a la implantación del PCE en los distintas comunidades, sino por la adaptación organizativa que tuvo que aplicar el partido y que condujo a una pseudofederalización de la organización en todo el ámbito estatal. A finales de 1980 Santiago Carrillo estaba preocupado por la que él consideraba excesiva autonomía de los comunistas catalanes respecto del PCE y temía que el «síndrome PSUC» se extendiera al resto del Estado.

En el Congreso Constituyente del Partido Comunista de Andalucía, celebrado del 14 al 17 de diciembre de 1979 en la localidad malagueña de Torremolinos, afloró una tendencia de corte nacionalista andaluz. La polémica se saldó con la definición de Andalucía como «comunidad diferenciada en el conjunto de los pueblos de España», dejando así abierto el debate en torno a la cuestión nacional o regional, y la constitución del PCA «como parte integrante del Partido Comunista de España». Así mismo, en el X Congreso del PCE la delegación de Euzkadi propuso transformar el partido en federal, tesis que salió derrotada, produciendo una evidente frustración que tendría ondas repercusiones poco tiempo después. Lo significativo es que una delegación como la aragonesa llegó a proponer también una estructura federal, lo que da idea de cómo el tema nacional y autonómico había cobrado relevancia en el interior del partido.

Al abordar esta cuestión, el Secretario General decía: «Si el PCE se transforma en eso —en un partido federal— nos encontraremos con un Estado que a pesar de ser autonómico va a ser un Estado; nos encontraremos con un Ejército, con una oligarquía que van a estar ahí. Nos encontraremos con partidos políticos a nivel estatal como el PSOE y UCD, que van a asegurar una dirección estatal y nosotros, ese partido que se propone transformar el Estado, que tiene una concepción global de la revolución en España, que tiene una visión clara de cuál es el adversario de clase, ese partido no va a ser un partido a escala del Estado, va a ser una federación que va a gobernarse por el consenso y no por el centralismo democrático»[2]

Los resultados electorales también jalonaron y exacerbaron la tortuosa senda de la crisis. En las legislativas de 1979 el PCE subió a 23 escaños, el mejor resultado electoral de su historia, ya que nunca volverá a tener tal número de diputados en el Congreso. En las municipales del mismo año el partido logró 3608 concejales, lo que se tradujo en que más de 150 pueblos y una capital de provincia iban a tener alcaldes comunistas (23 en Cataluña, 19 en Granada, 14 en Sevilla y Córdoba —incluida la capital—, 10 en Madrid y en Málaga, 9 en Valencia, 8 en Asturias...). Sin embargo, en las generales del 28 de octubre de 1982 se produjo el desplome y sólo obtuvo 4 escaños en las Cortes generales que no le permitieron formar grupo parlamentario propio. En las siguientes de 1986 el PCE ya se presentará integrado en IU que obtuvo 7 escaños.

La economía del partido pasará también por dos fases marcadas por el apogeo y la crisis. Durante los primeros años después de la legalización, el PCE, como tercera fuerza parlamentaria, buscará disponer de un soporte material que le permita, no sólo desarrollar su trabajo como organización, sino también ser visibilizado en la nueva realidad política del país como una fuerza importante. Ejemplo de ello fue el afán por tener una sede central en Madrid a tono con lo que el partido quería representar.

Cuando el PCE fue legalizado su sede se ubicaba en la madrileña calle de Virgen de los Peligros. De ahí pasó a la calle Castelló, en el barrio de Salamanca. En esta última el local no fue excesivamente gravoso, ya que era propiedad de Teodulfo Lagunero, un empresario enriquecido con la construcción que prestó insustituibles servicios al partido y, personalmente, a Carrillo, al que introdujo clandestinamente en España, en 1976. Lagunero se las ingenió para justificar el pago de los alquileres por parte del PCE del local que era de su propiedad: entregaba mensualmente al partido las cien mil pesetas que costaba, para que el partido las depositase en su cuenta corriente. Pero la sede de Castelló se quedó pequeña y hubo que trasladarse a Santísima Trinidad, donde había estado instalado un banco, lo que obligó a una gigantesca remodelación en la que a finales de 1980 se habían invertido 280.208.535 pesetas.

Esta cifra nos da idea de los abultados presupuestos que el partido debía manejar en aquella época, y de los problemas económicos que se le podían presentar. La orden de cerrar *Mundo Obrero* como diario, antes que la quiebra económica arrastrara al propio partido, arrojó un volumen de pérdidas que

superaba los 250 millones de pesetas. La fiesta del partido de 1981, que fue la última fiesta del PCE a la cual acudieron los llamados «renovadores», reunió mucha menos gente que en ediciones precedentes, cosa que repercutió negativamente en las arcas del PCE. En esta ocasión, las ganancias de otros años —que eran una contribución importante en la economía del partido— se convirtieron en pérdidas. En 1980, el PCE había ingresado 25 millones de pesetas en su caja central y en 1981 perdió 12 millones. Por tanto, las pérdidas reales sumaron 37 millones de pesetas.

Una campaña electoral suponía ya un enorme desembolso. Los gastos de la campaña de 1982 ascendieron a unos 535 millones de pesetas. Los créditos que se habían conseguido cuando se estaba haciendo balance de la misma eran sólo de 425 millones, y los desastrosos resultados no iban a permitir compensar la deuda. Todos estos desfases sólo se explican porque buena parte de la economía de la organización descansaba en una red de negocios del partido, una actividad altamente secreta que, sobre todo, se centraba en la importación y exportación a países del Este.

Respecto a la estructura organizativa se dejará sentir con fuerza el efecto perverso de la territorialización. Salvo en el caso de las grandes fábricas, los militantes comunistas se vieron obligados a desplazar su quehacer político de los centros de trabajo o sectores de actividad profesional al lugar de residencia de los militantes. De este modo, las agrupaciones, que teóricamente iban a propiciar una mayor homogeneización de los afiliados, derivaron hacia la masificación y la parálisis; mientras que la misma territorialización afectaba de modo particular al sector de los profesionales.

En vísperas de la muerte de Franco, las organizaciones del partido en Madrid que agrupaban a los profesionales contaban con numerosos miembros. En la primavera de 1977, cuando el partido fue legalizado, la organización de abogados en Madrid estaba formada por 153 personas, y el sector sanitario contaba con cuatrocientos adheridos, también tenía una fuerte implantación entre los enseñantes, había asimismo más de 80 periodistas organizados y otro tanto ocurría en otros sectores, con una presencia destacable entre los economistas y los ingenieros.

La prohibición de mantener las agrupaciones profesionales y la obligación de que sus componentes pasarán a las territoriales supuso un auténtico mazazo para este sector. Los intentos por retenerlos celebrando la «I Asam-

blea de Intelectuales, Profesionales y Artistas» no fructificó, y el abogado Héctor Maravall, asesor de CC OO en Madrid, sentenciaba al final de la misma que Carrillo no se había enterado de «nuestra situación de emergencia en el partido, no ha sabido valorar que, de los 3000 profesionales con que contábamos en el partido en 1977, ahora sólo quedan 400, y mucho me temo que la cifra disminuya todavía más».[3] Toda la rica aportación que suponían estas agrupaciones se perdió, propiciando el desencanto y abandono de muchos de estos profesionales, que se pasaron al PSOE o se marginaron de la actividad política, cuestionando en la práctica la consigna de la «Alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura», que aparecía en el programa del partido.

Frente a todas estas mutaciones la dirección siguió aferrada al centralismo democrático más rancio, intentando recomponer una disciplina como la de antaño que ya se había perdido irremisiblemente. Las tensiones estallarán en el X Congreso celebrado en julio de 1981. El siguiente Congreso, a finales de 1983, se celebrará ya bajo la secretaría general de Gerardo Iglesias, y cinco años después, en febrero de 1988, tendrá lugar el XII Congreso del partido, en el que Julio Anguita relevará en el cargo de Secretario General a Iglesias.

Ni el centralismo, ni la mitificación de la figura de Carrillo, —forjada a lo largo de dos décadas— podrán impedir su relevo y su ulterior expulsión. A lo largo de estos años se manifestaron las discrepancias como antes nunca había sucedido, apuntándose distintas corrientes capaces de cuestionar la dirección y la línea política con una consistencia desconocida en el pasado. La libertad que daba la legalidad, y el fin del objetivo primordial que había movido a la organización durante décadas: acabar con el franquismo, facilitaron, junto con otros factores, que se produjera ese fenómeno. Contribuyó también a ello la mutación que se operó en las motivaciones y composición del afiliado/militante.

En vísperas del X Congreso, e independientemente de la orientación ideológica en cada una de ellos, se podían detectar tres tipos de militantes. Los procedentes del exilio, cuadros fundamentalmente fieles a la dirección acostumbrados a una disciplina férrea y partidarios del centralismo democrático al viejo estilo.

Los afiliados/militantes del interior; en este grupo habría que distinguir al afiliado de aluvión del activista forjado en la lucha clandestina. El primero era un componente volátil. Se había podido afiliar por distintas razones, pero su grado de compromiso podía ser también muy variable. Los había muy comprometidos, dispuestos a participar activamente en la vida del partido, pero también abundaban aquellos que, por un motivo u otro, se desencantaban y no tardaban en abandonar la organización. Por último estaban los forjados en la lucha clandestina, cuadros muy preparados por la actividad cotidiana en circunstancias difíciles, de fuertes convicciones, fueran las que fuesen, que se sometían a la disciplina de la dirección, pero que también conocían la realidad de modo más cercano que los procedentes del exilio, lo que les permitía cuestionar con consistencia las directrices que se impartían y con las que podían no estar de acuerdo.

Así, el núcleo duro sobre el que se asentaba el partido lo componían sólo algunos miles de cuadros que desde la legalización vivieron la sorda rivalidad que se estableció entre el equipo de París, formado por viejos militantes del exilio, y el partido del interior. En muchos casos los dirigentes del interior fueron marginados de las tareas de dirección del partido. Y, de rebote, se produjo una curiosa simbiosis entre el partido de los veteranos del exilio y un sector del partido de aluvión que comenzó a formarse a partir de la legalización. El corazón de este núcleo estaba constituido por los permanentes y empleados del partido. A mediados de 1980, el PCE totalizaba 330 de estos permanentes. De éstos, 207 estaban dedicados a tareas que podrían calificarse de estrictamente políticas, 89 eran administrativos, 33 asesores técnicos y 31 empleados, categoría en la que se incluían desde los chóferes hasta los servicios de seguridad. El 25% de los cargos políticos estaban instalados en la sede central del partido, en la madrileña calle de la Santísima Trinidad.

A esto debemos sumar que por su propia naturaleza los partidos comunistas siempre han concebido la afiliación y la militancia de modo muy diferente a otros partidos para los cuales la afiliación no es un elemento imprescindible para el avance electoral y la acción política, en función de que son partidos de cuadros o de personalidades, enfocados a una estrategia primordialmente parlamentaria. En los partidos comunistas el afiliado/militante teóricamente debe de participar en la vida del partido, y no sólo tiene voz sino que puede tener opinión, aunque luego se someta a la disciplina

de la dirección. Con la legalización, esto, que podía parecer una virtud democrática, se convirtió para el PCE en un problema.

Durante la clandestinidad la democracia interna del partido quedaba supeditada a la eficacia de la acción concreta, con la legalidad ese principio perdió parte de su validez y el debate cobró una inusitada viveza. Centenares de cuadros convencidos, —y muy preparados en algunos casos— cuando las cosas empezaron a fallar, se enfrentaron en agrias polémicas por cuestiones que consideraban fundamentales y en las que el simple afiliado de aluvión ni siquiera participaba. En el debate de las tesis programáticas para el V Congreso del PSUC sólo participó entre el 15% y el 20% de los militantes, y el propio PCE calculaba que solamente el 20% de los afiliados contribuyó a la preparación del X Congreso. No obstante, estos enfrentamientos transmitían al interior y al exterior de la organización una imagen de quiebra de la unidad, que era una de las principales señas de identidad de los partidos comunistas.

Los problemas comenzaron a agravarse después de las elecciones generales de 1979. El PCE albergaba renovadas esperanzas ante estos comicios. Contaba con que la creciente influencia sindical de Comisiones Obreras se tradujese en votos comunistas. Por otro lado, la firma de los Pactos de la Moncloa y la política general de moderación practicada por los comunistas durante el período de consenso, unido al abandono del leninismo, pregonado a bombo y platillo, dulcificaban su imagen, y en opinión de la dirección, esto debería reflejarse en las urnas. Carrillo pensaba que la estrategia de cercanía al Gobierno de Suárez durante el período constituyente, articulada en el consenso, le resultaría electoralmente muy rentable. Por eso el PCE se centró durante la campaña electoral en atacar deliberadamente al PSOE para tratar de conquistar, de alguna manera, el espectro político de izquierdas dominado por los socialistas.

Las primeras horas del recuento electoral fueron de euforia. En la sede central de Castelló creían que se superaría la treintena de diputados. El optimismo creció de tal modo que costó que se viniera abajo. *Mundo Obrero* estuvo diciendo durante tres días que Nicolás Sartorius, quinto candidato de la lista madrileña, era diputado, pero los números se empeñaron en demostrar lo contrario.

Las elecciones de 1979 fueron ganadas nuevamente por la UCD aprovechando la imagen de Adolfo Suárez, presentado como el principal protagonista de la democratización, dejando al PCE como un triste compañero de viaje. El mapa electoral apenas sufrió ligeras modificaciones con respecto a las elecciones de 1977. El partido de Adolfo Suárez volvió a ser el más votado, mejorando incluso los resultados de 1977, obtuvo el 35% de los votos y 168 escaños (el 48,6% del total). Por su parte, el PSOE subió unos 250.000 votos más que en 1977, obteniendo 121 escaños (el 34,6%) con el 30% de los votos. El Partido Comunista de España logró 23 escaños (10,8%) y unos 200.000 votos más que en el 77. Pero casi la mitad de los votos del PCE y 15 de sus 23 escaños procedieron de Cataluña y Andalucía, lo que evidenciaba la limitada implantación estatal del partido.

Tan solo un mes después, el 3 de abril, tuvieron lugar las primeras elecciones municipales celebradas en España desde los tiempos de la II República. El PSOE obtuvo el 27,9% de los votos, haciéndose con 12.220 concejales y 1130 alcaldes, mientras que el PCE sólo logró 3608 concejales. Toda la estrategia de consenso con UCD se tambaleó. Los intentos por orillar al PSOE habían fracasado y las clases populares pedían la unidad de la izquierda. Hubo que llegar a un acuerdo con el PSOE a nivel municipal, lo que permitió al primero situar alcaldes socialistas al frente de las ciudades más pobladas de España. En base a este acuerdo, más de veinte millones de españoles residirían en municipios gobernados por la izquierda, lo que implicaba un alejamiento mayor de la política de concentración democrática que el PCE se empeñaba en seguir manteniendo en el plano estatal.

En este punto la crisis, que había permanecido larvada, se hizo evidente. El PCE había llegado al final de una etapa y se encontraba en un callejón sin salida en lo sociológico y en lo político. La frustración de las expectativas levantadas al inicio de la Transición entre amplias capas populares, se habían traducido en un retroceso inaceptable sobre las posiciones conquistadas en el terreno social, en el que habían ido perdiendo protagonismo e incidencia las fuerzas que más habían hecho por las libertades. La toma de conciencia de esta realidad produjo un «trauma colectivo» en el partido que desembocó en la búsqueda crispada de culpables y de soluciones.

Sociológicamente las bases en las que debía apoyarse el partido se evidenciaban limitadas. La clase trabajadora en 1975 se estimaba que era el 39,4% de la población activa con un reducido porcentaje de menos del 10%

de obreros agrícolas. El viejo proletariado que formaba el grueso del sector secundario, compuesto todavía mayoritariamente por trabajadores no cualificados, suponía el 24,4% del total, siendo los trabajadores cualificados solo el 10,1%. Pero ya por aquellas fechas se había iniciado el proceso de tercerización con un considerable y creciente aumento de asalariados en el sector servicios, lo que le había permitido a Franco antes de su muerte hablar al enviado de Nixon de una numerosa clase media que frenaría cualquier tipo de ruptura que supusiese la modificación de la base económico-social sobre la que se había asentado el franquismo.

Esas clases populares, iniciadas en la sociedad de consumo desde finales de los años 60, dividían su voto entre el continuismo, representado por UCD y Alianza Popular, y lo que podríamos denominar opciones progresistas. Dentro de este segmento, se había afirmado, desde las primeras legislativas, el voto al PSOE como un voto de izquierdas que apostaba por un reformismo moderado, lo que significaba una profunda desconfianza frente a todo lo que pareciese radical, como era la opción comunista.

La falta de libertades en los países del socialismo real, unida a las limitadas posibilidades de consumo de determinado tipo de bienes en esos mismos países, alimentaba los más viejos clichés del anticomunismo y servían de sustrato ideológico al pensamiento dominante. A eso deberíamos sumar las imágenes de la guerra que, con temor, todo el mundo quería superar, pero que los comunistas españoles rememoraban orgullosos a través de iconos tan queridos para ellos como Pasionaria o el mismo Carrillo. De éste, —al que rápidamente se asoció con la matanza de Paracullos del Jarama en noviembre del 36— en una encuesta realizada por el mismo partido, se revelaba que era el político considerado como más sagaz, pero también el que menos confianza inspiraba. Así, la pretendida reconciliación nacional ofrecía imágenes del pasado que fomentaban muy poco el deseo generalizado de un futuro distinto. Por esto, y por otras razones, las renuncias hechas por el PCE para obtener mejores resultados electorales habían encontrado sus límites y habían arrojado escasos réditos. Esta realidad la apreciaban muchos de sus militantes que no veían el fruto a tantas renuncias.

Por otra parte, sobre las capas más conscientes y combativas del proletariado estaba incidiendo con crudeza la crisis económica, que operaba como factor de desmovilización. Eso unido a la parcialización y despolitización de la conflictividad laboral, producía una profunda postración que

se traducía en posibilismo o absentismo a la hora de emitir el voto. La política de consenso y los Pactos de la Moncloa no eran entendidos por buena parte del hipotético electorado comunista. Hemos de tener en cuenta que cuando se firmaron los pactos, la tasa de desempleo estaba en el 5,3% de la población activa, en tanto que en 1985 llegaba al 21,9%; y conforme crecía el paro disminuía la cobertura de desempleo. Mientras en 1977 el 51% de los parados percibían subsidio, en 1984, el porcentaje se había reducido al 26,4%.

Para muchos cuadros comunistas la política que se había seguido había conducido a esa penosa situación. Debemos tener en cuenta que todos los partidos comunistas de la Europa Occidental mantenían en los años setenta un discurso verbalmente revolucionario en el que, sin duda, la mayoría de los miembros de sus bases creía y que, además, daba cohesión e identidad política a sus integrantes, por eso para muchos militantes las renuncias que había hecho el PCE: monarquía, bandera, leninismo, moderación…, no se correspondían con lo que era el comunismo auténtico según se había definido siempre.

Si sociológicamente, el PCE tenía sus límites, la realidad del momento señalaba también sus límites políticos. No se había logrado la ruptura democrática, no se había conseguido hegemonizar el proceso de cambio, y el PSOE aparecía como firmemente asentado en el espectro del centro-izquierda, sin previsión de ser rebasado en mucho tiempo. Es más, tras las elecciones de 1979, el PSOE se afirmaba como la opción de recambio al gobierno del reformismo franquista. Con un 10% de los votos y una implantación desigual en el territorio del Estado, el PCE sólo podía aspirar a ser el adlátere de una socialdemocracia moderada en su camino al poder. Las coaliciones municipales así lo evidenciaban. La política sostenida por el PCE de reclamar un gobierno de concentración para fortalecer la democracia cada vez tenía menos sentido.

La posibilidad de una coalición de izquierdas a nivel estatal era impensable para los socialistas y para los mismos comunistas, porque según estos avivaría el peligro de la «involución». Durante la Transición la dirección del PCE estuvo constantemente obsesionada por no provocar una reacción golpista de los sectores más integristas del régimen, amenaza esta esgrimida con frecuencia por unos y otros a modo de chantaje al que el partido terminó rindiéndose.

La influencia de los medios de comunicación a lo largo de la Transición había sido muy importante. La televisión, controlada en todo momento por el Gobierno, había desempeñado el papel fundamental haciendo llegar hasta los últimos rincones del país las virtudes de la reforma y el consenso en el camino de «la conquista de la libertad por el pueblo». Pero también los medios escritos, en general, desempeñaron una importante función configurando la opinión pública en el mismo sentido que la televisión. En todo momento, los principales diarios favorecieron el discurso de la reforma y del consenso, al tiempo que penalizaban duramente a quienes lo querían transgredir.

Esta postura puso nítidamente de manifiesto cómo las ideas que en buena medida habían inspirado el activismo antifranquista no fueron asumidas por ninguno de los grandes periódicos de la España posfranquista, ni siquiera por *El País*, que nació en aquellas fechas como el vocero del cambio y de la España progresista. Ejemplo de lo que decimos es la actitud de la prensa ante el PCE, que se movió entre el virulento rechazo de diarios como ABC, para el cual el partido representaba un serio peligro para la convivencia, y la hostilidad más refinada de *El País*, para el que el partido era un residuo del pasado que no respondía a las modernas tendencias de las sociedades europeas encaminadas al neoliberalismo.

La excepción a este panorama la presentaban los periódicos de la extrema derecha. Para diarios como *El Heraldo Español*, *El Alcázar* y *El Imparcial*, España, desde la muerte de Franco, estaba al borde del caos y de la ruptura, presa de los separatismos, y en manos de unos Gobiernos sin autoridad e incapaces de combatir el terrorismo etarra. Lo curioso de estos análisis no es que los hiciera un pequeño sector de la prensa que carecía prácticamente de apoyo social, lo llamativo es cómo estas ideas contagiaban al resto de los medios, generando una histeria colectiva sobre los peligros de la involución.

Desde el principio del proceso, casi todas las formaciones políticas de la oposición actuaron presas de este chantaje. Lo que menos importaba era qué pudiera decir la sociedad, lo más importante era qué haría el Ejército según lo que el país dijese. Sin embargo, el Ejército en su conjunto se había ido acomodando a la nueva situación. Las líneas rojas que había establecido cuando fue legalizado el PCE no se habían trasgredido. Se había respetado la voluntad de Franco, y España era una monarquía aplaudida incluso por los comunistas, la bandera roja y gualda aparecía ahora junto a la hoz y el

martillo, el buen nombre de las Fuerzas Armadas no dejaba de ser alabado por todos, es más, tal y como los militares dictaban, los «traidores» de la UMD no habían sido amnistiados, y los peligros de un golpe se reducían a círculos muy restringidos sin apoyo real entre los auténticos poderes fácticos: banca, Iglesia...

Descartada por «peligrosa» una coalición de izquierdas, el futuro inmediato que se columbraba para el partido era mantener y gestionar prudentemente ese 10% de apoyos con los que contaba, con una política que, a comienzos del año 80, no estaba clara cuál podía ser.

Para un sector importante de la organización había que volver a las esencias, y en el plano nacional recuperar una estrategia de combatividad que acompañara de modo significativo la actividad institucional, mientras que en el plano internacional se debían rehacer los maltrechos vínculos que todavía existían entre el «socialismo realmente existente» y el PCE. Para este sector, al que se denominará de modos distintos (prosoviético, afgano, ortodoxo, «los rusos», los zorrocotroncos…), era fundamental retomar las viejas señas de la identidad simbólica y poner en cuarentena el llamado eurocomunismo, al que consideraban el crisol de todas las renuncias y el origen de los males que aquejaban al partido, y al que juzgaban como un camino seguro a la socialdemocratización.

Para otro sector, muy nutrido, la lectura que se debía hacer era la inversa. No se había profundizado lo suficiente en el proceso de *aggiornamento* del partido. El eurocomunismo era la política correcta, el problema radicaba en que no se había sabido trasmitir al conjunto de la sociedad la auténtica esencia del socialismo en libertad, que no se correspondía con el de la vieja socialdemocracia, ya que iba más allá del mero reformismo, aunque no se sabía muy bien en qué consistía eso. Por otra parte, determinadas actuaciones de la organización seguían trasmitiendo las trasnochadas imágenes del comunismo autoritario, y entre un amplio espectro de la militancia no se sabía apreciar el valor de la política institucional como una vía fundamental dentro del proyecto eurocomunista de transformación de la sociedad. En el plano internacional, el partido debía dejar claro ante la opinión pública que ya no avalaba las políticas que se aplicaban en el bloque del Este, ni las actuaciones concretas ante problemas como la aparición en Polonia del sindicato Solidaridad o la intervención de la URSS en Afganistán.

En lo único en lo que coincidían ambas corrientes era en considerar como válido el viejo proverbio bolchevique que rezaba: «la crisis de la revolución es la crisis de la dirección revolucionaria». Por eso, unos y otros, cifraron en el funcionamiento orgánico del partido y en su dirección la solución a los problemas. ¿Más disciplina o más democracia interna?, ¿renovación de los cargos, o continuidad en los mismos? El problema estaba, como ahora veremos, que estas opciones no eran unívocas y recorrían trasversalmente a las dos corrientes. Así, tanto prosoviéticos como eurocomunistas se convirtieron en víctimas de la disciplina centralista, y la renovación tardó tanto en llegar que ya no fue renovación sino otra forma de continuidad. La organización salió del enfrentamiento seriamente lesionada, pignorando en muy poco tiempo el pequeño capital político que había conseguido con la segunda Restauración. Comenzaba así para el PCE su proceso de «guadianización».

La primera manifestación seria de la crisis, —desmintiendo a Lenin— no se dio en el eslabón más débil de la cadena, sino en el más sólido, ya que se abrió en el PSUC. La fuerte implantación obrera del PSUC era perfectamente compatible con su influencia entre los sectores católicos, intelectuales y profesionales de la sociedad catalana. Además, había actuado como fuerza integradora de los inmigrantes castellanoparlantes en la cultura y la lengua catalanas. El partido catalán era el que tenía mayor implantación comunista en el Estado y el que había obtenido los mejores resultados electorales, pero también era el microcosmos más dinámico de toda la organización a nivel estatal, y por añadidura era el celoso guardián de su propia identidad nacional frente al centralismo estatalista del PCE.

La crisis en las relaciones entre ambas organizaciones comunistas ya había aparecido en la Conferencia del PSUC preparatoria para el IX Congreso del PCE, cuando el PSUC se había negado a suprimir el término leninismo de su definición partidaria. Esas diferencias se agravaron en dos reuniones muy tensas, en octubre de 1980, entre los dirigentes de ambos partidos. La razón esencial de la discrepancia remitía a cuestiones internacionales sobre el apoyo a la URSS y a la valoración que hacían los catalanes sobre los Pactos de la Moncloa, a los que consideraban como muy lesivos.

Las tres tendencias que existían en el PSUC: prosoviéticos, leninistas y eurocomunistas se aprestaron a dar la batalla en el V Congreso del partido catalán, que se celebró en enero de 1981. Los primeros defendían los posi-

cionamientos ideológicos más tradicionales del comunismo —fidelidad a Moscú, marxismo-leninismo y radicalización— y poseían una fuerte implantación obrera. Entre sus dirigentes más destacados se encontraban Alfred Clement, Joan Ramos, Josep Serradell y el histórico Pere Ardiaca. Por su parte, los leninistas eran el sector menos numeroso, situado en el centro, entre los prosoviéticos y los eurocomunistas. Su nombre procedía de la defensa del leninismo que realizaron en el IX Congreso del PCE. La postura que mantenían respecto a la URSS era un tanto ambigua, aunque se definían sobre todo por su rechazo a la firma de los Pactos de la Moncloa. Figuraban en esta corriente Antonio Luchetti, Frances Frutos, Rafael Ribó, Andreu Claret o el escritor Manuel Vázquez Montalbán. Por último, los eurocomunistas eran conocidos como los «banderas blancas» porque muchos de ellos procedían de la antigua Bandera Roja que había evolucionado a posturas más moderadas. Sus principales cabezas visibles eran Jordi Solé Tura y Jordi Borja. Tenían incidencia en los ambientes universitarios y en las organizaciones vecinales del área metropolitana de Barcelona.

En el V Congreso, los prosoviéticos, aliados con los leninistas, consiguieron la supresión del término «eurocomunista» de las tesis del PSUC, por 424 votos a favor, 359 en contra y 21 abstenciones. Lo que precipitó la dimisión del Secretario General Antoni Gutiérrez y del Presidente López Raimundo. Aunque se seguía manteniendo la vía democrática al socialismo, la eliminación de la palabra «eurocomunista» tenía un enorme impacto simbólico y fue interpretada como una vuelta al dogmatismo de la época estalinista y como un claro distanciamiento del PCE de Santiago Carrillo. La presidencia de este nuevo PSUC fue ocupada por el líder de los prosoviéticos, Pere Ardiaca, y la secretaría general por Frances Frutos, del sector leninista.

Los sectores eurocomunistas iniciaron rápidamente una contraofensiva destinada a revocar los acuerdos del Congreso y a eliminar la influencia de los prosoviéticos, para lo que buscaron la complicidad de los leninistas, que ahora cambiaron de bando. Previamente ya había tenido lugar una reunión entre los nuevos dirigentes del PSUC, Frances Frutos y Pere Ardiaca y la dirección del PCE, con el objeto de normalizar las relaciones. Estos contactos continuaron durante los meses previos al X Congreso del PCE, pues de cara a éste se exigía del equipo dirigente del PSUC la rehabilitación del

eurocomunismo como condición para que pudieran participar en dicho Congreso los delegados catalanes.

En una Conferencia Nacional del PSUC, celebrada a mediados de julio, se aceptó la resolución sobre el eurocomunismo que figuraba en los materiales para el X Congreso del PCE, y por otro lado, se advirtió a los prosoviéticos de que: «El Comité Central (del PSUC) se pronuncia, pues, de una forma explícita a favor de que se apliquen los estatutos del Partido en caso de que algunos de sus miembros contravengan los acuerdos adoptados por el Comité Central»[4]

Sin embargo, la normalización requirió un nuevo Congreso que se celebró en marzo de 1982. En este tiempo el enfrentamiento entre los prosoviéticos y la nueva mayoría del PSUC subió de tono. Unos, pretendiendo depurar el partido de «prosoviéticos», los otros, con la voluntad de apartar de él a los «socialdemócratas». El choque desembocó en la expulsión del partido, en el mes de noviembre de 1981, de 12 miembros del Comité Central acusados de constituir un grupo fraccional que rechazaba las resoluciones de la IV Conferencia. De ese modo, paradógicamente, las primeras víctimas de la disciplina leninista fueron los ortodoxos prosoviéticos, que a raíz de su expulsión fundarán el Partit dels Comunistes de Catalunya, con cuatro diputados en el Parlament catalán. Cuando se celebró finalmente el VI Congreso extraordinario, el PSUC no conservaba ni un tercio de sus militantes. El hundimiento electoral que se produjo en octubre del 82 no fue más que la constatación de que el PSUC había dejado de ser un actor relevante en el escenario político catalán.

El segundo acto de la crisis sí que confirmó lo dicho por Lenin: afectó al eslabón más débil de la cadena, el Partido Comunista de Euzkadi; y tuvo un marcado tinte nacionalista, mucho más acusado que en el caso del PSUC.

El desarrollo de la izquierda antifranquista en Euzkadi tenía características propias y singulares. La presencia de ETA, desde época temprana, había condicionado la implantación y evolución de otras fuerzas de parecido signo, y de rebote al mismo PCE. Los miembros del partido comunista en el País Vasco estaban divididos entre la vieja corriente que defendía «un Estado, una clase, un Partido», entendiendo esto como una forma de vinculación estrecha del EPK al PCE y a su equipo de dirección; y otra, mucho más sensible a la realidad vasca, donde la cuestión nacional desempeñaba

un papel fundamental. La primera tenía como cabeza visible a Ramón Ormazabal, una vieja gloria de la resistencia clandestina con muchos años de cárcel a sus espaldas, la otra estaba encabezada por un joven médico, Roberto Lertxundi, que había militado en ETA y que ocupaba la secretaría general de un partido que había obtenido unos pobres resultados en las primeras elecciones autonómicas, un 4,02%, y que contaba con escasa implantación.

En el IV Congreso del EPK, celebrado entre el V Congreso del PSUC y el X del PCE, el 30 de enero de 1981 en Lejona, las diferencias se hicieron manifiestas. El problema de los 480 delegados que acudieron al Congreso no era aquí el eurocomunismo. Bajo el impacto de «¡Que vienen los rusos!», anunciado tras el congreso de los comunistas catalanes, todos los delegados vascos se declaraban eurocomunistas, pero unos lo eran con un marcado tinte estatalista y los otros se consideraban nacionalistas, y ese fue el motivo de un enconado enfrentamiento.

Frente al oficialismo avalado por Madrid se acantonó la tendencia más sensible al hecho nacional vasco, que hizo bandera de la independencia política del EPK respecto al PCE, y que era partidaria de una estrategia de unidad de la izquierda, en concreto, de la fusión orgánica del EPK con Euskadiko Ezkerra una formación nacionalista de izquierdas.

La corriente oficialista del EPK, estaba asentada fundamentalmente entre los trabajadores de la Ría bilbaína, mientras que la otra corriente la componían profesionales, y jóvenes procedentes del nacionalismo radical, lo que llevaba a trazar una línea divisoria entre trabajadores e intelectuales. A este respecto, un veterano congresista planteaba que «lo que se ha dado en llamar fuerzas de la cultura no ha conseguido ensamblarse con el movimiento obrero, sino que se ha montado encima de él, y eso puede conducir a situaciones graves»[5]

Roberto Lertxundi salió reelegido como secretario general con la firme decisión de abrir vías de convergencia orgánica con Euskadiko Ezkerra; también fue reelegido presidente Ramón Ormazábal, que estaba en minoría. Pero cuando abandonaban el Aula Magna de la Universidad de Lejona, algunos oficialistas entonaban el «...y viva España», mientras que los nacionalistas se retiraban con el firme propósito de lograr el federalismo en la organización estatal del Partido Comunista de España, cuestión que se

aprobó en la Conferencia Nacional que el EPK celebró el 18 de julio de 1981, en vísperas del X Congreso del PCE.

Antes de que se celebrara ese X Congreso, el PCE pasó por una prueba que reflejó el estado en que se encontraba el viejo partido de las movilizaciones y la resistencia. Nos referimos al intento de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981 que supuso la definitiva consagración de la monarquía restaurada.

La versión oficial, fraguada entonces y alimentada por el sistema durante años, presenta a un Juan Carlos ignorante de todo y auténtico «salvador de la democracia». Lo cierto es que aquellos que habían apostado por una reforma del franquismo no estaban dispuestos a que toda la Transición rodara por tierra por las veleidades de algunos uniformados. Antes de que apareciera el rey por televisión, Rafael Termes, a la sazón el presidente de la patronal bancaria, ya había hecho unas manifestaciones por radio diciendo que estaba por la legalidad constitucional, y en el mismo sentido se manifestaron poco después Alfonso Escámez, presidente del Banco Central, entonces el primero del país, y Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, el último de los siete grandes bancos y vinculado al Opus Dei. La gran burguesía española, encabezada por el capital financiero, no lo dudó un instante y se anticipó a lo que la Corona pudiera decir. Había tardado 150 años en cubrir la etapa democrática de su propia revolución y estaba en una disposición inmejorable para llegar a ser clase hegemónica, no podía consentir que los desvaríos decimonónicos de algunos pusieran en peligro un logro que tanto había costado.

El 23 de febrero supuso el espaldarazo definitivo para la segunda Restauración. Juan Carlos fue, sin duda, el más beneficiado, lo que le permitió al golpista Alfonso Armada afirmar hasta su muerte que realmente el golpe había triunfado. Al pueblo se le hizo ver que el riesgo de golpe de Estado estaba latente y que solo el rey tenía poder para desactivarlo. Fue, sin duda, el momento cumbre de la «democracia coronada». Periodistas e intelectuales de tradición izquierdista y republicana, como Francisco Umbral, o Manuel Vicent, e incluso intelectuales del PCE, como Manuel Vázquez Montalbán o Tuñón de Lara, se sumaron fervorosamente a las filas del «juancarlismo» y escribieron apasionadas defensas de su papel en la Transición. Finalmente, el pueblo español le debía la democracia al heredero de Franco.

Más lamentable fue el comportamiento de la mayoría de la izquierda y de las organizaciones sociales. Pese a que hubo en un primer momento llamamientos a la huelga general en lugares como Madrid y Cataluña por parte de CC OO o por UGT en Álava y Asturias y por distintas organizaciones en el País Vasco, y no faltaron paros de una y dos horas en un número nada despreciable de empresas, muy pronto fueron desautorizados por las centrales sindicales mayoritarias y por la dirección del PCE, obedeciendo así a la petición del Gobierno en funciones que se acababa de formar.

Solo una minoría de militantes de esas formaciones y de la izquierda radical se movilizó alrededor del Congreso y en distintas ciudades y fueron violentamente disueltos por la policía. El mismo día 24, la agencia EFE daba la noticia de que el gobernador civil de Zaragoza había iniciado un expediente de sanción a la CNT, CSUT, LCR y MC, por convocar una manifestación que tenía «carácter ilegal por su inconstitucionalidad», y en Barcelona las fuerzas antidisturbios cargaban contra los manifestantes en las Ramblas de Cataluña.

Los grandes partidos obreros, PSOE y PCE, y las grandes centrales sindicales, CC OO y UGT, adoptaron una postura pusilánime ante los hechos y ni siquiera en las manifestaciones del día 27 en repulsa del golpe esas formaciones se atrevieron a exigir la depuración de los golpistas, limitándose a alabar el coraje democrático del rey.

La catatonía en la que se vio sumido el PCE como organización el día del golpe quiso ser compensada por la gallarda actitud de Carrillo de no echarse al suelo cuando lo ordenaron los golpistas. Una lectura política de los hechos revela hasta qué punto se había llegado. La cabeza del partido se quedó detenida en el Palacio de las Cortes, donde estaban los 23 diputados comunistas. La imposibilidad material de recibir órdenes de Carrillo convirtió al PCE en el exterior del Parlamento en una jaula de grillos, y Manuel Azcárate llegó a llamar a José Mario Armero para que les pusiera al tanto de lo que ocurría y les sugiriese qué hacer en aquellos momentos.

Bajo la sombra de esa noche inquietante, el 25 de julio, pocos días antes de empezar el X Congreso, el Comité Central del partido elegido en 1977 se reunió por última vez con un firme posicionamiento eurocomunista. El primer punto del orden del día se despachó con rapidez y unanimidad. En él se planteaba la propuesta de expulsión de Francisco García Salve, «el cura

Paco», un jesuita obrero, activista en la construcción, encartado en el Proceso 1001 y miembro del Comité Central del PCE. El motivo de la medida eran sus manifestaciones de corte prosoviético y en contra de la línea política del partido. «Existen dos bloques, el imperialista y el socialista. Por eso somos prosoviéticos, no vamos a ser proamericanos. Los países socialistas, a pesar de sus defectos, han implantado el socialismo y contribuyen hoy a la esperanza de todos los progresistas del mundo».[6] Acusado de trabajo fraccional por participar en reuniones de una denominada «Coordinadora Leninista», se aprobó su expulsión.

Pero solventado este problema afloró el que desde hacía tiempo venía ya manifestándose. Algunos eurocomunistas pensaban que otros lo eran menos, y acusaban a la dirección de darles cobijo, lo que provocaba en la persona del Secretario General una reacción muy viva ante estas críticas, argumentando que quienes las formulaban ponían en peligro la unidad del partido. Manuel Azcárate era uno de esos críticos, conocidos ahora como «renovadores». Azcárate, olvidándose que acababa de aprobar la expulsión de García Salve, manifestó que había que cambiar la actitud del partido «convertir en algo normal que hubiese diferencias. Y crear un clima en el que el discrepante no fuese considerado como si fuese un delincuente»[7], y anunció que se abstendría en la votación del informe que Carrillo había presentado para ser leído en el X Congreso.

Los antecedentes de estas discrepancias los podríamos remontar al 27 de octubre de 1980, cuando Santiago Carrillo presentó ante el Comité Ejecutivo una propuesta del informe que haría ante el X Congreso del partido que se iba a celebrar el verano siguiente. Días después, el 1 de noviembre, el Secretario General repitió su intervención ahora ante el Comité Central.

En esta reunión, la intervención de Carrillo dio paso a «algo completamente insólito», en palabras de Manuel Azcárate: el informe del secretario general empezó a «ser sometido a una crítica seria, en algunos casos dura, directa, en otros más matizada, por parte de un número considerable de miembros del CC, incluidas personas con mucho peso en la vida pública y en el propio partido».[8] En efecto, las discrepancias expresadas abrieron una discusión, con 71 intervenciones, que obligó a prolongar un día la reunión del Comité Central. Las intervenciones de esta larga reunión trasmitían claramente un notable malestar derivado de la situación política general, de la situación del partido y de la forma de liderazgo de Santiago Carrillo.

En esta reunión se evidenció claramente la configuración de un sector de la dirección del partido, pronto denominado «renovador», que acabaría abiertamente enfrentado a Santiago Carrillo y a quienes defendían las tesis oficiales sostenidas por el Secretario General.

El 5 de mayo de 1981, el Comité Central del PCE se volvió a reunir para aprobar definitivamente las tesis y el proyecto de estatutos que se remitirían a todas las organizaciones para su debate. La práctica totalidad de las tesis fueron aprobadas casi por unanimidad, excepto la dedicada al partido que, junto al proyecto de estatutos, concentró las principales discrepancias. Se contrapusieron dos posiciones: una favorable a profundizar en la «democratización» del partido, apoyada en general por los denominados «renovadores», y otra, de rechazo a tales propuestas encabezada por Santiago Carrillo.

Las principales enmiendas, presentadas por Pilar Brabo, Julio Segura y Roberto Lertxundi, fueron rechazadas, aunque obtuvieron un notable apoyo. Una de las más significativas, presentada por Pilar Brabo, sobre los estatutos decía que, si bien los militantes debían «actuar acatando las directrices y decisiones adoptadas según el principio de subordinación de la minoría a la mayoría, de la organización inferior a la superior», las minorías, después de las decisiones o acuerdos, tendrían «derecho a dar a conocer y sostener sus opiniones en los órganos y niveles correspondientes del partido en que militen». Carrillo se opuso frontalmente argumentando que dicha enmienda buscaba legalizar las fracciones, lo que estaba en contradicción con principios fundamentales del partido.[9] La enmienda de Roberto Lertxundi proponía simplemente adoptar una estructura federal en el PCE.

Pocos días después se conoció un documento firmado por 252 militantes madrileños, entre los que figuraban muchos de los principales cargos municipales del partido en la capital, apostando por la democratización interna, en el que se decía: «Para resolver el desajuste entre el funcionamiento del partido y sus presupuestos políticos, el PCE tiene que asumir con audacia el reto de su propia renovación. Esta es la tarea prioritaria desde la óptica eurocomunista. La renovación exige, en primer lugar, una reforma profunda de los Estatutos [...]. Pero no basta con los cambios de los Estatutos. Es necesario modificar la manera de dirigir el partido y de hacer política eurocomunista en la sociedad española y, por lo tanto, la renovación significa el cambio del equipo dirigente del partido»[10]

El Secretariado del Comité Central, con la oposición de Carlos Alonso Zaldívar y Pilar Brabo, consideró el documento fruto de una práctica fraccional y prohibió la publicación del texto en *Mundo Obrero*, aunque obviamente ello no impidió que se difundiese.

Semanas después, el 28 de julio a las 10 de la mañana, en el cine Quevedo de Madrid, a unos centenares de metros de la sede central del partido, 1213 delegados se dispusieron a iniciar las deliberaciones del X Congreso del PCE. Este Congreso, —salvando las distancias y la trascendencia— tuvo remembranzas del II Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, del que surgieron dos corrientes: la menchevique y la bolchevique. Nos referimos a que los delegados rusos no tuvieron excesivas dificultades en acordar el programa y la línea estratégica, las desavenencias aparecieron al debatir el tema de los estatutos, que condicionaban la organización y en última instancia la actuación del partido. En el cine Quevedo ocurrió algo parecido.

Durante cuatro horas Carrillo expuso un informe en el que sin apenas autocrítica validaba toda la política que se había seguido en los últimos años, y en el que advertía no sólo de la necesidad de continuar con ella sino también de extremar la disciplina. Para Carrillo, la democratización interna del PCE había alcanzado cotas muy elevadas, mucho más si se le comparaba con los otros partidos políticos en general, así como con los partidos comunistas, pero debía rechazarse la creación de «corrientes, tendencias, fracciones o como se las quiera llamar», puesto que ello cambiaría el carácter del partido.

La lectura del informe suscitó diversas intervenciones y la del diputado por Sevilla sintetizo acertadamente cuál iba a ser el problema central del Congreso: «tenemos ciertamente una política correcta en líneas generales, pero con un instrumento para su aplicación... que no acaba de adecuarse a esa política»[11]. Todos iban a aceptar que la estrategia política no era el problema, lo que fallaba era la organización y dirección del partido. El informe fue aprobado por 689 votos a favor, 64 en contra y 266 abstenciones.

El Congreso debatió siete extensas tesis. Como había ocurrido en el proceso de elaboración en el Comité Central, todas ellas, excepto la VII dedicada al partido, fueron aprobadas por mayorías muy amplias, ratificando así lo que había dicho el diputado sevillano: la política era la «co-

rrecta», pero el problema sobrevenía al abordar las tesis dedicadas al partido, y a los estatutos.

En la enmienda a la totalidad de esta tesis que defendieron los renovadores se sostenía que «el principal límite político interno que se opone hoy al desarrollo del PCE está constituido por la tendencia partidaria de abandonar el eurocomunismo, y secundariamente por la tendencia a mantenerlo verbalmente, bloqueándolo y desvirtuándolo en la práctica… al mantener la concepción tradicional de que la dirección del partido, por principio tiene razón y el comunista que tiene un desacuerdo con ella debe callarlo al considerar las diferencias como peligrosamente nocivas».[12] Para el desarrollo del eurocomunismo, según los renovadores, el modelo de partido era la cuestión crucial. El documento también adoptaba una clara posición a favor de las agrupaciones sectoriales, y la enmienda proponía así mismo un partido federal.

El debate de las comisiones no se pudo realizar en el cine Quevedo, donde sólo tuvieron lugar las sesiones plenarias. La comisión encargada de discutir la VII tesis se reunió en la sede del partido en Pueblo Nuevo, un local donde no había ventilación y que era preciso abandonar antes de las diez de la noche. La presencia allí de Vicente Cazcarra, redactor de la tesis oficial, fue un motivo más de confrontación, que se agravó cuando Cazcarra defendió ante el pleno del Congreso las posturas oficiales y dijo que lo que los renovadores proponían era: «la expresión más acabada de un tipo de partido que no es eurocomunista, ni democrático, ni de vanguardia, ni revolucionario. Introducir el concepto de federalismo no añade nada nuevo a lo que ya existe en el PCE. Y os digo, camaradas, que todo esto es hacer un partido socialdemócrata, de la Segunda Internacional»[13]. Se volvía al año 1920.

Los renovadores, e incluso algunos oficialistas, prorrumpieron en un fenomenal pateo acompañado de silbidos y gritos de desacuerdo, mientras otros delegados se ponían en pie y aplaudían tratando de ahogar la protesta. Gerardo Iglesias, que hasta entonces había dirigido los debates con férrea disciplina, se vio desbordado. Tuvo que esperar varios minutos para poder proponer la votación. Delegados que pensaban apoyar la propuesta oficial se abstuvieron, como fue el caso de la mayoría de la representación catalana y una buena parte de la andaluza. El poeta Rafael Alberti pidió hacer uso de la palabra para rechazar en verso la intervención de Cazcarra. El recuento

arrojó 651 votos a favor del texto oficialista; 273 en contra, correspondientes a los renovadores, y 133 abstenciones. La gravedad de lo sucedido no se le escapó a nadie.

El Congreso eligió un Comité Central notablemente más reducido —104 miembros, frente a los 160 del anterior—, incluyendo a los quince secretarios generales de los PC de nacionalidades y regiones. Fue aquí donde la dirección oficialista impuso sus criterios y logró que en el Comité Central los renovadores sólo representaran el 15%, cuando en las votaciones del Congreso habían logrado con frecuencia el 30%. En el caso del Comité Ejecutivo sólo se permitió una representación simbólica a la tendencia renovadora en la persona de Manuel Azcárate. La única novedad organizativa del X Congreso fue la aprobación de la figura de los vicesecretarios, que se suponía estaba orientada a una mayor compartimentación del poder, pero que en la práctica desempeñaron una función más bien ornamental. Estos puestos fueron ocupados por Jaime Ballesteros, Nicolás Sartorius y Enrique Curiel. No obstante, en la votación al Comité Central Santiago Carrillo quedó en el puesto decimoquinto, aunque finalmente seguiría siendo el Secretario General.

Estando así las cosas el problema vasco emergió de nuevo. El X Congreso del PCE había disipado las últimas esperanzas de cambio que aún albergaban los renovadores vascos. Además de rechazar los planteamientos de federalización y democratización interna, la dirección del PCE se había alineado decididamente con la tendencia minoritaria del EPK. Durante el mes de agosto, representantes del sector renovador del EPK y de Euskadiko Ezkerra, con Lertxundi y Onaindía a la cabeza, decidieron iniciar formalmente el proceso de convergencia entre ambas organizaciones.

El conflicto definitivamente estalló. Argumentos ideológicos, políticos, históricos, culturales y jurídicos salieron a relucir por una y otra parte del comunismo vasco. Los oficialistas atacaron en dos frentes: convocaron reuniones en Euskadi al margen de la dirección oficial y trasladaron el conflicto a Madrid.

La primera de esas reuniones estaba prevista para el 25 de octubre en la localidad vizcaína de Sestao, centro fabril enclavado en el corazón de la Ría bilbaína, donde los oficialistas contaban con mayor arraigo. El Comité Ejecutivo del EPK consideró que se trataba de «un hecho de extrema gravedad

que abre una dinámica de escisión, y manifiesta expresamente que se ha creado ya una organización dentro de la organización regular del partido»[14] Su reacción fue abrir expedientes disciplinarios a los convocantes, miembros del Comité Central. Las sanciones alcanzaron al mismo Ramón Ormazábal, cesado como Presidente y miembro del Comité Ejecutivo.

El 12 de octubre, el Comité Ejecutivo del PCE se reunió con carácter de urgencia para debatir un único punto del orden del día: la situación del EPK. A esa reunión fue invitada la dirección de los comunistas vascos, que planteó que en ese encuentro se tratara exclusivamente la actitud indisciplinada de los minoritarios. Al no ser aceptada su propuesta abandonaron la reunión. Horas después, Santísima Trinidad hacía público un comunicado en el que señalaba que si se aplicaban las sanciones a los minoritarios anunciadas por la dirección del EPK «no podría darle su aprobación y estudiaría, en consecuencia, las medidas a adoptar»,[15] pedía a los minoritarios que suspendieran la asamblea convocada en Sestao y convocaba para el día 22 al Comité Central del PCE y al Ejecutivo del EPK a una reunión conjunta para examinar la situación. Por la noche del mismo día, el Comité Central del EPK ratificaba la decisión de sancionar a sus disidentes y acusaba al equipo dirigente de Madrid de alinearse abiertamente con la corriente de Ormazábal.

Detrás de este choque latía el verdadero problema: la fusión del EPK con Euskadiko Ezkerra. Para Santiago Carrillo, esta propuesta era «una contribución objetiva a la política de cepillarse al Partido Comunista»[16] Así, después del prosovietismo, un nuevo fantasma —que por otra parte era viejo— parecía recorrer los órganos dirigentes del PCE: el liquidacionismo, la idea de acabar con el partido.

El proceso de ruptura entre la dirección del PCE y la mayoría del EPK discurrió por vías administrativas. Los estatutos aprobados en el X Congreso se aplicaron implacablemente y la mayoría del EPK fue expulsada de su propio partido.

Pero un hecho se iba a convertir en el multiplicador de la crisis. El miércoles 4 de noviembre apareció en el diario *El País* un pequeño anuncio que, bajo el título, «Hacia una nueva izquierda vasca» informaba que al día siguiente tendría lugar un acto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid con la participación de Roberto Lertxundi y Mario Onaindía para explicar el proceso de fusión EPK-EE. Entre los firmantes

de la convocatoria, no todos ellos militantes del PCE, se encontraban las figuras más destacadas de la corriente renovadora y cargos tanto del ayuntamiento como de la diputación de Madrid.

Carrillo movió todos los hilos para impedir la reunión. Le pidió al ministro del Interior, Juan José Rosón, que prohibiese el acto mediante una orden gubernativa. Al no atender aquél su petición, se dirigió al ministro de Cultura, Iñigo Cavero, para que impidiese la utilización de los locales del CSIC, del cual era responsable. Pero a los reformadores del franquismo, —con los que tanto había coqueteado el Secretario General— Carrillo ya no les resultaba útil, y declinaron el papel de represores. Al fin y a la postre ahora todos eran «demócratas» y había que preservar la libertad de expresión. Le tocó al Comité Provincial de Madrid del PCE ejercer la función sancionadora. Antes de que se celebrase la reunión en el CSIC el Comité difundió un télex anunciando sanciones a todos los militantes comunistas que habían firmado la convocatoria.

El acto fue un éxito. Los aplausos, en un ambiente caldeado y expectante, saludaron la llegada de los vascos y del grupo de concejales comunistas madrileños que ocupó la Presidencia.

La fractura se hacía inevitable. Simón Sánchez Montero sostenía que el sector renovador no sólo estaba trasgrediendo la prohibición de las tendencias organizadas, sino que estaba realizando una actividad claramente fraccional. Como había quedado claro en el X Congreso, no se trataba pues de una discusión ideológica, sino de una cuestión de disciplina estatutaria.

A aquellos que ostentaban cargos institucionales se les pidió que devolvieran sus actas de concejales o diputados, a lo que algunos se negaron, generando una crisis en el mismo ayuntamiento de Madrid. Eduardo Mangada, primer teniente de alcalde, subrayaba la decisión de permanecer en los cargos hasta que concluyese la legislatura, «tanto en solidaridad con los socialistas (con los que el PCE gobernaba en coalición) como por el compromiso que tenemos contraído con el pueblo de Madrid que nos eligió, y por hacer patente nuestra garantía de que no estamos ante un intento desestabilizador de la política nacional»[17]

Santiago Carrillo se encargó de presentar la propuesta de destitución de seis miembros del Comité Central, refiriéndose al mismo tiempo a la crisis de la democracia en España. Aseguró que existían fracciones organizadas

en el partido e insinuó que alguna de ellas preparaba una operación política para desembarcar en el PSOE, y amenazó con dimitir si no se aceptaban las expulsiones.

Concretamente, el Comité Ejecutivo del PCE exigía a los disidentes que reconociesen que el acto de Madrid había sido «una toma de posición contra la dirección del partido, además de un error político», que acatasen las decisiones de los órganos dirigentes y que se comprometieran a «no llevar a los medios de comunicación posiciones opuestas a los acuerdos del Congreso y los órganos del partido». Los aludidos no aceptaron y, simplemente, se pasó a votar su expulsión del Comité Central. Al término de la reunión, Santiago Carrillo manifestó: «En una ocasión tuve que optar entre mi padre y el partido y opté por el partido; en esta ocasión, cuando he tenido que optar entre el partido y mis amigos, he optado por el partido»[18]

Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri habían presidido la reunión, y al concluir se produjo un hecho patético. La Pasionaria, puesta en pie, se dirigió a los presentes para pedirles que apoyasen incondicionalmente al Secretario General y empezó a aplaudirle, en medio del silencio de todo el mundo. Era la imagen simbólica de la vieja disciplina estalinista: siempre se debía apoyar y aplaudir lo que la dirección decidía. Pasionaria le debía todo a esa fórmula.

La solidaridad con los sancionados y el apoyo a la fusión EPK-EE se extendió por el país, al tiempo que el Secretario General del PCE afirmaba ante los micrófonos de la cadena SER que los concejales sancionados se negaban a abandonar sus puestos porque ganaban 300.000 pesetas al mes, cuando sabía perfectamente que los salarios de los cargos municipales y de los parlamentarios los cobra directamente el partido, quien después pagaba a quienes los ocupaban 60.000 pesetas, con la salvedad de Eduardo Mangada, que percibía 150.000 dado que su incorporación al Ayuntamiento le había supuesto renunciar a los ingresos, bastante más cuantiosos, que obtenía en su despacho de arquitecto.

Desde 1917 hasta 1981 el círculo se había cerrado. Santísima Trinidad estaba atrapada entre las señas de identidad inspiradas por la Revolución de Octubre y la imperiosa necesidad de funcionar como un partido al uso en una sociedad del capitalismo avanzado. Su distanciamiento respecto del modelo soviético no le había servido de mucho al PCE, y la marcha

del comunismo mundial hacía estragos ahondando más la crisis de identidad del partido.

En abril de 1978 el Ejército Soviético había intervenido en Afganistán en ayuda del gobierno del país y contra los insurgentes muyahidines, grupos de guerrilleros islámicos apoyados por Estados Unidos, quien les proporcionaba ingentes cantidades de armas y dinero. El 13 de diciembre de 1981 se declaró la Ley Marcial en Polonia y los movimientos opositores como el sindicato Solidaridad fueron prohibidos y sus líderes, encarcelados.

Daba igual ante la opinión pública occidental quién estuviera detrás de Solidaridad, movimiento apoyado por los gobiernos de Estados Unidos, bajo la presidencia de Ronald Reagan y Gran Bretaña, bajo la de Margaret Thatcher, así como por la poderosa Iglesia católica polaca bajo la inspiración de Karol Wojtyła, que ocupaba el papado. El problema del islamismo fundamentalista o del conservadurismo neoliberal aún no se dimensionaba en su justa medida, y todo se reducía a que los comunistas aplastaban la libertad de los pueblos y de los seres humanos.

Los sucesos de Polonia sirvieron para poner de relieve la imagen clásica del comunismo opresor y para deslegitimar la que pretendía transmitir el eurocomunismo. Los mismos eurocomunistas convencidos no supieron analizar correctamente lo que estaba sucediendo y contribuyeron a minar los fundamentos de su mismo proyecto. La argumentación que dio el PCE sobre los sucesos de Polonia se aproximaba a la del Partido Comunista Italiano. En las declaraciones de ambas organizaciones, se afirmaba la vinculación indisoluble de socialismo y democracia sin más; y en base a ello apoyaban sin reservas a Solidaridad condenando el golpe militar. Pero las divergencias entre comunistas italianos y españoles contenían matices importantes al extraer las conclusiones del hecho. El PCE ponía el acento en la improcedencia de exportar a otros países el modelo soviético, mientras que el PCI se adentraba en la globalidad del fracaso del mismo modelo comunista. Era el preanuncio de su desaparición como partido.

Comenzaba el fin definitivo de la experiencia revolucionaria nacida en Octubre de 1917, y la crisis del PCE sólo se anticipaba algunos años, —debido a las peculiaridades de la Transición— a lo que iba a ocurrir en la URSS y los países del Este, y de lo que iba a suceder con los grandes partidos comunistas occidentales voceros de la vía eurocomunista. El poderoso PCI y

el PCF iban a correr en muy poco tiempo una suerte parecida, aunque con una celeridad mayor, a la que el PCE corrió a partir de su crisis de 1981. Sin embargo el estalinizado Partido Comunista Portugués podrá seguir gestionando en las décadas siguientes sus modestos apoyos, llegando incluso a ser fundamentales en el sostenimiento de gobiernos progresistas.

La mayor parte de los autores que han trabajado este período han abordado el tema como si el PCE constituyera una singularidad que se hubiera visto afectada por una especie de locura colectiva. Los calificativos que aplican a la crisis parecen de naturaleza psicopatológica: «autodestrucción»,[19] «vértigo suicida»[20], «harakiri»[21], «neurosis colectiva».[22] En el caso de Gregorio Morán y de algunos testimonios de protagonistas o coetáneos de los hechos (Azcárate[23], Líster[24]…) se busca personalizar la «culpa», de modo muy poco marxista, en la figura singular de Santiago Carrillo, como si el partido hubiera actuado mesmerizado por su Secretario General.

Desde esta perspectiva se reproduciría el fenómeno de la desestalinización. Finalmente todo habría sido «culpa» de un sujeto, como si lo sucedido no hubiera contado con la connivencia de toda una organización, que aprobó, secundó y aplicó una estrategia política sin ser capaz de medir sus efectos. Esa interpretación puede servir de lenitivo a muchos de los que la vivieron pero concuerda mal con el análisis marxista.

Lo correcto es enmarcar los acontecimientos en un contexto más amplio y profundo sobre el modelo y mito nacido de la Revolución de Octubre y de su ulterior desarrollo en la URSS; tal y como procura hacer Jesús Sánchez Rodríguez, y en cierta media algún otro de los citados.[25] No obstante, la crisis que experimentó el PCE a partir de 1981 suponía de modo más concreto el fracaso del experimento eurocomunista,

Buena parte de la militancia identificó la salida que se estaba dando a la crisis con lo que consideraron era su justificación ideológica: el eurocomunismo. No es que el eurocomunismo fuera, como dijo López Raimundo, «el chivo expiatorio» del malestar de la militancia atenazada por la crisis económica, sino que el eurocomunismo funcionó también como «cooperador necesario» para desarrollar una política que buena parte de la militancia interpretó como de connivencia con la salida antisocial que se estaba dando a la crisis misma.

En una reflexión teórica mucho más profunda, las limitaciones del eurocomunismo ya habían sido intuidas, una vez más, por Fernando Claudín, que en una de sus obras había dicho: «el eurocomunismo contiene la posibilidad y la esperanza de una superación —en el capitalismo maduro— de la crisis general del movimiento comunista. Pero también puede ser su canto de cisne (...) Si la práctica del eurocomunismo desmiente sus promesas y si el socialismo no supera el reformismo socialdemócrata, el capitalismo podrá restablecerse una vez más, y por toda una etapa de imprevisible duración se cerrará de nuevo el camino al socialismo en Europa»[26]. Claudin siempre fue la Casandra del PCE.

El eurocomunismo planteaba una contradicción difícil de superar de la que se percataba perfectamente Claudín. En su defensa de la democracia en abstracto el eurocomunismo entraba en la vía de la vieja socialdemocracia y negaba cualquier posibilidad revolucionaria, que había sido el punto de partida de 1917 y del que había nacido el mismo movimiento comunista. La concepción de la llegada al socialismo como un desarrollo de la democracia capitalista que ocurre por una acumulación progresiva de reformas, por medios democráticos y parlamentarios se había ido convirtiendo en el auténtico programa comunista en los países del capitalismo avanzado. Así, en la segunda mitad del siglo xx el militante de los partidos comunistas oficiales era un revolucionario que no hacía la revolución, aunque la esperaba en un futuro que nadie podía entrever por mucho que se deseara. El eurocomunismo quiso armar teóricamente este supuesto, sin valorar en profundidad que en ese proceso se aproximaba peligrosamente a la misma socialdemocracia de la que el comunismo había nacido al escindirse de ella en la década de los años 20.

Luis Larroque, uno de los expulsados del PCE en el otoño de 1981, vicepresidente de la Diputación de Madrid, supo resumir de modo sencillo ese problema de identidad cuando anunció su ingreso como militante socialista de base en la agrupación madrileña del PSOE de Chamartín. «¿Para qué un partido eurocomunista si ya existe un partido socialista?»[27]

Pero casi un 4% del electorado español siguió distinguiendo. Y es que el mito, avalado por la sinergia de 60 años de historia, en ocasione muy meritoria, es persistente, y esto le dio al PCE la oportunidad de sobrevivir.

El primer toque de atención sobre la gravedad de la coyuntura fue el resultado de las elecciones andaluzas. Los resultados electorales del 23 de mayo en Andalucía fueron muy malos, pero no llegaban a ser catastróficos, aunque eran el anticipo de lo que pronto le ocurrirá al partido en toda España. El PCE, en uno de sus feudos, había bajado al 8,5%. Carrillo planteó por primera y única vez en su vida la dimisión, pero casi por unanimidad, fue forzado a retirarla, lo que abunda en la tesis de que el problema no radicaba en una persona.

En las elecciones generales de octubre de 1982, el Partido Comunista de España se desplomó hasta el 3,8% de los sufragios, 830.000 votos, y 4 diputados, sin posibilidad de formar grupo parlamentario. La victoria del PSOE fue aplastante, había obtenido la mayoría absoluta, mientras que el franquismo reformista de cuño más duro, Alianza Popular, lograba el 26,36% de los votos.

El 5 de noviembre de 1982, ante el Comité Ejecutivo, Santiago Carrillo dimitió, no sin haber buscado quien iba a ser su sustituto: el minero asturiano Gerardo Iglesias. El día 7, aniversario de la Revolución Socialista de Octubre, el Comité Ejecutivo decidió con tan sólo dos abstenciones que Gerardo Iglesias fuera el nuevo Secretario General. Cinco semanas después se convocó al Comité Central para confirmar el cambio. En la víspera de la reunión, Iglesias confió a Simón Sánchez Montero que cuando Carrillo le anunció que pensaba proponerlo como Secretario General, le dijo: «Tú vas a ser el secretario, pero el que orienta y decide soy yo»[28] Sin embargo, las cosas no son tan fáciles en una organización fuertemente centralizada y Carrillo pronto se dio cuenta que sus opiniones se encontraban en minoría.

Iglesias convocó el XI Congreso del partido para finales de 1983, entonces el PCE aún contaba con 67.808 afiliados, cifra que pronto se vio alterada por las escisiones y la fuga de militantes hacia otras formaciones comunistas. En 1984, el sector prosoviético había creado, como ya hemos dicho, el Partido Comunista (PC) «a secas», que en 1986 pasaría a denominarse Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), liderado por Ignacio Gallego.

En el XI Congreso se puso de manifiesto por primera vez que Carrillo y sus más fieles seguidores estaban en la «oposición» dentro de la dirección del PCE. No obstante, en la elección del Comité Central, los resultados mostraron que ese sector mantenía una fuerte influencia. Dolores Ibárruri

obtuvo 767 votos, seguido de Julio Anguita con 422, Nicolás Sartorius (414), Gerardo Iglesias (413) y Santiago Carrillo (401). Este nuevo Comité Central fue el encargado de elegir al Secretario General, siendo confirmado Gerardo Iglesias, pero con unas cifras poco contundentes que le debilitaban de inicio como máximo líder del comunismo español: 69 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones.

Tan sólo en el ámbito sindical el PCE, a través de CCOO, podía ejercer cierta influencia, sobre todo frente a las duras medidas económicas e industriales que estaba aplicando el Gobierno de Felipe González. Aunque también en el sindicato se reflejaban las distintas corrientes que existían en el partido. Fue en esos momentos cuando en el seno de la dirección comenzó a plantearse la necesidad de una «política de convergencia» con otras fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. En la reunión del Comité Central celebrada el 11 de mayo de 1984, el Secretario General presentó lo que desde ese momento se conocería como «política de convergencia». Ésta establecía la necesidad de que el partido buscara la cooperación con los movimientos sociales y tratara de converger con las fuerzas de izquierdas del país. De modo más explícito, la política de convergencia suponía que el PCE iniciara contactos con los grupos susceptibles de compartir sus objetivos más concretos, estando dispuesto a construir candidaturas electorales con ellos.

A partir de esta nueva estrategia, el Partido Comunista de Andalucía —PCA— (la organización regional más fuerte del PCE) lanzó también una iniciativa —denominada Convocatoria por Andalucía— con el objetivo de «crear un amplio bloque social que pueda sostener una política de progreso», contando para ello con el «compromiso y protagonismo de grupos y sectores sociales que van más allá de la propia estructura del PCA».[29] De este modo, emergía un primer intento de llevar a la práctica la política de convergencia propuesta por la dirección estatal del PCE.

En 1985 el PCE vivió una etapa de conflictividad interna muy intensa en la que se enfrentaron la mayoría del partido, que apoyaba al Secretario General, y los seguidores de Santiago Carrillo. La tendencia encabezada por el anterior Secretario General, se mostraba contraria a muchas de las implicaciones de la política de convergencia, por desvirtuar la ideología —decían— y el modelo organizativo del partido y su carácter comunista. Según estos, la convergencia supondría para el PCE «su reconversión en una nueva

izquierda sin ideología ni referencias de clase» En definitiva, ahora Carrillo defendía «la necesidad de un auténtico PCE [...] sin renunciar a sus raíces históricas».[30] El 15 de abril de 1985 el antiguo Secretario General y otros 19 miembros del Comité Central terminaron siendo expulsados.

La verdad era que los escrúpulos manifestados por Carrillo y sus partidarios carecían de fundamento, ya que la dirección del partido unía la política de convergencia al fortalecimiento del PCE.

La aparición de intensas movilizaciones sociales, muchas de ellas protagonizadas por los sindicatos en las zonas industriales en proceso de reconversión, y la huelga general convocada en 1985 por CC OO, animaron esa perspectiva, mientras que la insuficiencia del PCE como fuerza política aislada era confirmada por una investigación sociológica llevada a cabo mediante técnicas cualitativas y encargada por la dirección del partido en septiembre de 1985, con el objetivo de conocer las actitudes del electorado de izquierdas ante el PCE. El informe de este estudio, además de señalar las limitaciones electorales del PCE en solitario, mantenía la viabilidad de un nuevo proyecto de izquierdas. La decisión de denominar Izquierda Unida a ese nuevo proyecto fue resultado de esta misma investigación, al aparecer ese nombre en un grupo de trabajo formado por amas de casa.

En marzo de 1986, sólo un mes después de la Conferencia Nacional del partido en la que se confirmó la estrategia anterior, la dirección del PCE dio un paso más en su aplicación práctica a raíz de la celebración del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN en la que nos había metido la UCD de Calvo Sotelo.

Lo que se ha llamado «la última batalla de la Transición» tuvo como actor político central al pacifismo, sobre un tema que llegó a interesar a sectores ajenos al movimiento, en un conflicto directamente político. El PSOE, en la campaña electoral que le había dado la victoria en octubre de 1982, había formulado la promesa, de corte claramente electoralista, de convocar un referéndum («OTAN, de entrada no») sobre la permanencia de España en el bloque militar atlantista. En noviembre de 1981, el movimiento pacifista y el PSOE escenificaron una alianza que descansaba básicamente sobre esa promesa de convocatoria. Pero obtenido ya el poder, en la declaración que hizo el Gobierno socialista en octubre de 1984 y en el Congreso del PSOE de diciembre siguiente, se vio claramente cuáles eran las reales intenciones

de los socialistas. Esta postura abrió el enfrentamiento entre el movimiento pacifista y el PSOE.

Cuando la presión de la calle aumentó, Felipe González se vio obligado a convocar el referéndum sobre la OTAN, respecto al cual, el Gobierno, ahora sí, mantuvo una postura clara: continuar en la OTAN.

Felipe González manifestó que, aunque la votación no era vinculante, él cumpliría la decisión mayoritaria, pero amenazó al mismo tiempo al electorado con abandonar el Gobierno si el resultado no coincidía con la permanencia en la organización atlantista. Años después se descubriría que en los casos de corrupción política, en los que estaba implicado el PSOE como partido de Gobierno, alguno de ellos estaba estrechamente vinculado a la financiación ilegal de la campaña sobre el referéndum de permanencia en la OTAN.

El movimiento de masas que surgió a raíz de la convocatoria del referéndum adquirió un tono abiertamente anti-OTAN y antigubernamental, y la oposición a la permanencia en la alianza atlántica se tradujo en una gran movilización popular, heredera, hasta cierto punto, de las del primer período de la Transición. En cierto modo, el referéndum fue adquiriendo un carácter plebiscitario sobre la gestión general del Gobierno, y muy especialmente sobre el carácter caudillista de su dirección por parte de Felipe González. No obstante, el resultado de la votación fue afirmativo en algo más del 50%, aunque la abstención rondó el 40%.

Sin embargo, esta lucha supo ser aprovechada por el PCE, que participó con otros grupos políticos en la Plataforma Cívica para la Salida de España de la OTAN, que gozó de un notable protagonismo. El partido valoró como muy positivo el importante porcentaje de votantes contrarios a la OTAN, entendiendo que se trataba básicamente de electores progresistas que podían apoyar una alternativa a la izquierda del PSOE.

Por esas mismas fechas, la dirección del PCE rebajó notablemente el distanciamiento con la URSS, lo que le permitió aproximarse a los sectores prosoviéticos de dentro y fuera del partido. Precisamente, en marzo de 1986, Enrique Líster y su Partido Comunista Obrero de España (PCOE) reingresaron en el PCE, y el Partido Comunista de los Pueblos de España de Ignacio Gallego se acercaba de nuevo al originario PCE del que había surgido.

El intento por parte del PCE de capitanear el movimiento anti-OTAN le hizo replantearse esa política de convergencia con otras fuerzas de izquierdas. Por aquel entonces, el alcalde de Córdoba, Julio Anguita, lideró la Convocatoria por Andalucía-Izquierda Unida, y los buenos resultados obtenidos en esa comunidad autónoma avalaron hacer extensiva la experiencia a toda España. Finalmente en abril de 1986 nacía IU como coalición electoral en la que participaban varios partidos políticos (PCE, PCPE, PASOC, Federación Progresista, Izquierda Republicana, Partido Humanista y Partido Carlista) y personas independientes sin adscripción partidaria. En palabras de los fundadores, IU iba «más allá de un planteamiento coyuntural. Pretende ofrecer a la ciudadanía un proyecto estratégico»[31]

En junio de 1986 en las elecciones generales Izquierda Unida (IU) se presentó por primera vez a unos comicios y obtuvo siete escaños con un porcentaje de voto del 4,6% del censo, muy cerca del millón de votantes. En Cataluña, los malos resultados obtenidos en estas elecciones provocaron la definitiva refundación —o disolución— del PSUC. De este modo nació en 1987 Iniciativa per Catalunya, una plataforma unitaria que aglutinaba al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya de Antonio Gutiérrez y Rafael Ribo y a grupúsculos nacionalistas de izquierda, aunque la unión sería efímera ya que, tras unos buenos resultados en las elecciones municipales, y la elección de Antonio Gutiérrez Díaz como eurodiputado, en 1988, el PSUC organizó un Congreso de Unidad Comunista en el que un número importante de cuadros del PCC, Bandera Roja (BR) y el Partit del Treball de Catalunya (PTC-UC), se unieron al PSUC, hecho que llevaría al abandono de IC por parte del PCC.

En lo que se refiere a la nueva estrategia de Izquierda Unida cabe reseñar que los resultados no fueron tan positivos como se esperaba. Salvo el relativo avance que hubo en Andalucía, las urnas seguían evidenciando que en el PSOE confluía la mayoría del voto de izquierdas, por eso durante el periodo 1986-1992 se producirá un cambio en los objetivos del PCE que convertirá el desarrollo de IU en la tarea prioritaria del partido.

Los modestos resultados electorales de 1986 habían debilitado el liderazgo de Iglesias al frente del partido y en 1988 Iglesias renunció tras comprobar la pérdida de apoyos internos. El principal motivo para que algunos miembros de la dirección comunista propusieran como sustituto a Julio Anguita era su popularidad y sus buenos resultados electorales como al-

calde de Córdoba y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (IU-CA). Así, en el XII Congreso del PCE (febrero de 1988), Anguita sucedió a Iglesias en la secretaría general; y en el mismo Congreso se tomaron también acuerdos muy relevantes sobre el trabajo de los miembros del PCE en el fortalecimiento de IU.

Es simbólicamente significativo que una de las decisiones de la dirección de IU, adoptada el 6 de junio de 1988, consistiera en proporcionar a la organización su propio logotipo. De hecho, Julio Anguita, consideró que la adopción de un logotipo por IU, y por tanto, la desaparición de los símbolos de las organizaciones coaligadas en la imagen pública de la nueva organización, suponía un «salto cualitativo». Anguita lo argumentaba del siguiente modo: «¿Cómo vamos a mantener todas las hoces y martillos del PCE, PASOC, IR... en un mismo símbolo? Y más cuando hay independientes en IU que no se reconocen en ninguno de estos símbolos partidarios»[32] Era el comienzo de una nueva etapa superadora de la mera coalición de partidos.

El proceso de unidad entre el PCE y el PCPE, también se aceleró en 1988 y a comienzos de 1989, el PCPE se integró de nuevo en el PCE. El documento discutido en el congreso de unidad afirmaba la intención de reforzar el PCE, pero igualmente asumía de modo explícito la estrategia del partido respecto a IU.

En 1989 la celebración de la I Asamblea General de IU marcó un momento decisivo en su consolidación organizativa. La misma elección de Anguita como Coordinador General, contribuyó a reforzar su imagen como organización política con proyección estatal. La subida electoral en las elecciones generales de 1989 en la que IU obtuvo 17 escaños vino a avalar la estrategia seguida por el PCE.

En 1990, se adoptaron importantes decisiones de tipo organizativo que afectaban tanto al desarrollo de IU como al papel del PCE en su seno. El prólogo a esas decisiones lo constituyó el último Comité Central comunista del año 1989 a finales de diciembre, bajo el impacto que supuso la caída del «muro de Berlín». En ese Comité Central la dirección del PCE presentó un documento en el que, junto a los habituales llamamientos y planes para el fortalecimiento numérico y organizativo del partido, se incluía una nueva línea de actuación que marcaba un cambio cualitativamente esencial en la

estrategia del PCE y que afectaba decisivamente a IU. La dirección del partido reconocía la necesidad de abordar un «traspaso de soberanía del PCE a IU»[33]

La puesta en marcha de los debates previos a la celebración del XIII Congreso del PCE, que se celebrará finalmente en 1991, condujo a una mayor clarificación y diversificación de las posiciones en el interior del partido, y comenzaron a escucharse voces que argumentaban a favor de la disolución del PCE y de los otros partidos integrados en IU. El desplome de la URSS, había impactado, como es lógico, en los militantes del partido. De hecho, desde comienzos de 1990, la discusión ya no se limitaba a plantear qué tipo de características debía tener el PCE en el nuevo contexto, sino que se discutía sobre su misma existencia y su disolución en IU. «Hoy la discusión en las agrupaciones, en las conversaciones entre miembros del partido, se ha desplazado. Ya no se discute tanto sobre las características del PC sino sobre el partido mismo como instrumento de cambio social»[34]

En la Conferencia Política del PCE en abril de 1990, la dirección del partido reiteró la vigencia del ideal comunista y se declaró dispuesta a resistir lo que percibía como una ofensiva exterior a favor de la disolución. No obstante, siguió avanzando en la cesión de competencias a IU. En el Comité Central de octubre de 1990, se planteó que el partido, debería actuar como un «intelectual colectivo» dentro de IU. No debía dedicarse a elaborar programas, puesto que ésa era una función de IU, sino a realizar reflexiones ideológicas o teóricas con las que enriquecer IU. Eso suponía que su actividad política debía hacerse, preferentemente, a través de IU. Ahora bien, el PCE se mantenía como partido político, aunque dentro de IU fuera una mera corriente. En el Comité Central (30/31-10-1990) el Secretario General admitió una enmienda al Informe cuya redacción ratificaba ese cambio en la naturaleza del partido: «la reestructuración del PCE que, sin dejar de ser un partido político, funciona en el seno de IU como corriente organizada».

En 1991, meses antes de la celebración del XIII Congreso del PCE, la cuestión sobre su pervivencia como partido se manifestó de forma abierta. En el Comité Central celebrado en julio de 1991, dos miembros del secretariado presentaron enmiendas a los documentos oficiales a debatir, en las que se afirmaba que el PCE no constituía ya un instrumento político válido. Uno de los dirigentes de esta tendencia decía: «El partido es un instrumento y no un fin en sí mismo [...]. Negar que el instrumento ha de cambiar cuando

cambian las circunstancias que lo hicieron necesario o negarse a crear otro instrumento no corresponde a una visión marxista de las cosas»,[35] y defendía la formación de un «nuevo sujeto político», producto de la «síntesis» de los distintos grupos presentes en IU para dotarla de una nueva identidad como organización. Esto significaría para el PCE terminar con la existencia de una estructura paralela a IU y que toda la actividad política como partido se redujese a la de esa formación.

Un año antes, el PCE había promovido una encuesta entre los afiliados en la que se les preguntaba explícitamente sobre la continuidad del partido como tal y sobre la organización de IU. Los resultados reflejaban que un número de afiliados muy importante era contrario a la disolución. Sin embargo, los afiliados en general apoyaban la política que había conducido a la creación de IU (79,5%). Y un grupo nada despreciable prefería un PCE fuerte y autónomo, no vinculado necesariamente a IU (21,4%).

Finalmente, en el XIII Congreso del PCE, quienes defendían el mantenimiento del partido recibieron el respaldo mayoritario de los delegados. En la elección al Comité Federal, la lista formada por los partidarios de avanzar hacia la disolución del partido obtuvo sólo el 25,3% de los votos frente al 74,6% de los que defendían su continuidad. El proceso de «guadianización» había permitido salvar la existencia del partido como tal, cuando su homólogo ruso, —el todo poderoso PCUS— que tanto ascendiente había ejercido sobre el partido español, acababa de ser prohibido unas semanas antes. A pesar de todas las paradojas el mito del PCE, para sus detractores y para sus partidarios, iba a seguir vivo.

Notas

1.- La leyenda de que el río Guadiana desaparece y reaparece ha pervivido hasta el último tercio del siglo XX. Según esta creencia el río se infiltraría en Lagunas de Ruidera, para reaparecer en los Ojos del Guadiana. La metáfora geográfico-mítica nos ha parecido acertada para designar, con una sola palabra, el proceso de integración del PCE en Izquierda Unida, sin poder precisar si algún día el partido reaparecerá como tal en la vida política de nuestro país.

2.- Vega, P. y Erroteta, P. (1982): *Los herejes del PCE*, Planeta, Barcelona, pág. 63-64.

3.- *Ibidem*, pág.148.

4.- *Mundo Obrero*, 2/VI/1981.

5.- Vega, P. y Erroteta, P. (1982), *Opus cit.*, pág. 246.

6.- *Ibidem*, pág. 210.

7.- Azcárate M., (1982), *Opus cit.* pág. 219.

8.- Vega, P. y Erroteta, P. (1982), *Opus cit.*, pág. 106.

9.- *Ibidem*, pág. 206.

10.- Vega, P. y Erroteta, P. (1982), *Opus cit.*, pág. 313-314.

11.- Molinero e Ysàs (2017), *Opus cit.*, pág. 376.

12.- *Ibidem*, pág. 379.

13.- Vega, P. y Erroteta, P. (1982), *Opus cit.*, pág. 20.

14.- Molinero e Ysàs (2017), *Opus cit.*, pág. 384.

15.- *Ibidem*, pág. 388.

16.- Vega, P. y Erroteta, P. (1982): *Opus cit.*, pág. 248.

17.- *Ibidem*, pág. 258.

18.- *Ibidem*, pág. 263.

19.- Molinero e Ysàs (2017), *Opus cit.* 451

20.- Vega, P. y Erroteta, P. (1982), *Opus cit.*, pág. 258.

21.- Moran, (1986), *Opus cit.* pág. 604.

22.- Andrade Blanco, J. A. (2012), *Opus cit.* pág. 44.

23.- Azcárate, M. (1998): *Luchas y transiciones. Memorias de un viaje por el ocaso del comunismo*, El País Aguilar, Madrid.

24.- Líster, E. (1983): *Así destruyó Carrillo el PCE*, Planeta, Barcelona.

25.- Sánchez Rodríguez, J. (2004): *Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982)*, FIM, Madrid, págs. 373-381.

26.- Claudín, F., (1977): *Eurocomunismo y socialismo*, Siglo XXI, Madrid, pág. 180.

27.- Vega, P. y Erroteta, P. (1982), *Opus cit.*, pág. 277.

28.- Preston, P. (2013): *El zorro rojo. Biografía de Carrillo*, Debate, Madrid, pág. 454.

29.- *Convocatoria por Andalucía*, 1984, pág. 4.

30.- Ramiro Fernández, Luís (2004): *Cambio y adaptación en la izquierda. La evolución del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida (1986-2000)*, CIS, Madrid, pág. 116.

31.- *Bases de Acuerdo para la constitución de la Plataforma de la Izquierda Unida*, 1986, pág. 2.

32.- Ramiro Fernández, Luís (2004), *Opus cit.*, pág. 131.

33.- *Ibidem*, pág. 134.

34.- *Ibidem*, pág. 135.

35.- *Nuestra Bandera*, nº 148.

Historias transversales

Los hombres de la Komintern en España

El PCE, desde su misma concepción, estuvo tutelado por la Komintern, que desplazo a numerosos cuadros en los primeros años de vida del partido para orientarlo y dirigirlo en su complicado parto y azarosa infancia.

Es cierto que el Ejecutivo de la Internacional nunca consideró en la primera fase de su historia que nuestro país fuera un frente que mereciese especial atención, ni en el que pudieran depositarse muchas esperanzas sobre una próxima revolución socialista. España, económicamente atrasada y con un modesto movimiento obrero escorado hacia el anarquismo, no podía ser un campo de trabajo preferente para la Internacional Comunista. Sólo a finales del verano de 1919, al calor de las agitaciones en el agro andaluz, —en lo que se llamó el «Trienio Bolchevique» — *Inprecor*, la revista de la Internacional, atisbó «la chispa de una llamarada revolucionaria… que podía llevar a una revolución proletaria».[1]

Pero no es menos cierto que, como cualquier otro territorio, nuestro país fue objeto de atención por parte de la Internacional para intentar crear en

él una fuerza política que representara al naciente movimiento comunista y que apoyara la experiencia soviética emprendida en Rusia.

En los inicios del proceso de formación del partido los cuadros que la Komintern envió a España hicieron acto de presencia de modo fugaz, siempre en la clandestinidad y con misiones concretas destinadas a ayudar en sus primeros pasos a las organizaciones simpatizantes de la Internacional que se movían en el campo del socialismo. La entidad y trayectoria de estos revolucionarios «profesionales» fue muy distinta a lo largo del tiempo, y su incidencia en la historia del PCE muy desigual. Hubo visitas muy breves de personajes que dejaron una honda huella, como la de Borodin, sin embargo otros, como el llamado «Ramírez», desplegaron una labor más esforzada y en cambio apenas se les recuerda debido a su historia posterior.

Mijail Markovich Borodin era el alias de Mijail Gruzenberg, un bolchevique desde 1903 que vivió exiliado once años en los EE UU y que después de la revolución de 1917 regresó a su patria, integrándose en el Departamento de Comunicación Internacional (OMS) de la Komintern. De 1919 a 1922, actuó en distintas misiones en Méjico, los Estados Unidos y el Reino Unido, donde fue detenido por ayudar a fundar el Partido Comunista Británico. Su paso por España, aunque breve, tuvo enorme impacto. Los jóvenes que le conocieron quedaron verdaderamente impresionados por su personalidad que debía ser muy atractiva. Meaker cita recuerdos de personas que le conocieron en aquella época y que dejan traslucir una cierta fascinación por el bolchevique.

La escultora inglesa Clare Sheridan, recordaba: «Quería (Borodin) que yo pensara en una estatua que interpretara la idea soviética, y me habló mucho de la Tercera Internacional, como representación de la hermandad mundial de los trabajadores. El plan de la Internacional es muy hermoso: "Trabajadores de todos los países, uníos". Si se unen, mantendrán la paz en el mundo para siempre…».[2] La misma fascinación se desprende de una entrevista con Borodin aparecida en *Nuestra Palabra* (12-11-1920), cuando aquél había abandonado España y no corría ya ningún peligro de detención.

Pero la proyección histórica de Borodin no descansa en su breve visita a nuestro país, en donde sólo estuvo tres semanas. La misión de su vida se desarrolló en China, cuando el líder nacionalista Sun Yat-sen, solicitó la ayuda de la Internacional Comunista, y Borodin fue enviado allí en 1923

junto a un contingente de asesores soviéticos que se instalaron en la ciudad de Cantón en la que Sun había establecido un gobierno local.

Borodin negoció el primer Frente Unido entre el Partido Nacionalista Chino de Sun Yat-sen y el Partido Comunista de China. Bajo su tutela se creó el Instituto de Capacitación Campesina, donde trabajó el joven Mao Zedong, y abrió la Academia Militar de Whampoa, donde se formaron muchos de los oficiales que acompañarían a Mao en la Larga Marcha.

Tras la muerte de Sun Yat-sen en 1925, Borodin siguió siendo un influyente asesor de los nacionalistas hasta 1927, cuando Chiang Kai-Shek, jefe de los movimientos políticos de derechas, inició la purga de los comunistas en la plana mayor del ejército, dando inicio a la sangrienta masacre de Shanghái de 1927, pero a Borodin se le permitió «escapar» en coche hacia la Unión Soviética, junto con la esposa de Sun Yat-sen. Después de su regreso a la Unión Soviética, Borodin trabajó brevemente como editor del diario *Moscow News*, un periódico en edición inglesa que se editaba en Moscú. En 1949, fue detenido en el contexto de la represión antisemita desencadenada por Stalin, y murió dos años más tarde en la prisión de Lefortovo.

«Ramírez» no fue tan relevante ni tuvo tan triste fin, sin embargo, trabajó mucho más que Borodin para intentar alumbrar al PCE. Según él mismo confesó años después, al marcharse Borodin de España le dejó algún dinero para que intentara conformar un partido comunista español. El tal Ramírez vivió durante algunos meses en casa de un zapatero que era el hermano de Ramón Merino Gracia, cerca de la Plaza del Carmen en Madrid. Desde Berlín, Borodin le mandó algo más de dinero y Ramírez formó un comité por la Tercera Internacional, con una veintena de jóvenes socialistas de la capital y algunos veteranos del PSOE como Daniel Anguiano. Este grupo llegó a publicar un semanario: *El Obrero*.

«Ramírez» dice en sus memorias: «Me reunía regularmente con Ramón (Merino Gracia) y el grupo. Me informaban sobre sus progresos y los animaba y aconsejaba. Pensaban que yo era más experimentado que ellos, probablemente porque representaba a Borodin, y me aceptaban como una autoridad. Recuerdo de modo especial a Ramón y a otros dos: Juan Andrade y la horriblemente fea pero hábil Virginia González. Avanzamos lentamente. Aunque captamos a un importante dirigente sindical y de partido, Daniel

Anguiano, los miembros más viejos generalmente se negaban a escucharnos. Por ello, nos centramos en los jóvenes de las Juventudes Socialistas»[3]

De hecho fue el pretendido mejicano que se hacía llamar «Ramírez» quien tuvo la idea de convertir las Juventudes Socialistas en el Partido Comunista de España. Pero cuando se convocó el II Congreso de la Internacional, Ramírez decidió en el mes de junio marcharse de Madrid en dirección a Moscú, donde intervendría como representante del PC de Méjico.

En realidad «Ramírez» no era mejicano, se llamaba Charles Francis Phillips y había nacido en Nueva York en 1895. En su larga vida Phillips tuvo varios nombres y apellidos: Jesús Ramírez, Frank Seaman, el camarada Tanner, y durante muchos años se le conoció como Manuel o Manny Gómez. En los años treinta se llamaba Shipman de día y Gómez de noche. Después que el FBI llegara a su casa en New Jersey en 1941, Shipman se convirtió brevemente Mr. Gordon de Kansas City.

Como representante del Partido Comunista Mejicano «Ramírez-Phillips» llegó a entrevistarse con Lenin en el Congreso de la Internacional. Trabajo después para la Internacional Sindical Roja (Profintern) en Méjico, y más tarde marchó a los EE UU, donde llegó a ser miembro del CC del Partido Comunista hasta el año 1929 en el que fue expulsado, aunque siguió colaborando en organizaciones próximas al movimiento comunista.

Maurin, que pudo conocer a «Ramírez» y del que nos da una descripción en su obra *Revolución y contrarrevolución en España*,[4] mezcla la figura de Charles Francis Phillips con la de un comunista mejicano: Manuel Díaz Ramírez, qué desde principios de 1930, se dedicó al estudio de la historia del movimiento obrero mejicano y que murió en 1962, mientras que nuestro hombre falleció en 1989 en Austin, Tejas con el nombre de Charles Shipman.

Manabendra Nath Roy o M. N. Roy, como se le conocía comúnmente, —el acompañante de Borodin y «Ramírez» en su visita a España— también era un alias que adoptó Narendra Nath Naren Bhattacharya para escapar de los servicios secretos británicos. En nuestro país no dejo otra huella que su presencia fugaz, sin embargo, fue durante un tiempo una figura rutilante de la Komintern.

Este revolucionario bengalí, activista y teórico internacionalmente conocido, participó en la fundación de los Partidos Comunistas de Méjico e

India. Durante la Primera Guerra Mundial Roy recorrió Indonesia, Japón, Corea, Méjico, Filipinas y Estados Unidos en busca de apoyo armado para la revolución india, y fue en EE UU donde descubrió el marxismo.

Participó en el II Congreso de la Internacional Comunista, y Lenin lo recibió personal y calurosamente encargándole un suplemento a las *Tesis preliminares sobre las Cuestiones Nacional y Colonial*. Durante años fue el contrapunto marxista de Gandhi en la lucha por la independencia de su país. Tras cumplir una misión en China junto a Borodin, en diciembre de 1929 *Inprecor* anunció la expulsión de Roy de la Komintern, casi simultáneamente a la caída en desgracia de Buharin.

Ramírez-Phillips recuerda a Roy como un buen amigo «Me gustaba. Me parecía una personalidad muy brillante, fascinante, y sosteníamos muchas discusiones, largas polémicas sobre el socialismo, y jugábamos bastante al ajedrez… Se tomaba a sí mismo muy en serio, y consideraba que su cometido en la vida consistía en prepararse para la liberación de la India del régimen británico y actuar como un militante protagonista en ella»[5]

Gorkin, que coincidió con Roy en Moscú durante su estancia en 1924, también nos dejó sus impresiones sobre el comunista hindú. «Roy era joven, más bien alto y esbelto, de maneras delicadas, facciones finas y ojos lánguidos y soñadores. Un bello tipo oriental. Pero distaba mucho de tener la contextura de un auténtico jefe revolucionario. Vestía elegantemente, a la última moda europea… Roy se hacía adorar un poco a la manera de un ídolo oriental: no se prodigaba demasiado; contrariamente a un Doriot, adoptaba un aire indiferente, sin sonreír ni saludar a nadie, y sus gestos eran suaves y ceremoniosos»[6]

Un personaje muy distinto fue Antonio Graziadei, conocido como «Tonino», el responsable encargado por la Internacional para conciliar al «Partido de los 100 niños» y al PCOE nacido de la escisión socialista en 1921. De origen noble, Graziadei era un prestigioso profesor de economía y fundador del Partido Comunista Italiano. Diputado socialista desde 1910, fue miembro del Comité Central del PCI, sufriendo las agresiones fascistas y siendo privado de su cátedra.

En el verano de 1920 fue delegado italiano en el II Congreso de la Komintern, apoyando la línea oficial frente a Serrati. Fue miembro de la delegación del partido en el II Plenario ampliado del Ejecutivo de la

Internacional en junio de 1922, y en noviembre participó en el IV Congreso. Ese mismo año vino a España como emisario, y de sus gestiones nacería el definitivo Partido Comunista de España. Aunque fue expulsado del PCI en 1928 acusado de revisionismo, tras la Segunda Guerra Mundial volvió a ingresar en las filas comunistas y recuperó su cátedra en Parma.

Graziadei era un intelectual académico, profundo conocedor de la teoría económica marxista, y en el informe que libró a la Internacional sobre su misión en nuestro país se deja traslucir ese talante cuando enjuicia a los responsables de las respectivas delegaciones de los dos partidos que se iban a fusionar: el joven dirigente del sindicato de la madera Gonzalo Sanz, por el «Partido de los 100 niños», y el ilustrado Núñez de Arenas del PCOE. De Sanz dijo, de un modo un tanto condescendiente propio de la *intelligentsia* frente al proletario luchador y consciente, que «era admirable oír a ese obrero hablar, de igual a igual, sobre todo respecto a la fusión, con un intelectual como Núñez de Arenas». Su apreciación sobre Núñez era que poseía «una notable inteligencia y una cultura de primer orden», pero que, como la mayoría de los líderes del PCOE, era acaso «un poquito centrista»[7]

Graziadei cumplió bien su misión y en ningún momento quiso sacar provecho personal de ella, como ocurrió en otras ocasiones con los enviados de la Internacional que, haciendo abstracción de la realidad española, pretendían imponer tareas imposibles, buscando el aplauso de la Komintern. Este fue el caso de Doriot y la campaña contra la guerra de Marruecos que planteó a la dirección de un PCE totalmente desarticulado en el año 1924.

La lucha de Abd-el-Krim contra el colonialismo español era uno de los temas centrales en la propaganda del PCE, y existía un comité conjunto de los partidos comunistas francés y español que agitaba con el lema: «¡Viva la fraternización de los soldados españoles y franceses con los árabes!», que más tarde se sustituyó por el de: «Conclusión de una paz inmediata».

En Francia, con un régimen de libertades y un Partido Comunista fuerte, la campaña adquirió unas dimensiones importantes. Huelgas, mítines, manifestaciones se sucedían contra la «guerra de banqueros y capitalistas», por «el reconocimiento de la República independiente del Rif», por «la evacuación de Marruecos y de todas las colonias». *L'Humanité*, el periódico del PCF, no cesaba de denunciar «la matanza de un pueblo luchando por su in-

dependencia», e invitaba a los soldados a «fraternizar» con los combatientes rifeños.[8]

En esas fechas, Doriot era un obrero metalúrgico parisino que llevaba una carrera fulgurante en el seno del Partido Comunista Francés. Con 26 años era ya miembro del Comité Central, y líder de las Juventudes Comunistas desde 1922, así como delegado francés en la Komintern, lo que le llevó a visitar en numerosas ocasiones la URSS, en las sesiones plenarias de ese órgano de dirección del comunismo mundial. Como responsable de las Juventudes Comunistas, buena parte de su éxito radicaba en la lucha que había emprendido contra la guerra del Rif. En 1923 fue procesado y condenado por pedir públicamente la independencia para Marruecos. Lo sacó de la prisión, en abril de 1924, el ser elegido como diputado por el distrito de Saint-Denis, del que terminaría siendo alcalde en 1930.

Doriot gozaba en esa época de una gran popularidad en el partido, apareciendo como un elemento prometedor. Era muy ambicioso y pretendía la dirección del PCF, pero para ello dependía de la Internacional. Cuando intervino en España, en noviembre de ese mismo año de 1924, su mayor interés radicaba en ampliar a nivel internacional la campaña contra la guerra del Rif para consolidar su posición en el seno del partido francés y en la dirección de la Komintern. Pero en nuestro país las cosas eran forzosamente diferentes bajo la dictadura de Primo y el PCE no podía realmente asumir la tarea que Doriot proponía.

Esta miopía intencionada sobre el partido al que debía aconsejar guarda relación con la imagen que de él tenía Gorkín, que le conoció y trato en aquellos años. «Poseía indudablemente una sólida personalidad, un trato simpático y directo, un valor frío y decidido y un instinto populachero: reunía, en suma, todas las cualidades del agitador y del jefe. El hecho es que había sabido imponerse en cuatro años apenas, al frente de las Juventudes Comunistas, lo mismo en París que en Moscú. Se movía en el Lux (el hotel donde se alojaban los representantes de la Internacional), en las oficinas de la Komintern y en el propio Kremlin siempre atareado y poseído de su importancia: diríase que intervenía en todo por derecho propio. Y sabía saludar y sonreír como un actor engreído en el fondo y que se esfuerza apenas por parecer modesto»[9]

Su trayectoria posterior fue muy distinta a la de los anteriores cuadros de la Internacional de los que hemos hablado. Doriot terminó siendo expulsado del Partido Comunista Francés en 1934. Poco después fundó el Parti Populaire Français que fue una organización claramente fascista. Tras la ocupación alemana de Francia en 1940, Doriot fue partidario de la colaboración y participó en la fundación de la Legión de Voluntarios Franceses contra el bolchevismo, llegando a combatir en el frente ruso junto a los alemanes. En 1944 se refugió en Alemania, e intentó organizar un Comité de Libération Française; murió al ser ametrallado su vehículo por dos aviones, posiblemente alemanes.

Dos figuras de tono relativamente menor también intervinieron cerca del PCE en los años de la dictadura de Primo de Rivera. El polaco «Valetsky», en la Conferencia de Durango en junio de 1927, y el italiano «Greco» o Grieco, en agosto de 1929 a raíz del III Congreso del PCE.

Valetsky era, probablemente, Henryk Walecki, nombre de guerra de Maksymilian Horwitz, un físico y matemático polaco fundador del Partido Comunista de los Trabajadores de Polonia, nombre que adoptaron los comunistas en aquel país desde 1918 a 1925. En 1922 Walecki entró a formar parte del Comité Ejecutivo de la Internacional. Desde 1926 residió en la URSS afiliándose al Partido bolchevique. Pero en 1937 fue arrestado[10] y condenado a muerte por *traición y participación en una organización terrorista contrarrevolucionaria*, convirtiéndose en una víctima más de las grandes purgas del estalinismo.

Como buen cuadro disciplinado, Walecki defendía la estrategia que marcaba la Internacional y podía hacerlo con brillantez citando a los clásicos del marxismo. No obstante, en su intervención en España tuvo poco éxito y el PCE dio muestras de independencia frente a la absurda propuesta de participar en la farsa seudo-parlamentaria diseñada por el dictador Primo de Rivera.

El representante de la Internacional que intervino en el III Congreso del PCE, convenciendo a la mayoría de que bajo la dictadura de Primo era derechista defender una República Federal Democrática, fue el italiano Ruggero Grieco «Garlandi», uno de los fundadores del PC italiano, muy próximo al consejista Amadeo Bordiga. Bajo el fascismo se vio obligado a huir a Suiza en 1926, y algunos sostienen que esta huida provocó el arresto de

Gramsci. Condenado en rebeldía a 17 años de prisión se entregó a las tareas del partido en el exilio y a las misiones que le encomendaba la Ejecutiva de la Internacional a la que pertenecía. Entre 1927 y 1937 hizo numerosos viajes por Europa Occidental, entre ellos estuvo su visita a España, pero en 1931 fue detenido en París con documentación falsa, aunque consiguió ser liberado al poco tiempo.

En España también fueron arrestados durante estos años algunos emisarios de la Komintern. Fue lo que le ocurrió Louis Sellier, un representante municipal del PCF que por circunstancias llegó a ser Secretario General del partido francés, —con carácter interino— de enero de 1923 a agosto de 1924. Expulsado de la organización en 1929 fundó el Parti Ouvrier Paysan, que se convirtió en 1930 en el Parti d'unité prolétarienne, situado entre el comunismo y la socialdemocracia.

Por un defecto en la falsificación de su pasaporte, Sellier fue detenido en nuestro país, incautándosele documentación comprometida y precipitando el arresto de Joaquín Maurín. Sellier, —aun siendo extranjero y cargo público en su país— fue tratado con dureza por la policía española, que lo tuvo retenido y desnudo durante los interrogatorios, antes de expulsarlo de España.

Algo parecido le ocurrió, en el verano de 1923, a un joven italiano llamado Dino Tranquilli. Con algo más de 20 años llegó a Madrid acompañado de Gabriella Seidenfeld. Al muchacho lo había convencido en Berlín Willi Münzenberg, —otro joven comunista como Dino— para que viajara a España con la misión de organizar el Socorro Rojo Internacional. Ya en nuestro país, Tranquilli, alternaba sus labores militantes con la escritura de artículos sobre España para *Izvestia,* de Moscú y *L'Humanitè* de París.

Dino y su compañera fueron arrestados en Madrid. Puesto en libertad a finales de enero de 1924, Tranquilli se instaló en Barcelona y comenzó a colaborar en *La Batalla*, el semanal que editaba Maurín. Fue por entonces cuando nuestro hombre empezó a firmar con el pseudónimo de Ignazio Silone, pseudónimo que adoptó por el caudillo Poppedius Silo, rebelde contra Roma en las guerras sociales, para manifestar así su simpatía por la oposición catalana frente al centralismo de Madrid. En abril de 1933, sólo algunas semanas después del ascenso al poder de Hitler en Alemania, el pseudónimo de Ignazio Silone se hizo mundialmente famoso al firmar la

extraordinaria novela *Fontamara*, que tocó con fuerza las fibras sensibles en toda la Europa antifascista.

En vísperas de la proclamación de la República en nuestro país, con un PCE que sólo existía nominalmente, la Komintern envió a Barcelona a cinco de sus cuadros: Jacques Duclos, como representante de la Internacional, Octave Rabaté, que representaba a la Profintern, Jules Humbert-Droz, que él mismo confesaba no saber muy bien para qué había sido destinado a España, Edgar Woog, enviado como instructor para asesorar al partido en la constitución de células de fábrica, y un tal «Pierre», que representaba a la Internacional Juvenil Comunista.

Duclos se había unido al PCF poco después de su fundación. En 1924 y 1925 estudió en Bobigny en la escuela central del PCF. En junio de 1926 fue elegido miembro del Comité Central y diputado en la Asamblea Nacional francesa. Trabajó para la Oficina Europea Occidental de la Komintern que le envió a España. Durante la Segunda Guerra Mundial, Duclos fue responsable del movimiento comunista en la clandestinidad. Años después, en 1969, como candidato a las presidenciales de la República obtuvo, con cerca de 5 millones de votos, equivalentes a un 21% de los sufragios, el mejor resultado en la historia del PCF a unas elecciones para la presidencia.

Rabaté era un obrero del metal y militante comunista con una larga trayectoria sindical. Representante del sindicato CGT en el seno de la Internacional Sindical Roja cumplió distintas misiones en España y América del Sur de 1928 a 1932. Arrestado en 1942 por los nazis fue deportado a Mauthausen, pero sobrevivió, y tras la liberación se convirtió en redactor del diario *L'Humanité*, del que llegó a ser director.

Jules Humbert-Droz era un miembro prominente de la Internacional, tal vez el más relevante de los que pisaron España en aquellos años. Había nacido en La Chaux-de-Fonds, Suiza, en 1891. Como pastor protestante experimentó una sorprendente evolución durante la Primera Guerra Mundial que le llevó desde el pacifismo tolstoiano a fundador del Partido Comunista Suizo. En 1919 se instaló en Moscú, compartiendo con el húngaro Matyas Rakosi y el finlandés Otto Kuusinem la dirección operativa de la Internacional Comunista. Responsable de la sección latina de la Europa Occidental tenía bajo su responsabilidad a cuadros tan destacados como el italiano Togliatti o el francés Thorez. Pero a comienzo de los años 30 entró en con-

flicto con Stalin, lo que le llevó a ser postergado en la Komintern, y fue esa circunstancia lo que lo trajo a España.

Según relataría posteriormente en sus memorias Humbert-Droz vivió su estancia en nuestro país como un verdadero destierro, al encontrarse impotente para orientar un partido que ni siquiera era un esqueleto. El consejero escribió: «El Partido Comunista no existía en Barcelona… Era la primera vez que tenía como tarea poner en movimiento un partido que no existe… En Madrid continuamos siendo una pequeña secta sin influencia… y en Bilbao va mal, muy mal, pues sólo cuentan con catorce miembros. Luego añadía: «Parece ser que en Sevilla las cosas van mejor, pero será preciso controlar los números que nos dan, un poco demasiado redondos y astronómicos… Nuestro partido continúa viviendo en una pasividad absoluta y temiendo aparecer a la luz del día… Stirner y yo tenemos que escribir una buena parte de los artículos, si se quiere que el periódico se publique»

En una carta dirigida a su esposa, fechada el 5 de febrero de 1931, Humbert-Droz le relataba: «Te diré que los cuatro peregrinos de la Meca (se refiere a los enviados por la Komintern) no tienen gran cosa que hacer… Rabaté está en su elemento: se levanta a mediodía, lee los periódicos en la terraza de un café bebiendo el aperitivo, ajenjo o vermut, se va a comer, luego vuelve para tomar el café, pasa el resto del día en el cine o en las cervecerías. El joven («Pierre», el caucasiano), aunque un poco menos perezoso, sigue poco más o menos su ejemplo. Stirner multiplica los paseos y las excursiones, y yo me esfuerzo en hacer algo útil redactando los documentos del partido… La censura no deja pasar nada y como nuestra filial (el PCE) está fuera de toda vida política y de la vida obrera, no se sabe nada, ni siquiera lo que pasa en la propia ciudad. ¡Gracias al *Berliner Tagblatt* supimos que había una huelga en la universidad!».

Sin embargo, en su informe a Moscú que lleva fecha del 14 de febrero de 1931, Humbert-Droz cambia de tono y escribe: «Un rasgo característico respecto a la posición de Bullejos (entonces Secretario General del PCE): está contra la consigna de los soviets, incluso como consigna de propaganda, por lo que nos ha costado mucho trabajo convencer a nuestros camaradas del ejecutivo, después de este veto de Bullejos, que el programa del partido debe trazar como perspectiva una España soviética»

Once días más tarde, el 25, volvía Humbert-Droz a enviar un nuevo informe a su jefe de la Komintern, Manuilsky, en el que insistía sobre la situación real del PCE: «Jamás apareció con tal nitidez la tragedia de la situación de aislamiento de nuestro partido, de su pasividad, de su absoluta falta de organización y de relación con las masas… No obstante, las orientaciones enviadas a las regiones para organizar mítines tan pronto se restablecieran las garantías constitucionales, ninguno fue organizado en parte alguna» Y el 1 de marzo, dirigiéndose de nuevo a su esposa le decía: «Resulta poco interesante trabajar por la simple razón de que no existe partido y que lo que aquí se denomina Partido Comunista es una pequeña secta sin posibilidad de irradiación». Esto era cierto, pero no lo era menos que ni él, ni los demás delegados de la Internacional Comunista, encargados de dirigir el PCE, eran capaces de comprender la verdadera situación española.

A mediados de marzo, un mes antes de la proclamación de la República, Humbert-Droz informaba a Manuilsky: «Las ilusiones republicanas y parlamentarias se disipan y las huelgas, los conflictos económicos se multiplican». Ciego ante lo que estaba sucediendo, en un nuevo informe escrito días después Humbert-Droz, afirmaba sin miedo a la contradicción ni al ridículo: «Las elecciones municipales fueron una victoria inmensa de los republicanos y de las fuerzas de izquierda pequeño burguesas. El rey abdicó y abandonó el país precipitadamente, acompañado de varios grandes de España, la nobleza terrateniente del régimen. Se quemaron un buen número de iglesias y de conventos. En una palabra: el desarrollo de los acontecimientos confirmó mi análisis de la situación»[11]

Humbert-Droz fue rescatado de su particular infierno español a finales de 1931cuando se le ordenó regresar a Suiza para trabajar en el Partido Comunista de su país del que llegaría a ser Secretario General. Pero en 1936 regresó a España durante nuestra guerra civil.

Stirner, el compañero de Humbert-Droz que aprovechaba su estancia en España para «multiplica los paseos y las excursiones», era realmente Edgar Woog, otro comunista suizo que en 1920 había emigrado con su familia a Méjico, donde se convirtió en un hombre de la Komintern bajo el alias de Stirner. En 1931 fue detenido en Barcelona, encarcelado y expulsado del país. También volvería a tener contacto con España a raíz de la guerra civil ya que se le encargó la recluta de brigadistas internacionales, lo que le valió un año de prisión en Suiza, aunque no fue, ni mucho menos, su única es-

tancia en la cárcel. Este políglota que hablaba varios idiomas con soltura, fue un convencido comunista hasta su muerte en 1973.[12]

Una personalidad más siniestra caracterizaba a Pierre el caucasiano, según lo llamaba Humbert-Droz. Realmente se trataba de Ernst Moritsovich Gerö, y de sus actividades durante la guerra civil hablaremos más adelante.

La marcha de estos agentes supuso el remplazo por otros dos, el alemán Stocker y el polaco Purman. Walter Stoecker era un comunista alemán de la primera hora que participo en el fallido intento revolucionario de 1919 en su Alemania natal. Miembro del Reichstag desde 1920, fue elegido portavoz del grupo parlamentario comunista cuatro años después, cargo que mantuvo hasta 1929, pero con el cambio en la dirección del partido y el ascenso a Secretario General de Ernst Tähelmann, Stoecker fue relegado a un segundo plano, razón que tal vez explique su misión en España. Con la llegada de los nazis al poder fue detenido después del incendio del Reichstag, y tras pasar por varios campos de concentración, murió de fiebres tifoideas en Buchenwald el año 1939.

Leon Purman, que también fue conocido por los alias de Kazik, Brunon y Mann, en 1918 ayudó a organizar los soviets y la Guardia Roja en la región de Polonia, y asistió al congreso fundacional del Partido Comunista de los Trabajadores de Polonia. En el IV Congreso del Partido, en 1927, fue nombrado miembro del Comité Central, pero en el V Congreso de 1930 no fue reelegido. A finales de 1933, cuando la atmósfera política en Moscú se hizo más tensa, especialmente entre los emigrantes comunistas polacos, Purman se suicidó.[13]

Quien sucedió a Purman cuando éste dejó España fue Heinz Neumann, un comunista alemán, que había sido director del periódico del partido *Die Rote Fahne* en su país y que llegó al nuestro a finales de 1932 con la misión de apoyar la publicación de *Mundo Obrero*. Con el alias de «Octavio», trabajó durante unos meses como redactor, al comienzo valiéndose de un traductor, y después, con gran atrevimiento, escribiendo directamente en un castellano plagado de galicismo, lo que llegó a confundir a la misma policía, despistada sobre el origen del periodista. Su mujer, Margarette Buber, también colaboró en estas tareas, contribuyendo a editar periódicos clandestinos cuando *Mundo Obrero* era suspendido. Se trataba de pequeñas gacetas que eran repartidas gratuitamente por los militantes como propaganda; aunque la ale-

mana no salía de su asombro cuando comprobó que en algunos kioscos se vendían por cinco céntimos.[14]

Fueron otros muchos los delegados que pasaron por España en esas fechas, como Philipp Dengel, o Sigi Bamatter que ayudó a establecer comunicación por radio entre el PCE y Moscú. Algunos solo conocidos por sus nombres de guerra, y otros identificables, como «Andrés», un polaco llamado Adam Landy y apodado Adam Witkowski, que también fue víctima en 1937 de las purgas estalinistas.[15]

Durante 1931 los delegados de la IC insistían en criticar a la dirección española por no discutir en las reuniones el carácter del viraje que la Komintern quería dar al partido, para que se convirtiera en una organización bolchevique y actuara como tal. La dirección española y la delegación de la Internacional se acusaban mutuamente; aunque los delegados intervenían en los asuntos de la organización como si fueran los dirigentes del partido. Stoeker quería siempre celebrar reuniones interminables para discutir el famoso viraje, y, según Bullejos, los dirigentes españoles le pusieron el sobrenombre de «camarada discuta».

Con la proclamación de la República la Komintern redobló sus esfuerzos en España y comenzaron a hacer su aparición toda una serie de cuadros que acompañaron la marcha del PCE durante largo tiempo. Ese es el caso del argentino Codovilla.

Victorio Codovilla llegó a ser el dirigente más importante del comunismo argentino y sudamericano, y uno de los más importantes en la historia de la Komintern, hecho que fue reconocido al punto de bautizar con su nombre una barriada de Moscú. Apodado «El Gordo», algunos de los seudónimos utilizados a lo largo de su vida fueron: Luis Medina, Louis, Blanchet, Colombo, Banquero, Luis Pérez Carpiz, Tomás y Víctor Medineuse. Nacido en Italia en 1912 emigró a la Argentina donde participó en la fundación del Partido Comunista en ese país, llegando a ser miembro de su CC. En 1927 fue elegido miembro de los secretariados Latinoamericano y Británico-Americano, mientras colabora en la organización del Socorro Rojo Internacional. En 1929 sería enviado por la Komintern para organizar el I Congreso de partidos comunistas de América Latina, defendiendo las tesis oficiales frente a los planteamientos del peruano José Carlos Mariátegui, rechazados por la URSS como «heterodoxos».

Con la proclamación de la República española Codovilla se instaló en Madrid, y en agosto de 1932 participó en la operación que desplazó a Bullejos de la dirección del PCE, para ser reemplazado por José Díaz.

Codovilla permaneció en suelo español como enlace de la Komintern hasta septiembre de 1937, en plena guerra civil, cuando fue relevado. Con posterioridad retornó clandestinamente a Argentina junto con su esposa y se puso a la cabeza de los órganos directivos del Partido Comunista Argentino. La prensa comunista argentina desplegó un verdadero culto a la personalidad de Codovilla como militante antifascista, en parte para contrarrestar las noticias que publicaban los diarios sobre los «crímenes de Codovilla en España». Detenido y expulsado a Chile, volvió a la Argentina para seguir jugando un papel determinante en el PC de ese país. En 1964 asistió en La Habana a la Conferencia de los partidos comunistas latinoamericanos. Ya enfermo, partió a Moscú, donde recibió en 1969 la Orden de la Revolución de Octubre, muriendo en 1970.

Codovilla fue un personaje controvertido. Sus detractores vertieron sobre él las críticas más acres, sin embargo Dolores Ibárruri lo recuerda con afecto en su libro *El único camino*.[16] Tal vez el mejor de los retratos de este comunista lo hiciera Pablo Neruda, que tuvo la oportunidad de tratarlo en Chile. En sus memorias, el poeta, recuerda a Codovilla como: «un representante de la III Internacional que tenía todos los defectos de la época. Era personalista, autoritario, y creía poseer siempre la razón. Imponía fácilmente su criterio y entraba en la voluntad de los demás como un cuchillo en la manteca. Llegaba apresuradamente a las reuniones y daba la sensación de tenerlo ya todo pensado y resuelto. Parecía que escuchaba por cortesía y con cierta impaciencia las opiniones ajenas; luego daba sus instrucciones perentorias. Su capacidad era inmensa, su poder de síntesis era abrumador. Trabajaba sin ningún descanso e imponía ese ritmo a sus compañeros. Siempre me dio la idea de ser una gran máquina del pensamiento político de aquellos tiempos.

Por mí tuvo siempre un sentimiento muy especial de comprensión y deferencia. Este italiano, transmigrado y utilitario en lo civil, era desbordantemente humano, con un profundo sentido artístico que lo hacía comprender los errores, las debilidades en los hombres de la cultura. Esto no le impedía ser implacable —y a veces funesto— en la vida política»[17]

Este apunte encaja perfectamente con la imagen de un hombre fiel al aparato, inteligente pero poco flexible y muy dogmático. En esto último venía a coincidir con el que fue durante aquellos años su más estrecho colaborador en España, el búlgaro Stepanov.

Stoyán Miniéevich Mínev, también conocido mediante los pseudónimos Ivanov, Shavarosh, Richar, Lebedev, Focius, Stepanov o Moreno, era un médico, miembro del partido Bolchevique desde 1917, y desde 1919 uno de los primeros agentes de la Komintern, prestando servicio como tal en Alemania, Francia, e Italia entre 1921 y 1926. Especialista en el movimiento comunista de Francia y España, fue profesor de las secciones española y francesa en la Escuela Internacional Lenin de Moscú. En los años treinta, fue responsable de la Internacional en estos dos países. En un documento autobiográfico desvela que contrajo matrimonio con la española Josefina Simón —militante del PCE desde 1934—, con la que tuvo un hijo. Aunque reconocía en ese mismo documento que desde marzo de 1939 no sabía nada de ellos, ni siquiera si estaban vivos o muertos.

Desde 1936, Mínev trabajó en nuestro país como delegado del Comité Ejecutivo de la Internacional. En 1937 participó en la campaña propagandística contra el POUM, dirigiendo la elaboración y edición del libro *Espionaje en España*, un panfleto en el que se acusaba a ese partido de trabajar para los fascistas, y firmado bajo el seudónimo colectivo de Max Rieger. Llamado a Moscú en febrero de 1938 volvió a España en marzo para colaborar con el PSUC, si bien siguió tomando parte en las reuniones del Comité Central del PCE y participando en la comisión que redactó los famosos Trece Puntos del presidente Negrín.

Al final de la guerra abandonó el país desde Elda, en compañía de varios dirigentes del PCE, entre ellos Dolores Ibárruri. Pero de vuelta a la Unión Soviética, recibió la orden de escribir un informe para la Internacional Comunista analizando las causas de la derrota en España. Este informe sólo salió a la luz en la década de 1960, habiendo permanecido durante todo ese tiempo en poder de su esposa que había sobrevivido. Posteriormente pasó al Archivo del Comité Central del PCE.

Tras disolverse la Komintern —mayo de 1943— Stepanov se doctoró en Ciencias Económicas, ostentando cargos académicos en el Instituto de la Academia de Ciencias de la URSS hasta su fallecimiento en mayo de 1959.

Hombre de partido, vivió por y para la causa comunista. De hecho, él mismo llegó a afirmar que en relación al partido nunca tuvo ni desviaciones ni vacilaciones, y aunque eso es cierto, Stepanov o Moreno, tampoco tuvo nunca la flexibilidad suficiente para ajustarse con la sutileza necesaria a los virajes de la Komintern, apostando por un modelo canónico de revolución que para él era la bolchevique de 1917.

Son numerosos los testimonios que avalan su cerrazón y su dogmatismo. En diciembre de 1933, durante el XIII Pleno de la Komintern en Moscú, se abordó la situación en España y una voz desde la sala gritó: «¿Y el fascismo?» La respuesta de Stepanov fue fulgurante: «En España son, sobre todo, los anarcosindicalistas los que actúan en el movimiento fascista»[18]

Hernández relata en su libro *Yo fui ministro de Stalin* como sostuvo una discusión con Stepanov, en vísperas de las elecciones de febrero del 36, sobre el modo que podía adoptar la revolución en España, en la que el búlgaro le dijo «¡Qué modo español ni qué ocho cuartos! Para los comunistas no hay más que un solo modo, el modo leninista, el modo soviético. Y ese modo —recalcó— será el modo de ustedes en España».[19]

Hacia el final de la guerra, en enero de 1939, cuando la situación era ya desesperada, Stepanov, intervino en una reunión de la dirección del partido y propuso la implantación de una «dictadura revolucionaria democrática» ejercida por un «Consejo especial para la Defensa del Trabajo y de la Seguridad Social encargado de administrar el estado de guerra y compuesto por dos ministros, dos o tres políticos y un par de militares seguros y enérgicos». Su propuesta, fue acogida favorablemente por algunos dirigentes como Ibárruri y Hernández. Con Stepanov no había medias tintas ni en los momentos más delicados.

Con el estallido de la guerra civil y, sobre todo, con el sesgo que adquirió en los primeros meses, la Internacional decidió reforzar su presencia en España. Primero se abordó la normalización de las relaciones diplomáticas con la URSS y la ayuda militar, que no comenzó a llegar hasta finales de octubre, luego la Internacional envió a España a Togliatti.

La URSS desplazó a nuestro país a muchos cuadros militares, diplomáticos o de los servicios secretos: generales como Malinovski, Stern, Goriev, Rodimtsev, el «consejero naval» Kusnetsov, o el comandante de los tanquistas Pavlov. Se calcula que llegaron más de quinientos «técnicos» militares,

sobre todo pilotos, tanquistas y artilleros. Pero también llegaron hombres destacados, como el embajador Marcel Rosenberg, el cónsul Antónov-Ovséyenko —que estuvo al mando del asalto del Palacio de Invierno, en 1917— o el periodista Koltsov, estos últimos fueron todos víctimas, a su regreso a la URSS, del terror estalinista.

El juicio sobre esta participación en su conjunto es un tema controvertido. Incluso observadores muy críticos, han puesto de manifiesto el carácter fundamentalmente positivo de esta ayuda, especialmente de cara a la defensa militar. He aquí lo que escribió, por ejemplo, el historiador norteamericano David Cattell: «Antes de que llegasen los oficiales rusos a España no existía un ejército, sino sólo grupos armados carentes de cualquier coordinación y de cualquier plan. Poco tiempo después de su llegada, hubo un cambio radical en todo el sistema defensivo. En el plazo de seis meses se logró crear un ejército que fue capaz de derrotar en Guadalajara a las tropas italianas, dotadas de equipo moderno, y contener durante tres años el avance de los ejércitos de Franco, adiestrados por los alemanes e italianos y apoyados por las divisiones de Mussolini… fue en gran parte mérito suyo que las tropas republicanas resistieran tanto tiempo».[20]

Algunos de estos cuadros ya habían llegado a España con anterioridad, como es el caso de Vittorio Vidali, un italiano que vino a finales de 1934 para ayudar a los represaliados por la revolución de Octubre, pero que tenía detrás una larga historia. Miembro del Partido Comunista de Italia desde 1921, huyó de su país tras el ascenso al poder de Benito Mussolini y trabajó con los seudónimos de Enea Sormenti, Comandante Carlos, y Carlos Contreras. Fue miembro del Partido Comunista de Estados Unidos y del Socorro Rojo Internacional. En el verano de 1927, viajó a Méjico vía Cuba y allí conoció a Tina Modotti, a Augusto César Sandino, Agustín Farabundo Martí y a Julio Antonio Mella. A Tina Modotti, con la complicidad de Vidali, se le achacará el asesinato de Mella en 1929.

Estando ya en España, el 18 de julio de 1936, Vidali se hizo cargo de la organización militar del partido, y requisó el convento de Cuatro Caminos para convertirlo en la sede del V Regimiento, junto con Modesto y con Castro Delgado, con el que mantuvo una buena amistad según cuenta el español. Como comisario político en diversas unidades, la República le facilitó pasaporte con el nombre de Carlos Contreras.

A Vidali se le acusó de estar implicado en la desaparición de Andreu Nin. Según Jesús Hernández y otros, el italiano tomó parte en los interrogatorios del líder del POUM, y ayudo a simular el ataque de un comando alemán para liberar al prisionero. Interpelado al respecto, Vidali afirmó tiempo después: «De mí se han dicho muchas cosas, pero esto es una estupidez. ¿Por qué tenía necesidad de organizar tal montaje? En aquella época, no se andaba con contemplaciones si se trataba de fusilar a un anarquista o aun poumista. Imaginad la necesidad que tenían de mí».[21]

Al final de la guerra civil española Vidali se trasladó a Méjico con Tina Modotti, con quien mantenía un romance. Tras la Segunda Guerra Mundial regresó a Italia y fue acogido como un héroe, llegando a ser senador por el Partido Comunista.

Es imposible enumerar todos los cuadros soviéticos que participaron en la guerra enviados por la URSS. Ni siquiera es posible hacerlo con los enviados por la Internacional, ya que en algunos casos, las fuentes disponibles sólo los mencionan con una inicial. Pero sabemos que fueron muchos los que con misiones distintas se desplazaron a nuestro país para trabajar en sectores específicos.

Hemos de tener en cuenta que el asunto de España resultaba crucial también para la Internacional. Ésta estaba dirigida por un grupo de hombres que habían pensado, preparado y querido la política de frentes populares con un doble fin: para defender objetivamente los intereses de la URSS, favoreciendo la alianza del Estado-guía con las potencias occidentales, y para restituir a los partidos comunistas y a sus dirigentes un mínimo de autonomía. Por este último motivo se hacía imprescindible contrapesar la tarea que venían desarrollando Codovilla y Estepanov en nuestro país desde comienzos de los años 30, enviando a España a un cuadro de la talla de Togliatti, que actuó aquí con los nombres de Alfredo o Ercoli.

«Stepanov» y «Alfredo» encarnaron las dos corrientes que coexistían en el seno de la dirección del PCE: el primero recibió el apoyo de la mayor parte del núcleo dirigente, en particular de Dolores Ibárruri, que no pocas veces se hizo portavoz de sus directrices. Togliatti, sin embargo, a pesar de no contar con la simpatía de importantes figuras del Buró Político español, —en particular, fue franca su enemistad con Jesús Hernández— supo imponer su orientación mediante su influencia sobre el Secretario General,

José Díaz, y de forma directa sobre el máximo responsable de las Juventudes, Santiago Carrillo.

En cualquier caso, los roces entre ambas corrientes se manifestaron siempre en el plano de las discusiones internas acerca de los problemas tácticos planteados por la evolución de la situación política derivada de la guerra, y apenas se traslucieron hacia el exterior hasta los últimos compases de la contienda.

Togliatti fue sin duda el cuadro más relevante que la Komintern envió a nuestro país. No sólo era el segundo secretario de la Internacional, era así mismo un teórico de altura, heredero intelectual de Gramsci tras el encarcelamiento de éste por los fascistas. Socialista desde sus años universitarios y colaborador de la revista *L'Ordine Nuovo*, Togliatti había sido fundador del Partido Comunista italiano (PCI) y miembro de su Comité Central desde 1922. Elegido para el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista en 1924, fue promovido al secretariado de ese mismo organismo dos años más tarde.

Tras la finalización de la guerra en España, Togliatti, se dirigió a la capital soviética, donde pasó toda la Segunda Guerra Mundial, enviando por radio mensajes propagandísticos a la resistencia italiana, y hasta 1944 no regresó a su país. Ese mismo año, tras la caída de Mussolini, formará parte del gobierno Badoglio como ministro sin cartera. Posteriormente, participará en diversos gobiernos de unidad nacional, ocupando la Vicepresidencia y el Ministerio de Justicia. En 1947, pasó a la oposición siendo el Secretario General del todo poderoso PCI, cargo que ocupó hasta su muerte, acaecida en Yalta en 1964, adonde había viajado para entrevistarse con Kruschev. Las notas que redactó para esa entrevista que nunca tuvo lugar, conocidas como el *Memorial de Yalta*, son su último documento político.

A Togliatti se le considera el padre del policentrismo, teoría sobre los partidos comunistas que preconizaba la «unidad en la diversidad», y reflejaba las posiciones críticas hacia la URSS que el dirigente italiano comenzó a desarrollar tras la crisis chino-soviética. Las ideas de Togliatti sirvieron de inspiración a otros dirigentes comunista europeos, como Carrillo o Berlinguer, en propuestas políticas posteriores como las del eurocomunismo o el compromiso histórico.

La fecha exacta en que se inicia la estancia del dirigente italiano en nuestro país ha sido objeto de controversia. Oficialmente llegó a finales de julio de 1937, no obstante su presencia es probablemente anterior, y muchos autores lo sitúan en nuestro territorio desde agosto de 1936. Togliatti había seguido de cerca las «cosas de España» desde muchos años atrás, sin embargo el italiano siempre negó que hubiera estado aquí antes del verano de 1937. Quien afirma lo contrario de forma más decidida y con mayor lujo de detalles es Jesús Hernández, que no precisa la fecha del primer encuentro en España con Togliatti, pero da algunas referencias cronológicas mediante las cuales se le puede situar entre el 27 y el 31 de agosto de 1936.

La razón para callar sobre aquellas primeras misiones pudiera estar en el temor a que el fantasma del peligro rojo, basado en la presencia de gentes de la Komintern en España, lo usara la propaganda burguesa y fascista para agitar el espantajo del anticomunismo. Pero Togliatti seguía negando su temprana presencia en nuestro país muchos años después. Tal vez el motivo profundo que le llevara a sostener esa postura estuviera en el intento de no cargar con el peso de algunas decisiones que los comunistas españoles sostuvieron en aquellos momentos, por ejemplo la relativa a la caída de Largo Caballero como presidente del gobierno en la primavera de 1937.

En 1962 Togliatti seguía afirmando: «Es falso que haya estado en España varias veces antes de 1937… es falso que yo haya asistido a una reunión en la que yo habría pedido "lisa y llanamente" que Largo Caballero fuese expulsado del gobierno y sustituido por Negrín... Yo nunca vi a Largo Caballero. Con Negrín sólo me entrevisté en Madrid una vez… La realidad es que la responsabilidad política, en ésta como en todas las demás cuestiones, incumbía al partido español y a los organismos y hombres que lo dirigían».[22]

Por el contrario, para Hernández, es Togliatti el responsable número uno de la caída de Caballero, el que movió los hilos y dio las órdenes. Apoyando esta tesis se debe apuntar que en mayo de ese año de 1937, había aparecido en *Stato Operaio*, una revista del PCI, un artículo durísimo contra Caballero y muy laudatorio para Negrín; por supuesto esta publicación no se hizo a espaldas de Togliatti. En definitiva, fuera el italiano responsable o no de la crisis del gobierno Caballero, la Komintern consideró que se necesitaba un hombre hábil para intervenir en nuestro país, y Togliatti se asentó de forma estable en España, donde, desde el territorio controlado por la República, su actuación vino a resultar fundamental en el PCE durante el conflicto.

Otro tema controvertido es hasta qué punto Togliatti orquestó la eliminación del POUM y la lucha contra los anarquistas. No cabe duda que el italiano estaba de acuerdo con las medidas que se tomaron sobre este asunto. Sin embargo, no podemos afirmar que jugara un papel destacado en esos hechos, más bien se limitó a dejar obrar a otros sin involucrarse directamente.

A propósito de la represión, recordaba Franco Rodano cuál era la postura que adopto nuestro personaje: «He hablado con Togliatti sobre la represión española contra los anarquistas y siempre lo he visto imperturbable y seguro. Había que impedir que los anarquistas se movieran a gusto en su salsa, en sus experiencias revolucionarias; había muy poco margen y la guerra era demasiado exigente. En cuanto al POUM de Andrés Nin, no habría ningún problema y se hubiera podido tolerar si no existiera al mismo tiempo la presencia anarquista, con lo que constituirían una mezcla explosiva».[23]

Pero lo cierto es que la purga antitrotskista llegó a su culminación cuando Togliatti se estableció en España. Él sabía lo que estaba sucediendo, pero prefirió rehuir las responsabilidades personales en la represión. Todos los que lo encontraron en este período advirtieron esa actitud. Humbert-Droz, que lo vio en Barcelona, le pidió que interviniera para salvar la vida de un comunista suizo, acusado injustamente de traición. «Togliatti hizo como que no escuchaba y, sólo algunos días después, en una conversación, daría su respuesta: "Ya es demasiado tarde para tu amigo"».[24]

La prueba de que Togliatti sabía que toda la campaña contra el POUM respondía a una maquinación premeditada la da él mismo. Cuando se entera de la publicación del panfleto *El trotskismo al servicio de Franco. Un testimonio documentado de la traición del POUM en España*, no deja de hacer una irónica referencia en sus notas privadas: «Libro del proceso. ¡Tenemos muchos de estos!»[25]

A su llegada a Valencia, Togliatti fue hospedado en una reducida habitación proporcionada por la dirección del partido. Su situación doméstica no será muy distinta cuando se establezca en Barcelona. Su vida en España transcurrió con la máxima discreción. Apenas se dejaba ver en actos públicos y sólo visitó un par de veces a los brigadistas italianos. Ni siquiera el servicio de espionaje franquista logró tener noticias precisas sobre él.

La misión de Togliatti era delicada. Debía dirigir los pasos del PCE pero detrás de las bambalinas, dando una cierta autonomía y libertad a los dirigentes españoles. La presencia de los rusos había provocado fuertes reacciones en la opinión pública, con lo que resultaba totalmente desaconsejable que el partido pareciera dirigido por un extranjero, por un hombre de Moscú. Por lo demás, Togliatti aportará pocas novedades a la estrategia del partido, pero velará discretamente para que se cumpla en todos los frentes de actuación.

De su trabajo dará cuenta a la Komintern a través de seis cartas confidenciales a la dirección de la Internacional, la última, escrita tras el fin de la guerra civil española, cuando Togliatti, se encontraba ya en Moscú.

En sus informes abogaba por que los «consejeros» de la Internacional no dictasen la política del PCE y dejasen de considerarse los «amos» del partido, partiendo de la base de que los camaradas españoles no valían nada. Togliatti consideraba que había un grupo de dirigentes como Uribe, Ibarruri, Hernández o Giorla, que estaban en condiciones de dirigir el PCE, e incluso de dirigirlo bien. Sin embargo, no podía dejar de apreciar que las formas de trabajo de los comunistas españoles eran ostensiblemente mejorables.

«Los camaradas dirigentes pasan jornadas enteras discutiendo entre sí y con las distintas personas que trabajan en los ministerios, en el ejército, etcétera. Es una situación de sesión permanente que se desarrolla sin plan, en la que se toman bastantes decisiones, pero sin que nadie se preocupe luego de comprobar si son puestas en práctica. Todos los camaradas dirigentes están cansados, abatidos por el exceso de trabajo, enfermos. También eso es consecuencia de sus métodos de trabajo».[26]

Fiel al mandamiento de «primero ganar la guerra», contribuyó a poner el énfasis en la naturaleza de la misma, que para Togliatti era la de una guerra de independencia.

«A pesar de la acertada y vigorosa posición de nuestro partido, el carácter de la guerra como guerra de independencia no fue reconocido por las demás organizaciones antifascistas desde el principio, sino bastante tarde... Durante mucho tiempo no se trabajó ni luchó como hubiera debido hacerse en una guerra de independencia contra grandes países imperialistas sino como se hubiera podido hacer en una guerra civil española del siglo pasado».[27]

Spriano, el historiador del Partido Comunista Italiano, admite como válidas las declaraciones que le hizo Vidali asegurándole que Togliatti estuvo detrás de la elaboración de los famosos Trece Puntos del gobierno Negrín.[28]

Al final de la guerra, según Hernandez, Togliatti, intentó llegar a un acuerdo con el coronel Casado, tras el golpe de la Junta contra los comunistas. A pesar de su carácter sesgado, la acusación de Hernández parece verosímil. Togliatti, y la dirección del PCE, trataron con los casadistas, no para capitular, sino para ganar tiempo, según reconoció el mismo Togliatti en una carta que envió el 12 de marzo a Pasionaria y al resto de miembros del Buró Político ya en el exilio.

En ella Togliatti explicaba: «pensamos que el error más grave que podía cometer el P. era capitular ante la ofensiva de sus adversarios, dejándose decapitar, aislar y aprisionar en la ilegalidad. Por otra parte, no podíamos realizar un golpe de fuerza, abatir a la Junta y tomar el poder… la línea que hemos trazado es otra; es la siguiente: considerar como primer objetivo la reconquista de la legalidad completa del partido; la restitución de nuestros locales, periódicos, etc.; la liberación de todos los detenidos; el restablecimiento en sus puestos de todos los oficiales y comisarios arrestados. Para obtenerlo debemos apoyamos en los elementos honrados que no quieren la lucha anticomunista y, al mismo tiempo, debemos utilizar la amenaza, es decir, utilizar la enorme fuerza que poseemos en el ejército, para ejercer una presión sobre la Junta, las autoridades locales, etc. (...). Este primer objetivo, si no se verifican hechos nuevos, lo podemos conseguir en pocos días (...) Hoy nos pondremos en contacto con Miaja. La mayor dificultad se presentará en Madrid, pero no desesperamos de poder resolverla (...). La segunda parte de nuestro plan consiste en abatir a la Junta, no por la fuerza sino creando contra ella un fuerte movimiento de opinión pública».[29]

Hasta su salida del país, Togliatti, que es uno de los que decide quedarse hasta el final, elaboró dos textos de especial interés. Uno la carta ya mencionada, y el otro, destinado a su publicación, un Manifiesto del Comité Central del PCE, del 18 de marzo, en el que se fijaba la posición del partido ante la situación política en aquellos momentos. En ambos surge la duda sobre las posibles relaciones de algunos cuadros del partido con el coronel Casado y del conocimiento que tenían acerca de sus intenciones. Togliatti llega a afirmar que militares comunistas desobedecieron las órdenes que el partido les había dado por «un vínculo, directo o indirecto, probablemente

de tipo masónico, con los militares que preparaban el golpe de Estado (de Casado)».[30] Como vemos la masonería no sólo obsesionaba a Franco.

La intervención de la Komintern en España alcanzó proyección mundial con la creación de las Brigadas Internacionales. El origen de las mismas es temprano, se inicia en las primeras horas, tras el golpe del 18 de julio, cuando Vicente Uribe, en nombre de la dirección del PCE, telefoneó a París y se puso en contacto con Jacques Duclos, aun antes de que el Jefe del Gobierno, Giral lo hiciese con su colega León Blum. Esa primera llamada pondrá en marcha el mecanismo de solidaridad en el PCF, el partido hermano que siempre había tutelado al pequeño partido español.

En el mes de agosto Thorez ya defendía que había que prestar ayuda a la joven república española, mientras que en Madrid el PCE se planteaba formar con los extranjeros que combatían en España unidades militares especiales, relacionadas con el Quinto Regimiento.

Es el 14 de septiembre cuando se puede datar el proceso de la toma de la decisión soviética de ayudar a la República española. Siguiendo la pauta habitual, primero se reunió el Politburó del partido soviético y luego el Secretariado de la Internacional. En el encuentro se trató de la organización de la ayuda a España a través de una operación de contrabando de armas. El 16 de septiembre tuvo lugar una reunión del órgano encargado de las decisiones sobre temas políticos de la Komintern, el Presídium. En el transcurso de la reunión, Kaganovich coincidió con Thorez en que en la cuestión del contrabando de Francia a España, cualquier medio se consideraba adecuado para alcanzar el objetivo. El 18 le tocó el turno de reunirse al órgano más restringido de decisión en el seno de la Internacional, el Secretariado. Se sometieron a discusión, el despliegue de una campaña internacional, la instrumentación de ayuda material y la puesta sobre el tapete de una iniciativa para la convocatoria de una conferencia de organizaciones internacionales del proletariado.

Tras un viaje relámpago a Moscú para entrevistarse con la plana mayor de la Internacional, el «ojo de Moscú» en el PCF, Eugen Fried («Clément», «Legros» o «El Viejo»), regresó a París el 24 de septiembre y junto con Pierre Allard («Giulio Cerreti», otro *missi dominici* de la Komintern) se entrevistó con Thorez, Maurice Tréand y Émile Dutilleul, el tesorero del partido francés. Aquí se tomó el acuerdo de crear una red de reclutamiento y encuadra-

miento de voluntarios para combatir en España. El PCF y sus militantes se encargarían de proporcionar la logística.

En España, a nivel del gobierno, los primeros contactos sobre el tema son obra de los dirigentes comunistas españoles. La acogida por el gobierno es reservada, incluso fría. Ni Manuel Azaña, ni Largo Caballero, Presidente del Consejo, ni el Estado Mayor, se muestran favorables. Las negociaciones se prolongan durante semanas. Toman parte en ellas el primer embajador soviético en España, Marcel Rosenberg, llegado el 27 de agosto, y los militares. Entre los dirigentes republicanos muchos se preguntan que serán esas unidades extranjeras, y cómo se las va a llamar. El nombre surge en el curso de una reunión del Comité Central del PCE celebrada en octubre, en ella, luego de barajar distintos nombres, se toma la decisión de que se llamen Brigadas Internacionales.

Se llegó a un acuerdo de principio, sin excesivo entusiasmo por parte del gobierno, de que una delegación de la Internacional fuera recibida por el Ministro de Defensa, Martínez Barrio. Finalmente, el 22 de octubre, el gobierno de la República autorizó la constitución de las Brigadas Internacionales. No se trató, pues, de una operación improvisada en medio del entusiasmo por la revolución española, sino de un acuerdo de los aparatos de la Internacional y del PCF que jugó el papel de mano de obra.

Es en ese mismo mes de octubre cuando André Marty, que va a ser el responsable de esas unidades, manifestará ante el Comité Central del Partido Comunista Francés que: «En España no se trataba de crear soviets y de reproducir la revolución bolchevique, sino de *defendre la Republique démocratique, cela seulement*»[31]

El comunista francés André Marty, era uno de los secretarios de la Internacional y un revolucionario de prestigioso pasado, el «rebelde del mar Negro», el hombre que se negó a luchar contra la Unión Soviética. En 1919 Marty era oficial mecánico del acorazado *Jean Bart*, cuando este navío, junto con el *France*, fue enviado al Mar Negro para ayudar al Movimiento Blanco en la Guerra Civil Rusa. Marty acaudillo un motín para impedir la intervención francesa en contra de los bolcheviques, lo que le costó la cárcel. Convertido en héroe para los soviéticos, en 1924 fue elegido diputado en la circunscripción de Seine-et-Oise por el PCF, renovando el escaño en varias ocasiones.

Marty había estado ya en Irún en agosto de 1936, en misión de reconocimiento, en octubre volvió para tomar el mando de los extranjeros en España como Inspector General de las Brigadas Internacionales, estableciendo su sede en Albacete donde tenía un acuartelamiento el Quinto Regimiento. Con él estaba Vital Gayman, concejal municipal comunista del distrito II de París, periodista, y ex-secretario de *L'Humanité*. Teniente de reserva, jefe de una compañía de infantería en 1918, Vital Gayman, bajo el nombre de comandante Vidal, va a ser hasta agosto del 37, el comisario de la base de las Brigadas en la ciudad de la Mancha.

André Marty fue uno de los hombres de la Komintern en España más controvertidos, no tanto por su influencia política, que fue nula, como por su manera de actuar en un puesto tan comprometido como el de responsable del conjunto de los brigadistas, una amalgama de razas, nacionalidades y tendencias políticas abigarrada y compleja.

Marty demostró dotes de organizador y manifestó una energía desbordante ante la misión que se le había encomendado, pero también proyectó lo peor de su personalidad, tremendamente temperamental, que él achacaba a su origen catalán. Todos los testimonios que nos han llegado, —más allá de la leyenda negra que urdieron sus adversarios— nos lo muestran como autoritario y muy violento. Marty tenía el insulto y la amenaza en la boca en cuanto una cosa no marchaba como él quería. Era vanidoso y egocéntrico, y no soportaba la menor contradicción, la menor reserva. En lo ideológico era un sectario dogmático. El que no estaba de acuerdo con él no podía ser sino un falso revolucionario, un agente provocador, un trotskista, un fascista...

Como comisario general de las Brigadas Internacionales y amo de la base de Albacete, Marty pudo dar libre curso a su carácter, lo que se tradujo en una imagen de brutalidad enfermiza. Su desconfianza rayaba la paranoia. Sospechaba de todo y de todos y veía por todas partes traidores y complots.

El relato que hace el novelista alemán Gustav Regler de su primer encuentro con Marty nos da una idea de cómo esa desconfianza le llevaba a caer en el ridículo. Regler, nos cuenta como recién llegado de Moscú, impaciente por salvar Madrid de las hordas fascistas que lo asediaban, se presentó en Albacete en un coche oficial soviético que le había facilitado su viejo amigo Mijail Koltsov.

Regler no fue admitido en presencia de Marty sino después de sufrir un registro, por si llevaba armas. «El comisario le interrogó rápidamente: «¿Van a ganar los republicanos?». «¿Cuándo salió usted de Alemania?» «¿A quién conoce en París? ¿Malraux? ¡Ajá! Habrá conocido también a muchos anarquistas...». Y luego, el rayo definitivo: «¡Enséñeme su carnet de miembro del POUM!». Regler jamás había oído hablar de esa formación política. Presentó una carta de Koltsov, y por fin Marty se tranquilizó lo suficiente, y allí mismo nombró a Regler comisario de la nueva XII Brigada Internacional, que justamente estaba en proceso de formación»[32]

Lo cierto es que Marty no caía bien a los escritores. Ilya Ehrenburg, que lo conoció como corresponsal de *Izvestia,* tras soportar durante dos horas a Marty y sus fantasías, no quiso saber más de él, alegando que era «un hombre mentalmente enfermo».

Ernest Hemingway hizo aparecer a Marty en su novela *Por quién doblan las campanas* con el nombre de Massart, y sobre él escribió este diálogo:

«—Siempre le había tomado por un gran personaje —dijo Gómez—. Por una de las glorias de Francia.

»—Quizá sea una gloria —dijo el cabo, y puso la mano sobre el hombro de Andrés—. Pero está muy loco. Tiene la manía de fusilar a la gente»

Justamente es el tema de los fusilamientos el que le valdrá a Marty el sobrenombre de: *el carnicero de Albacete*, por ordenar numerosos fusilamientos de brigadistas a los que consideraba cobardes ante el enemigo, o sospechosos de traición.

En marzo de 1939, en la Asamblea Nacional, en París, los parlamentarios de extrema derecha acusarán a André Marty de ser un asesino. El debate tendrá gran resonancia. Se publicaron listas donde se encontraban los nombres de decenas de voluntarios de las Brigadas Internacionales que habrían sido ejecutados por traición o porque se negaban a obedecer a sus mandos. De ahí saldrá el infundio, retomado después por el franquismo, de atribuirle a Marty una frase dicha ante el Comité Central del Partido Comunista Francés, el 15 de noviembre de 1937, sobre su actuación en la capital albaceteña, diciendo: «no vacilé y ordené las ejecuciones necesarias (...) Las ejecuciones ordenadas por mí no pasaron de quinientas». Hoy se sabe que la frase es falsa, pero se reconoce que Marty no se recató a la hora de eliminar a los que él consideraba traidores.

Marty era brutal, y no era inteligente. Togliatti, en un informe publicado en noviembre de 1937, le advirtió que cambiara radicalmente sus métodos de trabajo y se abstuviera de intervenir en los asuntos militares y técnicos que afectaran a las Brigadas. Le faltaba sentido crítico, y finalmente resultó que siendo tan desconfiado, se le engañó con facilidad. El traidor Henri Dupré, intendente de los internacionales en el frente de Madrid, sólo tuvo que mostrarse ante Marty como super-ortodoxo, insobornable, y censor ejemplar, para ganarse su confianza y ejercer labores de información y sabotaje por cuenta de Franco hasta finales de 1937.

Marty, el de los métodos expeditivos, el inflexible ante cualquier desviación, el que dijo en 1938 ante el Comité Central del PCF sobre el juicio contra la dirección del POUM, que él «estaba seguro de que los trabajadores franceses no habrían tardado ocho meses en juzgar a los poumistas»,[33] pudo comprobar irónicamente como tenía razón, ya que a él el partido francés tardó mucho menos en juzgarlo y condenarlo.

Tras abandonar España en 1938, fijó su residencia en Moscú hasta 1943, cuando fue enviado a Argelia. Sin haber pertenecido a la resistencia interior, volvió a Francia en 1944. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial su posición dentro del PCF era la de *número tres*, tras Maurice Thorez y Jacques Duclos, pero en mayo de 1952, en una reunión del secretariado se le acusó de mantener posturas contrarias al partido, sectarias, ultra-izquierdistas y emparentadas con el trotskismo. En septiembre la acusación ya era la de ejercer un trabajo fraccional junto a su viejo amigo Tillon, y en diciembre su célula le expulsó del partido. Pero lo peor llegó en febrero de 1953, cuando *L'Humanité* publicó un artículo donde se le acusaba de ser un agente de la policía desde 1919, «un agente del enemigo de clase extremadamente hábil».

En siete meses, los «trabajadores Franceses», a través del PCF, le habían juzgado y condenado, más rápidamente que la República española hizo con los dirigentes del POUM. Realmente, Marty, la vieja gloria del comunismo francés y el Inspector general de las Brigadas Internacionales, fue una víctima más de las depuraciones que azotaron el comunismo en la década de los años 50.

Marty es todo un símbolo de los comunistas en la era estaliniana. España representó la confirmación que necesitaban de forma perentoria de que el comunismo seguía la línea adecuada, que estaba al lado de los oprimidos y

que combatía en las batallas justas. En España se volvía a la acción, lo que, para muchos militantes, significaba la liberación de la pesadilla de la impotencia. Era la ocasión para volver a combatir por un comunismo sentimental e ideal, el que simbolizaba 1917 y la figura de André Marty. Así, la guerra de España se convirtió en uno de los episodios más dramáticos sufridos por la historia comunista; una página histórica inolvidable, rica en generosidad, como la encarnada en las Brigadas, pero también en crímenes.

Los hombres de la Internacional no participaron en operaciones especiales para eliminar a los adversarios políticos, pero colaboraron con los agentes de distintos organismos que tenían esa misión. En el caso español esas actividades se incrementaron durante la Guerra Civil.

Junto a los técnicos militares y al cuerpo diplomático enviados por Stalin hizo su aparición un tipo de personal particular, los agentes de la NKVD, cuya misión —en palabras de uno de sus máximos exponentes, Orlov— era, supuestamente, ayudar a los republicanos a montar un servicio de inteligencia militar y desarrollar las bases para una guerra de guerrillas. Sin embargo, para este tipo de tareas no era necesario pertenecer a la NKVD. El coronel Ilya Starinov, que puso en marcha el XIV Cuerpo de Ejército de Guerrilleros, pertenecía a la inteligencia militar (GRU, acrónimo de Directorio Principal de Inteligencia, en ruso).

Fue otro insigne agente de la NKVD, Sudoplatov, quien dejó traslucir la verdadera misión de Orlov y sus hombres: planificar operaciones contra los «trotskistas» y su agencia local (el POUM), contra los «aventureros», léase brigadistas, que acudieron a España con la esperanza de ver materializadas sus utopías revolucionarias, y para colaborar en la liquidación de la «quinta columna» fascista.

En la primera de esas tareas uno de los hombres de la Komintern destacó de un modo particular en nuestro territorio, se trataba del joven caucásico que ya había estado en Barcelona, junto a Humbert-Droz, y que entonces se hacía llamar Pedro o Pierre.

Realmente era Ernst Moritsovich Gerö, nacido Erno Singer y conocido también como Ernst Singer, Erno Gerö, Gere, Pedro, Pedro Rodríguez Sanz, y Pierre. Miembro de una familia judía, fue sastre en su adolescencia y estudiante de Medicina de la Universidad de Budapest. Se unió al Partido Comunista húngaro en 1918, bajo el nombre real de Singer, y apoyó activa-

mente la República de los soviets húngara en 1919, liderada por Bela Kun. Desde 1919 hasta 1921 dirigió las Juventudes Comunistas, pero tuvo que emigrar cuando se derrumbó la república soviética, regresando en 1922 para llevar a cabo actividad clandestina. La policía lo detuvo rápidamente y se le condenó a catorce años de trabajos forzados, aunque fue puesto en libertad en 1924 en un intercambio de prisioneros políticos con la Unión Soviética.

Desde 1925 militó en el Partido Comunista de la Unión Soviética y comenzó a trabajar en la Komintern, siendo especialmente activo en Europa Occidental. En junio de 1932 fue detenido por las autoridades francesas, pero puesto en libertad, marchó a Barcelona como delegado de la Internacional con el seudónimo de Pedro. No obstante, durante los preparativos para el VII Congreso de la Komintern en 1934 y 1935 se encontraba en Moscú con Dmitri Manuilsky.

La importancia política de Pedro en la estructura de los delegados de la Komintern en el Estado español la señala una de las cartas que Dimitrov le remite el 11 de septiembre de 1937 a Voroshilov, donde figura «un informe del camarada Pedro, consejero político en Cataluña».[34]

El PSUC, la filial catalana del PCE, que había nacido después del estallido de la guerra civil, tenía como Secretario General a Joan Comorera. No obstante, era «Pedro» el transmisor directo de las directrices de Moscú, lo que en la práctica lo convertía en el auténtico dirigente político del joven partido catalán. Según su colega André Marty, el camarada Pedro mandaba en el PSUC, con el mismo autoritarismo con que lo hacía Vittorio Codovilla en el PCE, que «(veía) al partido como si fuera de su propiedad» actitud «que el camarada Gerö (Pedro) imita a una escala menor, pero en el mismo tono».[35]

Lo cierto es que la misión de Gerö no era nada fácil. La estrategia del Frente Popular se basaba en la premisa de que la revolución no podía ir más allá de una «revolución democrático-burguesa nacional». Pero Cataluña, desde el inicio del conflicto, estaba siendo el centro de un intento de revolución social que desbordaba con mucho la democracia burguesa, y su capital, Barcelona, era el epicentro de esa experiencia apoyada por la poderosa CNT y por el pequeño partido troskistizante del POUM. Esa realidad insoslayable convertía en difícil la labor de Gerö, que hacía lo imposible porque esa revolución social no prosperara.

Una preocupación ésta que, desde los primeros días, estaba presente en el ánimo de la Komintern, ya que según recogen Elorza y Bizcarrondo, en un documento con el sello «Estrictamente confidencial», fechado el 28 de agosto de 1936, y en el que se consigna el envío de «Pedro» Gerö a Barcelona, la Internacional fija como objetivo principal «conseguir la consolidación del Frente Popular y el cese de la lucha que comienza a desarrollarse entre las organizaciones que forman parte del mismo, lucha que amenaza con desagregar las fuerzas de la revolución y puede ayudar a los fascistas a obtener la victoria».[36]

Cuando en octubre de 1936 se constituyó el Consejo de la Generalitat con la presencia del POUM, Gerö tuvo que dar explicaciones a Moscú aduciendo que: «nuestros amigos de este lugar» (léase PSUC), se habían visto obligados a aceptar el hecho, ya que los anarquistas sólo participaban en el Consejo si en él figuraban todas las organizaciones, *«halbtrotzkistische POUM»,* el semitrotskista POUM incluido.[37]

La verdad era que el camarada Pedro, en el mismo corazón de los acontecimientos, no dejaba de reconocer el buen comportamiento en algunos lugares de las milicias del POUM, pero tampoco olvidaba contar aquello que se esperaba de él: ese buen comportamiento sólo servía para «enmascarar sus manejos contrarrevolucionarios».

Las directrices dadas desde Moscú eran precisas, como no se podía aniquilar a la CNT, se debía aniquilar el POUM. El Presidium de la Internacional se pronunció en ese sentido el 28 de diciembre. En esa reunión del Presidium, Gerö, el «Pedro» que actuaba como delegado de la Internacional en Barcelona, seguía intentando matizar el antitroskismo, y en su informe no calificaba a los poumistas como «agentes del fascismo». Sin embargo, conforme los acontecimientos se precipitaban, a Gerö no le quedó otra opción que ir acoplando sus opiniones a lo que se dictaba desde Moscú.

Explicando las jornadas de mayo de 1937 en Barcelona, su crónica de los hechos sitúa como protagonistas a «los elementos más irresponsables de la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias», y puntualiza que el «papel decisivo» del POUM había sido ofrecer una plataforma ideológica a la rebelión. Pero el 6 de mayo, en una reunión extraordinaria de la UGT ya define al POUM como «la organización impulsora del movimiento contrarrevolucionario de estos días».

Si el POUM era una organización contrarrevolucionaria que servía al fascismo, el servicio de contraespionaje, dirigido por Orlov, debía intervenir, para eso había sido enviado a España.

El 16 de junio, en la noche, todos los miembros del Comité Ejecutivo del POUM fueron detenidos, pero Andreu Nin no figuró en la lista de los dirigentes del POUM enviados ante el tribunal el 29 de junio. Nin había desaparecido y su desaparición se convirtió en un problema para el gobierno del Frente Popular.

Hoy se sabe cuál fue la suerte del dirigente del POUM. El documental de investigación *Operació Nikolai*, dirigido por Dolors Genovès, y que fue realizado y emitido en 1992 por la Televisión catalana, dejaba poco lugar a las dudas. A partir de la documentación hallada en los archivos de Moscú de la Tercera Internacional, pero también de la policía política NKVD, se esclarecía de manera definitiva el asesinato de Andreu Nin.

En un telegrama escrito por un tal Juzik, que éste envió a Moscú, probablemente desde París, encabezado por una "N", se hablaba del lugar del asesinato de Nin, como la carretera que va de Alcalá de Henares en dirección a Perales de Tajuña, a medio camino, «a unos doscientos metros de la carretera, en dirección al campo». Y sobre los asesinos tampoco existen ya muchas dudas: Xvied (Orlov) y el propio Juzik, dos españoles sin identificar, Bom —un alemán sin importancia—, y Pierre, con su chófer Víctor.

¿Qué papel desempeñó Pedro, o Pierre, o Gerö, en toda esta historia? Hay autores que no dudan en atribuirle la máxima responsabilidad, considerando al delegado de la Komintern como el máximo responsable de la NKVD en nuestro país, sin embargo la estructura de las dos organizaciones era independiente, aunque existía una innegable relación entre ellas. Gerö, como principal responsable en Cataluña de la Komintern, supo en todo momento lo que sucedía y consintió en ello, lo que no podemos precisar es su grado de implicación en los hechos.

Desde obras generales sobre la contienda, como la de Antony Beevor, donde se relata en síntesis la odisea de Nin, hasta libros más especializados, como el de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, prácticamente todos dan por bueno el relato que aparecía en *Operació Nikolai*. Queda por dilucidar un misterio que tal vez nunca se desvele, el Pierre que participó en el asesinato de Nin, según la documentación, puede referirse tanto al húngaro

Gerö, —como opinan la mayoría de autores— o puede tratarse de Naum Isakovitx Eitingon, uno de los lugartenientes de Orlov, que también utilizaba el sobrenombre de Pierre y estaba en España por aquellas fechas, según la interpretación que da Ángel Viñas.[38]

Lo que sí sabemos es que hizo Gerö después de la guerra civil. «Pedro» irá a la URSS, y posteriormente, al término de la II Guerra Mundial, volverá a Hungría acompañando al ejército soviético, donde será un cuadro del Partido de los Trabajadores Húngaros, el nombre que adoptó el partido en Hungría desde agosto de 1948, momento en que el Partido Comunista Húngaro y el Partido Socialdemócrata se fusionaron.

En 1956, a raíz del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando Nikita Kruschev lance su ataque contra Stalin haciéndole único responsable del estalinismo, Gerö, paradójicamente, sustituirá al desgastado Rakosi en la secretaría general del PTH. Pero, el 23 de octubre de 1956 se produjo una gran manifestación de estudiantes y obreros en Budapest, y Gerö habló por la radio insultando a los miles y miles de manifestantes llamándoles «canallas» y «chovinistas». Obreros y estudiantes, gritando consignas como ¡Abajo Gerö!, se dirigieron a la radio exigiendo que se leyesen desde allí los dieciséis puntos programáticos del movimiento pidiendo elecciones para una nueva Asamblea Nacional.

La odiada policía política (AVH), disparó sobre la multitud. Los manifestantes fueron en busca de armas que consiguieron en los cuarteles, ya que los soldados se las facilitaron, y comenzó la insurrección. El 24 de octubre tanques soviéticos entraron en Budapest y al día siguiente, las tropas soviéticas recuperaron la radio, produciéndose grandes enfrentamientos ante el parlamento. Jánós Kádár, que había estado en el campo reformista, será el que comandará la contrarrevolución húngara. Gerö, que tenía la imagen demasiado desgastada terminará siendo expulsado del partido en 1957, y vivirá en la URSS hasta su muerte en 1962.

A Gerö le sobrevivirá una década su colaborador Orlov, que se convertirá en un personaje famoso a raíz de la publicación en 1953 de su libro *The Secret History of Stalin's Crimes* (*La historia secreta de los crímenes de Stalin*), un best seller, del que su antiguo jefe Sudoplatov dijo que: «él (Orlov) no sabía gran cosa sobre las verdaderas circunstancias de lo que estaba describiendo».

Orlov no fue un hombre de la Komintern, pero le presto servicio. Nacido Leiba Lázarevich Felbing, utilizaba el alias de Schwed y el apodo de Lyova, pero en Occidente se le conocía por Alexánder Orlov. Era un judío bielorruso, cuyos estudios de Leyes, fueron interrumpidos por el estallido de la Primera Guerra Mundial y su llamada a filas.

Al comenzar la Guerra Civil Rusa Orlov se unió al Ejército Rojo donde trabajó ya en contrainteligencia. Planificó y condujo personalmente diversas operaciones de sabotaje en territorio enemigo. En 1921 se retiró del ejército para reanudar sus estudios de derecho en Moscú, y en 1924 comenzó a trabajar en el departamento económico de la policía secreta en la Sección Financiera. En los años treinta, Orlov dirigió el espionaje económico, y estuvo implicado en contactos clandestinos con hombres de negocios occidentales y fue una pieza clave en llevar a la Unión Soviética la moderna tecnología sueca.

Orlov era también un periodista de talento y llevaba una de las secciones de la dirección de inteligencia con el rango de mayor de Seguridad del Estado. Se le conocía por su dominio del inglés, el alemán y el francés, así como por sus éxitos en el mercado de obligaciones germano que le habían reportado sumas considerables en los años treinta.

En octubre de 1935 volvió a Moscú. Allí se le retiró de Asuntos Exteriores, pasando a ocupar un puesto de segunda fila como segundo jefe en el Departamento de Transportes del NKVD. Parece que la razón fue una trágica aventura amorosa con Galina Voitova, joven operadora del NKVD que se mató delante de Lubyanka, sede de la NKVD, porque Orlov la había dejado negándose a divorciarse de su mujer.

En julio de 1936 Orlov fue enviado a España como enlace del NKVD con el Ministerio de Interior de la República. Nuestro hombre llegó a Madrid el 15 de septiembre. En España, lo más destacado que hizo Orlov fue tutelar el embarque del oro del Banco de España para trasladarlo a Moscú. El documento para el traslado había sido firmado por el Presidente de Gobierno, Francisco Largo Caballero. El oro fue cargado en mercantes soviéticos en Cartagena, enviado a Odesa, y, posteriormente, depositado en las bóvedas del Banco del Estado de la URSS. En aquel momento estaba valorado en 518 millones de dólares. Por tan arriesgada operación Orlov fue promovido al rango de comandante de Seguridad del Estado. *Pravda* publicó

la noticia de que al mayor Nikolski le había sido concedida la Orden de Lenin por haber realizado una importante misión del gobierno.

Sudoplatov recuerda que su superior Spiegelglas respetaba mucho a Orlov, y como visitaba España con frecuencia… «Me dijo que este había hecho un buen trabajo eliminando a los trotskistas en aquel país. Orlov consiguió publicar un panfleto antitrotskista con la firma de Andreu Nin, que había sido ya asesinado por el equipo de Orlov. Orlov escribió aquel panfleto para comprometer a Trotsky, como si Nin se hubiera retractado a causa de los descalabros y las traiciones de los trotskistas en España»[39]

Se conoce un informe que Orlov envió a Moscú el 7 de mayo de 1937, informando de los acontecimientos que habían acaecido en Barcelona. El agente de la NKVD constataba que la revuelta había empezado con un incidente fronterizo que fue la chispa del conflicto armado «entre elementos FAP por un lado y las tropas de la Generalitat y unidades del PSUC por otro». FAP era la abreviatura de «fascistas, anarquistas y poumistas».[40] La importancia de este telegrama radica en que Orlov apunta en él cómo podía aprovecharse la situación para eliminar a los pumistas. Orlov afirmaba también que Nin habría incitado a una «insurrección armada apelando a los trabajadores pobres de Cataluña y a los marxistas» para «unirse a las tropas de Franco en el frente de Aragón». A Togliatti le preocupaban los masones y a Orlov parece que le preocupaban los marxistas.

En otro telegrama que Orlov envió a Moscú el 23 de mayo se detallaba la idea que se le había ocurrido. Utilizar la detención de Nin para «fabricar» documentos que «demostraran» que el POUM y sus líderes habían estado en contacto con Franco con el fin de provocar la revuelta de Barcelona. Así se forzaría al gobierno republicano a tomar medidas y se desacreditaría al POUM como una organización de espionaje «germanofranquista».

Cual fue el final de Nin ya lo sabemos, y Sudoplatov nos cuenta cuál fue el final de la aventura española de Orlov.

«En julio de 1938, Orlov escapó y no fue hasta noviembre de aquel año cuando nos enteramos de que había llegado a Norteamérica… Preocupaba que Orlov fuera conocido por las autoridades francesas y británicas por su participación, como experto de la delegación soviética, en dos sesiones del Comité Internacional de No Intervención en la guerra civil española. Se apuntaba asimismo la posibilidad de una deserción; de la caja fuerte de la

rezidentura de Barcelona faltaban sesenta mil dólares en fondos para operaciones.

Pero, en noviembre de 1938, Beria me hizo llamar y, entre otras instrucciones, me ordenó que cortara cualquier esfuerzo de localizar a Orlov. Sólo debía reanudar la búsqueda en el caso de que él me lo ordenara directamente. La razón era que Orlov había mandado una carta personal a Stalin desde Estados Unidos, explicando su deserción

La carta establecía que si Orlov descubría cualquier intento de los soviéticos de averiguar su paradero o indicios de ser vigilado, ordenaría a su abogado que diera a conocer una carta que él había depositado en un banco suizo y que contenía información secreta sobre falsificación de materiales para el Comité Internacional para la No Intervención en la guerra civil española. Orlov amenazaba también con contar toda la verdad sobre el oro español, depositado secretamente en Moscú, y proporcionar listas de embarque. Esta historia habría significado un engorro para el gobierno soviético y los refugiados de guerra españoles en Méjico, porque el apoyo militar soviético a la causa republicana se concedía supuestamente en nombre de la solidaridad socialista. El pago en oro y tesoros diversos era un secreto».[41]

Poco después de la muerte de Stalin, y 15 años después de su deserción, Orlov reapareció para publicar *La historia secreta de los crímenes de Stalin*. La CIA y el FBI quedaron en ridículo al descubrirse que un alto cargo de la NKVD había estado viviendo en EE UU sin su conocimiento. Orlov fue interrogado por el FBI y dos veces apareció en Sub-Comités del Senado, pero siempre ocultó los nombres de los agentes soviéticos en el Oeste, y siempre silenció sus propios crímenes. Él y su mujer continuaron viviendo en EE UU, e incluso trabajo como investigador en la Escuela de Leyes de la Universidad de Míchigan. Murió en 1973.

Si la vida de Orlov parece increíble la de su secuaz Juzik, el que envió el telegrama confirmando la muerte de Nin, aún lo es mucho más.

Juzik**,** —Grig para los amigos— era realmente Juozas Grigulevicius, más conocido como Iosif Romualdovich Grigulevich, un joven lituano que había estudiado en los jesuitas de Vilnius, adquiriendo una sólida formación religiosa y unas formas de actuar propias de la venerable compañía, pero que terminó ingresando en las juventudes del Partido Comunista. En 1932 fue arrestado y tras pasar un año en prisión, salió del país estableciéndose en Paris.

En la capital francesa, donde Grig recibe el nombre de Josef, fue reclutado para los servicios de inteligencia soviéticos antes de viajar en 1934 a la Argentina, donde se había establecido su familia. Allí aprendió a hablar español, con un deje eslavo que hará que lo confundan con un brasileño. Bajo el pseudónimo de Miguel se integró en el comité de redacción de la publicación *Socorro Rojo* que se editaba en Buenos Aires.

En julio de 1936 fue arrestado en la residencia del profesor Augusto Bunge, presidente del Partido Socialista Independiente de Argentina, lo que le hizo abandonar el país con la misión de dirigirse a España donde llegó en septiembre, iniciada ya la guerra civil.

Grigulevich entra en nuestro país con documentos a nombre de José Ocampo, y el argentino Codovilla le ofrece un trabajo de traductor. Como agente de la NKVD utiliza los seudónimos de Juzik y de José Escoy, colaborando con un pequeño equipo denominado Brigada Especial, formado por agentes españoles. Esta unidad informal estaba bajo el mando del policía encargado de la seguridad de la embajada soviética, Anselmo Burgos Gil. En una reveladora entrevista concedida en 1986, dos años antes de su muerte, Grigulevich afirmó que en Madrid había trabajado a las órdenes de Santiago Carrillo liderando una brigada especial de militantes socialistas en la Dirección General de Seguridad, que se dedicaba a operaciones «sucias».[42]

A principios de mayo de 1937, Grigulevich es enviado con sus hombres a Barcelona, donde comienza a trabajar bajo las órdenes de Orlov en la operación «Nikolai». Cuando el día 16 de junio, es detenido Andreu Nin por agentes de la Brigada Especial, les acompañaba Grigulevich, bajo el nombre de José Escoy, con una placa del servicio de seguridad. Acto seguido Nin fue llevado primero a Valencia y luego a Madrid bajo la escolta de los agentes Fernando Valentí, Jacinto Rosell y el propio Grigulevich.

Nin quedó bajo custodia en Atocha, pero unas horas después, fue trasladado a Alcalá de Henares. Hasta ese momento, el dirigente del POUM estaba detenido legalmente y durante los siguientes cinco días fue interrogado por miembros de las fuerzas de seguridad republicanas, sin que admitiera su implicación en los hechos de los que era acusado. Pero el 22 de junio, se fingió la huida de Nin, y Juzik colaboró en esa pantomima sirviendo de intérprete a Orlov.

Tras el asesinato del dirigente trotskista Grigulevich siguió en nuestro país y sólo abandonó España hacia el final de la guerra, tras la caída de Barcelona. Luego de volar hasta Marruecos, donde estuvo tres meses, se dirigió a Francia, y allí, en la Embajada soviética, se le ordenó ir al puerto de Cherbourg para embarcarse rumbo a Méjico, con el encargó de realizar otro trabajo delicado: asesinar a Trotsky que residía en ese país.

Juzik, cuyo nombre en clave para esta operación era «Padre», llegó a Méjico en enero de 1940, y el 24 de mayo asaltó al frente de un comando, integrado, entre otros, por el pintor David Alfaro Siqueiros, la casa de Trotsky en el barrio de Coyoacán. El ataque fue una auténtica chapuza y no consiguió su objetivo.

Tras el fracaso del atentado contra Trotsky, Grigulevich dejó el país azteca y huyo a Estados Unidos. Allí, en Santa Fe, capital de Nuevo Méjico, instaló una farmacia de fachada que dejo en manos de otros agentes soviéticos, que pronto obtendrían buenos resultados investigando los secretos atómicos de los experimentos norteamericanos en Los Álamos. Bajo el apodo de Arturo, nuestro hombre regreso a Argentina a cumplir una nueva misión. A través de su red de contactos realizó operaciones de sabotaje contra intereses nazis durante la II Guerra Mundial. Allí también se casó con una mujer de nacionalidad mejicana, Laura Araujo Aguilar, una agente del NKVD que operaba bajo el nombre en clave de Luiza.

En 1949, con la ayuda de Joaquín Gutiérrez, un diplomático y escritor costarricense con simpatías comunistas, Grigulevich consiguió un pasaporte falso de dicho país que le sirvió para instalarse en Roma, esta vez con el nombre de Teodoro Castro Bonnefil. Teodoro, se presentaba como el hijo ilegítimo de un rico productor de café costarricense, y como tapadera estableció un exitoso negocio de exportación e importación, demostrando que era tan hábil para los negocios como para otro tipo de actividades.

En Roma forjó una gran red de contactos con empresarios y prelados de la Iglesia Católica. Además, establecería un nexo personal con el primer ministro italiano De Gasperi y trabaría amistad con el embajador norteamericano. En la curia papal del Vaticano también era muy apreciado por sus profundos conocimientos de la fe católica y la historia de la Iglesia romana, así como por sus generosas limosnas y sus muchos contactos. Se le otorgó incluso por sus servicios ante la Santa Sede la Orden de la Cruz de Malta.

En 1951 consiguió ser nombrado Encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica en Roma y asesor de la delegación costarricense ante la Sexta Sesión de Naciones Unidas en París. En 1952 fue nombrado Embajador de Costa Rica en Italia y Yugoslavia, y Grigulevich acepto con la condición de desempeñar su función sin recibir ningún tipo de emolumentos, bastándole sólo con el honor de ocupar ese honroso cargo. Dos años antes, en secreto, le había sido concedida la ciudadanía soviética y había sido admitido en el Partido Comunista de la Unión Soviética, como reconocimiento por los servicios prestados.

A fines del otoño de 1952 Stalin recibió un proyecto de plan para eliminar a Tito utilizando al agente Max, que no era otro que Grigulevich, usando para ello su cobertura como embajador costarricense, en Belgrado.

Que Stalin quiso asesinar a Tito queda confirmado por la nota que se encontró tras su muerte en el escritorio de su dacha en Blízhniaia. Contenía tres hojas de papel que Stalin había ocultado bajo un periódico dentro de un cajón. Una era una nota de Tito que decía «Stalin: deje de enviar gente a matarme. Ya hemos capturado a cinco, uno de ellos con una bomba y otro con un rifle… Si no deja de enviar asesinos, voy a enviar uno a Moscú y no voy a tener que enviar a un segundo».[43]

Con la muerte de Stalin, en marzo de 1953, Grigulevich recibió la orden de suspender la operación Tito. Llamado a Moscú se le comunicó el fin de su carrera como agente secreto soviético, ya que se temía que las declaraciones que estaba haciendo Orlov en EE UU pudieran comprometerlo. En Roma la súbita desaparición del embajador costarricense junto con toda su familia provocó un escándalo mayúsculo en el que se llegó a sospechar de la intervención de la Mafia.

Establecido en la Unión Soviética, Grigulevich rehízo su vida como académico: obtuvo un doctorado en Etnografía, consiguió un puesto como investigador en el Instituto Etnográfico y se convirtió en un experto de referencia en las áreas de Latinoamérica y la Iglesia Católica.

En 1957 publicó su primera monografía: *Vaticano: religión, finanzas y política* como parte de un conjunto de obras dedicadas al catolicismo, como *Historia de la Inquisición* o *La cruz y la espada, la iglesia católica en la América hispana en los siglos XVI-XVIII*. También publicaría una serie de libros dedicados a personajes ilustres: Pancho Villa, Simón Bolívar, Che Guevara, Salvador

Allende o su ex compañero David Alfaro Siqueiros, firmados todos bajo el seudónimo de Iosif Lavretski, y publicados en castellano por la editorial Progreso de Moscú. En 1979 fue admitido en la Academia de Ciencias de la URSS.

Finalmente, Iosif Grigulevich, alias Miguel, alias José Ocampo, alias Jucik, alias José Escoy, alias Arturo, Don Teodoro Castro Bonnefil, caballero de la Orden de Malta, y conocido en Moscú por el agente Max, o por el erudito Iosif Lavretski, luego de una agitada y multifacética vida, falleció el 2 de junio de 1988 en la capital soviética.

Terminada nuestra guerra la mayor parte de los cuadros de la Komintern que habían participado en ella salieron de nuestro país, pero algunos, por haber quedado atrapados, o por convicción, se quedaron en la España franquista intentando organizar el partido en la clandestinidad. Este es el caso del polaco José Wajsblum, que intentará recomponer la organización en Madrid, hasta que sea capturado y fusilado junto con otros compañeros; o el de turco Alberto Assa, un judío sefardita que había llegado a España con las Brigadas Internacionales y se esforzó por reactivar el PSUC; aunque el caso más emblemático de todos estos fue el de Heriberto Quiñones.

Heriberto Quiñones realmente se llamaba Yefin Granowdiski, y era un moldavo enviado por la Komintern a España en el año 1930. Quiñones sostenía que solo los militantes activos del interior podían dirigir el partido. Según confesó este personaje al comunista vasco Ramón Ormazábal estando ambos en la cárcel, cuando la guerra estaba perdida, la Internacional quiso trasladarlo a la Unión Soviética, pero Quiñones se negó alegando: «¡Cómo iba yo a marcharme a comer el pan de los obreros de la URSS después de no haber sido capaces aquí de ganar la guerra!».[44]

Esta sola respuesta suponía una dura crítica a la dirección en el exilio, y los intentos de Quiñones por reconstruir la organización del PCE desembocaron en un enfrentamiento abierto con los dirigentes del partido. Quiñones fue capturado por el franquismo y torturado salvajemente. El 2 de octubre de 1942, sentado y llevado en andas por sus compañeros, ya que tenía partida la columna vertebral, fue fusilado contra las tapias del cementerio del Este. Cuentan que mientras otros dos compañeros de infortunio murieron en silencio, Quiñones gritó: *"¡Viva la Internacional Comunista!"*.

Unos meses después, la Komintern, el ejército de la revolución mundial, también dejaba de existir.

En la declaración publicada el 15 de mayo de 1943 en Moscú explicando el fin de la Internacional se decía: ... «Teniendo en cuenta el desarrollo y madurez política de los Partidos comunistas, y de los cuadros dirigentes dentro del país, visto que en el curso de la presente guerra un cierto número de los Partidos miembros han propuesto la cuestión de la disolución de la Internacional Comunista como centro dirigente del movimiento obrero, el Presidium del Comité ejecutivo de la Internacional Comunista, en la imposibilidad de convocar un Congreso de la Internacional Comunista, a causa de la guerra, se permite someter a la aprobación de las secciones de la Internacional Comunista la proposición siguiente: Disolver la Internacional Comunista como centro dirigente del movimiento obrero internacional, descargando así a las secciones de la Internacional Comunista de las obligaciones resultantes de los estatutos y Congresos de la Internacional Comunista...».

La declaración fue firmada por los siguientes: Rusia soviética: Jdanov y Manuilsky. Alemania: Pieck y Florin. Bulgaria: Dimitrov y Kolarov. Francia: Thorez y Marty. Checoslovaquia: Gottwald. España: Ibarruri. Italia: Ercoli (Togliatti). Finlandia: Kuusinen. Austria: Klopenig. Hungría: Rakosi. Rumania: A. Pauker.[45]

Jesús Hernández, entonces representante del PCE en la IC, escribiría: «Me enteré de la disolución por la prensa de Moscú. El procedimiento no pudo ser más humillante».[46]

El objetivo para el que había sido creado ese ejército internacional, extender por el mundo la revolución bolchevique de 1917, había fracasado. A lo largo de la vida de la Komintern no se había instaurado un régimen soviético en ningún país del mundo, es más, en ninguno se produjo una coyuntura revolucionaria con visos de poder prosperar excepto en España durante algunos meses en la segunda mitad de 1936, pero la Komintern no consideró oportuno apoyar esa experiencia en la circunstancia que atravesaba el país y que atravesaba la URSS.

Como motivo oficial para la disolución se adujo, entre otras cosas, que la situación tanto interna como externa de los partidos adheridos a la Internacional era cada vez más complicada, y que los problemas de la clase obrera

de cada país no podían ser ya resueltos satisfactoriamente a través de un centro comunista único; que la forma de organización elegida por la III Internacional para regular sus actividades era anticuada y se había convertido incluso en un obstáculo para el futuro desarrollo de los respectivos movimientos comunistas nacionales. «La Ejecutiva llegó a la conclusión de que la guerra mundial desencadenada por Hitler agudizó las diferencias existentes en los diversos países y creó una profunda división entre las naciones convertidas en instrumentos de la tiranía hitleriana y los pueblos amantes de la libertad agrupados en torno a la poderosa alianza anti-hitleriana».[47]

La realidad descansaba en el rumbo que iba tomando la guerra. La situación en el frente ruso indicaba que los alemanes iban a perder la contienda. Este hecho, que tarde o temprano se iba a producir, comenzó a inquietar a británicos y americanos, que comprobaban, no sólo el avanza del Ejército Rojo, sino también el auge del comunismo en los países europeos.

El papel de los comunistas en la resistencia antinazi planteaba el problema de que iba a ocurrir en Europa cuando los hitlerianos fueran vencidos. Los movimientos de la resistencia atraían por doquier a hombres que exhibían el valor y el sacrificio de los revolucionarios, abogando por teorías sociales radicales; gente que, andando el tiempo, podían ser igualmente autores de nuevas revoluciones. Por otra parte, la URSS, que estaba llevando el peso de la lucha en el continente europeo, no podía arriesgarse a perder a sus aliados, necesitaba de la ayuda estadounidense para consolidar sus victorias militares y poder seguir avanzando hacia Berlín.

A partir de la conferencia de Teherán, aparecerán con mayor frecuencia en los documentos del Departamento de Estado americano, referencias a la necesidad «de convencerles a ellos (los rusos) de que deberán abandonar su política exterior estilo Komintern si desean nuestra ayuda y cooperación, una vez terminada la guerra».[48] Estos recelos crecientes eran bien conocidos por los rusos, pues los norteamericanos no hacían esfuerzos para ocultarlos. El Kremlin entendía que Occidente identificaba con la política soviética el avance rapidísimo de los partidos comunistas, y entendía, asimismo, que la URSS debería pagar un precio si la izquierda europea se movía demasiado lejos y excesivamente aprisa. A comienzos de 1943, el embajador Standley advertía a su colega ruso acreditado en Washington, Maxim Litvinov, que «el Komintern es uno de los grandes problemas en las relaciones entre la URSS y los EE UU».

Al explicar Stalin a la agencia Reuter la disolución de la Komintern, decía: «se expone así la mentira de los hitlerianos al decir que "Moscú" trata de intervenir en la vida de otros países, y de "bolchevizarlos"».[49] El comunismo, subrayaba ahora Stalin, tenía que hacer que las demandas sociales de la izquierda pasaran a segundo plano, ante la unidad antifascista necesaria.

En la primavera de 1944 Molotov anunció en público que la constitución de gobiernos comunistas no constituía un objetivo de la política rusa. La estabilidad europea suponía, dicho en pocas palabras, un prerrequisito para la estabilidad en la alianza soviético americana. Sacrificar a la izquierda europea parecía un precio pequeño para mantener el estatus de gran potencia que estaba adquiriendo la URSS.

Irónicamente, donde los soviéticos controlaban los partidos comunistas, su intervención operaba como elemento moderador. De no mediar la política rusa, la izquierda europea tal vez hubiera podido instalarse en el vacío económico y político que existía en algunos países del continente europeo, y crear así sociedades no capitalistas. No obstante, nadie en Washington veía la irónica posibilidad de que el estalinismo ayudara a salvar al capitalismo. Para los Estados Unidos y la Gran Bretaña cualquier movimiento que supusiera un cambio en el *statu quo*, estuviera, o no, dirigido desde Moscú, no se podía tolerar por una cuestión de principios: había que acabar con esas ideas perversas que propalaban la igualdad como teoría.

De nada le sirvió a la URSS su política de contención. El mundo capitalista seguía identificando en la Unión Soviética a su principal enemigo. En febrero de 1944, el Departamento de Estado afirmaba: «Están (los rusos) apadrinando una política de alcance global, puramente soviética, a través del aparato de la Komintern». Para EE UU era una falsedad la disolución de la Internacional anunciada el año anterior, «todavía se usa —decían— como un instrumento de la política exterior soviética».[50]

La Guerra Fría estaba anunciada y en las siguientes décadas todo pasaría por el posicionamiento de la URSS en el contexto internacional.

Así el ejército de la revolución mundial vino a ser derrotado por la geopolítica de las grandes potencias. Los países comunistas que emerjan después de la Segunda Guerra Mundial, surgirán como producto de la lucha guerrillera o militar, o al amparo del Ejército Rojo, bajo unos supuestos que serán distintos a los que dieron vida a la Komintern, que tantos hombres

envió a España para servir a la revolución o para servir a la Patria del Proletariado.

Notas

1.- Meaker Gerald H. (1978): *La izquierda revolucionaria en España (1914-1923)*, Ariel, Barcelona, pág. 329

2.- *Ibídem*, pág. 363

3.- Shipman, Ch., (1993): *It had to be Revolutio. Memoirs of an American Radical*, Cornell University, Ithaca, pág. 95.

4.- Maurín, J. (1966): *Revolución y contrarrevolución en España*, Ruedo Ibérico, París, pág. 270

5.- Entrevista a «Manuel Gómez» (Charles Francis Phillips), publicada en «Survey. A Journal of Soviet and East European Studies», nº 53, 1964, y nº 55, 1965.

6.- Gorkín, J., (1975): *El revolucionario profesional (Testimonio de un hombre de acción)*, Aymá, Barcelona, pág. 134

7.- Meaker, *Opus cit*. pág. 519

8.- Martín, Miguel (1973): *El colonialismo español en Marruecos (1860-1956)*, Ruedo Ibérico, París, pág. 87.

9.- Gorkín, J., *Opus cit*. pág. 142

10.- Chase, William J. (2001): *Enemies Within the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934-1939*, Yale University Press, New Haven, pág. 237.

11.- Humbert-Droz, Jacques (1971): *De Lenine á Staline. Dix ans au service de l'Internationale Communiste*, A la Baconnière, Neuchatel, págs: 405 a 450.

12.- Gotovich, J. *et alii*. (2001): *Komintern: L´historie et les hommes. Dictionnaire biogrphique de l'Internationale communiste*, Les editions de l'atelier, Paris, pág. 584.

13.- Lazić Branko M. y Drachkovitch, Milorad M. (1973): *Biographical Dictionary of the Comintern*, Hoover Press, Stanford, pág. 376.

14.- Buber-Neumann, M. (1975): *Historia del Komintern. La*

revolución mundial, Picazo, Barcelona, pág. 375

15.- JEIFETS, Víctor y Lazar (2015): *América Latina en la Internacional Comunista 1919-1943: Diccionario Biográfico*, Ariadna Ediciones, Santiago de Chile, pág. 651

16.- IBÁRRURI, D. (1976): *El único camino*, Progres, Moscú, pág. 257.

17.- NERUDA, P., (1974): *Confieso que he vivido*, Seix Barral, Barcelona pág. 143

18.- ELORZA y BIZCARRONDO, *Opus cit*., pág. 186.

19.- HERNÁNDEZ, Jesús., (1974): *Yo fui ministro de Stalin*, G. del Toro, Madrid, pág. 17.

20.- CATTELL, D. T. (1962): *I comunisti e la guerra di Spagna,* Feltrinelli, Milano, pág. 136.

21.- BOCCA, G., (1977): *Palmiro Togliatti*, Grijalbo, Barcelona, pág. 264.

22.- TOGLIATTI, P. "Stalin y Largo Caballero", *Rinascita*, 19-V-1962.

23.- BOCCA, G., *Opus cit*. pág. 262

24.- *Ibidem*, pág. 264

25.- HERNÁNDEZ Sánchez, *Opus Cit.* pág. 263.

26.- TOGLIATTI, P., (1980): *Escritos sobre la guerra de España*, Crítica, Barcelona, pág. 140.

27.- *Ibidem*, pág. 299.

28.- SPRIANO, Paolo (1971): *Storia del Partito comunista italiano,* Tomo. III, *I fronti popolari, Stalin, la guerra*, Einaudi, Torino, pág. 419

29.- TOGLIATTI, P., (1980), Opus cit. págs. 210-211.

30.- *Ibidem*, pág. 283.

31.- SERRANO, Carlos (1987): *L'enjeu espagnol. PCF et guerre d'Espagne*,

Editions Sociales, Messidor, Paris, pág. 66.

32.- WYDEN, P., (1983): *La guerra apasionada. Historia narrativa de la Guerra Civil española*, Martínez Roca, Barcelona, pág. 183.

33.- RADOSH, R. HABECK, M. y SEVOSTIANOV, G. (2002): *España traicionada. Stalin y la guerra civil.* Planeta, Barcelona, pág. 454.

34.- *Ibidem*, pág. 75.

36.- ELORZA y BIZCARRONDO, *Opus cit.*, pág. 306.

37.- *Ibidem*, pág. 363.

38.- VIÑAS, Ángel (2007): *El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937*, Crítica. Barcelona, págs. 605-627.

39.- SUDOPLATOV, P., (1994): *Operaciones especiales*, Plaza y Janes, Barcelona, págs. 75-77.

40.- COSTELLO, J. y TSAREV, O. (1993): *Deadly Illusions: The KGB Orlov Dossier Reveals Stalin's Master Spy*, Crown Publishers, Nueva York, pág. 281.

41.- SUDOPLATOV, *Opus cit.* pág. 78

42.- «*V Madride ya rukovodil gruppoi, kotoroi polzovalsya dlya samykh raznykh del*» - Grigulevich, entrevistado por Shatunovskaya, *Latinskaya Amerika*, nº 3 (1993), págs. 63-69, citado por Volodarsky, *Soviet Intelligence Services*..., cap. 3. Citado en PRESTON, P. (2013): *El zorro rojo. Biografía de Carrillo*, Debate, Madrid, pág 112.

43.- SERVICE, R. (2006): *Stalin. Una biografía*, Siglo XXI, Madrid, pág. 591.

44.- MORAN, G. *Miseria y grandezas del Partido Comunista de España 1939-1985,* Planeta, Barcelona, 1986, pág. 48.

45.- LAZITCH, Branco (1961): *Los partidos comunistas de Europa 1919-1955*, Instituto de Estudios políticos, Madrid, pág. 60.

46.- HERNANDEZ, J. (1953): *La grande Trahison*, Flasquelle, Paris, pág. 345

47.- SAÑA, Heleno, *La Internacional Comunista 1919-1945*, Zero, Madrid, Tomo II, pág. 315

48.- KOLKO, G., (1974): *Políticas de guerra. La diplomacia aliada y la crisis mundial de 1943-1945*, Grijalbo, Barcelona, pág. 55

49.- *Ibidem*, pág. 55.

50.- *Ibidem*, pág. 53

Herejes y renegados

Herejes son aquellos que niegan algún principio de la doctrina establecida sin renunciar a su fe, mientras que los renegados son los estigmatizados por un grupo o colectivo que los aparta del mismo, pudiendo los excluidos seguir trayectorias muy distintas. El hereje, para la doctrina, siempre es un renegado, y el renegado puede seguir viviendo la fe a su modo o renunciar al conjunto de esas creencias para abrazar otras, incluso las opuestas. En términos políticos puede ser un tránsfuga, si por diferentes circunstancias modifica su ideología, o aspectos de la misma, e ingresa en otro partido, o pude transformarse, simplemente, en un «desengañado».

El PCE, a lo largo de su historia, ha contado con numerosos personajes que podrían encajar en estas definiciones de herejes y de renegados. Las características de los mismos partidos comunista, —tantas veces comparadas por sus adversarios con una iglesia— las fluctuaciones de las diferentes estrategias seguidas, y otros factores como los que estableció la Komintern a partir de un momento determinado, —creando todos los mecanismos necesarios para apartar organizativamente a los «disidentes»— alumbraron

una nueva concepción del que discrepaba, que podía suponer su aniquilamiento político, y si era preciso el «físico». «Los luchadores de ayer pueden ser saboteadores del mañana».

Eso condujo a períodos de purgas, exclusiones y, en el mejor de los casos, abandonos voluntarios. El que caía en el error podía permanecer si reconocía su falta y realizaba una «sincera autocrítica», aunque eso, en muchas ocasiones, no le libraba de «caer en desgracia» y ser puesto en cuarentena, cuarentena de la que sólo podía salir si finalmente se le juzgaba recuperado. Por el contrario, si mostraba contumacia era excluido, considerándosele un cuerpo extraño y posiblemente nocivo. No obstante, dejar el partido, de modo voluntario o forzoso, siempre suponía un desgarro, y un riesgo, ya que las sirenas del anticomunismo estaban dispuestas en cualquier momento a acoger al arrepentido, al tránsfuga, al excluido, a cambio de la narración de los sufrimientos pasados y la confesión de su rencor acumulado.

Todo esto ha configurado al PCE, a lo largo de su historia, como un «partido-pasillo», en el que entraban y salían los afiliados y militantes tras un tiempo más o menos prolongado de estancia en sus filas. La permanencia de los efectivos no puede engañarnos, ya que, excepto los permanentes, —un núcleo duro de militantes que tampoco eran inmunes a la purga— los comunistas del momento presente no tenían por qué coincidir con los de la víspera, ni con los del día siguiente. Este hecho contribuyó a forjar el dicho de qué «el mayor de los partidos existentes es el de los excomunistas».

En este apartado haremos un sucinto repaso de los casos más relevantes en uno y en otro sentido. Comenzando por los herejes y las herejías, que han sido muchas menos que las apostasías o el transfuguismo, debido sobre todo a que la herejía supone un presupuesto teórico para la disidencia, y el PCE se ha movido siempre en una cierta pobreza en el campo de la teoría que ha mermado las posibilidades de cuestionar con consistencia política la línea oficialmente establecida. Este aspecto de indigencia teórica, —compartido con los socialistas españoles— propició que las herejías más significadas tuvieran origen foráneo, y en nuestro país sólo fueran recreadas adaptándolas a la coyuntura hispana en cada momento de su historia.

La herejía más relevante en las dos primeras décadas de vida del partido, fue la trotskista. Sin embargo, el trotskismo español, aceptado como tal por el propio Trotsky, apenas aglutinó a una pequeñísima minoría.

Podríamos definir al trotskismo, como una corriente del comunismo que se caracterizó por sostener una serie de posiciones sobre la trayectoria seguida por la revolución en la URSS y por las estrategias a desplegar en la marcha de la revolución mundial, en seno de los PC y en la dirección de la III Internacional.

El primer punto relevante dentro de esas posiciones, —que variarán con el desarrollo de los acontecimientos a lo largo del siglo XX— es la crítica a la burocratización del partido comunista de la Unión Soviética. En una carta al Comité Central de octubre de 1923, Trotsky denunciaba la burocratización de las instituciones del Estado soviético como una fuente de privilegios nacidos de la posición política que se adoptaba respecto a la dirección del partido. En diciembre de ese mismo año Trotsky sintetizaba estas críticas en una serie de artículos que reclamaban un *Nuevo curso.*[1] En ellos se proponía el restablecimiento de la democracia interna en el partido, una política de planificación e industrialización encaminada a reducir las tensiones entre la agricultura y la industria en la URSS, y una revisión de la estrategia seguida por la Komintern que alejaba la posibilidad de extender la revolución a nivel mundial.

Ante estas críticas, la dirección del partido inició entonces el combate contra el «trotskismo», dándole nombre a la herejía. Frente a esas críticas Stalin denunció los intentos fraccionales de romper la unidad del partido, y opuso a la teoría de la «revolución permanente» defendida por Trotsky, la construcción del «socialismo en un solo país». La estrategia de la «construcción del socialismo en un solo país», sostenida por Stalin, subordinaba las posibilidades de la revolución mundial a los intereses del Estado soviético; la de la «revolución permanente», desarrollada por Trotsky y la corriente llamada Oposición de Izquierdas, subordinaba el porvenir de la Revolución rusa a la extensión de la revolución mundial.

Trotsky y la Oposición de Izquierdas se opondrán también al giro brutal de Stalin, que pasará del «socialismo a paso de tortuga» preconizado por Buharin a la colectivización forzosa y a la industrialización acelerada del primer Plan Quinquenal, que tuvo altos costos sociales en el campo ruso. A fin de cuentas la planificación, sin restauración de la democracia socialista, no desembocaba más que en un reforzamiento del poder de la burocracia.

No se trataba, pues, de construir una sociedad ideal en un solo país, sino de ganar tiempo, siguiendo los flujos y reflujos de la revolución mundial, de la que dependía en última instancia el futuro de la revolución rusa. Para la extensión de la revolución mundial en los países con un desarrollo burgués tardío, y en particular para los países coloniales y semicoloniales, la teoría de la revolución permanente significaba que la resolución verdadera y completa de sus tareas democráticas y de la liberación nacional no podía ser otra que una dictadura del proletariado, que se pusiera a la cabeza de la nación oprimida y, ante todo, de sus masas campesinas. Por tanto, la construcción del socialismo no era concebible sin tener en cuenta el flujo de la lucha de clases a escala nacional e internacional.

Sobre estas premisas, y a la luz de los acontecimientos que se desarrollaron en las décadas de los años 20 y 30: la contrarrevolución burocrática en la Unión Soviética, la victoria del fascismo en Italia y Alemania, y las lecciones de la segunda revolución china, el trotskismo quedó precisado en un breve documento de 1933 conocido como los «Once puntos de la Oposición de Izquierdas»

En síntesis, los trotskistas propugnaban: la oposición de la teoría de la revolución permanente a la del «socialismo en un solo país» y la reafirmación del carácter internacional de la revolución proletaria frente al capitalismo mundializado.

Caracterizaban la Unión Soviética como «Estado obrero burocráticamente degenerado», pero lo defendían siempre contra el imperialismo y frente a toda tentativa de restauración capitalista. Al mismo tiempo que condenaban la política económica de Stalin en la trágica aventura de la «colectivización forzosa».

También suponía la condena categórica de la teoría del «social-fascismo», que asimilaba los partidos socialdemócratas a los partidos fascistas y no hacía distinción entre democracia parlamentaria y dictadura fascista, así como la necesidad de una política de frente único obrero, opuesta tanto a la colaboración con los partidos burgueses como al sectarismo desastroso del «tercer periodo» de la Internacional Comunista. Del mismo modo defendían la necesidad de militar en los sindicatos de masas, frente a la política de escisión sindical desarrollada por la Komintern durante ese mismo «tercer periodo».

El Trotskismo tampoco aceptaba el concepto de «dictadura democrática del proletariado y del campesinado», entendido por los dirigentes de la Komintern como una etapa histórica distinta de la misma dictadura del proletariado. Y, por último, luchaban por la democratización en el seno de los partidos comunistas, para oponerse a la degeneración burocrática tanto del Partido Comunista de la Unión Soviética como de la Internacional Comunista.

Algunos de estos aspectos fueron adoptados por Joaquín Maurín, que era el teórico más destacado a finales de los años 20 en el campo del comunismo español, cuando era dirigente de la Federación Comunista Catalano-Balear del Partido Comunista de España. Esta Federación se hallaba en disputa con los dirigentes del PCE, nombrados ya en aquella época por Moscú.

Maurín sostenía que la obediencia ciega a las consignas llegadas de Moscú podía conducir a graves errores, y que correspondía a los militantes del partido fijar la línea política y nombrar libremente a sus dirigentes. Finalmente, en sus tesis políticas, la Federación no aceptaba la consigna de la Tercera Internacional, según la cual había que reclamar «todo el poder a los soviets», aunque, como ocurría en España, poca gente supiera lo que era un soviet y no hubiera ni uno solo en todo el país.

Durante dos años, Moscú se abstuvo de confirmar la expulsión de la Federación, decretada por una conferencia del PCE, porque esperaba recuperar no sólo a la Federación, sino especialmente a Maurín, que no criticaba ni el Plan Quinquenal ni la política internacional soviética, ni tomaba posición por Trotsky. Lo que Maurín discutía, sobre todo, era el método de la Internacional Comunista para «gobernar» a los partidos comunistas, que él denominaba «colonialismo revolucionario». Pero en 1928 la IC aún no consideraba a Maurín un disidente. Muy al contrario, durante su exilio en París, trabajó para la editorial de la Internacional y fue corresponsal de *Izvestia*.

En la Conferencia que el PCE celebró en Pamplona a principios de marzo de 1930, ante las acusaciones de trotskismo que la dirección del partido hizo contra Maurín en ausencia de éste, Hilario Arlandis defendió a su camarada negando que Maurín o la Federación fueran trotskistas. Pero finalmente, en agosto de 1930, se expulsó del partido al Comité Regional de la Federación, y en septiembre, el periódico maurinista *La Batalla* hizo pú-

blicas sus discrepancias con el PCE. No obstante, los dirigentes de la FCC-B siguieron esperando el posible apoyo de la IC y, por tanto, declarando su lealtad a Moscú.

Inmediatamente después de que la Federación Catalana fuese expulsada del PCE, ésta inició conversaciones para su unificación con el Partit Comunista Català (PCC), un grupo independiente de PCE fundado en Lleida en noviembre de 1928 y que nunca se afilió a la Internacional. Jordi Arquer, Joan Farré y otros, que dirigían ese partido con inclinaciones marcadamente nacionalistas, consideraban que sólo a través del comunismo se resolvería realmente la cuestión nacional en Cataluña.

Después de negociaciones iniciadas en la cárcel donde estaban dirigentes de ambas organizaciones, la Federación y el Partit Comunista Catalá acordaron fusionarse y formar el Bloc Obrer i Camperol (Bloque Obrero y Campesino). Los treinta delegados presentes en la reunión de unificación, el 1 de marzo de 1931, decidieron mantener la denominación de FCC-B para la nueva organización, y, aprobaron a su vez la creación de otra más amplia que también agrupará a sus simpatizantes y que debería constituir el embrión de un verdadero partido comunista de masas de obreros y campesinos. Esta última organización fue la que recibió el nombre de Bloc Obrer i Camperol (BOC), e inició su actividad con alrededor de 700 afiliados.

Maurín luchó hasta el último momento para conseguir el reconocimiento de Stalin. Incluso tras su expulsión siguió confiando en que la IC contara con su grupo, y sólo desistió de esa idea cuando la prueba de los hechos le demostró que la Internacional Comunista daba la consideración de «enemigo político» a su nuevo partido. Maurín fue definitivamente excluido de la Komintern el 3 de julio de 1931, bajo la acusación de agente trotskista-buharinista.

La verdad era que el primer núcleo de partidarios españoles de Trotsky se había organizado en el exilio europeo, al abrigo del grupo francés que editaba *La Vérité*. Este primigenio núcleo trotskista español fue aglutinado por un obrero vasco, pintor de la construcción, que durante los primeros años de la historia del PCE había formado parte de la Federación Comunista de Vizcaya y que, al menos de 1925 a 1927, había residido en la URSS, para escapar, como muchos otros comunistas, de la represión de la dictadura de Primo de Rivera. Se trataba de Francisco García Lavid, que firmaba también

con el seudónimo de Henri Lacroix. Lacroix inició sus actividades en Bélgica y Luxemburgo en 1929, en paralelo al inicio de la actuación pública del grupo trotskista francés de *La Vérité*.

Fue García Lavid quien impulsó la celebración en Lieja en febrero de 1930 de la primera Conferencia Nacional de la Oposición Comunista española que dio origen en el interior a la aparición de la primera organización trotskista en España denominada Oposición Comunista de España (OCE). La OCE tomó la iniciativa de editar el primer órgano trotskista español, *Contra la Corriente*, en el mes de junio de 1930, pero no consiguió su plena autonomía organizativa hasta junio de 1931.

En el proceso de constitución de esa corriente jugó un papel destacado Andreu Nin, qué tras largos años de estancia en la URSS, llegó a España en el mes de septiembre de 1930, siendo un convencido trotskista. Por pura lógica era de prever que, a su llegada, Nin se encuadrase de inmediato en el pequeño grupo de la OCE; sin embargo, optó por aproximarse a la Federación Comunista Catalano-Balear, liderada por Maurín, con el que estaba unido por una larga amistad.

Pero Nin pronto romperá sus relaciones con la Federación y se dedicará a organizar la OCE, tal y como le indicaba Trotsky en la correspondencia que mantenía con el catalán. El líder bolchevique criticaba de la Federación: el marcado carácter nacionalista que iba adoptando, su distanciamiento progresivo con la OCE, su política de reconciliación con los anarco-sindicalistas, etc... Esta actitud de Trotsky la secundaba un grupo de oposicionistas españoles, muy reducido y concentrado casi exclusivamente en Madrid.

La Oposición Comunista de España realizó su II Conferencia, ya no en el exilio sino en Madrid, en junio de 1931, ratificando el nombramiento de una dirección integrada, entre otros, por Lacroix, Juan Andrade, Fernández Sendon (Fersen), Nin y Esteban Bilbao. Respecto a la militancia de la OCE sabemos que no superaba el millar de afiliados, y que en su III Conferencia cambió su nombre por el de Izquierda Comunista de España (ICE).

El ascenso del fascismo en Europa tuvo profundas consecuencias en todas las organizaciones políticas de la izquierda y en la conciencia de la clase obrera. Las conclusiones que la clase extrajo de la dolorosa experiencia alemana, posibilitaron al BOC poner en práctica la construcción de las Alianzas Obreras (AO) a finales de 1933. Se trataba de un frente de todas

las organizaciones de extracción proletaria para luchar de manera coordinada contra el avance del fascismo.

En ese proceso se fue produciendo un acercamiento entre Nin y Maurín, al mismo tiempo que se ahondaba un profundo desacuerdo con Trotsky. En el seno del Comité de la Alianza Obrera de Cataluña, Maurín y Nin ya habían reanudado la estrecha colaboración de años atrás y, a menudo, en la práctica estaban de acuerdo. Según Maurín, Nin le había propuesto que los dos partidos, el BOC y la ICE acercaran sus posturas. El 1 de enero de 1935, el BOC hizo público un manifiesto en el que llamaba a la formación de un gran partido marxista. El sentimiento de unidad en la base del movimiento obrero había ganado mucha fuerza. Las AO, la insurrección de Octubre del 34 y la amenaza cada vez más clara del fascismo ayudaban en este proceso.

Entre las distintas fuerzas —fundamentalmente catalanas— tentadas por esa propuesta de unidad, el llamamiento sólo cuajó entre el BOC y la ICE. Para la redacción del borrador de un programa común, que sería el programa del nuevo partido que iba a surgir de ese acercamiento, se estableció una comisión integrada por un dirigente de cada organización, siendo Maurín y Nin los elegidos. En julio, los Comités Centrales aprobaron el programa definitivo y apareció el nombre del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) en *La Batalla*, convirtiéndose éste periódico en el órgano oficial de la nueva formación. Finalmente, el 29 de septiembre de 1935, se celebró la reunión constitutiva del POUM, a la que sólo pudieron asistir una docena de delegados. De hecho, más que un congreso fue una reunión de dirigentes de ambos partidos. Se eligieron los organismos de dirección y se decidió que las juventudes tuvieran el nombre de Juventud Comunista Ibérica. El Comité Ejecutivo quedó constituido por Maurín, como secretario general, Nin, Molins i Fàbrega, Arquet, Bonet, Coll, Gironella y Rovira. El Comité Central tendría 29 miembros provenientes del BOC y 12 de la ICE.

En el otoño de 1935 el POUM daba sus primeros pasos con aproximadamente 5000 militantes, concentrados mayoritariamente en Cataluña y grupos en varias otras zonas, entre las que destacaban Madrid, Valencia y Asturias. De ellos, los miembros de la ICE no llegarían a los 800 en el conjunto del Estado.

El programa del nuevo partido tomaba postura por la transformación socialista de la sociedad, y caracterizaba la naturaleza de la revolución espa-

ñola del siguiente modo: «El carácter de la revolución en nuestro país no es simplemente democrático, sino que es democrático-socialista. Solamente si la clase trabajadora toma el poder se llevará a término la revolución democrática íntimamente enlazada, en esta época histórica, con la revolución socialista. La burguesía ha perdido toda capacidad revolucionaria. No puede mantenerse sobre las bases de la democracia. Evoluciona más o menos de prisa, según las circunstancias, hacia una situación fascista, ya que el fascismo es la manifestación política de la decadencia de la burguesía».[2]

Por las mismas fechas el VII congreso de la Internacional Comunista, celebrado en el verano de 1935, aprobó y generalizó la táctica frentepopulista, es decir, alianzas interclasistas que no ponían en cuestión las bases del sistema capitalista.

El Frente Popular había sido denunciado en el programa político del POUM, redactado por Nin y Maurín, pero en la España de 1936 el Frente Popular era un hecho consumado y el POUM tuvo que decidir. En el Comité Central del 5 de enero de 1936, tras un informe de Nin, se aprobó por unanimidad una resolución por la que el POUM comprometía su apoyo a lo que denominaba «el frente obrero republicano», fórmula que encubría la aceptación pura y simple del acuerdo frentepopulista. Juan Andrade firmó en nombre del POUM junto al resto de organizaciones obreras y los partidos republicanos que componían el Frente Popular. El POUM aceptó las condiciones del pacto con la burguesía con tres objetivos: derrotar a la contrarrevolución, conseguir la amnistía y restablecer el estatuto de Cataluña.[3] Al concluir este pacto, el POUM no se comprometía a nada más y legitimaría cualquier acción en solitario.

Trotsky denunció la actuación del POUM como una traición. Lo mismo ocurría con el PCE, que llamaba trotskista a Maurín. También le acusaba de ser aliado objetivo de las derechas por su posición en contra del Frente Popular, después de «mendigar una plaza de diputado».[4]

Luego vino la guerra y la revolución, y las recriminaciones políticas se convirtieron en persecución.

Los pocos trotskistas que no habían aceptado la ruptura con Trotsky y la fusión con el BOC, apenas tuvieron incidencia en los acontecimientos que se desarrollaron. Sólo un reducido grupo en Madrid, encabezado por Estaban Bilbao, Fersen y Grandizo-Munis, había rechazado la posición ma-

yoritaria de la ICE. Fersen se integraría posteriormente en el PSOE, desapareciendo de la vida revolucionaria y Munis, seudónimo de Manuel Fernández Grandizo, a pesar de las dificultades, se convirtió en la voz más cualificada de esas escasas fuerzas

Munis, nacido en México, se había trasladado siendo niño a un pueblo jornalero de Extremadura, Llerena, en la provincia de Badajoz. Allí se afilió a la sección española de la Oposición de Izquierda tras asistir a su I Conferencia en febrero de 1930. Participó en el desarrollo que vivió la Izquierda Comunista de España en la localidad de Llerena, donde la ICE consiguió una influencia considerable entre los trabajadores del campo. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde participó en la revolución de 1934. Iniciada ya la contienda, en 1937 fundó la Sección Bolchevique-Leninista Española (SBLE), que fue el único grupo realmente trotskista que actuó durante la guerra civil.

La mayoría de los militantes de la Sección Bolchevique-Leninista Española se alistaron para luchar contra el fascismo y, con su partida, el núcleo que desarrollaba actividad en Barcelona se vio aún más reducido. Aun así, siguieron actuando y llegaron a editar dos números de un boletín llamado *La Voz Leninista*, algunos textos en francés y alemán, así como varios panfletos. Entre esos militantes figuraban Esteban Bilbao, Jaime Fernández, Julio Cid, José Quesada, Miguel Olmeda, Antonio Guerrero, el alemán Moulin (Hans David Freund), el poeta francés Benjamín Peret, junto a camaradas italianos, polacos, cubanos y australianos.

Munis y la mayoría de sus compañeros fueron detenidos en febrero de 1938, meses antes de que se fundara la IV Internacional. Acusados de espionaje y sabotaje al servicio de Franco, fueron juzgados por un tribunal especial a puerta cerrada. El fiscal pidió pena de muerte para Munis, Carlini (Domenico Sedran) y Jaime Fernández. Las denuncias internacionales y la intención de aplazar la decisión definitiva tras el fin del proceso contra el POUM, retrasaron la nueva vista hasta finales de enero de 1939, fecha que coincidió con la toma de Barcelona por las tropas franquistas.

El final del trotskista Nin es de sobras conocido y Trotsky, enterado de su desaparición escribió un artículo en el que decía a modo de postrer homenaje: «A pesar de las divergencias que me separaron del POUM, debo reconocer que, en la lucha que Nin llevaba contra la burocracia soviética, la

justicia estaba enteramente de su lado. Se esforzaba por defender la independencia del proletariado español contra las maquinaciones burocráticas de la pandilla en el poder en Moscú. Rehusó colaborar con la GPU para arruinar los intereses del proletariado español. Éste es su único crimen. Y lo pagó con su vida».[5]

El disidente Maurín, —que milagrosamente salvo la vida, al no identificarlo los franquistas que lo apresaron— tras años de cárcel pudo exiliarse, y en una carta escrita a Víctor Alba en 1971, renegaba de muchas de sus creencias pasadas empezando por el trotskismo. «Algunas veces, —decía Maurín en esa carta— sobre todo cuando estaba en la prisión, me pregunté si no fue un error político mío haber favorecido la aceptación del grupo trotskista… Trotsky era un factor permanente de desorden».

Pero Maurín también termino renegando del comunismo. «¿En qué sentido he evolucionado? ¿Cuál es mi posición ahora? En primer lugar repudio la palabra "comunismo" desprestigiada y envilecida por el estalinismo. Creo que "socialismo" y "comunismo" no sólo son distintos, sino antitéticos. El socialismo, tal como lo entendieron los clásicos, es inseparable de la Libertad y la Democracia. El "comunismo", en cambio, es su negación absoluta».[6]

Los tránsfugas de la primera hora en la historia del PCE fueron muchos más que los herejes trotskistas, y aparecieron muy pronto, antes de que existiera el trotskismo. Centrándonos solo en las figuras más prestigiosas nos encontramos con los casos de tres de los fundadores de los dos Partidos Comunistas que se constituyeron en España entre 1920 y 1921: Ramón Merino Gracia, Mariano García Cortés y Pérez Solís, junto con algunos otros que sin ser apóstatas como estos simplemente abandonaron el partido.

Ramón Merino Gracia, al constituirse en noviembre de 1921 el Partido Comunista de España, por la fusión del Partido Comunista Español y del Partido Comunista Obrero Español, fue elegido Secretario General del mismo, pero al poco tiempo abandonó el PCE. Había comprado desde la cárcel su libertad a través de un acto público de contrición en el que renegaba de su pasado y prometía no volver a actuar dentro de partidos revolucionarios. Terminó apoyando la dictadura de Primo y la de Franco, hasta el punto de militar en la Unión Patriótica en Barcelona entre 1923 y 1930, y ser miembro de los Sindicatos Libres de Maestros primero, y después de los Sindicatos Verticales durante la época franquista.

Mariano García Cortés, el abogado y periodista partidario de la Tercera Internacional, que fue fundador del Partido Comunista de España, al que representó en el III Congreso de la Komintern celebrado en Moscú, evolucionó desde el comunismo al romanonismo, trabajando para el conde de Romanones en el entorno del ayuntamiento de Madrid y llegando a ser secretario de la Unión de Municipios Españoles. Como periodista colaboró en *La Hoja del Lunes* tras la victoria franquista, y en *El Alcázar*, desde 1941 hasta su fallecimiento en 1948.

Núñez de Arenas, que abandonaría el Partido Comunista en 1923, huyendo a Francia a fin de escapar a una sentencia de encarcelamiento, nunca renunció a sus ideas, aunque sí a su militancia. Ramón Lamoneda volvió tranquilamente al redil socialista a los pocos años de abandonar el PCE, y el mismo Daniel Anguiano se retiró del partido casi inmediatamente.

Pero el caso más escandaloso, con gran repercusión política y consecuencias negativas para el PCE, se produjo a principios de 1928, cuando aparatosamente dejó el partido Óscar Pérez Solís, que en la primavera de 1925 había sido nombrado Secretario General del PCE. Detenido en Barcelona el 13 de febrero de 1925, fue encarcelado en Montjuic, desde donde siguió su labor como director de *La Antorcha*, y apoyando la línea de la dirección defendida por Bullejos frente a las desviaciones de Maurín. A su salida de la cárcel en 1927, alegando motivos de salud, marchó a Valladolid a descansar, abandonando todo tipo de actividad política.

Durante el otoño de este mismo año un periódico de Valladolid, *El Norte de Castilla*, informó, como rumor, que Pérez Solís se apartaba de la política y del comunismo y que aceptaba un cargo directivo en una importante empresa industrial, noticia que desmintió inmediatamente el propio Solís como falsa. Pero pocos meses después de este hecho, en marzo de 1928, fue Solís el que anunció a bombo y platillo su conversión al catolicismo, gracias a las conversaciones y a la correspondencia que había mantenido con el Padre Gafo, un domínico activo en el sindicalismo amarillo, hecho que aprovechó toda la prensa burguesa y anticomunista para desprestigiar al PCE.

Desde 1928 Pérez Solís trabajó en la administración de CAMPSA en Valladolid. Allí, entre el final de la dictadura primorriverista y la instauración de la Segunda República, cobró nuevo protagonismo dirigiendo el periódico católico *Diario Regional*. En los años siguientes escribió en la prensa católica

y de derechas, tanto vallisoletana como estatal, sosteniendo posiciones cada vez más de extrema derecha. Llegó a colaborar con la revista *Acción Española* de Ramiro de Maeztu y se afilió pronto a la Falange. El 18 de julio de 1936 Pérez Solís se encontraba en Oviedo como enlace de los sublevados. En la capital del Principado estuvo al mando de una compañía en la defensa de la ciudad, sitiada por las tropas republicanas.

Nombrado Delegado Sindical y Delegado de Trabajo en Valladolid en julio de 1938, al finalizar la Guerra Civil se retiró de la política activa, pero continuó ejerciendo como periodista, por lo cual recibió, entre otros, el Premio Nacional de Periodismo Francisco Franco en 1943.

La primera gran «purga» que se produjo en el PCE de los primeros años fue la expulsión de su dirección en 1932. Purga que arrojó un saldo ambiguo para el transfugismo, ya que dos de los expulsados: Bullejos y Adame ingresaron en el PSOE, en tanto que Trilla, pasado un tiempo, volvió al PCE, y Vega colaboró con el partido hasta que fue fusilado por los franquistas.

La campaña contra el grupo expulsado fue machaconamente orquestada por el partido. Desde declaraciones condenatorias del PC del Japón, hasta resoluciones de la CGTU, la recién creada central sindical comunista. *Catalunya Roja,* órgano Partit Comunista de Catalunya (no confundir con Partit Comunista Català), filial catalana del PCE y antecedente del PSUC, en su tercer número decía: «Adame, Trilla, Vega y Bullejos favoreciendo en la práctica a la contrarrevolución española, han saboteado la línea política de la Internacional Comunista».[7]

Realmente, Adame se integró en el PSOE y en la UGT, llegando a dirigir la Federación de Trabajadores de la Tierra de ese sindicato. Cuando se produjo el golpe fascista tuvo que refugiarse en la sierra ante el avance de las tropas sublevadas, y allí creó un grupo de resistencia. Después, consiguió llegar a Málaga. En 1939 marchó al exilio, pero fue buscado durante y después de la guerra civil por las autoridades franquistas para aplicarle el *bando de guerra* (ajusticiarlo).

Bullejos, tras su expulsión, ingresó en las Juventudes Socialistas, pero al fusionarse con las comunistas en 1936, el PCE logró que fuera expulsado de ellas, aunque mantuvo su militancia en el PSOE y la UGT. Acabó exiliándose en Méjico al final de la guerra, donde pasó el resto de su vida.

La salida de Balbontín, el líder del el Partido Social Revolucionario, que se había fusionado con el PCE, en febrero de 1933, fue menos traumática. Las discrepancias que manifestó, unos meses después de su ingreso, en las que mostraba su desacuerdo con el término socialfascismo y con la negativa del PCE a luchar junto a los socialistas y anarquistas «por abajo y por arriba» contra el fascismo, acarreó su inmediata expulsión tras una resolución del CC, en la que se le calificaba de «elemento inestable», traidor, «pequeño-burgués», cobarde, «contrarrevolucionario», etc. Sin embargo, durante la guerra volvió a ingresar en el partido, trabajando como periodista en *Mundo Obrero* y *La Tierra*, para terminar abandonando definitivamente el PCE ya en el exilio londinense.

Un final mucho más trágico, tuvieron otros dos célebres tránsfugas de la década de los años 30, Manuel Mateo Mateo y Enrique Matorras Páez. Mateo Mateo, luego de haber ocupado un puesto en el Buró Político del PCE, fue el fundador de la falangista Central Obrera Nacional Sindicalista, creada en 1934 y financiada por la monárquica Renovación Española, que pagaba su sede y su propaganda. Fundador del sindicalismo vertical que imperaría en nuestro país durante más de 40 años, Mateo Mateo encontró su final al comienzo de la guerra civil fusilado por sus ex camaradas. El falangismo le honró, años después, abriendo en Madrid un circulo social que llevaba su nombre y en el que, paradójicamente, encontraron refugio las primeras CC OO de la capital.

Enrique Matorras, dirigente de las Juventudes Comunistas en Madrid, tras una profunda lectura de la Biblia —según propia confesión— a finales de 1933, decidió abandonar el partido, contraer matrimonio religioso con su compañera y bautizar a su hija de 13 meses. Tras adherirse al sindicalismo católico, publicó una serie de reportajes sobre el comunismo en el recién creado diario *Ya*, perteneciente a la Iglesia católica. Estos reportajes se compilarán en forma de libro bajo el título de *El comunismo en España (1931-1934)*.

Detenido en abril del año siguiente se acusó a Matorras de preparar atentados contra dirigentes izquierdistas. Trasladado a la cárcel de Alicante, de donde logró escapar, retornó a Madrid, hallándose en la capital en el momento del golpe de Estado. Nuevamente detenido fue conducido a la Cárcel Modelo y allí será fusilado en agosto de 1936.

Los móviles que pudieron tener algunos de estos tránsfugas tal vez no fueron los que pretextaron en su momento, pudiendo primar intereses personales más allá de las posiciones políticas. Pérez Solís o García Cortés disfrutaron de prebendas tras abandonar el comunismo y cambiar de bando, aunque este no es el caso de Bullejos o Adame, que siguieron siendo socialistas. Pero tampoco es el caso de Enrique Matorras, que continuó arriesgando su vida en la trinchera opuesta hasta perderla a los 23 años.

El tema del transfuguismo político en aquellos años, y sobre todo el paso del comunismo a formaciones fascistas o parafascistas, merecen una revisión profunda, como apunta Steven Forti.[8] Una revisión que vaya más allá de la vulgarizada expresión liberal sobre que «los extremos se tocan», muletilla que late en el fondo de la teoría académica del «totalitarismo».

Para Forti no fueron pocos los dirigentes políticos y sindicales de izquierdas que en la Europa de entreguerras se convirtieron al fascismo, sustituyendo el internacionalismo proletario por el culto a la nación, la lucha de clases por la armonía social, y el materialismo dialéctico marxista por un fuerte antimaterialismo espiritualista entrelazado con valores cristianos. Algunos de ellos fueron unos oportunistas, aprovechándose de las dinámicas políticas nacionales para llegar a posiciones de poder político y económico; pero otros no lo fueron en absoluto.

En muchos de estos casos existen puntos en común y constantes que ayudan a entender las decisiones de aquellos personajes. En general, se movían por el valor otorgado a la acción, el dinamismo y la praxis, —tal vez de raíz soreliana— de la que fueron devotos. También les unía su fe en las minorías, las élites y las vanguardias revolucionarias, que se complementaba con una concepción de las masas como algo maleable bajo la dirección de un Jefe o un partido. Compartían también una fe inquebrantable en la revolución, como único motor del auténtico cambio social y político, despreciando el gradualismo reformista. Ese mismo desprecio se proyectaba sobre la democracia liberal, el parlamentarismo, la burguesía y el capitalismo. Por último, exaltaban un idealismo espiritualista en ocasiones claramente religioso.

Todos estos componentes se verían potenciados en aquella época por un residuo de la ideología burguesa liberal en su fase de ascenso revolucionario y cifrado en la nación. La nación entendida como un colectivo espiritual

movido por una sola voluntad. Sin este factor del nacionalismo exacerbado no es posible concebir el tránsito que un número, para nada desdeñable, de dirigentes políticos de la primera mitad del siglo pasado, realizó del comunismo al fascismo.

La frustración generada por la derrota tras la Guerra Civil fue pródiga en desengaños. Debieron ser muchos, más de los que podemos constatar, los que se «arrepintieron» de sus creencias pasadas. Las razones que les movieron a ello también debieron ser muchas y distintas, pero sólo en los casos más destacados podemos especular sobre las mismas. En el PCE, hay tres «arrepentidos» que destacan sobre otros por dos razones. La primera es la relevancia que habían adquirido durante su militancia en el partido, la segunda es la utilización que hizo el franquismo, en plena Guerra Fría, para dar pábulo a su nuevo posicionamiento, en algún caso, debidamente tergiversado y manipulado para servir a los intereses de clase.

Estos tres casos son los de Valentín González «El Campesino», Jesús Hernández y Enrique Castro Delgado. El primero fue una imagen popular del pueblo llano y sencillo que luchaba contra el fascismo, el segundo llegó a ser Ministro, miembro del Buró Político del PCE y representante ante la Komintern, y el tercero, también representante en la Internacional, se autotituló el creador del famoso Quinto Regimiento. Tres figuras de peso, que por distintas razones, fueron expulsadas del PCE de modo escandaloso, y que terminaron poniendo blanco sobre negro las razones que les habían conducido a ello.

Valentín González González, popularmente conocido como «El Campesino», es uno de esos iconos que la propaganda del partido supo crear durante la Guerra Civil. Con escasa formación intelectual, ofrecía la imagen de su extracción de clase popular, y de sus ademanes de *sans culotte,* que le acercaban al pueblo bajo. A los ocho años había comenzado a trabajar como minero en Peñarroya. Posteriormente fue arriero y terminó enganchándose en la Legión, de la que acabó desertando. En tiempos de la República había mejorado su posición y era viajante de comercio cuando comenzó a militar en el PCE.

El vacío militar que se produjo con la guerra le sirvió a Valentín González, junto con su pasado legionario, para integrarse en el Quinto Regimiento, e incluso mandar una Brigada y una División. Su participación en el con-

flicto es más que controvertida, aunque llegó a ser herido en el campo de batalla. Realmente fue una leyenda elaborada que se enfrentó a otras de naturaleza parecida, como las de Lister y Modesto. Héroe, como se le quiso presentar, o cobarde y fanfarrón, como le criticaban sus competidores, a los cuales el motejaba del mismo modo; su actividad militar se eclipsó cuando en los inicios de la batalla del Ebro se declaró enfermo.

Sin embargo, su imagen, barbada y popular, le permitió sobrevivir algún tiempo, y refugiarse en la URSS, donde se le hizo ingresar en la Escuela Superior de Guerra con el rango de comandante de Brigada. Pero El Campesino no era un hombre de estudios ni de disciplina, como ya había demostrado en la Legión, e intentó huir de la URSS a Irán. Este desplante le supuso ser internado en el campo de trabajo de Vorkuta, de donde logró escapar, saliendo de la Unión Soviética en 1949, a través de la frontera iraní.

Luego de su fuga Valentín González se instaló en Francia, pero rápidamente se le planteó el problema de la subsistencia. Fue entonces, cuando El Campesino decidió vender una lectura de su pasado. La Guerra Fría facilitaba este tipo de operaciones y González pudo publicar su *Vida y muerte en la URSS*, y su *Comunista en España y antiestalinista en la URSS*, en los años de 1950 y 1951, siempre en editoriales sudamericanas. En 1953, apareció en España *Yo escogí la esclavitud*, publicitado en el diario *ABC* con la advertencia de que «de los derechos de autor en España de este libro no se lucrará El Campesino. Serán entregados a "Huérfanos de Asesinados y Excautivos". Como la moral y la jurisprudencia dictan, no se beneficiará el verdugo y sí sus víctimas».[9] El título de esta obra pretendía ser un contrapunto hispano del best seller *Yo escogí la libertad* del tránsfuga soviético Víktor Krávchenko, libro que rápidamente se tradujo a veintidós idiomas y que fue un éxito de ventas en los EE UU.

En estas operaciones editoriales González fue asistido por Julián Gorkin, antiguo militante del PCE y del POUM, que era miembro del Congreso para la Libertad de Cultura, una organización especializada en la difusión de propaganda anticomunista financiada por la CIA. Sobre El Campesino, existen en el archivo Gorkin, unos documentos, fechados entre 1953 y 1969, consistentes en una petición de ayuda, ante su inminente detención y deportación de territorio francés; una solicitud de amparo a la Comisión de Refugiados y Apátridas del Consejo de Estado, y un recorte de prensa donde

se recoge la precaria vida de Valentín González en la localidad de Brehar, así como unos apuntes para un guion de TV sobre su vida.

El Campesino regresó a España en 1977, y rápidamente se declaró simpatizante de Felipe González. Murió en Madrid en 1983, sin que su aportación, ni militar, ni política dejara otra huella que la que le fabricó el agit-prop del PCE durante la guerra.

Entidad muy distinta tiene la figura de Jesús Hernández, de hecho, su expulsión se debió a la pugna por la sucesión en la secretaría general del partido tras el suicidio de José Díaz. Hernández estaba bien posicionado entre la emigración española en Rusia pero tuvo que enfrentarse al mito de Pasionaria, que supo rodearse de otros cuadros que prefirieron no desafiarla. Ibarruri tuvo la habilidad de conseguir que Hernández marchara a Méjico para dirigir el partido en el exilio americano, donde ya desempeñaban ese papel Uribe y Mije, que recibieron al recién llegado con el consiguiente recelo.

Hernández eligió mal el escenario para librar la batalla por la secretaría general. Alejado del centro moscovita, donde se debía confirmar al sucesor de Pepe Díaz, las críticas de Hernández sobre la situación de los españoles en la URSS rápidamente fueron interpretadas como antisoviéticas, lo que precipitó su expulsión del partido. En el enfrentamiento no hubo argumentos políticos de peso, quedando reducidas las diferencias a la mayor o menor sumisión ante el centro rector de Moscú. Con posterioridad, Hernández, que nunca renunció al comunismo y nunca se apoyó en el régimen franquista, se convirtió en titista.

Hernández trabajó como asesor de la embajada yugoslava en México, mientras daba a publicar sus divergencias en forma autobiográfica con el título *Yo fui un ministro de Stalin*. Las líneas maestras del libro se encontraban ya en las notas que sirvieron al autor para impartir una conferencia titulada «La URSS en la guerra del pueblo español» en la Escuela Superior de Cuadros del Partido Comunista Yugoslavo en 1952. La primera edición vio la luz en México en 1953, y fue traducida al francés ese mismo año con el título de *La grande trahison*.

Con posterioridad publicó *En el país de la gran mentira. Segunda parte del libro Yo fui un ministro de Stalin*, que se inspiraba directamente en la obra del croata Ante Ciliga, *Au pays du grande mensonge,* publicado en París en 1938, que se completó en 1950.

Caso algo distinto es el de Castro Delgado, un ejemplo de autodidactismo muy propio del PCE de aquellos años. Castro ingreso muy pronto en el partido y supo abrirse un hueco en la dirección de las juventudes madrileñas. A su habilidad como agitador unió su capacidad intelectual, que le sirvió para colaborar en las publicaciones del partido. Convencido y muy disciplinado fue uno de líderes de las Milicias Obreras y Antifascistas (MAOC), escalando posiciones en la organización hasta el estallido de la guerra civil, en cuyos inicios desempeñó un papel destacado en la formación del famoso Quinto Regimiento, del que fue su primer comandante en jefe.

En diciembre de 1936 fue nombrado director general de Reforma Agraria, a las órdenes de su correligionario el ministro de Agricultura Vicente Uribe. Posteriormente ocupó diversos cargos en el Comisariado político del Ejército Popular.

Al final de la guerra se refugió en la URSS, siendo uno de los representantes del PCE en la Komintern. Según contará en su libro *Mi fe se perdió en Moscú*, la vida en la unión soviética y la línea política de sumisión a los intereses del país de asilo le llevaron al desengaño sobre todo aquello en lo que había creído, lo que le condujo a alinearse con Jesús Hernández. La caída de éste precipitó la caída de Castro, y en mayo de 1944, fue apartado del Comité Central para acabar siendo expulsado del PCE.

La sentencia la dictó la misma Pasionaria, ganadora de la pugna por la secretaría general, cuando el 29 de junio de 1944, ante los miembros del Comité Central reunidos en Moscú, dijo: «Una oveja sarnosa contagia al rebaño». Pasionaria puso en juego todas sus influencias para intentar impedir que Castro abandonase la Unión Soviética. El 8 de junio de 1944, Ibarruri, escribió al mismísimo Dimitrov una carta personal en la que le decía: «Sabemos que Enrique Castro ha recibido el visado del gobierno mexicano para salir de la URSS a México, él, su mujer y su cuñado... Mi opinión es que Castro no debe salir de la Unión Soviética y deseo que usted me aconseje qué debo hacer para impedirlo...»[10]

Castro, que finalmente pudo marchar a Méjico, comenzó a escribir su primer libro de memorias, que aparecieron de forma fragmentada en el diario *Le Monde* y posteriormente fueron editadas por la prestigiosa Gallimard (*J'ai perdu la foi à Moscou*). En España la agencia EFE adquirió los derechos y se publicó por entregas en *La Vanguardia Española* y en *El Diario Vasco,*

entre abril y mayo de 1950. Ese mismo año aparecerían en España, en la editorial EPESA, bajo el título *La vida secreta de la Komintern: cómo perdí mi fe en Moscú*. La versión íntegra y definitiva escrita por Castro vería la luz por primera vez en México en 1951, sin censura y bajo el título *Mi fe se perdió en Moscú*.

La gestación del libro tenía lugar a la vez que Castro se distanciaba del grupo que se había formado en el exilio en torno a Jesús Hernández, con quien había colaborado en la fundación del Movimiento Comunista de Oposición y la publicación de la revista *Horizontes*, plataforma desde la que criticaron al PCE y sus dirigentes.

En 1960 Castro estaba completamente arruinado. Hay dos cartas de 1960 cruzadas con Gorkin, urgiéndole a convencer al director de la editorial Hachette para que aceptase publicar su segundo libro, *Hombres made in Moscú*. Castro le confesaba estar acosado por los acreedores y en una situación económica difícil. Tras haberle dado largas Gorkin le respondió desengañándole sobre la posibilidad de publicar el libro en Francia, debido a la pérdida de interés del público por la guerra civil española.

Es entonces, cuando a través de intermediarios, Castro consiguió la atención de Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo del régimen franquista. Se negoció su retorno a España y la publicación de su segunda obra, también de carácter autobiográfico. Franco autorizó formalmente su retorno en 1963. Esta decisión cabe contextualizarla en la política anticomunista del franquismo que apreciaba propagandísticamente este tipo de arrepentimientos. No obstante, la censura desaconsejó la publicación del libro, *Hombres made in Moscú*, y Castro quiso garantizarse una forma de vida, cuestión que se resolvió al asegurarle colaboraciones en la prensa, especialmente en el diario católico *Ya*, donde firmaría artículos con el pseudónimo de «Jorge Manrique», por las que cobraría quince mil pesetas mensuales.

Pese a los informes en contra, el libro fue finalmente aceptado. El intercambio de notas y cartas entre Fraga, el editor Luis de Caralt y Carlos Robles Piquer fue especialmente intenso, y *Hombres made in Moscú*, terminó editándose sin apenas censura. El libro tenía que salir a la calle por encima de todo debido a su utilidad propagandística. Castro regresó a España con su familia en 1964 y murió unos meses después en enero de 1965.

Castro tenía ínfulas literarias que desplegó en sus dos obras a través de mecanismos sencillos pero efectistas: frases cortas, un expresionismo naturalista, exageración y sátira, basada en mordaces retratos de sus ex-camaradas, y sucesión de diálogos cortantes y de escenas de las que Castro siempre sale airoso. Su valor literario es escaso, políticamente no argumenta nada que no sea la denuncia del seguidismo del PCE a las directrices de Moscú y la capacidad de adaptación de muchos de sus compañeros para sobrevivir o medrar. Históricamente su valor es todavía menor, ya que no revela nada que no se supiera antes de la publicación de sus obras.

La aparición de obras como las de Hernández, Castro y El Campesino fue facilitada por el Estado franquista a través de editoriales institucionales. El régimen impulsó la difusión de este tipo de textos, y en las de Hernández y El Campesino se puede apreciar un caso de piratería editorial a gran escala llevada a cabo por la propia administración franquista.

Otros expulsados, también de renombre, se fueron más discretamente, como ocurrió con Margarita Nelken, diputada del PSOE por Badajoz y parlamentaria de prestigio, que ingresó en el PCE en plena guerra, y fue expulsada en 1942, alegando sabotaje y descrédito de la política de Unión Nacional. Mientras, su hijo, Santiago de Paúl, combatía en las filas soviéticas muriendo heroicamente en 1944.

Los casos de Heriberto Quiñones y Jesús Monzón, también tachados de «traidores», en una época decisiva para el PCE, entre su recomposición tras la derrota en la guerra civil y la puesta en pie de una organización capaz de dar respuesta a las expectativas planteadas por la inminente victoria aliada en la guerra mundial, son reveladoras de como a la dirección del partido, refugiada en la URSS, no le gustaban las iniciativas que pudieran emprender los que luchaban en el interior y que no contaran con el beneplácito de los dirigentes oficiales.

Los «traidores» Quiñones y Monzón fueron víctimas de la represión fascista por su lucha en suelo español, uno fue fusilado y el otro pasó largos años en la cárcel, lo que no les libró de la condena de la organización. Pero en aquella época terrible el renegado podía llegar a ser «ejecutado» por el propio partido, éste fue el caso de Gabriel León Trilla, un comunista de la primera hora que secundó a Monzón.

Trilla había sido expulsado del partido cuando cayó la dirección de Bullejos en 1932, pero durante la guerra, volvió a ser admitido en la organización. Tuvo cargos públicos —director general de Enseñanza Media— y responsabilidades militantes—director de la revista teórica del partido, *Nuestra Bandera*—, pero al finalizar la contienda se refugió, como profesor de francés, en Aix-en-Provence. Allí lo encontró Monzón, que lo sacó de su retiro para enviarlo al interior con la misión de sentar las bases de la Unión Nacional en la clandestinidad y las futuras organizaciones guerrilleras en la Península.

Tras el fallido intento de penetración por el valle de Arán y de la posterior detención de Monzón, Trilla quedó aislado en Madrid; donde lo buscaba la dirección del partido y la policía. Trilla había roto todos los contactos con el partido del interior cuando llegó a Madrid el enviado desde Toulouse, Antonio Núñez Balsera, con una orden perentoria que transmitió al héroe de la resistencia francesa y guerrillero en la zona centro Cristino García: había que liquidar físicamente a quienes no estuvieran dispuestos a marchar a Francia para rendir cuentas ante la dirección del partido, y debían ser eliminados antes de que cayeran en manos de la policía.

Cristino García le encomendó la tarea a dos de sus hombres, que localizaron a Trilla gracias a su secretaria. En septiembre de 1945 le tendieron una celada en el Campo de las Calaveras donde apuñalaron al veterano militante comunista.

En todos estos casos las pretendidas desviaciones no entrañaban discrepancias estratégicas de fondo que se pudieran calificar con un apelativo con contenido político, como había ocurrido con el trotskismo. La primera herejía teórica de la posguerra sobrevino con el titismo, desviación que era muy difícil de definir más allá de la independencia que defendían los comunistas yugoeslavos frente a los dictados de Stalín.

Yugoeslavia había sido liberada del nazismo por los mismos yugoeslavos y no por el Ejército Rojo, por tanto, la implantación del socialismo en ese país no se ajustó a los planes que tenía Stalin para la zona de los Balcanes y para el resto de los Estados que habían caído bajo la esfera de influencia de la URSS, esto vino a coincidir con el inicio de la Guerra Fría.

Tras la disolución de la Komintern en mayo de 1943, no existía oficialmente ningún organismo de enlace entre los diversos partidos comunistas.

Éste enlace se reconstruyó parcialmente en octubre de 1947, a raíz de la celebración en Polonia, un mes antes, de una conferencia secreta a la que asistieron los representantes de nueve partidos: la URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Francia e Italia. La conferencia decidió crear una Oficina de Información de Partidos Comunistas, cuya abreviatura rusa era Kominform. La ausencia a esta convocatoria de otros partidos como el Partido Comunista Chino, cuyo potencial era indiscutible, indica que la preocupación de los soviéticos no era exactamente el triunfo de la revolución comunista en el mundo, sino el control del comunismo europeo, y sobre todo, el de los países liberados por los soviéticos.

La tarea de la Kominform sería «la organización de intercambios de experiencias entre los partidos interesados y en caso necesario…, coordinación de las actividades sobre la base del libre consentimiento»[11] y Belgrado iba a ser su sede. Su órgano de expresión sería una revista cuyo título lo había escogido el propio Stalin: *Por una paz duradera, por una democracia popular*. Pero en la segunda reunión de la Kominform, celebrada en Rumania durante el mes de junio de 1948, se excluyó a los comunistas yugoslavos. Se les censuraba haber favorecido la presencia de elementos nacionalistas a la cabeza del partido y haber practicado una política «aventurista». Una nueva reunión de la Kominform, en noviembre de 1949, acusó a Belgrado en un informe que se titulaba «El partido comunista yugoeslavo, en poder de asesinos y de espías».[12] Era el principio de una lucha encarnizada contra el «titismo».

El titismo nunca tuvo unos rasgos ideológicos bien definidos. El reproche fundamental era el nacionalismo comunista, lo que convertía a los titistas en aliados objetivos del imperialismo. El comunismo yugoeslavo añadió en su desarrollo otros elementos diferenciadores respecto al modelo soviético: un particular énfasis en la autogestión frente a la colectivización forzosa, un cierto respecto a la pequeña propiedad campesina (hasta 15 Ha.) y una política exterior de no alineamiento frente a los bloques enfrentados en la Guerra Fría.

No obstante, el titismo fue la herejía que sirvió para cerrar las filas de los partidos comunistas entorno al estalinismo dogmatizado en su fase última, ante la política agresiva de EE UU y sus aliados. La herejía propició una serie de purgas y procesos espectaculares, en Hungría (proceso Rajk), Che-

coslovaquia (proceso Slansky), Bulgaria (proceso Kostov), etc. Pero todos los partidos comunistas tuvieron sus titistas y el PCE, a pesar de su precaria situación, no podía ser una excepción.

El caso más sonado de titismo en nuestro país se dio, como es lógico pensar, en el seno del PSUC.

El PSUC había nacido de un proceso de unificación de diversas corrientes socialistas y nacionalistas en 1936, al calor del Frente Popular. Su líder indiscutido era Joan Comorera, que había evolucionado del republicanismo radical al socialismo catalanista hasta convertirse en el auténtico artífice de ese proceso de unificación.

Comorera había formado parte del primer gobierno de Luis Companys en la Generalitat, en enero de 1934, a la cabeza de su partido, la Unió Socialista de Catalunya. Tras los sucesos de octubre había sido encarcelado en el Penal de Santa María de donde salió para fundar el PSUC cuando la guerra ya estaba iniciada. Junto a la Unió Socialista de Catalunya (USC), se vinieron a sumar el Partit Comunista Català (PCC), los radicales del Partit Català Proletari, la reducida Federación Catalana del PSOE e incluso hombres procedentes de la CNT que se convertirían a la larga en miembros de la dirección del nuevo partido unificado, como José Moix.

La confirmación de una cierta identidad propia de este partido, —cuando durante toda la guerra había actuado de consuno con el PCE— sobrevino en junio de 1939, al admitir la Internacional Comunista al PSUC como Sección Catalana de la Komintern, operación avalada por el veterano Vitorio Codovilla.

Eso significaba colocar al PSUC, aunque sólo fuera sobre el papel, a un nivel semejante al de su hermano mayor el Partido Comunista de España. No obstante, su admisión lo fue como sección de la Internacional por ser un «partido unificado», pero no por ser un «partido nacional», pues los estatutos de la IC dejaban bien claro que a todo Estado correspondía un solo partido miembro.

Disuelta la Internacional Comunista desde 1943, la independencia del PSUC quedó debilitada en medio de los embates de la Guerra Fría. Por eso, en el denominado III Pleno del PCE, en marzo del 1947, se apuntaron ya las primeras señales sobre la conveniencia de que el PSUC abandonara

su autonomía para someterse totalmente al PCE. Este partido único para toda España no podía ser sino férreo y sin fisuras, lo que el miembro de la dirección del PCE Antón definía como: *un solo partido marxista-leninista-estalinista de los pueblos hispánicos.*

Comorera, que formaba parte como miembro de número del Buró Político del PCE debido a sus méritos personales y no a su status de Secretario General del PSUC, veía con reticencia esta operación, que le privaba de facto de su autoridad al frente del partido catalán que él había alumbrado.

En julio de 1949 con ocasión del XIII Aniversario de la fundación del PSUC, el aparato del PCE organizó los actos para celebrar tan magno acontecimiento con un grandioso mitin en Toulouse, en el que intervendría Dolores Ibarruri, pero sin contar para nada con la opinión de Comorera. La reacción del dirigente catalán se tradujo en una carta que dirigió a Vicente Uribe, —a la sazón el número dos del PCE— en la que le comunicaba su decisión de retirarse del Buró Político del PCE, para reintegrarse plenamente en su función de Secretario General del PSUC, y en la que afirmaba que no iba a admitir que la política de la organización catalana fuera impuesta por el PCE, afirmación que equivalía a un gesto de rebelión abierta.

El 8 de noviembre del mismo año, veinticuatro horas después de los festejos de la Revolución de Octubre, Comorera fue públicamente declarado por el PCE como: «traidor, perverso, degenerado, ambicioso, megalómano, con espíritu de caudillaje e imitador punto por punto del camino seguido por la banda fascista de Tito»[13]

Pero Comorera no se rindió, mantuvo como si no hubiera pasado nada las siglas del PSUC en sus declaraciones y llegó a editar desde Francia un *Boletín interior*, mimeografiado, en el que para evitar malas interpretaciones dedicó la primera página a felicitar a Stalin en su 70 aniversario y prometer combatir sin desfallecer la degeneración del traidor Tito y su pandilla de espías y saboteadores. Pero esto no le sirvió de mucho. Casi todos sus partidarios empezaron a abandonarle denunciando públicamente su perversidad. Su propia hija Nuria, esposa del miembro del Secretariado del PSUC, Wenceslao Colomer, firmó en París en marzo de 1950 una declaración de principios con una frase que era un epitafio: «El mismo día que nació el traidor Comorera, murió mi padre».

Los mecanismos de este tipo de campañas eran perfectamente conocidos por Comorera, ya que él mismo los había practicado, lo que le permitió percibir que las cosas podían ir más allá de la calumnia y la difamación. Llegando a temer su misma liquidación física lo escribió, al aludir al "*protocolo M*"[14], una expresión que sólo un hombre de la Komintern estalinizada podía conocer para referirse a la eliminación física de alguien. Lister, muchos años después, afirmará que un comando enviado por la dirección del PCE, esperó infructuosamente a Comorera para acabar con él cuando intentara cruzar la frontera.[15]

Una vez más la pugna estuvo exenta de contenido político. Algunos han querido ver concepciones estratégicas y tácticas diferentes, pero no hay nada de eso a lo largo de toda la crisis. El proceso y la acusación y hasta el desenlace, fueron dirigidos contra el «desviacionismo nacionalista» que Comorera encarnaba al defender la autonomía orgánica del PSUC, que no política. Fue una polémica estaliniana entre estalinistas; y por tanto no se discutían ni ideas ni programas; se discutían poder o parcelas de poder.

En enero de 1951, el «traidor» Comorera, dio un paso definitivo para intentar desenmascarar a quienes le acusaban de ser un traidor a la causa comunista. Decidió entrar en España para continuar con su lucha frente al franquismo. La dirección del PCE quedó momentáneamente desconcertada, pero rápidamente redobló la campaña de desprestigio y le añadió un nuevo sesgo: Comorera era realmente un agente de la policía franquista que había cruzado la frontera para denunciar a los que luchaban en el interior desde la clandestinidad.

Por Radio España Independiente se divulgó el siguiente comunicado: «Obreros de Cataluña: Juan Comorera es un provocador, que durante nuestra guerra conspiró contra el gobierno Negrín, de acuerdo con el cónsul francés que estaba en Barcelona. Juan Comorera es un provocador cuya actual actividad es entregar los comunistas a la policía... Juan Comorera es un enemigo de la clase obrera y como tal hay que tratarlo allí donde se encuentre».[16]

Este mismo comunicado fue publicado el 15 de septiembre de 1951 en *Mundo Obrero* y el órgano oficial del PSUC, *Treball*, denunció con sus nombres y apellidos a los dos únicos colaboradores de Comorera en la clandestinidad: Martí Salvat y Francesc Perramón.

El 9 de junio de 1954, el «traidor» Comorera, tras tres años de clandestinidad, será detenido por la policía política de Franco, en su piso alquilado de la calle barcelonesa de Consejo de Ciento. Posteriormente, el «confidente y agente provocador», será juzgado y condenado a treinta años de cárcel por la dictadura. Enviado a la prisión de Burgos, desasistido por los médicos, morirá en la cárcel de una bronconeumonía el 7 de mayo de 1958. Tenía 63 años. Con su muerte se cerraba el caso más sonado de eliminación de la herejía titista en el PCE.

Aquellos fueron años muy duros en los que la caza de brujas funcionó en todos los frentes, y el PCE la ejerció de modo profuso entre sus filas. Poseemos un dato revelador de cómo los herejes y renegados fueron inexorablemente perseguidos en esta época. A raíz de la caída en desgracia de Francisco Antón, —que había sido el amante de Pasionaria durante una década, y al que se acusó, cuando dejo de serlo, de «caciquismo» y «fraccionarismo»— quedó un testimonio escrito sobre esas prácticas. Antón se vio obligado a redactar una autocrítica en la que se confesó como el responsable de la expulsión en territorio francés de 632 camaradas, entre 1946 y julio de 1950, llegando a especificar en el texto los motivos de la expulsión en cada caso. Motivos tales como: relacionarse con Servicios Extranjeros, por trotskismo, por tratos con consulados franquistas, por marchar a España, por inactividad y derrotismo; por desviaciones políticas; y por otros varios (mercado negro, inmoralidad, etc.).

El siguiente caso de herejía, con un marcado relieve por la categoría política de los implicados y por la naturaleza del mismo, se produjo en 1964, siendo ya Secretario General del PCE Santiago Carrillo, y en esta ocasión, la crisis sí tuvo un contenido político y precipitó un debate sobre la estrategia y táctica de la organización.

Con el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y el informe, inicialmente secreto, de Kruschev sobre los crímenes de Stalin, se abrió un período de inestabilidad interna en todos los partidos comunistas, al tener que asimilar la crítica al estalinismo o, como se prefería denominar, al «culto a la personalidad». En ese proceso, la insurrección popular y revolucionaria contra la dictadura del régimen staliniano en la Hungría de 1956 polarizó las tendencias en las direcciones de muchos partidos comunistas. La discusión sobre el asunto húngaro en el Buró Político del PCE derivó hacia el problema general del stalinismo, y fue agria y dura.

A partir del verano de 1959 se pusieron en primer plano otros motivos de divergencia. En el Buró Político se alzaron algunas voces como las de Claudín y Gallego, sobre el fracaso que había supuesto la convocatoria de la jornada de «Huelga Nacional Pacífica» del 18 de junio, que solo se siguió en Madrid de forma muy limitada.

Contra toda evidencia Carrillo, que ya era Secretario General, se empecinó en sostener que la huelga había sido un éxito. Al principio Gallego, que había estado en Asturias, defendió la tesis del fracaso, pero finalmente se alineó con Carrillo, postura que secundó el resto de la dirección.

En este debate se evidenció que el anterior, sobre la superación del estalinismo, no había quedado resuelto. De hecho, las prácticas de unos secretarios generales todo poderosos seguían intactas. Claudín constató la imposibilidad de que en el Comité Ejecutivo, —que era como había comenzado a llamarse el Buró Político a partir del VI Congreso —prosperasen posiciones diferentes a las de Santiago Carrillo.

La independencia que estaban cobrando los partidos comunistas respecto a Moscú, había venido a aumentar el poder de esos mismos secretarios generales. Antes se encontraban subordinados a las instancias superiores de la Internacional Comunista o del PCUS, sin embargo ahora, haciendo uso de una relativa autonomía, veían reforzada su autoridad en sus respectivas organizaciones.

Esa autoridad quedó cuestionada en el PCE a comienzos de los 60, cuando en un debate sobre la cuestión agraria, Fernando Claudín y el joven intelectual Jorge Semprún, votaron por primera vez contra lo defendido por el Secretario General. Acto completamente insólito, por aquellas fechas, en el funcionamiento de la dirección del partido.

Como resultado de todo esto, entre 1956 y 1964 se fueron perfilando tres temas básicos de conflicto en la dirección del PCE: el stalinismo, el análisis sobre la realidad española y la postura de la dirección frente a la discrepancia interna.

La tensión en el Comité Ejecutivo a comienzos de 1964 aumentó con motivo de la discusión de un material informativo sobre la situación política en España que Carrillo había preparado. Teniendo en cuenta la importancia del asunto se acordó organizar una reunión plenaria a la que pudieran asistir

Dolores Ibárruri y otros miembros del ejecutivo que residían en los países del Este.

En marzo de 1964 tuvo lugar cerca de Praga esa sesión plenaria del Comité Ejecutivo del PCE. Fue entonces cuando Femando Claudín, con el apoyo de otros dos miembros del Comité Ejecutivo: Jorge Semprún, cuyo nombre de guerra era Federico Sánchez, y Juan Gómez, criticaron abiertamente la línea política oficial denunciando el excesivo optimismo con el que se propalaba que la caída del franquismo era «inminente» y que al régimen solo le faltaba la «puntilla» que le daría la famosa «Huelga Nacional Pacífica».[17]

Unos meses después, en un número de *Nuestra Bandera*, aparecido en enero de 1965, y en un suelto de *Mundo Obrero* de abril del mismo año, los interfectos se enteraron de que habían sido expulsados del partido por actividad fraccional.

La crisis dejó un rastro documental no exento de interés sobre la realidad española de aquellos años y abrió un debate, aunque con sordina, sobre la estrategia a seguir por los comunistas españoles, debate que ya se estaba llevando a cabo en otros partidos europeos como el italiano.

Poco tiempo después de estas expulsiones buena parte de los análisis hechos por los excluidos en Praga fueron adoptados por el PCE, sin reconocer su auténtico origen y atribuyéndolos a la iniciativa del Secretario General. No obstante, Claudín, años después, matizaba la naturaleza de esta apropiación: «A mi juicio esto sólo es verdad a medias. Hubo, ciertamente, el reconocimiento de la transformación capitalista del país, pero las dosis de subjetivismo en el enfoque de la realidad y en las decisiones tácticas, lo mismo que en las previsiones estratégicas, siguieron siendo considerables hasta la desaparición del dictador. Por otra parte, nosotros —a los que se nos acusaba de "desviación de derécha"— nunca sugerimos una alianza entre la clase obrera y los sectores fundamentales del capital monopolista, como propuso años después Carrillo en su estrategia de Pacto de la libertad, de la que es continuación su entendimiento tácito o expreso con Suárez».[17]

Dada la talla intelectual de Claudín y Semprun, su expulsión supuso un pequeño terremoto. Ambos continuaron siendo figuras de relieve en el campo del socialismo progresista y ambos acabaron sus días en la órbita

del PSOE, llegando Semprun a ser ministro de cultura en un gobierno de Felipe González.

El mismo año de 1964 se vivió en el PCE otra crisis con una mayor repercusión a nivel organizativo que la que tuvo la expulsión de Claudín y Semprúm.

El XX Congreso del PCUS comportó un distanciamiento con el Partido Comunista de China (PCCh) —apoyado por el Partido del Trabajo de Albania—, pues Mao Zedong siguió reivindicando la obra política de Stalin. La crisis estalló definitivamente en 1962, con la retirada de los expertos soviéticos de China. La consecuencia fue que se produjeron diversas escisiones en los partidos comunistas europeos y americanos, dando lugar a la aparición de partidos que se definían como marxistas-leninistas, y que obtenían apoyo financiero de China y Albania.

Si el punto nodal en la teoría de la «desviación titista» frente a los dictados de la URSS había sido el nacionalismo, en el caso de la herejía maoísta el mal era el «aventurerismo», mientras que para los prochinos o maoístas, lo que aquejaba al PCUS y a los partidos oficialistas era el «revisionismo».

Este fenómeno escisionista se dio también en el PCE, sobre todo en el exilio. Pequeños grupos disidentes que orbitaban entorno a cuatro publicaciones: *El Proletario*, *Mundo Obrero Revolucionario*, *La Chispa* y *España Democrática*, se encontraron en octubre de 1964 en Suiza en una primera reunión para establecer contacto. Finalmente, en diciembre se celebró en un garaje de Bruselas el primer pleno del Comité Central del PCE marxista-leninista. El órgano del nuevo partido, impreso fuera de España, se difundió por primera vez en enero de 1965, bajo el título de *Vanguardia Obrera*. En la dirección de esta recién nacida organización figuraban Elena Ódena, Raúl Marco y Paulino García Moya.

Paulino García Moya, procedente de *España Democrática,* era un ex militante comunista detenido en 1946 y emigrado a Colombia en 1954. Del país sudamericano había regresado a España a mediados de los sesenta, siendo detenido no mucho después. Si *España Democrática* tuvo una incidencia escasa, y muy circunscrita al exilio español en Colombia, no ocurrirá lo mismo con *La Chispa*, que se imprimía en Suiza, y cuya influencia se extenderá después al interior. En Ginebra trabajaba la máxima inspiradora de este grupo, que se hacía llamar con el nombre de guerra de «Elena Odena», como ho-

menaje a una miliciana comunista muerta en la guerra civil. En realidad, se llama Benita Ganuza, y era una funcionaría de Naciones Unidas.

Este nuevo partido PCE (m.l.) comenzó a implantarse en el interior en 1966, gracias al esfuerzo aportado por Paulino García Moya y por Elena Odena que sería una de las protagonistas, junto con Julio Alvárez del Vayo, de la creación del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) en enero de 1971, en el curso de una reunión celebrada en el piso parisiense del dramaturgo Arthur Miller.

El PCE (m.l.) fue el primer partido surgido de una escisión del PCE desde el final de la guerra, lo que le permitió conservar su ventaja sobre las otras organizaciones marxistas-leninistas en el transcurso de los siguientes años cuando las rupturas y escisiones se multiplicaron.

Los llamados maoístas o «chinos», fue **s**in duda, la familia más rica en formaciones y en militancia de toda la izquierda radical española en el tardofranquismo. Su origen, como ya hemos dicho, está en el divorcio entre la URSS y China a comienzos de los sesenta pero tras la aparición en casi todo el mundo de los PC (m.l.) o «marxistas-leninistas», la trayectoria y diversidad de estos grupos hace francamente difícil su taxonomía y contiene una enorme ambigüedad. Un buen ejemplo de lo que estamos diciendo es el propio PCE (m.l.) que nació como producto del conflicto Chino-soviético y, sin embargo, en las desavenencias habidas entre el pequeño PTA (Partido del Trabajo de Albania) y PCCh, el partido español optó por el primero y se convirtió en un fiel seguidor de su líder Enver Hoxa, llegando a disponer de una emisora de radio en Tirana desde la que retransmitía una programación que se captaba en España.

Otras formaciones por el contrario siguieron fieles al comunismo chino más allá de la muerte de Mao y a pesar de los grandes cambios que experimentó la política en el país oriental, sobre todo tras la eliminación de la famosa «Banda de los cuatro» (sector más radical del PCCh en el que militaba la última mujer del propio Mao). El epígrafe de marxistas-leninistas, que solían esgrimir los maoístas, acogía también a otras formaciones que no rendían tan explícito culto al modelo chino pero que mantenían vivo el referente estalinista, este podía ser el caso de grupos nacionalistas como Unión do Pobo Galego (UPG).

Todas estas formaciones tenían, a pesar de sus diferencias, una misma vocación, volver al pasado glorioso de la Tercera Internacional en su época de los Frentes Populares bajo la dirección del camarada Stalin. Su modelo de partido era estrictamente leninista en su versión estalinizada. El centralismo era total y no se admitía ningún tipo de crítica o desviación ante la política dictada por la dirección.

Admitían las influencias teóricas y políticas derivadas de procesos revolucionarios contemporáneos y, en especial, de la obra de Mao del que reconocían una influencia en su línea política, algunos de modo explícito, como ocurría con la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), otros de un modo más laxo, como sucedió con el Movimiento Comunista de España (MCE) en su segunda etapa, y con el propio Partido del Trabajo de España (PTE).

Todos ellos consideraban que la naturaleza de la revolución pendiente en España era democrático-burguesa, como paso previo a la implantación del socialismo. Su referente, como ya hemos dicho, era el Frente Popular con un fuerte contenido social, y por eso buscaban desesperadamente alianzas en los sectores burgueses que avalasen sus pretensiones. El caso más evidente de este tipo de política lo representó el PCE (m.l.) que entre las numerosas organizaciones «fantasma» que constituyó, nutridas por sus propios militantes, se contaban el FRAP y Convención Republicana, dos formaciones teóricamente frentistas que debían aglutinar a todos los demócratas que estuvieran contra la dictadura.

Como rasgo común tenían el querer trasplantar al Estado español el modelo de revolución democrático-popular de China, con adaptaciones más o menos literales. En los programas de los grupos más radicales como PCE (m.l.), o la ORT, se sustituían mecánicamente los agentes y los procesos, y, en aquellos más abiertos, como el MC, Organización Comunista de España (Bandera Roja) y el PTE, se procuraba una adaptación más modernizada que pasaba en algunos casos por tener en cuenta las teorizaciones de la Nueva Izquierda o las aportaciones del marxismo estructuralista de Althusser o Poulantzas.

En esta «familia» destacaron por su implantación tres formaciones, el PTE, el MC y la ORT, ya que el PCE (m.l.) al entregarse a través del FRAP al aventurerismo armado en la última parte del tardofranquismo sufrió tre-

mendos golpes represivos y alejó de él a sectores muy importantes. Las formaciones mayoritarias fueron el PTE y el MC.

El PTE tuvo su origen en el grupo *Unidad*, escisión del PSUC en 1967, que en ese mismo año se convirtió en PCE (i) Partido Comunista de España (internacional), denominación que cambiará en 1975 por la de Partido del Trabajo de España (PTE) para poder adherirse a la Junta Democrática.

Pronto se reveló como un partido que deseaba desesperadamente la representación electoral, pero quedaba sistemáticamente excluido del parlamento, lo cual le llevó a unirse con ORT en 1979, para formar el Partido de los Trabajadores de España; la unificación de las dos mayores organizaciones de la extrema izquierda maoísta no bastó para formar un sólido partido a la izquierda del PCE.

El Movimiento Comunista (MC) surgió en 1967 del grupo *Komunistak,* una fracción de ETA que se convirtió en Movimiento Comunista de Euskadi y, luego, por fusión con otros grupos, en Movimiento Comunista de España y finalmente en Movimiento Comunista.

Inicialmente influido por la obra de Mao, dejó de considerarse maoísta en 1976, aunque conservó rastros de su pasado y siguió tomando como referente las tesis de Dimitrov sobre el fascismo para caracterizar al régimen de Franco. Su versatilidad y ductilidad frente a otras formaciones del mismo corte le permitió sobrevivir largo tiempo.

La ORT fue tal vez de todos estos grupos el que mejor reflejó el espíritu del maoísmo, no sólo por línea política, calcada de los análisis de Mao, sino por las formas. Su propaganda, su lenguaje e incluso el culto a su Secretario General, José Sanroma, y el nombre de su organización juvenil Unión de Juventudes Maoístas, todo en él evocaba la revolución china, aunque por su origen, era el más insertado en la clase obrera y uno de los más numerosos.

El gran cambio estratégico del PCE a finales de la década de los 60 se produjo en las relaciones con la URSS y con el PCUS. Este distanciamiento se precipitó cuando el PCE condenó de modo explícito la intervención militar de las fuerzas del Pacto de Varsovia en la Checoslovaquia de 1968. La burocracia del PCUS juzgó como intolerable que los comunistas checoeslovacos exploraran una vía distinta inspirada en un socialismo democrático

Los prosiviéticos

Formaban el sector más ortodoxo de la izquierda radical, pues conservaban en gran medida los presupuestos políticos del PCE, del que procedían y del que siempre se reclamarán como auténticos continuadores de su "heroica" historia. Estos grupos mantenían viva la tradición de seguidismo al centro director de la revolución mundial que para ellos era la URSS. Sin embargo, tras la disolución de la Internacional y con el triunfo de otras revoluciones como la China ese principio comenzó a debilitarse.

Esa ruptura con la tradición se acentuó a partir de la invasión de Checoslovaquia y no pudo ser asimilada por núcleos de viejos y jóvenes militantes comunistas que por razones distintas continuaron manteniendo viva su veneración por la primera potencia comunista mundial. En esos planteamientos tiene su origen esta corriente que consideraba revisionistas y acomodaticias las posturas adoptadas por la dirección del PCE.

Por su incondicional defensa de lo que denominaban el corazón de "el campo socialista", fueron llamados prosoviéticos y tras la invasión de Afganistán por la URSS, se les llamó afganos. Sus postulados, aunque en sintonía con el comunismo oficial soviético reactualizaban en cierta forma los principios básicos de la política estalinista.

Las principales formaciones en este campo fueron: el Partido Comunista de España (VIII-IX Congresos) que se formó en 1971 a partir de una escisión de PCE. El Partido Comunista Obrero Español fue una organización creada por Enrique Líster a su salida del PCE en 1973.

La Oposición de Izquierda al PCE (OPI), también nacida en 1973, inicialmente fue una corriente interna del PCE y después una organización diferenciada, que en 1977 se transformó en el Partido Comunista de los Trabajadores (PCT).

Los troskistas

La IV internacional había sufrido a lo largo de su existencia varias escisiones pero el resurgir del "izquierdismo" en la década de los 60 le había dado un nuevo impulso bajo la dirección de un Secretariado Unificado.

El núcleo central de su estrategia se vertebraba en torno a la teoría desarrollada por Trotsky sobre la "revolución permanente". Esta teoría viene a decir que con la creación de un mercado mundial por el capitalismo a escala planetaria, se han creado también, las condiciones para la transformación socialista en todo el mundo.

En esta luvha era necesario sustraer a las masas de la influencia que ejercían sobre ellas las direcciones reformistas y centristas (el PCE y los otros partidos obreros) por eso resultaba imprescindible construir un partido siguiendo el modelo leninista, mientras se batallaba para la constitución de un Frente Unico de los trabajadores compuesto exclusivamente por partidos obreros.

La mayor parte de los grupos troskistas tuvieron su origen en la revista *Comunismo*, surgida en 1969 dentro del Frente de Liberación Popular (FLP), que luego daría lugar a dos corrientes: una mayoritaria, que en 1971 forma la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y otra que dio lugar a la Organización Troskista (OT), que más tarde se convertirá en el embrión del Partido Obrero Revolucionario de España (PORE). La LCR sufrirá una escisión transitoria que dará origen a la Liga Comunista (LC), que volverá a reintegrarse en la organización matriz, mientras que el PORE, que no era partidario del Secretariado Unificado, se constituía en impulsor de un comité para la reconstrucción de la "auténtica" IVª Internacional. En 1976 se celebró una primera conferencia de la que nació la Organización Cuarta Internacional (OCI), de la que en 1979 surgirá el Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI).

Los maoistas

Su origen está en el divorcio entre la URSS y China a comienzos de los sesenta. El caso modélico lo representó el PCE (m.l.).

No obstante, el PCE (m.l.) en las desavenencias habidas entre el pequeño PTA (Partido del Trabajo de Albania) y PCCh, optó por el primero.

Como rasgo común tenían el querer trasplantar al Estado español el modelo de revolución China con adaptaciones más o menos literales. La ORT, procedente de Vanguardia Obrera Juvenil, organización creada por los jesuitas, fue el que mejor reflejó el espíritu del maoísmo.

El PCE (ml) al entregarse a través del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) a la lucha armada sufrió tremendos golpes represivos y alejó de él a sectores muy importantes.

El Movimiento Comunista (MC) surgió del grupo *Komunistak*, fracción de ETA que en 1967 se convierte en Movimiento Comunista de Euskadi y, luego, por fusión con otros grupos, en Movimiento Comunista de España y finalmente en Movimiento Comunista, que fue el primero en revisar su adhesión al maoismo.

El grupo *Unidad*, escisión del PSUC en 1967, se convirtió en PCE (i) Partido Comunista de España (internacional), denominación que cambió en 1975 por la de Partido del Trabajo de España (PTE), que en 1979 se unió con la ORT, para formar el Partido de los Trabajadores de España.

El epígrafe de marxistas leninistas acogía también a otras formaciones que no rendían tan explícito culto al modelo chino, este podía ser el caso de la Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE (BR)) o de grupos nacionalistas como Unión do Pobo Galego (UPG).

Mención aparte merece la Organización Marxista-Leninista Española de la que nacerá en 1975 Partido Comunista de España Reconstituido (PCE r) que desplegó la lucha armada.

Los consejistas

Bajo este epígrafe podríamos agrupar a un conjunto de formaciones cuya característica fundamental era oscilar entre la necesidad de construir un partido revolucionario y su defensa a ultranza de las organizaciones autónomas de clase.

Su origen lo podemos rastrear en los primitivos izquierdistas de los años veinte, y en la influencia ejercida por las teorías de Rosa Luxemburgo. Aunque defendían la necesidad de un partido político, mantenían grandes reservas sobre el papel que debía desempeñar, rompiendo así abiertamente con el modelo leninista de partido dirigente.

Para ellos la clase obrera no necesitaba de ninguna vanguardia revolucionaria, confiaban en su capacidad de autorganización, e incluso, en su espontaneismo. Para ellos la función que podía desempeñar el partido en el esquema leninista era sustituida por el consejo obrero o soviet, órgano asambleario. En este esquema el papel del partido quedaba reducido a impulsar y apoyar el nacimiento de esos organismos de representación directa de la clase.

Criticaban, junto con los trotskistas la degeneración burocrática de la URSS, así como la afiliación pasiva a los grandes sindicatos, frente a los que oponían formas de organización espontáneas surgidas al calor de la lucha obrera y popular (asambleas, comités de delegados revocables, grupos de trabajo específicos, rotación de cargos).

La variedad de identidades dio origen a un gran número de pequeñas formaciones con escasa implantación. Entre ellas podríamos destacar Acción Comunista (AC) y la Organización de Izquierda Comunista OIC.

En realidad, de toda la izquierda radical, los grupos de esta familia fueron los primeros en desaparecer y OICE, el más importante de ellos acabó fusionándose con el MCE en 1976.

Cuadro del comunismo disidente en el tardofranquismo

PROCEDENCIA	Gestación 1964-1970	Consolidación 1970-1975	Auge y declive 1975-1979
"El Partido" PCE y PSUC	PCOE (1970); OCE (BR) (1968); PCE (m. l.) (1964); OMLE (1968); Unidad (1966); PCE (I) (1967)	PCE VIII y IX Congresos (1971); FRAP (1971) Grupo armado; OPI (1973)	PCR (r) (1975) — GRAPO (1975) Grupo armado; PCT (1975); PTE (1975)
Organizaciones cristianas JOC, HOAC, AST	*escisión*; *procedencia*	ORT (1970); *fusión*	PTE (1979)
"El FELIPE" FLP	FOC (1961); AC (1965); Lucha de clases (1966)	*Comunismo* (1969); OT (1971); PORE (1974); LCR (1971); LC (1973); OICE (1974)	OCI (1977); POSI (1979); LSR (1976); PST (1979)
Nacionalismo FNC Front Nacional de Catalunya; PNV	UPG (1964); PSAN (1968); ETA (1959) Grupo armado desde 1968; Komunistak (1967)	ETA (VI Asamblea 1972); 1973; MCE (1971)	MC (1979)

e intervino con sus tanques para abortar el proceso. El PCE condenó la invasión y marcó distancias de modo ostensible con el centro moscovita, aunque esa actitud no iba a ser entendida por todos sus miembros, propiciando así nuevas escisiones y condenas.

Las peticiones de explicaciones por la invasión de Checoslovaquia presentadas por la misma Dolores Ibárruiri y Santiago Carrillo, presentes en Moscú en aquellas fechas, fueron recibidas de manera apenas correcta por los dirigentes soviéticos. «Ustedes no son a fin de cuentas más que un pequeño partido», le dijo Suslov a Santiago Carrillo.[18]

Sólo dos dirigentes españoles se enfrentaron desde el primer día al distanciamiento del PCE frente a la URSS. Eduardo García, miembro del Secretariado del Ejecutivo y responsable de organización, y Agustín Gómez, ingeniero y mítico futbolista soviético, como defensa central del club Torpedo, y convertido en responsable de todo Euzkadi.

Conforme el PCE vaya recrudeciendo sus críticas al PCUS por los acontecimientos en Checoslovaquia. Eduardo García irá tomando distancia e iniciando una labor soterrada. En abril de 1969, cuando el Comité Ejecutivo se reunió, García se comportó de modo cauto y conciliador, y contó con la defensa de Enrique Líster. Pero tanto él, como Agustín Gómez quedaron retirados de sus cargos desde aquel pleno del Ejecutivo, retirada que quedó confirmada ese mismo verano por el Comité Central en una reunión muy reducida, con apenas 30 asistentes. La única reacción entre la militancia fue la carta que firmaron 200 españoles de la emigración en la URSS, en la que más que protestar por el castigo, apuntaban sólo hacia las erróneas posiciones políticas de la dirección del PCE, y llamaban a mantenerse firmes en los principios del marxismo-leninismo y del internacionalismo proletario, es decir, del PCUS.

En diciembre de ese mismo año se consumó la expulsión del PCE de García y Gómez por trabajo fraccional en contra del partido y por su campaña contra la unidad, la línea política y la dirección. La decisión se tomó con algunas abstenciones y significativos silencios. El último gesto político de los dos expulsados, que formaron grupo aparte, autodenominándose «PCE-VIII Congreso», será la carta que el 15 de abril de 1970 firmen, junto a otros 62 militantes de la emigración, en la que exponían su línea de ortodoxia y de defensa a ultranza de la política del Estado soviético. Salvo entre

los veteranos de la emigración y algún militante descabalgado del interior, el grupo no encontraría eco.

De la timidez inicial, Líster pasó a recoger la antorcha que habían defendido Eduardo García y Agustín Gómez, y en el Pleno ampliado, celebrado en las vecindades de París en agosto del 70, Enrique Líster y otros cuatro miembros del Comité Central terminaron también por ser expulsados. Tras la breve pero ruidosa protesta, Líster y sus colegas quisieron abandonar el lugar. Frente a la opinión de algunos militantes del interior, y muy especialmente de Nicolás Sartorius, que exigían que se les mantuviera retenidos hasta el final de la sesión, como una medida de seguridad. Finalmente se les dejó salir y la reunión del CC siguió su curso, liquidando de ese modo a los últimos prosoviéticos convictos y confesos del Comité Central; los demás quedaron emboscados. Tres años después, Lister fundará el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), recuperando así uno de los nombres que había dado vida al PCE en su nacimiento.

Esta izquierda radical orbitó en todo momento en torno a formulaciones marxistas y en muchos casos con planteamientos estratégicos de corte leninista. Partiendo de estos presupuestos comunes aparecieron toda una serie de formaciones, como podemos ver en el cuadro adjunto, que durante el tardofranquismo tendieron a dividirse a través de numerosas escisiones y durante la Transición a fusionarse para cobrar una mayor fuerza, y a las que podríamos agrupar por su ideario y programas en diversas familias.

No obstante, estas nuevas organizaciones situadas a su izquierda jamás inquietaron al PCE. Ni le restaron un apoyo político y social importante, ni sus críticas le hicieron perder mucho tiempo o espacio en sus órganos de expresión. El PCE siempre mirará con cierto desdén a todas las organizaciones izquierdistas. Consideraba que el sector principal de donde extraían la militancia estos grupos era el de los intelectuales y profesionales en vías de proletarización que, sin embargo, en su acercamiento al socialismo arrastraban gran parte de los prejuicios de su clase de origen, lo que dificultaba su incorporación al «auténtico» partido de la clase obrera que era el PCE.

Para el PCE, estas organizaciones eran el reflejo de la inmadurez por la que el mismo partido había pasado. En el discurso de clausura del Pleno del Comité Central celebrado en septiembre de 1973, Dolores Ibárruri se

refirió a estos grupos argumentando: «Nuestro infantilismo revolucionario, como el de esos jóvenes ingenuos de hoy que creen darnos lecciones de revolucionarismo, era una expresión —como es la de ellos— de nuestra voluntad combativa, pero también de nuestra inmadurez política».[19]

La incidencia de estas organizaciones fue más bien escasa, su principal ámbito de intervención fue el universitario, su número, en el mejor de los casos, no superó nunca el de algunos miles, su respaldo electoral en los primeros comicios fue exiguo, sin que la alegalidad en la que entonces todavía se movían pueda servir de explicación a los mismos,[20] sin embargo gracias a su lucha, caracterizada por una militancia férrea y un enorme espíritu de sacrificio, lograron influir en el conjunto de las movilizaciones populares que marcaron el final del franquismo y los primeros años de la Transición e incluso lograron influir en otras formaciones, de naturaleza muy distinta, pero emergentes tras la larga noche del franquismo.

Partidos de vocación claramente reformistas se vieron seducidos por la jerga izquierdizante y revolucionaria, como el PSOE o la Federación de Partidos Socialistas de España, dirigida por el viejo socialista Tierno Galván, y coquetearon con conceptos como dictadura del proletariado o autogestión obrera. Esto que hoy se olvida con frecuencia no se puede explicar sin la presencia de esa Izquierda radical.

Durante la llamada Transición el transfuguismo y las expulsiones menudearon.

Las deserciones afectaron de un modo particular al sector de los profesionales e intelectuales, que tanto brillo habían dado al PCE en el tardo franquismo. Muchos de estos, con un reconocido prestigio personal, habían ingresado en el partido, guiados sobre todo por su antifranquismo, pero nunca creyeron que con la caída de la dictadura el PCE pudiera llegar al poder. Sin embargo, el papel hegemónico que el partido ejercía en la oposición les hacía abrigar la esperanza de que en democracia podía constituirse como el gran partido de la izquierda, parecido al Partido Comunista Italiano, y en él podrían desempeñar una función relevante. Cuando los resultados electorales fueron los que fueron, simplemente lo abandonaron sin plantear discrepancias políticas de calado.

Alguno de estos abandonos tuvo una cierta repercusión mediática, como ocurrió en el caso de Ramón Tamames, miembro del Comité Ejecutivo del

PCE y teniente de alcalde en Madrid. Hasta mayo de 1981, fecha en que hizo oficial su salida, Tamames era uno de los dirigentes más populares del PCE, y una de sus voces más respetadas; economista prestigioso y parlamentario brillante. A partir de aquella fecha se convirtió en un hereje; peor aún, en un «traidor».

La respuesta de Santiago Carrillo a la marcha de Tamames estuvo en la línea habitual: le desautorizó por acumular excesivas funciones, que a su juicio no le dejaban tiempo suficiente para pensar, y por mostrar un desconocimiento de la estructura y funcionamiento interno del partido, cosa que podía ser cierta. El Secretario General negó que Tamames hubiese militado durante veinte años en el PCE, mintiendo una vez más, y le calificó, entre otras cosas, de ingenuo, de equivocarse con gran facilidad, de no tener experiencia política y de proponer proyectos descabellados.

Poco antes, también había abandonado el partido Eugenio Triana —miembro del Comité Ejecutivo y del Secretariado, responsable del sector de técnicos y profesionales— siguiendo el camino de numerosos intelectuales y profesionales que habían constituido un capital especialmente valioso para el PCE en los quince años anteriores. Otros no abandonaron y simplemente fueron expulsados.

En medio de una crisis política profunda, en la que el partido comprobaba como todos sus esfuerzos y sacrificios de años de lucha contra el franquismo no eran electoralmente recompensados, y frente a unos adversarios políticos capaces de orientar el proceso de cambio y rentabilizarlo en función de sus intereses, la dirección del PCE sólo fue capaz de reaccionar recurriendo al viejo expediente de las depuraciones.

Después del X Congreso se produjo una auténtica catarata de expulsiones y renuncias, que afecto de modo particular al PSUC, al partido en Euzkadi y a Madrid, aunque en mayor o menor grado tuvo reflejo en el conjunto del Estado. En la organización madrileña del PCE se desencadenó una verdadera caza de brujas. Los comités abiertamente críticos fueron disueltos; los sospechosos de simpatizar con renovadores o prosoviéticos, suspendidos preventivamente; y los militantes críticos que anidaban en minoría en comités controlados por el oficialismo fueron invitados a dimitir de sus cargos.

Este proceso culminó cuando en las elecciones del 28 de octubre de 1982, los resultados precipitaron la dimisión definitiva de Santiago Carrillo en una

reunión del Comité Ejecutivo que tuvo lugar entre el 2 y el 7 de noviembre. Carrillo propuso como sucesor a Gerardo Iglesias, un joven líder de Asturias. En febrero de 1983, durante el XI Congreso, Carrillo fue derrotado al oponerse a Iglesias. Posteriormente, concluyó que todos los que votaron contra él eran «marionetas de los servicios de inteligencia occidentales».[21]

El 15 de abril de 1985 el mismo Santiago Carrillo fue expulsado del Comité Central por haber trabajado, supuestamente, para otros fines políticos que no estaban así establecidos por la dirección. Finalmente, Carrillo terminó por abandonar el partido, del que había vivido desde su más tierna juventud, para fundar otro: el Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista (PTE-UC), que tras fracasar estrepitosamente en las elecciones generales de 1989 (en las que apenas consiguió algo más 86.000 votos) decidió integrarse en el PSOE en 1991. Carrillo, resentido con aquella organización a la que él había contribuido poderosamente a llevar al colapso, argumentó que el PTE-UC habría podido escoger otro camino si hubiera en España «un PCE serio. Pero no lo hay. Lo que están discutiendo ahora es si lo entierran o si lo embalsaman».[22]

Carrillo no será el último «renegado», pero podemos decir sin duda que sí fue el más relevante de los últimos renegados del PCE.

Notas

1.- Trotsky, L., (1923/1978): *El Nuevo curso*, Cuadernos de Pasado y Presente, México D.F., México.

2.- Alba, Víctor (1977): *La revolución española en la práctica. Documentos del POUM*, Jucar, Madrid, págs. 30-31.

3.- *La Batalla*, 27/XII/1935.

4.- *Mundo Obrero*, 24/IV/1936.

5.- Guillamón, Agustín (1996): *Documentación histórica del trosquismo español*, Ediciones de la Torre, Madrid, pág. 193.

6.- Alba, V., (1975): *Dos revolucionarios. Andreu Nin, Joaquín Maurin*, Seminarios y ediciones, Madrid, pág. 295.

7.- Estruch, J., (1978): *Historia del PCE (1920-1939)*, El Viejo Topo, Barcelona, pág. 74.

8.- Forti, Esteven (2014): *El peso de la nación: Nicola Bombacci, Paul Marion y Óscar Pérez Solís en la Europa de entreguerras*, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.

9.- ABC: 24/XI/1953

10.- Moran, G. (1986): *Miseria y Grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985*, Planeta, Barcelona, pág. 77.

11.- Marcou, Lilly (1978): *La Kominform*, Editorial Villalar, Madrid, pág. 75

12.- *Ibidem*, pág. 138.

13.- Moran, G. (1986) *Opus cit.*, pág. 177.

14.-*Ibidem*, pág. 178.

15.- Lister, E. (1983): *Así destruyó Carrillo el PCE*, Planata, Barcelona, págs. 75-76.

16.- Ruiz Ayucar, Angel (1976): *El Partido Comunista 37 años de clandestinidad*, San Martín, Madrid, pág. 386.

17.- CLAUDÍN, F. (1978): *Documentos de una divergencia comunista*. El Viejo Topo, Barcelona, pág. VIII.

18.- KAROL, K. S. «La déchirure des partis communistes européens», *Le Monde*, 23 de octubre de 1970.

19.- *Mundo Obrero,* 5/IX/1973.

20.- Ninguna de estas formaciones fue legalizada antes de las primeras elecciones en junio de 1977 aunque se consintió que desarrollaran su actividad; sin embargo este hecho les obligó a presentarse no con sus siglas sino como candidaturas de electores. Los resultados fueron:

Frente Democrático de Izquierdas (PTE)	1,46%
Agrupación electoral de trabajadores (ORT)	0,44%
Frente por la Unidad de los Trabajadores (LCR, AC, OIC)	0,21%
Otros	0,94%
TOTAL	3,05%

21.- CARRILLO, S. (2003): *La memoria en retazos. Recuerdos de nuestra historia más reciente española*, Plaza y Janés, Barcelona, págs. 35-37.

22.- *El País*, 17/VIII/1991.

Compañeros de viaje

La Revolución Rusa de 1917 causó un enorme impacto en todo el mundo, no sólo en las organizaciones obreras que buscaban un cambio profundo de la realidad económica, social y política, sino también en otros sectores de la sociedad que vivieron el hecho de modos muy distintos: con temor o con esperanza. Entre estos últimos fueron especialmente sensibles los que se movían en el ámbito de la cultura, o los que poseían una cierta formación intelectual que les permitía adoptar una postura expectante e ilusionada sobre la experiencia que se estaba llevando a cabo en Rusia. Es entonces cuando nace una expresión política que va a tener un largo recorrido en la historia de las ideas del siglo XX, nos referimos a la expresión: «compañeros de viaje».

Las primeras noticias precisas que tenemos sobre la formulación de esta idea provienen de un párrafo de Trotsky en su obra *Literatura y Revolución* en el que dice «Entre el arte burgués que agoniza en medio de repeticiones o de silencios, y el arte nuevo, que todavía no ha nacido, se ha creado un arte de transición más o menos orgánicamente vinculado a la revolución,

aunque no sea todavía el arte de la revolución… No son los artistas de la revolución proletaria, sino los "compañeros de viaje" artísticos de ésta… Respecto al "compañero de viaje", el problema que se plantea es siempre el mismo: saber hasta dónde nos acompañará. Y no se puede solucionar este problema de antemano, ni siquiera por aproximación. Más que de las cualidades personales de tal o cual "compañero de viaje", la solución dependerá esencialmente del curso objetivo de las cosas en los próximos diez años»[1]

El apelativo «compañero de ruta» o «compañeros de viaje» se venía aplicando a escritores rusos que aceptaban los fines de la revolución pasivamente, es decir, sin ser participantes activos de la misma, pero rápidamente se universalizó para designar a un simpatizante del comunismo que no estaba afiliado a él. Hasta principios de la década de los 30 no se convirtió en una noción política al uso en Europa y en América, con las traducciones nacionales correspondientes: *compagnon de route, sympathisant,* o, más cortés, *progressiste,* en Francia; *Sympathisierender auf dem Weg,* o menos respetuoso, *Mitlaufer* en Alemania; *Compagno di viaggio,* o *di strada,* en Italia.

Pero esta denominación, con la agudización de la lucha de clases, adquirió un significado cada vez más peyorativo, convirtiéndose en el lenguaje de la derecha en un sambenito o en una acusación. Como dice David Caute: «el término fue esgrimido tan agresiva e indiscriminadamente en los Estados Unidos durante la caza de brujas en la posguerra que llegó a aplicársele a todo aquel que hubiese recibido *Pravda* por correo; o a quien hubiera defendido los derechos recogidos en la Constitución».[2]

En un primer momento fueron artistas e intelectuales atraídos por la novedad, los que guiados por ideas como «igualdad», «progreso» o «modernidad», se entusiasmaron con la ruptura que implicaba la revolución que se había puesto en marcha, viendo con simpatía a los seguidores de la misma en sus respectivos países. Eso suponía, no sólo indulgencia frente a esas ideas y presupuestos, sino que para muchos supuso también un acercamiento al naciente movimiento comunista.

Las noticias que llegaban a España en los años 20 por medio de manifestaciones culturales, propaganda y referencias en la prensa sobre la experiencia soviética, generó un hilo conductor de nuevas lealtades y preocupaciones para algunos de estos intelectuales y artistas.

Rápidamente, esas simpatías se entremezclaron con la realidad social y política de nuestro país agravada por la dictadura de Primo de Rivera. La crítica de un sistema degenerado y autoritario alineo a parte de la intelectualidad española que no podía evitar comparar los cambios en la URSS con el estancamiento de España. Esos cambios, leídos en clave de progreso, alimentaron la ilusión soviética[3] y animaron a que se brindara apoyo a aquellos que la impulsaban, bien fuera el Estado soviético o los partidos comunistas.

Hacia finales de la década de los 20, la crisis de 1929 puso en marcha un proceso de radicalización ideológica como respuesta a sus terribles efectos entre las clases populares. Tras la era de optimismo y de la *prosperity*, el aldabonazo de la gran depresión hizo cuartearse la legitimidad del sistema capitalista, y destacó aún más el prestigio del comunismo en cuanto forma de gestión económica que permitía evitar las crisis gracias a la racionalización impuesta por la planificación.

El paso siguiente en la captación de apoyos y lealtades fue el tremendo golpe que supuso la subida de Hitler al poder. Hasta entonces el fascismo parecía algo propio de sociedades poco modernizadas como la italiana. Pero la dictadura hitleriana suponía un asalto a la razón en el mismo país de Kant, Hegel, Marx y tantos otros pensadores de la modernidad. Los herederos de la Ilustración se encontraron así junto con los marxistas en la defensa de unos valores fundamentales para la burguesía progresista. Y como el principal bastión de resistencia ante el progreso del fascismo eran la URSS y los partidos comunistas, muchos intelectuales comenzaron a aproximarse al comunismo. Este hecho se hizo ya visible en España durante la dictadura de Primo de Rivera.

Así, el fenómeno de los compañeros de viaje jalonará, de modos distintos y con distinta intensidad, toda la historia de España a lo largo del siglo XX, acompañando la evolución política del PCE. El nacimiento del partido, la República, la guerra civil, y la lucha contra la dictadura franquista serán coyunturas precisas en las que los intelectuales y artistas españoles, o personajes con relieve en diferentes campos, flanquearan de modos diversos la evolución del comunismo español.

Resulta imposible en un libro de estas características establecer tan siquiera la nómina o los mecanismos que posibilitaron esos acercamientos,

por ello nos limitaremos a bosquejar el fenómeno de los compañeros de viaje del PCE ilustrándolo con algunos ejemplos.

El primer espacio de interrelación entre las nuevas ideas que venían de Rusia y los intelectuales españoles fue el Ateneo de Madrid. De hecho, como ya hemos dicho, Borodin, el primer enviado de la Komintern a nuestro país para impulsar la creación de un partido comunista, inició sus primeros contactos en esta institución, cuando el socialista moderado Fernando de los Ríos le presentó a García Cortes, un joven radical perteneciente a las Juventudes del PSOE, que era un decidido partidario de la Revolución que se había llevado a cabo en Rusia.

Esta venerable institución del Ateneo, activa ya desde el siglo XIX, daba cabida a comienzos del XX, a intelectuales, científicos y artistas, muchos de los cuales, conscientes del atraso de nuestro país, eran muy receptivos a las novedades foráneas.

Hasta la Guerra Civil el Ateneo madrileño será un marco de referencia preferente para el encuentro entre la intelectualidad del PCE y el movimiento artístico y cultural español. El cierre de esta institución decretado por la dictadura de Primo de Rivera obligará a buscar otros espacios de interrelación, como el café Savoia, pero una vez reabierto con la proclamación de la República, el Ateneo seguirá desempeñando ese papel de escenario privilegiado para la confluencia. Allí el PCE podía entrar en contacto con hombres como Luis de Tapia, Antonio de Lezama, Victorio Macho, Mariano Benlliure y tantos otros, para solicitarles su ayuda al movimiento con sus aportaciones a organizaciones como el Socorro Rojo, o para pedir su apoyo a asociaciones como Amigos de la Unión Soviética.

A raíz de la revolución de Asturias de 1934 una carta abierta del Ateneo de Madrid al presidente de la República demandaba «justicia» ante los acontecimientos. Por si la firma de Fernando de los Ríos no fuera suficiente para probar que tal carta representaba los sentimientos de la burguesía progresista, el Ateneo se presentó a sí mismo como «el fruto histórico del movimiento liberal» español, y «salvaguardia» de «valor universal» en la vida intelectual. [4]

Será en el Ateneo donde tenga lugar una reunión para constituir un Comité de Ayuda Antifascista que presidirá el socialista Luis Jiménez de Asúa y entre otros vocales contará con el escritor ya comunista José Antonio Balbontín.

La dictadura franquista no podrá impedir que el Ateneo continúe siendo, aunque de modo discreto, una plataforma de captación. A principios de los cincuenta ya se había formado en el Ateneo madrileño el grupo «Juglaría», en torno al cual se movían gentes como el pintor José Ortega, el dramaturgo Lauro Olmo, el grafista Núñez Castelo o, más tarde, Jesús López Pacheco. Al iniciarse la década de los sesenta, el PCE había conseguido alcanzar un notable apoyo entre este sector de ateneístas.

Pero ya en el mismo nacimiento de la organización comunista hubo personajes brillantes del mundo de la cultura de entonces que prestaron su colaboración al recién nacido PCE. El primer caso del que tenemos noticia fue el del dramaturgo, empresario teatral y hombre de letras Gregorio Martínez Sierra, que llegó a convertirse durante un tiempo en tesorero del partido.[5]

Martínez Sierra fue un autor reconocido en su momento y enclavado por los estudiosos dentro del movimiento modernista. Cultivo todos los géneros desde edad temprana y fundó algunas revistas de éxito como *Helios* y *Renacimiento*. Llego a trabajar para Hollywood, donde se llevaron a la pantalla algunas de sus producciones teatrales como *Yo, tú y ella*, dirigida por Reinhardt y basada en su obra *Mujer*, y también *Canción de cuna*, dirigida por Mitchell Leisen, ambas en 1933. El director español Benito Perojo había llevado asimismo al celuloide en 1931 *Mamá*, y *Susana tiene un secreto*, escrita esta última con Honorio Maura.

No obstante, al hablar de las obras de Martínez Sierra hay que apuntar que muchas de ellas estuvieron escritas en colaboración con, o exclusivamente, por su esposa María de la O Lejárraga García. En la mayoría, la intervención de su mujer fue mucho mayor, cuando no la única, como autora de esos textos. Feminista convencida, Lejárraga se afilió al PSOE y en 1933 fue elegida diputada a Cortes por Granada. En 1936 fue Agregada Comercial de la República Española en Suiza y tras la Guerra Civil inició un largo exilio, por Francia, México y Argentina.

La proximidad de Martínez Sierra al PCE bien pudo vehicularse a través María Lejárraga, que sabemos hizo campaña por el Frente Popular, y en un mitin en Logroño[6] intervino con el comunista Zarratón, trabajador metalúrgico de Bilbao y electo como diputado comunista por Vizcaya en esas elecciones; mitin en el que también participó el sacerdote Juan García Mo-

rales, pidiendo el voto para la coalición de izquierdas, otro compañero de viaje proveniente del ámbito de las creencias religiosas.

Esta actividad de acercamiento y captación de apoyos entre los intelectuales intentó desarrollarla el PCE desde sus inicios en paralelo con el despliegue de su propia política cultural. Para acercarnos a esta faceta del partido durante esos años resulta imprescindible el libro de Mayte Gómez *El largo viaje,* [7] en el que la autora destaca los dos rasgos que caracterizaron la política de la organización comunista en ese frente de lucha, que fueron: el dogmatismo inicial y el escaso nivel teórico del comunismo español en el terreno de la cultura.

Las primeras inquietudes políticas en el campo cultural las expresó el PCE a través de la «Unión de Cultura Proletaria», concebida como una «cooperativa cultural», que en su corta existencia alumbró un esbozo de programa cultural revolucionario basado en tres ejes: la educación de las masas trabajadoras en el marxismo, el antirreformismo y el rechazo absoluto de la intelectualidad burguesa o a la «socialtraidora» (léase socialdemócrata).

El programa de la UCP era ambicioso e incluía la publicación de libros de autores nacionales e internacionales a precios asequibles, así como ciclos de conferencias, clases y talleres a los que se esperaba asistieran trabajadores no sólo de la capital sino también de otras ciudades. Una de las prioridades la UCP —muchos de cuyos militantes se dedicaban a trabajos no manuales— era ofrecer una sólida crítica a los modelos educativos burgueses y socialistas, confrontándolos con una propuesta formativa en la que la educación de los trabajadores se llevaría a cabo a través del estudio de los clásicos marxistas, los documentos publicados por la Internacional Comunista y el gobierno soviético, la historia de la Revolución Rusa, la evolución del movimiento obrero internacional y el panorama nacional español. La formación del obrero sería apoyada por las publicaciones de una nueva editorial revolucionaria: Biblioteca El Comunista.

Sin embargo, ni la UCP, ni el mismo PCE como partido, tenía entonces capacidad para establecer una editorial, ni una red de instituciones culturales para llevar a cabo tal programa, y dado sus escasos recursos, lo único que pudieron hacer fue exigir públicamente que las Casas del Pueblo dejaran de ser única y exclusivamente socialistas para pasar a pertenecer a todos los trabajadores, independientemente de su afiliación política.

Lo que UCP, y el propio PCE en sus orígenes, sí tenían muy claro era su firme voluntad de enfrentarse abiertamente con el reformismo socialista y con la intelectualidad burguesa.

En un artículo de *El Comunista*, publicación oficial del PCE, se clasificaba a los intelectuales en tres grupos: aquellos que «sintiendo profundamente la desigualdad social, se entregan a la propaganda revolucionaria con todas sus consecuencias, dando su vida y su ciencia»; aquellos que «se indignan por las injusticias que presencian y a sus versos y páginas llevan las inquietudes del pueblo, poetizándolas demasiado»; y aquellos que en el socialismo (reformista) «ven un escaparate para la exhibición de sus vanidades y un trampolín para lograr prebendas». Mientras que los intelectuales bolcheviques pertenecían a la primera categoría y los «compañeros de viaje» a la segunda, los intelectuales socialistas españoles pertenecían todos a la tercera, por la sencilla razón de que militaban en el socialismo reformista «ostentando pomposamente como único mérito su título» pero eran incapaces de hacer nada para mejorar la pobreza intelectual e ideológica del PSOE.[8]

Pero lo cierto es que en aquellos años, más allá de la crítica feroz, la organización comunista carecía de capacidad para desplegar la política que proponía, al tiempo que manifestaba escasa originalidad sobre otros temas culturales, limitándose en este campo a reproducir lo que exponían las publicaciones soviéticas, sin referencia alguna al estado de la cultura española del momento. Precisamente por esta falta de madurez y por su corta existencia, la UCP no puede compararse con otras organizaciones culturales proletarias de la época en el resto del mundo —*Clarté* en Francia; *Die Aktion* en Alemania u *Ordine Novo* en Italia— y mucho menos aún con el *Proletkult* soviético.

Por otra parte, esgrimiendo esa estrategia de confrontación dogmática, al PCE le resultaba difícil encontrar compañeros de viaje. Sin embargo, la dictadura de Primo de Rivera sacudió la conciencia de un sector importante del mundo de la cultura española y eso contribuyó a decantar algunas voluntades hacía lo que representaba el comunismo.

Cerrado el Ateneo de la capital, el foco de esas inquietudes se localizó por un tiempo en el café Savoia, que se inauguró meses antes del golpe de Primo de Rivera en los bajos del Teatro Apolo y permaneció abierto hasta finales del año 1929. El círculo del Savoia y los campus universitarios fueron

los auténticos hervideros de la actividad política contra la dictadura, y en ellos se pueden encontrar las raíces mismas del levantamiento de Jaca, no en vano Fermín Galán fue un tertuliano habitual de ese café madrileño.

Realmente, durante esos años, el Savoia se convirtió en un referente de actividad política y cultural para toda una generación de jóvenes intelectuales pertenecientes a diferentes corrientes ideológicas, como era el caso del republicano Justino Azcárate, o los afiliados al Partido Radical-Socialista José Venegas y Díaz Fernández, José Antonio Balbontín había sido militante del Grupo de Estudiantes Socialistas que había fundado el Partido Comunista Español aunque no se había unido a éste, Juan Andrade sí militaba entonces en el PCE; mientras que Giménez Siles o Joaquín Arderíus, sin adscripción definida, estaban en contra de la dictadura y frecuentaban la tertulia.

Se podría decir que en el café Savoia se reunía la flor y nata de la otra generación de 1927, menos prestigiada pero más radical. Estos novelistas, poetas y periodistas no sólo fueron pioneros de la llamada «novela social», movimiento literario que viviría sus momentos más gloriosos alrededor del año 1930; también fueron ellos los que hicieron que los debates sobre arte y cultura proletarios dejaran las páginas de las publicaciones obreras y pasaran a ocupar un primer plano en la vida cultural española. Con las revistas que fundaron como *Postguerra* y *El Estudiante*, y las editoriales a las que dieron vida, como Ediciones Oriente o Cénit, llegó a España lo mejor de la novelística de entreguerras, de la teoría marxista y del pensamiento soviético. Algunos de ellos llegaron a militar en el PCE durante un tiempo, como Balbontín o Arderíus, otros como Giménez Siles fueron simplemente auténticos compañeros de viaje.

El malagueño Rafael Giménez Siles puede ser considerado un modelo en este sentido. Como editor y promotor cultural apoyó siempre la actividad del PCE en este campo aunque nunca fue militante del partido. Durante la dictadura de Primo de Rivera comenzó su actividad editorial impulsando varias revistas como *El Estudiante*, donde lanzó por entregas *Tirano Banderas*, de Valle-Inclán, o *Postguerra*, lo que le costó ir a la cárcel condenado a seis meses de prisión por la publicación en la revista de un manifiesto estudiantil en contra de Alfonso XIII. La estancia en prisión le permitió conocer a Antonio Graco Marsa, con él y con Juan Andrade, crearán la editorial Cénit en cuyo nacimiento también participó el PCE.

Cenit se iba a convertir en una de las principales editoriales de los años 30 marcada por un fuerte compromiso con la realidad política y social. En 1935 había publicado más de 200 títulos, traduciendo al castellano autores como John Dos Passos, Hermann Hesse, o Máximo Gorki, así como obras de Engels o Trotsky.

Estas editoriales contribuyeron a que España se inundara de estudios políticos de autores nacionales e internacionales, sacando a los intelectuales comunistas y revolucionarios de la sombra y contribuyendo a la penetración del «comunismo burgués»[9] en amplios sectores de la intelectualidad, lo que allanaría el camino al cambio político y cultural que tendría lugar alrededor de 1930, en el que el compromiso político de la pequeña burguesía sería capital en la proclamación de la República.

Con la llegada de la República la actividad cultural del partido se dinamizó dando a luz a su proyecto cultural más importante hasta aquel momento: la creación de su primera revista política, *Bolchevismo*, aparecida en marzo de 1932, y concebida como herramienta para educar a los militantes, y también para contrarrestar la influencia que tenían dentro y fuera del PCE publicaciones como *Comunismo*, que editaba la Organización Comunista de Izquierdas, o *La nueva era*, revista teórica del Bloque Obrero y Campesino.

La publicación de *Bolchevismo* vino acompañada de un nuevo impulso a las editoriales del partido, incluyendo la Biblioteca Mundo Obrero y la principal editorial de la organización: Europa-América. Pero *Bolchevismo* —de la que sólo han sobrevivido dos números— o la mayor actividad editorial, no logró que los militantes del partido, o la clase trabajadora en general, adquirieran una mejor preparación ideológica.

Durante los primeros años de gobierno republicano, el análisis cultural más sólido proveniente del círculo del PCE y, lo que fue más importante, el único esfuerzo para establecer las bases de una cultura proletaria, deben buscarse en la revista *Nuestro Cinema*. Editada desde París por Juan Piqueras, la revista aspiraba a ofrecer una crítica de la sociedad burguesa a través del análisis del cine y de la industria cinematográfica, además de asentar las bases para una teoría y práctica del cine proletario en España.

En mayo de 1933, bajo la influencia de escritores del partido, aparecerá *Octubre*, una de las más importantes iniciativas culturales de los años treinta, entre otras razones porque estuvo dirigida por Rafael Alberti y María Teresa

León. Su orientación era claramente proletaria, con aceradas críticas a la intelectualidad burguesa personificada, por ejemplo, en Ortega y Gasset, aunque ante la amenaza del fascismo *Octubre* también se mostraba receptiva a los planteamientos humanistas de un Antonio Machado.

Pero más allá de estas publicaciones fue sobre todo la experiencia soviética en la construcción del socialismo, y los viajes a la URSS, los que contribuyeron a dar cuerpo al fenómeno de las adhesiones entusiastas de algunos intelectuales al movimiento comunista.

Terminada la guerra civil en Rusia y puesto en marcha el Primer Plan Quinquenal, coincidiendo con la Crisis del 29, los ojos del mundo se fijaron en la URSS. Fue entonces, cuando se escribieron los relatos más apasionados sobre lo que allí sucedía, y algo común a todos estos escritos y libros de viajes era que en la Unión Soviética se estaba forjando una sociedad distinta. Así, un importante sector de intelectuales burgueses de la más variada adscripción, no pudieron evitar manifestar su opinión ante lo que suponía esa singular experiencia.

Junto con el PCE otras organizaciones obreras proyectaron una imagen idealizada del País de los Soviets, y esto cambió en cierta medida la naturaleza de los apoyos al comunismo respecto a la etapa anterior. Ahora, el compañero de viaje, se mostraba mucho más entusiasmado por los logros materiales que estaba alcanzando esa nueva sociedad soviética que por el ímpetu inicial que había despertado Octubre de 1917 como el inicio de la revolución mundial.

Este desplazamiento en la naturaleza del compromiso fue captado con agudeza por el exiliado Trotsky, que en 1938 explicaba con precisión lo que separaba a los compañeros de viaje en ese momento de los revolucionarios auténticos que seguían luchando por extender la revolución. «Toda una generación —escribía Trotsky— de la intelectualidad de "izquierda"… ha dirigido su mirada hacia el Oriente y ha atado… su suerte, no tanto a la de la clase obrera revolucionaria como a la de una revolución victoriosa, que no es lo mismo».[10]

Pero de nada servía esta advertencia. El nuevo compañero de viaje cimentaba su adhesión a la construcción del socialismo en un solo país y al partido que oficialmente lo representaba, que en el caso español era el PCE.

La Unión Soviética era un escaparate y estaba claro que había que mostrarlo el mayor número de veces posible. Por un lado, la Internacional presionaba al partido para que apoyara y propagara las excelencias de la política soviética —ése era uno de los objetivos primordiales de la política exterior de la URSS—; por otro lado, el PCE veía en las realizaciones soviéticas la mejor forma de propagar sus ideales revolucionarios en España. El partido ejercía con este tipo de propaganda un proselitismo que consideraba más eficaz que cualquier programa político que pudiera esgrimir. Por eso la organización se esforzaba en mostrar por todos los medios qué era lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética.

En enero de 1933, *Mundo Obrero* señalaba la posibilidad de conectarse a través de los aparatos de radio con la estación de Radio Central de los Sindicatos de la URSS, que emitían en español de 9 a 10 de la noche, para así conocer los éxitos de la construcción del socialismo. Pero el medio más útil para convencer a los renuentes de la existencia de esa nueva sociedad y del hombre nuevo que allí se estaba forjando, eran los continuos viajes de delegados obreros a la Unión Soviética, elegidos y designados por organizaciones, sindicatos y empresas que estuvieran bajo la influencia del partido. Por lo menos, cada 1ºde Mayo y cada aniversario de la Revolución de Octubre marchaba un grupo de obreros españoles por medio de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética o del propio PCE a la URSS, aunque era necesario reunir 800 pesetas para el viaje, lo que se convertía en un poderoso filtro para poder vivir esa experiencia.

Por otra parte, con la proclamación de la República en España, se contó también con asociaciones legales que fomentaban las adhesiones a la causa comunista. En junio de 1931 se reactivó el Socorro Rojo, dedicado a promover campañas de solidaridad con las familias y los hijos de los obreros huelguistas. Su fundación fue apoyada por Joaquín Arderíus, Ramón del Valle-Inclán, Roberto Novoa Santos, Encarnación Fuyola, Fernando García Mercadal, Victorio Macho, Ricardo Baroja, José Díaz Fernández, Luis de Tapia, Alberto Ghiraldo, Antonio de Obregón y Felipe Fernández Armesto.

La Asociación de Amigos de la Unión Soviética se fundó en abril de 1933 y proponía la celebración de conferencias, proyecciones cinematográficas, publicación de libros y el envío —como se ha apuntado— de delegaciones obreras a la Unión Soviética. Entre sus fundadores se encontraban el dibujante Luis Bagaría, los escritores Pio Baroja, Jacinto Benavente, Concha Es-

pina, Federico García Lorca, Ramón del Valle-Inclán, o Ramón J. Sender, el arquitecto Fernando García Mercadal, el músico Regino Sainz de la Maza, o el médico Gregorio Marañón, entre otras figuras destacadas en el campo de la cultura. Los Amigos de la Unión Soviética contaban también con una revista, *Rusia Hoy*, de la que decían distribuir 40.000 ejemplares, y en 1934 afirmaba tener 8000 socios.

Desde abril de 1932 el acercamiento de los escritores hacia las filas comunistas se vio allanado por una resolución adoptada por el Comité Central del PCUS que, al tiempo que daba origen a la Unión de Escritores Soviéticos, tenía también como objetivo aglutinar tanto a los escritores proletarios como a los «compañeros de viaje», aconsejando respetar a estos en sus diferencias. En esa resolución se decía: «El partido debe mostrarse tolerante con las formas ideológicas en transformación… y debe ayudar pacientemente a los "compañeros de viaje" a superar esas formas en el siempre más estrecho trabajo en común con las fuerzas culturales del comunismo».[11]

Estos posicionamientos por parte de los soviéticos facilitaron la aparición de movimientos culturales en los que confluían intelectuales que eran convencidos comunistas, con otros de distinta ideología. Alguna de estas alianzas tuvo corta vida, como fue el caso del Grupo de Intelectuales y Artistas Revolucionarios de José Bergamín, Alfonso García Valdecasas, Felipe Sánchez Román y Wenceslao Roces, entre otros, cuya meta era «estudiar los problemas del país partiendo de la metodología de Marx».[12]

Pero en definitiva, estas asociaciones de apoyo, o revista como *Nuestro Cinema*, sí consiguieron calar, y terminaron implicando a intelectuales de prestigio, como Valle-Inclán, Federico García Lorca, Rafael Alberti, María Teresa León, José Bergamín, Emilio Prados, Ramón J. Sender, etc. Algunos, como Alberti, pasarían a militar en el PCE hasta el final de sus días; otros como Lorca o Valle-Inclán, no irán más allá de una difusa simpatía con pocas repercusiones prácticas para el comunismo español.

Lo que realmente permitió cimentar y extender el fenómeno de los compañeros de viaje fue el auge del fascismo y el viraje que supuso el VII Congreso de la Internacional Comunista al impulsar la política de los Frentes Populares. No obstante, antes de ese famoso congreso ya había aparecido en Valencia, a principios de 1935, la revista *Nueva Cultura*, que se proponía la «expansión de la cultura al pueblo», al tiempo que también aspiraba, con

un talante aperturista, a estrechar lazos con los compañeros de viaje, ampliando así ese círculo de figuras relevantes afines al movimiento comunista.

Fundada por un grupo de intelectuales militantes todos del PCE, bajo la dirección del pintor y cartelista Josep Renau, podemos considerar que esta publicación fue el primer paso en nuestro país para el nacimiento de una auténtica asociación cultural antifascista, paso que tuvo su correlato internacional en la celebración del I Congreso en Defensa de la Cultura, reunido en París apenas unos meses después del nacimiento de la revista valenciana.

Al contrario que *Octubre*, la recién nacida revista *Nueva Cultura* no tuvo ningún reparo en apoyar las más amplias alianzas antifascistas; en ella la intelectualidad reformista y la revolucionaria colaboraron bajo una misma bandera. Desde su aparición, *Nueva Cultura* estuvo empeñada en difundir un discurso político y cultural en el que el «pueblo laborioso» se proponía fundamentalmente defender sus «libertades democráticas» y defender también a la misma República. Un discurso inequívoco que en poco tiempo se convertiría en el sello característico del PCE y sus intelectuales hasta finales de la guerra civil. Ni siquiera durante el conflicto, cuando el partido ocupó el ministerio de Educación, el programa cultural defendido por el PCE, pretendió, ni de lejos, imponer el dogma comunista, más bien significó el intento de poner en práctica el ideario de la burguesía reformista decimonónica.[13]

No obstante, antes del golpe fascista en julio de 1936 ya se había establecido ese «hilo rojo»[14] impulsado por escritores comunistas que vinculaba a numerosos intelectuales «burgueses» con la política del partido, unos escritores que, sin ser marxistas (José Bergamín, Luis Cernuda, Rafael Dieste, Federico García Lorca, Juan Gil-Albert, Antonio Machado, Antonio Sánchez Barbudo, Arturo Serrano Plaja, Valle-Inclán, entre otros), fueron, con mayor o menor consciencia, compañeros de viaje.

Pocos meses antes del golpe fascista había nacido la «Alianza de Intelectuales Antifascistas para Defensa de la Cultura», que contaba con una cincuentena de afiliados y estaba presidida por José Bergamín, siendo Rafael Alberti su secretario.

La guerra vino a precipitar un forzado proceso de decantación. La reacción de los escritores y artistas españoles ante el conflicto bélico fue variada y, en muchos casos, personal. La generación del 98, viejos maestros de la

España contemporánea, con la excepción de Antonio Machado y Valle-Inclán, adoptaron una posición conservadora. Ramiro de Maeztu, que había publicado en 1934 su fascistizante *Defensa de la Hispanidad*, murió fusilado por los republicanos en 1936, junto con el escritor Pedro Muñoz Seca. Jacinto Benavente, que se dejaba fotografiar en la Valencia de 1937 con el puño cerrado, se incorporó a la España franquista tan pronto como pudo, llegando a escribir después, en los años cuarenta, feroces artículos loando la represión fascista. Azorin, quiso permanecer al margen de la contienda, aunque con el franquismo ya vencedor volvió a Madrid en 1940, y en su obra *El escritor*, elogió al falangismo. Pío Baroja, que abandonó el país al comienzo de la guerra también volvió terminado el conflicto y publicó la obra *Comunistas, judíos y demás ralea* con prólogo de Giménez Caballero, lo que le facilitó la entrada en la España franquista.

Lo ocurrido con Miguel de Unamuno es más complejo. El 18 de julio aplaudió en la Plaza Mayor de Salamanca a los soldados que declaraban el estado de guerra. Sin embargo, en la inauguración del curso académico el 12 de octubre de 1936, Unamuno se enfrentó al general Millán Astray y los sublevados, ante gritos como «¡Viva la Muerte!» y «¡Muera la inteligencia». Semanas después Unamuno moría en su casa de Salamanca de muerte natural.

Antonio Machado puso su pluma al servicio de la República e incluso del PCE. Sin llegar a tanto, Juan Ramón Jiménez, desde su «torre de marfil», también se posicionó por la España republicana y en una entrevista que le realizaron poco antes de la guerra dijo: «—¿Es usted comunista, Juan Ramón? —Sí. Yo creo que el comunismo vendrá, como todo. Yo soy comunista individualista».[15]

De los escritores modernistas, dos de ellos, Manuel Machado y Eduardo Marquina se incorporaron entusiásticamente a la rebelión militar; mientras que la Agrupación de Intelectuales al Servicio de la República, con Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón y José Ortega y Gasset, se refugiaron en una equívoca neutralidad que terminó por traducirse en un posterior apoyo de facto al franquismo.

Por lo que se refiere a Ortega y Gasset, que retornó en 1945, su elitismo, que le llevaba a hablar de un estilo de vida guerrero, agresivo, deportivo y aristocrático, característico de una minoría selecta, sirvió como cantera ide-

ológica al discurso falangista, movimiento al que consideraba necesario aunque transitorio. «El totalitarismo salvará al liberalismo destiñendo sobre él, depurándole, y gracias ello, veremos pronto a un nuevo liberalismo templar los regímenes autoritarios».[16] Pérez de Ayala, volvió a España en 1954 y terminó colaborando en el ABC de Madrid; Marañón, de regreso también al país, en 1961 publicó *Liberalismo y comunismo* en el que venía a decir lo mismo que Ortega, que la victoria de Franco garantizaba la pervivencia de la libertad inividual.

Frente a estas actitudes, las de intelectuales tan dispares entre sí como Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, destacaron por ser irreductibles liberales republicanos y feroces anticomunistas.

En cambio, los jóvenes escritores de los años veinte y treinta, se incorporaron inequívocamente y casi en bloque, a la defensa de la República, con la excepción de Gerardo Diego. La mayoría de la Generación de 1927 aceptó la legalidad republicana y a su más destacado representante, Federico García Lorca, este posicionamiento le costó la vida, al ser fusilado en Granada poco después del golpe fascista. Una generación más joven de poetas, pintores y escritores para los que la guerra fue el acontecimiento que definió a su generación y conocidos como la «Generación de 1936» se lanzó decididamente al apoyo del Frente Popular. Entre ellos estaban Miguel Hernández, Arturo Serrano Plaja, Antonio Sánchez Barbudo, Ramón Gaya y otros.

El compañero de viaje podía implicarse en grados muy distintos en su adhesión a las políticas y actividades del PCE. Sus simpatías por la causa comunista podían quedar limitadas a la firma de manifiestos colectivos en momentos puntuales, a la participación en determinados actos públicos, a su colaboración en asociaciones afines o a su participación, más o menos asidua, en publicaciones o proyectos impulsados por el partido. Estas posturas podían ser matizadas de muchos modos, según el grado de identificación en cada coyuntura concreta. Pero, sobre todo, el compañero de viaje se definía por su independencia personal y por un cierto compromiso sostenido en el tiempo.

No obstante, por su misma naturaleza, el compañero de viaje era una figura inestable que podía recorrer un trecho del camino para luego abandonar la ruta en un momento determinado. Estos abandonos se podían traducir en una simple inhibición o en una reacción furibunda frente a aque-

llo que había apoyado. En ocasiones se trataba de un mero arrepentimiento y se justificaba como un error pasajero en la vida del intelectual o del artista, pero en otras ocasiones se traducía en aversión y rechazo a las ideas o a la organización a la que había brindado su apoyado, haciendo públicas sus críticas e intentando distanciarse todo lo posible del antiguo compromiso.

Por todo esto podríamos hablar de compañeros de viaje de corto recorrido y de otros que fueron corredores de fondo, fieles a la causa incluso en las circunstancias más comprometidas. Dos ejemplos de estos dos tipos de trayectoria son los casos de Ramón J. Sender y de José Bergamín.

A comienzos de los años 30, el aragonés Ramón J. Sender era un joven escritor nacido en una familia acomodada e impregnado de una cultura republicana que él rápidamente decantó hacia tendencias obreristas. Sus primeras armas literarias las hizo en el campo del periodismo. Con tan solo diecisiete años se trasladó a Madrid, solo y sin dinero, de forma que tuvo que dormir al raso en un banco del Retiro durante tres meses, lavándose en las fuentes y duchándose en las duchas del Ateneo, a donde iba diariamente a leer y escribir. Obligado por su padre a volver a Huesca se consagró entonces a la dirección de un diario, *La Tierra*, que formaba parte de la Asociación de Labradores y Ganaderos del Alto Aragón; como no tenía edad para dirigirlo, la dirección nominal la desempeñaba un abogado amigo suyo.

A los 21 años fue movilizado y enviado a la guerra del Rif, vivencia que iba a marcar profundamente su evolución ideológica. Allí descubrió el Marruecos colonial en guerra, cuando aún estaba reciente el desastre de Annual, que había puesto de relieve las miserias de un país caciquil y atrasado. De esa experiencia surgirá la escritura de *Una hoguera en la noche*, y años más tarde su novela *Imán*, publicada en 1930, que lo revelará como un gran narrador.

En 1924 Sender trabajará en Madrid como redactor del prestigioso periódico *El Sol* y se aproximará a los círculos intelectuales y políticos enemigos de la dictadura de Primo de Rivera, frecuentando las tertulias literarias, a las que considerará como una parte primordial en su educación. Tras abandonar *El Sol* colaborará en el diario cenetista *Solidaridad Obrera*, en el periódico también anarquista *La Libertad*, así como en otras publicaciones obreristas, tan variadas en la época, en las que consiguió un importante prestigio. Por su proximidad a los círculos anarquistas y su activismo frente a la dictadura fue a parar a la Cárcel Modelo de Madrid en 1927.

Su primera obra *La cuestión religiosa en México* (Cenit 1931), apareció con un prólogo que en realidad había sido redactado por Juan Andrade, uno de los fundadores del PCE y compañero de Andreu Nin. También el prólogo de *Imán* será escrito por un comunista, Ernesto Fernández Armesto, entonces militante del PCE, y más tarde un anticomunista que firmaba como Augusto Assia en la prensa del conde de Godó.

El éxito de *Imán* puso a Sender a la cabeza de la nueva «novela social» y durante el primer lustro de la década escribirá libros tan importantes como *O.P.* (1931), *Siete domingos rojos* (1932) y *La noche de las cien cabezas* (1934).

Defensor del frente único del proletariado, participó —en septiembre de 1931— en un mitin del Socorro Rojo Internacional como representante de la pronto desaparecida Unión de Escritores Proletarios Revolucionarios de Hispano-América. Ya entonces demostraba su simpatía por la Unión Soviética, como se evidencia en el ensayo «Literatura proletaria» (mayo de 1932), al tiempo que marcaba distancias con el anarquismo.

El 1 de diciembre de 1932, en las páginas de *La Libertad*, aparece su primera condena a la estrategia anarquista, si bien en el mismo escrito descalificaba también a los comunistas españoles por su incapacidad para canalizar el anhelo revolucionario de las masas. Lejos de una evolución ideológica al uso, Sender no rompía su vinculación con el anarquismo, sino que lamentaba su impotencia y las prácticas de la CNT, como instrumento revolucionario ineficaz. Por eso Sender criticaba por igual «el colaboracionismo» de la UGT y el «sonambulismo» de la CNT, y por supuesto el carácter «oportunista» del PSOE, lo cual era mucho más objetivo que el calificativo de socialfascismo que le aplicaba el PCE.[17]

En enero de 1933, enviado por el periódico *La Libertad*, firmará un excelente reportaje acerca de la sangrienta represión policial de la insurrección campesina de Casas Viejas, que recogerá en su libro *Casas Viejas* (1933) y posteriormente en *Viaje a la aldea del crimen* (1934). Sus reportajes serán seguidos con atención por *Mundo Obrero* que elogió el trabajo del «camarada anarquista».

En contestación a esos elogios, Sender envió una carta al periódico comunista, a finales de enero de 1933, en la que aclaraba su postura respecto a la catalogación de «anarquista» diciendo lo siguiente: «No soy anarquista contra lo que cree *Mundo Obrero*, el tema se presta a dialogar largamente,

pero estimo que en mi caso no tiene importancia… El anarquismo es una posición sentimental o intelectual que se da en todos los sectores —en el burgués y en el aristocrático también— y que no tiene nada que ver con la lucha revolucionaria contra el capitalismo. Decía Sender a continuación que había coincidido y coincidía aún «con el apoliticismo de los anarquistas sólo por entender que es muy secundaria la coyuntura de las elecciones democráticas… cuando es posible la lucha de masas. La lucha verdadera».[18]

En los números del 2 y del 3 de febrero, el diario comunista entró en polémica, estrictamente teórica, con el texto de Sender, lo que dio pie a una nueva contestación del escritor días después, en la que afirmaba que el PCE tenía una «línea firme, compacta y perfectamente orientada, y que si la mantenéis frente a tantas maniobras desorganizadoras y mixtificaciones, habrá que reconoceros como los únicos capaces de dirigir al proletariado por cauces seguros en el campo de la lucha de clases. Esta declaración me evitará el añadir que si políticamente no estoy dentro de vuestros cuadros, prácticamente estoy a vuestro lado»;[19] aunque líneas más abajo Sender expresaba a la vez «algunas dudas en cuanto a la táctica».

Al día siguiente, el 8 de febrero, *Mundo Obrero* celebraba las declaraciones del autor. Sender podía ser considerado un compañero de viaje y dada su procedencia del movimiento libertario esta captación adquiría un valor simbólico de lo que los comunistas esperaban que sucediera en el movimiento obrero español.

Pero el paso definitivo en esta adhesión se produjo a raíz de un viaje a la URSS realizado por Sender en mayo de 1933. Poco antes de su viaje Sender ya había firmado el manifiesto fundacional de la asociación Amigos de la Unión Soviética.

Su marcha se debió a que había sido invitado para presenciar en Moscú la Olimpiada de Arte Revolucionario como miembro de la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios y cuando concluyó el evento, esta organización le animó a prolongar su estancia, de modo que permaneció en la URSS algo más de dos meses.

De esa visita surgirá un libro *Madrid-Moscú* (febrero de 1934) que se puede enmarcar en ese tipo de relatos entusiásticos firmados por tantos escritores de la época que visitaron el país de los soviets.

En la narración chocan algunas apreciaciones de distinta índole sobre temas variados. Por ejemplo la inminencia de una nueva guerra para la que Alemania se preparaba enarbolando la bandera de la venganza, lo que le llevaba a escribir al novelista aragonés que el fenómeno nazi arrancaba —«es necesario reconocerlo— del propio Tratado de Versalles… Hitler sabe que se hundirá con todos; pero quiere ser el héroe de la última batalla».

Tras su breve estancia en Polonia a la que califica como una «nación artificial», provista de «una nacionalidad falsa», —opinión en la que va a coincidir con nazis y soviéticos— el viajero llegó a las puertas de la URSS, lo que para el aragonés suponía en un tramo de veinte kilómetros pasar del «feudalismo» al «socialismo». El relato de esa experiencia está narrado en un tono de fervor transcendente que puede resultar ridículo. «Si Rusia comienza aquí, se puedo decir que nuestra entrada tiene una solemnidad casi religiosa, a fuerza de silencio… El tren acorta la marcha. No es que vayamos a detenernos, porque para la estación falta un buen trecho. Es que el maquinista es un proletario y quizá esta emoción de entrar en la URSS es el único lujo de su vida».[20]

Madrid-Moscú es fundamentalmente un testimonio entusiasta sobre la construcción de una sociedad socialista, impregnado de una cierta ingenuidad. «Aquí no hay más que proletarios. Aquí no hay más voluntad que una: la de los obreros… la intervención del Estado es mínima… la construcción socialista va a pasos de gigante en la Unión Soviética, y cualquiera que sea el rumbo de los acontecimientos, esto no hay quien lo destruya, ni siquiera quien pueda interrumpirlo en su avance».[21]

Se trataba de una visión lírica que se ajustaba a la imagen externa que el gobierno soviético quería ofrecer, aunque también había algunos apuntes críticos. Mientras que en la fase oficial de su estancia todo funcionó a base de bonos y pases que allanaban todos los caminos, en el momento en que Sender decide quedarse unos días más, la realidad se complica extremadamente. «Para que yo me quedara solo con mi cama de campaña en una habitación modesta hubo necesidad de papeles, sellos y firmas sin fin».[22]

Pero *Madrid-Moscú* es también el testimonio de una toma de conciencia política que sustituía el deslumbramiento inicial ante la revolución por un decidido apoyo a la URSS.

En su carta de despedida a la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios Sender decía: «Ahora, después de mi estancia en la Unión Soviética, vuelvo con la mayor fe en el triunfo completo y definitivo, no solo definitivo, sino inquebrantable. Después de todo lo que aquí he visto, no hay razón para que un intelectual esté indeciso. En la trinchera hay un uniforme y un fusil más... Al llegar aquí era un intelectual. Hoy es un soldado del frente de lucha y de la edificación socialista el que os deja».[23]

Tras el retorno de la URSS comienza la luna de miel entre el compañero de viaje y el PCE. En octubre de 1933, Sender suscribía el «Manifiesto de la asociación de amigos de *Nuestro Cinema* —revista vinculada al PCE y dirigida por Juan Piqueras— al lado de otros intelectuales afines al comunismo como Alberti, Arconada, Arderius, María Teresa León, Emilio Prados, Renau... Después de la publicación *Madrid-Moscú* en 1934, la revista *Octubre* daba a conocer los resultados de una encuesta literaria dirigida a los trabajadores, según la cual «de entre los escritores españoles el más popular era Sender».[24] En ese mismo año, el aragonés fue invitado al I Congreso de Escritores Soviéticos, celebrado durante la segunda quincena de agosto en Moscú, bajo la presidencia de Máximo Gorki; y poco después, le fue confiada la dirección del diario *La Lucha*.

La Lucha, conoció una corta y agitada trayectoria como diario de la noche entre el 9 de enero y el 8 de marzo de 1934. Surgió en un momento poco propicio para la prensa obrera, suspendida frecuentemente desde el triunfo de las derechas en noviembre de 1933. En opinión de Rafael Cruz, el PCE perseguía con esta publicación, principalmente, dos objetivos: suplir la ausencia de *Mundo Obrero* y «demostrar que los trabajadores estaban con el PCE, ya que éste se consideraba el más firme partidario del frente único».[25] En efecto. *La Lucha* exhibía como subtítulo la consigna de «Frente único de los trabajadores» y desde un principio se presentaba como independiente de cualquier partido. Probablemente para reforzar esa imagen se le encargó la dirección a Ramón J. Sender, aunque es difícil precisar en qué medida el escritor ejerció el cargo, ya que en febrero, según informaba el mismo diario, Sender abandonó tal ocupación, siendo sustituido por el entonces único diputado comunista Cayetano Bolívar.

En ese distanciamiento podemos entrever las dudas que anidaban en el escritor ante la táctica seguida por el PCE en la coyuntura concreta por la que está atravesando el movimiento obrero español. Esas dudas habían sido

ya olfateadas por Codovilla, el responsable de la Komintern en nuestro país, que tras entrevistarse con Sender remitió un informe al Secretariado Romano de la Internacional en el que precisaba la postura del aragonés.

El origen de todo, —según Codovilla— radicaba en que en su viaje de vuelta a España, Sender había pasado por París y un amigo suyo, Latorre, ex miembro del PCF, le había llevado a casa de Albert Treint, donde se habló de la degeneración de la Komintern y de la necesidad de constituir la IV Internacional. Treint había sido un dirigente relevante del comunismo francés y había ocupado la Secretaría General del PCF de 1923 a 1924. Miembro del Presidium de la Internacional Comunista hasta 1926, había sido expulsado en 1928 por trotskista.

Según relataba Codovilla en su informe: «Sender después de haber oído esas manifestaciones se retiró indignado de la reunión; pero como se ve, el veneno trotskista ya había empezado a hacer mella en su mentalidad de intelectual».

Producto de esa «ponzoña» el compañero de viaje sostenía, —con gran escándalo por parte de Codovilla— que «era preciso que la IC dejara más autonomía al Partido Comunista español para que éste pudiera adaptar su táctica a la realidad nacional. España —dijo Sender— no es Rusia, y aquí la revolución podría seguir por cauces distintos a los de Rusia. El partido, para transformarse en una organización de masas, siguiendo el ejemplo de Lenin, debía hacer concesiones a los adversarios y ser más flexibles con los principios si quería atraerse a los obreros anarquistas y socialistas. Dijo que eso de llamar a los jefes socialistas socialfascistas no era justo, menos aún lo de llamar traidores a los anarquistas».[26]

A pesar de estas opiniones, Codovilla, —sabedor de la influencia que el escritor podía ejercer en determinados medios— exponía al Secretariado Romano una propuesta sobre la actitud que se debía adoptar con Sender: «debe ser cultivado y llegaremos a ganarlo completamente para el partido».

Sender fue el típico compañero de viaje seducido en aquellos años no tanto por el comunismo como por la admiración que había despertado en él el proceso de construcción del socialismo en la URSS. En 1934, en unas declaraciones a una revista soviética en lengua inglesa, *International Literature*, decía lo siguiente: «En artículos, en libros, en las discusiones sindicales y políticas, incluso en las luchas callejeras, la existencia de la URSS nos ha

dado serenidad y confianza... Gracias a los logros de los soviets mis ideas han adquirido una mayor consistencia y equilibrio».[27] Y en una carta de 1935 que escribió a su traductor Kelyin lo confesaba abiertamente «Sabes de sobra con qué fervor y serena confianza quiero yo a la Unión Soviética, en sus logros gloriosos como en su lucha heroica».[28]

El compromiso del escritor se mantuvo hasta cierto punto durante la guerra civil, sin embargo la convicción que había manifestado antes empezó a flaquear. Cuando tuvo conocimiento del asesinato de Andreu Nin, le confesó a Eusebio Cimorra: «Esto no hay quien lo pare, y yo no quiero ni una España en poder de Hitler y Mussolini, ni una España sovietizada».[29]

El exilio supondrá, primero el total distanciamiento, y más tarde el rechazo público a lo que el escritor había apoyado. Instalado en los Estados Unidos, Sender estuvo enseñando en sus universidades hasta la fecha de su muerte. Durante este tiempo llegará a colaborar con la CIA, no dudando en dar su apoyo a la intervención estadounidense en la guerra del Vietnam.

Su captación por parte de la CIA vino de manos del amor, ya que contrajo matrimonio con Florence Hall que trabajaba para la Sección de Asuntos Culturales Latinoamericanos del Departamento de Estado norteamericano,[30] lo que le supuso, ya a principios de la década de los 50, que la CIA lo incluyera en la lista de los INC (*Non-Comunist Left*).

Pero su pasado como compañero de viaje de los «rusos» retornará como un fantasma al final de su vida. En 1974 y 1976 Sender pudo regresar fugazmente a España, con la excusa de impartir varias conferencias en Barcelona, Zaragoza y Huesca; y fue en el segundo de esos viajes cuando el confidente de la policía franquista, Camilo José Cela, resucitó provocativamente ese pasado lejano del excompañero de viaje.

En los años 60, el ministro Manuel Fraga Iribarne, había puesto en marcha una operación de «reconciliación» y repesca de exiliados para proyectar una imagen de «apertura» del régimen franquista, y Cela colaboró en la misma de modo entusiasta. Su revista *Papeles de son Armadans* estuvo abierta a escritores que, fieles a la II República o contrarios a la dictadura, vivían fuera de España desde la guerra: Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Max Aub, etc. También les invitaba a volver al país y pasar por su casa en Palma de Mallorca. Cela quería así enmascarar su condición de censor y de delator franquista, al tiempo que anhelaba el premio Nobel, aunque sabía que Sen-

der —el novelista español más traducido en ese momento— era un serio competidor, ya que su candidatura al Nobel la avalaba el Gobierno republicano en el exilio y la prestigiosa e influyente *Hispanic Society*.

Para distorsionar la figura de su competidor, y convertirlo en un vestigio de un pasado belicista y republicano, Cela invitó al aragonés a una cena en su casa de Palma, junto a varios periodistas que se encargarían de difundir cualquier salida de tono por parte de Sender. Durante la velada, Cela dijo de modo provocativo: «Ojalá entren cuanto antes en Madrid los tanques rusos». A lo que Sender contesto: «Entraron ya en 1936 y los recibí yo, ¿y sabes lo que nos trajeron? Nos trajeron a Franco, a quien tú pediste humildemente que te nombrara delator de la policía». Luego Sender tiró del mantel y volcó toda la cubertería. Entonces Cela se encaró a su invitado y éste le dijo: «Cuidado porque voy a romperte la cabeza y no tienes otra».

Esta es una de las versiones que el propio Sender relató en una carta a la poetisa Julia Uceda tres años más tarde del incidente y que se hizo pública en 1991 en *Diario 16*. En la otra versión, narrada por el propio Sender al ABC, los tanques rusos seguían otra trayectoria.

Contestando a una pregunta sobre el incidente Sender relataba en esa entrevista: «¿Qué pasó (con Cela)? Que dijo en una cena en su casa, donde había un grupo de gente muy diversa, que confiaba en que los carros de combate rusos invadieran un día los Estados Unidos. Y yo eso no lo resistí. Y le dije que bajo un sistema comunista él no sería nada, que se callara. Yo vivo en los Estados Unidos y siento simpatía por este país. No permito que un loco y un cínico diga esas estupideces. Por eso me levanté y estiré del mantel: todo fue rodando sobre los comensales. Y ya en la puerta le dije que conmigo no sirven esos juegos, cuidado o le metía un tiro entre las cejas. Tenía que haberlo visto más blanco que la pared».[31]

La condición de compañero de viaje podía durar más o menos tiempo, pero nadie la iba a olvidar nunca. No obstante, a José Bergamín eso no le importó, ya que fue probablemente el compañero de viaje que realizó el más largo recorrido junto al PCE en toda la historia del partido.

Los orígenes de José Bergamín eran distintos a los de Sender. Su padre Francisco Bergamín había sido un ministro liberal conservador con la Restauración y su madre era una ferviente católica, creencia que nuestro escritor heredaría de ella y mantendría viva hasta el final de sus días.

Tras estudiar Leyes en Madrid, Bergamín hizo sus primeras armas literarias de la mano de Juan Ramón Jiménez en la revista *Índice*, iniciando a la par una relación de amistad con Unamuno, que valoraba al joven como una promesa del pensamiento hispano. Aunque se relacionó con toda la Generación del 27, y fue editor de sus primeros libros, la crítica oficial nunca lo ha considerado miembro de la misma, encasillándolo como perteneciente a la generación de 1914 o como novecentista.

Destacado ensayista, con un depurado estilo, Bergamín escribirá sobre los más variados temas que iban desde, el Siglo de Oro, hasta la tauromaquia pasando por la mística, la política o el tema de España. Pero donde brilló de modo particular fue como dinamizador cultural siempre comprometido. Ya en época temprana se opuso a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, y participó en un mitin político en Salamanca junto a Unamuno en apoyo de los ideales republicanos.

En 1928 se casó con la hija del comediógrafo Carlos Arniches y en su viaje de novios visitó brevemente la Unión Soviética, aunque la experiencia no se tradujo ni en revelación, ni siquiera en admiración entusiasta. «La apariencia es apariencia, como la propaganda, propaganda: superficie y vacía. Rusia es mentira de verdad. Por eso existe o está fuera».[32]

Con la proclamación de la República colaboró lealmente y desde el principio con el nuevo régimen. Con motivo del incendio de algunos conventos durante esos primeros días Bergamín escribirá tiempo después que los anarquistas quemaban las iglesias porque los cristianos habían quemado la Iglesia. Su compromiso con la República le llevó a ocupar por breve tiempo el cargo de director general de Seguros en el primer Ministerio de Trabajo a las órdenes de Largo Caballero; pero en 1934 Bergamín exigirá a los poderes públicos la investigación y el castigo de las torturas infringidas a los mineros en la represión tras la insurrección de Asturias, un antecedente en su compromiso que tendrá estrambote décadas después.

Sin embargo, su vocación era otra muy distinta a la de un cargo ministerial, y en 1933 fundó y dirigió la revista *Cruz y Raya*, donde participaron numerosos escritores del 27 y otros de las más variadas tendencias, desde comunistas como Miguel Hernández a falangistas como Rafael Sánchez Mazas.

No obstante, esta publicación no fue del agrado de la intelectualidad del PCE que la acusaba de estar pagada por los jesuitas. En *Nueva Cultura,* la revista comunista valenciana, se decía de ella: «*Cruz y Raya,* revista de metafísica, toros y salero nacional, que si la cuelga usted detrás de la puerta de su hogar, puede sustituir hasta con ventaja, la vera efigie y célebre abracadabra del santo varón de Loyola: "AL DEMONIO: NO ENTRES. Ignacio." Y además, y para buen gobierno de su alma, le recordará en todo instante la hora de su muerte».[33]

Fue con la guerra cuando Bergamín pasó a ser de modo abierto un compañero de viaje del PCE, y, según Trapiello, a convertirse sin lugar a dudas, con Alberti y Antonio Machado, en el escritor más influyente durante el conflicto, no sólo por los importantes cargos que ocupó, sino por su prestigiada inteligencia.

Nombrado presidente de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, se embutió en un mono azul de obrero y sugirió ese nombre, *El Mono Azul*, para una nueva revista que sería una publicación señera en el bando republicano. Su nombre está asociado en esta época a casi todas las empresas culturales que se desarrollaron durante la contienda, multiplicándose en todos los frentes literarios y periodísticos. Bergamín escribió en las revistas *El mono azul*, *La Hora de España* y *Cuadernos de Madrid*.

Nombrado agregado cultural de la Embajada española en París, se ocupó en buscar apoyos morales y financieros para la causa republicana; además de hacer a Pablo Picasso el encargo oficial del *Guernica* para la Exposición Internacional de París del año 1937. Aunque otros sotienen que fue Max Aub quien realizó ese encargo. Pero el mayor logró de Bergamín fue conseguir que se celebrase en Valencia, durante ese mismo año de 1937, el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que reunió a más de un centenar de intelectuales llegados de casi todas partes del mundo.

Como es fácil deducir la postura y actividad de Bergamín durante este período le iba a crear numerosos enemigos. Su sección en el *Mono azul* titulada *¡A paseo!*, en la que, criticaba acremente a escritores e intelectuales que habían optado por el bando golpista, ha sido considerada por algunos como una invitación al asesinato movida por la envidia. «Visto… cómo se disparaba desde la sección *¡A paseo!* en *El Mono Azul* contra Eugenio Montes,

Rafael Sánchez Mazas, Ernesto Giménez Caballero, Eugenio d'Ors o José María Pemán, uno tiende a creer que en casos como el de Bergamín se trató tan sólo de oscuros motivos personales teñidos de ambición política».[34]

Sin embargo, el compromiso de Bergamín era consecuente y sincero, lo que le llevó a secundar la política estalinista a todo trance y en todo momento. Los dos hechos en los que se evidenció de modo más claro esa adhesión sin fisuras a la causa del comunismo oficial fueron: la relativa a la condena de André Gide en el II Congreso Internacional de Escritores, y el prefacio que firmó en un panfleto antipoumista.

En 1937, tras la aparición de su libro *Retour de l'URSS,* del año 36, pero sobre todo sus *Retouches a mon retour de l'URSS,* escritos por Gide, en los que se manifestaban serias reservas sobre la realidad de la URSS, el escritor francés, muy amigo hasta entonces de Bergamin, fue proscrito en Valencia. Faltando un mes para que se celebrase la apertura del Congreso, y siendo uno de sus presidentes, a José Bergamín, se le encargó la reprobación pública de André Gide, a quien tanto había admirado y a quien no le cursó invitación alguna para asistir al encuentro.

El clima de crispación a causa de los libros de Gide era grande, y muchos de los congresistas, entre ellos Bergamín, trataron de arrancar a la asamblea una descalificación, por «traidor y trotskista», pero unos y otros comprendieron que no podía comprometerse el éxito de aquel acto a una cuestión que podía dividir a los delegados, y se pasó, desde el primer día, a la lectura de las ponencias. Finalmente, en la sesión celebrada en la Residencia de Estudiantes el 8 de julio por la mañana, —en un rápido viaje que los congresistas hicieron a la capital sitiada— y bajo la presidencia del poeta inglés Stephen Spender, Bergamín tomó la palabra y se convirtió en la figura central del Congreso al reprobar a Gide por su postura.

El otro caso en el que se puede apreciar hasta donde llegaba el compromiso de éste compañero de viaje es el prólogo que Bergamín escribió a *Espionaje en España*, un panfleto antipoumista, obra un misterioso Max Rieger, que tenía como finalidad dar visos de verosimilitud a un chapucero montaje que pretendía vincular al POUM con los servicios de espionaje nazis. La firma de un conocido intelectual católico debía avalar un refrito de documentos burdamente falsificados que sólo podían ser creíbles para quienes como Bergamín comulgaran con una determinada estrategia política de de-

fensa de la República a ultranza, frente a cualquier intentona revolucionaria. En este sentido la línea argumental de Bergamín era la misma que la del PCE y la misma que la del gobierno Negrín.

«La organización trotskista española del POUM se rebeló por la traición de mayo de 1937 como una eficacísima instrumentación fascista dentro del territorio republicano… sostener una campaña demagógica contra el gobierno popular,… es el hecho de traición más viva que puede verificarse en una guerra… Los sucesos de mayo de Barcelona, en 1937 revelaron al POUM y a sus directivos como un pequeño partido que traicionaba… Defender el trotskismo español, como a los trotskistas españoles procesados por delitos tales, es pasarse al enemigo; y cuando eso se hace debe tenerse la sinceridad moral de decirlo».[35]

Muchos estudiosos se han encargado de resaltar esta postura de Bergamín dejando deslizar una crítica velada o explícita por lo que consideran una actitud vergonzosa ante la verdad de unos hechos que, según ellos, el escritor debía conocer como falsos. Sin embargo no pueden ocultar que la inclinación que parecen mostrar por las víctimas del montaje estalinista está también impregnada de una determinada ideología. «El hecho de que el modesto POUM se enfrentase al poderoso comunismo soviético, y fuese su víctima, —nos dice Trapiello— le llenó, durante muchos años, de la simpatía internacional, pero si se leen los programas poumistas no son, en el fondo, muy diferentes de los de sus verdugos».[36] En definitiva, a los ojos de la óptica liberal, todos eran igualmente «peligrosos», ambos POUM y PCE, cada uno a su modo, eran comunistas.

Pero no creamos que el estalinismo era confiado con los compañeros de viaje fueran cuales fuesen sus servicios. La informadora soviética, Tatiana Boleslavskaya, calificaba a José Bergamín, en uno de sus informes, como «muy cauteloso».[37]

Méjico fue para nuestro escritor su primera etapa en el exilio tras la guerra. Allí comenzó a editar la revista *España Peregrina*, refugio literario de los escritores exiliados, y allí fundó la Editorial Séneca, donde aparecieron obras de Machado, Alberti, Vallejo, Lorca o Cernuda; al tiempo que continuaba con su propia producción literaria. Pasó luego por Venezuela y Uruguay, y en 1955 se estableció en Francia desde donde intentó volver a España. Finalmente, en 1958 consiguió su propósito y se estableció en Madrid.

Tomándose demasiado en serio la idea extendida en aquel entonces de que la guerra ya había terminado y de que imperaba en el país una cierta amnistía moral que permitía regresar a los exiliados, se creyó en su derecho de volver y confió en esa apertura que anunciaba el régimen franquista. En una entrevista radiofónica que se le hizo en Francia, años después, Bergamín afirmaba que «regresó de buena fe, sin hacer absolutamente nada contra aquel régimen tan poderoso contra el cual nada podía hacer un escritor. Lo único que hizo fue continuar escribiendo sus opiniones políticas en el extranjero porque dentro la censura lo impedía, pero insiste en la entrevista que no quiso atacar demasiado al régimen por temor a la policía y a los enemigos que tenía».[38]

Sin embargo, Bergamín no podía permanecer indiferente ante lo que sucedía en aquella España a la que había vuelto, y las huelgas mineras de 1962 lo devolvieron al compromiso.

Alejandro Fernández Sordo, subordinado de Manuel Fraga, se encargó, siguiendo las orientaciones oficiales, de mantener el silencio en torno a cuanto ocurría en Asturias sobre el conflicto minero. Pero los canales informativos de la oposición clandestina hicieron circular las noticias. La Pirenaica y Radio París empezaron a informar de la lucha de los mineros y de la represión que se había desatado.

El PCE movilizó a sus intelectuales para recabar la solidaridad, y Alfonso Sastre acompañado de Ricardo Doménech se desplazaron al foco del conflicto para conocer lo que realmente estaba ocurriendo, poco después les siguió Jesús López Pacheco. Pero los que recabaron más información fueron Eduardo Urculo, dada su facilidad para entrar en contacto con la gente de su tierra, y el fotógrafo de Mieres y amigo de éste, Mario Pascual. El pintor Urculo, durante su reciente estancia en París había entrado en contacto con el historiador Manuel Tuñón de Lara y el pintor José Ortega, y al volver mantuvo sus contactos con la intelectualidad comunista.

A mediados de septiembre, en el piso del escritor Alfonso Sastre, se reunieron algunos intelectuales y artistas vinculados al partido, con la finalidad de recoger firmas para dirigir una carta al ministro Manuel Fraga, protestando por los sucesos de Asturias. La carta fue suscrita por ciento dos personalidades de distintos ámbitos, y la primera firma fue la del viejo compañero de viaje José Bergamín.

La respuesta oficial puso el acento, como no podía ser de otro modo, en la agitación comunista, pero las iras de Manuel Fraga se dirigieron de forma muy especial contra Bergamín, en su calidad de primer firmante del escrito. El ministro decía que «entre los nombres veo personas como usted mismo que fue capaz de defender en su día, no ya los crímenes cometidos contra los españoles de filiación nacional, sino inclusive (favoreciendo las tendencias estalinistas imperantes entonces en el comunismo español) las represiones verificadas contra el sector trotskista de dicha ideología».[39]

Esta inquina se tradujo en que José Bergamín terminó siendo detenido, aunque su afición al toreo le sirvió para salir pronto de la cárcel, al intervenir, con toda su influencia, otro curioso compañero de viaje: el torero Luis Miguel Dominguín.

Los hermanos Dominguín, Luís, Pepe y Domingo, procedían de una saga de toreros y admiraban las obras de Bergamín en este campo del ensayo, como eran *El arte de birlibirloque* (editado en 1930) y *La estatua de don Tancredo*, dedicado a Ignacio Sánchez Mejías, que había sido publicado por primera vez en la revista *Cruz y Raya* en 1934.

Domingo Dominguín Lucas, Dominguito, como le llamaban los taurinos, —para dejar claro que no se referían al fundador de la dinastía sino a su hijo mayor— en un viaje a Méjico había trabado amistad con el comunista Isidoro Diéguez y desde entonces se había convertido en un compañero de viaje más, arrastrando en esa aventura a su hermano, el afamado torero Luis Miguel Dominguín, del que Domingo era su apoderado.

Los hermanos Dominguín, Pepe y Domingo en concreto, aparte de acompañar al *Che* a los toros, en la visita del guerrillero a Madrid, ayudaron al PCE de formas muy distintas, amparándose en el prestigio del que gozaban en la sociedad española de entonces. Muy conocida es la anécdota entre Franco y Luis Miguel Dominguín vivida en una cacería. En un momento de pausa entre los participantes el dictador se acercó al diestro y le preguntó: «me he enterado que entre sus hermanos hay un comunista, ¿quién de los tres es?» A lo que el torero contestó con total naturalidad: «los tres, excelencia, los tres».

El atrevimiento de los hermanos rayaba la temeridad y en una ocasión llegaron a invitar a una corrida a Francisco Romero Marín, «El Tanque», responsable del aparato del partido en la capital y el hombre más buscado

por la policía política franquista, sentándose con él debajo del palco donde se encontraba el dictador presidiendo la faena.

No obstante el compromiso de los Dominguín fue mucho más allá de la anécdota ya que junto con Juan Antonio Bardem, Ricardo Muñoz Suay, Luis Buñuel, Francisco Rabal y otros, crearon la productora cinematográfica UNINCI, que produjo *Bienvenido Mr. Marshall* y *Viridiana*, que logró la Palma de Oro en Cannes.

Domingo Dominguín no tuvo nunca ningún reparo en poner su piso de Ferraz número 12 a disposición del PCE, y allí se realizaron infinidad de reuniones clandestinas y allí encontraron refugio camaradas perseguidos. Semprún, Javier Pradera e Ignacio Aldecoa formaban el núcleo más íntimo de amigos del apoderado, y los dos primeros dejaron testimonio escrito del aprecio que le profesaban.

En la historia que nos ocupa fueron los Dominguín los que movieron sus influencias para que Bergamín saliera de la cárcel y pudiera partir a su segundo exilio. A los sesenta y ocho años, sin documentación y sin recursos, llegó en primer lugar a Montevideo, donde permaneció el tiempo justo para conseguir un nuevo documento de identidad. Gracias a su amigo André Malraux, entonces Ministro de Asuntos Culturales en el gabinete francés, pudo entrar en Francia sin documentación española porque carecía de nacionalidad y su situación estaba aún por determinar. En el país vecino residió hasta 1970 cuando de nuevo retornó a España instalándose en un pequeño apartamento de la plaza de Oriente en Madrid. Hasta allí mismo le llegaban, «los alaridos de las turbas fascistas», comentará el viejo escritor, aludiendo a las multitudinarias concentraciones en apoyo al régimen en los últimos años del franquismo.

José Bergamín, maestro de la paradoja y fiel compañero de viaje de los comunistas, sin renunciar por ello a su fe de católico, había acuñado la frase: «Con los comunistas, hasta la muerte; pero no más allá».[40] Sin embargo, el PCE de la Transición le negó que se hiciera cierta esa afirmación.

Bergamín entendió la reforma política que se impuso desde el franquismo como un «Franquismo sin Franco», como la «continuidad cadavérica franquista»[41] y no como un modelo de transición democrática. Frente al consenso político que generó la llamada Transición, el escritor mantuvo el mismo espíritu de resistencia independiente que había mantenido toda su

vida, y se negó a suscribir ese pacto no escrito entre intelectuales y políticos de todas las tendencias en el que se asentó el posfranquismo.

Cuando su amigo Rafael Alberti, fiel al Partido Comunista, aceptó la Monarquía, Bergamín se le quejó amargamente por lo que consideraba una traición a los viejos ideales comunes. Con estos versos expresaba el ya ex compañero de viaje su postura frente a lo que estaba sucediendo:

«A mí me dejaron solo
Como se deja en la plaza
Al torero con el toro».

Los ataques contra la Monarquía y contra los gestores de la Transición terminaron por llevarle ante los Tribunales, teniendo que declarar por el artículo «La confusión reinante», publicado en Sábado Gráfico el 28 de enero de 1978. Por presiones de unos y otros cesaron sus colaboraciones en dicha revista y desde entonces fue vetado y censurado en Madrid.

La España reconciliada y en paz con la que soñó Bergamín a lo largo de sus peregrinas andanzas fuera y dentro de su patria, no la representaba para él la Constitución de 1978. Sus denuncias a las torturas en las cárceles, su oposición a la Monarquía o sus ataques a los socialistas y a los comunistas, le crearían finalmente una fama de viejo escritor resentido.

Pero Bergamín no podía abandonar su postura de compromiso que había abrazado desde muy joven y comenzó a acompañar en el viaje a otra causa.

Manteniendo siempre una cierta coherencia política, siguió defendiendo su compromiso republicano en una guerra personal contra el Franquismo y contra la Monarquía que le había sucedido, y en las postrimerías de su vida fue a identificarse con el movimiento abertzale.

El núcleo más importante y radical de oposición política a la Transición se encontraba en Euskadi y allí es donde Bergamín hallo la acogida y el apoyo que le había sido negado en Madrid. Sus últimas colaboraciones fueron para el semanario *Punto y Hora* y el diario *Egin*; y en solidaridad con los refugiados vascos devolvió a Francia su nombramiento de Commandeur de la Ordre des Arts et des Lettres, título que se le había otorgado junto a Picasso y Buñuel.

Se cuenta que en una cena a la que asistió Javier Pradera, antiguo intelectual orgánico del PCE reconvertido por la Transición en decidido atlantista, y José Bergamín, ambos discutieron airadamente. Al salir del restaurante tomaron los dos el mismo taxi, y cuando Pradera descendió el primero frente al portal de su casa, desde la ventanilla, Bergamín le espetó: «¿Sabes una cosa, Javier? ¡Viva Euskadi Askatuta!» Pradera se volvió y le respondió: «¿Sabes otra cosa tú? ¡Viva la fiel Infantería!». Todo un resumen de la paradógica historia del PCE y los intelectuales.

La última voluntad de José Bergamín fue la de ser enterrado en Fuenterrabía «para no dar mis huesos a tierra española».

El problema que el comunismo oficial siempre tuvo con los compañeros de viaje es que fue incapaz de dar con la ruta acertada para poder llegar con ellos a la Estación Finlandia.

Notas

1.- Trotsky, L. (1924/2003): *Literatura y Revolución*, Spartakku, http://www.proyectoespartaco.com, págs. 26-27.

2 .- Caute, D. (1975): *Compañeros de viaje*, Grijalbo, Barcelona, pág. 11.

3.- Navarra Andreu (2016): *El espejo blanco. Viajeros españoles en la URSS*. Fórcola, Madrid; Avilés Farre, J. (1999): *La fe que vino de Rusia*, Biblioteca Nueva, Madrid.

4.- Gómez, Mayte (2005): *El largo viaje. Política y cultura en la evolución del Partido Comunista de España 1920-1939*, Ediciones de la Torre, Madrid, pág. 189.

5.- Trapiello, A., (1997): *Los nietos del Cid*, Planeta, Barcelona, pág. 277.

6.- Espín, M., (2012): *Mujeres en el filo de la navaja*, Corona Borelis, Málaga, pág. 80.

7.- Gómez (2005) *Opus cit*.

8.- Gómez (2005) *Opus cit*., pág. 76.

9.- Aznar Soler, Manuel (1978): *Pensamiento literario y compromiso antifascista de la inteligencia española republicana. Tomo II del II Congreso Internacional de Escritores Anti-fascistas (1937)*. Laia, Barcelona, pág. 21.

10.- Cit. en Deutscher, I. (1969): *Trotsky el profeta desterrado*, Era, Mejico, pág. 391

11.- Montero, Enrique (1977): «*Octubre*: revelación de una revista mítica», prólogo a la edición facsímil de *Octubre*. Madrid. Turner. pág. XXIV.

12.- Tuñón de Lara, M. (1973): *Medio siglo de cultura española, Tecnos*, Madrid, pág. 281.

13.- Gómez (2005) *Opus cit*., pág. 222.

14.- Aznar Soler, Manuel (2014): *República literaria y revolución*

(1920-1939), Renacimiento, Sevilla, pág. 22.

15.- Cit. en Trapiello, A., (2010): *Las armas y las letras. Literatura y guerra civil (1936-1939)*, Destino, Madrid, pág. 46

16.- *Ibidem*, (1994): pág. 95.

17.- *La Libertad*, 1/XII/1932.

18.- *Mundo Obrero*, 30/I/1933.

19.- *Mundo Obrero*, 7/II/1933.

20.- Duñas, J. D. (1994): *Ramón J. Sender. Periodismo y compromiso (1924-1939)*, Colección de Estudios Altoaragoneses, Huesca, pág. 295.

21.- *Ibidem*, pág. 297.

22.- Elorza y Bizcarrondo (1999) *Opus cit.* pág. 204.

23.- Duñas, (1994) *Opus cit*. pág. 301.

24.- *Ibidem*, pág. 292.

25.- Cruz, R., (1987) *Opus cit*. pág. 69.

26.- Elorza y Bizcarrondo (1999) *Opus cit.* pág. 206.

27.- Blanco Aguinaga, C. *et alii*, (1979): *Historia Social de la Literatura española (en lengua castellana)*, Castalia, Madrid, Tomo III, pág. 38.

28.- *Ibidem*, pág. 207.

29.- Duñas, (1994) *Opus cit*. pág. 382

30.- Stonor Saunders, F. (2001): *La CIA y la guerra fría cultural*. Debate, Madrid.

31.- ABC 28/VIII/1977. Para las dos versiones ver Moreiro J. (2014): *Escritores a la greña: Envidias, enemistades y trifulcas literarias*, EDAF, Madrid.

32.- Cit. en Trapiello, A., (1993), pág. 56.

33.- *Ibidem*, pág. 53.

34.- Sánchez Rodríguez, A. (2014): *Un temblor de olas rojas: Poesía y compromiso político en la España de 1936*, Renacimiento, Sevilla, pág. 85.

35.- Cit. en Trapiello, A., (1993), pág. 168.

36.- *Ibidem*, pág. 169.

37.- Elorza y Bizcarrondo (1999) *Opus cit.* pág. 487.

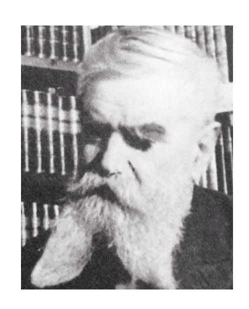
38.- López Cabello, Iván (2004): «La silenciada resistencia de José Bergamín», RHA, Vol. 2, nº 2, pág.58.

39.- Jaureguí, F. y Vega, P. (1983): *Crónica del antifranquismo 1962-1975,* Argos Vergara, Madrid, pág. 49.

40.- Bergamín, J. (2005): *El pasajero: Peregrino español en América (Méjico, 1943-1944)*. Ediciones do Castro, La Coruña, pág. 242.

41.- González Casanova, J. A. (1995): *Bergamín a vista de pájaro*, Turner, Madrid, pág. 194.

Apuntes Biográficos



Acevedo Isidoro (1867-1952)

Comenzó a trabajar como aprendiz de tipógrafo a los 13 años en Madrid. Sindicalista afiliado al PSOE fue encarcelado varias veces. En 1921, como delegado de la Federación Socialista Asturiana participó en el congreso socialista y junto a otros partidarios de la III Internacional fundó el Partido Comunista Español. Viajó a Rusia como representante del PCE en los congresos de la Komintern. Con la dictadura de Primo de Rivera volvió a la cárcel durante unos meses. Después de la Guerra Civil se exilió en Rusia. Allí, ocupó el cargo de presidente del Socorro Rojo Internacional hasta que murió en 1952.



Adame Manuel (1901-1945)

Agricultor jornalero, militó en la CNT, pero en 1927 abandonó el anarquismo e ingresó en el PCE, donde llegó a ser miembro del Buró Político y del Comité Central. Tras el IV Congreso del Partido en 1932 fue expulsado. Entonces se afilió a la UGT y al PSOE, llegando a dirigir la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT). Tras el golpe fascista (1936) pudo refugiarse en Barcelona. En 1939 marchó al exilio primero en Francia, y después en Méjico, donde fallecería. Fue buscado por la dictadura franquista por ser dirigente obrero destacado en Sevilla y ser uno de los pocos que había conseguido evitar la muerte.



Alberti Rafael (1902-1999)

Eminente poeta de la Generación del 27. En 1924, recibió el Premio Nacional de Poesía por *Marinero en tierra*. Durante la dictadura del general Primo de Rivera se afilia al PCE. En 1930 conoció a María Teresa León, con la que fundaría en 1933 la revista revolucionaria *Octubre*, y viajó a la URSS.

Miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, durante la guerra impulsó la revista *El Mono Azul*. Tras la derrota republicana, Alberti y María Teresa León marcharon al exilio. Alberti regresó a España en 1977 y ese año fue elegido diputado al Congreso en las listas del PCE, del que era miembro del CC. Había sido distinguido con el Premio Lenin de la Paz (1965).



Álvarez Santiago (1913-2002)

De origen campesino era segador cuando a los catorce años comenzó su concienciación política. Proclamada la Segunda República se afilió al Partido Comunista. En 1934 fue detenido por la intentona revolucionaria de octubre de ese año.

Durante la Guerra Civil ejerció como comisario político. Tras la guerra, después de pasar por varios países americanos, volvió clandestinamente a España en 1944, pero fue detenido a finales de agosto de 1945.

En 1954 fue indultado y expulsado hacia Cuba. En los años de la Transición siguió formando parte del Comité Central del PCE, y de la Secretaría del PC de Galicia.



Andrade Juan (1898-1981)

Comenzó su militancia en las Juventudes Socialistas. Participó en la fundación del PCE, siendo elegido miembro del Comité Ejecutivo y director de *El Comunista* y más tarde de *La Antorcha*.

En 1927 fue expulsado del PCE acusado de trotskista. Impulsor de la Izquierda Comunista de España en 1930, dirigiría su publicación *Comunismo*, de 1931 a 1934. Miembro del POUM y redactor de *La Batalla*.

Detenido en 1937 tras las Jornadas de Mayo, al final de la guerra civil se exilió en Francia y participó en la Resistencia. Durante el exilio organizaría un servicio de librería española en Francia. Regresó a España en 1978, falleciendo en Madrid.



Anguiano Daniel (1882-1963)

Ferroviario, ingresó en la UGT primero y en el PSOE en 1905. En la huelga general de 1917 fue detenido y condenado a cadena perpetua, pero tras ser elegido diputado en 1918, fue excarcelado.

Fue enviada por el PSOE a Rusia en 1920 para valorar la incorporación a la Komintern, presentando un informe favorable en el Congreso socialista de 1921. Anguiano participó en la creación del Partido Comunista Obrero Español, que confluiría poco después en el Partido Comunista de España.

Después de la Guerra Civil se exilió en Francia y terminó sus días en México.



Anguita González Julio (1941)

Hijo de militar se alejó de la tradición familiar al realizar estudios de Magisterio, ejerciendo como maestro 15 años. En 1973 ingresó en el PCE. Alcalde de Cordoba en dos ocasiones, en febrero de 1988 fue elegido Secretario General del PCE y en 1989 se puso al frente de Izquierda Unida, año en el que obtuvo escaño en el Congreso de los Diputados por Madrid.

Defendió la línea política de las «dos orillas» (basada en las diferencias entre, el PP y el PSOE, por una parte, e Izquierda Unida por otra) buscando el *sorpasso* (sobrepasar al PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda en España). Fue relevado como Secretario General del PCE por Francesc Frutos en 1998.

ANTÓN Francisco (1909-1976)



Ferroviario, ingresó en el PCE 1930. Durante la guerra, en 1937, fue nombrado comisario del Ejército del Centro. Se exilió en Francia, pero tras la firma del pacto germano-soviético, los partidos comunistas fueron ilegalizados y Antón fue detenido y enviado a un campo de concentración, de donde pudo salir gracias a las gestiones de las autoridades soviéticas, que lo trasladaron a la URSS

Tras la liberación de Francia volvió allí, dirigiendo el partido junto con Carrillo. Sin embargo, cayó en desgracia en los 50 y fue enviado a Polonia, donde tuvo que trabajar en una fábrica. Rehabilitado en 1957 mostró su apoyo a la Primavera de Praga.



ANTÓNOV-OVSÉYENKO Vladímir (1883-1939)



Prominente bolchevique, se lo recuerda como el dirigente del asalto al Palacio de Invierno durante la Revolución de Octubre.

Tras el comienzo de la Guerra Civil Española fue nombrado cónsul general soviético en Barcelona donde defendió la línea estaliniana frente a los anarquistas y el POUM, pero Stalin no le perdonaba su pasado trotskista.

Después del conflicto surgido entre el cónsul general y Juan Negrín, fue destituido en España y posteriormente arrestado en la URSS.

En 1938 condenado a muerte «por pertenecer a una organización terrorista trotskista y por espionaje» fue fusilado.

ARDIACA Pere (1909-1986)



Antiguo militante del BOC, fue uno de los fundadores del PSUC en 1936 formando parte de su CE y siendo director de *Treball*, el órgano del partido. Tras la guerra, en la crisis que en 1949 finalizó con la expulsión del PSUC de Joan Comorera, Ardiaca se alineó con Carrillo, y con Gregorio López Raimundo.

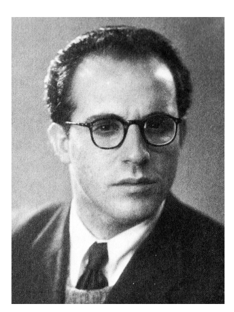
En 1962 fue detenido en Barcelona y condenado a 21 años de prisión, permaneciendo en la cárcel hasta 1971. Tras la muerte de Franco, Ardiaca fue el líder del sector «prosoviético» del PSUC, hasta que en 1982, ese sector dejó el PSUC y constituyó el Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC), del cual Ardiaca fue elegido presidente hasta su muerte, en 1986, en Moscú.

ARROYO Vicente (1887-1969)



Ebanista, se afilió a la Juventud Socialista Madrileña en 1907. Elegido secretario del Comité Nacional de JSE en 1912, ocupó dicho cargo hasta 1915. Participó en la fundación del Partido Comunista de España, siendo miembro de la dirección. De 1926 a 1928 fue director de *La Antorcha*. También fue el encargado de la edición española de *La Correspondencia Internacional* y redactor de *Mundo Obrero*.

Al término de la guerra civil se exilió en La Habana, colaborando en distintas publicaciones. En 1947 marchó a París como corresponsal del periódico cubano *Hoy*. Posteriormente se trasladó a Bucarest, donde falleció en 1969.





Azcárate Manuel (1916 -1998)

Hijo de diplomático, estudio Derecho en Madrid y Ciencias Políticas en Londres.

En 1934 se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas. Tras la guerra se exilió en París, donde trabajó en las redacciones de *Mundo Obrero* y *Nuestra Bandera*.

Desde 1960 fue miembro del CC del PCE. Fue responsable del trabajo en el ámbito intelectual y universitario, y responsable de política internacional.

Firme partidario del eurocomunismo, al frente del sector de los renovadores, se vio enfrentado al Secretario General, Santiago Carrillo, siendo expulsado del partido en 1982.



Balbontín José Antonio (1893-1977)

Hijo de un letrado del Consejo de Estado, estudió Derecho, y en 1917 ingresó en el Grupo de Estudiantes Socialistas. Una vez proclamada la República, fundó, con algunos amigos, el Partido Social Revolucionario.

Fue elegido diputado a Cortes Constituyentes. En 1933 fusionó su partido con el PCE, aunque en la primavera de 1934 lo abandonó.

Tras el estallido de la guerra volvió a ingresar en el Partido Comunista y entró a trabajar en *Mundo Obrero*, y *La Tierra*.

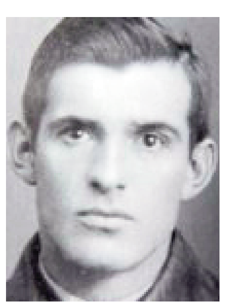
Al final de la guerra se exilió a Inglaterra donde rompió de nuevo con el PCE. Balbontín regresó a España a finales de 1970.



Ballesteros Jaime (1932-2015)

Miembro del Partido Comunista desde su época de estudiante de Derecho, fue detenido en varias ocasiones. Al obtener la libertad, marchó a Francia donde trabó una fuerte amistad con Carrillo. Desde 1965 formó parte del equipo dirigente del PCE en España con Armando López Salinas, Simón Sánchez Montero y Francisco Romero Marín. Durante la Transición, jugó un estrecho papel en la comunicación entre Adolfo Suárez, y el propio Carrillo a través de José Mario Armero.

En 1982 abandonó el PCE y pasó a formar parte del Partido Comunista de los Pueblos de España, formación escindida bajo la dirección de Ignacio Gallego.



Bamatter Sigi. (1892-1966)

Suizo-alemán se afilió al Partido Socialista Suizo, pero tras la Revolución de Octubre de 1917, se unió al movimiento comunista y en 1919 ayudó a fundar el KIM (Internacional Juvenil Comunista). Durante los años 20 desempeñó distintos cargos siempre vinculados a la Internacional Juvenil Comunista.

En 1932, la Internacional le encargó una misión en España y ayudó a establecer comunicación por radio entre el PCE y Moscú. En 1934 en Asturias conoció a su futura esposa, María Fernández. Posteriormente residió en Rusia y fue locutor en lengua alemana de radio Moscú. Murió en 1966 en la «Clínica para viejos bolcheviques».

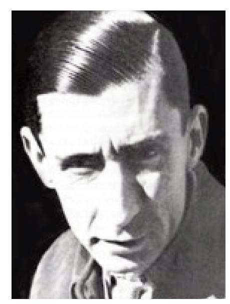


Bardem Juan Antonio (1922-2002)

Ingeniero agrónomo se dedicó al cine. Formó parte de la primera promoción del IIEC (Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas) que militaba clandestinamente en el PCE, por lo que Bardem tuvo numerosos problemas y detenciones.

Su filmografía fue siempre de denuncia, en ocasiones explícita como en su filn *La venganza* (1957), una mirada realista sobre las cuadrillas de segadores donde se introducía la consigna de «la reconciliación nacional» lanzada por el PCE.

En la Transición realizó *El puente* (1976) y *Siete días de enero* (1978), sobre la matanza de abogados laboralistas en Madrid.



Bergamín José (1895-1983)

Procedente de la alta burguesía y católico confeso, militó en el republicanismo desde su juventud. Escritor y pensador muy valorado se comprometió con la Alianza de Intelectuales Antifascistas y otras organizaciones afines al PCE.

Durante la guerra escribió en las revistas *El mono azul* y *Hora de España*, y en 1937 presidió en Valencia el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura.

En un azaroso exilio siempre apoyó las iniciativas del partido y las denuncias contra la represión franquista. Con la Transición mantuvo sus posturas republicanas, lo que le llevó a alejarse de la política seguida por el PCE en esa coyuntura.



Berzin Jānis (1889–1938)

Bolchevique de primera hora, participó activamente en la Revolución de Octubre, pero muy pronto se dedicó al trabajo en la Inteligencia Militar del Ejército Rojo, aunque también desempeñó labores diplomáticas.

Durante 1936 y 1937 fue consejero jefe militar de las tropas republicanas en la Guerra civil española bajo el pseudónimo Grishin, despachando agentes y saboteadores detrás de las líneas de Franco. En junio de 1937, volvió a la URSS como jefe de inteligencia militar. Pero en mayo de 1938 fue detenido durante la Gran Purga y ejecutado.



Bolívar Cayetano (1897-1939)

Estudió medicina y en 1924 se doctoró en Leipzig donde tomó contacto con las ideas comunistas. Al volver de Alemania se afilió al PCE. Su detención en 1930 será la primera de una larga lista, por eso en 1933, el PCE decidió presentarlo a las elecciones generales, con el objetivo de que adquiriese inmunidad parlamentaria y pudiese salir de la cárcel. Para ello se pactó una Candidatura de Frente Único Antifascista, y Bolívar fue elegido, siendo el primer diputado en Cortes perteneciente al PCE.

En las elecciones de 1936 Cayetano, ya dentro de las listas del Frente Popular volvió a ser elegido. En los últimos días de la guerra, fue detenido y fusilado el 4 de julio de 1939.





BORODIN Mijail (1884-1951)

Bolchevique de la primera hora fue un relevante agente de la Komintern con misiones muy importantes en distintas partes del mundo.

Su paso por España fue fugaz pero muy importante. Su labor más destacada se desarrolló en China. Negoció el Primer Frente Unido entre el Partido Nacionalista Chino de Sun Yat-sen y el Partido Comunista de China. Fue el responsable de la redacción de los estatutos del partido, que quedó organizado a imagen del comunista ruso.

Mantuvo astutamente el equilibrio entre los elementos de la clase media de los nacionalistas y los comunistas más radicales.



BRABO Pilar (1943-1993)

Estudiante de Físicas, en 1964 se afilió al PCE y a la Federación Universitaria Democrática Española. Expedientada dos años después, llegó a ser detenida hasta 14 veces.

Durante la Transición destacó su actividad en la Comunidad Valenciana, siendo elegida en dos ocasiones diputada por el PCE al Congreso. En 1978 ya era miembro del CC y del CE. Persona de confianza de Santiago Carrillo, desempeñó los cargos de secretaria de Relaciones entre el PCE y la Unión de Juventudes Comunistas y posteriormente de Prensa, Publicaciones y Propaganda. Como renovadora fue expulsada del PCE a finales de 1981, pasando a militar en el PSOE.



BULLEJOS José (1899-1975)

Cartero de profesión ingresó en el PCE y fue elegido presidente del Sindicato Minero de Vizcaya. En 1925 fue elegido Secretario General del PCE. Fue fundador también del histórico periódico del PCE *Mundo Obrero*, y de la revista *Bolchevismo*.

Tras el golpe de estado del general Sanjurjo, en agosto de 1932, Bullejos apoyó la legalidad republicana, lo que le llevó a ser llamado a Moscú en septiembre de ese mismo año y destituido.

Bullejos fue sustituido en la secretaría general por José Díaz. Tras su expulsión, militó en las Juventudes Socialistas y en la UGT. Tras la guerra acabó exiliándose en Méjico.



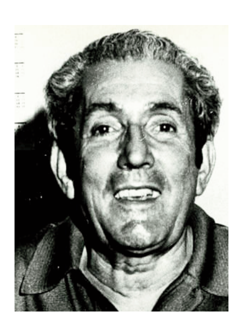
CABO Giorla Luis (1903-1975)

Obrero de la construcción, estudió en la escuela leninista. Miembro suplente del CC en 1937, su influencia no dejó de crecer y llegó a sustituir a Pepe Díaz como coordinador del BP.

Durante la guerra fue también concejal del Ayuntamiento de Madrid y gobernador de Murcia.

Tras la caída de Cataluña pasó a Francia, ocupándose de organización y ayuda a los evacuados. Más tarde fue enviado por el Partido a América donde se hará cargo de un centro de trabajo hacia España montado por el PCE en Buenos Aires. Regresó a Francia tras su liberación al final de la guerra, participando desde diversos puestos en la actividad del PCE y de la UGT.

Camacho Marcelino (1918-2010)



Se afilió al PCE en 1935 y posteriormente a la UGT. Tras la guerra fue apresado aunque pudo escapar y exiliarse en Orán. En 1957 regresó a España y trabajó como metalúrgico en Perkins Hispania. Fue impulsor de Comisiones Obreras (CCOO), infiltrado en los sindicatos verticales del régimen franquista.

Encarcelado en 1967, pasó 9 años en la cárcel de Carabanchel. También fue encartado en el famoso «Proceso 1001», a finales de 1973. En 1976 fue elegido Secretario General de CCOO. En ese momento ya era miembro del CC del PCE. Diputado en dos legislaturas dejó el escaño por su desacuerdo con las normas laborales que aprobó el Parlamento con el apoyo del PCE.

Carrillo Santiago (1915-2012)



Hijo de un destacado dirigente del PSOE, desde muy joven se dedicó al periodismo y la política. En 1934, fue elegido Secretario General de las Juventudes Socialistas y trabajó para fusionarlas con las Juventudes Comunistas, unidad que dará origen a las JSU.

Con la guerra Santiago Carrillo se afilió al PCE y fue nombrado Consejero de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid. Ya en exilio ocupó diversos cargos de responsabilidad y en el VI Congreso del PCE accedió a la Secretaría General.

Durante la Transición Carrillo negoció con Suárez la legalización del PCE. Aferrado al poder vivió toda la crisis de la organización y terminó siendo expulsado del partido.

Castro Delgado Enrique (1907-1965)



Metalúrgico se afilió al PCE en 1925. Miembro del CC, fue uno de líderes de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC). También trabajó como redactor de *Mundo Obrero.* Durante los primeros días de la guerra, participó en la creación del Quinto Regimiento, del que fue su primer comandante en jefe. Director general de Reforma Agraria ocupó diversos cargos en el Comisariado político del Ejército Popular.

Al final de la contienda marchó al exilio, instalándose en la Unión Soviética. En 1944, enfrentado con Ibárruri, fue expulsado del partido y se convirtió en un ferviente anticomunista publicando varios libros de memorias.

Cazcarra Vicente (1935–1998)



Marino mercante, fue miembro del CC del PCE. Responsable del comité regional del partido en Aragón desde octubre de 1967 hasta mediados de 1976, fue elegido Secretario General en la Conferencia regional de diciembre de 1976, cargo que desempeñó hasta su dimisión en 1979.

Redactor del «Manifiesto para Aragón» (1972) y uno de los artífices de la Junta Democrática, fue vicepresidente de la Fundación Dolores Ibárruri.

Fue así mismo el ponente oficial de la polémica VII Tesis sobre el partido en el X Congreso del PCE que precipitó la crisis con el sector de los llamados «renovadores».





CAZORLA José (1906-1940)

Afiliado a las juventudes socialistas en 1932, en 1936 formó parte del comité de unificación con las juventudes comunistas que dio lugar Juventudes Socialistas Unificadas. Ingresó en el PCE en noviembre de 1936. Miembro del CC y delegado de Orden Público, fue también gobernador civil de Albacete donde fue acusado de haber organizado checas al margen del Tribunal Popular.

Tras el final de la guerra Cazorla fue arrestado pero logró huir e intentó crear una incipiente estructura del partido en el Madrid franquista. Detenido en septiembre de 1939, fue condenado a muerte y fusilado en las tapias del cementerio del Este en 1940.



CIMORRA Eusebio (1908-2007)

De familia aristocrática era funcionario de Hacienda y sus contactos con Jesús Hernández le llevaron al PCE. Durante la Guerra Civil dirigió *Mundo Obrero*, y fue comisario político del Grupo de Ejércitos Republicanos del Frente Centro-Sur, hasta un año antes de acabar la contienda.

Exiliado en la URSS trabajó como director de prensa de José Díaz, y desde 1939 hasta 1977 se hizo cargo de las emisiones de Radio Moscú en castellano para España, donde se podía captar la señal durante la dictadura franquista.

En 1977 regresó a Madrid, donde colaboró con la revista *La Calle*.



CLAUDÍN Fernando (1913-1990)

Siendo estudiante se afilió en 1933 a las Juventudes Comunistas. Intervino activamente en el proceso de unificación entre éstas y las Juventudes Socialistas.

Tras el VI Congreso del PCE, celebrado en 1960, Claudín es elegido miembro del Comité Central y de sus órganos de dirección: el Comité Ejecutivo y el Secretariado. En 1964 se enfrenta con la dirección del partido al sostener que el régimen franquista puede evolucionar a una democracia liberal homologable a las del resto de Europa. En noviembre de ese año fue expulsado del Partido. Tras la muerte de Franco se mostró muy crítico con el eurocomunismo y en 1988 se afilió al PSOE.



CODOVILLA Victorio (1894-1970)

Nacido en Italia emigró a la Argentina siendo ya militante socialista. Ingresó en el PC argentino y en 1924 ya era miembro de la Komintern. Jugó un importante papel en el comunismo latinoamericano, defendiendo siempre las tesis oficialistas.

En 1932 fue enviado a España, participando en la «caída» de Bullejos. Codovilla permaneció en suelo español como enlace de la Komintern hasta iniciada la guerra civil, pero fue desplazado gradualmente por el húngaro Erno Gerö y el italiano Togliatti, siendo llamado a trabajar en Moscú desde septiembre de 1937. En 1969, poco antes de morir, recibió la Orden de la Revolución de Octubre

Comorera Joan (1894-1958)



Proveniente del republicanismo catalanista en 1931 se unió a la Unió Socialista de Catalunya. Iniciada la Guerra Civil integró la Unió Socialista en el PSUC del que fue primer Secretario General.

Perdida la guerra, pasó a Francia, y en mayo de 1939 a Moscú. Al año siguiente colaboró en México con el gobierno de la República en el exilio y en 1945 volvió a Francia.

Enfrentado a la dirección del Partido Comunista de España, fue acusado de «titista» y expulsado del PSUC en 1949.

En 1954 fue detenido por el franquismo y condenado a 30 años de prisión en 1957. Traslado al penal de Burgos, falleció poco después.

Corredor Serrano Francisco (1917-1950)



Estudiante de medicina era uno de los responsables de la FUE en Madrid. Miembro del PCE, durante la guerra fue comandante de Información.

Capturado tras la derrota se escapó de prisión en 1942 y se unió con Florián García Velasco alias «Grande» al movimiento guerrillero donde fue conocido como «Pepito el gafas».

En 1946 participó en la formación de la Agrupación Guerrillera de Levante (AGL) siendo uno de sus dirigentes, Jefe del 17 sector. Fue también jefe de la Escuela de Capacitación Guerrillera. Posiblemente fue ejecutado por órdenes de la dirección dadas desde Francia.

Curiel Enrique (1947-2011)



Estudiante de Ciencias Políticas y Delegado en el Sindicato Democrático de Estudiantes de Madrid, ingresó en el PCE en 1968 y junto con Pilar Bravo formó parte de la dirección del Comité Universitario del partido.

Fue detenido en varias ocasiones y llegó a convertirse en el virtual lugarteniente de Santiago Carrillo. Fue herido de bala en una manifestación en diciembre de 1976, exigiendo la liberación del líder comunista.

Llegaría a la vicesecretaría general del PCE durante el mandato de Gerardo Iglesias, con el que rompería relaciones en 1988 por incompatibilidad política. En 1990 ingresaría en el PSOE.

De Pedro Carmen (¿-¿)



Cuando los principales dirigentes del PCE abandonaron Francia, se asignó a esta taquígrafa de origen navarro la delegación del CC del PCE en el vecino país. Era pareja de Jesús Monzón y juntos comenzaron a controlar y organizar la militancia. Decidieron organizar la lucha armada de los españoles contra los nazis, iniciando la política de «Unión Nacional».

La decisión de entrar militarmente en territorio español (Reconquista de España) correspondió a Monzón, siendo apoyado por las delegaciones del CC, en Francia y en el interior.

Carmen posteriormente se casó con Agustín Zoroa, responsable del PCE y de la organización guerrillera en España, militando en la Unión de Mujeres Antifascistas en Francia.





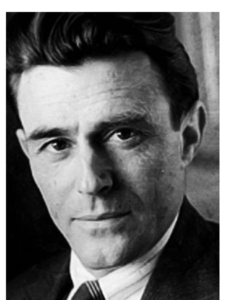
Dengel Philipp (1888-1948)

Profesor de filosofía quedó marcado por su experiencia en la Primera Guerra Mundial.

Ingresó en Partido Comunista alemán (KPD) en 1919, y fue editor del periódico *Bandera Roja*. Participó en el levantamiento Hamburgo en 1923.

En la VI Congreso de la Komintern en 1928 fue elegido miembro del Comité Ejecutivo y del Presidium.

En 1931 fue enviado a España durante un año y luego a América Latina. En 1936 regresó a Moscú, donde enseñó en la Escuela Leninista. Escribió para la prensa del Komintern y hasta junio de 1938 actuó como representante del KPD ante el ECIC.



Díaz Ramos José (1895-1942)

Panadero militante de la CNT. En 1925 fue detenido por la dictadura de Primo. En 1927 ingresó en el PCE. En el IV Congreso de 1932, fue elegido miembro del CC y a los pocos meses fue nombrado Secretario General.

Fiel a los dictados de la Komintern, fue uno de los españoles que asistió al VII Congreso de la IC. En las elecciones de febrero de 1936, salió elegido diputado por Madrid. Durante la guerra centró toda su actividad en el PCE, pero a partir de 1937, el deterioro de su salud hizo que su figura quedara relegada. Se trasladó a la URSS para ser operado y ya no regresó a España. Se suicidio al no poder aguantar el dolor de su enfermedad.

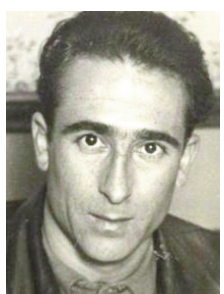


Díaz-Cardiel Víctor (1935)

Obrero metalúrgico, ingresó en el PCE en 1956. Fue detenido y encarcelado por el franquismo y pasó 9 años en prisión, de 1965 a 1974. Militó en Comisiones Obreras actuando como enlace entre unas comisiones obreras en embrión y la dirección del PCE.

Formó parte del CC y del CE del partido, y en las primeras elecciones generales tras la dictadura, fue candidato por Madrid al Congreso de los Diputados.

Así mismo fue secretario general del Partido Comunista de Madrid durante la Transición y director de la «Fiesta del PCE». Crítico con los pactos de la Moncloa, nunca se apartó de la línea oficial.



Diéguez Isidoro (1909-1942)

Albañil, ingresó en el PCE en 1932, siendo nombrado delegado sindical del Radio Sur. Consejero suplente de la Junta de Defensa de Madrid y responsable del Comité Provincial de Madrid durante la guerra, fue elegido miembro del CC en 1937 y del Buró Político en 1938.

Exiliado en Méjico, en la primavera de 1941 la dirección del partido le encargó la reconstrucción interna de la formación, desembarcando en Lisboa a mediados de junio. Junto con otros camaradas fue detenido por la policía salazarista y entregado a la española. Fue fusilado el 21 de enero de 1942.

Dimitrov Gueorgi (1882-1949)



En 1903 se afilió al Partido Social-Demócrata de los Trabajadores de Bulgaria. Militante comunista desde su juventud, fue uno de los dirigentes de la fallida insurrección revolucionaria en Bulgaria de 1923. Se exilió de su país y trabajó para la Komintern en varios países, siendo detenido en 1933 en Alemania tras la toma del poder por parte de los nazis al ser acusado de la incendio del Reichstag.

En 1934 fue elegido secretario general de la Komintern y, como tal, presidió su VII Congreso en 1935, en el que se aprobó la táctica de los frentes populares, llevada a cabo en países como Chile, Francia y España.

Doriot Jacques (1898-1945)



Obrero metalúrgico, fue secretario general de las Juventudes Comunistas de Francia. Activista contra la guerra del Rif, cuestión que impulsó ante la dirección del PCE, terminó valiéndole la cárcel en Francia de la que salió gracias a ser elegido diputado por Saint-Denis en 1924, ciudad que le votó alcalde en 1930.

De fuerte personalidad y gran ambición, sus desobediencias y sus pretensiones a ocupar la dirección del PCF no fueron toleradas por la Komintern. Expulsado del partido en 1934, fundó el Parti Populaire Français, con el apoyo material de una parte de la patronal. En poco tiempo la fascistización de la nueva formación se acentuó claramente, hasta llegar a colaborar con los nazis.

Duclos Jacques (1896-1975)



Se unió al PCF poco después de su fundación. Estudió en la escuela central del partido en Bobigny. En junio de 1926, fue elegido miembro del CC y en 1931 se convirtió en miembro de su Politburó.

En 1928 viajó a la URSS para asistir al IV Congreso de la Profintern y más tarde trabajó para la Oficina de Europa Occidental en Berlín. A principios de 1930 fue enviado a España. En mayo de 1931 presentó un extenso informe sobre la situación española y en 1932 regresó a Berlín colaborando con Dimitrov. Asistió VII Congreso de la Internacional Comunista en 1935 y fue elegido miembro de su Ejecutiva.

Fernández **Checa** Pedro (1910-1942)



Delineante de profesión ingresó en el PCE poco antes de la proclamación de la República. Muy trabajador y muy tímido, siempre tuvo reputación de persona honesta, siendo apreciado por toda la militancia.

Entró en el CC en 1932 designado por la Komintern y en 1935 accedió a la secretaría de organización. Durante la guerra fue el responsable del aparato secreto o ilegal del partido. Organizó el XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero.

Tras el golpe de Casado fue de los últimos dirigentes en abandonar España, instlándose en Méjico y dedicándose a la organización del partido. Enfermo de tuberculosis murió en 1942.



Fernández Inguanzo, Horacio (1911-1996)

Al estallar la Guerra Civil entró en las milicias del PCE. Hecho prisionero fue condenado a muerte aunque logró sobrevivir.

Detenido nuevamente en 1945 por sus actividades en contra del régimen franquista fue condenado a 14 años de prisión, aunque saldría en 1954.

En 1958 pasó de nuevo a la clandestinidad refugiándose en Francia y desarrollando su labor sobre todo en Asturias.

Muy vinculado a las nacientes CCOO fue capturado en Mieres en 1969 y permaneció encarcelado hasta que, tras la muerte de Franco, pudo acogerse a la amnistía que decretó Adolfo Suárez.



Frutos Francesc (1939)

De origen campesino, en 1963 ingresó en el PSUC.

En las primeras elecciones democráticas, entró en el Parlament como diputado y en 1981 fue durante un breve período secretario general del PSUC, apoyado por los llamados «leninistas» y los «prosoviéticos». En diciembre de 1998, sucedió a Anguita en la secretaría general del PCE y fue designado por Izquierda Unida para ocupar la candidatura a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 2000, firmando un pacto con el PSOE, lo que supuso un grave descalabro electoral para IU.

Elegido de nuevo secretario general del PCE ocupó el cargo hasta 2008 cuando fue sustituido por Jose Luis Centella.



Gallego Ignacio (1914-1990)

Trabajó como porquero y como mecánico. Ingresó en la JSU en 1936 y en 1937 era uno de los secretarios de su Comisión Ejecutiva.

Fue soldado del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Expulsado de Francia en 1950, permaneció en París clandestinamente hasta 1976, viajando a España durante todo el periodo. Fue elegido miembro del CC y del CE del PCE.

En la Transición fue la cabeza visible del sector prosoviético. En enero de 1984 fundó el Partido Comunista de los Pueblos de España, del que fue elegido secretario general. En 1989 regresó al PCE junto a gran parte de los dirigentes y militantes del PCPE.



García Cortés, Mariano (1878-1948)

Abogado y periodista, fue presidente de las Juventudes Socialistas de 1910 a 1912.

Concejal del ayuntamiento de Madrid de 1911 a 1915, y partidario de la Tercera Internacional, firmó el manifiesto «tercerista» en 1921, siendo fundador del PCE, al que representó en el III Congreso de la Komintern.

Durante la dictadura de Primo de Rivera renegó del comunismo y sirvió al «romanonismo».

Tras la guerra fue un conocido periodista del franquismo trabajando en *El Alcázar*, desde 1941.

GARCÍA CRISTINO (1913-1946)



En 1936 era fogonero en un buque en el que la tripulación se amotinó a favor de la República. Alcanzó el grado de teniente en el XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero. En 1939 se exilió a Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en la Resistencia siendo nombrado Héroe Nacional de Francia.

En 1944 se integró dentro de los guerrilleros españoles cruzando el Pirineo. En la primavera de 1945, organizó la Agrupación Guerrillera de la Zona Centro. Tras varios enfrentamientos fue apresado en octubre de ese mismo año y condenado a muerte. Francia le concedió la Cruz de Guerra con estrella de plata a título póstumo.

GARCÍA LAVID Francisco (1901-1939) **«LACROIX»**



Obrero de la construcción fue un activo militante vizcaino miembro del PCE. Perseguido durante la dictadura de Primo de Rivera, se exilió en la URSS. En 1930 en la ciudad de Lieja, García Lavid -con el seudónimo Henri Lacroix- impulsó la fundación de la agrupación trotskista Oposición Comunista de España y en 1932, trás su II Conferencia Nacional, la OCE ya como Izquierda Comunista de España lo nombró Secretario General. Pero en 1933, de regreso a España, Lacroix fue expulsado acusado de malversación de fondos.

Hacia el final de la guerra, fue apresado y asesinado por elementos de la Brigada Líster del PCE.

GARCÍA QUEJIDO Antonio (1856-1927)



Tipografo fundador del PSOE y de la UGT, de la que fue elegido Presidente. En 1901 editó el primer tomo de *El Capital* y en 1912 fue designado director de *El Socialista*, diario oficial del PSOE.

Al triunfar la revolución en la Rusia de 1917, es uno de los dirigentes socialistas partidarios del ingreso del PSOE en la III Internacional, a favor de lo que luchará en el seno del Partido hasta 1921, cuando se produzca la escisión que dará lugar al Partido Comunista Obrero español (PCOE), del que fue fundador; y posteriormente al PCE, del que fue elegido secretario general del mismo en su I Congreso celebrado en 1922.

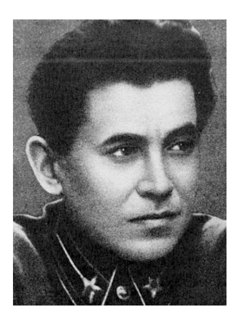
GARCÍA SALVE Francisco (1930-2016)



Sacerdote jesuita, en 1967 se convirtió en «cura obrero» de la construcción y activo militante de CC OO.

En 1972 fue detenido junto con otros sindicalistas y encartado en el llamado «Proceso 1001». Pasó tres años y medio en prisión de la que salió tras la muerte de Franco. Dejó la orden y el sacerdocio, y contrajo matrimonio en 1976. Ejerció como abogado laboralista.

Conocido militante del PCE perteneció a su CC, pero fue expulsado del partido por prosoviético en vísperas de su X Congreso. Participó en la fundación del Partido Comunista de los Pueblos de España formando parte de su CC.





GERÖ Ernst (1898-1980)

Medico húngaro, dirigente de las Juventudes Socialistas en su país desde 1919 y miembro del PCUS desde 1925. Trabajó para la Komintern en Francia, y desde 1932 en España con el seudónimo de Pedro, contribuyendo a la fundación del PSUC en Cataluña.

En las Jornadas de mayo de 1937 actuó activamente en la represión contra el POUM y la CNT. Después de la guerra española, se convirtió en consejero de Manuilsky. Tras la Segunda Guerra Mundial regresó a Hungría con las tropas soviéticas y formó parte del gobierno de Rákosi hasta que con la Revolución húngara de 1956 fue destituido, refugiándose en la URSS.



GÓMEZ García, Julián «**GORKIN**» (1901-1987)

Militante del PCE desde 1921. Un año más tarde, buscado por delitos de antimilitarismo, huyó a París. Activista de la Internacional fue simpatizante de la izquierda comunista, identificada con Trotsky, rompió relaciones con la Komintern en 1929.

A su regreso a España militó en el BOC y posteriormente en el POUM. Director de *La Batalla*, tras los sucesos de mayo de 1937 fue juzgado y condenado como dirigente del POUM.

Implicado desde un principio en la denuncia del estalinismo, acusó a los soviéticos del asesinato de Trotsky. A partir de 1953 participó en el Congreso por la Libertad de la Cultura financiado por la CIA.



GÓMEZ GAYOSO, José (1909-1948)

Maestro de escuela, durante la República residió en Vigo, ciudad en la que era secretario general del PCE. Durante la guerra combatió en distintos frentes contra los sublevados y fue comisario político de varias unidades.

Tras un exilio americano, en 1944 penetró en España con instrucciones de organizar la guerrilla en Galicia junto a Antonio Seoane. Lograron componer una unidad especialmente activa hasta finales de 1947, pero un año después fueron detenidos gracias a la delación de un desertor, tras un tiroteo en el que Gayoso resultó gravemente herido. Fue ejecutado a garrote vil en La Coruña.



GONZÁLEZ Polo, Virginia (1873-1923)

Trabajó desde niña y en 1899 se afilió a la UGT, representando en 1905 a los trabajadores del calzado en el VIII Congreso del sindicato. En 1910 ingresó en la Agrupación Femenina Socialista de Madrid y cinco años después pasó a formar parte del Comité Nacional del PSOE. Durante la huelga general de 1917 formó parte del Comité de Huelga.

En 1921 participó en la fundación del Partido Comunista Obrero Español. En el I Congreso del PCE, celebrado en marzo de 1922, fue elegida secretaria femenina del Comité Central. Su hijo, César Rodríguez González, llegaría a ser secretario general del partido un año después.

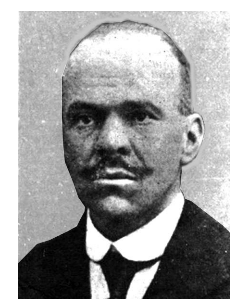


González Valentín (1904-1983) **«El Campesino»**

Desde niño trabajó como jornalero. De adolescente protagonizó diversos enfrentamientos con la Guardia Civil, siendo encarcelado. Destinado al ejército de Marruecos, se incorporó a la Legión. Hacia 1930 dejó la CNT e ingresó en el PCE.

Durante la guerra luchó en el Quinto Regimiento, y comandó distintas unidades donde se forjó una leyenda en torno a su persona, pero su actuación en Teruel fue desastrosa.

Se exilió en la URSS de donde intentó huir siendo internado en el campo de trabajo de Vorkuta. Finalmente logró escapar de la URSS en 1949 a través de la frontera iraní, viviendo en el exilio en Francia, donde escribió un alegato anticomunista.



Graziadei, Antonio (1872-1953)

Uno de los cofundadores del Partido Comunista Italiano y miembro del CC de 1923 a 1924. Comisionado por la Komintern para ayudar en España a la fusión del PCE y del PCOE.

Fue Profesor de Economía Política en las Universidades de Cagliari y Parma y miembro del Parlamento italiano de 1910 a 1926. En 1928 fue expulsado del PCI por «revisionista» y se embarcó en un exilio autoimpuesto a Francia para escapar del fascismo. Después de la Segunda Guerra Mundial se incorporó de nuevo al PCI, y comenzó su actividad docente en la Universidad de Roma, siendo considerado el economista más brillante del marxismo italiano.



Grieco, Ruggero (1893-1955)

Agrónomo afiliado al Partido Socialista Italiano, participó en la fundación del PCI y en enero de 1921, fue elegido para su CC. En 1923 fue arrestado por las autoridades fascistas, pero fue puesto en libertad en 1924; también ese año realizó su primer viaje a la URSS para asistir al V Congreso de la Internacional.

A finales de 1926, cuando fueron arrestados Bordiga y Gramsci, escapó a Suiza,

Como representante permanente del PCI en el Presidium de la Komintern, entre 1927 y 1937 hizo numerosos viajes a Europa Occidental y una de sus misiones le llevó a España. En 1935 fue delegado VII Congreso de la Internacional.



Grigulevich, Iosif (1913-1988)

A los 13 años se afilió a la Juventud Comunista lituana. En 1932 fue arrestado y pasó más de un año en prisión, antes de ser deportado, estableciéndose en París.

Con los alias de Artur, Juzick, José Escoy y Teodoro B. Castro, trabajó para NKVD. En septiembre de 1936 llegó a España, con el nombre de José Ocampo. Participó en el asesinato de Andreu Nin y en la operación organizada para eliminar a Trotsky. En 1952 fue admitido como miembro del PCUS y preparó un atentado contra Tito que no llevó acabo. Refugiado en la URSS terminó su vida como académico especialista en temas religiosos y de América latina.



Grimau García, Julián (1911-1963)

Militaba en Izquierda Republicana pero al estallar la guerra, ingresó en el PCE. En Barcelona, se dedicó a labores policiales. Al ser derrotada la República, se exilió en América Latina, estableciéndose posteriormente en Francia. En 1954 fue elegido miembro del CC. A partir de 1959 sustituyó a Simón Sánchez Montero, que acababa de ser detenido, en la dirección del Partido «en el interior», desarrollando su labor clandestinamente durante varios años. Compartía esa responsabilidad con Jorge Semprun y con Romero Marín.

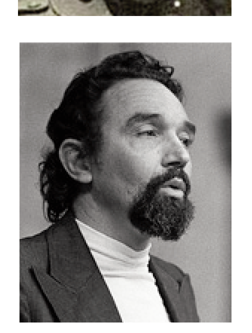
Su actividad le hizo ser una de las personas más buscadas. Tras su detención, fue condenado en un juicio sumarísimo y fusilado.



Guilloto León Juan (1906-1969) «**Modesto**»

Aserrador de profesión, se afiliándose al PCE en 1930. Soldado en África adquirió sus primeros conocimientos militares. Con la República, viajó a la URSS para recibir formación militar. A partir 1934 tomó parte en la organización de las MAOC.

En la guerra participó en la creación del Quinto Regimiento y comandó distintas unidades participando en la defensa de Madrid, y en distintas batallas siendo ascendido a general. Partió al exilio en la URSS, allí estuvo durante algunos años destinado en la Academia Frunze, ampliando sus estudios militares y de Estado Mayor. Tiempo después se retiró a Praga.



Gutiérrez Díaz, Antoni (1929-2006)

Médico pediatra, su actividad política se inició de estudiante. Detenido por primera vez en 1953, se afilió al PSUC en 1959. Fue detenido de nuevo y condenado a ocho años de cárcel en 1962. Entró en la dirección del PSUC en 1967.

Tras la muerte de Franco, fue elegido secretario general de los comunistas catalanes, cargo en el que sustituyó a Gregorio López Raimundo.

Partidario del eurocomunismo, fue relegado de la secretaria general por la línea prosoviética en el V Congreso del PSUC en 1981. La recuperaría un año después, ejerciéndola hasta 1986.



Hernández Tomás, Jesús (1907-1971)

Con catorce años participó en la fundación del PCE en Vizcaya. En 1922 era miembro de la escolta de Óscar Pérez Solís. En 1923 fue detenido y pasó cinco años en prisión. En 1931 viajó a la URSS donde se formó en la Escuela Lenin de Moscú.

En 1932 se convirtió en miembro del Politburó como responsable del agitprop. Editor de *Mundo Obrero*, durante la guerra civil ocupó la cartera de Educación en el gobierno de Largo Caballero. Terminada la guerra aspiró a la secretaría general del partido enfrentándose a Dolores Ibarruri. En 1944 fue expulsado del PCE. Sin renunciar a sus ideas colaboró con el comunismo yugoeslavo.

HUMBERT-DROZ, Jules (1891-1971)

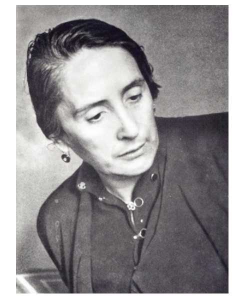


Pastor protestante suizo, encarcelado por pacifista, fundó el Partido Comunista Suizo en marzo de 1921. Secretario de la Komintern, se encargó de los países latinos de la Europa Occidental. Frecuentó a Lenin, aunque negaba la existencia del marxismo-leninismo.

Tras su estancia en España en 1931, fue relevado de sus funciones en la Internacional por bujarinismo, pero fue rehabilitado con la estrategia del frente popular en 1935.

Encarcelado en Suiza bajo la acusación de haber reclutado voluntarios para las Brigadas Internacionales, de 1946 a 1959, fue secretario del Partido Comunista Suizo.

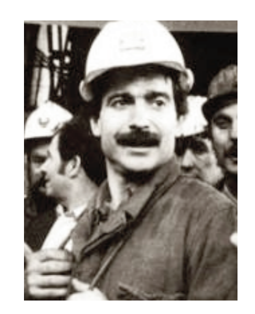
IBÁRRURI, Dolores «**PASIONARIA**» (1895-1989)



Participó con su marido, vinculado al PSOE, en la huelga general de 1917 y lo acompañó en la fundación del Partido Comunista Español, entrando en el Comité Provincial de Vizcaya. En 1918, utilizó por primera vez el seudónimo Pasionaria, siendo detenida en numerosas ocasiones. En 1930 era miembro del CC. En 1931 se trasladó a Madrid para trabajar en *Mundo Obrero*.

En febrero de 1936 fue elegida diputada por Asturias. Secretaria general del PCE en 1942 vivió exiliada en la URSS. En 1960 presentó su dimisión, para ocupar el cargo de presidenta del PCE.

IGLESIAS Gerardo (1945)



Minero, comenzó a militar en el PCE en 1961. Participó en la organización de CC OO y fue encarcelado repetidas veces durante la dictadura franquista. La primera con motivo de la gran huelga minera en Asturias en 1962. En 1967 fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión.

En 1973 fue elegido miembro del CC. Presidió el X Congreso del PCE, defendiendo las tesis carrillistas. En 1982, tras la dimisión de Santiago Carrillo, fue elegido secretario general del PCE. En 1986 participó en la creación de Izquierda Unida de la que fue elegido Coordinador General. En 1988, renunció a todos sus cargos y se reincorporó a su antiguo puesto en la mina.

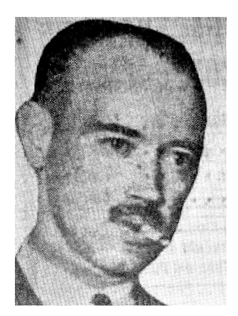
KOLTSOV Mijaíl (1898-1940)



Bolchevique desde 1918, se convirtió en una figura clave de la élite intelectual soviética y posiblemente en el periodista más famoso de la URSS, escribiendo regularmente en *Pravda*.

Como corresponsal viajó a España en dos ocasiones, en 1931 y para cubrir la Guerra Civil. Considerado el hombre de Stalin en Madrid, describió sus experiencias en el libro *Diario de la guerra española*, publicado en ruso en 1938 con gran éxito. Pero en noviembre de 1937 fue llamado de regreso a la URSS y detenido. Acusado de anti-sovietismo fue incluido en una lista de 346 «enemigos del pueblo», convirtiéndose en una víctima más del terror estalinista.





Lamoneda Fernández, Ramón (1892-1971)

Tipógrafo afiliado a las Juventudes Socialistas y a la UGT pertenecía a la facción «tercerista» partidaria de la adhesión a la Internacional Comunista. Fundador del diario *Nuestra Palabra*, en 1921 participó en la fundación del PCOE, siendo elegido miembro de su CC, cargó que revalidó en el I Congreso del PCE en 1922, siendo designado candidato por Madrid para las elecciones generales de 1923.

Presidente de la Federación Gráfica Española de la UGT, en el II Congreso del PCE fue nombrado secretario sindical. Corrector en el diario *El Sol* de Madrid, durante la República volvió al PSOE integrándose en la corriente caballerista del partido.



Landy, Adam (Adam Witkowsski) (1891-1937)

Maestro polaco, miembro de la corriente de izquierdas del Partido Socialista, desde 1921 militó en el Partido de los Trabajadores de Polonia (comunista) y fue representante de esa formación en la Komintern desde 1927.

Activista de la Profintern, en varios países europeos entre 1925 y 1932, lo que le llevó a intervenir en España. El Secretariado de la Profintern le designó Jefe de su Secretariado europeo en 1928, y participó en la reunión del Buró del Secretariado Latinoamericano en 1930.

En 1937 fue detenido en la URSS convirtiéndose en víctima del terror estalinista.



Larrañaga, Jesús (1901-1942)

Militante del PNV en su juventud, abandonó el nacionalismo para ingresar en el PCE. Miembro de la dirección en 1935 fue uno de los impulsores del Partido Comunista de Euzkadi (PCE-EPK), junto con Ibarruri y Astigarrabía. Durante la Guerra Civil fue nombrado Comisario de Guerra en Guipuzcua

Al finalizar la guerra se exilió, pero en 1941, la dirección decidió enviarlo a España para reconstruir el PCE. Tras viajar clandestinamente en un barco portugués, fue detenido por la policía lusa en Lisboa, siendo entregado a las autoridades franquistas. Fue fusilado junto a otros miembros de la dirección del PCE.

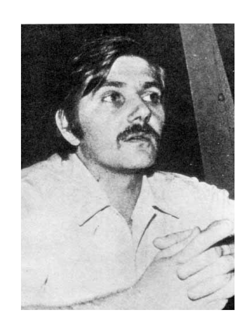


León Trilla, Gabriel (1899-1945)

Estudió Filosofía y Letras y en 1918 ingresó PSOE, aunque decidió apoyar la Tercera Internacional y en 1920 participó en la fundación del Partido Comunista Español.

En 1921 se exilió en París para evitar ser enviado a Marruecos. Cuando su cuñado Bullejos fue nombrado Secretario General del PCE en 1925 él ocupó la secretaría de agitprop, pero fue «purgado» en 1932, junto con Bullejos, Adame y Vega.

Al comenzar la guerra fue readmitido en el PCE, y ya en el exilio francés, colaboró con Monzón en la reorganización del partido en el interior. Pero tras el fracaso de la invasión del valle de Arán volvió a caer en desgracia siendo asesinado por órdenes de la dirección del partido.



Lertxundi Roberto (1948)

Médico de profesión inició su militancia política en ETA en 1968, pero en 1972 se afilió al Partido Komunista de Euzkadi (PCE-EPK).

En 1974 accedió al CC y en 1977 sustituyó a Ramón Ormazabal como secretario general del partido, con el apoyo de Santiago Carrillo.

En las elecciones al Parlamento Vasco de 1980 fue el único parlamentario del PCE-EPK y al año siguiente, tras la celebración del IV Congreso en que el fue reelegido secretario general, emprendió un proceso de convergencia con Euskadiko Ezkerra lo que supuso su expulsión del PCE en noviembre de 1981.



Líster, Enrique (1907-1994)

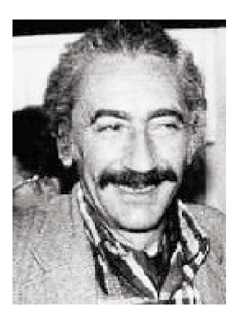
Trabajó como cantero y en 1928 ingresó en el PCE. En 1932 marchó a la URSS, donde Estudió en la Escuela Leninista y en la academia militar Frunze. Cuando estalló la Guerra Civil, era instructor de las MAOC y se convirtió en uno de sus principales organizadores del Quinto Regimiento. Más tarde fue nombrado jefe de la 1ª Brigada Mixta y, posteriormente, de la 11ª División. Tras la guerra se exilió en Moscú y participó en la Segunda Guerra Mundial. En 1945 marchó a Francia donde permaneció hasta 1951. En 1970 fue expulsado del PCE por sus diferencias con el sector carrillista, y tres años más tarde fundó el Partido Comunista Obrero Español.



López Raimundo, Gregorio (1914-2007)

Sastre de profesión, en 1934 inició su militancia política en las JS. Al comenzar la Guerra, se afilió al PSUC y fue comisario político en el frente de Aragón, exiliándose al finalizar el conflicto. En 1947 volvió clandestinamente a Cataluña hasta que fue detenido tras la huelga de tranvías en Barcelona. En 1956 fue designado máximo responsable del PSUC en la clandestinidad y en 1965 fue elegido Secretario General.

Tras la legalización del PSUC en 1977, fue elegido presidente. Dio apoyo a las tesis eurocomunistas y en el V Congreso del PSUC (1981) fue relevado del cargo. No obstante, en el VI Congreso fue elegido de nuevo presidente del PSUC.



López Salinas, Armando (1925-2014)

Novelista y escritor, ingresó en el PCE a finales de los años 50, entrando a formar parte de la pléyade de intelectuales y artistas en las filas del partido.

En 1959 fue finalista del premio Nadal con su novela *La mina*, exponente del realismo social. Recibió el Premio Antonio Machado en 1962, que concedía la editorial Ruedo Ibérico en París, con *Año tras año*, una novela que no se pudo publicar en España, durante la dictadura franquista.

Fue Miembro del CC, subdirector de *Mundo Obrero* y colaboró en la redacción interna de Radio España Independiente: La Pirenaica.



López Tovar, Vicente (1909-1998)

Trabajó como fotógrafo. Afiliado al PCE antes de la Guerra, durante la contienda se formó en el Quinto Regimiento y tras el final de la misma se exilió en Francia donde participó en la guerrilla frente a los nazis, alcanzando el grado de coronel (Coronel Albert)

Entre 1945 y 1947 se dedicó a formar guerrilleros bajo las órdenes del PCE, y participó en la operación Reconquista de España, comandando tropas, como jefe de la 204 División, que penetraron por el valle de Aran, con la esperanza de propiciar un alzamiento popular contra Franco; pero en 1950 será acusado por el partido de quintacolumnista.



Manuilsky. Dmitri (1883-1959)

Desde 1903 militó en las filas del socialismo-revolucionario ruso. En 1917 ingresó, como partidario de Trotsky, en el partido bolchevique. Ocupó cargos importantes en el partido Comunista de Ucrania, y como cuadro de la Komintern asesoró al PCF, viajando en varias ocasiones a Francia entre 1922 y 1931. A partir de 1930, fue uno de los principales dirigentes, si no el principal, de la Komintern, y mantuvo su influencia cuando Dimitrov fue nombrado secretario general en 1935. Defendió tanto la política del socialfascismo como la de los frentes populares.

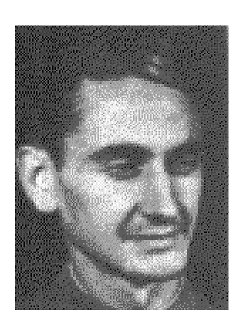
En 1943, fue uno de los firmantes del acta de disolución de la Tercera Internacional.



Martín Borja, Cecilio «**Timochenko**» (1915-1947)

Oficial de Infantería durante la guerra civil fue hecho prisionero al terminar la contienda, pero logró huir de Alcalá de Henares en 1944. En la primavera de 1946 fue nombrado jefe de la Agrupación Guerrillera de Albacete-La Mancha. Su zona de actuación se extendía por el sur de Cuenca, oeste de Albacete y este de Ciudad Real. Organizó comités de la Alianza Democrática.

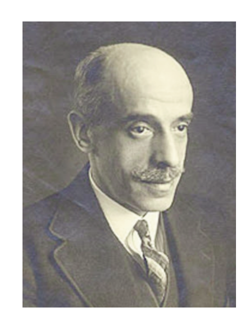
En octubre de 1946 atracaron a los pagadores de las obras de ferrocarril Baeza-Utiel. En julio de 1947 celebró una asamblea a la que asistieron 22 guerrilleros, pero en octubre murió en un enfrentamiento en su domicilio de la calle Gravina de Madrid.



Martínez Cartón, Pedro (1905-1977)

Tipógrafo, miembro de la UGT, ingresó en el PCE antes de la Guerra Civil, siendo elegido diputado por la provincia de Badajoz en las elecciones de febrero de 1936. Durante la contienda alcanzó el grado de Teniente Coronel estando al frente de distintas unidades.

Hacia el final de la guerra, intentó oponer resistencia al golpe de Casado y sus tropas llegaron a amenazar con tomar Puertollano. Sin embargo, esa maniobra acabaría siendo aplastada por el Ejército de Extremadura al mando del general Escobar. Tras la derrota marchó a la Unión Soviética y posteriormente a Méjico.



Martínez Sierra, Gregorio (1881-1947)

Escritor, dramaturgo y empresario teatral español. El propio Martínez Sierra recordaba haber publicado antes de cumplir treinta años, obras de poesía, novelas y comedias como *El Poema del Trabajo*.

Fue uno de los directores teatrales más innovadores del momento y un introductor constante de las novedades escénicas europeas. Andando el tiempo se supo que, efectivamente, detrás de Martínez Sierra había otro escritor: su esposa María de la O Lejárrega. Martínez Sierra apoyó en sus orígenes al PCE económicamente e incluso llego a ejercer como tesorero del partido.



Marty, André (1886-1956)

Marino de la armada francesa, fue uno de los líderes del motín en el Mar negro, opuestos a la intervención francesa contra de los bolcheviques y fue encarcelado por esto. Miembro del PCF desde su fundación, en 1936 fue encargado por la Komintern de la organización de las Brigadas Internacionales, con el cargo oficial de Inspector General.

Hombre conflictivo por su dogmatismo y temperamento, fue tan alabado como criticado. Tras la guerra mundial su posición dentro del PCF era la de número tres, siendo considerado un veterano revolucionario, pero su oposición a la desestalinización provocó su expulsión del partido en 1953, junto a Charles Tillon.



Mateo y Mateo, Manuel (1904-1936)

Obrero sindicalista militante del PCE, donde llegó a integrarse en su CC y a ocupar la secretaría de organización en Madrid.

En 1933, tras un viaje a la URSS, abandona el partido y se afilió a Falange. Fue fundador junto a Nicasio Álvarez de Sotomayor y Francisco Guillén Salaya, que procedían de la CNT, de la Central Obrera Nacional-Sindicalista, CONS, falangista, que nació el 4 de junio de 1934.

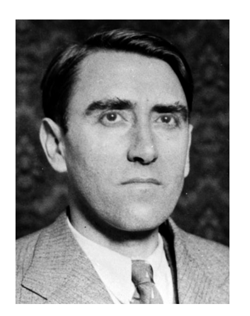
Involucrado en el pistolerismo falangista, en 1935 recibió un tiro en el brazo derecho, lo que le obligaba a saludar «a la romana» con el izquierdo. Tras el golpe fascista fue detenido y fusilado en el otoño de 1936.



Matorras, Enrique (1913-1936)

Vendedor de periódicos, a los 17 años ingresó en las Juventudes Comunistas, donde pronto formará parte de su CC. Escribe en *Juventud Roja* y en 1931 es encarcelado. Al año siguiente es nombrado Secretario del CC de las Juventudes.

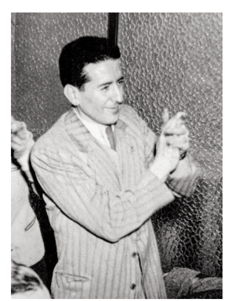
En 1934 publica una carta en un diario católico anunciando su conversión y abandono del comunismo. Ingresa en el Sindicato Libre y publica numerosos artículos en la prensa católica que darán origen al libro *El Comunismo en España (1931-1934)*, lo que compagina con su actividad sindicalista y conspirativa contra la República. Tras el golpe fascista será fusilado en la cárcel Modelo de Madrid.



Maurín, Joaquín (1896-1973)

Maestro de profesión se afilió a la CNT en 1914. En 1921 participó en el primer congreso de la Internacional Sindical Roja en Moscú. A principios de 1924 ingresó en el PCE, pero antes de la proclamación de la República fue expulsado y fundó el BOC (Bloc Obrer i Camperol), del que fue elegido secretario general. Durante 1934 promovió la creación de las Alianzas Obreras y en 1935 el BOC se unificó con la Izquierda Comunista, dando lugar al POUM, del que Maurín fue elegido secretario general.

Al producirse el golpe del 18 de julio de 1936, Maurín fue apresado por los franquistas y pasó toda la guerra en prisión. En 1946 pudo exiliarse a Nueva York.



Melchor, Federico (1915-1985)

Militante de las Juventudes Socialistas fue elegido miembro de su dirección en 1934. En 1936 formó parte del comité de unificación con las Juventudes Comunistas, pasando a formar parte del PCE.

Durante la guerra ocupó distintos cargos y al finalizar se exilió en París, y luego a Méjico. Tras la guerra mundial fue redactor de Radio España Independiente y de *Mundo Obrero* hasta 1974. En 1976 regresó clandestinamente a España para dirigir *Mundo Obrero* en el interior.

Una vez legalizado el PCE en 1977, fue miembro de su dirección hasta su fallecimiento.



Mije, Antonio (1905-1976)

Panadero de profesión, militó inicialmente en el sindicalismo anarquista, pero en 1926 se afilió al PCE. A la caída de Bullejos en 1932, Mije se hizo cargo de la responsabilidad sindical del Partido. Fue secretario general de la CGTU. Llegó a ser figura destacada del Buró Político y durante muchos años director de *Mundo Obrero*.

Durante la contienda civil destacó por su labor como jefe de propaganda junto a Jesús Hernández, aunque en la lucha por la secretaria general del partido apoyó a Dolores Ibarruri en contra de Hernández. Fue miembro de la dirección del PCE hasta su muerte.



Monzón, Jesús (1910-1973)

De familia burguesa, estudio derecho. Afiliado al PCE creó la primera agrupación navarra del partido. Durante la Guerra fue Gobernador civil de Albacete e inmediatamente después, de Alicante y Cuenca. En 1939 abandonó España en el mismo avión que Dolores Ibárruri.

Monzón permaneció en Francia tratando de reorganizar el PCE. En 1943 volvió a España y creó la Junta Suprema de Unión Nacional, que impulsó la Invasión del Valle de Arán, convirtiéndose en el chivo expiatorio por esta fallida operación. Detenido en Barcelona en 1945 fue condenado a 30 años de cárcel, cuando ya había sido expulsado del PCE.



Neumann, Heinz (1902-1937)

Afiliado al KPD (Partido Comunista Alemán) desde 1920, en 1922 era ya editor del *Bandera Roja*, órgano oficial del partido.

En 1925 fue nombrado representante del KPD en la Komintern, cumpliendo misiones en China y Georgia. En 1928 Neumann regresó a Alemania y dos años después fue elegido para el Reichstag.

En 1933 fue enviado por la Internacional a España junto con su novia Margarete Buber-Neumann, donde colaboraron con el aparato de propaganda; pero un año después, estando ya en Suiza, fue acusado de querer dividir al KPD. Deportado a la URSS se convirtió en una víctima más del estalinismo.



Nin, Andreu (1892-1937)

Maestro y periodista, militó inicialmente en la CNT apoyando la corriente prosoviética en el sindicato. Durante su estancia en la URSS se convirtió en dirigente de la Profitern. Partidario de Trotsky, tras su regreso a España, en 1930, impulsó la Izquierda Comunista de España, pequeña organización trotskista, que al fusionarse posteriormente con el BOC dio origen al POUM.

Con el comienzo de la guerra llegó a ser el máximo dirigente del POUM. Tras los Sucesos de Mayo de 1937, fue detenido junto con todos los dirigentes del partido bajo la acusación de espionaje al servicio de Franco. Se fingió su fuga de la cárcel pero realmente fue asesinado por agentes de la NKVD.



Núñez de Arenas, Manuel (1886-1951)

Licenciado en Filosofía y Letras, era militante del PSOE desde 1909 y fundador de la Escuela Nueva que defendía una educación basada en principios socialistas.

Partidario del ingreso del partido en la Internacional Comunista, fue uno de los impulsores de la fundación del Partido Comunista Obrero Español en 1921. Negoció la fusión con el Partido Comunista Español que dio origen al PCE. Permaneció exiliado en Francia durante la dictadura de Primo de Rivera. Tras la guerra civil volvió al exilio francés y fue encarcelado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial



Orlov Aleksandr (1895-1973)

Durante la Guerra Civil Rusa, Orlov sirvió en el Ejército Rojo como oficial de contrainteligencia, pero en 1921 se retiró del ejército y trabajó para la policía secreta como oficial de la Sección Financiera. Tras distintas misiones en diferentes países, en 1936 llegó a España. Fue nombrado responsable del traslado de las reservas del oro del Banco de España a la URSS. Fue el responsable de falsificar pruebas que condujeron a la detención y la purga de los líderes del POUM.

En 1938 decidió desertar. Robó 60.000 del NKVD local y huyó con su mujer y su hija a Canadá y luego a EE UU. Tras la muerte de Stalin colaboró con CIA y el FBI.



Ormazábal Ramón (1910-1982)
Militante del PCE en Irún, participa en el nacimiento del Partido Comunista de Euskadi (PCE-EPK) en 1935, aunque es reticente frente a la autonomía del EPK respecto del PCE.
Al final de la guerra civil es apresado, pero logra huir exiliándose primero en Estados Unidos y después en América del Sur. Vuelto a España es arrestado por la policía franquista en 1962 y condenado a 20 años de prisión. Excarcelado en 1969, se hace cargo de la secretaría general del Partido vasco desde Francia. En el III Congreso del Partido Comunista del País Vasco, realizado ya en 1977, Ormazábal es reemplazado como secretario general del PCE-EPK por Roberto Lertxundi.



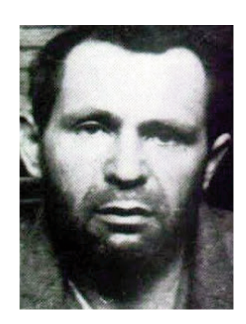
Pérez Solís, Óscar (1882-1951)
Capitán de artillería dejó el Ejército para ingresar en el PSOE en 1913. Partidario del ingreso en la Tercera Internacional, fue cofundador del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en abril de 1921. Fue Secretario General del PCE y representante del partido en la Komintern.
Durante la dictadura de Primo de Rivera, estuvo en prisión entre 1925 y 1927; salió reconvertido al catolicismo. En 1928 abandonó el comunismo y entró a trabajar en la CAMPSA. Durante la República se afilió a Falange uniéndose a la sublevación de julio de 1936, en la que participó en la defensa de Oviedo. Fue publicista del franquismo hasta su muerte.



Perezagua, Facundo (1860-1935)
Metalúrgico de profesión fue fundador del PSOE y dirigente del partido y de la UGT en Vizcaya. Se alineó con los «terceristas», los partidarios de que el PSOE se adhiriera a la Internacional Comunista. En 1921 impulsó el nacimiento del Partido Comunista Obrero Español (PCOE).
Perezagua fue uno de los principales dirigentes del PCE durante la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, tras el fin de la dictadura desapareció de la primera línea de la política española, si bien fue candidato por Vizcaya-capital en las elecciones legislativas de 1933, a las que el PCE se presentó en solitario, sin obtener representación.



Purman, León (1892-1933)
Militante en el movimiento obrero polaco, desde 1908 pertenecía al ala izquierda del Partido Socialista Polaco. Después de la victoria bolchevique de 1917 se unió a los comunistas.
En 1927 fue nombrado por el PCP representante en el Ejecutivo de la Komintern y en IX Plenario se convirtió en un miembro suplente del Presidium. Ocasionalmente fue enviado en misiones al extranjero una de las cuales fue en España. En el IV Congreso del PCP fue nombrado miembro del CC, pero en el V Congreso de 1930 no fue reelegido. A finales de 1933, cuando la atmósfera política en Moscú se hizo más tensa entre los comunistas polacos, Purman se suicidó.



«Quiñones» Heriberto (1907-1942) Yefin Granowdiski
Agente de la Komintern entró en España en 1930 expulsado de Francia. Se asentó en Mallorca, donde contrajo matrimonio con una mallorquina ejecutada por los falangistas en 1936.

Durante la Guerra desempeño distintas funciones y tras el fin de la misma fue internado en un campo de concentración del que escapó. A mediados 1941 se trasladó a Madrid donde se hizo cargo de la dirección del PCE en la clandestinidad.

La dirección del PCE en el exilio no reconoció a la del interior y consideró a Quiñones un provocador. Finalmente detenido en 1941, torturado y condenado a muerte fue fusilado en octubre de 1942 siendo tachado de traidor por la dirección del exilio.



Rabaté, Octave (1899-1964)

Metalurgico y sindicalista francés se afilió al PCF desde el nacimiento del partido en el Congreso de Tours en 1920. Representó a la CGT en la Profintern y de 1928 a 1932 fue delegado por la Komintern para impulsar el trabajo sindical en España y Latinoamerica. Trabajó con Henri Barbusse en el Comité mundial contra la guerra y contra el fascismo.

Miembro del CC del PCF, luchó en las filas de la resistencia tras la ocupación nazi de Francia, pero fue detenido y deportado a Mauthausen.

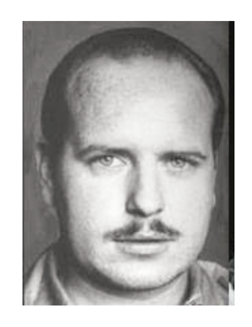
Después de la liberación fue redactor *L'Humanité*, órgano oficial del partido galo, llegando a ser su director en 1957.



«Ramírez» Charles Francis Phillips (1895-1989)

Nacido en la ciudad de Nueva York fue estudiante en Columbia. Secretario de la Liga Colegial Antimilitarista recibió con entusiasmo la revolución de Octubre de 1917. Al año siguiente viajó a Méjico ya como comunista donde entró en relación con Mikhail Borodín. Ambos se trasladaron en 1919 a España para ayudar a fundar un partido comunista.

Participó en el II Congreso de la Komintern como delegado mejicano. Regresó a Méjico, trabajando bajo el nombre de Manuel Gómez y después a EE UU donde llegó a ser Secretario de la Liga Antiimperialista. Participó en el VI Congreso de la Komintern antes de ser expulsado en 1929.



Renau, Josep (1907-1982)

Artista desde joven ingresó en el PCE en 1931. Fundador de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios (1932), fue reconocido cartelista de afiches editados para apoyar a la República durante la Guerra Civil Española. En 1936 se le nombró Director General de Bellas Artes y realizo los fotomontajes expuestos en el Pabellón de la República Española en la exposición parisina de 1937.

Al terminar la guerra se exilió en Méjico, donde trabajó con el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. En 1958 dejó México para instalarse en la República Democrática Alemana, concretamente en su capital, Berlín Oriental.





Roces, Wenceslao (1897-1992)

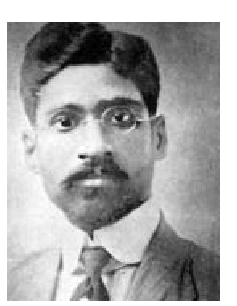
Catedrático de Derecho Romano fue expulsado en 1929 de la Universidad de Salamanca, junto a Miguel de Unamuno, de quien fue discípulo. Miembro del PCE, al que se afilió en 1931, ocupó cargo en su CC. Cofundo la editorial Cenit con la que traducirá al español a autores marxistas, desde Karl Marx a Rosa Luxemburgo en la colección «Biblioteca Carlos Marx».

Se integró en el Frente Antifascista, y en la Unión de Escritores y Artistas Proletarios. La revolución de 1934 le envió al exilió en la URSS para no regresar a España hasta la victoria del Frente Popular. Tras la guerra pasó al exilio mejicano donde trabajó con el Fondo de Cultura Económica como traductor.



Romero Marín, Francisco (1915-1998)

Trabajador agrícola y minero, fue miembro de la UGT y militante del PSOE hasta 1935. Al año siguiente ingresó en el PCE y durante la guerra llegó a mandar una división del ejército republicano. Al final de la contienda se exilió en la URSS donde asistió a la Academia Militar Frunze y alcanzó el rango de coronel en el Ejército soviético. Desde 1954 fue miembro del CC y empezó a trabajar en la clandestinidad, convirtiéndose en el máximo dirigente del PCE en el interior. Apodado «El Tanque», estuvo en España casi 15 años hasta que fue detenido en 1974. Tras 27 meses de prisión, en julio de 1976 quedó en libertad como resultado de una amnistía decretada por el gobierno Suárez.



Roy Manabendra Nath (1893-1954)

Revolucionario bengalí que sufrió su primer arresto a los 14 años por reclamar la independencia de la India. Exiliado en Méjico fundó un Partido Socialista en 1917 que devino en el Partido Comunista Mejicano. Allí conoció a Borodín y fue invitado por éste al II Congreso de la Komintern, pero antes de acudir a Moscú recaló en España junto a Borodín y «Ramírez».

Participó en la fundación del partido Comunista de la India y formó parte del Presidium de la Komintern durante ocho años. Trabajó con Borodin en China, pero sus desacuerdos con Stalin y sus simpatías por Trotsky le hicieron caer en desgracia y en 1929 fue expulsado de la Komintern.



Sánchez Montero Simón (1915-2006)

Trabajó como sastre y panadero y se afilió al PCE en 1936. Combatiente durante la guerra, al finalizar la contienda se refugió en Sevilla, pero en 1944 regresó a Madrid donde fue detenido un año después y condenado a catorce años de prisión. Ya excarcelado en 1954 fue elegido miembro del CC, y en 1956, del CE. Uno de los máximos dirigentes del PCE en la clandestinidad, fue de nuevo detenido en 1959, permaneciendo en prisión hasta 1966.

Tras las elecciones generales de 1977, fue elegido diputado por Madrid, siendo reelegido en 1979. Permaneció en la dirección del PCE hasta el XIII Congreso, en 1991.



Sartorius, Nicolás (1938)

De origen aristocrático se licencio en Derecho. Activo militante antifranquista, fue cofundador del sindicato de trabajadores CCOO y miembro del PCE. Fue detenido en varias ocasiones siendo imputado en el conocido «Proceso 1001». En total pasó seis años recluido en prisión. Fue miembro del Secretariado, el Comité Ejecutivo y el Comité Central del PCE.

Participó activamente desde CCOO en las negociaciones políticas durante la Transición y fue Diputado al Congreso por Madrid en la II, III y IV legislatura por PCE e IU. Después se unió a la corriente Nueva Izquierda que terminó por integrarse en el PSOE.



Sellier, Louis (1885-1978)

Trabajó en correos y en 1914 ya era concejal por el partido socialista francés. En 1920 formo parte de la primera dirección del PCF. En 1922 fue miembro de la delegación del PCF en el I Pleno ampliado de la Ejecutiva de la Komintern, siendo elegido para el Presidium.

Participó en la preparación de la fracasada revolución alemana de 1923 y en otras misiones en Europa, en una de ellas fue apresado en España..

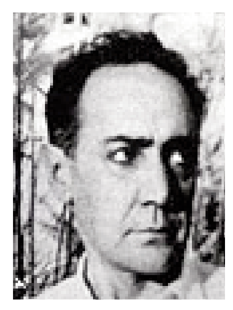
Impulsor de la bolchevización del partido, entre 1923-24 ocupó durante un corto espacio de tiempo la secretaría general del PCF.



Semprún, Jorge (1923-2011)

Perteneciente a una familia de la alta burguesía estudió Filosofía en la Universidad de La Sorbona. Ocupada Francia por la Alemania nazi, formó parte de la Resistencia, y en 1942 se afilió al PCE. Un año después fue detenido y deportado al campo de concentración de Buchenwald.

En 1952, fue «liberado» por el PCE, llegando a formar parte del CC y del CE. Realizó una intensa actividad clandestina bajo el alias de Federico Sánchez entre junio de 1953 y diciembre de 1962. En ese mes fue retirado de la actividad clandestina y sustituido por José Sandoval. En 1964 fue expulsado del partido junto con Claudín por divergencias con respecto a la línea oficial.



Sender Ramón José (1901-1982)

Hijo de un propietario agrario aragonés quiso dedicarse desde muy joven a la literatura. Tras su vivencia en la guerra del Rif se desvela como un novelista talentoso inclinado a la denuncia social desde posturas anarquistas.

Premiado y reconocido por obras como *Siete domingos rojos*, fue muy valorado como escritor «proletario» y viajó a la URSS invitado por Unión Internacional de Escritores Revolucionarios donde se convirtió en un decidido apoyo a las políticas comunistas. Esta adhesión se mantuvo viva hasta el final de la guerra civil cuando reconsideró su postura. En el exilio americano se volverá un declarado anticomunista.





«Silone, Ignazio» Secondino Tranquilli (1900-1978)

Joven socialista italiano participó en la fundación del PCI en el Congreso de Livorno de 1921. Durante ocho años, participó en la dirección del partido en el interior, y dirigió el semanario *Vanguardia*, de Roma, también en *Il Lavoratore*, un diario de Trieste.

En 1923 llegó a España para intentar formar el Socorro Rojo Internacional. Permaneció en Italia bajo Mussolini, imprimiendo prensa ilegal. En 1927 representó al PCI en el VI Congreso de la Komintern pero se opuso a la excomunión de Trotsky por lo que fue excluido de la votación para que esta alcanzara la unanimidad. En 1930, tras ser expulsado del PCI se asentó en Suiza.



Solé Tura Jordi (1930-2009)

Durante su juventud militó en el Frente de Liberación Popular (FELIPE) y en la OCE (Bandera Roja), siendo durante la Transición española uno de los dirigentes del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).

Defendió las tesis eurocomunistas apoyando siempre a Santiago Carrillo. Elegido diputado a Cortes en 1977 y 1979, fue uno de los siete ponentes de la Constitución de 1978, los llamados Padres de la Constitución. Más tarde terminaría abandonando el PSUC e ingresando en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), siendo de nuevo elegido diputado por Barcelona en 1989, 1993 y 1996.



Stepanov Stoyán Mínev (1890-1959)

Médico de origen búlgaro, militó en el socialismo búlgaro y suizo, y en 1916 ingresó en el Partido Bolchevique. Fue uno de los primeros agentes de la Komintern en Francia entre 1920 y 1921. De 1921 a 1926 llevó a cabo diversas misiones en Alemania, Francia e Italia y en 1926 pasó a formar parte del Ejecutivo de la Internacional. Fue profesor de las secciones española y francesa de la Escuela Lenin entre 1927 y 1935.

A finales de 1936, Mínev fue enviado a España con el pseudónimo de Moreno, con la tarea de ayudar política y organizativamente al PCE. Tras disolverse la Komintern -mayo de 1943- se doctora en Ciencias Económicas.



Stoecker Walter (1891-1939)

Estudiante de Historia, fue miembro del Partido Socialista alemán desde 1908. Tras participar en la Gran Guerra contribuyó al nacimiento del KPD, siendo elegido diputado en 1921.

En 1923 participó en el fallido levantamiento de Hamburgo, y desde 1924 fue portavoz del grupo parlamentario comunista en el Reichstag hasta 1929. Estuvo en España orientando al PCE al proclamarse la República.

Después de la toma del poder por los nazis Stoecker pasó a la clandestinidad. En la noche del incendio del Reichstag , fue detenido y llevado a los campos de concentración Sonnenburg , Lichtenburg y en 1937 a Buchwald donde murió de enfermedad.

Tagüeña Manuel (1913 -1971)



Matemático y físico, se afilió a las Juventudes Comunistas en 1932. Fue un miembro destacado de la Federación Universitaria Escolar (FUE) en los años 30. Fue detenido a consecuencia de los hechos revolucionarios de 1934.

En 1936, se unió a las milicias republicanas donde alcanzaría el mando de la 30.ª Brigada Mixta. Su actuación le valió el ascenso a teniente coronel y fue nombrado comandante del XV Cuerpo de Ejército, que salió muy quebrantado de los combates del Ebro. Posteriormente se exilió en la URSS. Fue crítico con el estalinismo y abandonó el PCE, exiliándose en Méjico, donde trabajó como asesor médico en un laboratorio farmacéutico.

Tamames Ramón (1933)



De familia burguesa estudió economía en Madrid y en la London School of Economics. Ingreso en el PCE en 1956 convirtiéndose en una figura relevante entre los intelectuales y profesionales del partido.

Elegido miembro del CE en 1976, jugó un destacado papel en la dirección durante el tardofranquismo y la Transición, siempre junto a Santiago Carrillo. Diputado por Madrid en 1977 y 1979, apoyó el eurocomunismo y formó en las filas de los llamados «renovadores». Abandonó el PCE en mayo de 1981 y terminó afiliado en el Centro Democrático y Social (CDS) y dedicándose a los negocios.

Togliatti, Palmiro (1893-1964)



Fundador del Partido Comunista de Italia (PCI) en 1921 se convirtió en el líder del mismo tras el encarcelamiento de Gramsci por el régimen fascista. Cuando el Partido fue ilegalizado en 1926 se encontraba en una reunión de la Internacional en Moscú de cuyo Secretariado formó parte desde 1935.

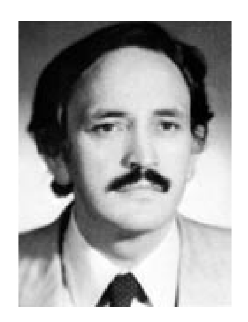
Participó en la Guerra Civil Española desde 1937 como máximo responsable de la Internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en la URSS dirigiendo las emisiones de radio a Italia. Tras la guerra participó en distintos gobiernos. Bajo su dirección, el PCI se convirtió en el mayor partido comunista de Europa Occidental.

Torralba Beci, Eduardo (1881-1929)



Periodista y miembro del PSOE, fue director de *El Socialista* en 1914. Tras la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia se mostró favorable al apoyo de la misma y en julio de 1919, reclamó en un mitin en la Casa del Pueblo de Madrid la adhesión del PSOE a la Internacional Comunista.

En 1921 firmó el manifiesto que daría vida al Partido Comunista Obrero Español, y fue uno de sus representantes en la Komintern. Dentro del PCOE dirigió su primera publicación: *La Guerra Social*. Sería igualmente uno de los fundadores del PCE y director de *La Antorcha*. Durante la dictadura de Primo fue encarcelado en dos ocasiones.





Triana, Eugenio (1939)

Ingeniero industrial, Triana militaba en el PCE desde 1968 y entró a formar parte de su Comité Central en 1972. Tras el IX Congreso, en 1978, fue integrado en el Comité Ejecutivo.

Responsable de la agrupación de profesionales del PCE en el tardo franquismo, fue partidario del acercamiento entre el eurocomunismo y la socialdemócracia. Estimaba que la liquidación del leninismo no suponía una ruptura radical con los principios leninistas. Cabeza visible de los «renovadores», abandonó el PCE en 1981 para ingresar en el PSOE. Con esta formación fue elegido diputado en 1982, renovando el escaño en las dos siguientes convocatorias electorales, 1986 y 1989.

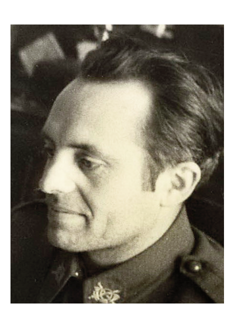


Uribe, Vicente (1902-1961)

Obrero metalúrgico, se afilió al PCE en 1923 y cuatro años después ya era miembro del CE. En 1936 fue el representante comunista en la elaboración del manifiesto del Frente Popular. Tras el estallido de la Guerra Civil Española, fue nombrado Ministro de Agricultura en el gobierno presidido por Largo Caballero y continuó con Negrín hasta el final de la contienda.

En el exilio mejicano era el número dos del partido.

De 1946 a 1950 trabajó en la dirección del partido en Francia y luego en Checoslovaquia, pero en 1956 se convirtió en víctima del proceso de desestalización emprendido por el PCE tras el XX Congreso del PCUS



Vega Etelvino (1906-1939)

Chapista de profesión se afilió a las Juventudes Comunistas en 1923 y desde 1929 fue responsable de la organización juvenil, formando parte del Buró Político con Bullejos, Adame y Trilla desde la denominada conferencia de Pamplona. Con la crisis en la dirección de 1932 fue expulsado del partido, pero al comienzo de la guerra civil se unió de inmediato al Quinto Regimiento.

Etelvino Vega intervino en las batallas de Brunete, Belchite y Teruel siendo nombrado teniente coronel. En la batalla del Ebro mando el XII cuerpo de Ejército. Gobernador militar de Alicante durante dos días, con la derrota fue detenido y fusilado por los franquistas.



Vidali Vittorio (1900-1983)

Miembro del Partido Comunista de Italia desde 1921, huyó de su país tras el ascenso del fascismo. Viajó a Estados Unidos y allí fue miembro del Partido Comunista de Estados Unidos y del Socorro Rojo Internacional.

Se unió a las fuerzas del ejército republicano durante la Guerra Civil Española como comisario político en diversas unidades y en el Quinto Regimiento. La república le facilitó pasaporte con el nombre de Carlos Contreras.

Al final de la guerra civil española se trasladó a Méjico y al final de la Segunda Guerra Mundial regresó a Italia llegando a ser senador por el Partido Comunista.

WALECKÍ, Henryk. Maksymilian Horwitz (1877-1937)



Graduado en matemáticas y física por la Universidad de Gante, fue militante en el Partido Socialista Polaco por lo que sufrió prisión y destierro.

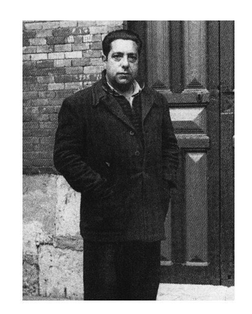
Participó en la conferencia de Zimmerwald, y ayudó a fundar el Partido Comunista Polaco, siendo su representante en la Komintern. Emprendió misiones en varios países lo que lo trajo a España en una misión puntual. En 1925 se convirtió en editor de la revista *Internacional Comunista* y fue admitido en el Partido Comunista Ruso (b), residido continuamente en la URSS. Fue detenido en 1937 por la NKVD en el marco de la «gran purga» y se convirtió en una víctima del estalinismo.

WOOG, Edgar (1898-1973)



De origen burgués el joven Woog se incorporó en 1917 la Juventud Socialdemócrata de Suiza. En 1920 emigró con su familia a Méjico, donde fue co-fundador del partido comunista de ese país. En 1921 y 1922 delegado en el III y IV Congresos de la Komintern, elegido como el único representante de América Latina en el CE. En 1922-1935 trabajó para la Internacional. En 1931 y 1932 en España con Jules Humbert-Droz, donde fue detenido y encarcelado durante un tiempo en Barcelona. Después de 1935, regresó a Suiza y vivió en Zurich, donde reclutó voluntarios para la Brigadas Internacionales, lo que le costó un año de prisión

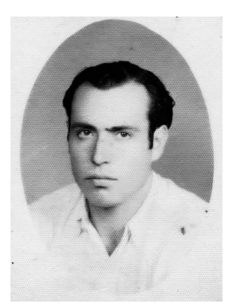
ZAPIRAIN, Sebastián (1903-1996)



Carpintero, en 1924 ingresó en el PCE de Gipuzcua. Fue secretario del Sindicato de la Madera. En 1931-1932 asistió a un curso en la Escuela Leninista de Moscú. Tras el IV Congreso del PCE, secretario general de la Federación Vasco-navarra.

Comisario político del IV Cuerpo de Ejército durante la guerra y exiliado en Sudamérica, en 1944 vuelve a España en misión clandestina para reorganizar el partido. Detenido en 1945 junto con Santiago Álvarez se salvó de ser fusilado por una campaña internacional. Zapirain estuvo diez años en el penal de Palencia. Miembro del CC trabajó para *Mundo Obrero* y la *Revista Internacional.*

ZOROA, Agustín (1916-1947)



Desde 1935 militó en las Juventudes Socialistas Unificadas, le sorprendió la guerra preparando oposiciones de magisterio. En 1936 ingresó en el PCE. Comisario de Brigada durante la guerra se exilió en Méjico.

En junio de 1944 llegó a España, enviado por el PCE para hacerse cargo del partido en el interior. Tras reunirse con Jesús Monzón, pasó a dirigir oficialmente la actividad guerrillera en toda España. Consiguió separar las organizaciones estrictamente políticas de las guerrilleras. Inició la Agrupación Guerrillera de Madrid. En 1946 fue detenido junto con otros siendo fusilados en diciembre de 1947 en Ocaña (Toledo).

Índice